

CÓDIGOS MODELO PARA IBEROAMÉRICA

DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL

CÓDIGO PROCESAL CIVIL MODELO PARA IBEROAMÉRICA

CÓDIGO PROCESAL PENAL MODELO PARA IBEROAMÉRICA

CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA

CÓDIGO MODELO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL PARA IBEROAMERICA

CÓDIGO MODELO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA IBEROAMÉRICA

LEY MODELO DE ARBITRAJE COMERCIAL PARA IBEROAMÉRICA

SANTIAGO PEREIRA CAMPOS
GIOVANNI PRIORI POSADA

Coordinadores

IIDP Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

fcu Fundación de Cultura Universitaria

Códigos Modelo para Iberoamérica
del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

Santiago Pereira Campos
Giovanni Priori Posada
Coordinadores

CÓDIGOS MODELO PARA IBEROAMÉRICA

DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL

Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica

Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica

Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica

Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamerica

Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica

Ley Modelo de Arbitraje Comercial para Iberoamérica

IIDP Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

fcu Fundación de Cultura Universitaria

Fundación
de Cultura
Universitaria

Disponible en versión física

Disponible en versión digital

1.ª edición, abril 2025
ISBN: 978-9974-2-1665-5

Editorial Fundación de Cultura Universitaria
25 de Mayo 553 - Tel. +598 2916 1152
CP 11 000 Montevideo - Uruguay
ediciones@fcu.edu.uy
www.fcu.edu.uy

Impreso y encuadernado en Mastergraf SRL
Bvar. Artigas 4678 - Tel.: +598 2303 4760
Montevideo - Uruguay
administracion@mastergraf.com.uy

Depósito Legal XXX.XXX - Comisión del Papel
Edición amparada al Decreto 218/96

Derechos reservados
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, transmisión o archivo en sistemas recuperables, sea para uso privado o público, por medios mecánicos, electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, total o parcial, del presente ejemplar, con o sin finalidad de lucro, sin la autorización expresa del editor.

Ninguna parte de este libro puede utilizarse o reproducirse de modo alguno con el propósito de entrenar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial.

CONTENIDO

Los códigos modelo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal como insumos relevantes para mejorar los sistemas de justicia 11

El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica 25

Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica 1989 193

Código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica 325

Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica 347

Código Modelo de Procesos Administrativos –Judicial y extrajudicial– para Iberoamérica 379

Proyecto ley modelo de arbitraje comercial 411

28 Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal que construyeron nuestra historia en casi 70 años 427

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Comisión Directiva (2023-2025) 429

LOS CÓDIGOS MODELO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL COMO INSUMOS RELEVANTES PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE JUSTICIA

Santiago Pereira Campos[1]
Giovanni Priori Posada[2]

"Al hombre sediento de justicia hay que darle una respuesta"[3]. Con esta frase, Eduardo Couture concluía su segunda clase del curso "Trayectoria y destino del derecho procesal hispanoamericano", dictado durante la primavera de 1939, en la Universidad de Córdoba. Couture estructuró dicho curso en tres conferencias relativas al pasado, presente y futuro del derecho procesal hispanoamericano. Al concluir su tercera conferencia, Couture sentenciaba: "El derecho procesal de la democracia debe eliminar las bases del individualismo y formular todo un sistema que sea la expresión misma de este régimen, que es el de la defensa de nuestra propia condición humana"[4]. Solo de ese modo el derecho procesal podría enfrentarse a las desigualdades de las que adolecen las sociedades latinoamericanas.

El futuro del derecho procesal de nuestra región era imaginado por Eduardo Couture como un tiempo en el que pudieran combinarse tres claves: democracia, proceso y defensa de la condición humana. Luego de 85 años de proferida dicha frase, bien podríamos decir que el derecho procesal de nuestro tiempo sigue teniendo el mismo desafío.

Couture nos enseñó a pensar el derecho procesal en íntima conexión con los valores políticos y sociales de nuestra realidad, invitándonos a estudiarlo desde una perspectiva iberoamericana. En varios de sus trabajos describió los rasgos característicos del derecho procesal en Iberoamérica,

1 Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

2 Secretario General del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

3 Couture, Eduardo. "Trayectoria y destino del derecho procesal hispanoamericano", en *Obras*. Tomo II (Buenos Aires, La Ley, 2010), p. 252

4 Couture, Eduardo. "Trayectoria y destino del derecho procesal hispanoamericano", en *Obras* Tomo II (Buenos Aires, La Ley, 2010) p. 263.

distinguiéndolo de los otros "sistemas procesales contemporáneos"[5]. Estudió su origen y rasgos comunes, así como sus falencias y desafíos. Haciéndolo, inspiró un estudio del derecho procesal que trascienda las fronteras de cada uno de nuestros países y promovió el estudio de principios e instituciones procesales comunes.

La academia procesal iberoamericana recibió el legado de Couture. En 1957, conmemorando el primer año de su prematura muerte, los procesalistas de la región se reunieron en Montevideo en la I Jornada Latinoamericana de Derecho Procesal. En dicha ocasión se fundó el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal[6].

La creación del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal permitió construir el escenario en el que los procesalistas de la región pudieran discutir sobre los desafíos del proceso en Iberoamérica, identificando falencias comunes y planteando, desde la academia, propuestas para mejorar los sistemas de justicia.

Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica

El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal ha desarrollado, desde la década del sesenta del siglo pasado, una proficua labor para apoyar a los países en la elaboración de instrumentos procesales modernos y adecuados, adelantándose a los procesos de integración regional.

Es con ese espíritu que, en las IV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Venezuela en 1967, el entonces presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, propuso "emprender la tarea de establecer códigos modelos para la reforma de los procesos civiles y penales de América Latina"[7]. Se designó para ello, dos comisiones: una para que preparara las Bases del código modelo de proceso penal, integrada por los profesores Alfredo Vélez Mariconde y Jorge Clariá Olmedo y otra comisión para el proceso civil integrada por los profesores Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi.

El trabajo se emprendió con

5 Couture, Eduardo. "Fundamentos de derecho procesal civil," en *Obras*. Tomo I (Buenos Aires, La Ley, 2010), p. 10 y ss.

6 Originalmente, el nombre del Instituto fue "Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal". Su denominación actual como "Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal" se adoptó en las V Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Bogotá y Cartagena de Indias, en 1970.

7 Vescovi, Enrique. Palabras de saludo del Congreso Internacional sobre "Un codice tipo di procedura civile per l`America Latina", llevado a cabo en Roma del 26 al 28 de septiembre de 1988, en Schipani, Sandro y Vaccarella, Romano. *Un codice tipo di procedura civile per l`America Latina* (CEDAM, Padua, 1990), p. 5.

> una difusa conciencia unificadora, unida a la constatación de los antecedentes históricos comunes del proceso civil de los diversos países y una experiencia, igualmente compartida por todos, de los graves defectos de ese proceso civil, han conducido a acometer, de manera también conjunta, la labor de configurar el proceso civil moderno, adecuado a las necesidades de la sociedad iberoamericana, y expresivo —en cuanto una ley procesal no es políticamente neutra— de la ideología que se postula como más fructífera para ella[8].

Lo mismo puede decirse respecto del trabajo sobre el proceso penal.

Poco después, en la V Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Colombia en 1970, se aprobaron las primeras bases para los códigos procesales modelos civil y penal.

En 1978, durante las VI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Venezuela se presentó el Anteproyecto de las Bases "para una legislación uniforme para América Latina en materia procesal penal", que redactó el profesor de Córdoba, Jorge Clariá Olmedo —por el fallecimiento del profesor Alfredo Vélez Mariconde—[9]. En dicha ocasión se designó a una comisión especial para revisar las observaciones a dicho anteproyecto, integrada por los profesores Fernando de la Rúa, José Federico Marques, Bernardo Gaitán Mahecha y Julio Maier.

Las VII y VIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, realizadas en Guatemala en 1981 y en Ecuador en 1982, estuvieron exclusivamente dedicadas a debatir los anteproyectos de códigos modelos para el proceso civil y penal. Al término de las VII Jornadas se encargó la redacción definitiva de los dos anteproyectos a las respectivas comisiones.

Este empeño de la doctrina procesal iberoamericana se efectuaba conscientes de que, "de cara al futuro, la unidad funcional y orgánica en grandes lineamientos de los sistemas procesales, parece inevitable"[10].

En 1988 durante la XI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Río de Janeiro se aprobó el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, y durante las XII Jornadas Iberoamericanas de

8 Ortells, Manuel. "Código tipo y reforma del proceso entre derecho común y derecho uniforme en América Latina", en Schipani, Sandro y Vaccarella, Romano. *Un codice tipo di procedura civile per l`America Latina* (CEDAM, Padua, 1990), pp. 75-76.

9 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. *El código procesal civil modelo para Iberoamérica. Montevideo*, 1988. https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4226/CodigoProcesalCivilparaIberoamerica.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Tavolari, Raúl. "Hacia la enseñanza de una teoría general del proceso por los códigos procesales modelo para Iberoamérica", en *Revista Derecho y Humanidades* n.° 5, año 1997, p. 77.

Derecho Procesal llevadas a cabo en Málaga en 1990, se aprobó el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica[11].

La elaboración de los dos primeros códigos modelo —Procesal Civil y Procesal Penal— de ninguna manera, supuso un cierre en el debate iberoamericano sobre las reformas de los sistemas de justicia. Todo lo contrario, desde su aprobación han generado un permanente diálogo entre los académicos iberoamericanos, acerca de la posibilidad de su incorporación a los diversos países, hasta hacer notar sus vacíos o desaciertos[12].

Uno de dichos debates se produjo en 1988, meses antes del sometimiento a votación de la Asamblea del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Fue un evento que se realizó en Roma, en el que los procesalistas iberoamericanos y los italianos discutieron sobre el proyecto[13]. Este evento supuso el fortalecimiento de un diálogo entre los académicos iberoamericanos y los italianos sobre instituciones procesales surgidas del debate iberoamericano.

Estos dos códigos tuvieron una influencia notable en las reformas procesales que se llevaron a cabo en Iberoamérica de allí en adelante, lo que coincidió con la salida de los duros tiempos de represión dictatorial y el regreso a la democracia, en muchos de nuestros países.

En efecto, desde el restablecimiento de los gobiernos democráticos en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, en la mayoría de los países de Latinoamérica se han producido grandes avances a nivel de reformas en el sistema de justicia penal que tuvieron como centro adecuar los regímenes procesales penales a los tratados de derechos humanos, principalmente con el establecimiento de proceso orales y públicos, predominantemente adversariales (acusatorios).

Terminadas en casi todos los países las grandes reformas a los sistemas de justicia penal, desde fines del siglo pasado se está viviendo el tiempo de la justicia civil. Los regímenes políticos han puesto sus ojos en modificar los procesos no penales y mejorar la gestión y eficacia de la justicia civil.

11 Landoni Sosa, Ángel. "El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal: El pasado. El presente. El futuro", en Instituto Colombo Pañameño de Derecho Procesal. *Actas de las XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal* (Panamá, 2014), p. 2

12 Un ejemplo de ellas, se puede observar en: Tavolari, Raúl. "Hacia la enseñanza de una teoría general del proceso por los códigos procesales modelo para Iberoamérica", en *Revista Derecho y Humanidades* n.° 5, año 1997.

13 Las actas de dicho evento se pueden consultar en Schipani, Sandro y Vaccarella, Romano, *Un codice tipo di procedura civile per l`America Latina* (CEDAM, Padua, 1990).

La influencia del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica en las reformas procesales

Las reformas al proceso civil latinoamericano tienen como antecedente muy destacado el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. En el marco del trabajo de esta institución, los profesores Enrique Vescovi, Adolfo Gelsi Bidart y Luis Torello, de reconocido prestigio internacional, con el aporte de los más destacados procesalistas de casi todos los países de Iberoamérica, fueron los autores del Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, aprobado por el pleno del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el cual suministra bases para la uniformización de los sistemas procesales.

Las reformas procesales impulsadas por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal a partir de su Código Modelo han tenido por finalidad preponderante lograr una más adecuada resolución de los conflictos individuales (y posteriormente también los conflictos colectivos[14]), imponer la oralidad y la inmediación y acortar los tiempos procesales[15].

Los objetivos que los países podrían lograr con el diseño y la implementación adecuada —adaptada a sus realidades— del Código Modelo son principalmente los siguientes[16]:

- Revertir el alto grado de ineficiencia por la demora en la resolución de los conflictos.
- Simplificar y reducir el número de las estructuras procesales y sus trámites. La simplicidad se obtiene al limitar el número de tipos procesales a su mínimo indispensable. Así, fuera de la necesaria previsión de procesos preliminares, cautelares e incidentales, el Modelo reduce el proceso de conocimiento a tres formas: la ordinaria, la extraordinaria (o sumaria) y la monitoria. Luego, la simplicidad se verifica dentro de cada estructura procesal, al aligerarse de actos innecesarios y actuar los principios de inmediación y concentración, fundamentalmente en la audiencia que funciona como elemento central del proceso.
- Disponer de un cuerpo procesal con vocación general, abarcando el mayor número de materias no penales.
- Lograr el contacto directo del juez o jueza con las partes, abogados y abogadas y la prueba.

14 En tal sentido, se destaca el Código Modelo de Procesos Colectivos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

15 Pereira Campos, S. (dir.), *El sistema de justicia civil en Uruguay* (Montevideo, Universidad de Montevideo, 2017), pp. 49-51.

16 Pereira Campos, S., *Panorama de la justicia civil en Iberoamérica. Reformas realizadas e indicadores* (Montevideo, FCU, 2025), pp. 41-42.

- Convertir a quien juzga en verdadero director del proceso, con límites muy específicos: el juez no puede aportar hechos al proceso, la prueba de oficio si está permitida siempre debe referir a hechos alegados y controvertidos por las partes, respetándose el principio de congruencia.
- Fomentar la buena fe y lealtad procesal y la colaboración, evitando conductas desleales y dilatorias. La probidad se logra mediante mecanismos que aseguren que los sujetos actúen lealmente, entre los cuales asume fundamental importancia la carga de anticipar en la demanda y en la contestación escritas toda la prueba que se intenta producir, evitando el ocultamiento y las maniobras. En el mismo sentido, el otorgamiento al tribunal de trascendentes poderes-deberes de dirección, y un régimen impugnativo en el cual el efecto suspensivo de la apelación sea la excepción.
- Priorizar lo sustancial sobre lo formal: que las formas —siempre necesarias para garantizar el debido proceso— sean instrumentales al derecho sustantivo y no generen nulidades si no producen indefensión o han sido convalidadas.
- Priorizar la autocomposición intraprocesal del litigio, fundamentalmente (pero no en forma excluyente) en la audiencia preliminar.
- Lograr la eficacia del proceso en la resolución de las pretensiones. Instrumentos procesales adecuados llevan a la abreviación del juicio y al desestímulo de conductas desleales. Todo sujeto de derecho debe tener acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones.

Tomando como referencias esenciales el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal[17] y la Ley de Enjuiciamiento Civil española (LEC) de 2000 (con sus sucesivas modificaciones), varios países de la región implementaron reformas a la justicia civil: Argentina (a nivel de algunas provincias[18]), Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, entre otros. Las reformas procesales civiles de Portugal y Brasil tuvieron un derrotero un poco diferente en cuanto a sus influencias[19].

17 Implementado en Uruguay en 1989 a través del Código General del Proceso.

18 En Argentina, país federal, existe un código procesal civil por cada provincia y un código procesal civil a nivel nacional. Brasil, en cambio, siendo también país federal tiene un solo código de proceso civil para todo el país.

19 El caso de la reforma procesal de Brasil de 2015, es quizás la que menor influencia ha recibido de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y/o de la Ley de Enjuiciamiento Civil española (LEC) de 2000, mostrando un alto grado de innovación (seguramente motivada por una realidad muy distinta a la de los demás países ibe-

Como señala Oteiza[20], la legislación uruguaya (Código General del Proceso) que replica el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000, a pesar de surgir de contextos diferentes, comparten las ideas centrales. Si se comparan las dos legislaciones encontraremos que los ejes centrales se replican.

Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica

En Roma, en el año 2002, en el marco del VII Seminario Internacional co-organizado el *Centro di Studi Giuridici Latinoamericani,* el *Istituto Italolatinoamericano* y la *Associazione di Studi Sociali Latinoamericani*, el profesor Antonio Gidi propuso la elaboración de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, iniciativa que fue acogida por la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. El proyecto de código fue presentado por Ada Pellegrini, Kazuo Watanabe y Antonio Gidi, en las XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal desarrolladas en Montevideo, donde la propuesta fue transformada en un Anteproyecto[21]. Allí se designó también una Comisión Revisora[22] para que revisara el documento presentado, lo debatiera y formulara aportes.

Al igual que había ocurrido con los otros dos códigos modelo, se produjo un extendido debate sobre los diversos contenidos propuestos en dicho Código. Así, señala Landoni que el

> Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal convocó a una pléyade de profesores de Iberoamérica para que manifestaran su opinión sobre el referido Anteproyecto, tarea que fue coordinada por Antonio Gidi (Brasil) y Eduardo Ferrer Mac Gregor (México). Los referidos trabajos fueron publicados por la editorial Porrúa con el título La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo para Iberoamérica y presentados en el

roamericanos), teniendo un rol más relevante como fuentes, al menos en relación a institutos específicos, las legislaciones portuguesa, francesa y alemana. La reforma procesal civil de Portugal de 2013 está teniendo ahora bastante más incidencia en los nuevos procesos de reforma.

20 Oteiza, E., "Reformas procesales en América Latina. Tendencias y tensiones entre los Estados Nación y la Comunidad Internacional" en Oteiza, E. (coord.), *Sendas de la reforma de la justicia a principios del siglo XXI*, (Madrid, Marcial Pons, 2018), p. 46.

21 Landoni Sosa, Angel. "El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal: El pasado. El presente. El futuro". En: Instituto Colombo Pañameño de Derecho Procesal. *Actas de las XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal*. Panamá, 2014, pp. 3.

22 La comisión revisora estuvo integrada por los profesores Ada Pellegrini, Aluiso Mendes, Aníbal Quiroga, Antonio Gidi, Enrique Falcón, José Luis Vazquez Sotelo, Kazuo Watanabe, Ramiro Bejarano, Roberto Berizonce y Sergio Artavia.

transcurso del XII Congreso Mundial de Derecho Procesal que tuvo lugar en ciudad de México del 22 al 26 de septiembre de 2003[23].

Finalmente, presentada una nueva versión del proyecto, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica fue aprobado en las XIX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Caracas en el año 2004.

En 2024 se conmemoraron los 20 años de la aprobación de dicho código. Con tal ocasión se celebró del 27 al 29 de noviembre de 2024 en la ciudad de Vitória, Espíritu Santo, Brasil, el "I Congreso Iberoamericano de Tutela Colectiva", bajo el título "Repensando los procesos colectivos para Iberoamérica, el código modelo, la justicia multipuertas y los procesos estructurales".

Dicho evento fue la ocasión perfecta para retomar la discusión en torno a las propuestas planteadas por el código modelo. Como resultado de dicho encuentro se suscribió la *Carta de Vitória* en la cual se reafirma la importancia del Código Modelo de Procesos Colectivos como referencia para la construcción de sistemas procesales colectivos armonizados y eficaces en Iberoamérica. Asimismo, se establece el compromiso de fomentar la adopción de legislaciones nacionales inspiradas en el Código Modelo y en los temas debatidos, adaptadas a las particularidades locales. Se propone analizar la necesidad de actualizaciones del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, considerando los avances recientes en doctrina, jurisprudencia, regulaciones nacionales e internacionales, además de instrumentos de soft law, como las Reglas Europeas ELI/UNIDROIT, para asegurar que el modelo continúe respondiendo a las demandas contemporáneas de tutela colectiva de forma eficaz y alineada con las mejores prácticas globales. Por las mismas razones, se plantea la elaboración de un Anteproyecto de Código Modelo de Procesos Estructurales. Finalmente, esta *Carta de Vitória* reafirma el compromiso con la transformación del proceso colectivo en una herramienta de justicia inclusiva y efectiva, promoviendo la Justicia Multipuertas como un sistema que, con proporcionalidad procesal y cooperación, permita resolver los conflictos de manera más idónea, para un futuro más justo y sostenible en Iberoamérica, orientando a las personas para que comprendan y se beneficien de la tutela efectiva de sus derechos.

23 Landoni Sosa, Ángel. "El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal: El pasado. El presente. El futuro", en Instituto Colombo Pañameño de Derecho Procesal. *Actas de las XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal (*Panamá, 2014), p. 3.

Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica

El trabajo del IIDP no termina con los tres códigos modelo citados. En el año 2005 la profesora Ada Pellegrini Grinover presentó un proyecto de Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica.

Se formó una primera comisión integrada por los profesores Ada Pellegrini, Abel Zamorano, Ángel Landoni y Ricardo Mendes da Silva. Dicha comisión presentó un proyecto al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el que designó una comisión revisora integrada por los miembros originarios, a los que se sumaron, los profesores Enrique Vescovi, Juan Antonio Robles, Luis Ernesto Vargas y Roberto Berizonce.

El texto final fue aprobado en las XXI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal desarolladas en Lima en el año 2008[24].

Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica

En el año 2011 una Comisión integrada por los profesores Ada Pellegrini, Ricardo Mendes da Silva, Ruth Correa, Eurípides Cuevas, Ángel Landoni, Odette Meauar, Juan Robles Garzón, Ignacio Soba y Rosa Gutiérrez Saenz, trabajó el Código Modelo de Procesos Administrativos.

Dicho proyecto fue aprobado por la Asamblea del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el año 2012, en el marco de las XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal celebradas en Buenos Aires[25].

Ley Modelo de Arbitraje Comercial para Iberoamérica

En el marco de las XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal se designó una comisión para redactar las bases de una ley modelo de arbitraje comercial. Dicha comisión estuvo integrada por los profesores Carlos Alberto Carmona, Ramiro Bejarano, Raúl Tavolari, Margarita de Hegedus, Adrián Simons y Jorge Rojas, quien fue su presidente.

Luego de presentar sus avances, en las sucesivas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, se designó una comisión de redacción final integrada por los profesores Ramiro Bejarano, Jorge Rojas y Adrián Simons. Una vez elaborado el proyecto, este fue revisado por una comisión de expertos, integrada por María Fernanda Vásquez Palma, Santiago Pereira

24 Landoni Sosa, Angel. "El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal: El pasado. El presente. El futuro". En: Instituto Colombo Pañameño de Derecho Procesal. *Actas de las XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal*. Panamá, 2014, pp. 4.

25 Landoni Sosa, Angel. "El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal: El pasado. El presente. El futuro". En: Instituto Colombo Pañameño de Derecho Procesal. *Actas de las XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal*. Panamá, 2014, pp. 5-6.

Campos, Juan Pablo Correa Delcasso, Ulises Canosa Suárez, Carlos Alberto Carmona, Rodrigo Fuchs y Paula Costa e Silva.

Finalmente, el proyecto de Ley Modelo de Arbitraje Comercial para Iberoamérica fue aprobado en las XXVII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, que se llevaron a cabo en Porto Alegre en el año 2023.

Los desafíos que debemos asumir

Los códigos modelo elaborados por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal son documentos representativos que permiten visualizar el enorme trabajo de juristas de elevado nivel, dispuestos al diálogo, a la discusión y a proponer fórmulas de solución a sus sistemas de justicia.

Son por ello, al mismo tiempo, un punto de llegada de un trabajo específico encargado a un grupo de juristas, pero un punto de partida para pensar desde la academia en fórmulas que puedan impactar en nuestros sistemas de justicia. Además, se convierten en instrumentos de *soft law* de referencia para el trabajo en derecho procesal comparado de juristas de otras latitudes y para que quienes trabajan en políticas públicas de justicia puedan elaborar sobre bases técnicas adecuadas las reformas necesarias para nuestros países.

No obstante, debe asumirse que —sin renunciar a las soluciones esenciales de dichos antecedentes—, se requiere innovar en ciertos aspectos de los modelos a la luz de las lecciones aprendidas en la implementación de las reformas de los últimos 40 años.

Ello queda demostrado, desde el punto de vista académico, en el informe de la Comisión encargada de las "Propuestas para las bases del nuevo Código Modelo de Proceso Civil para Iberoamérica" del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, donde se señala[26]:

> la evolución de nuestra ciencia procesal unida a las nuevas realidades políticas, sociales, económicas y tecnológicas de nuestras naciones, que se imponen tan vertiginosa como globalmente, hacen que el proceso legislativo requiera de una permanente adaptación, a riesgo de una brutal obsolescencia y disociación con las necesidades ciudadanas, a cuya satisfacción se ordena instrumentalmente el derecho.

Por ello, en las nuevas reformas a la justicia es especialmente relevante la incidencia que de modo creciente van teniendo las experiencias y lecciones aprendidas por los países que las han implementado antes. Este proceso de aprovechar del aprendizaje de éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades, de los países que han diseñado e implementado reformas con anterioridad, genera un círculo virtuoso que desde la academia y desde las

26 Documento de trabajo inédito del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

instituciones que lideran las reformas, debemos propiciar con entusiasmo. La capacidad de reflexión panorámica suele ser una virtud no demasiado desarrollada, en la que debemos insistir.

Sin perjuicio del intenso debate en Iberoamérica sobre aspectos ideológicos del proceso, ese mismo debate puso en evidencia el gran diálogo que existe desde la segunda mitad del siglo XX entre los procesalistas iberoamericanos. Ese gran diálogo produjo encuentros y desencuentros, pero, mirándose y escuchándose los unos a los otros, se ha contribuido en la construcción de las bases de una plataforma común de intercambio entre los procesalistas iberoamericanos desde la academia que se mantiene hasta la actualidad[27].

Como enseña Taruffo[28], está ya superada la idea según la cual confrontar ordenamientos diferentes consistiría en una neutra exploración de similitudes y diferencias entre los sistemas normativos, reconociéndose que, por el contrario, el análisis comparado puede realizarse solamente en base a un proyecto cultural que nunca es neutro porque está condicionado y orientado sea por la cultura propia del comparatista, sea por las finalidades a partir de las cuales se desarrolla su propio trabajo. Ello, sin embargo, no le quita trascendencia al valor esencial de la tarea comparatista en el marco de los procesos de reforma a la justicia. Una comparación orientada a las reformas implica considerar el efectivo funcionamiento de los sistemas y de los institutos, de las elecciones de política de derecho propuestas, de la orientación de las prácticas y de los principios generales que fundan la validez y efectividad de los ordenamientos confrontados. La comparación puede tornarse más interesante y fructífera si se toman en consideración no solo las normas específicas, sino fundamentalmente los modelos procesales.

Taruffo[29] destaca con acierto que, al analizar los modelos procesales, suele constatarse la existencia de lo que los comparatistas suelen denominar "circulación de modelos". A diferencia de lo que ocurrió por siglos, cuando los ordenamientos procesales se alteraban de regla con ritmo muy lento y sobre todo verticalmente (esto es: cada cual permaneciendo dentro de sí mismo y evolucionando según sus propias líneas históricas), el fenómeno que caracteriza la evolución más reciente es el de las "interferencias horizontales" entre los diversos sistemas o, si se prefiere, de imitación de

27 Priori, G., *El proceso y la tutela de los derechos* (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2019), p. 25.

28 Taruffo, M., "Aspectos fundamentais do Processo Civil – De civil Law e de Common Law", *en Processo civil comparado: Ensaios,* trad. Daniel Mitidiero (Sao Paulo, Marcial Pons, 2013), pp. 12-13.

29 Taruffo, "Aspectos fundamentais do Processo Civil – De civil Law e de Common Law", p. 28 y p. 31.

un sistema por parte de otro u otros sistemas, aún que derivados de experiencias históricas y líneas evolutivas muy heterogéneas. Incluso esta tendencia se verifica en el completo intercambio de modelos entre los sistemas del *common law* y del *civil law*, lo que deriva en la crisis de la distinción entre dichos sistemas procesales. Las transformaciones que se están dando provocarán una mayor deconstrucción de los viejos esquemas y darán lugar a múltiples fenómenos de recomposición mediante un juego complejo de interferencias entre sistemas diferentes, circulaciones de modelos y trasplantes diversos.

Esta tendencia se ha dado quizás más tímidamente en América Latina que en otras latitudes durante las primeras reformas a la justicia civil a fines de la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, pero ha cobrado fuerza fundamentalmente en el presente siglo, donde es cada vez mayor la retroalimentación entre los procesos de reforma latinoamericanos y con los procesos de reforma europeos, prestándose también mayor atención a los modelos de Estados Unidos y Canadá.

Ello se ve potenciado por el fenómeno de la globalización, entre cuyas manifestaciones cabe destacar el fuerte incremento de las controversias internacionales (el aumento exponencial de los contactos y relaciones internacionales ha generado una proliferación de conflictos internacionales en áreas tan variadas como comercio, consumo, marcas y patentes, etc.) y/o resueltas por tribunales internacionales (manifestaciones de este fenómeno son los conflictos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los litigios internacionales en materia de inversiones que involucran a inversores extranjeros y estados y son resueltos por tribunales arbitrales internacionales —como es el caso del CIADI[30]—) y la tendencia a la uniformidad cultural que se manifiesta no solo en la cultura jurídica, sino en casi todas las áreas del conocimiento[31].

La labor del Instituto continúa. En la actualidad, de modo paralelo, diversos grupos de trabajo integrado por juristas iberoamericanos vienen

30 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Posee amplia experiencia en este ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos de inversión internacional. Los Estados han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión. Información disponible en: https://icsid.worldbank.org/es (consultado: 10/1/2021). Al respecto puede consultarse también ESPULGUES, C. (ed.), *Tratado de inversiones extranjeras y arbitraje de inversiones en Iberoamérica,* Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020.

31 Taruffo, "Aspectos fundamentais do Processo Civil – De civil Law e de Common Law", pp. 29-31.

realizado una labor de investigación para proponer mejoras a nuestros sistemas de justicia en diversas materias.

En términos similares a los trabajos de ELI/UNIDROIT al elaborar las Reglas Modelo Europeas de Proceso Civil adoptadas en 2020, Iberoamérica comienza a elaborar sus reglas procesales, que sean a la vez una actualización de sus códigos modelo y una adaptación a los nuevos tiempos de nuestros sistemas de justicia.

Asimismo, parece auspiciosa la iniciativa de trabajar en un Código Procesal Modelo de Familia para Iberoamérica.

* * *

En este libro se reúnen todos los códigos modelo elaborados por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal desde su fundación a la fecha, como una contribución de juristas de todos los países de Iberoamérica, resultado de casi 70 años de trabajo.

Estos instrumentos de *soft law* son de gran utilidad, ya para el análisis comparado, ya para disponer de bases sólidas consensuadas por los más destacados expertos en la materia para diseñar e implementar nuevas reformas en nuestros países.

Agradecemos a Fundación de Cultura Universitaria, encargada de la edición y publicación, por el aporte que hace al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en la difusión de los códigos modelo.

El compromiso ineludible es seguir trabajando en mejorar los sistemas de justicia de Iberoamérica. No podemos dejar de advertir que la disminución de la confianza en la justicia tiene, como una de sus causas, la terrible realidad de que millones de personas que necesitan resolver sus problemas en Iberoamérica, se sienten, una y otra vez, solas y apesadumbradas frente a pesadas puertas y a operadores insensibles.

No hay estado de derecho sin una justicia independiente y de calidad que, centrada en las personas, sea accesible, especialmente para quienes se encuentran situaciones de mayor vulnerabilidad. Necesitamos un nuevo paradigma para darle a las personas sedientas de justicia una respuesta y estos insumos que hoy presentamos, pueden ayudar al cambio cultural. Ojalá sea posible, antes que sea demasiado tarde.

Montevideo y Lima, 6 de abril de 2025

EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
MODELO PARA IBEROAMÉRICA

Historia – Antecedentes – Exposición de motivos

Texto del Anteproyecto

Montevideo 1988

PRÓLOGO

La labor del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal culmina, en esta etapa, con la preparación de Anteproyectos de Códigos Procesales Modelo para Iberoamérica. Etapa que comenzó en las IVas. Jornadas de Venezuela, en 1967, con la resolución de preparar las "Bases" que luego fueran tratadas en Bogotá-Cartagena (1970, Vas. Jornadas) y termina —si tal palabra pudiera emplearse— con la entrega de los sendos Anteproyectos de Código Procesal Civil y Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. Los cuales serán presentados —aunque en distinta etapa de elaboración— en las Jornadas de Río de Janeiro de mayo de este año (XIas. Jornadas del Instituto).

La Comisión encargada de la preparación del Anteproyecto de Código Procesal Civil ha terminado esta etapa de la labor y esta Secretaría ha creído del caso dar a publicidad, mediante este libro, no solo el texto preparado y su Exposición de Motivos, sino también los antecedentes históricos de toda esta labor, producto de tantas Jornadas y de tanto trabajo acumulado.

Este mismo trabajo —más por lo que representa que por su con tenido concreto— ha despertado un interés que trasciende de nuestra área geográfica para proyectarse en otros ámbitos, donde también se trabaja por el mejoramiento de la Justicia y la unificación en la búsqueda de un nuevo Derecho comunitario.

Es así que la Universita di Roma II (Centro Interdisciplinare di Studi Latino-Americani) y la Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA), cuyo apoyo nos resulta muy especialmente destacable. Ha preparado la realización de un encuentro para el estudio del Proyecto. Dicho evento consistirá en un Coloquio a realizarse en Roma (26/28 de Setiembre) con el fin de analizar el referido Anteproyecto de Código Procesal Civil para Iberoamérica, con participación de especialistas europeos y latinoamericanos (pertenecientes los últimos al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal).

También la O.E.A., con quien colaboramos, en especial con su Comité Jurídico, ha invitado a nuestro Instituto, a las Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Privado, que están realizando una tan eficiente labor para la Cooperación Judicial interamericana.

Como se expresa en el texto, no se trata de un Anteproyecto definitivo, ni con pretensiones de regir, como tal, en ningún país. Es solamente un Modelo, un Código tipo para servir de base a las re formas que encaran todos los países de nuestra área.

Y no constituye un proyecto definitivo porque, en una primera etapa será revisado por una Comisión Especial, porque estará en permanente

elaboración y porque un texto de este tipo no podrá jamás conformar a todos quienes formamos partes de nuestro Instituto.

Pero de todas maneras significa un importante aporte que seguramente será de mucha utilidad y trasunta la realidad que es nuestro propio Instituto.

Seguramente constituirá un aporte esencial en la tarea de integración en que todos estamos empeñados.

Y, como decimos al principio, representa la culminación de una etapa en la labor del Instituto, en el cumplimiento de uno de sus fines esenciales: el mejoramiento de la Justicia de los pueblos iberoamericanos.

Otra de las labores, en la que seguimos empeñados y se enlaza con esta, la constituye el mejoramiento de las instituciones judiciales y procesales de nuestra área, a través de la profundización de los temas, del intercambio de experiencias, preparación de textos etc.

Luego del camino recorrido y cuando se mira hacia atrás visualizando la labor comunitaria de tantas Jornadas, de tantas instituciones y de tantos individuos, renace la esperanza en la fuerza que resulta del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y sus inmensas posibilidades en la tan trascendente tarea emprendida. En la que apenas hemos dejado atrás —y sin cerrar— la primera etapa en estos treinta años de labor ininterrumpida. No siempre pareja, no con la cooperación de todos, pero con la fe inquebrantable de los que trabajan en la defensa del Derecho, de la Justicia y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos de nuestra área en vías de desarrollo.

Montevideo, marzo de 1988.

EL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL (1957-1988)

Historia de las Jornadas

1) El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal se fundó en Montevideo, en las Primeras Jornadas Latinoamericanas dé Derecho Procesal, realizadas en 1957, en homenaje a la Memoria de Eduardo J. Couture.

En dichas Jornadas, convocadas por la Facultad de Derecho de, la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, en homenaje a la memoria de su ilustre Decano y Profesor fallecido el año anterior, se trataron diversos temas de la preferencia de este maestro. Así: a) "Garantías constitucionales del proceso"; b) "Proceso y regla moral". También se agregan dos temas de gran interés: e) "Proceso administrativo" y d) "Cooperación judicial internacional".

En la sesión de clausura, el profesor brasileño Russomano propuso la creación de un Instituto Americano de Derecho Procesal, que luego se denominó Latinoamericano, como parte de un más ambicioso plan —luego no cristalizado— de fundar una Asociación Eduardo J. Couture para el progreso de la cultura jurídica latinoamericana.

El Instituto de organización incipiente tuvo Estatutos —que en realidad no se aplicaron— y como autoridad, sólo un secretario, el Dr. Adolfo Gelsi Bidart.

2) Las Segundas Jornadas se llevaron a cabo en México (Febrero de 1960), que coincidieron con el *Primer Congreso Mexicano de Derecho Procesal*, por lo que se trataron temas diversos. Los temas generales (específicamente de las Jornadas) fue ron: "Ejecución de sentencias extranjeras y laudos arbitrales"; "Situación y perspectivas de la oralidad en América", y "Acción pública y acción privada en el proceso penal de los países americanos". Luego —como temas especiales para el Derecho mexicano— se estudiaron: "El régimen procesal del amparo"; "Unificación de códigos procesales" y "Carrera judicial".

En la sesión de clausura se designó Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal, al Dr. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, quedando por entonces constituida la mesa directiva con este jurista y el Dr. Gelsi Bidart.

3) Las Terceras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal se celebraron en setiembre de 1962, en San Pablo (Brasil), junto al Primer Congreso Brasileño de Derecho Procesal, tratándose los siguientes temas: "Mandado de segurança"; "Des pacho saneador" y "Homologación de sentencia extranjera".

En dichas Jornadas no se registra actuación del Instituto.

4) Las Cuartas Jornadas se celebraron en Caracas y Valencia (Venezuela), en marzo/abril de 1967. Los temas abordados fueron: a) "La protección procesal de las garantías individuales en América Latina"; b) "El despacho saneador"; e) "Iniciativa probatoria del Juez en el proceso civil"; d) "La teoría general del proceso y la enseñanza del Derecho procesal"; e) "El principio de que las partes están a derecho" y f) "La libertad provisional del detenido, como derecho y como institución de prevención criminal".

El 1 de abril en Caracas celebró una sesión el Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal, llegándose a los siguientes acuerdos: en primer lugar se designa, por primera vez, una verdadera Junta Directiva, que queda así compuesta: Presidente, Niceto Alcalá - Zamora; Secretario, Humberto Briseño Sierra; Vocales: Luis Loreto, Santiago Sentis Melendo, Moacyr Amaral Santos, Hernando Devis Echandía, Mario Aguirre Godoy, Hugo Pereira Anabalón y Amílcar Mercader.

Se resuelve, asimismo, crear una "Revista Latinoamericana de Derecho Procesal", para cuya dirección se nombró a Santiago Sentís Melendo y para su Consejo de Redacción a los procesalistas Alfredo Buzaid, José Rodríguez U., Pedro Aragoneses Alonso, Adolfo Gelsi Bidart, Héctor Fix Zamudio y José Antonio Silva Vallejo.

Asimismo se resolvió fijar una cuota social de 20 dólares, y establecer como tema central, para las Quintas Jornadas, la formulación de Bases para uniformar la legislación procesal de los países americanos.

5) Las Quintas Jornadas se celebraron en Bogotá y Cartagena de Indias (Colombia) en el año 1970, tratándose los siguientes temas: a) 'El problema de la lentitud de los procesos y sus soluciones" (Ponentes: Hernando Devis Echandía y Hernando Morales Molina); b) "Bases uniformes para la legislación procesal penal de los países latinoamericanos", a cargo de los profesores argentinos Alfredo Vélez Maricondé y Jorge Andrés Ciari Olmedo; y c) "Bases uniformes para la legislación procesal civil de los países latinoamericanos" por los profesores uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi.

El Instituto también se reunió en Bogotá, el 24 de junio de 1970 y en primer lugar se designó como Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

En el mismo acto se aprobaron nuevos Estatutos redactados por los profesores Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Humberto Briseño Sierra y se acordó designar como órganos oficiales del Instituto a la "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", editada en Madrid y a la Revista de Direito Processual de San Pablo, Brasil, para servir de difusión de la publicidad del Instituto y de sus labores científicas.

Se eligió una nueva directiva así integrada; Presidente, Niceto Alcalá-Zamora; Vicepresidente, Luis Loreto; Vocales, José Olympio de Castro

Filho, Hernando Devis Echandía, Adolfo Gelsi Bidart, Santiago Sentís Melendo y Alfredo Vélez Mariconde.

Inclusive en esa sesión se designaron diversas secretarías regionales en la siguiente forma; por Argentina: Fernando de la Rúa; por Centroamérica: Mario Aguirre Godoy; por Colombia: Hernando Morales Molina; por Chile: Hugo Pereira Anabalón; por España y Portugal: Carlos de Miguel y Alonso; por México: Héctor Fix Zamudio; por Perú: Carlos Parodi Remón; por Uruguay: Enrique Vescovi y por Venezuela, José Rodríguez U.

6) Las Sextas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal se celebraron en la ciudad de Valencia (Estado de Carabobo, Venezuela), en agosto de 1978.

Se trataron los siguientes temas: a) "El Derecho procesal y la protección del consumidor";

b) "El procedimiento de condena por delitos graves"; c) "Límites actuales entre Jurisdicción y Administración" y d) "Presente y futuro de la casación civil".

En esta reunión se recibió el Anteproyecto articulado de Bases Completas "para una legislación uniforme para América Latina en materia procesal penal", que redactara el profesor de Córdoba, Jorge Clariá Olmedo —continuando la obra que iniciara con el fallecido Alfredo Vélez Mariconde— y se decidió que se publicara por la Secretaría de la Organización de Estados Americanos.

Con tal motivo, además de cursar sendas notas al autor y a dicha secretaría, se resolvió que se considerara en las próximas Jornadas, luego que una comisión especial que se integró, concentrara, valorara y compendiara las observaciones y trabajos sobre tan importante Anteproyecto. Para lo cual fueron nombra dos los especialistas profesores Víctor Fairén Guillén como Presidente, Fernando de la Rúa, como Secretario y además a José Frederico Marques, Bernardo Gaitán Mahecha y Julio Maier.

Se resolvió que en las VII Jornadas que se celebrarían en Guatemala, conforme al ofrecimiento hecho por el Dr. Mario Aguirre Godoy, además de este proyecto, se consideraran las Bases Uniformes para una parte general de una legislación uniforme para América Latina, en materia procesal civil, a cargo de los profesores uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi.

Se introdujeron pequeñas modificaciones en la Directiva, con el simple propósito de sustituir a quienes habían fallecido, incorporando al profesor Jorge Clariá Olmedo, en sustitución de Alfredo Vélez Mariconde. Asimismo se nombró segundo vicepresidente a Hernando Devis Echandía y Secretario a José Rodríguez U. Asimismo se resolvió que la secretaría funcionaría simultáneamente en Valencia y en Caracas, en esta última ciudad a cargo de la Secretaria adjunta Mariolga Quintero Tirado.

7) En Guatemala, en noviembre de 1981, se celebraron las VIas. Jornadas, dedicadas exclusivamente a la discusión de los Anteproyectos de Códigos Procesales Modelos, en materia civil y penal, para Iberoamérica.

La mayor parte del tiempo fue dedicada al estudio del Anteproyecto para la legislación procesal penal modelo para Iberoamérica, preparado por la Comisión integrada por los profesores Víctor Fairén Guillén (Presidente), Fernando de la Rúa y Julio Maer (Secretarios), José Frederico Marques y Bernardo Gaitán Mahecha.

Las dos últimas sesiones se dedicaron a analizar el Anteproyecto de Código Modelo Procesal Civil, preparado por los profesores Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi, a los que se había agregado el Profesor Luis Torello. Se resuelve que estos preparen la redacción definitiva para tratarse en las próximas Jornadas, previo informe de una comisión integrada por los profesores Alfredo Buzaid, Hernando Devis Echandía y Pedro Aragoneses Alonso.

Con respecto a las autoridades del Instituto y luego de aceptar la reiterada renuncia del Presidente Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ahora también determinada por la imposibilidad física, se le designa por unanimidad Presidente honorario y se integra así la nueva Directiva: Presidente: Hernando Devis Echandía (Colombia); Vicepresidentes: Víctor Fairén Guillén (España), Alfredo Buzaid (Brasil), Mario Aguirre Godoy (Guatemala), Secretario General-Tesorero: Enrique Vescovi (Uruguay); Vocales: Carlos de Miguel y Alonso (España), José Olimpio de Castro Filho (Brasil), Adolfo Gelsi Bidart (Uruguay), Jorge Clariá Olmedo (Argentina), Humberto Briceño Sierra (México) y Gabriel Sarmiento Núñez (Venezuela).

Se aceptan nuevos socios, se reforman los Estatutos, se de signan socios honorarios. Se resuelve la realización de las próximas Jornadas en Quito (Ecuador).

8) Las Villas. Jornadas se realizan en Quito (Ecuador), en octubre de 1982 y en ellas se trataron exclusivamente, al igual que en Guatemala, los Anteproyectos de Códigos Procesal Civil y Penal Modelos para Iberoamérica, dedicándose las sesiones de trabajo, primero, al del proceso penal y luego al del proceso civil, con amplia participación de los profesores iberoamericanos presentes.

De estas Jornadas, como de las celebradas en Guatemala, se publicaron sendas Memorias que registran las importantísimas discusiones científicas alrededor de múltiples temas del articulado propuesto.

Finalizada la reunión se encomienda la redacción definitiva a las Comisiones ya designadas de los respectivos Anteproyectos, teniendo presente las aportaciones que se realizaron durante las Jornadas y las que quieran enviar a dichas Comisiones los miembros del Instituto.

Asimismo se resuelve que, a partir de las próximas Jornadas, se procederá a continuar con el estudio de lo diversos temas científicos propuestos por los organizadores. Quedando los Anteproyectos a cargo de las respectivas Comisiones.

En estas Jornadas se resuelve que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en adelante, patrocine la Revista Uruguaya de Derecho Procesal y que esta sirva a difundir la actividad de aquel.

9) Las IXas. Jornadas se celebran en Madrid (España), en junio de 1985, de conformidad con el siguiente temario científico:

Saneamiento del proceso y audiencia preliminar (1); El Poder Judicial (II); Ejercicio de las garantías constitucionales sobre la eficacia del proceso (III); Tutela procesal del derecho a la intimidad personal (IV).

En dichas Jornadas se reunió el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y, además de incorporarse nuevos miembros, se reorganizó la Comisión Directiva, la cual quedó así constituida:

Presidente: Dr. Hernando Devis Echandía (Colombia), Vicepresidentes: 1° Víctor Fairén Guillén (España); 2° Alfredo Buzaid (Brasil); 3° Mario Aguirre Godoy (Guatemala); 4° Carlos de Miguel y Alonso (España); 5° José Almagro Nosete (España). Secretario General Tesorero: Enrique Vescovi (Uruguay); Vocales: Humberto Briseño Sierra (México), Adolfo Gelsi Bidart (Uruguay), José G. Sarmiento Núñez (Venezuela), José Carlos. Barbosa Moreira (Brasil), Juan Montero Aroca (España), Fernando de la Rúa (Argentina), Francisco Ramos Méndez (España) Secretario Adjunto: Pedro Aragoneses Alonso (España).

10) Las Xas. Jornadas se celebraron en Bogotá (Colombia), en agosto de 1986, organizadas por la Universidad del Externado de Colombia y se trataron los siguientes temas científicos:

El recurso extraordinario de revisión en materia civil y laboral (1); Los indicios y las presunciones (II); Modos anormales o extraordinarios de terminación del proceso (III); El problema de la lentitud de los procesos. Críticas y soluciones, Mesa Redonda (IV); La investigación en el proceso penal (V); El juzgamiento en el proceso penal (VI).

11) Las XIas. Jornadas se celebrarán en el corriente año de1988 en Río de Janeiro, Brasil (22/27 de mayo) y se tratarán os siguientes temas: Medios de aumentar la eficacia del servicio de Justicia (I); Protección procesal de los derechos fundamentales.

(II); Medidas cautelares innominadas (III); Interceptaciones telefónicas y grabaciones clandestinas en el proceso penal (IV). En dichas Jornadas se presentarán los Anteproyectos de Códigos Modelos en su relación final.

Otras actividades

Naturalmente que las Jornadas y los trabajos y discusiones científicas en ocasión de las mismas, constituyen la principal actividad del Instituto, a través del cual se ha ido acumulando un muy trascendente material. El que, entre otras cosas, como decimos más adelante, contribuye a la preparación de las Bases y Anteproyectos referidos.

La actividad que irradia el Instituto puede señalarse, quizá, como impulso para la labor nacional; así se crean Institutos de Derecho Procesal regionales y locales y se realizan jornadas también nacionales. Por eso no es casualidad, que las IIas. Jornadas del Instituto hayan coincidido con el ler. Congreso Mexicano de Derecho Procesal y que las IIIas, hayan propiciado la realización —también simultánea— del ler. Congreso Brasileño de Derecho Procesal. En esta materia, quizá, los países que estuvieron en la vanguardia fueron México y Argentina, cuyos múltiples Congresos de Derecho Procesal han marcado rumbos en el Continente Latinoamericano. Ellos se han caracterizado, como luego los demás que siguen ese ejemplo, por la amplia participación de profesores nacionales y abogados en muy gran cantidad, así como de destacados especialistas extranjeros especial mente invitados en cada oportunidad. Posteriormente se han multiplicado los Congresos y Jornadas nacionales en Brasil y Colombia y luego en otros tantos países del área (Uruguay, Venezuela, etc.).

La Revista Uruguaya de Derecho Procesal, a partir de 1982, reseña todos estos eventos, las principales conclusiones y publica algunos de los principales trabajos presentados a dichos Congresos y Jornadas.

El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, por su labor en beneficio de la unificación de la legislación procesal en Latinoamérica, fue invitado a participar como observador en la

IV Conferencia Interamericana de Derecho Privado Internacional (La Paz, 1984) organizada por la Organización de Estados Americanos (CIDIP III).

Finalmente corresponde destacar que toda esta labor no deja de tener, sin duda, importancia (quizá en un tránsito de doble mano) en el desarrollo de la ciencia procesal en el área, reconocida por la más relevante doctrina en la materia. Inclusive han comenzado a aparecer obras que se orientan en el estudio de los temas especiales, pero enmarcados en el ámbito iberoamericano. El Derecho Procesal Comparado en Iberoamérica se ha desarrollado últimamente y ello constituye uno de los resultados de toda esta labor comunitaria.

LA INTEGRACIÓN AMERICANA, HACIA LA INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL. TRATADOS, ORGANISMOS, TRIBUNALES, CÓDIGOS MODELOS

La integración institucional

En el Continente americano, en especial entre los países latino americanos ha surgido, desde hace tiempo, pero cada vez con mayor fuerza, la idea de integración.

En un mundo, cada vez más, de regiones, que de países, tal integración constituye un imperativo histórico del mundo actual, casi una necesidad para la supervivencia.

Hay una tendencia que comienza las más de las veces en el campo económico, para evolucionar, luego, hacia las más variadas formas de integración político-institucional.

Es decir que, en nuestra sociedad de consumo, aparecen primero los tratados de intercambio de mercaderías, de hombres, En especial trabajadores, luego para posteriormente originarse la creación de organismos que van facilitando la resolución de los conflictos, para culminar con algunos fenómenos que interesa destacar aquí, como la unificación del Derecho, en primer lugar, y la creación (simultánea y posterior) de organismos supranacionales que abarcan los tres Poderes clásicos.

Así aparecen los Consejos de Ministros, Parlamentos y Cortes de Justicia. Esto sin olvidar que, en virtud del predominio del factor económico-financiero, aparece una amplísima red de organismos internacionales multilaterales en dicha área.

Latinoamérica no podía estar fuera de este movimiento integracionista que se observa en los demás países (teniendo por base el Continente europeo por razones de desarrollo) y que se va acrecentando cada día, con todas sus dificultades.

Este fenómeno que comenzó hace tiempo y que, en alguna3 i sigue el modelo europeo de su Comunidad Económica (a partir del Tratado de Roma, de 1950) se ha fortalecido luego del restablecimiento de la Democracia en varios países de nuestro Continente.

Naturalmente que la conciencia de integración institucional americana existe desde hace mucho tiempo. En ese sentido pueden señalar varios hitos históricos, desde la reunión que pro mueve Simón Bolívar en 1826, pasando por la Unión Panamericana primero (Washington 1899) y luego por las múltiples Conferencias Interamericanas que culminan con la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, que empieza a funcionar en 1951. La cual funciona sin desmedro de las Naciones Unidas, a la que pertenecen todos sus miembros, en el ámbito regional,

con su Secretaría General, Asamblea General, Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y sus Consejos especializados, dentro de los cuales es de destacar, a nuestros efectos, el Comité Interamericano de Jurisconsultos y el Comité Jurídico Interamericano, a través de los cuales sé propicia la reanudación de la codificación en Derecho Internacional (arts. 67 y 68 del Tratado de la OEA)

Para esta reseña interesa señalar que dicho Comité Jurídico propicia la realización de Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado, de las cuales se han realizado tres: Cidip I (Panamá, 1975), Cidip II (Montevideo, 1979), Cidip III (La Paz, 1984) y se planea ya la IV. En ellas se aprobaron importantísimos tratados, suscritos por una mayoría importante de países americanos y ratificados por gran parte de ellos, sobre Derecho Internacional Privado y cooperación judicial.

A cuyos efectos la instrumentación de códigos similares —si la base de los Códigos Modelos— servirá de eficaz mecanismo para hacer más eficiente el cumplimiento de dichos tratados, en especial los que se refieren a temas procesales: Exhortos y Cartas Rogatorias, Sentencias y Laudos Extranjeros, Arbitraje, Medidas Cautelares, Prueba en el Extranjero, Extradición, Restitución de Menores, etc.

Al lado de toda esta red de integración jurídica (y jurisdiccional) encontramos también organismos de otro tipo. Así se han creado, como en Europa, el Parlamento Latinoamericano (Lima, 1964; México, 1979; Montevideo, 1987).

Y, por 'último, como culminación de toda esta integración jurídica que sirve y hace posible una eficaz integración socio-económica, han aparecido los Tribunales de Justicia Supranacionales, entre los cuales debemos mencionar al Tribunal del Pacto de Cartagena y el de San José de Costa Rica (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Los Códigos Modelo o Códigos tipo

Es en este mareo y en el mismo sentido que la tendencia anotada, que se trabaja por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en la preparación de Códigos Modelos.

Primero comenzando por las Bases, luego los estudios de es tas y su comparación con los diversos Códigos de Iberoamérica y finalmente con la preparación del Anteproyecto con el que finaliza esta publicación[1].

Luego de la preparación de las Bases inspiradas en los Códigos existentes y en el trabajo común de la doctrina y jurisprudencias de Iberoamérica,

1 VESCOVI, Enrique, Elementos para una Teoría General del Pro ceso Civil Latinoamericano. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1978.

en especial por la labor acumulada en las Jornadas, se reexaminaron las mismas para preparar posterior mente dicho Código Modelo.

El profesor Enrique Vescovi realizó una labor comparativa, mediante un trabajo de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de acumular más material para la preparación del Anteproyecto.

En ese folleto se hacen algunas afirmaciones que corresponde reiterar. La primera, que la finalidad última es —dentro del marco de la integración a la que se busca servir y ayudar— la mejora de la Justicia latinoamericana, enormemente deteriorada y que no sirve de manera eficiente a nuestra comunidad.

La segunda, la mención de todos los factores que facilitan la tarea en nuestra área: instituciones de origen común (la LEC de 1855 y sobre todo la Partida III), lengua común (el portugués y la comunidad luso-brasileña, no fl0 distingue, sino que nos acerca), factores geográficos e históricos comunes. Y, más que el deseo, a imperiosa necesidad de integración.

Por último se destaca el hecho de que el Código Modelo no tiene la pretensión de regir en ningún país en forma efectiva.

Es solo lo que su nombre dice, un "modelo", que recoge múltiples instituciones comunes (con diferencia de nombres) y trata de introducir otras receptadas por el trabajo común de la doctrina y jurisprudencia iberoamericanas, especialmente.

Pero, independientemente de ello, de realizar una reforma profunda y de estructura de la Justicia iberoamericana, en este caso a través de uno de los elementos: la reforma de las instituciones procesales, de modo que se adecuen a los fines y objetivos propuestos.

Para ello y sin perjuicio de la labor uniforme a través de los múltiples organismos que aquí mencionamos y algunos otros, y de la particular en cada uno de nuestros países, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal consideró del caso, como lo hemos visto, la preparación de códigos modelos (o códigos tipo) que sirvieran de base a las reformas de los diferentes países y de instrumento a la integración y a la necesaria cooperación judicial que se busca (también) por otras vías.

También en otras áreas se ha adelantado en el mismo sentido: hay anteproyectos de Códigos Modelos en materia penal, tributaria etc.

HACIA LA PREPARACIÓN DE CÓDIGOS PROCESALES MODELOS: LAS BASES UNIFORMES PARA LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y PENAL EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS

La preparación de Bases para la Legislación de América Latina

Como hemos dicho, en las IV Jornadas de Venezuela (Caracas-Valencia) se acordó la preparación de Bases Uniformes para la posterior preparación de Códigos Modelos, como medio de impulsar la reforma de la legislación procesal civil de los países Latinoamericanos (Ya veremos que luego, en Bogotá, en 1970, y de allí en adelante, el Instituto y sus proyectos tomaron una dimensión iberoamericana).

En Caracas (1967) fueron encargados de la preparación de dichas BASES para el proceso penal los profesores argentinos Alfredo Vélez Mariconde y Jorge Clariá Olmedo y para el proceso civil los profesores uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi.

También señalamos que dichas BASES fueron consideradas en las V Jornadas (Bogotá, 1970) y definitivamente modificadas y aprobadas, tanto las del proceso penal como las del civil. En unas Jornadas realizadas en trabajo de seminario y con la presencia de los referidos profesores argentinos y uruguayos redactores, se aprobaron las bases.

Bases para un Código Procesal Civil Modelo

Antecedentes – Historia

Las Bases relativas al proceso civil fueron preparadas, como se ha dicho reiteradamente, por los profesores Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi.

Estos partieron de la labor acumulada a través de las diversas Jornadas y de los trabajos y libros de los procesalistas iberoamericanos, así como de los códigos procesales civiles de los países más adelantados y de la doctrina más relevante.

El Instituto Uruguayo de Derecho Procesal publico el trabajo preparado por Gelsi y Vescovi, con las conclusiones de las Bases aprobadas en Bogotá por los procesalistas iberoamericanos[2] de las que extraemos algunas consideraciones que marcan los principales objetivos del trabajo.

Así decían los profesores Gelsi Bidart y Vescovi: "Opciones para actualizar y mejorar el proceso.

2 Bases uniformes para la reforma de la legislación procesal civil de los países Latinoamericanos. GELSI BIDART, Adolfo y VESCOVI, Enrique, Instituto Uruguayo de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 1974.

El enfoque no debe conducir a la mera sistematización de principios generalmente admitidos por las legislaciones de América Latina, una suerte de síntesis global de lo ya aceptado por nuestro Derecho positivo, ni siquiera, quizá, por la mayoría de nuestra doctrina.

Se trataría, más bien, de proponer opciones fundamentales en torno a algunos puntos que pueden considerarse claves para arrancar al proceso de su estancamiento y del tradicionalismo exagerado, procurando encaminarlo hacia una 'puesta al día' con las necesidades actuales y las inmediatas que se avizoran.

Dándole, por tanto, mayor flexibilidad y adecuación, a esta época que no aprecia las formas, ni por su antigüedad, ni por su majestad, sino exclusivamente por su eficacia; que sigue apreciando como valor fundamental, el de la justicia, especialmente si se refiere a los más débiles (procesos de familia; de menores; del trabajo; ciertas formas del contencioso administrativo; etc.); que no puede soportar la exasperante lentitud en el obrar; que se sabe alejada de la comunicación y quiere buscar los modos de lograrla, en cualquiera de los planos de la relación humana y, por ende, también en el proceso.

Criterios

En consecuencia, el punto de vista en la determinación de las Bases, podría proyectarse en el siguiente sentido:

1. Tomar en cuenta la realidad latino-americana (como se dijo) en cuanto a sus deficiencias económicas y técnico-materia les, pero considerando que no está aquí lo más requerido, que se refiere a hombres y a su preparación al efecto; en este punto hay base más que suficiente, para exigir el adelanto que ya no puede demorarse.

2. En la tradicional disputa entre la teoría y la práctica, la balanza ha de inclinarse por la primera, decididamente, con las siguientes precisiones.

No se trata de despreciar la 'práctica', en cuanto realización del proceso, pues para eso se hace toda ley procesal y por ende, toda proyección de su reforma; ni de desconocer la fuerza de las costumbres forenses para detener o aplicar o modificar la reforma procesal[3].

Esto no significa limitarse a lo que ocurre en la realidad y a las resistencias forenses a los cambios, para adaptarse a aquélla y vencer o capitular ante éstas. Toda programación para hombres, ha de tomar en cuenta cómo son; cuando se trata de su conducta, cómo han.actuado hasta el momento en que el cambio se produce, pero tal manera de ser y de actuar no puede impedir las transformaciones imprescindibles.

3 Ver las precisas consideraciones que acerca de la costumbre forense como elemento: (a) complementario de la ley, y a veces (b) sustitutivo de la misma, (c) resistente a las reformas y precipitante de su fracaso, formula CALAMANDREI: "Proceso y democracia" (Trad. H. Fix Zarnudio, ed. EJEA) p. 42-49.

La sola experiencia no sirve, porque no se trata de 'relevar' hechos naturales, sino de señalar cómo ha funcionado determinado instrumento, el proceso actual. Solo en la medida en que ambos son vehículos (aspectos genéricos comunes), nos guiaríamos, para adoptar o descartar al automóvil, por la experiencia de los conductores de coches de caballo. La experiencia del nuevo instrumento, el nuevo proceso, si de experiencia se trata, es la única que puede satisfacer[4].

En segundo lugar tampoco hablamos de un hacer cualquiera, sino de una conducta humana preordenada para obtener determinados fines o realizar ciertos valores, más allá de la misma (como resultado) y aún durante su realización. Por ende, adecuación y eficacia para lograr la meta (solución del problema de Derecho Sustantivo planteado), pero vías conforme con las modalidades humanas y tendientes a su perfeccionamiento (garantía de derechos y derechos humanos garantizados en ella). Esto significa proyección de un pensamiento estimativo, que valora los fines a alcanzar y los medios que se adaptan a aquéllos, estos en sí y para lograr los primeros. No importa lo que es, sino lo que' debe ser en la realidad[5].

En tercer término y como una indudable manifestación de modernidad, la técnica actual es hija directa de la ciencia y no se' concibe sin ella. Lo propio ha de ocurrir y de hecho ha ocurrido en las principales reformas de los siglos XIX y XX, ya sea en Austria, Alemania, Italia, ahora España y así sucesivamente[6]. Las normas procesales, en sí mismas consideradas son medios, instrumentos o bien cauces señalados para la determinación y actuación del Juez y de las Partes, sus Defensores y' los auxiliares de la Justicia, vale decir que se trata de una técnica —regla de conducta elaborada (pensamiento cristalizado sobre la realidad) para lograr mejor la obtención de cierto fin en la realidad—; por ende, toda técnica supone: (a) visión de la conducta en la realidad; (b) determinación de la meta que pretende lograr; (c) señalamiento de un procedimiento, un medio, un instrumento artificial, vale decir, elaborado por el hombre y por ende, relativamente distinto del

4 Sobre las diversas causas que provocan, con frecuencia, la ineficacia de las normas procesales en su aplicación, y. Galeno LACERDA "Considerações sobre a reforma processual", en "Revista de Direito Processual Civil" Sao Paulo, 1967, 6 vol., p. 127-128

5 Que no vuelva a ocurrir lo que decía COUTURE de nuestra primera codificación procesal, tomada especialmente de España y de Francia, porque estos dos países "ordenaron sus constituciones mirando hacia el futuro y su procedimiento mirando hacia el pasado. Fue así que sus Código y los que de ellos derivaron, sufrieron un rápido envejecimiento" ("Las garantías constitucionales del proceso civil", n 31, en "Estudios de Derecho Procesal Civil", p. 93).

6 Acerca del deber de la doctrina procesal frente a los legisladores y con respecto al conjunto del ordenamiento jurídico, y. FAZZALARI, Elio, "Diffusione del processo e compiti della dottrina", separata de los Anales de la Fac. de Jurisprudencia de la Universidad de Perugia, ed. Padua, l960, especialmente n 8.

modo espontáneo o natural de actuación, (d) que facilita, acelera o mejora, logra, en condiciones más adecuadas o perfectas, tales metas.

3. Este último punto merece destacarse, por cuanto marca, ya en la misma naturaleza de la técnica aquí, de la técnica procesal, del proceso mismo, un sentido no de reiteración de conductas fijadas, sino de un modo mejor de realizarlas. Con la peculiaridad, ya señalada, que aquí no es la eficacia (lograr la meta) sino ésta, respetando, tomando en consideración, derechos (hombres) comprometidos, en lo que importa.

Vale decir, que toda norma proyectada es para que mejor pueda lograrse determinada finalidad y por ende, el perfeccionamiento sucesivo ulterior, más aún la sustitución de la misma para que más adecuadamente se obtenga tal meta, aparece como algo requerido por la misma naturaleza del instrumento: la continua reforma procesal, su cambio, su modificación, es una exigencia impuesta por el ser mismo del proceso.

4. Esto conduce, igualmente, a adoptar un criterio de avance claro y definido al realizar las opciones del caso, sin amedrentarnos por las dificultades a vencer que, naturalmente, serán muchas y teniendo en cuenta que los vientos —cuando no tormentas— de reforma, que soplan en América Latina, favorecen la realización de una transformación audaz, que por su tecnicismo y por afectar directamente a solo un núcleo limitado y técnico de profesionales del derecho (aunque indirectamente. a toda la población) como lo señalara Liebman, en las Ias. Jornadas, tiene más posibilidades de inmediata aplicación y puede' incluso convertirse en ejemplo para otras transformaciones no menos necesarias.

Debemos tomar conciencia —creemos que todos la tenemos— de que éste es el momento en el mundo y en América Latina de la renovación: no debemos dejarlo pasar en vano.

Alcance de las bases

A) Delimitación

Diferentes opciones se daban para la presentación de las Bases.

La 1ª que, naturalmente, hemos descartado, era redactar un pequeño 'anteproyecto' de Código Procesal. No era esta nuestra misión, sino la de proponer puntos de partida para una reflexión a nivel continental, sobre los principales problemas del proceso que nos son comunes, para llegar a algunas posibles determinaciones también comunes, o al menos, emanadas de la deliberación de todos.

También descartamos la 2 solución: solamente el enuncia do de los principios o de las opciones sobre los principios básicos para estructurar el proceso, prefiriendo la inclusión de los mismos en el texto, que si fuera el único tal vez no permitiría adentrarse en todos, lo cual sería imposible,

pero sí en algunos de los elementos que exigiría una ulterior redacción de normas que los tomara en cuenta[7].

La 3a fórmula, que hemos seguido, procura señalar los problemas que entendemos primarios, de acuerdo a los principios más generalmente admitidos y señalando una orientación opcional, que introduzca en la ulterior labor que habrá de continuar se, y. gr. recogiendo lo que se elabore en las jornadas, para formular un 2 Proyecto de Bases, definitivo, para ser circulado con tiempo y tratado en las VIas. Jornadas Latino-Americanas[8].

B) Algunas ideas sobre el contenido

Pueden anticiparse algunas de las ideas que se pretende concretar y aplicar en el desarrollo de las Bases.

1. El Juez es un sujeto de derecho esencialmente imparcial, que debe reunir particulares aptitudes en el ramo del Derecho y actuar con plena autoridad en el ejercicio de sus funciones.

2. Solo el abogado puede asistir o defender ante la Justicia, cualquiera sea la materia o la naturaleza del proceso; su presencia es indispensable en el mismo.

3. El poder jurisdiccional corresponde a todos los tribunales por igual.

La distribución de su alcance ha de inspirarse en razones de división de trabajo, por el número de asuntos especialmente, alguna especialización y, eventualmente, su modo de actuación (oral o escrito).

4. Todo sujeto debe tener libre acceso al Tribunal; todo derecho alegado ha de poder sustentarse por aquél y definirse y aplicarse por este el proceso es el medio fundamental para la afirmación de los derechos humanos y éstos deben también consagrarse en su programación[9].

---

7 Al 1.er Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal (Madrid,, 14-19 noviembre 1955), se presentaron dos informes generales de gran trascendencia científica de PRIETO CASTRO, Leonardo, "Principios políticos y técnicos para una ley uniforme" (en la publicación del "Instituto Español de Derecho Procesal", "Actas del ". p. 129-237) en materia procesal civil y GUASP, Jaime,, "El sistema de una ley procesal civil hispanoamericana (ibid. p. 23-125). Se adoptaron conclusiones, con sentido cien tífico y realista, como las propugnadas; vide Págs. 617-623.

8 Ver las Conclusiones cit. nota (7) y las expuestas por los dos in formantes. Cfr. el actual "Anteproyecto de Bases para el Código Procesal Civil" de ESPAÑA, en discusión desde 1966.

9 Sobré las garantías EN el proceso y sobre los procesos para garantizar los derechos fundamentales, hemos expresado nuestros puntos de vista, con referencias a la doctrina y al Derecho comparado, en VESCOVT Enrique, "La protección procesal de las garantías individuales en América Latina" (Rey. Fac. de Derecho y C. Sociales, Montevideo, cit. nota (4), P. 219-42); GELSI BIDART, Adolfo, "Proceso y garantías de derechos humanos en nuestra época de cambio" (ibid. p. 27-48). Véase la completísima reseña de FIX ZAMUDIO, Héctor, en cuanto a los problemas de la justicia constitucional: "25 años de evolución de la justicia constitucional 1940-1965", ed. UNAM, 1968; del mismo,

5. El proceso es una estructura de sujetos dispares y en él ha de reconocerse su actividad primordialmente conjunta y solo sucesiva cuando se trate de actos fundamentales y unilaterales de cada proceso (y. gr. demanda, contestación, sentencia).

A pesar de ello, se procurará la mayor coincidencia temporal de los mismos (preferencia de la audiencia sobre la actuación escrita y sucesiva); enfoque sintético y de conjunto.

6. La instrumentalidad del proceso, al servicio de todo el Derecho sustantivo, no implica diversidad de procesos, sino más bien su unificación; al proceso no tiene preferencia por una u otra materia, ni a ésta corresponde señalar las estructuras procesales, sino meramente sus necesidades (y. gr.: importancia de medidas provisionales o cautelares; necesidad de suma abreviación, etc.). Las soluciones son establecidas y brindadas por el Derecho Procesal.

El criterio ha de ser la reducción de las diversas formas de procesos, a su mínimo indispensable.

7. La reforma del proceso debe procurar su apertura a las posibilidades de la época, cuyos logros científicos deben tener amplia aceptación en el mismo; así, por Ej.: la 'apertura' de la prueba (todo elemento que sirva para demostrar la existencia de un hecho, ha de ser admitido); la colaboración de técnicos y' hombres de ciencia (asistentes sociales, consejeros matrimonia les para la conciliación, psicólogos, etc.); la racionalización del modo de operar de los tribunales, como si fuesen modernas empresas; la incorporación de medios actuales de fichaje y registro; etc.[10].

8. El proceso en los conflictos individuales y colectivos, nacionales o internacionales, se encuentra en este momento en una encrucijada fundamental para la 'lucha por el derecho', 'ne cives ad armae veniant'.

Para ello se hace indispensable su acercamiento a la vida cotidiana, de modo que las partes ingresen a él, como a un medio racional y comprensible para dilucidar sus derechos y sus posibilidades de real comunicación entre los sujetos del proceso, dando mayor flexibilidad y oportunidad para el intercambio entre el Juez y las partes.

9. Una de las mayores exigencias de nuestra época radica. en la abreviación de los trámites, en la obtención de un resultado relativamente rápido. El proceso actual no está a la altura del 'jet' (no hablemos del espacio) y no puede estarlo, porque en él no se trata de un pensamiento cristalizado

su ponencia a las IVas. Jornadas L. A. "La protección procesal de las garantías individuales en A. L." (Rey. Iberoamericana de D. Procesal, Madrid, 1967, n 3 p. 393-469).

10 En ese sentido, son de gran importancia para relevar el adecuado funcionamiento de la Justicia,, las investigaciones de sociología jurídica que realiza el "Comité de Investigaciones de Sociología del Derecho" del "Centro Nacional de Prevención y Defensa Social" (Milán), presidido aquel por' el Prof. TREVES, Renato, que• también trabajó durante años en América Latina.

en técnica, sino de un pensamiento que debe lograr elementos del pasado, para en base a su estudio determinarlos y realizar la estimación (jurídica) de las situaciones planteadas.

Pero cuando se piensa en la abreviación del proceso, se considera especialmente el tramo a seguir para llegar al 'judicio'; realizado aquél, éste (salvo en pocas situaciones de hechos muy complejos o en algunos problemas difíciles de derecho) se 'des prende' de dicha tramitación.

10. Para las partes, el proceso es un tránsito obligado pero que podría, en su mente ser prescindible, para llegar al cumplimiento o a la ejecución de la sentencia. La autoridad del Tribunal desaparece si esto no puede asegurarse y verificarse; el problema de la eficacia de la justicia es otro de los temas básicos de la reforma procesal"[11].

A continuación los profesores Gelsi Bidart y Vescovi proponían sus propias Bases, las cuales fueron sometidas a discusión y finalmente se les presta aprobación, luego de corregidas y adicionadas o suprimidas, por la totalidad de los participantes a las Jornadas de Bogotá y Cartagena de Indias, en 1970, de acuerdo al siguiente texto:

Bases para la preparación del Código Procesal Civil (Texto aprobado)

Tema 1. El problema de lentitud de los procesos y sus soluciones

1° La anormal duración del proceso comporta una denegación de justicia, por lo cual debe reducirse al mínimo posible. Sin embargo, la celeridad no debe traducirse en mengua del derecho de defensa ni de las garantías del debido proceso.

2° Debe procurarse la implantación del proceso oral como la solución más eficaz contra la excesiva duración del proceso penal, civil o laboral.

3° El número de jueces y de su personal subalterno debe ser proporcional a la cantidad de procesos que deban tramitarse en la respectiva circunscripción territorial, de manera que no se produzca un recargo de t que entorpezca su trámite normal.

4° El Estado debe suministrar los medios materiales suficientes y adecuados para la administración de la justicia en cada una de sus ramas.

5° Deben reducirse al mínimo las notificaciones persona1es o por cédulas, e implantarse como regla general la notificación por constancia secretarial, de acuerdo con el principio de que "las partes están a derecho" en el proceso con la primera notificación personal que reciban.

6° Los procesos especiales deben limitarse a los que no sea posible tramitar por los procedimientos comunes que se establezcan, sin perjudicar

11 Transcripción de las páginas 12 a 20 de la obra citada (nota n° 2)

su celeridad o los derechos sustanciales que en ellos se ventilen. Los de conocimiento plenario deben reducir a tres categorías: ordinario, abreviado o plenario rápido y sumario.

7° Los procesos contenciosos deben concluir con sentencia que produzcan efectos de cosa juzgada en cuanto a las cuestiones que fueron materia de aquella, teniéndose en cuenta los casos especiales de los procesos cautelares y en los que opere el principio rebus sic stantibus.

8° Debe imponerse la condena en costas por el solo hecho del vencimiento, en las diversas etapas del proceso. Cuando los apoderados o procuradores hayan actuado con temeridad o mala fe, tal condena debe ser solidaria para éstos y la parte que re presenten.

Siempre que en el proceso aparezca que una parte ha actuado con temeridad o mala fe, debe imponérsele la condena a indemnizar los perjuicios sufridos por la contraria; si tal conducta fuere del apoderado, se le debe imponer dicha condena solidariamente con la parte que represente, con derecho para la última a repetir contra aquel cuando no haya compartido esa conducta.

Para los efectos contemplados en esta conclusión, conviene que la ley procesal determine expresamente los casos en que debe considerarse que existe temeridad o mala fe.

9° El juez debe estar dotado de amplias facultades para declarar inadmisible la demanda, siempre que ésta carezca de los requisitos formales exigidos en la ley procesal, y para rechazarla cuando se ejercite una acción especial sujeta a término de caducidad y éste haya vencido.

10. El juez debe darle a la demanda el trámite que legal mente le corresponda, cuando el señalado en ella aparezca equivocado.

11. El impulso y la dirección del proceso debe corresponder al juez, y para que éste adopte oportunamente las decisiones pertinentes el secretario debe pasar al despacho los expedientes in mediatamente, sin necesidad de requerimiento de parte. El incumplimiento de este deber del secretario debe ser sancionado con multas por el juez, de las cuales debe responder éste en caso de no imponerlas.

12. El juez debe estar dotado, además, de las siguientes facultades:

a) Para citar de oficio a las personas que deban integrar el contradictorio, en casos de litisconsorcio necesario:

b) Para rechazar in limine la solicitud de intervención de terceros en los casos señalados en la conclusión novena:

c) Para decretar las medidas y prueba que persigan subsanar cualquier nulidad o impedir que se produzca, o evitar que se llegue a sentencia inhibitoria o formal.

d) Para declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas o insubsanables.

e) Para rechazar las pruebas inconducentes, impertinentes o innecesarias, siempre que disponga de elementos de juicio para ello.

f) Para rechazar in limine los incidentes que hayan sido propuestos antes por la misma causa que otro ya resuelto, o sean repetición de otro que se esté tramitando y cuando a pesar de fundamentarse en causa distinta ésta haya podido alegarse en uno anterior.

13. Es conveniente consagrar como deberes del juez los siguientes:

a) Utilizar las facultades oficiosas que la ley le otorgue para el más rápido trámite del proceso y su oportuno impulso:

b) Resolver dentro de los plazos que la ley señale.

c) Responder civilmente por los perjuicios causados a las partes por sus demoras injustificadas en proveer, para lo cual debe establecerse un procedimiento breve ante el correspondiente superior; sin perjuicio de la responsabilidad que le resulte por su dolo fraude, abuso de autoridad o error inexcusable.

14. Debe establecerse un sistema eficaz de vigilancia judicial y de sanciones disciplinarias a los jueces y secretarios que demoren injustificadamente el trámite de los procesos.

15. Los incidentes deben limitarse a los de excepciones previas o procesales, nulidades, recusaciones y acumulación de procesos. Quien promueva cualquiera de esos debe alegar todos los hechos en que podría fundarlo en ese momento; y debe declararse inadmisible el que posteriormente se pretenda iniciar con base en hechos que se dejaron de alegar en aquel.

El trámite de los incidentes debe ser independiente del pro ceso, salvo el de excepciones previas, que deberá proponerse durante el traslado para contestar la demanda y sin perjuicio de dicha contestación.

16. Restringir las causas de nulidad procesal a las que taxativamente señale la ley y a las que produzcan indefensión.

Los efectos de la nulidad deben extenderse únicamente al hecho que la produce y a los que de él dependan; su alegación debe reservarse a la parte perjudicada con tal vicio que no dio lugar a él, y su saneamiento implícito debe producirse cuando quien podría reclamarla actúe en el proceso sin alegarla, salvo que se trate de nulidades absolutas o insubsanables. Estas deben ser consagradas expresamente en la ley y podrán declararse de oficio.

Podrá alegarse la nulidad como excepción contra la ejecución de la sentencia o mediante acción posterior a aquella, únicamente por la parte que estuvo indebidamente representada o no fue legalmente citada, siempre que no haya tenido oportunidad para reclamarla en el respectivo proceso.

17. En los procesos que no sean de única instancia, debe reglamentarse el sistema de apelación así:

a) Establecer que sólo procede el recurso contra las sentencias y contra las resoluciones interlocutorias que expresamente se señalen en los respectivos Códigos procesales:

b) Asignarles a las apelaciones contra resoluciones interlocutorias el sólo efecto devolutivo siempre que sea posible, o el diferido que suspenda el cumplimiento de la providencia interlocutoria sin privar al a quo de competencia para continuar el trámite de la instancia:

c) Concentrar el trámite de las apelaciones en el efecto suspensivo en los procesos de conocimiento, en forma de remitir por una sola vez el expediente al superior, cuando el proceso se encuentre en situación de recibir sentencia, dejando al recurrente el derecho a pedir que se cambie el efecto de su recurso por el diferido o el solo devolutivo, si así lo prefiere.

d) Darle a la parte no apelante el derecho a adherirse a la apelación de la contraria.

e) Establecer el principio de la prohibición de la re formatio in pejus.

Tema II. Bases generales comunes para códigos latinoamericanos de Procedimiento Civil.

1° Debe establecerse un sistema de designación de los jueces que asegure su independencia, su capacidad y sus condiciones morales, y establecerse una carrera judicial que le dé seguridad, dignidad y adecuada remuneración, y que garantice su derecho al ascenso cuando cumpla los correspondientes requisitos, mediante el régimen de concurso si existe pluralidad de candidatos.

El Ministerio Público debe gozar de un estatuto similar al de los jueces.

2° Debe consagrarse la responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los jueces en el ejercicio de sus funciones, en los casos que la ley determine y mediante el correspondiente proceso.

3° Es conveniente que la política legislativa se oriente en el sentido de aumentar jueces mejor que funcionarios auxiliares, limitando éstos a los indispensables para formar un equipo de trabajo eficiente y subordinado al respectivo juez.

4° Debe consagrarse la defensa letrada obligatoria, excepto en los procesos de mínima cuantía cuando sea imposible obtener en el lugar la persona que la desempeñe.

5° Debe establecerse la responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión y su colegiación obligatoria en donde la Constitución lo permita.

6° Para la opción entre órganos unipersonales o colegiados debe tenerse en cuenta la tradición y las posibilidades presupuéstales de cada país. En los Tribunales colegiados la delegación de funciones debe limitarse a los casos expresamente autorizados por la ley, y en ningún caso

debe referirse al diligenciamiento de la prueba dentro del territorio de su jurisdicción. La distribución de los juzgados y tribunales debe hacerse de manera que sirvan adecuadamente a toda la población, evitando la exagerada concentración en las principales ciudades.

7° Los criterios de competencia deben orientarse a la mejor distribución de los asuntos y su más fácil y rápido trámite.

Solamente la competencia territorial será prorrogable en el pro ceso.

Es conveniente la división por materia (penal, civil y comercial, hacienda, contencioso-administrativa, laboral, de meno res) en cuanto permite la especialización de los jueces. La carrera judicial debe tener en cuenta la versación e inclinación de los jueces respecto de dichas materias.

8° Debe auspiciarse el proceso arbitral en instancia única y reconocerse al laudo valor de sentencia judicial; pero su ejecución debe estar reservado al órgano judicial. Es conveniente que 'la ley consagre un recurso de anulación contra el laudo arbitral, por vicios de forma y por violación del principio de la congruencia.

9° Los procedimientos garantizarán los derechos de las partes, otorgándoles oportunidad razonable para defenderse y hacer valer pruebas.

10. Debe asegurarse la efectiva igualdad de las partes en todas las actuaciones del proceso.

11. La iniciación de los procesos civiles debe someterse al principio dispositivo con las limitaciones que establezca la ley por razones de interés público.

12. Debe regularse lo relativo a la participación del Ministerio Público en el proceso.

13. El juez deberá examinar de oficio los presupuestos procesales, y las excepciones cuando la ley no exija su alegación por el demandado.

14. Es aconsejable consagrar una audiencia preliminar en la cual se intente la conciliación de las partes, se precisen los hechos en que haya desacuerdo o thema decidendum, y se depure el proceso de defectos mediante el despacho saneador u otras medidas procesales similares.

15. La prueba de testigos y el interrogatorio de las partes d recibirse siempre en audiencia oral; aquellos y estas deben ser interrogados libremente por el juez y las mismas partes, y el primero podrá someterlos a careos cuando lo estime conveniente.

16. Además de los medios de prueba que enumere la ley, podrán utilizarse los demás que sirvan a la formación del convencimiento del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por aquella, ni violen los derechos humanos o sean, contrarios a la moral o al orden público. El juez debe disponer de amplias facultades para decretar pruebas de oficio cuando las considere necesarias, pero si se trata de testigos es indispensable que aparezcan mencionados en cualquier acto del proceso.

La apreciación de las pruebas debe someterse únicamente a las reglas de sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos.

17. Las partes podrán disponer de sus derechos en el pro ceso y terminar éste en forma unilateral, bilateral o por convenio, según fuere el caso, salvo cuando se trate de derechos in disponibles.

18. La sentencia debe respetar el principio de la congruencia.

9. Deben consagrarse normas que impongan y hagan efectiva la moralidad del proceso, la lealtad, probidad y buena fe, y que excluyan el fraude procesal. El juez debe disponer de amplios poderes para sancionar la violación de los anteriores principios y el fraude procesal, sin perjuicio del derecho de defensa.

20. Debe procurarse la efectiva realización de los principios de publicidad, inmediación y concentración; para ello la oralidad resulta el sistema más eficaz.

21. La demanda y su contestación deben contener la indicación de las pruebas que se pretenda hacer valer y a ella se acompañarán los documentos en poder de la respectiva parte, sin perjuicio de presentarlos en la audiencia preliminar cuando esta exista. Tales actos deben ser escritos inclusive en los procesos orales.

22. En los procesos orales de única instancia o cuando pueda repetirse la prueba durante la segunda, se dejará simple constancia o resumen dirigido por el juez, con intervención de las partes, de lo que ocurra en las audiencias. Cuando se estime conveniente y ello sea posible, se utilizarán medios técnicos modernos de registración.

23. Las diligencias cautelares se realizarán con o sin notificación previa a la parte contraria, y con predominio del principio dispositivo o inquisitivo, según la naturaleza del proceso. Serán procedentes cuando resulte verosímil el interés legítimo de quien las pida y el peligro en la demora procesal. El pedido de revocación de la medida cautelar no debe suspenderla, mientras aquel no sea decidido favorablemente.

24. Se procurará reducir los procesos voluntarios al mínimo posible y unificar su procedimiento, otorgando los recursos que su naturaleza permita.

25. Deben unificarse los procedimientos concursales, con excepción del régimen penal de la quiebra.

26. La ejecución debe ser tramitada por un juez, con audiencia de las partes en forma que permita el ejercicio del derecho de defensa al ejecutado, contemplando las diversas clases de obligaciones, mediante el concurso de auxiliares designados por el juez debiéndose adoptar las necesarias medidas de aseguramiento.

27. Deben unificarse y simplificarse los recursos, y consagrarse el de queja por denegación de apelación o casación.

28. Debe establecerse el principio de la doble instancia, con excepciones limitadas a ciertos tipos de procesos sumarios.

29. Conviene establecer la casación con alcance nacional, en países organizados políticamente como federaciones.

El recurso no debe suspender el cumplimiento de la sentencia, salvo que el recurrente otorgue caución que garantice el pago de los perjuicios que la demora del proceso pueda causar aparte contraria y de las costas.

Debe limitarse el reenvío al caso de casación por quebrantamiento de forma.

30. Debe consagrarse un recurso extraordinario de revisión, una acción independiente similar, que permita revisar la sentencia ejecutoria con valor de cosa juzgada por causas expresa mente establecidas, entre las cuales debe figurar el fraude procesal, la colusión o el dolo del juez, el haberse basado la sentencia en pruebas declaradas falsas por sentencia penal, la violación de una cosa juzgada anterior cuando no se tuvo oportunidad para alegarla en el proceso y la nulidad por falta de citación o indebida representación en la misma hipótesis.

31. Debe reglamentarse la asistencia judicial internacional para el diligenciamiento de pruebas, comunicaciones y medidas cautelares, en las mismas condiciones establecidas para el derecho interno por el tribunal o juez requerido.

32. El reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros debe ser reglamentado de acuerdo con los tratados internacionales.

33. Debe consagrarse el principio de la gratuidad de la justicia. Si se establecieren tasas fiscales, éstas no deben constituir obstáculos para la impugnación de las resoluciones judiciales, ni ser causa de deserción o clausura del proceso. Dichas tasas deben reducirse al mínimo y ser proporcionales al monto del asunto de modo que no constituyan una grave dificultad para utilizar el proceso.

34. Quien carezca de medios económicos para atender a los gastos del proceso debe recibir el amparo o beneficio o pobreza, que incluirá el patrocinio judicial gratuito a través de los Colegios de Abogados o por designación del mismo juez de la causa cuando aquellos no existan, o por otro sistema que de igual resultado.

ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL MODELO PARA IBEROAMÉRICA. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los principios rectores

Oral y proceso por audiencia

El proyecto se afilia al sistema de ora conforme a lo dispuesto por las Bases (Tema 1, Base 2 y Tema II, Base n 20).

La oralidad, por la cual se han inclinado la mayoría de los procesalistas iberoamericanos, no sin alguna discrepancia[12], es entendida en el sentido general[13], aunque, en puridad, se plantea un proceso mixto, porque

12 El tema de la oralidad, pese a ser inagotable, ha sido considerado como superado por los procesalistas iberoamericanos, pronunciándose a favor del sistema,, mejor del proceso por audiencia de tipo mixto, como resulta de las Bases, cuyas directivas fueron recogidas en el Anteproyecto que e presenta a consideración del Instituto.

Parece esta, por otra parte, ser la tendencia que progresa en el área. Las últimas reformas de México (Código del Distrito Federal) y de España de 1985 y 1984, respectivamente, se orientan en ese sentido, aunque toda vía tímidamente. En efecto, en España la comparecencia establecida por los arts. 691 y ss., de la Ley de Reforma Urgente (6/8/984) implica — según la autorizada opinión de Víctor Fairén Guillén— incorporar la audiencia preliminar, aunque sea para determinados asuntos (La Ley de Reforma Urgen te de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Juicios de menor cuantía. Casación y otros aspectos fundamentales de la ley de 6 de agosto de 1984. Madrid 1985, p. 236).

En todo caso el tema de la oralidad tiene una amplia bibliografía, de la que resulta, casi unánimemente, la aprobación de la inclusión de este sistema en las nuevas legislaciones propuestas.

CAPPELLETTI, M. "Procédure Orale et Procédur8 Ecrite" Milano, 1971. Social and political aspects of civil procedure. Reforms and trends in Western and Eastern Europe, en Michigan L. Rv. vol., 69, n° 5, P. 847 y ss. diversos trabajos publicados en Buenos Aires (1973), bajo el título "La oralidad y las pruebas en el proceso civil".

PRIETO CASTRO, "Estudios y Comentarios para la teoría y la práctica procesal civil". Madrid, 1950 y Trabajos y orientaciones en Derecho Procesal. Madrid, 1964.

MONTERO AROCA, J.,, y ORTELLS RAMOS M., "Derecho Jurisdiccional", 1. Parte General, espec. p. 423/437. VESCOVI, Enrique. "Perspectivas de oralidad". Rey. Argentina Derecho Procesal,, 1972, p. 507; *infra*, nota n 49.

13 La oralidad significa, en este enfoque, un cierto tipo de procedimiento que se opone a aquel que aparece en el área iberoamericana (dentro de la familia del civil law en el que aparece un absoluto predominio de la escritura. Según Mauro Cappelletti, este proceso tiene varias características las cuales, generalmente aparecen relacionadas íntimamente y que son las que distinguieron al proceso común (romano-canónico). En primer lugar es el de la escritura, presidido por el principio de que quod non est in acto non est in mundo; en segundo lugar la ausencia de todo contacto di recto entre el juez y las partes y también los peritos y testigos o toda otra fuente de información como lugares y cosas. El tercer carácter es el criterio de apreciación legal de la prueba (o prueba tasada), quitándole al juzgador toda posibilidad de buscar por sí la verdad. El cuarto

no se trata de perder los beneficios y virtudes de la escritura. Y es así que, fuera de la prueba documental, cuyo valor resultará tan esencial como establecen los Derechos de fondo, en el proceso planeado, son escritos, la etapa de proposición y la de recursos. Es así que es escrita la demanda, la contestación (en sentido amplio de contradicción, excepciones y defensas) y la reconvención en su caso, 'la interposición y fundamentación de los recursos y la contestación a la expresión de agravios (etc.).

Lo que sucede es que se sigue un modelo de proceso por audiencia, como veremos más adelante realizar los actos en forma conjunta; los diversos tramos del proceso, concentrando su actuación.

La audiencia aparece, entonces, como elemento central del proceso. Y en especial cabe destacar la audiencia preliminar que analizamos más adelante. La audiencia se concreta a través de la reunión de los tres sujetos esenciales del proceso (el Tribunal y las partes), la forma natural de realizarse esta, conforme a su propia manera de ser: "actum triarurn personae". Lo cual supone

Esta actuación, relativamente contemporánea, por la reunión de quienes protagonizan el proceso, permite el intercambio, la ratificación y la más fácil descripción (y comprensión) del pasado, que importa y es trascendente, con las narraciones, muchas veces complementarias a través de pedidos de aclaraciones), aun con las ineludibles contradicciones

Ese proceso oral es el de hablar y oír (audire-audiencia), que constituyen los modos naturales y concurrentes de desenvolvimiento.

Vale decir la oralidad, no como punto de partida, sino como consecuencia de la necesaria presencia —co-presencia— de los sujetos en la audiencia. Por eso ya decía la Base n 20: "Debe procurarse la efectiva realización de los principios de publicidad, inmediación y concentración y para ello la oralidad resulta el sistema más eficaz".

No resulta, de tal modo, explicable, que quienes proclaman la necesidad de que en el proceso se cumplan dichos principios, no sean partidarios de la oralidad (Infra nota n 14).

¿Por qué cuando se quiere priorizar un procedimiento para hacer lo mejor, como sucede con los llamados procesos sociales, se proclama la

carácter es el de la realización del procedimiento en etapas separadas y clausuradas por términos preclusivos en las cuales se va desarrollando el trámite. Las escrituras— provocan las contra-escrituras, dice el maestro florentino, que se van escalonando en un interminable lapso provocando la excesiva duración del trámite (Procédure orale et procécfure écrite, Milano, 1971. También "Social and political aspects of civil procedure. Reforms and trends in Western and Eastern Enrope", en Michigan Law Review. Vol. 69. Núm. t. apr. 1971. pp. 847 y ss. También en Processo e ideologie, Bologna, 1969, etc.).

necesidad de la inmediación, concentración, publicidad, abreviación y oralidad y, en cambio, no se reclaman t mejoras para toda la Justicia?[14].

Además el proceso oral (por audiencia), como se planea, es el único que permite el efectivo acceso a la Justicia, que hoy se reclama insistentemente para el cumplimiento del fin social de dicho' proceso. En especial el acceso de aquellos que por su condición económica y cultural no están en condiciones de afrontar los costos, los formalismos, y la duración excesiva de un proceso "escrito"[15].

Buscamos de esta manera revertir el sistema actual de pro ceso escrito en Iberoamérica, "desesperantemente escrito" como lo calificara Couture, lento, pesado, burocrático, alejado de la realidad. Se trata del régimen procesal derivado del Bajo Imperio, modificado por el Derecho intermedio romano-canónico vigente en la época colonial que heredamos, hace más de un siglo, con ya varios de atraso. En efecto España en su legislación procesal quedó en retraso en Europa, en su época y es así que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que nos inspiramos[16], al haber sido rechazado

14 Efectivamente, tanto los laboralistas, los agraristas, los especialistas en menores o familia reclaman para esos procesos, que consideran esenciales y procuran sean eficaces, abreviados y bien organizados, la concentración, la oralidad, la publicidad y la inmediación. Y,, en esto, participan todos los procesalistas,, dentro de los cuales algunos admiten este tipo de procesos especiales, otros reclaman esas virtudes para todos los procesos. Peras lo que no resulta discutible es que dichos principios son favorables para la existencia de un proceso más eficaz.

Y de lo que no cabe duda es que solo en el proceso oral (y en el pro ceso por audiencia proyectado) es que se realiza o puede cumplirse con la concentración, la inmediación y la 'publicidad, entre otros principios (Sin entrar a tocar el tema de la abreviación, para no abrir la polémica).

15 La duración del proceso se analiza hoy, no solo en términos de tiempo, sino de costo, señalando que ese factor (excesivo gasto) conspira contra el acceso popular a la Justicia, por la que tanto luchamos en la época contemporánea.

Más ampliamente: CAPPELLETTI, M., FORDLEY, 3, y ROHSNON E., Towarcl Equal Justice. A coinparative study of legal aid in Modern SocieUe, k \r Proyecto de Florencia. Más sintéticamente: CAPPELLETTI, M., y GARTU.B., El acceso a la Justicia. La Plata, 1983 y bibliografía allí citada.

El tema ha tenido amplia difusión y ha sido objeto de tratamiento en diversos Congresos, en los que han participado la mayoría de los procesa listas iberoamericanos presentando trabajos e informes.

Se reproducirá, dentro de un marco diferente, en 'las próximas Jornadas de Rio de Janeiro, en el tratamiento del tema de la Eficacia de la Justicia.

16 No hay duda que todos nuestros códigos latinoamericanos surgen de la misma fuente y si algunos son anteriores a la Ley de Enjuiciamiento Civil (Bolivia, Colombia, etc.) igualmente se inspiran en el mismo sistema (La Partida III, con su régimen romano-canónico de procedimiento escrito). Por eso somos colocados, desde el punto de vista procesal en la misma "familia" por los comparatistas. René David, entre otros).

el proyecto del Marqués de Gerona[17], ha ce que, en mayor o menor medida, por lo menos en la práctica judicial de nuestro sub-continente, padezcamos de ese viejo y anticuado sistema.

Respecto del cual existe una unánime intención de modernizar y modificar en sus estructuras y a fondo.

Principio dispositivo o inquisitivo; papel del juzgador en materia de prueba

Una clara tendencia de este Anteproyecto, coherente con el sistema de proceso oral (por audiencia), es el aumento de las facultades del Tribunal lo que, a nuestro juicio, no altera el principio dispositivo, el cual continua rigiendo con atenuaciones[18]. En efecto, sigue en vigor el principio (sub-principio) de que el proceso solo se inicia a iniciativa de parte (ne proceda index ex oficio), que las partes mantienen la disposición de los actos procesales y del proceso mismo, que se mantiene el principio de congruencia, según el cual el Tribunal no puede fallar más allá de lo pedido por 'las partes (ultra petita), ni fuera de lo litigado (extra petita), ni dejar de fallar lo pedido (citra petita) y el de segunda instancia, además, en los límites de lo apelado.

En cambio, reiteramos, en cuanto al principio relacionado con los poderes del Juez, podemos decir que debe fallar "secundum alle gata", pero no "secundum probata" Es decir que, desde hace tiempo, el procesalismo iberoamericano ha distinguido —aun dentro del proceso dispositivo— la disposición del derecho de fondo y la de los derechos procesales[19], lo que significa llevar hasta sus últimas consecuencias la diferencia entre derecho y acción. Y en tal virtud, considerar a la relación al proceso mismo y a

17 Nos referimos a la "Instrucción del procedimiento civil con respecto a la Real Jurisdicción Ordinaria" del marqués de Gerona, aprobada en 1853 y que se derogó de inmediato por escollar contra la incomprensión de sus contemporáneos, especialmente jueces y abogados, una de las clases más conservadoras de la sociedad.

Este acontecimiento histórico que impidió la evolución en España y sus Colonias en materia procesal, reviste mucha importancia y debemos evitar que se repita.

18 Esa es la opinión predominante en Iberoamérica. No obstante algunos importantes autores (como H. Devis Echandía) sostienen que lo que se incorpora es el principio inquisitivo, dados los poderes del Tribunal en materia probatoria.

En todo caso no interesa la diferencia semántica, lo importante son las normas proyectadas al respecto en las que existe un importante consenso.

19 Una clara demostración de esto lo constituyen las conclusiones a las que se llegó en las IVas. Jornadas (Caracas, Valencia, 1967) y los importantes trabajos presentados sobre el tema publicados en Rey. Iber. Derecho Procesal, 1967, n.º 4.

la averiguación jurídica de la verdad o falsedad de los hechos alegados por las partes[20].

En el régimen vigente iberoamericano existen facultades probatorias del Tribunal, pero las mismas, dentro del contexto del sistema en vigor, no han podido cumplir con los objetivos pro puestos originalmente.

El primer instituto que contienen todos los códigos de nuestra Latinoamérica, siguiendo el régimen español, es el de las diligencias para mejor proveer.

Este instituto, estudiado ampliamente por la doctrina de nuestra área[21], constituye la iniciativa probatoria, casi exclusiva, en los Códigos de corte clásicos, los que consideran al Tribunal simple espectador en el proceso.

Los más modernos, siguiendo el Código italiano de 1940, agregan la facultad del Juez de buscar la verdad, para lo cual se le; faculta a interrogar testigos, partes o inspeccionar cosas o documentos que pertenezcan a estos o a terceros. México, 1932. Código del Distrito Federal, art. 278/279; Argentina, ley 14.237 y Código de la Nación, art. 452; Brasil, art. 342; Colombia, arts. 179, 180, 243 y 244; Cuba art. 243; etc. También aparecen es tas facultades en casi toda el área en los llamados procesos sociales (menores, agrario, laboral, etc.).

Sin embargo y pese a esta normativa, debemos decir que los jueces utilizan en forma escasa este tipo de poderes, lo que resulta una constante —dada la tendencia universal en ese sentido— pero, sobre todo, porque dentro de un proceso escrito, fraccionado en etapas, y sin inmediación, ello no es posible. Las diligencias para mejor proveer, de uso excepcional, son miradas con desconfianza por as partes y los propios juzgadores dentro del régimen procesal en el cual las pruebas son iniciativa del actor y demandado. Y, en cuanto a las facultades más modernas, ¿cómo va a decretar pruebas en la etapa correspondiente el Tribunal que no conoce el proceso? Y ¿cómo va a rechazar una prueba por inconducente o porque refiere a un hecho reconocido ese Tribunal?

Por todo ello, el aumento de las facultades del Tribunal se proyecta, dentro del nuevo proceso por audiencia, con un Juez director del proceso, el cual conoce después de su iniciación para actuar en la audiencia como protagonista, junto a las partes.

Nos ha parecido la mejor forma de expresar esta orientación transcribir la Exposición de Motivos de uno de los Proyectos últimos de reformas

20 Más ampliamente: RODRIGUEZ U. J., Autoridxid del Juez y principio dispositivo. Con prólogo de ALCALA ZAMORA, N., Valencia (Venezuela) 1968.

21 COUTURE. J., Teoría de las diligencias para proveer. Montevideo, 1932, SENTIS MELENDO, S., Medidas para mejor proveer, en Enciclopedia Omeba y amplia bibliografía allí citada.

a la Ley de Enjuiciamiento Civil española, parte de cuyo articulado fuera aprobada en la Ley de reformas urgentes de 1984 y que concuerdan con nuestras orientaciones:

El abstencionismo judicial ha sido uno de los más acusa dos mitos procesales. Tanto la teoría como la práctica, han puesto de relieve que los presupuestos de independencia e imparcialidad no juegan en función de la no intervención judicial en la dirección del proceso. El fin, supremo del proceso es procurar justicia, para cuya garantía se estima esencial un sistema que se asiente en la independencia y en la imparcialidad. Ahora bien, es notorio que la pasividad judicial habilita evidentes deformaciones procesales en cuanto en el libre juego de las partes prevalezca la arbitrariedad habilidosa de alguna de ellas. El abstencionismo del Juez es la fórmula ingenua de tolerar pacíficamente contiendas con equilibrio teórico, pero con desequilibrio práctico y medio decepcionante de utilizar la valiosa energía del proceso en empeños carentes, en ocasiones, de las más elementales justificaciones. El prevalecimiento de la justicia individual y social reclaman que el Juez intervenga en la dirección del proceso en el grado, sin rebasarlo, que requieran su economía y su eficacia, ordenadas al fin supremo de justicia. La reforma se encamina a infundir ese cambio ideológico en nuestro enjuiciamiento, reforzando extraordinariamente la función y autoridad del Juez, para que sin dejar de ser el árbitro imparcial de la contienda, que es el proceso, se convierta en el verdadero rector del mismo, que Lo encauce y oriente al descubrimiento de la verdad.

La magistratura en la nueva organización

Los procesalistas iberoamericanos tienen muy clara la idea de que en todo proceso, y en especial en el proyectado, donde el protagonismo del Tribunal resulta esencial, la figura del Juez deviene la principal, en la cual se asienta la reforma estructural de nuestra Justicia.

Es decir que si bien resulta importante la infraestructura (locales, maquinarias, que acerquen al Poder Judicial las nuevas técnicas) y los mejores códigos, todo ello no cumplirá nuestros objetivos sin buenos jueces.

Por eso y por la necesidad, entre otras condiciones, de un sensible aumento del número de jueces, estamos reclamando, como principio, la fijación —de ser posible por norma, como en Costa Rica, constitucional— de un porcentaje fijo en el Presupuesto del Estado para el Poder Judicial; la creación de Escuelas de la Judicatura que permitan una estricta selección de los que ingresan a la carrera (de jueces o del Ministerio Público) y mejoramiento (reciclaje) de los existentes. Así como el reconocimiento de la carrera judicial, sin perjuicio del caso excepcional —pero obligatorio dentro de límites prefijados o no— de ingreso de abogados de capacidad

y experiencia desde fuera, tal como lo establecen los sistemas de Brasil (quinto constitucional) y España, entre otros.

Naturalmente que el Anteproyecto de Código de Proceso no contiene dicha regulación que corresponde —fuera de las normas constitucionales— a la Ley Orgánica, la cual debe adecuarse a las particularidades de los países y regiones, pero se han establecido algunos principios (orientaciones) que marcan la ineludible relación entre dicho Código y el Tribunal y sus integrantes que, reiteramos, son la base fundamental (humana) de toda reforma judicial de fondo como la que aspiramos para los países de Iberoamérica.

La necesidad de la más correcta selección de jueces, es el pivot del sistema judicial en general, con más razón en este, don' de se aumentan las facultades del Tribunal y se procura, por todos los medios, de hacer efectiva la inmediación, que si tuviéramos que elegir (lo que no sucede) diríamos que es el más importante de los principios propuestos.

Por eso se rechaza toda forma de delegación. Cada sujeto del proceso ha de realizar por sí mismo los actos procesales que le corresponden y no delegarlos en otro (indelegabilidad).

El Tribunal (todo y no el instructor, figura que no existe en el Anteproyecto) debe estar presente en la audiencia, la comunicación entre los sujetos del proceso también ha de ser directa, inmediata, sin intermediarios.

Dicha indelegabilidad se proyecta en los órganos colegiados, donde no solo no hay un magistrado con mayores poderes (salvo las funciones de representación del Presidente) sino que en la deliberación y preparación del voto y emisión de este, no se permite, tampoco, el trabajo por uno y la adhesión de otros (magistrados ponentes, relatores, etc.) tratándose, por todos los medios, de que se cumpla a cabalidad con el principio de la colegialidad.

La consecuencia de este aumento de los poderes de los jueces y la búsqueda de rodearlos de todas las garantías para su mejor desempeño de la tan trascendente tarea (condiciones materiales, remuneraciones, prestaciones sociales, vivienda, etc., así como la total independencia) es la de establecer la responsabilidad, tema sobre el cual la ley orgánica debe considerar con especial atención. En el Anteproyecto solo se señala esta responsabilidad en varios casos, inclusive por fallar con error inexcusable, y se hace una mera referencia al proceso por dicha responsabilidad dado que, también este, es tema de la Ley Orgánica.

Volveremos sobre este tema al estudiar los poderes, deberes y responsabilidad del Juez y de las pares en el nuevo proceso.

Caracteres principales de los nuevos procesos proyectados para el Código Modelo. El Proceso Monitorio

En cuanto al proceso de conocimiento (y en los demás, en lo pertinente se adopta un proceso mixto, con demanda y contestación escritas, así como se utiliza también la escritura respecto de los principales medios impugnativos, salvo los que se plantean en la audiencia.

Sin embargo, el núcleo del proceso se desarrolla a través de la audiencia. En el proceso ordinario (plenario, de conocimiento) mediante una preliminar y otra final para desahogo de las pruebas —algunas de las cuales se adelantaron ya— alegatos y sentencia. En los procesos plenarios rápidos (sumarios) a través de una sola audiencia que concentra las dos anteriormente mencionadas (el tema será desarrollado especialmente más adelante).

En los demás se ha tratado de seguir el mismo esquema.

En el compromiso de señalar alguno de entre estos como de mayor interés, nos queremos referir al proceso monitorio. Por qué incluir un proceso plenario rápido (sumario) o uno más abreviado (sumarísimo) o uno de ejecución y otro ejecutivo, un modelo para la jurisdicción voluntaria y otro para los procesos de ejecución universal (quiebra y concurso) no representa mayor novedad.

El proceso monitorio adoptado inclusive para el juicio ejecutivo en el Anteproyecto de Código Modelo para Iberoamérica sí constituye una novedad y resulta polémico, por lo cual nos permitiremos hacer una breve referencia al mismo.

Este proceso o, más precisamente, la estructura monitoria, ge propone no sólo para la ejecución de los títulos extrajudiciales (títulos ejecutivos) sino también para los judiciales (sentencias). Y no sólo para este juicio, sino para varios otros que pueden adoptar, con ventajas, esa estructura, tales como el desalojo (desahucio), entrega de la cosa, entrega de la herencia, escrituración judicial (derivada de promesa de compraventa, por ejemplo, etc.).

Resulta, como sabemos, discutible, el origen de este proceso, aun cuando parece iniciarse en la Italia Comunal del Siglo XIII[22], con perfiles determinados y con el fin fundamental de acelerar el cobro de determi-

22 Más ampliamente: CALAMANDREI, P. El procedimiento monitorio. EJEA Buenos Aires, 1953. GUTIERREZ ALVIZ, F. y CONRADI. EL procedimiento monitorio: Estudio de Derecho comparado. Sevilla, 1972. esp. p. 16 y ss. FAIREN GUILLEN. Y., El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Barcelona, 1953, esp. pp. 42 y ss TOMAS y VALIENTE F., "Estudio histórico jurídico del proceso monitorio", en: Revista Iber. de Derecho Procesal, 1966, p. 50. VESCOVI E., TORELLO, L., y VIERA, L. A. "La reforma del proceso ejecutivo para Iberoamérica: la adopción del procedimiento de estructura monitoria" en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1978, p. 462.

nados documentos[23]. El régimen se desarrolla en los países europeos[24] y también en alguno de Latinoamérica como sucede en Uruguay[25]. Lo hemos propiciado como solución para el Derecho latinoamericano, tanto para algún país en particular[26] como para el Anteproyecto de Código Modelo para Iberoamérica[27].

23 Entre tales procedimientos se destacan el denominado inicialmente praeceptum o mandatum de solvendo con cláusula justificativa que luego se denominaría monitorio. El procedimiento se inicia con una orden del juez para pagar o hacer alguna cosa, emanada sin previa cognición (o cognición muy sumaria) lo cual se justifica con la cláusula del documento. En virtud ella caben dos posibilidades: el intimado no comparece y entonces el mandato queda confirmado, pasa en cosa juzgada,, o el deudor se presenta y por ese sólo hecho deben seguirse las ritualidades del juicio ordinario. En todo caso hay una diferencia entre los procesos sumarios comunes (plenarios rápidos) y estos especiales, si es que deben merecer la categorización (de sumarios).

24 En Alemania se señala el procedimiento monitorio (mahnverfah ren) y el documental (urkunderverfahren) regulados el primero en los artículos 688-703 de la ZPO alemana y el segundo en los artículos 502-600; en Italia existe el procedimiento de iniuzione (injucción) (artículos 633 a 656 del CPC). En Austria se tiende a una solución similar, en la última reforma, permitiendo que, en caso de rebeldía, se dicte una sentencia sobre el fondo.

25 En Uruguay, desde la aprobación del Código de Procedimiento Civil (1877) se incluyen en esta categoría el juicio de entrega de la cosa (de dar cosa cierta y determinada, derivada de un contrato en el cual el actor demuestre haber cumplido por su parte, como puede ser la compraventa); la entrega efectiva de la herencia (a la que obste alguna persona frente al heredero declarado).

Posteriormente, en 1927 la 'ley de desalojos admitió este juicio para el desalojo, previendo la posibilidad de intimar el desalojo y citar de excepciones tanto al vencimiento del contrato como en el caso de mal pagador, intimado el pago.

En 1965 se incluyó para el juicio ejecutivo. También la jurisprudencia entiende que corresponde para la resolución de la promesa de compraventa de inmuebles (verificado también el incumplimiento) (ley de 1837 número 9.706) y la ley 14.219 para rebaja del alquiler (también probados documentalmente los supuestos del ingreso del arrendatario).

Más ampliamente: ARLAS J., "El proceso monitorio en el Derecho uruguayo" en Rey. DJA, t. 5& p. 63. VESCOVI, Enrique, "El proceso moni tono", en Revista de Derecho Procesal (mexicana), Año 4, números 4 a 6, p. 89). TEITELBAUM, J., "El proceso monitorio uruguayo", en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1977, p. 27.

26 En el trabajo sobre "Conveniencia de reformar el sistema argentino en materia del juicio ejecutivo presentado a]. XII Congreso Nacional Argentino de Derecho Procesal" (Rosario de Santa Fe, mayo de 1983) lo pro poníamos, junto con los profesores. Torello y Viera,, como solución para el proceso ejecutivo en la República Argentina.

27 Así, en el libro de Homenaje a Jaime Guasp (Madrid, 1984) en el trabajo que escribimos sobre: "La reforma del proceso ejecutivo para Iberoamérica: la adopción del proceso de estructura monitoria".

Este procedimiento propuesto —inclusive para la formación de ciertos títulos ejecutivos[28]— consiste en que presentado el documento o los elementos constitutivos y que demuestran la fundabilidad de la pretensión[29], el Juez verifica los presupuestos generales (capacidad, legitimación, competencia, etc.) y los especiales (en el juicio ejecutivo la existencia del título, en la entrega de la cosa que surge de un contrato, en el cual el actor demuestra haber cumplido, por ej. en el desalojo, el vencimiento del plazo, la falta de pago, etc.) y acoge la demanda mediante una sentencia (cuya naturaleza no interesa dilucidar aquí)[30].

La misma sentencia dispone un emplazamiento (o citación de excepciones al demandado) para comparecer y oponerse a la demanda. En caso de que no lo haga en el término perentorio establecido, la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada y el juicio queda terminado.

28 Así se ha sostenido en el Derecho uruguayo que el proceso ejecutivo es de conocimiento y no de ejecución por parte de la doctrina que no compartimos y, en ese caso, se concluye en que el monitorio también lo sería de conocimiento ya que el título ejecutivo no preexiste al proceso, si no que se forma dentro del mismo (Al menos luego de cumplida la intimación de pago, requisito previo en el Derecho uruguayo) (TEITELBAUM, J. Adopción de procesos monitorios para obtener otros títulos ejecutivos. Ponencia al XIII Congreso Nacional Argentino de Derecho Procesal y IV Encuentro Panamericano (Mar del Plata, Octubre de 1985).

29 En el monitorio documental, como lo sería el juicio ejecutivo en Uruguay, mediante la presentación del título, el juez verifica el (o los) documentos; más compleja es la situación en el no documental (en el que algunos sostienen que se forma el título dentro del monitorio), pero es preferible verificar, igualmente, la exigencia de ciertos supuestos que permiten al tribunal, mediante una cognitio sumaria, dictar su sentencia y luego citar de excepciones.

30 Así en nuestro Derecho se discute si la sentencia inicial es definitiva o interlocutoria. Lo esencial es que, en todo caso, el actor podrá impugnar la resolución judicial mediante los recursos (especialmente el de apelación) mientras que para el demandado la única forma de impugnación. es a través de las excepciones. Pongamos el ejemplo de la norma que rige el juicio ejecutivo en Uruguay y que dispone:

Ley número 13.355 artículo 53; "Cuando se pida la ejecución en virtud de alguno de los títulos que la aparejan, el juez decretará inmediatamente el embargo y mandará llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectiva. la cantidad reclamada, los intereses, costas y costos. Si no considerase bastante el documento declarará que no hay lugar a la ejecución. Una y otra cosa sin noticia del deudor. En el mismo auto que decrete el embargo citará de excepciones al ejecutado. Si se opusieren excepciones se procederá de conformidad con lo dispuesto por los artículos 889. y Ss. CPC" (Es decir traslado al ejecutante, apertura a prueba, si corresponde y sentencia apelable).

En las estadísticas obtenidas en algunos años los casos en que no se opusieron excepciones alcanzaron al 80%.

La experiencia, al menos la uruguaya, demuestra que si el Juez cumple normalmente su función verificadora[31], en un 80% de los juicios no se oponen excepciones, lo que significa que el proceso termina con un escrito y una providencia judicial.

Por el contrario si el demandado comparece y opone excepciones (defensas) se confiere traslado de ellas al actor, se abre a prueba y se siguen las ritualidades del juicio ordinario, u ordinario abreviado. Es decir que se invierte la regla del contradictorio, el cual aparece como eventual, condicionado a la comparecencia del demandado y a la oposición de sus excepciones que, según los juicios, pueden aparecer como limitadas por la ley en atención a la presunción de autenticidad que, normalmente, emana de los documentos (en el monitorio documental).

Es decir que se diseña un tipo de proceso sumamente abreviado, sin desconocer las esenciales garantías de la defensa en juicio.

Los poderes, deberes y responsabilidades del Juez y de las partes

Reiteremos que, en orden a este tema, el Código Modelo sigue la tendencia moderna de aumento de los poderes del juzgador convirtiéndolo en el verdadero director del proceso[32].

Nos afiliamos así a la tendencia universal, que va predominando en todos los más modernos códigos, como sucede con los del área incluidas las últimas reformas de los códigos de España, México y Venezuela.

No ignoramos los riesgos que ese aumento de poderes del tribunal puede aparejar; pero, por un lado, estamos dispuestos a asumirlos como un

31 Es elemental que se parte de la base de que el tribunal cumple su función y que es el propio juez —no el Secretario— que provee esta de manda que conduce a una sentencia inmediata. Y que, naturalmente quien verifique los presupuestos. Entre otros el de la debida citación y emplaza miento del demandado. Lo que, por otra parte, es lo que debe hacer en to dos los casos. Al efecto establece el nuevo régimen mexicano del CPCDF:

Artículo 47: "El juez examinará de oficio la legitimación procesal de las partes Artículo 271, "Para hacer la declaración de rebeldía, el juez examinará escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones precedentes están hechas al demandado en la forma legal... Si el juez encontrare que el emplazamiento no se hizo correcta mente mandará reponerlo…

Verificados correctamente los presupuestos de los cuales emana una fuerte presunción de la razón del demandante nada impide que se diete una sentencia de acogimiento condicionada (a que el demandado no deduzca sus defensas o excepciones).

32 El inolvidable maestro Niceto Alcalá_Zamora y Castillo, propiciaba esta posición del juzgador en el proceso, señalando que entre la figura de juez-dictador y el juez espectador debía organizarse el procedimiento de modo que no fuera ni lo uno ni otro, sino el verdadero director. Es decir que lo que se propicia es que, junto a las partes, el juez asuma un rol protagónico en el proceso que, como decía Carnelutti, siguiendo al autor medieval Búlgaro es, en definitiva actum personae.

intento para mejorar, nuestro tan deficiente proceso y, por el otro, ello no significa desconocer los derechos y garantías que se acuerdan a las partes, incluyendo la posible responsabilidad judicial, como contrapartida.

Recordemos por otra parte, como ya lo decía Calamandrei, que el problema práctico no ha sido el abuso de los poderes otorgados a los jueces por los nuevos códigos (se refería, natural mente, a los de la primera mitad del siglo XX), sino justamente a lo contrario, esto es, a la resistencia de los jueces a utilizar efectivamente esos poderes. Esto es a los pocos casos en los cuales los jueces han hecho uso de sus nuevos poderes y las escasas denuncias de arbitrariedad que con tal motivo se pueden señalar. Inclusive se han tomado medidas expresas para que los tribunales cumplan estrictamente con los poderes otorgados y los ejerzan efectivamente.

Entre esos poderes que se enumeran en un largo artículo[33], nos permitiremos destacar algunos aspectos que consideramos más importantes, siempre dentro del tratamiento del tema en forma muy abreviada.

Así es común que los códigos contengan la facultad del tribunal para rechazar una demanda que no se ajuste a los requisitos formales y aun para disponer que el actor haga las aclaraciones o rectificaciones que considere del caso (Art. 257) Código de Procedimientos Civiles de México, D.F.). Inclusive el nuevo Código del Distrito Federal agrega, en el artículo 272 D, la facultad de disponer medidas conducentes para subsanar esos defectos alegados por las partes en la demanda o contestación.

El Anteproyecto de Código Modelo incluye, dentro de éstas, dos facultades importantes más: la de "darle a la demanda el trámite que corresponda cuando el señalado en ella aparezca equivocado" (ord. 39), y la de "rechazar la demanda, cuando ella fuere manifiestamente improponible".

La primera facultad es conocida y aparece ya en muchos códigos modernos; constituye una aplicación inobjetable de los poderes del tribunal en la dirección del proceso.

La segunda representa una innovación del proyecto con respecto o casi todos los códigos iberoamericanos, no obstante encontrarse ya en el régimen brasileño[34]. Se trata de la posibilidad de que el tribunal no sólo analice liminarmente los aspectos formales (externos) sino aun el contenido

33 Nos referimos a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1984, a la del Código del Distrito Federal y Territorios de México de 1985 y también al recientemente aprobado nuevo Código de Procedimiento Civil de Venezuela de 1985 (sancionado el 5-XII-85, promulgado el 22-1-986 para regir a partir del 16-1-986.

34 El Código vigente de la República Federativa de Brasil, de 1973—modificado por ley 5.925— permite al juez rechazar in limine la pretensión inicial...: "1) Cuando fuere inepta... II) Cuando la parte fuera manifiestamente ilegítima... III) Cuando el actor careciera de interés procesal". Y agregó la ley 5.925 "Cuando el pedido fuera jurídicamente imposible". Y el artículo 296 reglamenta el recurso del actor, en este caso, en la única relación procesal trabada, hasta ese momento, entre dicha parte y el Juez.

de la petición inicial. Esto es no sólo la admisibilidad sino, además, la fundabilidad, lo que constituye un paso muy importante en el aumento de sus poderes. Naturalmente que se trata de un caso extremo en el cual surge objetivamente (esto es a priori, notoriamente) dicha improponibilidad, como si se solicitara el divorcio en un país que no lo admite, o el cobro de una deuda de juego cuando la legislación dice que esta sólo produce obligaciones naturales. Se trata de un caso en que manifiestamente la pretensión no podrá ser acogida, independientemente de los hechos alegados o las pruebas que se produzcan. La doctrina iberoamericana ha profundizado en la cuestión[35] aceptando la opinión de Redenti, de que los casos de improponibilidad objetivos pueden ca1ificarse de falta de jurisdicción[36].

Digamos por último, para terminar este tema, que la facultad del juzgador en reglada y sometida a los recursos —en caso de rechazarse la pretensión in limine— que otorgan las debidas garantías a las partes (Ver supra, nota 34).

Queremos también señalar, dentro de todas estas facultades, que ameritarían un tratamiento especial, que el tiempo y el espacio no permiten, que recoge el Anteproyecto y planea el respeto de la regla moral dentro del proceso y la exclusión de la mala fe, la "chicana", la colusión y el fraude. (Infra nota n 38).

Fuera de las normas generales que permiten al juzgador rechazar in limine incidentes, intervención de terceros, pruebas inadmisibles y declarar de oficio nulidades absolutas... (artículo 33, ord. 7, 8 9 etc.) nos parece importante resaltar la que lo faculta para relevar de oficio ciertas excepciones, como la de litis pendencia, cosa juzgada, caducidad, transacción y falta de representación del apoderado o incapacidad, pero sobre todo las que se refieren directamente a los deberes morales en el proceso.

Debemos señalar que el nuevo Código venezolano de 1985 permite también el rechazo de alguna demanda "contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley" estableciendo que "Del auto que se niegue la admisión se oirá apelación inmediatamente a ambas efectos" (artículo 341).

35 FAIREN GUILLEN, V. "El principio de autoridad del Juez en el proceso civil y sus limites", en: "Estudios de Derecho Procesal", Madrid, 1955. p. 223.

LORETO, L., Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad. Buenos Aires, 1940, p. 61.

TORELLO L., y VIERA, L. A., "Improponibilidad manifiesta de la pretensión. Rechazo in limine de la demanda". En Revista Uruguaya de Derecho Procesal. 1981, p. 227.

Estudios sobre el tema en Actas del XI Congreso Argentino de Derecho Procesal (La Plata, 1981)..

36 REDENTI, E., Diritto processuale civile, Milano, 1949, T. 1. números 31 y 68. Ver también: ALLORIO, "La claridad d las ideas en tema de la legitimación para accionar", en Problemas de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1964. T. II, p. 249.

En este sentido corresponde destacar las normas que hacen a este propósito, ya sea estableciendo el principio de buena fe (artículo 5), ya sea las que facultan a 'los jueces para aplicar sanciones por su incumplimiento (artículo 33, ord. 11) o las que establecen las responsabilidades, tanto de los magistrados, incluyendo el caso del error inexcusable (artículo 35), como de las partes y sus representantes, inclusive por daños y perjuicios, además de las costas que se declaran de precepto a cargo del perdidoso (artículo 71).

En estos aspectos el Código Modelo sigue también la línea de los modernos códigos (como el propio de México referido a su artículo 61).

Y, de esa manera, se configura un completo cuadro de debe res, derechos y responsabilidades, tanto de partes (sus apoderados) como de los magistrados en el curso del proceso.

La audiencia preliminar. Saneamiento del proceso. Conciliación

En el desarrollo del procedimiento, imposible de analizar en esta exposición general, adquiere una importancia fundamental la audiencia preliminar. Que de línea la orientación que hemos querido dar al procedimiento (proceso por audiencia) y marca el punto principal, de tal manera que constituye la innovación más representativa del nuevo régimen, por lo cual la analizaremos detalle, lo que no podemos hacer en este momento, con las de más.

Aparece, por otra parte, como un instituto que se perfila como preferido por quienes han preparado los proyectos —algunos convertidos en ley— modificativos de los códigos iberoamericanos.

La audiencia preliminar. Concepto. Historia

El nombre de audiencia preliminar da lugar a alguna perplejidad, pues lo preliminar da idea de previa, lo que podría en tenderse como anterior al proceso, esto es preprocesal[37].

Si se considera como antecedente cercano el del régimen austriaco, lo que sostiene gran parte de a relevante doctrina, en puridad se debía traducir literalmente como primera audiencia (erste tagsatung) dentro del proceso. También se podría enfocar la comparencia personal de las partes, circunstancia a la que Salude, justamente, el nombre alemán (personeliche

37 Conforme: BARRIOS DE ANGELIS, D., "La audiencia preliminar". En Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1975, número 1, pp. 11-12.

MORALES MOLINA, H., La audiencia preliminar. Ponencia al Congreso Colombiano de Derecho Procesal (Cali, 1982). p. 2. ZEPEDA, J. A., El saneamiento del proceso y la audiencia preliminar". Comunicación a las No venas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Madrid., 1985 (Ponencia que fuera presentada con posterioridad a las jornadas, que hemos conseguido merced a la colaboración del licenciado Zepeda que mucho agradecemos), p. 24.

erscheiitung des parteien) de lo que puede ser lo más similar, en ese derecho, a la institución austriaca.

Se trata, entonces, de una primera audiencia, dentro del pro ceso a la que deben comparecer ambas partes y que será presidida por el tribunal, con un muy complejo contenido, pero con el fin primordial de evitar el litigio, o limitar su objeto y depurar el procedimiento como veremos a continuación.

En algunos sistemas alguna de estas funciones ha absorbido la institución. Así sucede, como veremos enseguida, en el derecho brasileño, con el despacho saneador.

Los orígenes históricos resultan muy difíciles de precisar, existiendo diversas opiniones en la doctrina que rastrea sus antecedentes mediatos; menor discrepancia existe, en cambio, respecto de los inmediatos.

La cuestión se dificulta en cuanto concurren en la audiencia, que tratamos de introducir en el proceso civil iberoamericano, diversas funciones, las cuales, como es natural, parecen provenir de diferentes orígenes. O, dicho de otra manera, en cuanto confluyen en la audiencia preliminar diferentes objetivos, e inclusive diversos institutos procesales (como pueden ser la comparencia personal de la parte y el libre interrogatorio, la tentativa de conciliación, y el saneamiento del proceso) y no resulta extraño que haya que confrontar diversas fuentes originales.

Edúardo J. Couture en su proyecto de Código de Procedimiento Civil para Uruguay[38], introduce esta institución —que también recoge la ley argentina 21 número 14.237, aunque aisladamente—y expresa que se origina en el régimen norteamericano de pretrial, señalando que toma el artículo que organiza di cha audiencia (artículo 84) de la Federal Rule of Civil Proceclure (Regla 16) y de la Conferencia Preliminar del Juicio del Código de Puerto Rico (artículo 37). No hay duda de que el pretrial y aun también la preliminary hearing del proceso norteamericano resultan fuentes esenciales del instituto.

Generalmente se menciona como fuente inmediata la audiencia preliminar austriaca y esta se originaría, en cuanto a la comparencia personal de las partes y a su interrogatorio por el juez, en el régimen inglés[39]. Reconocería como fuente el Summon of Direction del procedimiento británico. Guasp, que propone esta audiencia al proyectar "El sistema de una ley procesal ibero americana", que sería el antecedente de nuestro Anteproyecto

38 Publicado en Montevideo, 1945, con su exposición de motivos.

39 La doctrina iberoamericana se ha Inspirado principalmente en el régimen austriaco, el cual, según Barrios de Angelis habría de allí pasado a Alemania, aunque, en definitiva provendría del sistema inglés (ob. cit., p..12 y cita de M. Cappelletti. La testimonianza della parte nel sistema dell' oralitá, Milano., 1962, T. II, pp. 421 y 485). Couture a su vez, se inspira en el sistema norteamericano del pretrial (mfra, nota número 37).

de Bases, le atribuye, como origen la concordantia dubiorum del Derecho canónico y el despacho saneador del Derecho portugués[40].

El antecedente austríaco es el que más se menciona por los autores iberoamericanos[41] y todos invocamos el ejemplo del Código Klein para apoyar la creación de este instituto, no obstante la diferencia esencial en cuanto en este la audiencia se rea liza antes de la contestación de la demanda, razón por la cual, presumiblemente, ha sido establecida como facultativa en la última reforma del proceso civil austriaco (de 1983).

Hernando Morales Molina, desde Colombia, afirma que el origen de la audiencia sería el Reglamento legislativo e giudiziario per gli affari civile expedido en 1834 por el Papa Gregorio y Barrios de Angelis, entre nosotros, se afilia a la idea que proviene del ordenamiento procesal inglés, inspirándose fundamentalmente en las enseñanzas de Cappelletti sobre la declaración de la parte delante del tribunal (Supra, notas números 37 y 39).

No hay duda que históricamente el despacho saneador portugués ha tenido gran influencia en nuestro Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, puesto que antes de aprobarse en las Quintas Jornadas de Bogotá (1970), en las Bases, la introducción de esta audiencia, ya en las Terceras Jornadas de San Pablo (1962) y en las Cuartas Jornadas de Caracas-Valencia (1967) se había votado una ponencia para incluir el despacho saneador en las reformas de los códigos como instituto ejemplar. Y dicho tema (el despacho saneador) es el único que se repite en sendas jornadas.

José Carlos Barbosa Moreira en su magnífica ponencia general presentada a nuestras Novenas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal (Madrid, junio de 1985)[42] realiza un estudio especial del origen y evolución del instituto en el Derecho portugués y brasileño, expresando que proviene del des pacho regulador consagrado inicialmente en el proceso sumario portugués por ley de 1907 (29-V-907) el cual pasara luego a ser precedido de una audiencia preparatoria, la cual se iniciaba, justamente, con la tentativa de conciliación. Este instituto, luego de una evolución, llega al actual Código Procesal brasileño (de 1973), con el exclusivo fin de saneamiento del proceso después de la fase postulatoria, a través de las llamadas providencias preliminares, en cuya oportunidad es posible

40 En Revista de Derecho Procesal Iber., 1956, p. 69.

41 Así dice PAIREN GUILLEN, y, textualmente, al referirse a la "comparecencia" prevista por la ley española de 1984: "Se trata, a mi entender, de una audiencia preliminar de Inspiración austriaca, como la que vengo proponiendo desde 1950 ("La Ley..." cit. p. 236 y abundante bibliografía mencionada en nota número 12).

42 BARBOSÁ MOREIRA 3. C. Saneamiento del proceso y audiencia preliminar, Relatorio a las Novenas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, esp. pp. 6/7 y 9.

verificar la ausencia de presupuestos de la constitución y desenvolvimiento del proceso, incluyendo el análisis de las condiciones de la acción. Predomina, entonces, el fin de saneamiento, en cambio no se rea liza a través de una audiencia, sino dentro del procedimiento escrito.

En lo que se refiere al Derecho Comparado resulta, entonces, destacable la experiencia austriaca, pese a la modificación reciente[43] y, en lo dice relación con la función de saneamiento del proceso, resulta de fundamental interés el sistema de Portugal y Brasil. En tanto que si nos atenemos a la función conciliatoria deviene indispensable referirse a la reforma alemana introducida a través del modelo Stuttgart, extendido Juego a otros ordenamientos de dicho país[44].

Si nos remitimos a la voluntad de incluir la audiencia preliminar en los códigos iberoamericanos, podemos citar el ejemplo de Paraguay[45], de Uruguay[46] y, naturalmente, el del Código Modelo que es objeto de este volumen.

Pero no obstante todo ello, lo que nos parece más destacable en este momento histórico, es por este lado la incorporación del sistema al régimen español y mexicano.

En lo que se refiere a España la nueva ley de reformas urgentes de 1984, a la que nos hemos referido ya reiteradamente, estableció el instituto de la comparencia, que no es ni más ni menos, según la opinión tan autorizada como la de Fairén Guillén, que la audiencia preliminar (Supra, nota número 12).

La reforma española incluye esta comparencia en el juicio de menor cuantía, lo que demuestra que se ha encarado la reforma con mucha timidez, no obstante que dicho juicio, al establecer un monto muy alto como

43 Que, como dijimos, declara facultativa esta audiencia, aunque el proceso siempre se desarrolla oralmente y a través de la otra audiencia de prueba, y alegaciones e, inclusive, le introduce algunas ampliaciones tales como la de permitir al juez examinar de oficio su competencia (Se trata de 'las reformas introducidas por la ley de 1 de mayo de 1983, explicadas por el profesor Fairén Guillén en la ob. cit. p. 240 y ss.). También por Barbosa Moreira en su citado relato general p. 12-13. (Supra nota n 42).

44 GRUNSKY, W., "Il considetto modello di Stockarda e l'accelera zione del proceso civile tedesco", en: Rey. Dir. Proc. 1971, p. 354.

45 Según proyecto de Código de Procedimiento Civil citado por Barbosa Moreira en su Relatorio..., cit., p. 10.

46 Así, luego del proyecto Couture, todos los Proyectos de Código de Procedimiento Civil para Uruguay, tanto el realizado en 1972 —revisado por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal— como el ajustado por el mismo Instituto en 1974, como el de la Comisión Revisora de 1984, todos incluyen la audiencia preliminar con contenido similar. Actualmente (1988) el Poder Legislativo uruguayo analiza un nuevo Anteproyecto con esa audiencia.

techo del mismo (o base del proceso ordinario), corresponda en una muy grande cantidad de causas[47].

Con respecto al régimen mexicano, resulta a mi juicio sumamente importante que en la organización del juicio ordinario se haya introducido una audiencia preliminar con la mayoría de las finalidades que estamos proponiendo hace tiempo para Iberoamérica toda, esto es la de tentar la conciliación, examinar la regularidad de la demanda y contestación, así como las cuestiones derivadas de la conexidad, litispendencia y cosa juzgada, incluyendo las relativas a la legitimación procesal, declarándose, inclusive, que a estos efectos el juez dispondrá de las más amplias facultades de dirección del proceso (Artículos 272 A, 272 B, 272 C, 272 D, 272 E, 272 F y 272 G. modificados por el artículo segundo de la ley de 27 de diciembre de 1985).

El propio relator mexicano a las ya citadas Jornadas de Madrid del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, licencia do Jorge Antonio Zepeda, en su Comunicación, hacía notar cómo, rastreando en el Derecho mexicano, se podrían encontrar diversas normas que de a manera facilitaban el cumplimiento de algunos de los fines de la audiencia preliminar dentro de los procedimientos[48].

Funciones de la audiencia preliminar

Los objetivos de esta audiencia preliminar resultan muy variados y la doctrina y el propio Derecho Positivo le atribuyen diferentes fines.

Sin embargo, para una;; construcción científica, es necesario clasificar (o agrupar) dichos fines, de manera de no crear la impresión, sea en el legislador, en los jueces o abogados, de que se pretende introducir un monstruo que determinará, como dicen algunos juristas muy conservadores, que los tribunales no tengan tiempo para fijarlas. Y entonces vayan señalándose, cada vez con más dilación para el futuro (como según también se dice sucede en algunos tribunales norteamericanos) y el proceso se dilate, en lugar de abreviarse.

47 De todas maneras se ha producido lo que profetizaba Barrios de Angelis en 1975 (ob. cit., nota número 31, p. 210), cuando al referirse a esta institución decía: "El contrario bastión de España ha de caer.

Prestigiosas instituciones se han manifestado a su favor, corno fórmula de reforma (2' allí citaba la Real Academia de Jurisprudencia, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, etc.) y concluía: "Prieto Castro, Guasp y Fairén la apoyan".

48 Ob. cit., pp. 18-23, donde analiza, especialmente, soluciones de la Ley Federal del Trabajo, de'. la Ley del

Tribunal Contencioso AdniifliStra tivo del Distrito Federal, y el propio Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aún antes de su modificación) y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

No está demás decir, al respecto, que este argumento es falacioso, pues justamente el fin de la audiencia es abreviar el procedimiento, acelerar el trámite. Pero, reiteramos, el "temor a la oralidad" que hemos llamado, hace que en nuestros países se recurra reiteradamente a esta clase de argumentos, el más frecuente de los cuales, consiste en decir que para este nuevo proceso se necesitarán muchísimos más jueces y, entonces, con la carencia de medios —endémica— del Poder Judicial, no podrá encararse tal reforma. Lo que, sin perjuicio del reclamo permanente de mejoramiento del servicio de justicia, para lo cual se necesitan más medios económicos para esta tan esencial función del Estado, de todas maneras no resulta un argumento válido[49].

Antes de proceder, entonces, a agrupar los objetivos de la audiencia, es menester recordar, una vez más, que estamos justa mente ante eso, una audiencia (de audire, oír) por lo que, como seña Gelsi Bidart consiste en comparecer ante alguien que está dotado de autoridad para realizar ante él una actividad (al menos ser oído y por ende, oír)[50]. También corresponde insistir en que de esa forma se realiza el verdadero proceso, como actum triarum personae y que, finalmente, se parte de la base de que el juez asuma su verdadero rol de dirección del proceso, esto es, que tenga una presencia activa. Para lo cual será indispensable que esté instruido de la causa. Por eso la audiencia preliminar se ubica, en todos los ordenamientos

49 Hemos tratado de refutar estas objeciones en el trabajo citado sobre "Perspectivas de oralidad" publicado en la Revista Argentina de Derecho procesal. En muy apretada síntesis siempre nos preguntamos cómo es posible que por este medio se hagan más largos los procesos, si hay un gran porcentaje de conciliaciones que excluyen el juicio si se limita el objeto del proceso y también las pruebas a diligenciar, se evita continuar el juicio hasta el final al resolver de entrada ciertas excepciones y presupuestos procesales y se evitan y eliminan múltiples chicanas. La respuesta es sólo una la corruptela es tal, dentro de los procedimientos defectuosos que tenemos en nuestros países que muchísimas de las actividades que debe realizar el juez, las cumplen funcionarios: toman declaraciones, dictan resoluciones, a veces preparan las sentencias; también, en los órganos colegiados, uno hace el estudio y los restantes adhieren, etc., etc. O sea, sólo es más rápido el juicio escrito, porque la función de juzgar se va desplazando, peligrosa e indebida mente, hacia otras personas que no los jueces, cuya carrera proponemos, nos preocupamos por seleccionar mejor, bregamos incesantemente por su total independencia, etc. Como esto nadie lo puede aceptar, el argumento contra la oralidad no sirve. Por lo demás, s1 la única forma efectiva de hacer justicia es en audiencia —y no escribiendo las partes su novela que el juez no conoce hasta el final— no queda, más alternativa que implantar este tipo de procedimiento.

Por eso propiciamos dar vuelta al revés nuestros vetustos sistemas (más unos que otros, naturalmente) aumentando el número de jueces que son quienes hacen la justicia y disminuyendo el número de funcionarios, que son quienes hacen la burocracia del expediente. Y prefiriendo, en lugar de estos,.. asesores técnicos de la magistratura que cada día se hacen más necesarios.

50 En su comunicación a las Jornadas de Madrid, citadas p. 2.

que venimos analizando, salvo en el de Austria, para que el juzgador con el material de la etapa de proposición (demanda, contestación y eventualmente reconvención) pueda realizar en forma útil (eficaz) su tarea.

Las principales funciones de la audiencia preliminar se pueden agrupar en la conciliadora (exclusión del proceso), sanea dora (saneamiento del proceso, depuración de cuestiones no referidas al mérito), la de establecer el objeto del proceso y de la prueba (función abreviadora, al decir de Barbosa Moreira) y ordenadora, justamente por el Tribunal respecto del futuro desarrollo del proceso, en especial tomando medidas relativas al diligenciamiento de la prueba[51].

Una de las principales funciones de esta audiencia es la conciliación, que corresponde al fin de extinguir el proceso (fin de exclusión del proceso, nos recuerda Zepeda), tema que por su importancia dejamos para el siguiente parágrafo.

La finalidad de saneamiento del proceso es otra esencial tarea de esta etapa, al punto que, como vimos, hay procedimientos que mantienen esta función del oficio judicial aun dentro del proceso escrito, lo que resulta fundamental. Así sucede en el proceso de Brasil, cuya jurisprudencia y doctrina ha afinado el estudio del tema más que en ningún otro lado[52].

La función de saneamiento, al correcto decir de Barbosa Moreira, supone la solución de cualesquiera cuestiones susceptibles de distraer la

51 Así, por ejemplo, Barbosa Moreira señala dos funciones principales y varias, por así decirlo, subfunciones. En primer lugar, dice, la función para colocar al proceso en las mejores condiciones posibles para proseguir en dirección al juzgamiento final (a.) Esta la subdivide en la función saneadora, a la cual enseguida nos referimos (a.l.), la función esclarecedora, relativa al objeto, pedidos de las partes, identificación de puntos controvertidos (a.2.) y la función instructoria, esto es la determinación de los hechos que serán objeto de prueba y restante función de instrucción probatoria (a.3.)

Luego expresa, que otra función es la de conducir el proceso a su ex tinción en momento anterior al previsto (función abreviadora) (b.). Y esta la divide en la abreviación en razón de inutilidad de proseguir (b.1.) por un obstáculo irremovible tal como la improponibilidad de la demanda, nulidad insanable, etc. o la no necesidad de proseguirlo (b.2.) en razón de la autocomposición del litigio (b.2.1.); la cesación (b.2.2.) o la posibilidad de juzgar el mérito de inmediato (b.2.3.), (ob. cit., pp. 12 y 19-20).

También dice que a través del despacho saneador se realiza un juicio positivo de admisibilidad y otro de validez del proceso (en O Novo processo civil brasileiro, 6a. ecl., pp. 71-72). Zepeda., a su vez, habla de tres finalidades: la exclusión del proceso o por lo menos su reducción o abreviación, la definición de la reí in iudicandae y el saneamiento. ("Comunicación", cit., p. 26-27 y 29-30) y así podríamos citar otras nuevas clasificaciones o enumeraciones; la más amplia que conocemos y detallada es la de Fairén Guillén en ob. cit. pp. 241-246 para el régimen austriaco y pp. 259-273 para el régimen español en su interpretación.

52 Así,, entre otros. GALEANO LACERDA, Despacho saneador. Porto Alegre, 1953. AGRICOLA BARBI, C., Despacho saneador e julgamento do mérito. Belo Horizonte, 1969. CALMON DE PASSOS Comentários ao Codigo de Processo Civil, Vol. III etc.

atención de la materia referente al meritum causae[53]. Esto es a resolver cuestiones que no dicen relación con el mérito (fondo) de la causa, facilitando la labor del Tribunal en el futuro (abreviación). Y evitando todo el trámite posterior para concluir en una sentencia final que declare la nulidad del pro ceso o la falta de un presupuesto procesal.

En ese sentido —y aquí las legislaciones son muy variadas— se incluye la resolución de las cuestiones previas, las que refieren a la competencia (y/o jurisdicción) del tribunal, capacidad y legitimación (al menos en ciertos casos) de las partes, la resolución de las cuestiones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, la posible integración de la litis, la prevención de futuras nulidades, etcétera[54].

Ateniéndonos al Anteproyecto del Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica, nos limitaremos a analizar en esta parte, principalmente, las funciones que allí se establecen, dentro del saneamiento del proceso.

Resulta esta, según el artículo 296, la ocasión para que se verifiquen determinados presupuestos de la admisibilidad de la demanda, si el tribunal no lo hubiere hecho antes (al recibir la demanda, como corresponde) así como para relevar, a petición de parte o de oficio, lo que en el Derecho uruguayo se llaman excepciones mixtas (en cuanto tienen el trámite de las dilatorias, no se refieren al fondo, pero extinguen el proceso) tales como las de litispendencia, cosa juzgada, caducidad y transacción. También entran en esta facultad, el análisis de la incompetencia absoluta, la falta de representación o la incapacidad (artículo 123, in fine). Tema ya tratado al examinar las facultades del Tribunal.

53 Ob. cit., p. 19.

54 A título de ejemplo, nos referimos al Código de Brasil, por la paternidad sobre el instituto y al mexicano, por ser el más moderno del área que lo acepta. El de Brasil dispone que el juez, en el despacho saneador decidirá sobre la legitimación de las partes y la representación, citará en su caso a los litisconsortes necesarios y al Ministerio Público, oirá al actor y le permitirá aportar pruebas (las cuales se aportan todas en la demanda y contestación), en caso de que en la contestación se aleguen hechos extintivos, verificará, la existencia de interés legítimo (económico y moral), declarará las nulidades insanables o a petición de parte, las diligencias probatorias que considere necesarias. (Supra, notas 47, 51 y 52)

En el nuevo régimen mexicano (del Distrito Federal) se dispone que en la audiencia preliminar que se instaura, el juez verificará la regularidad de la demanda y contestación (272-A) pudiendo ordenar la subsanación de los defectos o disponer las medidas conducentes a ese fin (272 resolverá todas las excepciones dilatorias y preprocesales, salvo la incompetencia (artículo 35); hará valer de oficio, si no se hubiere opuesto, la conexidad, la litispendencia y la cosa juzgada (272_A) y 42) resolviendo, en todo caso con vista de 'las pruebas (272-E). Respecto de los presupuestos hay una mención especial a la legitimación procesal, que debe también resolverse y aun examinarse de oficio (Artículo 47 y 272-C).

Con respecto a la falta de legitimación en la causa, la solución adoptada consiste en admitir su relavamiento, aun de oficio, "cuando sea definible al comienzo del litigio", que es como decir, cuando fuere notoria o claramente inexistente. También con el fin de evitar todo un proceso que termine por una sentencia de inadmisibilidad.

En puridad se está admitiendo la solución de los códigos más avanzados, que no es el de la mayoría de los latinoamericanos, en el sentido de receptar como cuestión previa y aun relevable de oficio la referida a la falta de cualidad y de interés del actor, que implican un análisis del mérito de la causa y que el pro ceso francés incluye entre los fins de nom recevoir, también como tema de decisión previa. En Iberoamérica, ya la doctrina había reclamado esta solución[55] y algunos códigos la habían ya aceptado[56].

Asimismo, mediante la improponibilidad objetiva de la de manda, que los tribunales pueden relevar de oficio o planteada deben resolver en la audiencia, se entra a juzgar, también, un aspecto del mérito.

El saneamiento del proceso supone, en consecuencia, que es tas cuestiones, excepciones dilatorias, falta de presupuestos como la capacidad y aun la legitimación e improponibilidad de la de manda, se planteen (si no se lo hizo antes) en la propia audiencia y sean resueltas por el tribunal mediante lo que constituye un verdadero despacho saneador (sentencia o auto interlocutorio).

Asimismo, el tribunal incluirá en las cuestiones a resolver la regularización del procedimiento y la subsanación de los actos que puedan provocar nulidades sanables o la declaración de las insanables con el fin de que se esté en condiciones de entrar en el tema del objeto del proceso y las pruebas —que analizamos a continuación— en virtud de que resueltas aquellas cuestiones, no hay duda que corresponderá ingresar al mérito de la causa.

Esto es, que verificado que el proceso se ha desenvuelto sin vicios o aquéllos que tenía han sido saneados, prácticamente se entra a una nueva fase del proceso (la preparación de la decisión sobre el fondo).

---

55 LORETO,, L., Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad de La demanda por falta de causa. Buenos Aires, 1940. Cabe señalar que esta orientación moderna es la misma que receptaba el antiguo Derecho español (Tapia, Febrero Novísimo, t. y. p. 307), Inclusive algún autor español contemporáneo, con una interpretación extensiva del texto vigente, igual al de casi todos los códigos latinoamericanos, admite que tal excepción puede entenderse incluida en la de falta de personalidad (así, Pietro Castro. Derecho Procesal Civil. T. 1. p. 218).

56 México, C.P.C.D.F. (reformado) cit., artículos 47, 272-C (y. Supra, nota 49),, Brasil, artículos 295 II y III. Asimismo varios códigos, entre ellos los mexicanos y el d Brasil, establecen los requisitos de la acción como condición para entablar la demanda, lo que permite a los jueces relevar de oficio su ausencia (interés, legitimación, posibilidad jurídica).

Esto es, que como dice Barbosa Moreira, hablando de la audiencia austriaca, se procura descargar a los tribunales de aquellas cuestiones ajenas al fondo, para que, en adelante, puedan resolver en base a un debate exclusivamente sobre el mérito de la causa[57].

Corresponde ahora pasar a la otra función de la audiencia preliminar, cual es la de fijar definitivamente el objeto del proceso y, por ende e de la prueba a producir, que dependerán naturalmente, de dicho objeto y de los hechos controvertidos a esta altura.

Por ello se admite en la audiencia que las partes puedan ratificar —no parece adecuado rectificar— sus pretensiones e inclusive ampliarlas[58]. Es natural, asimismo, que si el demandado en su contestación ha alegado hechos extintivos, por ejemplo, se oiga sobre ellos al actor y se le permita completar su prueba. Lo mismo sucederá con el reo respecto de la ampliación de la demanda del demandante (Supra, nota 8).

En esta función nos permitimos hacer solamente tres precisiones para no extender exageradamente esta exposición de motivos.

a) La fijación del objeto del debate puede derivar —si no hubo conciliación o transacción total— en una delimitación de los puntos planteados en las pretensiones originales, para lo cual es esencial el poder de dirección del, juez. De ese modo la función abreviadora se sigue cumpliendo[59].

b) Resulta importante también la dirección por el juez de la audiencia, inclusive asesorando a las partes (como se reclama en la legalidad socialista), mejor aclarando (función esclarece dora) lo que no va contra la

57 Relatorio, cit., p. 12.

58 Respecto de la ampliación de la demanda, hemos sostenido, de conformidad con la más relevante doctrina, que corresponde admitir la introducción de hechos nuevos —no diversos— hasta la etapa probatoria en nuestro proceso actual y,, en el proyectado, hasta esta etapa de la audiencia preliminar: ALSINA, H., "Alegación de hechos nuevos", en: Revista de Derecho Procesal (arg.) Año IX, 1951, pág. 29. RILLO CANALE O., voz: "Hecho nuevo, en Enciclopedia Omeba, T. XIII, p. 651. VESCOVI, E., "Hechos nuevos en el proceso civil", Rey. D.J.A., t. 70, p. 182. Asimismo trabajos presentados al VI Congreso Nacional Argentino de Derecho Procesal de Tucumán (R.A., 1970) especialmente de O. Rillo Canale; R. Gómez; E. L. Vallejo; J. A. Zago y otros.

Y con referencia a hechos nuevos que consolidan o extinguen los derechos controvertidos en juicio, por actos posteriores: AYARRAGARAY, C., "La con 9ruencia en la ejecución de la sentencia", en: Jus (R.A.), 1963, número 4, p. 5. MORELLO, A., "Hechos que consolidan o extinguen los derechos litigiosos durante el desarrollo del proceso; sus efectos en. la sentencia", en: Jurisprudencia Argentina, T. IV, pág. 373. V.; asimismo artículo 163, parte 2 del Código de la Nación Argentina (CPCN).

59 Al igual que Barbosa Moreira, como vimos, Dante Barrios de Angelis, entre nosotros, sostiene que uno de los objetivos importantes de la audiencia preliminar es la simplificación del objeto del proceso ("La audiencia preliminar", cit., p. 18).

imparcialidad[60] y no viola las garantías del debido proceso y el derecho de defensa[61], des de que, estando todos presentes, el esclarecimiento de las afirmaciones resulta una natural función de la audiencia, dentro de proceso entendido como debe ser[62].

c) También se hace necesaria la dirección del proceso por el tribunal en cuanto a la prueba. En efecto, establecido (delimitado, clarificado) el objeto del proceso, surgirán con mayor precisión las pruebas que deben producirse sobre los hechos que a esta altura quedan como controvertidos (que la experiencia dice que son muchísimos menos que 'los de las pretensiones iniciales en la casi totalidad de los casos). Entonces será posible que el juzgador pueda rechazar las pruebas que considere no sólo inadmisibles, sino también las innecesarias, inútiles o inconducentes, dado su papel protagónico en el proceso. Lo que, reiteramos, no puede hacer en nuestros procesos escritos, en los cuales sólo conoce la causa al final, por más poderes que se le otorguen (Supra, núm. 4).

Asimismo, resultará natural que se disponga la forma de diligenciar la prueba, en la próxima audiencia o de inmediato, adelantando los pasos necesarios (designación de peritos, inspecciones judiciales, solicitud de informes, etc.) para que el día de la audiencia final (complementaria) se pueda desahogar la prueba (aún no diligenciada) en forma de cumplir adecuadamente los principios de inmediación y concentración.

---

60 Resulta imprescindible, como dijimos ya, aventar las ideas de que la intervención activa del juzgador en el proceso, como venimos reclaman do, puede afectar su imparcialidad. Inclusive que esta función de delimitación del objeto —que inclusive puede resultar parcialmente ampliado— en la que debe colaborar y hasta suplir los errores jurídicos de las partes, pueda entenderse como un prejuzgamiento.

61 Recientemente en Uruguay, ante un proyecto de reformas al proceso laboral, en el cual los laboralistas —de acuerdo a sus ideas más comunes—, introducían la ultrapetita a favor del obrero, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal tuvo oportunidad de rectificar el mismo de conformidad con esas directivas:

a) el restablecimiento de la igualdad y mejor acceso a la Justicia de la parte económicamente más débil, inclusive la "ayuda que el juez deba prestarle, no puede consistir en permitir que este en el momento de la sentencia falle sobre algo no pedido".

b) el fallo ultrapetita viola las garantías del debido proceso, la igual dad de las partes y el derecho de defensa en juicio desde que se falla sobre algo no reclamado, lo que implica no discutido, sobre algo que el demandado no tuvo oportunidad de ensayar defensa alguna, ni de probar.

c) en cambio, si dicha función judicial se ejerce en la audiencia, aunque implique dicha "ayuda" a la parte más débil para restablecer la igualdad real, permite a la contraparte conocer la pretensión (o nueva demanda), oponer sus defensas y producir la prueba sobre la misma.

62 Conforme a la doctrina más moderna: M. Cappelletti en sus obras citadas (La testimonianza…. Procédure écrite….", etc.) y las Bases de' nuestro Anteproyecto de Código Modelo.

Todo ello conduce —por varios caminos— a la necesidad de que el juez tenga la verdadera dirección del proceso, d ando de ser un mero espectador, pero no asumiendo tampoco el papel de dictador, según las recordadas palabras de Alcalá-Zamora; sin autoritarismo, ni prepotencia, como reclama Barbosa Moreira.

En cuanto a la función de conciliación, por su importancia, la estudiamos por separado.

La conciliación en la audiencia preliminar. La justicia conciliatoria

Nuestra audiencia preliminar, como en la mayoría de los sistemas, prevé, casi como primer actividad, la de intentar la conciliación por intermedio del tribunal. Y este objetivo es trascendente y fundamental.

No obstante nos introduce en una problemática muy amplia y actual que no corresponde analizar ahora, pero a la cual ha remos alguna referencia muy brevemente. Especialmente en cuanto se ha cuestionado que esta función de conciliación se cumpla por los jueces. Inclusive, dentro del nuevo Código mexicano que venimos estudiando con tanto interés, dicha actividad la cumple "el conciliador", no el juzgador (Artículo 273-A).

Lo que no compartimos por las razones que expondremos. Pero el tema amerita un planteo más general. Aunque dentro de los modestos límites que permite esta exposición, que no puede ser un trabajo de tesis, sino de simple aclaración de las instituciones propuestas.

El tema de la justicia conciliatoria es uno de los más trascendentes del mundo moderno, dentro de la problemática más general de la justicia, de las formas de acceso a la misma y la búsqueda de fórmulas de alternativa. Lo que no significa, naturalmente, que esta forma de justicia sea una novedad, sino que, por el contrario, es muy antigua[63].

No obstante se ha revalorizado, a tal punto de ocupar lugar destacado especialmente en la doctrina, en los congresos cien tíficos y ser recogida en la legislación en varios aspectos.

63 Naturalmente que representa una de las formas más antiguas y primitivas la de intentar una conciliación entre las partes, sea independientemente de la decisión por un tercero —que puede actuar como simple mediador o conciliador— o antes de que este, dotado del poder de resolución, entre a hacerlo. Aun en países actuales que se encuentran en estado primitivo, se nota esta forma de justicia (Infra, nota 64).

En Iberoamérica esta función ha sido confiada en muchos códigos tradicionales —generalmente como etapa previa al proceso— a los juzgados de categoría más baja en la escala pero aquéllos que se encuentran más cerca de la población (juzgados municipales,, jueces de paz, etc.) muchas veces asistidos por gente del pueblo con cierto ascendiente entre los litigantes (hombres buenos).

En ese sentido y como punto importante, corresponde seña lar el Coloquio de Pau (6-9 de julio de 198Z), en donde se brindó completa información sobre el estado de dicha justicia conciliatoria en el mundo[64].

Resulta de interés señalar, como se destaca en los informes (Supra, nota 64) que el Coloquio se convocó bajo el tema: Le régiement des con jlits hors des tribunaux o Settlement of disputes out of Court. Inclusive se tomó, por muchos de los participantes, como una de las formas de justicia alternativa para solucionar los conflictos fuera de los tribunales[65].

El argumento era que la justicia "tradicional" era lenta, cara, burocrática, de difícil acceso, sobre todo para los carentes de recursos y por ello se buscaban fórmulas especialmente para facilitar la solución de los nuevos conflictos que plantea la sociedad moderna[66]. Inclusive se le señaló, a la Justicia conciliatoria como una forma que no tendía a trancher le litige, esto es, resolver el conflicto en forma tajante, sino una manera (más pacífica" de "Justicia coexistencial" dijo Mauro Cappelletti, para quienes deben luego seguir conviviendo, una wormer way of disputes[67].

Y se nos presentó la eclosión, en nuestra época, de esta justicia en casi todos los países industrializados (para emplear un término que pueda comprender a la mayoría de ellos)[68].

---

64 Sobre este Coloquio, hay una publicación oficial; antes de ello hicimos una reseña informativa. KOTZ, H., y OTTENHOF, Reynald, Les conciliateurs. La conciliation, Une étude comparative. París, 1983, VESCOVI, E., "La Justicia Conciliatoria", Revista Uruguaya de Derecho Procesal 1982, p. 161.

65 En cierto modo es unas de las formas de justicia alternativa planteada en el Proyecto de Florencia —bajo la dirección de Mauro Cappe1letti— que comprende, en realidad, tres proyectos Interrelacionados y que culmina con la publicación de los cuatro volúmenes titulados Acces to Justice, a World Jurvey, Giuffré Sijthoff, 1978.

66 En el proyecto de Florencia, así como en el Coloquio de Pau, se hizo referencia, entre otros, a los conflictos provenientes de las nuevas formas de vida, como la convivencia en la fábrica, en el taller, en los nuevos edificios (condominios, departamentos), a los que plantean la defensa de los derechos o intereses súper individuales (colectivos, difusos, como la defensa del consumidor, del medio ambiente, del patrimonio cultural o artístico...)

67 El maestro Cappelletti planteaba, en Pau, la necesidad de obtener fórmulas alternativas de justicia, que permitieran un arreglo de las disputas que facilitara la posterior convivencia, no una justice tranchant que resolvía dando razón a una u otra de las partes. En ese sentido sostenía la necesidad de una forma más cálida (wormer) para resolver las disputas entre quienes se procuraba salieran de la resolución en buenas relaciones (sin vencidos, ni vencedores) y preconizaba un sistema diferente al de la Justicia tradicional y burocrática. Hay, decía, que "dérregularizar", "délegalizar", "déprofesionalizar" buscando soluciones simples, equitativas y de avenimiento.

68 En esa reunión los países representados que expusieron sus interesantes experiencias eran: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suecia, Alemania Federal, Alemania Democrática, Japón, Italia, China, África (Senegal) y Uruguay (Supra nota n 64).

Y allí se consideró que este tipo de justicia debía impartirse, no por el juez tradicional, sino por otro personaje cuyas características se delinearon[69].

Como señalamos este fenómeno sociológico no lo podemos desconocer. Sin embargo nos permitimos dos precisiones:

a) En primer lugar que la mayoría de los conflictos allí planteados (de vecindad, del taller, de los condominios, del consumidor, pequeñas rencillas que hubieran debido reclamar la intervención de un juez penal, en puridad no llegan a los tribunales, muchos de ellos no se podrían siquiera plantear. Es lo que puede analizarse quizá, en la experiencia mexicana de la Procuraduría del Consumidor. Esto lo reconocían muchos de los participantes del Coloquio, que preconizan esta justicia, al punto que por un lado se admitía que esa solución consensual permitía, para quien no estaba conforme, la posibilidad de la vía judicial; otros reconocían que no era un mecanismo apto para disminuir el trabajo excesivo de la justicia común (claro que nada de esto determinaba un rechazo de las soluciones).

b) Que nosotros venimos bregando porque ¡la justicia tradicional no sea tan burocrática, ni los procedimientos tan complejos, ni el acceso tan difícil, y nuestro proyecto tiende justamente a colocar un juez cercano a las partes, que también proponga vías amistosas y pacíficas de solución.

Por todo lo cual, sin perjuicio de admitir estas soluciones de la moderna justicia conciliatoria, y todos los intentos preprocesales, bregamos porque se introduzca la conciliación procesal en esta etapa tan oportuna a nuestro juicio.

El otro problema que se plantea —dentro de la misma tendencia— es a la creación de conciliadores especiales, con ese cometido, excluyendo al juez de esta tarea. Lo que puede hacerse mediante esta nueva forma de justicia que, insistimos, tiende a resolver otra clase de conflictos[70] o, colocando un conciliador en vez del juez, o al lado del juez, como hace el Código mexicano (artículo 273-A), quien será el que prepare y proponga a las partes la solución del litigio.

No compartimos esta solución y será de gran interés oír a los juristas iberoamericanos sobre el punto. Sólo nos permitimos decir:

a) el juez, como técnico en Derecho y mejor conocedor que nadie del alcance de las pretensiones, con ese tan importante papel en la audiencia, será para nosotros el mejor conciliador.

69 Se habló de un funcionario preparado con ese fin; el cual con su locomoción pudiera ir, de inmediato, al lugar donde se planteaba el conflicto con algunos conocimientos jurídicos, pero en especial con preparación psicosociológica que obrara como un asistente social, en la mayoría de las veces, para buscar una solución práctica y equitativa (Supra, nota 62).

70 Inclusive a desempeñar otro papel (Supra, nota 69).

Naturalmente que podrá de alguna de las técnicas a que se refiere el proceso, pero eso se arregla con colocarle asesores técnicos y no un conciliador que tampoco podrá ser un especialista en cada uno de los planteos que hagan las partes.

b) no parecen válidos los argumentos de que el juez debe quedar al margen de las soluciones transaccionales colocado por encima de las partes para mantener su imparcialidad. Este argumento sólo lo escuchamos en nuestro procedimiento latino americano, donde acostumbrados al papel pasivo del juez —que es el que lee toda la novela sin intervenir en ella, salvo para ponerle el epilogo, como alguien ha dicho con razón— nos parece extraño verlo proponer soluciones y argumentar a las partes sobre los inconvenientes de la sentencia judicial. En todos los países donde el proceso es oral, el tribunal interviene activamente, rechaza peticiones, recrimina las partes y los abogados que no actúan con lealtad y probidad, inclusive los sanciona, hasta con arrestos... y luego continúa su tarea terminando con la sentencia, sin que nadie piense que ha perdido su imparcialidad[71].

En definitiva, si admitimos un conciliador no profesional para actuar en la etapa preprocesal, no lo podemos aceptar dentro del proceso, especialmente si éste, conforme a lo que proponemos, e realiza ante un juez activo que, en un acto triangular junto a as partes y sus abogados, en franca y leal colaboración, procura una solución al conflicto.

Nos parece contradictorio con el espíritu de la audiencia preliminar, la introducción de este otro "personaje" en lo que por es un actum tri personae.

Por ello, repetimos, en el Código "Modelo" se propone la conciliación en la audiencia presidida por el juez, como primera etapa, procurando evitar el conflicto o reducirlo (en cuanto el acuerdo sea parcial) lo que está indisolublemente ligado con todo el resto de esta audiencia preliminar.

No obstante se deja a la ley especial la posibilidad de establecer otros sistemas, inclusive el profesional que se propone (laico, técnico en conciliar).

71 Supra, notas 60 y 61. J. A. Zepeda en su Comunicación a las Primeras Jornadas citadas, señala su posición coincidente con la solución que proponemos y rechaza expresamente la objeción respecto a la pérdida de la imparcialidad del juez (pp. 15-17).

EXPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL ANTEPROYECTO

Para culminar la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS haremos un breve análisis de las disposiciones del Anteproyecto que se so mete a consideración de los Miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Con la sola advertencia que, como se trata de normas que n tienen la pretensión de regir efectivamente en ningún país— salvo el día en que los países iberoamericanos o, al menos, latinoamericanos llegaran a constituir una Federación o Confederación de Estados— la redacción de muchas disposiciones tiene un simple contenido programático (Como lo es, en puridad, todo el. Anteproyecto).

Principios generales y aplicación de las normas procesales. (Lo. 1; T. 1 y II; arts. 1 a 16)

En esta primera parte se ha procurado reunir las orientaciones fundamentales en las que existe general consenso entre los procesalistas iberoamericanos y a los cuales ya nos referimos.

Deliberadamente se establece en el título la denominación de principios, pero sin calificarlos expresamente de tales, en cada caso, para respetar las diferentes clasificaciones doctrinarias.

Se indican al comienzo del Código para señalar la filiación de éste y, además, como elementos para su interpretación.

Se ha procurado una redacción lo más objetiva posible, que no se identifique con corrientes determinadas, sino que atienda a lo principalmente compartido.

El mismo criterio se ha seguido para las disposiciones sobre aplicación de normas procesales, en base a una ya extendida y favorable experiencia.

El tribunal; organización y funcionamiento; estatuto de los agentes. (Lo. 1; T. III; capts, 1, II y III; arts. 17 A 32).

En esta materia se establecen también algunos criterios básicos, sin perjuicio de remitirse en el detalle organizativo, a la Ley Orgánica que contemple las necesidades y posibilidades de cada país.

En tal sentido, contemplando la incidencia que ésta tiene sobre el funcionamiento del proceso, se acota la naturaleza de las tareas que les están asignadas (art. 18); las deseables garantías en materia presupuestal (art. 26 y 27); el principio: más jueces y menos funcionarios; los requisitos básicos para la designación; los principales derechos, deberes y garantías; la tecnificación de la magistratura; la carrera judicial con apertura a quienes ejercen la profesión de abogado.

FACULTADES DEL TRIBUNAL. (Lo. 1; T. III; Cap. IV; arts. 33 a 35)

Adhiriendo a la opinión mayoritaria de la actual doctrina procesal y siguiendo los lineamientos de los más recientes ordenamientos positivos, el Anteproyecto, al regular el conjunto de facultades asignadas al órgano jurisdiccional para el cumplimiento del poder-deber que le compete, acentúa características de tipo inquisitivo, aunque sin afectar, con ello, la naturaleza dispositiva del proceso civil, que es de esencia en nuestros sistemas.

En definitiva el art. 33, a cuyos principios básicos ya nos hemos referido, establece las facultades del tribunal en el nuevo proceso proyectado, así como las responsabilidades por el no uso de dichas facultades.

En lo que refiere al tema de la decisión o juzgamiento del litigio, si bien se establece como principio de —común recepción en nuestros sistemas normativos— el deber del Tribunal de ajustar su fallo a la regia de derecho positivo, se incluye la excepción del pronunciamiento conforme a la equidad, con aparta miento, incluso y cuando ello fuere necesario, del derecho positivo, en los casos que así expresamente lo autoriza la propia norma legal o cuando medie coincidente solicitud de las partes en ese sentido; en este último caso, solamente tratándose de derechos disponibles (art. 34-1).

Ministerio Público. (Lo. 1; T. IV; arts. 36 a 42).

En lo referente a la actuación del Ministerio Público en el proceso, el articulado proyectado recoge, en general, los criterios que normalmente informan a los ordenamientos vigentes.

Se establece que el Ministerio Público, en el cumplimiento de su función procesal y en los casos que ella procede, actúa en la defensa de los intereses que le están confiados, según lo dicte la libre convicción del titular respectivo (principio de independencia), así como que la opinión de uno de los integrantes del Ministerio Público, no compromete ni obliga a los otros (principio de la divisibilidad).

Se precisan, igualmente, las modalidades de la intervención del Ministerio Público en el proceso (intervención como parte, intervención como tercero de injerencia preceptiva, intervención como auxiliar jurídico del Oficio), determinándose las facultades, formalidades y oportunidad propias de cada uno de esos modos de intervención.

Partes. (Lo. 1; T. V; Capts. 1; II; LII; IV y V; arts. 43 a 71)

El articulado que refiere a quienes, en calidad de sujetos principales, intervienen en el proceso, procurando la protección jurisdiccional de su interés, se organiza en un Título que consta de cinco Capítulos: Generalidades, Postulación, Litisconsorcio, Intervención de Terceros y Responsabilidad de las partes o de sus apoderados en el proceso.

En el primer capítulo, que trata de las partes en general, se incluye entre éstas y junto a los típicos sujetos activo y pasivo originarios (demandante y demandado), al tercero que adviene 1 proceso en función y protección de su interés personal, di recto y legítimo, eventualmente involucrado en la situación que se discute.

Se regula, seguidamente, lo atinente a la capacidad, la re presentación, asistencia o autorización en los casos de incapacidad total o relativa y la sustitución de partes, así como las con secuencias que derivan de la modificación de la capacidad, muerte o extinción de aquellas, sobrevenida durante el curso del pro ceso, así como la hipótesis de la sucesión por transmisión, por acto entre vivos, de la cosa litigiosa (art. 47-2); todo de conformidad a las pautas doctrinarias y positivas comúnmente admitidas.

En el capítulo dedicado a la Postulación, se estatuye la obligatoriedad del patrocinio letrado como regla y sin perjuicio de las excepciones que la Ley establezca en situaciones especiales, que den fundamento bastante para prescindir de esta verdadera garantía procesal.

La representación convencional se regula previendo las formalidades de su constitución, los límites de las facultades del re presentante procesal, la forma y oportunidad de acreditarla y los modos y consecuencias de su cesación.

Junto a la representación convencional se disciplina la excepcional procuración oficiosa, para asegurar la debida protección de los derechos en situaciones de especial urgencia (art. 52) y, atendiendo a los requerimientos de una actual y aguda problemática, necesitada de una pronta y adecuada solución, se establece una específica normativa en materia de legitimación en los casos de los llamados intereses difusos (art. 53), que es complementada en el capítulo que trata de la eficacia de la sentencia (art. 194) con una solución recogida del moderno ordenamiento procesal brasileño.

El siguiente capítulo trata del fenómeno de la pluralidad de integrantes de las partes, previendo las clásicas modalidades del litisconsorcio (facultativo y necesario) y sus respectivas consecuencias procesales.

En materia del litisconsorcio necesario, sea éste activo o pasivo, el art. 57 del Anteproyecto ha optado por una solución que recoge la opinión mayoritaria de los miembros del Instituto.

Sin desconocer el indiscutible peso de los fundamentos de la solución contraria y el prestigio y autoridad de quienes la defienden, se ha entendido más conveniente no instituir la regla de la integración de oficio en los casos de proposiciones defectuosas, por las obvias dificultades prácticas que enfrentará el Tribunal para citar a los litisconsortes necesarios omitidos.

En su lugar, se ha considerado más práctico gravar a la par te promotora con la carga de proponer de manera subjetivamente correcta su pretensión, so pena de no dar curso a su demanda; o, para el caso de advertirse o denunciarse el defecto estando ya en trámite el proceso, suspendiéndolo hasta tanto ese defecto no sea apropiadamente corregido.

En cuanto a la intervención de terceros en el proceso, en el capítulo específicamente destinado a su regulación, se precisan sus modalidades (coadyuvante, litisconsorcial, excluyente, voluntaria, provocada, y la denuncia o nominación de terceros); los requisitos, formalidades y oportunidades para la intervención de los terceros y las consecuencias procesales de esa intervención.

Sin perjuicio de la remisión a las disposiciones particulares del Libro II (Desarrollo de los procesos) en materia de procedimiento de las tercerías, se precisa lo concerniente a las formalidades del acto inicial de intervención (art. 60-1), su oportunidad, según se trate de tercería coadyuvante o excluyente (art. 60-2) o de la necesaria por citación (art. 61), así corno la eventual oposición en esta última hipótesis (art. 62).

Con respecto a la denuncia de terceros, el inciso final del art. 63 establece un principio general de indiscutible aplicación.

Este capítulo incluye, por fin, una norma (art. 64) que dota al Tribunal y al Ministerio Público de los medios y poderes necesarios para impedir el proceso fraudulento o colusorio.

En el capítulo V se establecen las reglas relativas a la imposición de condenaciones pecuniarias como derivado o consecuencia de la actuación en el proceso.

Se fija como principio (art. 66) el del pago de los gastos por el vencido en el incidente o en el proceso; punto en el cual se recoge, aquí también, la opinión mayoritaria de los integrantes del Instituto, frente a la que se alzaron importantes voces discrepantes. Como excepción, se estatuye la prevenida por el art. 67, cuya racionabilidad no puede suscitar dudas de especie alguna; así como tampoco la regla de la condenación al vencedor en la hipótesis prevista por el art. 68.

La solución de la condena en los gastos al vencido cuenta con el apoyo de la doctrina mayoritaria, que se inclina por el criterio objetivo y no por el subjetivo de la conducta de las partes y es el seguido por casi todos los ordenamientos procesales modernos.

Otras normas regulan especificidades de la condenación en gastos causídicos, como los casos de situaciones litisconsorciales (art. 69) o de responsabilidad solidaria de los apoderados (art. 70).

Expresamente se establece, además y más allá de la concretada a los meros gastos del proceso, la responsabilidad patrimonial del litigante que abusa de manera temeraria o maliciosa de las vías legales, posibilitándose

que en el mismo proceso o en otro ulterior promovido a tales efectos resarcitorios, se le condene a indemnizar a su contraparte por los daños y perjuicios que el proceso le haya irrogado. La solución no es sino una particular consagración de la vigencia de la regla moral en el proceso.

Actividad procesal. (Lo. 1; T. VI; Capts. 1; II; III; IV; y; VI; VII; arts. 72 a 262).

En lo que refiere a los ACTOS PROCESALES, se han escogido las normas que se consideran mínimas para ser establecidas en los Códigos, según la doctrina más recibida y con forme al modelo de alguno de los cuerpos de leyes más modernos.

Se ha establecido el principio del predominio de la voluntad declarada sobre la real (art. 72).

En cuanto a las formas, se instituye el principio general del finalismo, disponiendo que a falta de forma prevista, predomina la que sea idónea a los fines perseguidos (art. 74).

En materia de comunicación de los actos procesales, se acoge la institución de que las partes están a derecho, previéndose la notificación con la publicación de la providencia en la sede del Tribunal (art. 88); principio que el Instituto había declarado de conveniente aplicación a partir de las IV Jornadas (Caracas) e incluido en las Bases.

Respecto a las nulidades, la cuestión más discutida lo fue la del principio de especificidad. Una importante parte de la doctrina sostuvo que no debía establecerse y, de consiguiente, no limitar los casos de nulidad a las hipótesis expresamente previstas por la Ley. El artículo 104 fija el criterio que, según el entender de los integrantes de la Comisión Redactora, es el más adecuado, amén de ser el sostenido por la mayoría de los miembros de nuestro Instituto.

En cuanto a los MEDIOS DE PRUEBA, se establece a texto expreso la regulación de los más usuales y frecuentes y, también, la previsión que permite la utilización de todos los no previstos expresamente, excepción hecha de ser prohibidos por la Ley (art. 136-2).

En textos específicos, se regula la declaración de parte, las reproducciones y experimentos, la prueba por informe, siguiendo los modelos de los más modernos Códigos del área (Argentina, Colombia, Guatemala, etc.).

En lo que concierne al tema de la valoración de la eficacia de la prueba, se establece el sistema de la apreciación racional de conformidad a las reglas de la sana crítica, en todo lo que no esté expresamente regulado por la Ley de fondo (prueba tasada) (arts. 130 y 131).

El diligenciamiento de la prueba se dispone de conformidad con los demás principios que establece el Anteproyecto: proceso por audiencia, inmediación, amplias facultades del juzgador y concentración, en una o dos audiencias, de todo el procedimiento (art. 132 y concordantes).

En punto a las RESOLUCIONES JUDICIALES no hay in novaciones especiales que señalar.

Se han seguido clasificaciones tradicionales (art. 183) y se han preferido indicaciones generales que reúnan los elementos fundamentales que han de contener las providencias, Sin penetrar en las formalidades que en cada país se formularán de acuerdo a sus tradiciones (art. 184).

Las soluciones sobre cosa juzgada y eficacia de las providencias, recogen el consenso establecido en las diversas jornadas (art. 188 a 195).

Se precisan los efectos con referencia a terceros y se introducen las variantes que en materia de intereses difusos y en los casos de personas indeterminadas emplazadas, aconseja la generalidad de la doctrina (art. 194 y 195).

En cuanto a los MEDIOS IMPUGNATIVOS, se reproducen los recursos más recibidos en los Códigos del área.

A este respecto y en este breve análisis, solamente habremos de destacar algunos aspectos esenciales de la organización proyectada.

En primer término que, naturalmente, no pretende ni ha considerado la modificación de los recursos constitucionales que están previstos en nuestros países, tales como el amparo, la in constitucionalidad de las leyes o el mandado de segurança. Institutos, todos, de raigambre americanista que, en lugar de limitarse, se han expandido en la región.

En segundo término, cabe señalar que se consideró, a consecuencia de la discusión suscitada sobre el tema, la posibilidad de establecer un sólo recurso de ilegalidad más general y, a la vez, limitado, que sustituyera la casación; pero creyendo recoger la mayoría de las opiniones se incorporó ésta, regulándola según las modernas tendencias de la doctrina y la jurisprudencia y según lo establecido en las Bases.

Se consideró, asimismo, la necesidad de la unificación de la jurisprudencia o el establecimiento de lo que en algunos países se llama "doctrina legal o jurisprudencial", sea a través de los fallos plenarios o de la obligatoriedad de la doctrina fijada en casación, pero se concluyó que tampoco existía una clara mayo ría de opiniones para así establecerlo.

Respecto del amparo (de tan importante desarrollo en México y varios países del área que se han inspirado allí) existe la proposición de una ley modelo, preparada bajo la dirección del profesor Rivas por los colegas de La Plata (Argentina) que, en tendemos,' amerita un más profundo estudio, aun cuando se compartan la mayoría de las soluciones.

En definitiva se proponen soluciones "tipo" para un Código Procesal Civil el cual, naturalmente, en cada país, deberá seguir los principios más generales admitidos, en especial si aparecen consagrados en las respectivas constituciones.

Procesos preliminares. (Lo. II; T. 1; Capts. 1; II; III y IV; arts. 263 a 273)

En esta materia y sin perjuicio de lo ya dicho, se procura la "vuelta a las fuentes", reforzando el instituto de antigua prosapia iberoamericana.

En la alternativa —conciliación antes o durante el juicio— optamos por acoger los dos institutos, por entender que así se cubre mejor la necesidad de la composición de los litigios, procurando la consciente aplicación del derecho por los que están involucrados en la cuestión.

Se mantiene el proceso provocatorio, inspirado en el principio de la igualdad de las partes en relación a la iniciación del proceso (arts. 268 a 270).

Se establece la regla para el proceso prejudicial y se dispone un procedimiento y un criterio general para las medidas preparatorias (art. 271 a 273).

Proceso cautelar. (Lo. 11; T. II; Capts. 1 y II; arts. 274 a 281)

En la regulación de este proceso, se han seguido las orientaciones de los más modernos Códigos del área o la de aquellos que les han servido de modelo.

Se regulan, en el artículos elementos del proceso cautelar, las facultades del Tribunal y de las partes, así como sus respectivos deberes.

Se ha creído del caso facultar al Tribunal, no sólo para modificar la medida solicitada por la parte, haciéndola menos gravosa cuando, aún así, cumple con la finalidad perseguida, sino también para reformar, en ese sentido, la decisión ya adoptada.

Se mencionan, asimismo, las principales medidas que pueden ser dispuestas dentro del proceso cautelar, incluyendo las más recientemente aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia.

Finalmente, se recoge la moderna solución del derecho comparado respecto a la existencia de un derecho cautelar genérico del órgano jurisdiccional, así corno la inclusión, dentro del género del proceso cautelar, de las medidas provisionales y anticipativas.

PROCESOS INCIDENTALES (Lo. II; T. 111; Capts. 1; II; III y IV; arts. 282 a 296)

Con relación a los incidentes se establecen los criterios de procedencia general y las consecuencias que ello trae para el proceso principal.

Se indica un procedimiento general y algunos de los antecedentes más comunes y que requieren alguna disposición particular en relación a los restantes.

Proceso de conocimiento. (Lo. II; T. IV)

El Título IV comprende cuatro capítulos que regulan tres diversas estructuras procesales.

Proceso ordinario (Lo. II; T. IV; Cap. 1; arts. 297 a 305)

Se regula, en este capítulo 1, la forma procedimental tipo, organizándola, como ya fue ampliamente explicado, siguiendo el sistema mixto (escrito y oral), con predominio de la audiencia. En especial, la preliminar. Como ya se ha dicho, se optó por con firmar la función conciliatoria en la audiencia, al Juez. No obstante y por pedido de prestigiosos colegas, no se impide la posibilidad de crear conciliadores especiales para que, al 'lado del tribunal, realicen tal función. Tal como se prevé en el Código Mexicano (del Distrito Federal) reformado. O según resulte de la experiencia de cada país (dado que ya, en el área, la Justicia conciliatoria resulta, aunque limitada, una apasionada experiencia).

La audiencia preliminar puede ser seguida por una segunda, para el desahogo de las pruebas, las breves alegaciones orales de las partes y la sentencia del Tribunal. El que se procura que adelante su fallo en ese acto, aunque luego se expidan los fundamentos en un plazo breve posterior; a partir de cuyo conocimiento comienzan a contarse los plazos para recurrir.

Sobre la base de este proceso tipo —por audiencia —es que se organiza el resto de los procedimientos especiales, adaptándolos, en cada caso, a la función que se les asigna.

Proceso extraordinario (Lo. II; T. IV; Cap. II; arts. 306 a 307)

Difiere del ordinario solamente en que se prevé una sola audiencia, en la que se concentrará todo el trámite, debiendo la sentencia pronunciarse, conjuntamente, sobre todas las excepciones y defensas y en que se limita la probanza de segunda instancia.

La revisión en proceso ordinario se establece para aquellos casos en que se sentencia "rebus sic stantibus".

Disposiciones generales (Lo. II; T. IV; Cap. III; arts. 308 a 310)

En este capítulo se indica cuando procede el proceso ordinario y cuándo el extraordinario y se establecen reglas propias de específicas pretensiones (laborales, de familia, etc.).

Proceso de estructura monitoria (Lo. II; T. IV; Cap. IV; arts. 311 a 316)

En este capítulo IV del Título IV del Libro U y aplicado a una serie de objetos procesales, se regula el proceso de estructura monitoria.

Las peculiaridades de esta estructura, su particular aptitud para el efectivo logro de la tan reclamada celeridad sin desmedro de las garantías del debido proceso, han sido ya analizadas.

En lo que estrictamente refiere al juicio ejecutivo, ya se ha dicho que su trámite se ajusta a la estructura monitoria; por lo que, presentada la' demanda (acompañada, necesariamente, del título ejecutivo) el Tribunal realiza un examen preliminar de su admisibilidad y de fundabilidad; y, de concluir que se cumplen con los presupuestos exigibles, dicta inaudita altera parte, sentencia despachando ejecución, mandando trabar embargo y citar de excepciones al deudor. La eficacia del mandato de ejecución queda librada a la actitud que asuma el deudor: firmeza y consecuente ejecución, si no se oponen excepciones admisibles; no adquisición de esa firmeza y apertura de una etapa de cognición, si se oponen tales excepciones, debiéndose, entonces, estar a lo que se resuelva en la sentencia sobre el excepcionamiento, luego de la sustanciación del caso (art. 313-3 a 7).

Se ha establecido la limitación de la cognición, al preceptuarse que sólo podrán oponerse las excepciones taxativamente enumeradas por las leyes especiales propias de cada tipo de título ejecutivo y el rechazo de plano de las inadmisibles; por lo que el proceso es verdaderamente sumario (art. 313-4).

Se ha insertado en la estructura monitoria, guardando paralelismo con lo proyectado para el proceso ordinario, una etapa oral (en audiencia) para el momento posterior a ser contestadas o darse por contestadas las excepciones y, también, cuando hubiere vencido el plazo para oponerlas sin así haberse hecho. En tal momento, se convoca a audiencia cuyo objeto, en el caso de haberse opuesto excepciones, es similar al de la audiencia preliminar y complementaria de prueba del proceso ordinario; en el caso de no haberse opuesto excepciones, el objeto de la audiencia es concertar los medios para el cumplimiento del mandato de ejecución (313-6).

Se limita la apelabilidad (314-1) y se admite la vía del juicio ordinario posterior como medio revisivo de lo decidido en el proceso ejecutivo (art. 315).

Respecto a este último punto no existió coincidencia entre los miembros del Instituto.

Mientras autorizadas opiniones sostuvieron lo innecesario de la previsión de tal vía impugnativa, otras, no menos va liosas, entendieron lo contrario; y aún mismo, dentro de estas últimas, existieron las que, por razones de economía procesal, admitieron la posibilidad de incoar el juicio ordinario revisivo durante el curso del proceso ejecutivo, sin necesidad de aguardar a su finalización.

La Comisión Redactora entendió conveniente regular la garantía que supone el juicio ordinario posterior revisivo del ejecutivo; especialmente

justificado, en el caso, por haberse establecido una limitación a las excepciones admisibles y ser necesario acordar al deudor la debida oportunidad procesal para plantear, en otro proceso, las defensas que no le fueron admitidas en el ejecutivo. Igualmente y por entender conveniente esperar al resultado del proceso ejecutivo para habilitar el planteo del proceso ordinario posterior, se determinó el momento preciso, a partir del cual se puede promover este último, estableciéndose, además, un plazo de caducidad para su proposición.

La etapa de ejecución, en sentido estricto (vía de apremio), no se regula específicamente para el proceso ejecutivo. Por razones obvias de buena técnica jurídica y tratándose de la ejecución de sentencia que condena el pago de cantidad líquida, se remite al procedimiento común de ejecución de sentencia de ese tipo (arts. 322 a 329).

Procesos de ejecución. (T. V; Cap. 1; II y III, arts. 317 a 332)

El título comprende tres Capítulos que tratan, respectiva mente, de las disposiciones generales en materia de procesos de ejecución, la vía de apremio para la ejecución de sentencias que condenan al pago de sumas de dinero y el procedimiento para la ejecución de sentencias que condenan a cosa diversa al pago de sumas de dinero (dar; hacer o no hacer alguna cosa).

En las Disposiciones generales se precisa cuando procede la ejecución de la sentencia, incluyéndose la ejecución provisoria (arts. 318 y 321), estableciéndose, en concordancia con el principio dispositivo, la necesidad del requerimiento de parte (art. 317).

Atendiendo a la exacta puntualización de Couture de que "En el orden del derecho, ejecución sin conocimiento es arbitrariedad…" ("Fundamentos... etc."; N 288; 33 Ed.) se admite que el ejecutado, más allá de las facultades de controlar el cumplimiento de la sentencia conforme con la Ley (art. 319-2), pueda oponerse a la ejecución, en forma total o parcial, alegando la también total o parcial extinción de la obligación acaecida luego de la sentencia. Exigiéndose, para evitar la utilización de esa facultad con meros fines dilatorios, el acompañamiento de la prueba de la circunstancia extintiva, si ésta es documental y la concreta mención de los medios de prueba diversos de que intenta valerse para justificarla, estatuyéndose el rechazo liminar de plano, de toda otra defensa, así como de aquella que, en principio admisible, constituyendo cuestión de hecho, incumple con el requisito antes referido en materia probatoria (art. 319-3 y 4).

Se prevé, igualmente, la posibilidad de imponer, de oficio o a pedido de parte, conminaciones económicas o personales para incentivar el voluntario cumplimiento de la decisión jurisdiccional (art. 320).

En lo que refiere a la vía de apremio, se enumeran las hipótesis en las que procede (sentencia, transacción judicialmente aprobada, conciliación

lograda, laudo arbitral), sin perjuicio de los casos que pueda prever la Ley particular, (art. 322-1).

Tratándose de sentencias que condenan al pago de cantidad ilíquida, se establece el procedimiento de liquidación, previo a la vía de apremio propiamente dicha (art. 322-2 a 4).

Se regula, por fin, el procedimiento mediante el cual se ubican y sujetan a la ejecución, elementos del patrimonio del deudor, aptos o idóneos para ser realizados, las formalidades de esa realización y la etapa de liquidación del crédito reclamado (art 324 —el embargo—; 325 y 326 —subasta—; 327 —liquidación—).

En cuanto a la ejecución de sentencias que condenan a hacer, no hacer o a dar cosa diversa a una suma de dinero, el Capítulo III (arts. 330 a 332) regula el procedimiento para llevarla a cabo, previendo las hipótesis de conversión de la condena a condena al pago de suma de dinero en calidad de indemnización por los daños y perjuicios, en los casos de imposibilidad fáctica o jurídica de la ejecución en especie. Sin perjuicio de reiterar la posibilidad de aplicar conminaciones para lograr el cumplimiento voluntario específico.

Procesos voluntarios. (Lo. II; T. VI; Caps. 1; II y III; arts. 333 a 351)

Para estos procesos se establece el principio de la legalidad expresa, señalándose algunos generalmente admitidos; el pasaje de lo voluntario a lo contencioso; los sujetos intervinientes y el procedimiento general a aplicar, procurando una cierta unificación en los mismos.

Por la relativa importancia que suele darle la legislación, se establecen las reglas básicas del proceso sucesorio, así como, por su trascendencia, se regula el proceso de declaración de incapacidad.

PROCESOS CONCURSALES. (Lo. II, T. VII; arts. 352 a 362)

Sin perjuicio de lo que dispongan leyes específicas en la materia, se establecen algunas reglas fundamentales para los mismos, sobre la base de promoción del acuerdo entre el deudor y los acreedores; judicialización del proceso, evitando la ineficiente y excepcional primacía de la Junta de Acreedores; aumentando las tareas del Síndico y su representatividad; asegurando la defensa letrada y la actuación del concursado.

Se ha procurado, sobre tales bases, mantener las orientaciones más recibidas en la legislación comparada.

Proceso arbitral. (Lo. II; T. VIII; arts. 363 a 371)

En materia de proceso arbitral se procura facilitar su adopción, reconociendo la importancia del mismo y del que procuran consagrar las Cámaras de Arbitraje.

Con tal finalidad se disciplina con poco detalle y el máximo de sencillez, la cláusula compromisoria; el compromiso; la asistencia judicial; la actuación de árbitros uni o pluripersonales; con o sin Secretaría; el procedimiento, para el caso de no prever lo las partes; la conciliación obligatoria.

Normas internacionales. (L. II, Título IX Arts. 372 a 391)

En esta materia el Anteproyecto se limita a reproducir 1a9 soluciones más recibidas en el Derecho Internacional Privado y, sobre todo, en los Tratados suscritos en el ámbito americano de las CIDIP (1, II y III) a las que ya nos referimos que, por lo demás son similares a las adoptadas por los países europeos en su moderno derecho comunitario. El cual tomamos como modelo salvo las especialidades de nuestra área geográfico-cultural.

Remisión y entrada en vigencia. (Lo. II, Título X. arts. 392 y 393).

Se trata de normas de orden; la regulación de la vigencia de cada código corresponderá fijarla por los respectivos países. So lamente hemos querido establecer la forma de entrar en vigor, gradualmente, del nuevo régimen y la necesidad del aumento del número de tribunales que, junto a la dotación de los necesarios medios para el Poder Judicial, constituyen un presupuesto indispensable para la reforma de la Justicia en Iberoamérica.

ADOLFO GELSI BIDART – LUIS TORELLO – ENRIQUE VESCOVI

TEXTO DEL ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL MODELO PARA IBEROAMÉRICA

LIBRO 1 – DISPOSICIONES GENERALES

Título 1 — PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. (Iniciativa en el proceso).

La iniciación del proceso incumbe a los interesados; el Tribunal lo hará de oficio sólo cuando la ley lo establezca expresamente.

Las partes podrán disponer de sus derechos en el proceso, salvo aquellos indisponibles y podrán terminarlo en forma uni lateral o bilateral de acuerdo con lo regulado por este Código.

Art. 2. (Dirección del proceso).

La dirección del proceso está confiada al Tribunal, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Art. 3. (Impulso procesal).

Promovido el proceso, el Tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.

Art. 4. (Igualdad procesal).

El Tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso.

Art. 5. (Buena fe y lealtad procesal).

Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la Justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe.

El Tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

Art. 6. (Ordenación del proceso).

El Tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso.

Art. 7. (Publicidad del proceso).

Todo proceso será de conocimiento púb1ico, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el Tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad de alguna de las partes.

Art. 8. (Inmediación procesal).

Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, se realizarán por el Tribunal no pudiendo éste delegarlas so pena de

nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

Art. 9. (Pronta y eficiente administración de justicia).

El Tribunal y bajo su dirección los auxiliares de la jurisdicción, tomarán las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.

Art. 10. (Concentración procesal).

Los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratan do de abreviar los plazos cuando se faculta para ello por la ley o por acuerdo de partes y de concentrar en un mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar.

Art. 11. (Derecho al proceso).

11.1. Cualquiera tiene derecho a acudir ante los Tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones.

11.2. Para proponer o controvertir útilmente las pretensiones, es necesario invocar interés y legitimación en la causa.

11.3. El interés del demandante puede consistir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aún cuando éste no haya sido violado o desconocido o' de una relación jurídica o de la autenticidad o falsedad de un documento: también podrá reclamarse el dictado de sentencia condicional o de futuro.

11.4 Todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones.

Título II — APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES

Artículo 12. (Aplicación de la norma procesal en el tiempo).

Las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan, a los procesos en trámite.

No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni en los casos en que se supriman instancias, ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.

Así mismo, el Tribunal que esté conociendo en un asunto, continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva norma, modifique las reglas de competencia.

Art. 13. (Aplicación de la norma procesal en el espacio).

El Código regirá en todo el territorio sin perjuicio de lo dispuesto por las convenciones internacionales suscriptas y ratificadas por el Estado.

Art. 14. (Interpretación de las normas procesales).

Para interpretar la norma procesal, el Tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales.

En caso de duda se deberá recurrir a 'las normas generales teniendo presente los principios generales de derecho y especia les del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio.

Art. 15. (Integración de las normas procesales).

En caso de vacío legal se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes que rigen situaciones análogas y a los principios constitucionales y generales de derecho y especiales del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso.

Art. 16. (Indisponibilidad de las normas procesales).

Los sujetos del proceso no pueden acordar, por anticipado, dejar sin efecto las normas procesales, salvo en el proceso arbitral.

Título III — EL TRIBUNAL.

Capítulo 1 – Organización y funcionamiento

Artículo 17. (Organización).

La ley orgánica dispondrá lo concerniente a la designación, integración, competencia y funcionamiento de los diversos Tribunales.

Art. 18. (Indelegabilidad e inmediación).

17.1. Sólo el Tribunal es titular de la potestad jurisdiccional en su integridad. Los funcionarios auxiliares, incluido el Secretario y el Alguacil o Ujier, sólo realizarán los actos permitidos por la ley y por delegación y bajo la directa responsabilidad del Tribunal.

17.2. Dicha delegación sólo abarcará la realización de actos auxiliares o de aportación técnica, si los funcionarios revisten la idoneidad respectiva.

17.3. En el proceso por audiencia, se pronunciará la sentencia al final de ésta, pudiendo diferirse, si fuese menester, la reducción de los fundamentos del fallo o aún la redacción de la sentencia, en los casos previstos por la ley.

Art. 19. (Funcionamiento de los Tribunales colegiados).

19.1. Los Tribunales colegiados actuarán en dicha forma en todo el proceso; las delegaciones sólo serán las expresamente establecidas por la ley y en ningún caso se referirán al diligenciamiento de la prueba.

19.2. En el estudio, deliberación y adopción de sus decisiones, regirá en su máxima aplicación el principio colegiado. La de liberación será efectiva y no se limitará a la simple emisión del voto.

19.3. Salvo en las comunicaciones y actuaciones protocolares, que correspondan al presidente, el Tribunal actuará con la presencia de todos sus miembros en relación a otros sujetos procesales o extraños al proceso.

Art. 20. (Resolución anticipada).

Podrá dictarse resolución anticipada, realizándose el estudio en forma colectiva, en el acuerdo, cuando se tratare de asuntos reiteradamente resueltos o en los que exista jurisprudencia constante que decida mantenerse o verdadera urgencia o se advierta en la parte la mera intención de trabar el desarrollo del proceso.

Art. 21. (Asistencia judicial).

Los Tribunales se deben mutua asistencia y colaboración en todas las actuaciones que así lo requieran.

Art. 22. (Imparcialidad, independencia y autoridad del Tribunal).

22.1. Cada Tribunal es independiente en el ejercicio de sus funciones. Debe actuar con absoluta imparcialidad en relación a las partes.

22.2. Las decisiones del Tribunal deben ser acatadas por todo sujeto público o privado, los que, además, deben prestarle asistencia para que se logre la efectividad de sus mandatos.

Para lograr esta efectividad, el Tribunal podrá: a) utilizar el auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse a su solo requerimiento, b) imponer compulsiones o conminaciones, sean económicas, bajo forma de multas periódicas, sean personales, bajo forma de arresto dentro de los límites prefijados por la ley y abreviando la conducción forzada o el arresto.

22.3. La ley orgánica reglamentará las condiciones de selección y los medios económicos necesarios para preservar la independencia en los agentes judiciales.

Capítulo II – De la competencia

Artículo 23. (Criterios básicos).

23.1. Se realizará la división territorial por zonas que acerquen las sedes de los Tribunales a toda la población, evitando la exagerada concentración en las ciudades principales.

23.2. Para facilitar dicho acceso, en zonas apartadas y especialmente para los procesos sociales, la ley podrá establecer la intinerancia del Tribunal y éste disponer las sedes en que actuará.

23.3. Salvo los asuntos que por ley se tramiten en instancia única, habrá dos instancias en todo proceso.

23.4. En base a la naturaleza de la materia, su importancia práctica y el volumen de los asuntos que se tramiten, se procurará la especialización de los Tribunales, tanto en primera como en segunda instancia, conforme con lo que disponga la ley orgánica respectiva.

Art. 24. (Criterios eliminables).

No se admitirá la división de competencia por los criterios de avocación y delegación, salvo para asistencia judicial en diligencias determinadas fuera de la sede judicial.

Art. 25. (Principio de relatividad de la incompetencia).

La incompetencia es subsanable, salvo el caso de cuestión federal, instancia o proceso reservado a determinado Tribunal por razón de la materia.

Capítulo III – Estatuto de los Agentes

Artículo 26. (Porcentaje presupuestal).

Sobre la base de un estudio de la necesidad de Tribunales y de Agentes para una adecuada administración de 'la justicia, en el Presupuesto Nacional existirá un porcentaje del total, que no podrá ser disminuido, para solventar los gastos de aquella.

Art. 27. (Remuneración y otras prestaciones).

El sueldo de los Magistrados se fijará teniendo en cuenta la importancia de su función, el carácter de tiempo completo de su desempeño y la equiparación con funcionarios de similar jerarquía en el ámbito de la Administración y la Legislatura. Sin perjuicio, además, de su derecho a las demás prestaciones sociales, en especial vivienda, asignaciones familiares, descanso y similares.

Art. 28. (Magistrados y funcionarios).

El Estado aumentará el número de los jueces y disminuirá el de los funcionarios auxiliares al mínimo indispensable para 'la asistencia material de los primeros, conforme con lo que determine la Ley orgánica.

Art. 29. (Consejo Superior de la Magistratura).

29.1. Existirá un Consejo Superior de la Magistratura al que corresponderá todo lo relativo a la designación, ascenso, disciplina y cese de los Magistrados.

29.2. El Consejo Superior de la Magistratura se integrará conforme con la Ley orgánica judicial, pero de modo que no tengan en él predominio los órganos públicos de preferente extracción política; estarán representados en el mismo, en forma primordial, los Magistrados, las Facultades de Derecho y 1a profesión organizada de la Abogacía.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por la Constitución.

Art. 30. (Requisitos para la designación de Magistrados).

30.1. Para ser designado juez deberán reunirse especiales condiciones de aptitud: moral, relevada a través de sus antecedentes; psicológica, acreditada mediante los medios técnicos pertinentes; cívica y jurídica, la que se acreditará por medio del título de Abogado, salvo expresa disposición constitucional o legal en contrario.

30.2. La calificación del juez en sus diferentes aspectos, salvo el moral, deberá ser establecida por los pertinentes medios técnicos y, para el caso de paridad de condiciones, se utilizará el régimen de concurso.

30.3. Para el ascenso se tomarán en cuenta los requisitos indicados y la actuación del juez en el desempeño de sus funciones, debidamente calificados, de modo de asegurar una efectiva carrera judicial.

30.4. Para asegurar la introducción de elementos de cambio adecuados en los cuadros de la Magistratura, se reservará un porcentaje de los cargos para la designación de abogados especial mente calificados en su actuación profesional, oyéndose previa mente a los Colegios de Abogados y tomando en cuenta la 'lista de candidatos que éstos formulen.

30.5 Se procurará crear o mejorar las Escuelas Judiciales, como instrumento idóneo para la formación y perfeccionamiento de los Magistrados.

Art. 31. (Derechos y deberes).

31. 1. El Juez deberá ejercer sus funciones a tiempo completo, sin perjuicio de las funciones de docencia e investigación en materia jurídica, siempre que no interfieran con aquellas.

31.2. El Juez tendrá derecho a una justa remuneración, a una posición social de dignidad y autoridad, a la independencia en el ejercicio de sus funciones y a la inamovilidad en el cargo, salvo infracción grave a sus deberes, prefijada por Ley y debla rada por Tribunales en debido proceso en legal forma.

Art. 32. (Responsabilidad judicial y garantías).

32.1. La responsabilidad de los jueces no será directa frente a los justiciables, sino frente al Estado.

La responsabilidad de las actuaciones del Tribunal frente a 'los justiciables, corresponde al. Estado cuando se les cause daños injustos y siempre que así se declare en proceso en legal forma.

32.2. El proceso de responsabilidad judicial, civil o penal, será de competencia del Tribunal Supremo y requerirá la previa calificación de legalidad y seriedad que formule aquel en base a los medios de prueba ofrecidos.

El trámite será reservado, salvo la publicación de la sentencia que pueda disponerse.

32.3. La responsabilidad disciplinaria quedará reducida a lo casos especialmente tipificados por la Ley y el Juez podrá siempre optar por su dilucidación en el proceso de responsabilidad.

Capítulo IV – Deberes, facultades y responsabilidades del tribunal en el proceso

Artículo 33. (Facultades del Tribunal).

El Tribunal está facultado:

1) para rechazar in limine la demanda, cuando ella fuere manifiestamente improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido;

2) para relevar de oficio las excepciones que el Código así faculta;

3) para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda cuando el requerido aparezca equivocado;

4) para ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes;

5) para disponer en cualquier momento la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, para requerirles las explicaciones que estime necesarias al objeto del pleito;

6) para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes e impertinentes;

7) para rechazar in límine los incidentes que reiteran otros ya propuestos por la misma causa o cuando, a pesar de fundarse en causa distinta, ésta haya podido alegarse al promoverse uno anterior;

8) para rechazar in límine la intervención de terceros cuando la petición carezca de los requisitos exigidos;

9) para declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas e insubsanables y para disponer las diligencias que persiga evitar dichas nulidades;

10) para imponer a los procuradores y abogados sanciones disciplinarias y multas en los casos previstos legalmente;

11) para dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.

Art. 34. (Deberes del Tribunal).

34.1. El Tribunal no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley. En el juzgamiento del litigio deberá aplicar la regla de derecho positivo (art. 15) y sólo podrá fallar por equidad en los casos previstos por la ley o cuan do, tratándose de derechos disponibles, las partes así lo soliciten.

34.2. El Tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede el Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos alegados por las partes; la emisión en el cumplimiento de estos deberes, le hará incurrir en responsabilidad.

Art. 35. (Responsabilidad del Tribunal).
Los Magistrados serán responsables por:
a) demoras injustificadas en proveer,
b) proceder con dolo o fraude,
c) sentenciar cometiendo error inexcusable.

Título IV — EL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 36. (Atribuciones).
Compete al Ministerio Público representar y defender la causa pública en todos los asuntos en que se halle interesada e intervenir en cualquier proceso que pueda afectar los intereses generales de la sociedad.

Entre otros, el Ministerio Público intervendrá en el proceso civil en los siguientes casos:

1) Cuando se trate de procesos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas.

2) Cuando se planteen cuestiones de jurisdicción o de competencia.

3) Cuando se promueva proceso de responsabilidad judicial o de recusación del Tribunal.

4) Cuando la ley disponga su intervención, sea como actor, como demandado o como tercero.

Art. 37. (Modos de intervención)
El Ministerio Público intervendrá en los procesos como parte o como tercero, conforme lo disponga la ley en cada caso.

Art. 38. (Intervención como parte).
Cuando el Ministerio Público intervenga como parte, no podrá ser recusado y tendrá los derechos, facultades, deberes y cargas procesales que corresponden a la parte, salvo norma ex presa en contrario.

Art. 39. (Intervención como tercero).
39.1. El Ministerio Público intervendrá como tercero, fuera de los casos en que así lo establezca la ley, en aquellos en los cuales, pudiendo haber intervenido como parte, no lo hubiere hecho.

39.2. Cuando el Ministerio Público actúe como tercero, su intervención consistirá en ser oído, en realizar cualquier actividad probatoria y en deducir los recursos que correspondan, dentro de los plazos respectivos.

Art. 40. (Plazos).
40.1. Cuando el Ministerio Público actúe como parte, tendrá los mismos plazos procesales que correspondan a ésta.

40.2. Cuando actúe como tercero, dispondrá para expedirse del plazo de veinte días, salvo que deba hacerlo en una audiencia, vencidos los cuales pasará el expediente a conocimiento del subrogante sin más trámite y por única vez, dándose cuenta al superior jerárquico de la omisión.

40.3. En los casos que establezca la ley, el Tribunal podrá requerir, antes de dictar resolución, la opinión del Ministerio Público como auxiliar jurídico, sobre puntos de derecho cuestionables.

Art. 41. (Independencia).

El Ministerio Público es independiente en el ejercicio de sus funciones. Puede, en consecuencia, defender los intereses, que le están confiados, como sus convicciones se lo dicten, estableciendo las conclusiones que crea arregladas a derecho.

Art. 42. (Divisibilidad).

La opinión de un integrante del Ministerio Público no obliga a los demás.

Título V – PARTES

Capítulo 1 – Generalidades

Artículo 43. (Partes).

Son partes en el proceso, el demandante, el demandado y los terceros en los casos previstos por el Código.

Art. 44. (Capacidad).

Pueden comparecer por sí en el proceso las personas que tienen el libre ejercicio de los derechos que en él se hacen valer.

Las que no tienen, total o parcialmente, el libre ejercicio de sus derechos, comparecerán representadas, asistidas o autoriza das, según dispongan las leyes que regulan la capacidad.

Las personas jurídicas actuarán por intermedio de sus órganos o de sus representantes o personas autorizadas conforme a derecho.

Art. 45. (Representación y sustitución procesales).

45.1. Por la parte puede actuar un representante, sea establecido por la ley o por poder otorgado al efecto.

45.2. Nadie podrá pretender, en nombre propio, derecho ajeno, salvo cuando la ley lo autorice.

Art. 46. (Modificaciones de la capacidad durante el proceso).

46.1.. Si la parte que actúa por sí misma se incapacita durante el curso del proceso, los actos posteriores a la declaración judicial de incapacidad serán nulos. Los anteriores serán anulables si la incapacidad fuese notoria durante la realización de dichos actos.

El proceso se seguirá con el representante, quien será emplazado en la misma forma y con las mismas consecuencias que ri gen para el caso de demanda.

46.2. Si durante el curso del proceso se hiciere capaz una parte que no lo era, se seguirán con ella los procedimientos, luego de que se apersone debidamente.

Pero los actos consumados antes de esa comparecencia serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones que la parte pudiera tener contra su ex-representante por haber omitido comunicarle la existencia del pleito o por cualquier otra circunstancia.

Art. 47. (Sucesión de la parte).

47.1. Ocurrida la muerte o ausencia declarada de la parte que actúa por sí misma y salvo el caso de proceso relativo a derechos personalísimos, éste debe continuar con 1os sucesores, el cónyuge o el curador de la herencia yacente, en su caso.

La contraparte podrá solicitar el emplazamiento de estas personas sin necesidad de trámite sucesorio, procediéndose en la forma prevista para la demanda y con las mismas consecuencias. Entretanto, el proceso quedará suspendido, salvo que los autos se encontraren en estado de dictar sentencia, en cuyo caso la suspensión se producirá después de pronunciada.

47.2. En caso de transmisión por acto, entre vivos de la cosa litigiosa, el sucesor podrá sustituir a la parte en el proceso, salvo que se oponga la contraria, en cuyo caso el Tribunal resolverá. Ello sin perjuicio de la subrogación y del derecho a comparecer como tercero o litisconsorte de la parte, si se dan las circunstancias requeridas por la ley.

47.3 En caso de extinción de la persona jurídica, el proceso continuará con quienes la sucedan en su patrimonio.

Capítulo I – Postulación

Artículo 48. (Asistencia letrada).

La parte deberá comparecer a todos los actos del proceso asistida por abogado, debiendo el Tribunal rechazar los escritos que no lleven firma letrada e impedir las actuaciones que se pretendan realizar sin esta asistencia.

La ley establecerá las excepciones a este principio.

Art. 49. (Procurador).

La parte podrá actuar en el proceso representada por apoderado constituido conforme con la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y de la facultad del Tribunal para disponer la comparecencia personal de la parte.

Art. 50. (Poder).

El poder para litigar se entiende conferido para todo el pro ceso, sus diversas instancias, incidentes y etapas, incluyendo las preliminares, las de ejecución y el cobro de multas y daños y perjuicios emergentes del litigio

y habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales, salvo aquellos que la ley reserva a la parte. En todo caso se requerirá autorización expresa para realizar actos de disposición de los derechos, tales como el desistimiento, la transacción y otros.

Art. 51. (Justificación de la personería).

La personería deberá acreditarse con la presentación de los documentos habilitantes desde la primera gestión que se realice en nombre del representado. En casos de urgencia podrá admitirse la comparecencia sin presentar la documentación; pero si no se acompañase dentro del plazo que atendidas las circunstancias fije el Tribunal, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará los gastos procesales devengados. En todo caso, podrá ser responsabilizado por los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 52. (Procuración oficiosa).

Podrá comparecerse judicialmente a nombre de una persona de quienes se tenga poder siempre que se den las siguientes condiciones que la persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o ausente del lugar del juicio que quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, socio o comunero o que posea algún interés común que legitime esa actuación; que si la parte contraria lo solicitare, preste caución suficiente de que su gestión será ratificada por el representada o pagará los daños y perjuicios en el caso contrario y si así correspondiere.

Art. 53. (Representación en caso de intereses difusos).

En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la Ley o a juicio del Tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido.

Art. 54. (Cesación de la representación).

La representación de los apoderados cesará:

l) por la revocación del poder, desde que se apersonen el proceso la parte o el nuevo apoderado; la sola presentación del mandante no implica revocación del mandato si es que no lo manifiesta expresamente.

2) Por la renuncia del apoderado, quien deberá continuar sus gestiones hasta que el Tribunal disponga el emplazamiento de la parte y ésta comparezca o sea declarada rebelde conforme con las normas establecidas para la demanda.

3) Por haber cesado la representación conforme con las reglas generales del derecho sustancial. No obstante, ante la muerte, ausencia declarada o incapacidad del poderdante, el apoderado continuará ejerciendo su

personería hasta que los herederos o representantes legales sean debidamente emplazados y transcurra el plazo para su comparecencia.

4) Por la muerte o inhabilitación del apoderado, en cuyo caso el proceso quedará en suspenso, poniéndose al hecho en conocimiento del poder poderdante conforme con lo dispuesto en el numeral segundo de este artículo.

El apoderado será responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivar de su omisión en denunciar debidamente y ante quien corresponda, los hechos modificativos de su personería.

Capítulo III – Litisconsorcio

Artículo 55. (Litisconsorcio facultativo).

Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra.

Los litisconsortes facultativos, salvo disposición legal en contrario, serán considerados como litigantes independientes.

Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

Art. 56. (Litisconsorcio necesario).

Cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial que sea objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia útilmente sin la presencia (litisconsorcio activo) o el emplazamiento (litisconsorcio pasivo) de todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstos deberán todos ser emplazados en forma legal.

En este caso los recursos y demás actuaciones procesales de cada uno favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos los litisconsortes.

Art. 57. (Poderes del Tribunal).

En el caso de litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el Tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto no se cumpla ese requisito. La misma facultad tendrá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal.

Cuando el defecto se denuncie o se advierta por el Tribunal fuera de esta oportunidad, se procederá de la misma manera.

Capítulo IV – Intervención de terceros

Artículo 58. (Intervención coadyuvante y litisconsorcial).

Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha par te es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

Podrán intervenir en un proceso, como litisconsortes de una parte, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial que podría verse afectada por la sentencia a dictarse y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

Art. 59 (Intervención excluyente).

Quien pretende en todo en parte la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y el demandado, para que en el mismo proceso se la considere.

Art. 60. (Requisitos y forma de la intervención).

60.1. Los terceros deberán fundar su intervención en un interés directo, personal y legítimo. La solicitud se ajustará a las formas previstas para la demanda, en lo que fueren aplicables.

60.2 La intervención sólo podrá producirse en la instancia hasta la conclusión de la causa para sentencia; la excluyente sólo en la primera instancia, la coadyuvante y litisconsorcial también durante el curso de la segunda instancia.

60.3 El procedimiento de intervención de terceros se regulará conforme con lo dispuesto en el Libro II, en los artículos 291 y 292.

Art. 61. (Intervención necesaria por citación).

El demandado, en el plazo para contestar y sin perjuicio de hacerlo, podrá solicitar la citación de un tercero en garantía o de aquél respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El citado no podrá objetar la procedencia de su citación y deberá comparecer teniendo los mismos derechos, deberes y cargas del demandado.

Art. 62. (Oposición al llamamiento de terceros).

La contraparte podrá oponerse a la citación de un tercero y el Tribunal resolverá la procedencia de la misma por auto interlocutorio, que sólo será apelable cuando rechace la intervención.

Art. 63. (Denuncia de terceros.)

El demandado, en un proceso en el que considere que otra persona, además o en lugar de él, tiene alguna obligación o responsabilidad en la cuestión controvertida, debe denunciarle, indicando su nombre y domicilio a los efectos que se le notifique del pleito, bajo responsabilidad de los daños y perjuicios que correspondieren por su emisión.

Art. 64. (Llamamiento ex-oficio en caso de fraude o colusión).

En cualquiera de las instancias, siempre que se presuma fraude o colusión en el proceso, el Tribunal de oficio o a petición del Ministerio Público, ordenará la citación de las personas que puedan ser perjudicadas, para que hagan valer sus derechos, pudiéndose a tal fin suspender el proceso hasta por cuarenta días.

Art. 65. (Irreversibilidad del proceso).

Los intervinientes y sucesores en el proceso lo tomarán en el estado en que se encuentre en e1 momento de su intervención.

Capítulo V – Responsabilidad de las partes, sus abogados y apoderados en el proceso

Artículo 66. (Condenaciones. Regla general).

El auto interlocutorio o la sentencia definitiva condenarán al vencido en el incidente o en el proceso, a pagar al vencedor todas las costas y demás gastos.

Ello sin detrimento de los daños y perjuicios que correspondieren.

Art. 67. (Excepciones).

No se impondrá condena al vencido cuando se le haya dado la razón en parte o cuando se allanare a las pretensiones del de mandante reconociéndolas como fundadas, sin dar lugar a la continuación del proceso, una vez que se le haya notificado debida mente de las mismas o conozca los instrumentos de los que deriva la razón de su adversario. En todo caso, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno y efectivo.

Art. 68. (Condena al actor).

Cuando resultase de los antecedentes del proceso que el de mandado se ha allanado a la demanda dentro del término para contestarla, y que no ha dado motivo para su interposición, el actor será condenado a pagar todas las costas y gastos del proceso.

Art. 69. (Condena en caso de litisconsorcio).

Tratándose de condena al pago de las costas y gastos del proceso contra litisconsortes, el Tribunal, atendidas las circunstancias del caso, determinará si la condena es solidaria o la forma en que habrá de dividirse entre aquellos.

Art. 70. (Responsabilidad del apoderado).

El abogado o el apoderado podrán ser condenados en costas, solidariamente con su patrocinado o poderdante, cuando de su actividad surja mérito por ello en forma manifiesta.

Art. 71. (Daños y perjuicios).

Cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas, la parte podrá ser condenada además, a los daños y perjuicios, sea en el mismo proceso o en otro posterior. Y en caso de que su abogado o apoderado resulte también culpable, podrá ser condenada solidariamente con la parte. Ello sin perjuicio de las reclamaciones que la parte pueda efectuar por los daños y perjuicios que haya debido pagar por culpa del abogado o apoderado.

Título VI— DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

Capítulo 1 – Disposiciones Generales

Sección 1: De los actos procesales en general

Artículo 72. (La voluntad en los actos procesales).

Los actos procesales se presumirán siempre realizados voluntariamente, prevaleciendo la voluntad declarada, salvo disposición en contrario o prueba fehaciente de que ha sido formulada por violencia, dolo o error no culpable.

Art. 73. (Requisitos de los actos procesales).

Además de los requisitos que en cada caso se establezcan; los actos deberán ser lícitos, pertinentes y útiles.

Habrán de ser realizados con veracidad y buena fe y tener por causa un interés legítimo.

Art. 74. (Forma de los actos procesales).

Cuando la forma de los actos procesales no esté expresamente determinada por la ley, será la que resulte indispensable e idónea para la finalidad perseguida.

Art. 75. (Idioma).

En todos los actos procesales se utilizará, necesariamente, el idioma nacional. Cuando deba ser oído quien no lo conozca, el Tribunal nombrará un intérprete.

Sección II: Escritos de las partes

Artículo 76. (Redacción y suscripción de los escritos).

Los escritos de las partes deberán ser redactados a máquina o a mano, en forma fácilmente legible y suscriptos por ellas.

Art. 77. (Copias).

De todo escrito o documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente legibles, como personas hayan de ser notificadas.

Art. 78. (Constitución de domicilio).

78.1. Tanto el actor como el demandado y los demás que comparezcan en el proceso, deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, el domicilio que constituyen en el área correspondiente al Tribunal ante el que comparecen, conforme con lo establecido por la ley o el reglamento.

El Tribunal mandará subsanar, en cualquier momento que la advierta, la omisión de este requisito. Si advertida no fuere subsanada, se tendrá por constituido el domicilio en los estrados a todos los efectos.

78.2 Cualquier cambio de domicilio deberá comunicarse de inmediato, teniéndose por á1idas, en su defecto, las notificaciones que se realicen en el domicilio anteriormente constituido.

78.3. Practicada al demandado la primera notificación en el domicilio denunciado como el suyo en la demanda y si no compareciera constituyendo otro, se tendrán por válidas las notificaciones posteriores que allí se practiquen, aunque posteriormente mudara de domicilio, salvo que justificara sumariamente que no vivía en el domicilio denunciado al tiempo de la primera notificación.

Art. 79. (Documentos).

79.1. Los documentos que se incorporen al expediente podrán presentarse en su original o facsímil, con certificación de su fidelidad con el original por quien legalmente correspondiere.

Sólo en caso de duda el Tribunal podrá solicitar, de oficio o a pedido de parte, la agregación del original.

79.2. Los documentos públicos expedidos en el extranjero deberán presentarse legalizados, salvo excepción establecida por leyes o tratados.

79.3. Todo documento redactado en idioma extranjero deberá acompañarse con su correspondiente traducción certificada como fidedigna, salvo excepción consagrada por leyes o tratados. Pero cuando se trate de libros o documentos muy extensos, podrá disponerse la traducción de só1 aquella parte que interesa al proceso.

Art. 80. (Expresiones ofensivas en los escritos).

Podrá el Tribunal mandar testar, haciéndolas ilegibles, la expresiones ofensivas de cualquier índole que se consignaren en los escritos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondieren.

Art. 81. (Recibo de entrega de escritos).

Todo interesado que haga entrega de un escrito judicial ante cualquier Tribunal, deberá acompañar, además de las copias a que refiere el artículo 77, otra copia de aquel. En ella, el funcionario que reciba el escrito, dejará constancia, en el momento de la presentación, de la fecha en que se efectúa la misma, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora, devolviendo esa copia al interesado.

Sección III: De las comunicaciones procesales

A) Comunicaciones a las partes.

Artículo 82. (Principio de notificación).

Toda actuación judicial, salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente notificada a los interesados mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Las pronunciadas en audiencias se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hubieran debido concurrir al acto.

Art. 83. (Régimen general de la notificación).

Entablada la demanda, el demandado será emplazado para contestarla, notificándole la resolución que así lo dispone con forme con lo regulado en la Sección II del Capítulo II de este Título.

Hecha esa notificación, las partes estarán a derecho en el proceso, teniéndose por notificadas de las resoluciones y actuaciones con la sola publicación de Las mismas en la oficina del Tribunal, de lo que se dejará constancia en el expediente, por la Secretaría.

Art. 84. (Régimen de excepción).

Serán notificadas en los domicilios de los interesados, salvo si se pronunciasen en audiencia y respecto de aquellas que hubieren concurrido o debido concurrir a la misma: la resolución que llama o cita a un tercero para que comparezca al proceso, la que recae en el pedido de diligencias preparatorias y el inicial de ejecución de sentencia, sentencia definitiva y las interlocutorias, la resolución que ordena la agregación de documentos, la primer resolución que se dicte en instancia de apelación y de casación y las que el Tribunal disponga expresamente sean notificadas en esa forma, siempre que no se trate de aquellas. pronunciadas en audiencia.

Art. 85. (Notificación por edictos).

En los casos que correspondiendo notificar a domicilio, se trate de personas indeterminadas o inciertas o cuyo domicilio no se conozca, la notificación se cumplirá por edictos publicados en el Boletín o Diario Oficial durante diez días continuos y hábiles. Podrá también ordenarse 'la propalación radial o televisiva conforme con la reglamentación que al efecto se dicte.

B) Comunicaciones a otras autoridades. Artículo 86. (Comunicaciones internas)

Cuando los Tribunales deban dar conocimiento de sus resoluciones a otras autoridades nacionales o formularles alguna petición para el cumplimiento de diligencias del proceso, lo harán por exhortos u oficios que se cursarán por correo.

Si hubiera urgencia, podrán disponer la comunicación por cualquier otro medio idóneo.

Art.87. (Comunicaciones internacionales).

Las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras se cursarán mediante exhortos y en la forma que dispongan los tratados y. las leyes nacionales al respecto.

Sección IV: De los plazos procesales

Artículo 88. (Carácter de los plazos).

Salvo disposición en contrario, los plazos señalados a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables. Pero las partes, expresamente y de común acuerdo, podrán suspender el curso de los plazos por el tiempo que estimen conveniente.

Vencido un plazo, se dará cuenta inmediata por la Secreta ría y, sin necesidad de petición alguna, se dictará la resolución que corresponda al estado del proceso.

Art. 89. (Comienzo de los plazos).

Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr, para cada una de ellas, el día hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza de la actividad a cumplirse, tengan el carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la última notificación.

Art. 90. (Transcurso de los plazos).

En los plazos que se cuentan por días y horas no se computarán los días inhábiles, pero si la duración excede de treinta días, se computarán los días hábiles y los inhábiles.

Todos los plazos que se cuentan por días u horas se suspenderán durante el período de receso de los Tribunales.

Art. 91. (Vencimiento de los plazos).

Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina del Tribunal del día respectivo.

Todos los plazos que venzan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.

Art. 92. (Días y horas hábiles).

92.1. Son días hábiles para la realización de los actos pro ce todos aquellos en los que funcionen las oficinas de los Tribunales.

92.2 Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de esas oficinas.

92.3. Para la realización de actos por empleados subalternos, fuera de la sede del Tribunal, será hábil la fracción del día que fije la reglamentación respectiva.

Art. 93. (Habilitación de días y horas inhábiles).

Podrá disponerse de oficio o a pedido de parte la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de actos y diligencias cuyo cumplimiento sea urgente y que no puedan diferirse sin grave riesgo para un derecho del interesado o del interés de la justicia.

Art. 94. (Principio general de suspensión de los plazos).

Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese. Sólo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito inevitable para la parte y que la coloca en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario.

Sección V: Audiencias

Artículo 9 (Presencia del Tribunal).

En los procesos que se desarrollan por audiencias, el Tribunal las presidirá por sí mismo, bajo pena de nulidad que compromete su responsabilidad funcional.

Al Tribunal incumbe la dirección de la audiencia y dispondrá de todas las facultades disciplinarias indispensable para asegurar su adecuada celebración.

Art. 96. (Continuidad de las audiencias).

96. 1. En los procesos que se desarrollan por audiencias, se deberán fijar las fechas de éstas con la mayor contigüidad posible a los efectos de procurar la continuidad del proceso y la identidad del titular del órgano jurisdiccional.

96.2. Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación, salvo que ello resultare imposible.

Art. 97. (Documentación de la audiencia).

Lo actuado en toda audiencia se documentará en forma re sumida, en acta que se labrará durante su transcurso o al cabo» de ella.

Las partes podrán solicitar lo que entiendan pertinentes para asegurar la fidelidad del resumen, estándose, en ese caso, a lo que el Tribunal resuelva en el acto y de modo inmediato.

El Tribunal podrá disponer la reproducción total o parcial de lo actuado utilizando los medios técnicos apropiados.

Art. 98. (Contenido de las Actas).

Las actas deberán contener:

1) El lugar y la fecha en que se labra y el expediente al» que corresponde;

2) El nombre de los intervinientes y la constancia de la inasistencia de los que debieron o pudieron estar presente, modificándose la causa de la ausencia si se conociere;

3) La relación sucinta de lo actuado en la audiencia;

4) Las constancias que la ley imponga para cada caso específico o que el Tribunal resuelva consignar.

Sección VI: De los expedientes judiciales

Artículo 99. (Formación de expedientes).

Con el escrito o acta inicial de cada asunto que se promueva, se formará un expediente al que se incorporarán sucesiva mente las actuaciones posteriores.

La reglamentación dispondrá la forma de llevarse esos expedientes, así como el modo de anotar en los mismos las constancias de los actos.

Art. 100. (Testimonios y certificados).

De cualquier expediente judicial podrán las partes o cualquier interesado obtener testimonios íntegro o parcial o certificado extractado.

La expedición de tales documentos deberá ser autorizada por el Tribunal, con noticia de la parte contraria, si la peticionaria fuera la otra, o de ambas, si el peticionante fuera un tercero; si se dedujera oposición, se estará a lo que el Tribunal resuelva de manera irrecurrible.

Art. 101. (Consulta de los expedientes).

Los expedientes judiciales o las actuaciones de los mismos permanecerán en las oficinas para el examen de las partes y de todos los que tuvieren interés en la exhibición, extremo este último que calificará el Secretario, con recurso verbal ante el Tribunal, teniéndose presente el principio establecido en el artículo 7.

Art. 102. (Archivo de expedientes).

Concluido un expediente o cuando las circunstancias lo aconsejen, se dispondrá su archivo.

En esa condición podrá ser consultado libremente, pero no retirado, sino de mandato judicial, para ser agregado a otros autos o para otra finalidad legítima y con calidad de oportuna devolución.

Art. 103. (Reconstrucción de expedientes).

Cuando por cualquier causa se hubiere perdido, destruido u ocultado el original de una actuación procesal necesaria, la copia autenticada de ella tendrá el mismo valor. Para su utilización, el Tribunal ordenará a quien la tenga que la consigne en Secretaría.

Cuando no haya copia de las actuaciones destruidas o desaparecidas, el Tribunal ordenará que se rehagan, para cuyo fin practicará las diligencias probatorias que evidencien su preexistencia y contenido.

Cuando la reconstrucción no fuere posible, el Tribunal ordenará, si lo entendiere necesario, la renovación de los actos, prescribiendo el modo de hacerlo.

Sección VII: De la nulidad de los actos procesales

Artículo 104. (Especificidad y trascendencia de la nulidad).

No puede anularse un acto procesal sino cuando un texto ex preso de la ley lo autorice.

Puede ser anulado, no obstante, cuando carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin.

La anulación no procede, aun en los casos establecidos precedentemente si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiese provocado indefensión.

Art. 105. (Reclamación de la nulidad).

La nulidad deberá ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, cuando la ley la califique expresa mente como insubsanable o el acto carezca de alguno de los requisitos indispensables para su validez.

En los demás casos, sólo podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva por haber sufrido perjuicios por su violación.

Art. 106. (Subsanación de la nulidad).

No puede pedir la anulación de un acto quien lo ha consentido aunque sea tácitamente.

Importa consentimiento tácito, el no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad hábil al efecto y por la vía correspondiente.

Art. 107. (Vías procesales para la reclamación de la nulidad).

La nulidad que afecta a la demanda principal o incidental, se debe reclamar por vía de excepción o de defensa, al contestarla.

La nulidad que afecta a los actos judiciales recurribles, se debe reclamar por vía del recurso de reposición y por el de apelación, cuando éste correspondiere.

Procede reclamar la nulidad por vía de demanda incidental cuando, sea por la naturaleza del acto, sea por otra circunstancia, no corresponda o haya sido imposible hacerlo por vía de re cursos o excepción; en tal caso la demanda incidental deberá ser deducida dentro de los veinte días siguientes al del conocimiento fehaciente del acto.

Art. 108. (Declaración de nulidad en segunda instancia).

El Tribunal de segunda instancia que debe pronunciarse sobre un recurso de apelación, deberá observar si se ha hecho valer, en el escrito

interponiendo el recurso, la nulidad de la sentencia o de actos de la primera instancia o si se ha incurrido en los mismos en alguna nulidad insanable.

En caso de que así fuere, examinará en el fallo, previamente, la nulidad y sólo en el caso de rechazarla se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se admitiere la reclamación y la declaración de nulidad hiciere imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se dispondrá el reenvío del proceso al estado en que se hallaba en el momento de causarse la nulidad.

Art. 109. (Extensión de la nulidad).

La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que son independientes de aquel. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de ella, ni impide que produzcan los efectos para los cua1es el acto es idóneo, salvo disposición legal expresa en contrario.

Capítulo II – Actos de proposicion

Sección 1: De la demanda

Art. 110. (Forma y contenido de la demanda).

Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá:

1) La designación del Tribunal al que va dirigida;

2) El nombre del actor y los datos de su documento de identidad, su domicilio real, así como el que se constituye a los efectos del juicio.

3) El nombre y domicilio del demandado.

4) La narración precisa de los hechos y la invocación del derecho en que se funda y los medios de pruebas pertinente, con forme con lo dispuesto en el artículo siguiente.

5) El petitorio formulado, con toda precisión.

6) El valor de la causa, si fuera determinable.

7) Las firmas del actor o de su apoderado y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

Art. 111. (De la prueba en la demanda).

111.1. Se acompañará a la demanda toda la prueba documental que se intente hacer valer.

Si no se dispusiere de alguno de esos instrumentos, se reseñará su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentra y se solicitarán las medidas pertinentes para su in corporación al proceso.

111.2. También deberá indicar el actor el nombre y domicilio de los testigos de que habrá de servirse, así como los demás medios de prueba de que habrá de valerse, solicitando su diligenciamiento. Lo relativo a la

declaración de parte se regirá por lo dispuesto en el Capítulo III, Sección II, de este Libro.

111.3. Sólo las pruebas supervenientes o las referidas a hechos nuevos o a los mencionados por la contraparte al contestar la demanda o la reconvención, podrán ser propuestas posteriormente.

Art. 112. (Contralor sobre la demanda).

112.1. Presentada una demanda en condiciones que no se ajusten a los artículos precedentes o a las disposiciones genera les que establecen las formalidades para la comparecencia en proceso, el Tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en el plazo que señale, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

112.2. Si el Tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión.

Si se interponen recursos contra el auto interlocutorio que rechaza la demanda por improponible, el Tribunal dará conocimiento de la misma y otorgará traslado de los recursos al demandado.

La resolución final que recaiga en este último caso, tendrá eficacia para ambas partes.

Art. 113. (Acumulación de pretensiones).

113.1. El demandante podrá acumular en una misma de manda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1) que se trate de pretensiones de igual o análoga materia o, si fueren diversas, que sean conexas entre sí;

2) que no sean contrarias entre sí, salvo el caso en que se proponga una como subsidiaria de la otra;

3) que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

113.2. También podrá acumularse en una demanda, pre tensiones de varios demandantes o contra varios demandados siempre que provengan de la misma causa o versen sobre el mismo objeto o se hallen entre sí en relación de dependencia, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

Art. 114. (Cambio de demanda).

114.1. Podrá cambiarse la demanda antes de que haya sido contestada.

114.2. Si después de contestada la demanda sobreviniere algún hecho nuevo con influencia sobre el derecho invocado por las partes en el proceso, éstas podrán alegarlo y probarlo hasta la conclusión de la causa; si fuera posterior a ese momento, podrán alegarlo y probarlo en segunda instancia. En todos los casos se concederá a la contraparte las facultades de contradicción y prueba correspondientes.

Art. 115. (Efectos de la demanda).

La demanda formalmente idónea determina la litispendencia desde la fecha de su presentación. En su virtud:

1) La competencia inicial no se modificará aunque posteriormente se alteran las circunstancias que la determinaron.

2) Las partes conservarán su legitimación aunque los hechos en que ésta se funde hubieren cambiado.

3) La pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los límites expresamente permitidos por el Código.

4) Queda excluida la posibilidad de iniciar otro proceso con el mismo contenido.

5) Se producirán los demás efectos jurídicos materiales legalmente establecidos.

Los efectos de la litispendencia podrán ser relevados a instancia de parte o de oficio, según corresponda.

Sección II: Del emplazamiento

Artículo 116. (Del emplazamiento).

El emplazamiento para contestar a la demanda se efectuará de la siguiente forma:

1) En el domicilio del demandado, si éste fuere conocido; en caso de encontrarse dicho domicilio fuera del área del Tribunal o en el extranjero, se procederá mediante oficio o exhorto conforme con lo dispuesto en el Código y en los Tratados Internacionales.

2) Por edictos, conforme con lo dispuesto por el artículo 85, cuando el demandado no tuviere domicilio conocido o se tratara de persona o personas indeterminadas o inciertas.

Art. 117. (Emplazamiento al apoderado).

El emplazamiento podrá hacerse en la persona del apoderado, con mandato suficiente, siempre que el mandante no se hallare dentro del área del Tribunal.

Art. 118. (Consecuencias de la incomparecencia).

Cuando el emplazado no comparezca a estar a derecho dentro del plazo correspondiente, se seguirá el proceso con las consecuencias que la ley determine según los casos. Cuando el emplazamiento se hubiere hecho por edictos y el emplazado no compareciere, se le nombrará defensor de oficio con quien se seguirá el proceso.

Art. 119. (Sanción por omisión).

119.1. La omisión o alteración de las formas del emplaza miento apareja la nulidad insanable del mismo.

119.2. No existirá nulidad si la forma utilizada ofreciera el emplazado las mismas o más garantías que las que el Código establece.

119.3. Tampoco podrá reclamarse la nulidad por quien ha comparecido en el proceso sin plantearla dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto, ni por quien se pruebe que ha tenido conocimiento fehaciente del proceso y omitido reclamar la nulidad dentro del plazo acordado (artículo 107).

Sección III: De la contestación y de la reconvención

Artículo 120. (Forma y contenido de la contestación).

120.1. Salvo disposición expresa en contrario, la contestación deberá presentarse por escrito y ajustarse a las normas establecidas para la demanda excepto en lo que resultare inaplicable.

120.2. El demandado deberá pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de los documentos que a ella se hubieren acompañado y cuya autoría le fuere atribuida.

Su silencio así como sus respuestas ambiguas o evasivas se tendrán como admisión de esos hechos y de la autenticidad de los documentos.

120.3. El actor y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar demanda y contestación conjuntamente.

Art. 121. (De la prueba en la contestación).

El demandado, al contestar, deberá acompañar la prueba con forme con lo dispuesto por el artículo 111 para el actor.

Art. 122. (Actitudes del demandado).

El demandado puede, eventua1r allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir actitud de expectativa, contestar contradiciendo o deducir reconvención.

Si adoptara más de una de estas actitudes, deberá hacerlo en forma simultánea y en el mismo acto.

Art. 123. (Excepciones previas).

El demandado ruede plantear como excepciones previas:

1) La incompetencia del Tribunal;

2) la litispendencia;

3) el defecto en el modo de proponer la demanda, la inadecuación del trámite dado a la misma o la indebida acumulación dé pretensiones;

4) la incapacidad del actor o de su representante o la falta de personería de este último;

5) la prestación de caución en el caso de procuración oficiosa. (Artículo 52);

6) el emplazamiento de terceros en los casos en que, según la ley, corresponde su llamamiento al proceso;

7) la prescripción o la caducidad;

8) la cosa juzgada o la transacción;

9) la falta de legitimación o interés, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda.

El Tribunal relevará de oficio la incompetencia absoluta, la litispendencia, la falta de representación, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la caducidad, la cosa juzgada y la transacción.

Art. 124. (Allanamiento a la demanda).

El demandado podrá allanarse a la demanda, reconociendo su fundamento y aceptando la pretensión; en este caso el Tribunal deberá dictar sentencia de inmediato, sin necesidad de prueba ni de ningún otro trámite.

Corresponderá, por el contrario, seguir los trámites del pro ceso respectivo, si la cuestión planteada es de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pueden ser probados por confesión.

Art. 125. (Actitud de expectativa).

Si la demanda debe ser contestada por quien no ha tenido participación personal en los hechos y carece de la posibilidad inmediata de informarse, como el heredero o el defensor de oficio, se podrá adoptar una actitud de expectativa.

Art. 126. (Reconvención).

126.1. La reconvención procederá únicamente:

a) cuando el proceso admita expresamente su proposición;

b) cuando de formularse •en proceso separado, procedería la acumulación;

126.2. Serán aplicables, en lo pertinente, todas las reglas establecidas respecto de la demanda.

Capítulo III – Pruebas

Sección 1: Reglas generales

Artículo 127. (Necesidad de la prueba).

Corresponde probar las afirmaciones de hecho efectuadas por las partes y que hayan sido controvertidas. También requieren prueba los hechos expresa o tácitamente admitido, si así lo dispone la ley.

Art. 128. (Exención de prueba).

No requieren ser probados:

1) los hechos notorios, siempre que no constituyan el fundamento de la pretensión y no sean admitidos por la contraparte.

2) los hechos evidentes,

3) los hechos presumidos por la ley; contra tales presunciones es admisible la prueba en contrario, siempre que la ley no la excluya.

Art. 129. (Carga de la prueba).

Corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del Tribunal ni a su apreciación, conforme con las regias de la sana crítica, de las omisiones o deficiencias en la producción de la prueba.

Art. 130. (Valoración de la prueba).

Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, racionalmente y con las reglas de la sana crítica salvo texto legal que establezca una regla de apreciación diversa; ello sin perjuicio del análisis que el Tribunal deberá realizar de todos los medios de prueba, indicando expresamente cuáles de ellos fundan principalmente su decisión.

Art. 131. (Regla de experiencia).

A falta de reglas legales expresas, para deducir del hecho percibido el hecho a probar, el Tribunal aplicará las reglas de la experiencia común, extraídas de la observación de lo que normalmente acaece.

Art. 132. (Producción de la prueba).

Todas las pruebas deben ser producidas en audiencia y con forme con lo que se disponga para cada proceso en particular, en el Libro II, salvo disposición especial en contrario.

Art. 133. (Prueba del Derecho).

El Derecho a aplicar, sea nacional o extranjero, no requiere prueba y el Tribunal y las partes podrán acudir a todo procedimiento legítimo para acreditarlo.

Art. 134. (Rechazo de la prueba).

134.1. Una vez que en la oportunidad correspondiente que den determinados los hechos a probar, el Tribunal rehusará a petición de parte o de oficio, el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o prohibidas por la regla de derecho (artículo 33, num. 6v).

134.2. Así mismo y al dictar sentencia, desechará las pruebas impertinentes.

Art. 135. (Prueba trasladada).

Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro y tendrán eficiencia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este último proceso, siempre que en el primitivo se hubieren

practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

Art. 136. (Medios de prueba).

136.1. Son medios de prueba los documentos, la declaración de parte, la de testigos, el dictamen pericial, el examen judicial y las reproducciones de hechos.

136.2. También podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la regla de derecho, aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley.

Art. 137. (Recurribilidad de las resoluciones judiciales relativas a la prueba).

Serán apelables con efecto diferido las resoluciones dictadas por el Tribunal sobre producción, denegación y sustanciación de la prueba.

Sección II: De la declaración de parte

Art. 138. Sin perjuicio de las facultades que asigna al Tribunal el artículo 33, numeral 59, las partes podrán recíproca mente pedirse posiciones o interrogarse en la audiencia de prueba. El interrogatorio también procederá respecto de cualquier litigante con interés distinto de aquel que lo solicita.

Art. 139. (Interrogatorio).

139.1. El interrogatorio se hará por el Tribunal, sea el dispuesto de oficio o por pedido de parte. Las preguntas recaerán sobre los hechos controvertidos; terminado el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus abogados, podrán interrogarse libremente, pero sujetos a la dirección del Tribunal conforme con lo dispuesto por el numeral 30 del artículo 151.

139.2. El interrogatorio de la parte podrá efectuarse por el Tribunal en el curso de cualquier audiencia, de oficio o a solicitud de la parte contraria,., sin necesidad de previa citación.

139.3. También podrá efectuarse, previa citación específica para ese acto y con la prevención a que refiere el ordinal siguiente, a iniciativa del Tribunal o a petición de parte que deberá formularse en la forma y oportunidad prescripta por el artículo140.

139.4. La incomparecencia a la citación sin causa justificada, así como la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación, en su caso, susceptibles de ser probados por confesión.

Art. 140. (Posiciones).

140.1. Las partes pueden ponerse recíprocamente posiciones. Deberán formular la solicitud respectiva con acompañamiento de pliego cerrado que las contenga, con antelación suficiente a la fecha de la audiencia de prueba

para permitir la citación del absolvente, salvo que la parte o su representante se encuentre presente en la audiencia preliminar, en cuyo caso se la tendrá por citada, con la simple manifestación respectiva de la contraparte y bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el ordinal siguiente.

140.2. La citación deberá entregarse en el domicilio constituido del absolvente con tres días de anticipación por lo me nos; en ella se apercibirá de que si no compareciere, se negare a responder o lo hiciere con evasivas, se le tendrá por confeso.

140.3. El pliego contendrá posiciones que serán redactadas en forma asertiva, no pudiendo versar cada posición más que sobre un concreto hecho o algún otro íntimamente vinculado.

Art. 141. (Formas).

141.1. La declaración y la absolución deberán ser hechas por la parte personalmente.

141.2. El Tribunal podrá disponer el interrogatorio de menores púberes, el que se efectuará en presencia de su representante, salvo caso de imposibilidad que el Tribunal apreciará.

141.3. Podrá interrogarse o citarse a absolver posiciones a los apoderados por los hechos realizados por éstos en nombre de sus mandantes.

141.4. Las personas jurídicas citadas, deberán designar a la persona física que la integra que habrá de comparecer al acto de interrogatorio o de absolución por su conocimiento de los hechos controvertidos; sin perjuicio de ello, el Tribunal podrá disponer o la parte contraria solicitar, el interrogatorio en calidad, de testigo de cualquier otra persona que tenga la condición de representante estatutario o legal de la persona jurídica o integrante de su dirección.

Art. 142. (Interrogatorio y absolución fuera del lugar del proceso.).

Cuando se tratare de parte que no haya constituido domicilio a los efectos del proceso o que comparece por intermedio de' apoderado, el interrogatorio o la absolución se podrán efectuar por medio de Tribunal comisionado, si la parte se domiciliara en el extranjero o en Lugar tan distante de la sede del Tribunal que hiciere razonablemente admisible su no concurrencia.

Art. 143. (Confesión).

143.1. Hay confesión cuando la parte o su representante, en el interrogatorio, al absolver posiciones o en cualquier otro acto escrito u oral del proceso, admite la veracidad de un hecho personal o de su conocimiento, desfavorable a su interés y favorable a la adversaria.

143.2. La confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la ley exige otro medio

de prueba o recayere sobre derechos indisponibles. Cesa de hacer fe cuando constare haber sido determinada por error, violencia o dolo.

143.3. La confesión ficta a que refieren los artículos 139. 4 y 140.2 hará también prueba, salvo en lo que resultare contra dicha por las demás pruebas producidas u otras circunstancias de la causa.

Sección III: De la declaración de testigos

Artículo 144. (Admisibilidad).

La prueba testimonial es siempre admisible, salvo que la ley disponga lo contrario.

Art. 145. (Testigos).

Podrá declarar como testigo cualquier persona física, excepto:

1) los menores de catorce años

2) los que por enfermedad o debilidad mental en el tiempo al cual debe referirse su declaración, eran incapaces de percibir el hecho a probar;

3) los que por debilidad o enfermedad mental al tiempo de la declaración, son incapaces de comunicar sus percepciones.

Art. 146. (Exenciones al deber de testimoniar).

146.1. Tienen la facultad de abstenerse de testimoniar el cónyuge, aún separado, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado y los afines en el primer grado y los padres e hijos adoptivos, salvo, para todos ellos, que el proceso refiera a cuestiones de estado o filiación y, en general, a cualquier hecho íntimo de la familia.

146.2. Así mismo pueden rehusarse a contestar preguntas. que violen su deber ó facultad de reserva, aquellos que están amparados por el secreto profesional o que por disposición de 1a ley deban guardar secreto.

Art. 147. (Testigos sospechosos).

Constituyen declaraciones sospechosas las de aquellos que, en concepto del Tribunal, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, de pendencia, sentimientos e interés en relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas similares.

Art. 148. (Prueba de las circunstancias de sospecha).

Las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad de testigos, serán acreditadas por las partes por cualquier medio idóneo, en la etapa de producción de la prueba y serán apreciadas por el Tribunal en la sentencia.

La admisión por el testigo de la circunstancia imputada, dispensa de toda otra prueba.

El Tribunal al valorar la prueba, tendrá en cuenta las circunstancias sospechosas que disminuyen la fe de quien presta la declaración.

Art. 149. (Petición de la prueba testimonial).

Cuando se solicite prueba testimonial se deberá indicar el nombre, edad, domicilio y profesión de los testigos y enunciarse, sucintamente, el objeto de la prueba.

Sobre cada hecho a probar no podrá proponerse más de cinco testigos, salvo que exista motivo fundado a juicio del Tribunal.

Art. 150. (Citación del testigo).

150.1. Los testigos serán citados con tres días de anticipación, por lo menos, por cédula en la que se señalará el deber de comparecer y la sanción para el caso de desobediencia.

150.2. Se prescindirá de la citación cuando la parte que propuso al testigo asumiere la carga de hacerlo comparecer; en este caso, si el testigo no concurriera sin justa causa, se prescindirá de su testimonio, salvo lo dispuesto en el artículo 33, numeral 5

150.3. El testigo que citado por el Tribunal rehusé comparecer, será conducido a presencia de aquel por la fuerza pública.

150.4 El testigo que rehusara declarar, incurrirá en desobediencia al Tribunal y éste podrá imponer su arresto hasta por cinco días.

Art. 151. (Audiencia de declaración).

La declaración de los testigos se realizará en audiencia presidida por el Tribunal interrogándose a cada uno separadamente, previa promesa o juramento de decir verdad y conforme con las siguientes reglas:

1) El Tribunal interrogará al testigo, en primer lugar, acerca de su nombre, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad, profesión, ocupación, estudios que haya cursado y demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha; a continuación ordenará al testigo que haga un relato de los hechos objeto de su declaración, interrogándole sobre ello.

2) El Tribunal exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de sus dichos, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento.

3) Terminado el interrogatorio por el Tribunal, las partes podrán interrogar libremente al testigo por intermedio de sus abogados, bajo la dirección del Tribunal, que en todo momento podrá hacer nuevas preguntas, rechazar cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria, dilatoria, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio.

4) El testigo no podrá leer notas ni apuntes, a menos que el Tribunal lo autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se considere justificado.

5) Concluida la declaración, el testigo sólo podrá ausentarse de la sede del Tribunal cuando éste lo autorice.

Art. 152. (Careo).

Podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, careos de los testigos entre sí o de éstos con las partes, con fines aclaratorios.

Art. 153. (Declaración por informe).

Podrán declarar por informe las autoridades gubernamentales y funcionarios que determine la reglamentación.

Art. 154. (Testigo falso).

Si el Tribunal que presencia la declaración considera que el testigo falta a sabiendas a la verdad, podrá disponer su inmediato arresto, sometiéndolo dentro de las veinticuatro horas siguientes, con todos los antecedentes, al Tribunal competente del orden penal.

Sección IV: De los documentos

Artículo 155. (Presentación del documento).

La parte que quiera servirse de un documento que tiene en su poder, podrá presentarlo al Tribunal en la forma establecida por el artículo 79.1 y en las oportunidades prescriptas al efecto (artículos 111.1, 111.3 y 121).

Art. 156. (Documentos en oficinas públicas).

La parte que quiera servirse de un documento que se encuentre en una oficina pública, podrá solicitarlo por intermedio del Tribunal. El abogado de la parte podrá también requerir di rectamente testimonio o facsímil auténtico del mismo, especificando el proceso al que se destina.

En caso de que el requerido se negare, invocando una causa de reserva, se estará a lo que decida el Tribunal al respecto.

Art. 157. (Documentos en poder de terceros).

Cuando las partes quieran servirse de documentos que están en poder de terceros, deberán solicitar al Tribunal que disponga su entrega, sea en original o en las copias que prevé el artículo 79.1.

El requerido podrá oponerse a esa entrega, si el documento fuese de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio, lo que apreciará el Tribunal.

Art. 158. (Documento en poder del adversario).

La parte que quiera servirse de un documento, que según su manifestación se halla en poder de su adversario, podrá pedir al Tribunal que intime a aquel su presentación en él plazo que se determine.

Cuando por otros elementos de juicio, la existencia y con tenido del documento resultare manifiestamente verosímil, la negativa a presentarlo podrá ser estimada cómo reconocimiento de ese contenido.

Art. 159. (Prueba de libros de comercio).

La prueba de libros y demás documentación comercial se regirá por las disposiciones de las leyes mercantiles.

Art. 160. (Autenticidad de los documentos).

160.1. El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad, igual regla se aplicará respecto al documento privado cuyas firmas se encuentren autenticadas por notario o autoridad competente.

160.2. Los demás documentos privados, suscriptos por la parte o manuscritos por la misma, se tendrán por auténticos, salvo que se desconozca la firma o, en el segundo caso, la autoría, en las oportunidades que se indican en el artículo siguiente o se impugnen mediante tacha de falsedad.

Art. 161. (Desconocimiento de la firma o de la autoría del privado suscripto o manuscrito por la parte).

Si los documentos se presentan con la demanda o con la re convención, la parte contraria sólo podrá desconocerlos al con testarlas.

Si se presentan con la contestación de la demanda o de la reconvención o en cualquier otra oportunidad en que ello fuere admisible, el desconocimiento deberá formularse dentro de los seis días siguientes al de la notificación de la providencia que ordena su agregación, salvo si se agregaren en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá realizarse en la misma.

Art. 162. (Tacha de falsedad).

162. 1. La parte que impugna de falsedad material a un documento público o a un documento privado auténtico o tenido por auténtico, presentado por su adversario, deberá hacerlo en las oportunidades a que alude el artículo anterior, promoviendo demanda incidental con la que se formará pieza por separado, en cuyo procedimiento, además de la parte contraria, será oído el Ministerio Público.

La falsedad ideológica o la nulidad del documento se argüirá como defensa en el propio proceso.

162.2 Si de la tramitación del incidente surgiere la existencia de un delito, se dará cuenta al Tribunal competente en lo Penal; el proceso penal por falsedad no detiene la tramitación del proceso civil ni su sentencia modificará las conclusiones de este último salvo lo dispuesto en el artículo 253.2.

Art. 163. (Reconocimiento de documentos privados).

163.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160.2, la parte que quiera servirse de un documento privado suscripto o manuscrito por la contraparte podrá, si lo creyera conveniente o en los casos en que la ley lo admite, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores.

Citado el autor por única vez, si no concurriera, se tendrá por reconocido el documento; lo mismo ocurrirá si, concurriendo, diere respuestas evasivas.

Los sucesores podrán manifestar que no les consta que la firma o la escritura sean de su causante; pero si no concurrieren a la citación, se tendrá la firma o la escritura por reconocidas.

163.2. Si el documento fuese suscripto o manuscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar, indistintamente, al representante o al representado. Si el primero reconociere la firma o la escritura o no concurriere a la citación, se tendrá al documento como obligatorio para el representado, una vez probada la representación al tiempo del *otorgamiento*.

Art. 164. (Cotejo de letras o firmas).

En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría (artículos 161 y 163), la parte que intenta servirse del documento podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericia caligráfica, mediante el cotejo con otros documentos indubitables o a cualquier otro medio de prueba.

Sección V: De la prueba pericial

Art. 165. (Procedencia).

165.1. Procede la prueba pericial cuando para verificar hechos que interesen al proceso son necesarios conocimientos artísticos, científicos o técnicos especiales.

165.2. Las partes no podrán solicitar sino un dictamen pe ricial sobre un mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma. El Tribunal podrá disponer de oficio un nuevo dictamen cuando, a su juicio, procediere.

Art. 166. (Número de peritos).

El perito será uno solo designado por el Tribunal, salvo que las partes, de común acuerdo, decidan otra cosa o lo requiera la complejidad de la cuestión a juicio del mismo Tribunal, quien también podrá, según las circunstancias, solicitar el dictamen de Institutos, Academias, Colegios u otros organismos.

Art. 167. (Impedimentos y recusaciones de los peritos).

Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que los Jueces.

La causal deberá ser dada a conocer por el perito o por las partes dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la providencia que lo designe o de la audiencia en que se haga la designación.

Si aducida causal de recusación, la misma no fuera acepta da por el perito, se procederá por el trámite de los incidentes y la resolución que recaiga será irrecurrible.

La recusación de los peritos propuestos por las partes sólo podrá fundarse en causas supervenientes.

Art. 168. (Procedimiento).

La parte que solicite un dictamen pericial señalará concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar; al conocer esa solicitud, el adversario podrá adherir a la misma agregando nuevos puntos.

El Tribunal resolverá sobre la procedencia del dictamen y determinará los puntos que han de ser objeto del mismo de acuerdo con las proposiciones de las partes y los que de oficio considere conveniente formular. Así mismo fijará el plazo en el que deberá presentarse el dictamen, que podrá ser prorrogado por una sola vez en caso de motivo fundado, vencido el cual, caducará el encargo.

Art. 169. (Práctica de la prueba).

Los peritos, en caso de ser varios, deberán practicar unidos la diligencia.

En todos los casos se comunicará al Tribunal y a las partes la fecha en que se habrá de practicar la diligencia, a los efectos de que puedan concurrir asistidas por sus abogados y sus aseso res técnicos, pudiendo hacer las observaciones que estimen convenientes.

Art. 170. (Deber del encargo y responsabilidad).

170.1. Los peritos designados tienen el deber de cumplir sus funciones, salvo justa causa de abstención que deberán poner en conocimiento del Tribunal dentro de los tres días siguientes a la comunicación de su designación y que aquel apreciará libremente.

170.2. El incumplimiento por el perito del encargo judicial le hará pasible de responsabilidad civil frente a las partes y disciplinaria ante el Tribunal.

Art. 171. (Observaciones al dictamen).

1.171. El dictamen pericial será comunicado a las partes y éstas, en el plazo de tres días luego de aquella comunicación o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen pertinentes, las que serán evacuadas durante el curso de la audiencia o, si ello no fuere posible, en el plazo que establezca el Tribunal. En todos los casos, el dictamen será examinando en la audiencia, a la que deberá concurrir el perito.

1.172. También, en las mismas oportunidades, las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, aportando las pruebas que fundamentan la impugnación o solicitando la realización de un nuevo peritaje, por una sola vez (artículo 165.2).

171.3. El Tribunal también podrá requerir del perito las aclaraciones y ampliaciones que estime convenientes y disponer, por pedido de la parte que entienda fundado o de oficio, la realización de un nuevo peritaje.

Art. 172. (Apreciación del dictamen).

Los dictámenes de los peritos, salvo el caso que las partes hayan dado a éstos el carácter de arbitradores respecto de los hechos establecidos en sus conclusiones y se trate de derechos disponibles, serán apreciados por el Tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica (artículo 130), debiendo consignar en el fallo los motivos que tenga para apartarse de ellos cuando así lo haga.

Art. 173 (Honorarios de los peritos).

173.1. Los honorarios de los peritos serán de cargo de la parte que solicitó la diligencia, sin perjuicio de las condenaciones que imponga la sentencia.

173.2. En los casos que la pericia hubiere sido dispuesta por el Tribunal, requerida por ambas partes o si, pedida por una, la otra también hubiere solicitado pronunciamiento sobre determinadas cuestiones, los honorarios serán satisfechos por mitades.

173.3 En el peritaje solicitado por las partes, se deberá consignar previamente, bajo apercibimiento de tenerse por renunciada esa prueba, una suma adecuada para garantizar el pago de los honorarios y gastos, los cuales serán fijados en la sentencia definitiva.

Sección VI: Inspección judicial y reproducciones de hechos

Artículo 174. (Inspección judicial).

El Tribunal, a petición de las partes o de oficio, puede inspeccionar personas, lugares o cosas con la finalidad de esclarecer hechos que interesen a la decisión del proceso.

Art. 175. (Procedimiento de la inspección judicial).

Al ordenarse la prueba se individualizará su objeto, se determinará la fecha y lugar en que se realizará, pudiéndose das poner la concurrencia de peritos o de testigos a dicho acto.

A la diligencia asistirá el Tribunal y podrán hacerlo las partes con sus abogados y asesores técnicos, quienes podrán formular las observaciones pertinentes, de las que se dejará constancia en acta, en forma resumida.

A los peritos se les requerirán las explicaciones técnicas del caso, pudiendo el Tribunal por excepción, disponer que informen por separado en el plazo que se les fijará al efecto.

A los testigos se les interrogará libremente sobre el objeto de la inspección.

Art. 176. (Reproducción).

Por el mismo procedimiento (artículos 174 y 175) podrá procederse a la reproducción de hechos bajo la dirección del Tribunal, labrándose acta resumida en la que conste la realización de la diligencia y sus detalles, sin perjuicio de la utilización de medios técnicos para el registro de lo actuado.

Art. 177. (Colaboración para la práctica de la medida probatoria).

177.1. Los terceros y las partes tienen el deber de prestar la máxima colaboración para la efectiva y adecuada realización de las inspecciones, reproducciones y pericias. En caso de injustificado rehusamiento de los terceros a prestar la colaboración, e1 Tribunal adoptará las medidas conminatorias apropiadas, remitiendo, si correspondiere, testimonio de lo actuado a la justicia penal a los efectos pertinentes.

177.2. La colaboración referida causare gastos u otro menoscabo patrimonial a los terceros, el Tribunal fijará, en forma irrecurrible, las cantidades que las partes, conforme con el régimen del artículo 173, habrán de abonar a título de indemnización.

177.3. Si quien debiera prestar colaboración fuera una de las partes y se negare a suministrarla, el Tribunal la intimará a que la preste. Si a pesar de ello se persistiera en la resistencia, el Tribunal dispondrá se deje sin efecto la diligencia, debiéndose interpretar la negativa a colaborar en la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria, respecto del hecho que se quiere probar.

Sección VII: Prueba por informe

Artículo 178. (Procedencia).

178.1. Los informes que se soliciten a entidades públicas o privadas deberán versar sobre puntos claramente individualizados y referir a hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro del informante.

178.2. No será admisible el pedido de informe que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o por la naturaleza del hecho a probar.

178.3. Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe sólo podrá ser negado si existiere causa de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del Tribunal dentro del quinto día de recibido el oficio, estándose a lo que éste resuelva.

Art. 179. (Colaboración del informante).

Corresponderá aplicar, respecto al diligenciamiento de esta prueba, lo establecido en el artículo 177.1 y 177.2 en lo que fuere pertinente.

Art. 180. (Facultades de la contraparte).

180.1. La contraparte podrá formular 'las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse.

180.2. También podrá impugnar de falsedad al informe, en cuyo caso se podrá requerir la exhibición de los asientos, documentos y demás antecedentes en que se fundara la contestación.

Tal impugnación sólo podrá ser formulada dentro del quinto día siguiente al de la notificación de la providencia que ordena re la agregación del informe o en la propia audiencia en que se presentare y se sustanciará por el trámite de los incidentes (artículos 254 y 285). Si resultare la presunción de la existencia de un delito de falsificación será aplicable lo dispuesto por el Artículo 162.2.

Capítulo IV – Procedimientos posteriores a la prueba

Artículo 181. (Procedimientos posteriores a la prueba).

Conclusa la etapa probatoria, el trámite se regulará según la naturaleza del proceso de que se trate y de conformidad con las normas contenidas en el Libro II.

Art. 182. (Pruebas posteriores a la conclusión de causa).

Concluido la audiencia y al retirarse el Tribunal para considerar su decisión, no será admitida a las partes prueba alguna en la instancia.

El Tribunal, en forma excepcional y dejando expresa constancia de las razones por las cuales no dispuso con anterioridad su diligenciamiento, podrá disponer cualquier prueba que considere indispensable para mejor proveer. De su resolución no habrá recurso alguno. Pero si el Tribunal de segunda instancia considera que mediante dicha prueba se ha alterado gravemente el principio de igualdad de las partes en el juicio, podrá disponer las medidas complementarias para asegurar el respeto de dicha igualdad y derecho de defensa en juicio.

La ley orgánica fijará el límite temporal máximo de suspensión del plazo para dictar sentencia, en los casos de haberse dispuesto diligencias para mejor proveer.

Capítulo V – De las resoluciones judiciales

Sección 1: Forma y contenido

Artículo 183. (Clases de resoluciones).

Los Tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias de trámite, autos interlocutorios y sentencias definitivas. Los plazos para el dictado de las resoluciones así como las consecuencias y sanciones correspondientes a la omisión, serán establecidos por la Ley Orgánica.

Tratándose de Tribunales Colegiados, se estará a lo que disponga la ley orgánica en lo relativo al procedimiento para acordar la decisión y el dictado de la misma.

Art. 184. (Forma y contenido de las resoluciones judiciales).

184.1. Toda resolución judicial se encabezará con el lugar y fecha en que se pronuncia y terminará con las firmas del juez o de los magistrados y del secretario.

184.2. Tratándose de sentencia, deberá contener los datos individualizadores del expediente en el que se pronuncie, la indicación de las partes, un resumen de las cuestiones planteadas, las consideraciones necesarias sobre los hechos y su prueba, los fundamentos legales y jurídicos o las razones de equidad en que se basa.

Y concluirá con el fallo en el que se decidirán en forma ex presa las cuestiones planteadas y respecto a las costas conforme con lo dispuesto en el Código.

184.3. El Tribunal deberá decidir todas las cuestiones deducidas y nada más que éstas. Pero no está obligado a analizar todas las argumentaciones legales de los litigantes, ni a fundar su sentencia exclusivamente en ellas.

184.4. La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

184.5. El auto interlocutorio se ajustará, en lo posible, a lo establecido para la sentencia y deberá ser siempre fundado.

Art. 185. (Fundamentación de las resoluciones judiciales).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, toda re solución judicial que rechace una petición deberá expresar el fundamento, bajo pena de nulidad.

Art. 186. (Sentencia que condena al pago de daños, perjuicios o frutos).

La sentencia fijará el importe de los daños, perjuicios, frutos o rubros similares en cantidad líquida o establecerá, por lo menos, las bases sobre las cuales habrá de hacerse su liquidación.

Art. 187. (Inmutabilidad de la sentencia).

187.1. Pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del Tribunal respecto a la cuestión decidida, no pudiéndola modificar éste en parte alguna, aunque se presenten nuevos documentos o aunque advierta su error, salvo cuando se solicitase aclaración o ampliación (artículo 214).

187.2. Los errores materiales y los puramente numéricos podrán ser corregidos, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento, aún durante la ejecución de la sentencia.

Sección 11: Eficacia

Art. 188. (Eficacia de la providencia de trámite).

La providencia de trámite podrá rectificarse y ampliarse en cualquier momento, de oficio o a iniciativa de parte, por razones de forma o de fondo, salvo si ya se ha operado preclusión.

Art. 189. (Eficacia del auto interlocutorio y de la sentencia).

El auto interlocutorio, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente y la sentencia, pasarán en autoridad de cosa juzgada: a) cuando no sean susceptibles de recursos; b) si las partes los consiente expresamente; c) si se dejan transcurrir los plazos de impugnación sin interponer el correspondiente recurso; y d) cuando los recursos propuestos hubieren sido resueltos y no existieren otros consagrados en el Código que obstaren a dicha autoridad.

Art. 190. (Eficacia del auto interlocutorio que no pone fin al proceso).

Lo resuelto por auto interlocutorio firme, que no sea de aquellos que ponen fin al proceso, puede ser modificado al dictarse la sentencia, siempre que no importe retrotraer el procedimiento;

Art. 191. (Nulidad insubsanable de las resoluciones judiciales).

Toda resolución judicial, viciada por una nulidad insubsanable, podrá ser invalidada, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del proceso.

Art. 192. (Eficacia de la sentencia frente a terceros).

192.1. La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal.

192.2. También comprende a los codeudores solidarios y a los titulares del dominio desmembrado; a éstos últimos, cuando se juzga un desmembramiento que no es el propio respecto del mismo bien.

192.3. Los socios, los comuneros, los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, aquellos cuyos derechos de penden de éstas o del acto o del contrato cuya validez o eficacia ha sido juzgada, son terceros a los que comprende la cosa juzgada solamente si han tenido conocimiento judicial del pleito o si se amparan a la decisión en la primera oportunidad de que dispongan.

Art. 193. (Efecto de la cosa juzgada en otro proceso).

La cosa juzgada obtenida en proceso contencioso tendrá efecto en otro proceso, siempre que verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y se trate de las mismas partes.

Art. 194. (Efectos de la cosa juzgada en procesos promovidos en representación de intereses difusos).

La sentencia dictada en procesos promovidos en defensa de intereses difusos (artículo 53) tendrá eficacia "erga omnes", sal yo si fuere absolutoria por ausencia de pruebas, en cuyo caso podrá volver a plantearse la cuestión en otro proceso, por otro legitimado.

Art. 195. (Efectos de la cosa juzgada en procesos con emplazamiento a personas inciertas o indeterminadas).

En los procesos en que hayan sido emplazadas como demandados personas inciertas o indeterminadas, la sentencia surtirá efecto en relación a todas las personas comprendidas en el emplazamiento; salvo que se compruebe en el mismo proceso o en otro, que su identidad era conocida por alguna de las partes.

Capítulo VI – Medios extraordinarios de conclusión del proceso

Sección 1: Conciliación y transacción

Artículo 196. (Oportunidad y trámite).

Las partes podrán conciliar o transar la litis en cualquier estado del proceso. El acuerdo deberá presentarse en escrito suscripto por las partes o realizarse ante el Tribunal de lo que se dejará constancia en acta.

El Tribunal aprobará toda conciliación o transacción que verse sobre derechos disponibles, siempre que se ajuste a los requisitos sustanciales y a la naturaleza del derecho en litigio, de clarando, en tal caso, concluso el proceso, si aquellas versan sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no se encuentre firme.

Si la conciliación o transacción sólo recaen sobre parte del litigio o se relacionan con alguno de los litigantes, el proceso continuará respecto de los puntos no comprendidos en ellas o de las personas no afectadas por las mismas. En este último caso deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 56.

Art. 197. (Eficacia).

La conciliación o transacción que ponen fin al proceso surten el mismo efecto que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 198. (Costas).

Cuando el proceso termine por conciliación o transacción, cada parte pagará sus gastos, salvo convención en contrario.

Sección II: Desistimiento

Artículo 199. (Desistimiento del proceso).

En cualquier estado del proceso anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso, en cuyo caso el Tribunal ordenará el archivo de las actuaciones.

Cuando el actor desistiere del proceso después de notifica da la demanda, se requerirá la conformidad del demandado y si mediare oposición, proseguirá el trámite de la causa.

Art. 200. (Desistimiento de la pretensión).

En la misma oportunidad a que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir de la pretensión o renunciar al derecho.

No se requerirá la conformidad de la contraparte, debiendo el Tribunal limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio y, en caso afirmativo, a dar por terminado el proceso, el cual no podrá volverse a renovar.

Art. 201. (Desistimiento de la oposición).

El demandado podrá desistir de la oposición que hubiere formulado en cualquier estado del proceso, anterior a la sentencia.

Tal desistimiento se tendrá como allanamiento a la pretensión del actor y se regulará por las normas de aquel.

Art. 202. (Desistimiento de actos del proceso).

Puede desistirse libremente de uno o más actos del proceso o situaciones procesales favorables ya adquiridas. El desistimiento de un recurso produce la firmeza de la resolución impugnada, salvo que la contraparte también hubiere recurrido, en cuyo caso se requiere su conformidad.

Art. 203. (Costas en caso de desistimiento)

203.1. En los casos del desistimiento del proceso, quien desistiere pagará todos los gastos, salvo que otra cosa se conviniera entre las partes.

203.2 Tratándose de la renuncia del derecho, desistimiento de la pretensión o de la oposición, el que desiste pagará todos los gastos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 66.

Sección III: Perención o caducidad de la instancia

Artículo 204. (Caducidad).

Se extinguirá la instancia por caducidad, declarable de oficio o a petición de parte, cuando no se instare su curso dentro del plazo de un año en primera o única instancia y de seis meses en todos los demás casos, incluidos los incidentes.

Art. 205. (Cómputo).

205.1. Los plazos se contarán desde el día siguiente a la última notificación del último auto que se hubiere dictado o desde el día de la práctica de la última diligencia.

205.2. Para el cómputo de esos plazos no se contará el tiempo que el proceso hubiere estado paralizado por acuerdo de partes homologado por el Tribunal.

Art. 206. (Paralización que no produce caducidad).

No operará la caducidad cuando la paralización del proceso sea debida a causas independientes a la voluntad de los 'liti gentes, que éstos no hayan podido superar, utilizando con razonable diligencia los medios procesales a su alcance.

Art. 207. (Improcedencia).

No se producirá la caducidad:

1) En los procedimientos de ejecución de sentencia.

2) En los procesos voluntarios, excepto en los incidentes y procesos contenciosos a que den lugar.

3) En los procesos que se encuentren para sentencia, salvo si se hubieren dispuesto diligencias para mejor proveer cuya producción dependiera de actividad de parte, corriendo el plazo, en ese caso, desde el momento en que se notificó la providencia que las dispuso.

Art. 208. (Contra quienes opera).

La caducidad operará también contra el Estado, los establecimientos públicos y los incapaces y ausentes, siempre que éstos últimos estén debidamente representados en el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes.

Art. 209. (Procedimiento y recursos).

209.1. La caducidad opera de pleno derecho; no obstante no podrá ser declarada ni de oficio ni a petición de parte, luego de que se hubiere realizado algún acto, por cualquiera de los sujetos del proceso, que importe su reanudación.

209.2. El auto; interlocutorio que declare la caducidad será susceptible de recursos fundados exclusivamente en error de cómputo o en la intervención de causas ajenas a la voluntad de los litigantes (artículo 206); el autor que no hace lugar a la declaración de caducidad sólo será susceptible del recurso de reposición.

Art. 210. (Efectos).

La caducidad producirá los mismos efectos que el desistimiento del proceso o de los recursos, según el caso y sin perjuicio de lo establecido en la ley de fondo respecto a la interrupción de la prescripción.

Capítulo VII – Medios de impugnación de las resoluciones judiciales

Sección 1: Disposiciones generales

Artículo 211. (Impugnabilidad de las resoluciones judiciales).

211. 1. Todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario.

211.2. Puede renunciarse, en forma expresa o tácita, al derecho de recurrir, independientemente de la aceptación de la otra parte y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 16.

La renuncia tácita deriva del simple vencimiento del término así como de la realización de un acto incompatible con la voluntad de recurrir.

Art. 212. (Legitimación para impugnar).

Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales las partes, entre las cuales se entienden incluidos los terceros intervinientes en el proceso y los sucesores y demás sujetos alcanzados por la sentencia (artículo 192) a los que la resolución cause un perjuicio, aunque éste sea parcial.

Art. 213. (Diversas clases de recursos).

213.1. Los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de aclaración, de ampliación, de reposición, de apelación, de queja por denegación de apelación o casación, de casación y de revisión.

213.2. También constituye un medio impugnativo el incidente de nulidad conforme con lo establecido por el artículo 107.

Sección II: Recurso de aclaración y de ampliación

Artículo 214. (Aclaración y ampliación).

214.1. El Tribunal, a petición verbal de cualquiera de las partes, formulada en audiencia o diligencia en que se profiere la providencia o a solicitud escrita presentada dentro de los tres días siguientes a su notificación, si se tratare de resolución dictada fuera de audiencia o de sentencia definitiva, podrá aclarar algún concepto oscuro o palabras dudosas que éstas contengan. La aclaración se hará, en el primer caso, sin más, trámite y dentro de la propia audiencia y dentro del tercer día, en el segundo.

214.2. También se podrá, a igual pedimento y dentro de los mismos plazos, ampliar la resolución pronunciándose sobre algún punto esencial que se hubiere omitido.

214.3. Los plazos para interponer los otros recursos se contarán a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que recaiga sobre la aclaración y ampliación.

214.4. Estos recursos podrán ser usados por una sola vez por cada una de las partes en relación con cada resolución y pro ceden respecto de toda clase de ellas.

Sección III: Recurso de reposición

Artículo 215. (Procedencia).

El recurso de reposición procede contra las providencias de trámite y los autos interlocutorios a fin que el propio Tribunal, advertido de su error, los modifique por contrario imperio.

Art. 216. (Plazo y procedimiento).

216.1. Si se tratare de providencias de trámite, el recurso deberá interponerse, con expresión de las razones que lo sustenten, verbalmente en la audiencia o diligencia en que se pronuncie o en escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la providencia, si ésta no se dictó en audiencia o diligencia.

216.2. El Tribunal podrá decidir de plano el recurso, confirmando o modificando la providencia impugnada.

Podrá, así mismo, en consideración a las circunstancias del caso, oír a la contraparte en el mismo acto antes de decidir; si el trámite fuera escrito, el término del traslado será de tres días.

216.3. El recurso deducido en audiencia deberá ser resuelto en forma inmediata.

Art. 217. (Efectos de la reposición).

Si la decisión fuera modificativa de la anterior, la parte contraria tendrá la facultad de interponer un nuevo recurso de re posición y el de apelación en subsidio, si correspondiere.

Sección IV: Recurso de apelación

Artículo 218. (Recurso de apelación).

La apelación es el recurso concedido en favor de todo litigante que haya sufrido agravio por una resolución judicial, con el objeto que el Tribunal superior correspondiente, previo estudio de la cuestión decidida por la resolución recurrida, la reforme, revoque o anule.

Art. 219. (Causas de la impugnación).

La impugnación puede fundarse en la improcedencia de la resolución en cuanto a su mérito o en la nulidad por incumplimiento de un requisito del que se derive tal efecto.

La nulidad podrá referir tanto a la sentencia como al procedimiento, en este último caso, siempre que no haya mediado subsanación.

Art. 220. (Procedencia).

Procede el recurso de apelación:

l) Contra las sentencias definitivas, sin más excepciones que las de segunda instancia y las demás que expresamente establezca la ley.

2) Contra los autos interlocutorios, excepto los dictados en el curso de una instancia cuya sentencia definitiva no es apelable y los dictados en el curso de un incidente.

La apelación contra los autos interlocutorios será siempre innecesariamente subsidiaria del recurso de reposición, debiendo se deducir ambos recursos de manera conjunta y dentro del plazo para apelar.

3) Contra las providencias de trámite que aparejen gravamen irreparable, en cuyo caso se las considerará autos interlocutorios.

Art. 221. (Efectos).

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 230 respecto a 1a ejecución provisoria de las sentencias definitivas, el recurso de apelación se admite:

1) Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del Tribunal se suspende desde que queda firme el auto que concede el recurso hasta que le es devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior. No obstante, el Tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que se sustancien en pieza separada y de todo lo que refiera a la administración, custodia y conservación, de bienes embargados o intervenidos judicialmente, así como de lo relativo a la seguridad y depósito de personas, siempre que la apelación no verse sobre esos puntos.

2) Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en el mismo auto en que se concede el recurso, se señalarán las actuaciones que deben integrar la pieza separada que habrá de remitirse al superior.

El Tribunal superior, una vez recibida la pieza, decidirá dentro de cuarenta y ocho horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal, comunicando de inmediato al Tribunal inferior cuando resuelva la suspensión.

3) Con efecto diferido, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada, se reservará el trámite del recurso hasta la eventual apelación de la sentencia definitiva; producida, se conferirá traslado de ambos recursos a la parte apelada resolviéndose aquellos conjuntamente.

Art. 222. (Procedencia de la apelación suspensiva, no suspensiva y diferida).

222. 1. La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias definitivas y de autos interlocutorios que pongan fin al proceso haciendo imposible su continuación.

En todos los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo.

La apelación tendrá efecto diferido en los casos expresamente establecidos por la ley.

Art. 223. (Trámite).

223.1. Todo recurso de apelación contra una sentencia definitiva se interpondrá en escrito fundado dentro del plazo de quince días, sustanciándose con un traslado a la contraparte con plazo similar.

Al evacuar el traslado, la contraparte podrá adherir al re curso fundando a la vez sus agravios, en cuyo caso se correrá traslado al primer apelante por el plazo de quince días.

La apelación y la adhesión no fundadas se rechazarán de plano, teniéndose por no deducido el recurso.

223.2. Tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación al mismo, podrán las partes solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia exclusivamente en los siguientes casos:

1) Si se tratare de producir la prueba regulada por los artículos 138 y 143, con referencia a hechos que no hubieren sido objeto de esa misma probanza en la instancia anterior;

2) Si se tratare de presentar documentos de fecha posterior a la de conclusión de la causa o anteriores, cuando en este último caso se afirmare, bajo juramento, no haber tenido antes conocimiento de los mismos; circunstancia que el Tribunal apreciará, pudiendo requerir información sumaria que la acredite.

3) Si se tratare de acreditar hechos nuevos, conforme con lo dispuesto por el artículo 114.2.

223.3. El recurso de apelación contra las sentencias interlocutorias se rige por lo dispuesto para las sentencias definitivas, con las siguientes modificaciones:

1) Si se tratare de providencia pronunciada fuera de audiencia, el plazo para la interposición del recurso será de cinco días igual que el del traslado y el de la contestación a la adhesión o la apelación.

2) Si se tratare de providencia pronunciada en audiencia, deberá anunciarse la apelación en ella e interponerse conjuntamente con el recurso de reposición dentro del mismo plazo y sustanciándose por los mismos trámites indicados en el numeral anterior.

3) Si se tratare de providencia pronunciada en audiencia y procediere la apelación con efecto diferido, el recurso se interpondrá en la propia audiencia conjuntamente con el de re posición, que se resolverá de inmediato (artículo 216.3). Se pro cederá, en lo demás, según lo dispuesto por el artículo 221.3.

4) Sólo se admira la prueba documental conforme con lo dispuesto por el numeral 2 del ordinal .2 de este artículo.

Art. 224. (Régimen de la adhesión a la apelación).

La adhesión a la apelación tiene carácter secundario, decayendo en todos los casos en que quede privada de efecto la apelación principal o se desista de la misma.

Art. 225. (Resolución del Tribunal inferior).

Interpuesta en tiempo y forma la apelación, el Tribunal la admitirá, si fuere precedente y expresará el efecto con que la admite (Artículo 221).

Si el recurso no fuere admitido, el apelante podrá recurrir conforme con lo establecido en la Sección V de este Capítulo.

Art. 226. (Procedimiento en la instancia superior).

Recibidos los autos por el Tribunal superior y si se hubiere solicitado el diligenciamiento de prueba, se decidirá lo que al respecto sea procedente; contra lo resuelto no cabrá recurso alguno. En todo lo demás, se procederá conforme con lo dispuesto por el artículo 299.

Art. 227. (Facultades del Tribunal de Alzada).

227.1. El Tribunal que conoce del recurso de apelación no podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraria también hubiere recurrido en forma principal o adhesiva.

227.2. El Tribunal no podrá decidir sobre puntos no pro-, puestos al Tribunal de Primera Instancia; no obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia, así como de los hechos a que hace referencia el artículo184.5.

227.3. El Tribunal podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubieren deducido los recursos previstos por el artículo 214, siempre que en los agravios se solicitare el respectivo pronunciamiento.

227.4. El Tribunal, al pronunciarse sobre el recurso de apelación, debe examinar, en forma previa, si en el escrito introductivo del recurso no se ha hecho valer la nulidad de la sentencia o de los actos de la primera instancia, procediendo, en su caso, conforme con lo dispuesto en la Sección VII, Capítulo 1 del Título VI de este Libro.

227.5. Cuando se revocare una providencia apelada sin efecto suspensivo o con efecto diferido, será ineficaz la actuación adelantada por el Tribunal de primera instancia después de la apelación, en lo que depende necesariamente de aquella.

Art. 228. (Recursos contra la sentencia del Tribunal de segunda instancia).

Contra lo resuelto en apelación sólo se darán los recursos de aclaración, de ampliación, de casación y de revisión en los casos y por los motivos establecidos en el Código.

Art. 229. (Cumplimiento de la decisión del Tribunal superior).

Decidida la apelación y devuelto el expediente al Tribunal de primera instancia, éste dictará el auto de cumplimiento de lo resuelto, en el cual se dispondrá lo conducente a tal efecto.

En el caso previsto por el artículo 227.5, se señalarán expresamente las actuaciones que quedan sin efecto.

Art. 230. (Ejecución provisoria).

230.1. Las sentencias definitivas de condena recurridas, podrán ser ejecutadas provisionalmente, siempre que la parte interesada así lo solicite dentro del plazo de seis días a contar del siguiente a su notificación, prestando garantía a satisfacción del Tribunal para responder, en su caso, por todos los gastos judiciales, daños y perjuicios que pudiere ocasionar a la parte contraria.

230.2. La contraparte podrá solicitar la suspensión de la ejecución provisoria por causarle perjuicio; circunstancia que el Tribunal apreciará discrecionalmente. Si estimare que existe esa posibilidad, exigirá al condenado que preste garantía bastante para asegurar, en todo caso, lo que ha de ser objeto de la ejecución con más los intereses y costas que se pudieran irrogar.

Art. 231. (Condenaciones).

La sentencia de segunda instancia confirmatoria en todas sus partes de la de primera, condenará preceptivamente a la parte apelante en las costas de la instancia.

Sección V: Recurso de queja por denegación de casación o de apelación

Art. 232. (Procedencia).

El recurso de queja procede contra las resoluciones que deniegan un recurso de casación o de apelación a fin que el superior confirme o revoque la resolución denegatoria; así mismo,, procederá cuando la apelación se conceda con efecto diferido en violación a la ley.

Art. 233. (Forma de interposición)

Dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la providencia denegatoria, el recurrente debe presentar la queja en escrito fundado, ante el mismo Tribunal que dictó aquella.

Art. 234. (Otorgamiento).

234.1. Recibido el recurso, el Tribunal asentará a continuación del mismo un informe acerca de los motivos que ha tenido para denegar la apelación o la casación o para conceder la apelación con efecto diferido.

234.2. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de escrito de queja, el Tribunal lo remitirá al superior acompañado del informe referido en el ordinal anterior.

234.3. El Tribunal que dejare de dar cumplimiento puntual a esta disposición, incurrirá en la sanción que se impondrá de conformidad con las disposiciones siguientes en materia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio del derecho del quejoso de recurrir al superior denunciando el hecho, para que este reclame el inmediato envío de los antecedentes para dar trámite al recurso.

Art. 235. (Suspensión del procedimiento).

Recibidos los antecedentes por el superior, éste decidirá previamente si ordena o no la suspensión de los procedimientos del inferior en atención a las circunstancias del caso.

Si decidiere esa suspensión, se lo comunicará el inferior por la vía más rápida disponible.

Art. 236. (Resolución del recurso).

Con los antecedentes a que refiere el artículo 234 y los de más que el superior creyera oportuno requerir, se hará lugar al, recurso de queja o se le desechará.

En ambos casos lo comunicará al inferior. Pero si la resolución hiciere lugar a la queja, se ordenará que, sin más trámite, se sustancie el recurso denegado en la forma pertinente, si así correspondiere.

Art. 237. (Costas del recurso).

Las costas de la queja serán de cargo del quejoso si el re curso se declarara improcedente en el caso contrario serán de oficio.

Sección VI: Del recurso de casación

Artículo 238. (Procedencia).

El recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones que prevé la Ley Orgánica, sean definitivas o interlocutorias que pongan fin al pleito.

Art. 239. (Improcedencia).

No procede el recurso de casación:

1) Contra las sentencias que decreten medidas cautelares.

2) Contra las sentencias recaídas en asuntos que admitan otro proceso posterior sobre la misma cuestión.

3) Contra las sentencias dictadas en aquellos juicios en los cuales la ley excluya expresamente el recurso.

Art. 240. (Causales de casación).

El recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma. Se entenderá por tal, inclusive, la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba.

No se tendrán en cuenta los errores de derecho que no de terminaren la parte dispositiva de la sentencia.

En cuanto a las normas de procedimiento, sólo constituirá causal, la infracción o errónea aplicación de aquellas que sean esenciales para la garantía del debido proceso y siempre que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente.

Art. 241. (Plazo y forma de interposición del recurso).

El recurso se interpondrá en forma escrita y fundada dentro del plazo de quince días siguientes al de la notificación de la sentencia.

Art. 242. (Legitimación para interponer el recurso).

El recurso sólo podrá interponerse por la parte que recibe un agravio de la sentencia. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la del Tribunal superior haya sido totalmente confirmatoria de aquella.

Art. 243. (Requisitos de la interposición del recurso).

El escrito introductorio, que deberá presentarse ante el Tribunal que dictó el fallo cuya casación se pretende, deberá contener necesariamente:

1) La mención de las normas de derecho infringidas erróneamente aplicadas;

2) la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, los que se expondrán de manera clara y concisa.

Art. 244. (Procedimiento de admisibilidad del recurso).

El Tribunal concederá a la contraparte traslado del recurso por quince días.

Si el recurso se hubiere interpuesto en tiempo, el asunto fuera susceptible de casación (artículos 238 y 239) y el escrito introductorio cumpliere con los requisitos legales el Tribunal lo franqueará.

Contra la resolución denegatoria habrá recurso de queja (artículos 232 a 237). Concedido el recurso, el expediente se elevará al Tribuna1 Supremo para su resolución. *Art. 245. (Efectos del recurso).*

245.1. Salvo que el proceso versare sobre el estado civil de las personas, la interposición del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, para lo cual deberá expedirse, a pedido de parte, testimonio de la misma.

Cuando la sentencia ejecutada fuere, en definitiva, casada y sustituida por otra que la modifique total o parcialmente, se procederá, en lo pertinente, conforme con lo dispuesto por el artículo 321.

245.2. Sin embargo al interponer el recurso o dentro del término para hacerlo, podrá el recurrente solicitar que se sus penda la ejecución de la sentencia, prestando garantía para responder de los perjuicios que a la parte contraria pudiere ocasionar la demora. El monto y la naturaleza de la garantía serán fijadas en forma irrecurrible por el Tribunal en el auto que conceda el recurso y disponga la suspensión de la ejecución. Dicha garantía deberá constituirse dentro de los diez días de la notificación de aquél. Si así no se hiciere ni se solicitare prórroga de dicho plazo o ésta se denegare, se dispondrá el cumplimiento de la sentencia.

245.3. La garantía se cancelará por el Tribunal si la sentencia es casada. De lo contrario seguirá respondiendo por los mencionados perjuicios, que se liquidarán por el procedimiento establecido para la ejecución de la sentencia.

Art. 246. (Procedimiento ante el Tribunal Supremo).

246.1. Recibidos los autos, el Tribunal Supremo dará vista al Procurador General por el plazo de treinta días. Devuelto el expediente, repartido el mismo a la Sala, se procederá a su estudio, concluido el cual, de oficio o a pedido de cualquiera de las partes o del Procurador General, se convocará a una audiencia en la que tomará primero la palabra la parte recurrente, luego la recurrida y, finalmente, el Procurador General.

246.2. Los miembros del Tribunal Supremo podrán solicitar alguna aclaración o ampliación de los argumentos de las partes, que no podrán versar más que sobre los motivos que determinaron la introducción del recurso o sobre los requisitos de admisibilidad.

246.3. Al dictar resolución, el Tribunal Supremo podrá declarar inadmisible el recurso por cualquier motivo legal, salvo que se trate de una cuestión que ya hubiera sido resuelta al conocer del recurso de queja.

Art. 247. (Casación por vicios de fondo o de forma).

247.1. Si el Tribunal Supremo casare la sentencia en cuanto él fondo, dictará la que en su lugar correspondiere sobre el material de hecho del fallo recurrido y reemplazará los fundamentos jurídicos erróneos por los que estimare correctos.

247.2. Si la sentencia se casare por vicio de forma, el Tribunal Supremo anulará el fallo y remitirá el proceso al Tribunal que deba subrogar al que se pronunció, a fin de que continúe conociendo desde el punto en que se cometió la falta que dio lugar a la nulidad, sustanciándolo con arreglo a derecho.

247.3. Si la casación se fundara en errónea decisión en cuanto a admisibilidad o valoración de la prueba, el Tribunal Supremo pronunciará sentencia sobre el fondo sobre la base de la prueba que juzgare admisible o la valoración que entendiere corresponder.

Sólo procederá el reenvío, si se estimare que la no admisión de prueba admisible afecta a la resolución sobre el mérito. En tal caso deberá procederse al diligenciamiento omitido y el posterior dictado de la sentencia que corresponda, por el Tribunal a quien se remita el proceso, conforme con lo dispuesto en el ordinal .2.

Art. 248. (Casación por vicios de forma y de fondo).

Si la casación se interpusiere por vicios de forma y de fon do, el Tribunal Supremo sólo se pronunciará sobre el segundo, en caso de estimar que no se ha cometido infracción formal que invalide el procedimiento.

Art. 249. (Costas).

Las costas de la casación rechazada serán de cargo del recurrente. Si la sentencia fuere casada, las costas se pagarán por su orden.

Art. 250. (Publicación).

Las sentencias que acojan el recurso de casación se publicarán en el Boletín a Periódico Oficial, si no existiere una publicación especialmente destinada a esos efectos.

Sección VII: Recursos de revisión

Art. 251. (Procedencia).

El recurso de revisión procede contra las sentencias definitivas o autos interlocutorios ejecutoriados que ponen fin al proceso, dictados por cualquier Tribunal, salvo las excepciones que determine la ley reglamentaria.

Art. 252. (Competencia).

El conocimiento del recurso de revisión corresponde al Tribunal Supremo, cualquiera fuere el grado del Tribunal en que hubiere quedado firme la resolución recurrida.

Art. 253. (Causales).

Procede la revisión:

1) Cuando la resolución se hubiere producido por efecto de la violencia, intimidación o dolo.

2) Cuando alguna de las pruebas que constituyeren fundamento decisivo de la resolución impugnada hubiere sido de clarada falsa por sentencia firme dictada con posterioridad o bien que la parte vencida ignorase que había sido declarada tal con anterioridad.

3) Cuando después de la resolución se recobraren documentos decisivos que no se hubieren podido aportar al proceso por causa de fuerza mayor o por maniobra fraudulenta a la par te contraria.

4) Cuando la resolución fuere contraria a otra anterior que hubiere entre las partes autoridad de cosa juzgada, siempre que no hubiere recaído pronunciamiento sobre la respectiva excepción.

5) Cuando la resolución se hubiere obtenido por actividad doloso del Tribunal, declarada por sentencia firme.

6) Cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes, siempre que hubiere causado perjuicios al recurrente o a la causa pública.

Art. 254. (Legitimación).

254.1. El recurso de revisión puede ser interpuesto por quienes hayan sido parte del proceso, sus sucesores o causahabientes, así como por los terceros, en el caso previsto en los numerales 59 y 6 del artículo anterior.

254.2. También p ser interpuesto por el Ministerio Público cuando los hechos invocados afecten la causa pública.

Art. 255. (Plazos).

255.1. En ningún caso podrá interponerse la revisión transcurridos tres años desde que hubiere quedado ejecutoriada la resolución impugnable.

255.2. Dicho plazo quedará suspendido desde el momento en que se promueva el correspondiente proceso para el acreditamiento del motivo de revisión, en los casos en que tal proceso fuere necesario, hasta el dictado de la sentencia que ponga fin a dicho proceso.

255.3. Tampoco será admisible la revisión transcurridos tres meses desde que el recurrente hubiere conocido o debido conocer los motivos en que se fundare la misma.

Art. 256. (Forma del recurso).

El recurso de revisión se presentará ante el órgano competente para su resolución, en escrito que contendrá con precisión sus fundamentos y al que se acompañará toda la prueba conforme con lo establecido para la demanda en los artículos 110 y 111.

Art. 257. (Efecto de la interposición del recurso).

La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de la resolución firme que a motivare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 259.

Art. 258. (Procedimiento del recurso).

Presentado el recurso y si se hubieren observado los plazos y los requisitos antes señalados, el Tribunal Supremo ordenará al Tribunal en que se encontrare al proceso que lo remita en el plazo máximo de diez días y emplazará, según las reglas de los artículos 116 a 119, a todos cuantos hubieren litigado en el pleito o a sus sucesores o causahabientes, para que comparezcan a contestar el recurso en el plazo de veinte días, a continuación se seguirá el procedimiento de los incidentes.

Si la causa se hallare en trámite de ejecución, solamente se remitirá facsímil autenticado de los autos.

Art. 259. (Medidas cautelares)

En el escrito de interposición del recurso o en cualquier momento de su trámite, podrá pedirse la suspensión de los efectos aún pendientes de la resolución impugnada. Así se dispondrá, si de las circunstancias resultare la aparente fundabilidad del recurso, así como la posibilidad de que la demora del trámite pudiere causar graves e irreparables perjuicios al recurrente, quien deberá prestar garantía suficiente a juicio del Tribunal Supremo.

Art. 260. (Efectos de la sentencia que resuelve el recurso).

260.1. Si se estimare fundada la revisión, así se declarará. y se revocará en todos o en parte la resolución impugnada, según proceda, mandándose expedir certificación del fallo para que las partes puedan reproducir el proceso si ello conviniere a su derecho.

260.2. En todo caso, servirán de base al nuevo proceso las conclusiones de la sentencia de revisión, las cuales no podrán ser discutidas.

260.3. Lo decidido en revisión no podrá perjudicar a terceros de buena fe ni determinar la anulación de los actos o contratos celebrados con el dueño aparente de los bienes.

Art. 261. (Irrecurribilidad).

Contra la sentencia que recaiga solo proceden los recursos provistos por el artículo 214.

Art. 262. (Costas).

Las costas de la revisión desestimada serán de cargo del recurrente.

Si el recurso fuere acogido, el Tribunal Supremo condenará preceptivamente al vencido, si éste hubiere tenido participación en los hechos determinantes de la rescisión de la sentencia.

En los demás casos, la imposición de las costas se determinará según las circunstancias.

LIBRO II – DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Título 1 — Procesos preliminares

Capítulo 1 – Conciliación previa

Artículo 263. (Regla general: Preceptividad).

Antes de iniciar cualquier proceso, el futuro actor deberá pedir audiencia para intentar la conciliación con el futuro de mandado.

Art. 264. (Excepciones).

Se exceptúan de la tentativa de conciliación previa: 1) los procesos que no tramiten por la vía ordinaria; 2) los procesos de jurisdicción voluntaria; 3) los procesos en los que la ley la excluya.

Art. 265. (Procedimiento).

265.1. La audiencia se convocará por el Tribunal que establezca la ley orgánica, que podrá ser el de menor jerarquía en la escala judicial o el competente para entender en el proceso judicial a intentarse.

265.2. La citación se realizará para día y hora determina dos, con plazo no menor de tres días.

265.3. La audiencia será presidida por e]. Tribunal, so pena de nulidad que viciará los ulteriores procedimientos. En caso de no comparecer el citado, a pedido del cliente, podrá el Tribunal convocar a una nueva audiencia bajo apercibimiento de que la incomparecencia se tendrá como presunción simple en contra de su interés en el proceso ulterior.

Art. 266. (Documentación).

La audiencia se documentará en acta resumida en la cual, además de las constancias generales (artículo 98) se establecerá:

1) la pretensión inicial de cada parte; 2) las soluciones propuestas por éstas y por el Tribunal; 3) la conciliación acordada o la persistencia de las diferencias, indicándose con precisión los aspectos en que concuerden y aquellos en los cuales disienten; 4) el domicilio de las partes, el que se tendrá por válido para e1 proceso ulterior, siempre que éste se inicie dentro de los seis meses de la fecha de la audiencia.

Art. 267. (Efectos de la conciliación).

267.1. La conciliación acordada tiene los mismos efectos y está sujeta a los mismos requisitos que la transacción aprobada judicialmente, siéndole aplicable, en lo pertinente, las disposiciones que regulan a esta última (artículos 196 y 197).

267.2. En los casos en que procediere la previa conciliación. y no se agregare la constancia de haberse celebrado, lo actuado no será nulo, pero el Tribunal dispondrá el cumplimiento del requisito y suspenderá el procedimiento hasta que se agregare el recaudo que lo acredite.

Capítulo II – Proceso provocatorio

Artículo 268. (Regla general).

Cuando un sujeto jurídico civilmente capaz, afirmase ser acreedor de otra persona o titular de derecho real o personal de contenido económico sobre bienes de los que otro se considerase titular, queda habilitado éste para iniciar un proceso provoca tono con el fin de obtener la certidumbre jurídica de los derechos alegados.

Art. 269. (Requisitos).

La demanda provocatoria deberá fundarse en la afirmación indicada en el artículo anterior, realizada fuera de proceso contencioso entre las mismas partes y proponerse con anterioridad no mayor a un año de su formulación; este plazo es de caducidad.

Art. 270. (Procedimiento).

270.1. Planteada la demanda, el Tribunal convocará a las partes a audiencia en la que se intimará al demandado que manifieste si ha formulado la afirmación alegada.

270.2. Si el demandado no comparece, se niega a formular toda declaración o se ratifica en sus dichos, el Tribunal le in timará para que presente su demanda dentro de treinta días en el mismo expediente, so pena de declarar caducado el derecho alegado.

270.3. Vencido el plazo referido, se pondrán los autos al despachó y el Tribunal pronunciará la pertinente sentencia declaratoria. De igual modo se procederá si en la audiencia el de mandado declara que no le corresponde el derecho alegado.

270.4. La conciliación previa al proceso provocatorio comprende, igualmente, al proceso posterior.

Capítulo III – Proceso previo

Artículo 271. (Regla general).

Cuando la ley establezca la realización de un proceso previo a otro ulterior, sea o no prejudicial a éste, el Tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, declararlo así en cualquier estado de los procedimientos y suspender los trámites hasta que pase en autoridad de cosa juzgada la sentencia definitiva pertinente.

Capítulo IV – Diligencias preparatorias

Artículo 272. (Aplicación a todos los procesos).

En todo procesos podrá realizarse una etapa preliminar por iniciativa de parte y con la finalidad de: 1) determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes del futuro proceso; 2) anticipar el

diligenciamiento de prueba que pudiere perderse si se espera a otra etapa; 3) practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el proceso tales como documentos, datos contables y otros similares; 4) practicar medidas cautelares o de garantía relacionadas con el proceso ulterior.

Art. 273. (Procedimiento).

273. 1. La parte que solicitare la diligencia preparatoria, deberá denunciar el nombre y domicilio de la parte contra quien promoverá el proceso para preparar el cual pide la diligencia, el objeto del mismo y La finalidad concreta de la medida.

273.2. El Tribunal calificará la medida, dispondrá o rechazará su diligenciamiento y, en el primer caso, si se tramitará unilateral o bilateralmente; la intimación destinada a comprobar la mora se tramitará siempre en forma unilateral.

El trámite se dispondrá con noticia de ambas partes, en especial si se tratare de medio de prueba y salvo si esa comunicación pudiera frustrar la finalidad y eficacia de la medida.

En este último caso, una vez diligenciada la medida, se dará conocimiento de la misma a la contraparte. Si se tratare de un medio de prueba, la otra parte tendrá la oportunidad de completarla o de presentar contraprueba al respecto.

Las medidas seguirán el procedimiento que corresponda a su naturaleza; sólo si resultare indispensable, se realizarán fuera de la audiencia que fijará el Tribunal para su cumplimiento.

La parte contra quien se pidiere la medida podrá, dentro de los cinco días de notificada, oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación. El Tribunal resolverá sin ulterior recurso.

Cumplida la medida y si mediare agravio, cualquiera de las partes podrá recurrir conforme con lo dispuesto en el artículo 220.2., sin efecto suspensivo. La resolución que deniegue la medida será susceptible de los recursos de reposición y apelación subsidio (artículo 220.2.).

Título II — PROCESO CAUTELAR

Capítulo 1 – Disposiciones generales

Artículo 274. (Universalidad de aplicación).

Las medidas cautelares podrán adoptarse en cualquier pro ceso tanto contencioso como voluntario.

Se adoptarán en cualquier estado de la causa e incluso como diligencia preliminar de la misma. En este caso las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se presentare la de manda dentro de los veinte días

de cumplidas, condenándose al peticionario el pago de todos los gastos del juicio y a los daños y perjuicios causados.

Las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte, salvo que la ley autorice a disponerlas de oficio, y se adoptarán bajo la responsabilidad de quien las solicite.

Art. 275. (Procedencia).

Podrán adoptarse las medidas cautelares cuando el Tribunal estime que son indispensables para la protección de un derecha y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso.

La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración deberán justificarse sumariamente.

Art. 276. (Facultades del Tribunal).

En todo caso corresponderá al Tribunal: 1) apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la solicitada, si la estimare suficiente; 2) establecer su alcance; 2) determinar el término de su duración; 4) disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada, siguiéndose en el caso de la petición y para su sustanciación, el procedimiento de los incidentes; 5) exigir la prestación de contra cautela, salvo el caso excepcional de que existan motivos fundados para eximir de ella al peticionario.

Capítulo II – Procedimiento

Artículo 277. (Requisitos de la petición).

277.1. Será Tribunal competente para entender en la medida cautelar, si la misma fuere solicitada como medida preliminar, el que lo es para entender en el proceso posterior.

Si el Tribunal se considerare incompetente, deberá rechazar de plano su intervención. Sin embargo, la medida ordenada por un Tribunal incompetente será válida si se cumplen los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia debiendo remitirse las actuaciones, no bien sea requerido o no bien se ponga de manifiesto la incompetencia absoluta, al Tribunal que sea competente.

277.2. La petición deberá contener: 1) la precisa determinación de la medida y de su alcance; 2) el fundamento de hecho de la medida, el que resultará de 'la información sumaria que se ofrezca o de los elementos existentes en el proceso o de los que se acompañen o de la notoriedad de los hechos o de la naturaleza de los mismos; 3) la contra cautela que se ofrece.

277.3. El Tribunal decretará de inmediato el diligenciamiento de la información sumaria, pudiendo disponer todo trámite que considerare necesario o conveniente al efecto.

277.4. Realizado el diligenciamiento o, si lo considerare necesario en su primera providencia, el Tribunal resolverá la ad misión o el rechazo de la medida con expresión de su alcance y demás caracteres a que se refiere el artículo 276.

Art. 278. (Recursos).

La medida se decretará sin conocimiento ni intervención de la contraparte. Ningún incidente o petición planteada por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.

Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas en forma concreta y completa con motivo de su ejecución, e le notificará dentro del, tercer día de cumplida.

La providencia que admite o deniega una medida cautelar será recurrible mediante reposición y apelación subsidiaria.

También lo será toda otra providencia modificativa de la medida.

La apelación contra la resolución que decrete una medida o dispone su sustitución por otra, será apelable al solo efecto devolutivo.

Art. 279. (Medidas específicas).

El Tribunal podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos o secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor a cualquiera otra idónea que tienda a cumplir la finalidad cautelar (artículo 275).

Art. 280. (Medidas provisionales y anticipativas).

Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores podrá el Tribunal adoptar las medidas provisionales y anticipativas que juzgue adecuadas para evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, una lesión grave o de difícil reparación o para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo.

Art. 281. (Legislación supletoria).

Serán aplicables, en lo pertinente, a estas medidas, lo dispuesto en los artículos 274 a 279.

Título III— PROCESOS INCIDENTALES

Capítulo 1 – Disposiciones generales

Artículo 282. (Procedencia).

Corresponde tramitar por vía incidental, las cuestiones diferentes de la o las principales, dependientes en su formulación y ordenadas en su decisión a las mismas, siempre que no proceda, a su respecto, otro medio de tramitación.

Art. 283. (Consecuencia en el proceso).

El incidente, como regla, no suspende el trámite de lo principal, salvo si la ley o el Tribunal así lo dispusieren, por entender que resulta indispensable para el adecuado diligenciamiento de aquel.

Capítulo II – Procedimiento

Artículo 284. (Incidente en audiencia).

Los incidentes relativos a cuestiones planteadas en la audiencia se formularán verbalmente y, oída la parte contraria, se decidirán de inmediato por el Tribunal, sin otro recurso que el de reposición.

Art. 285. (Incidente fuera de audiencia).

285.1. La demanda incidental se planteará por escrito, dándose un traslado por seis días que se notificará a domicilio.

285.2. Tanto con la demanda como con la contestación, si se tratare de una cuestión que requiera prueba, las partes la acompañarán conforme con lo dispuesto por el artículo 111.

El Tribunal ordenará el diligenciamiento de la prueba y la concentrará en una sola audiencia, al término de la cual oirá brevemente a las partes acerca del resultado de la misma.

285.3. Contestado el traslado, si se tratare de un asunto de puro derecho o si las partes no ofrecieren prueba o si el Tribunal no considerare necesario decretar ninguna o una vez diligenciada la que correspondiere, el Tribunal resolverá conforme con lo dispuesto en el artículo 298.

Art. 286. (Recursos).

286.1. Admitirán solamente el recurso de reposición las resoluciones que no decidan el incidente y las que lo resuelvan, cuando se tratare de incidente planteado dentro de un incidente o cuando lo principal no admita apelación.

286.2. El auto interlocutorio que decide el incidente será susceptible de los recursos de reposición y de apelación en subsidio, éste último con efecto diferido al de la sentencia principal.

Capítulo III – Incidentes especiales

Sección 1: Acumulación de autos

Artículo 287. (Requisitos).

Procederá la acumulación de autos cuando éstos estén pendientes ante el mismo o diferentes Tribunales, si concurrieren los siguientes requisitos:

1) Que el Tribunal ante el que se realice la acumulación sea competente, por razón de la materia, para conocer en todos: los procesos.

2) Que los procesos se encuentren en primera instancia y no estén en estado de pronunciarse sentencia.

3) Que los trámites de todos ellos sigan el mismo procedimiento. Podrán acumularse, sin embargo, procesos sujetos a trámites distintos, cuando ello resultare indispensable en razón de darse la circunstancia prevista en la parte final de este artículo.

4) Que los procesos versen sobre idénticas pretensiones entre las mismas partes o sobre pretensiones diferentes pero provenientes de la misma causa, sean iguales o diferentes las partes o sobre pretensiones diferentes siempre que las partes sean idénticas y recaigan sobre las mismas cosas.

Procederá la acumulación, en general, cuando la sentencia que se ha de pronunciar en un proceso produzca efecto de cosa juzgada con relación a los restantes.

Art. 288. (Procedimiento).

288.1. La acumulación podrá solicitarse por cualquiera de las partes interesadas o decretarse de oficio en cualquier momento de la primera instancia del proceso, hasta que llegue al estado de pronunciarse sentencia.

288.2. Será competente para decretar la acumulación el Tribunal del proceso que hubiere prevenido; pero si alguno se tramitara ante un Tribunal de mayor jerarquía que los otros, éste será el competente.

288.3. La petición se formulará con los requisitos establecidos para la demanda, en cuanto fuere pertinente y se sustanciará con un traslado a todas las demás partes interesadas con plazo de diez días, vencidos los cuales, dispondrá el Tribunal que se traigan a la vista todos los expedientes en trámite. Si algún Tribunal rehusara la remisión, éste o el requirente someterán la cuestión al Tribunal Supremo, el que decidirá sin otro trámite.

288.4. La, petición de acumulación suspenderá el trámite del proceso en el cual se solicita y la recepción del pedido de remisión de los autos tendrá igual efecto en los restantes procesos. Todo ello sin perjuicio de las medidas de urgencia que procedan.

288.5. Con todos, los autos a la vista, el Tribunal decidirá. La resolución que acoja la pretensión será inapelable; la que la rechace será apelable sin efecto suspensivo.

288.6. En caso de injustificada oposición o si ésta fuere notoriamente indebida, se condenará en costas; en los demás casos, los gastos se pagarán en el orden causado.

288.7. El proceso más reciente se acumulará al más antiguo, sin perjuicio de lo que respecto de la competencia dispone el ordinal .2 de este artículo.

288.8. Decretada la acumulación, el proceso más adelantado en su tramitación detendrá su curso hasta que todos lleguen al mismo estado; en

adelante se tramitarán en un solo expediente y se fallarán por una misma sentencia.

Sección 1: Recusación

Artículo 289. (Causas e iniciativa).

289.1. Será causa de recusación, toda circunstancia compro bable que pueda afectar la imparcialidad del Juez, por presunto interés en el proceso en que interviene, por afecto o enemistad en relación a las partes o sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento).

289.2. El Juez que se considerare incluido en alguna de las circunstancias mencionadas en el ordinal anterior, lo hará saber a las partes, las que dispondrá del plazo de seis días para promover el incidente de recusación; en caso de no hacerlo, se entenderá que renuncian a invocar el impedimento.

289.3. Cuando el Juez estimare necesario su apartamiento del proceso, podrá declararse inhibido de oficio, indicando la causa que motivare su apartamiento.

289.4. Si solo se tratare de causales de decoro o delicadeza, el Juez no podrá inhibirse si no obtiene la previa autorización del Tribunal superior que corresponda o del Tribunal que integra, si es colegiado; la solicitud, con expresión de sus fundamentos, sé planteará en forma verbal o escrita.

289.5. El incidente de recusación podrá ser promovido por la parte interesada, aún cuando nada haya expresado el Juez. En este caso, la recusación deberá plantearse en la primera actuación que la parte realice en el proceso. Si la causal fuere superveniente, deberá ser deducida no bien se tuviere conocimiento de su existencia, hasta la conclusión de la causa.

289.6. Después que un Juez, que no sea recusable, haya comenzado a conocer en un asunto, no podrán actuar en él los abogados o procuradores cuya intervención pudiere producir su separación.

Art. 290. (Competencia y procedimiento).

290.1. Será competente para entender en el incidente de recusación, así como en la abstención, el Tribunal superior del involucrado.

Cuando se tratare de la recusación de un integrante de un órgano colegiado, entenderá éste integrado conforme con la ley; en el mismo caso y si se trata de abstención por causales de decoro o delicadeza (artículo 289.4.), la petición será decidida por los otros integrantes del órgano.

290.2. La demanda de recusación se planteará, con la indicación y solicitud de toda la prueba que se pretenda diligenciar (artículo 111), ante el propio Tribunal del Juez recusado.

290.3. Presentada la demanda, si el Juez recusado la aceptare y se abstuviere de intervenir en el asunto, remitirá los autos al subrogante; si se trata de un integrante de un órgano colegiado, será sustituido conforme con la ley.

290.4. Si el Juez no aceptare la causal de recusación, se someterá el incidente a conocimiento del Tribunal que correspondiere, con exposición del Juez recusado, indicación de la prueba que se proponga producir y solicitud de su diligenciamiento (artículo 111), de todo lo cual se formará pieza separada.

290.5. La demanda de recusación o el planteo de oficio no suspenderá el trámite del proceso hasta que éste llegue al estado de pronunciar auto interlocutorio o sentencia definitiva. Los actos cumplidos serán válidos, aún cuando se declarare fundada la recusación.

290.6. El Tribunal que conociera en la recusación podrá calificar previamente la demanda y rechazarla de plano, si la considerare manifiestamente infundada o darle entrada y convocar a audiencia.

290.7. En la audiencia, se oirá al recusante y al Juez recusado, se diligenciará la prueba, sobre la cual éstos alegarán brevemente y se pronunciará sentencia, la que será inapelable.

El Tribunal podrá reservarse pronunciar sentencia por separado, dentro del plazo de quince días o diferir la formulación de los fundamentos del fallo pronunciado en la audiencia, dentro de los diez días posteriores.

Lo resuelto no admitirá recurso alguno.

290.8. El Ministerio Público será oído en último término, en la audiencia a que se refiere el ordinal anterior.

Art. 291. (Recusación de Fiscales).

291.1. Los Fiscales serán recusables, salvo que actúen en calidad de partes, por las mismas causales y por el mismo procedimiento establecido en los artículos anteriores. Será competente para entender en el incidente, el Tribunal que conoce en el asunto en que éste se plantea.

291.2. Planteada la recusación, el Fiscal no podrá dictaminar, salvo, sobre cuestiones meramente formales, mientras el incidente no sea decidido. Si el incidente se hallare pendiente y llegare la oportunidad de dictaminar sobre el fondo del asunto, los autos serán pasados sin más trámite al Fiscal subrogante para que lo haga. Desechada la recusación, la causa volverá al Fiscal originario, una vez que el subrogante se haya expedido, si éste ya hubiere recibido el expediente.

Sección III: Contienda de competencia

Artículo 292. (Resoluciones contradictorias sobre competencia).

Si por cualquier circunstancia, dos o más Tribunales, resultaren declarados competentes o incompetentes para entender en un mismo asunto, por sentencias ejecutoriadas, cualquiera de ellos, de, oficio o a petición de parte, podrá someter la cuestión a la decisión del Tribunal Supremo. Este, sin más trámite que las diligencias que creyere oportunas para mejor proveer, resolverá cuál de los Tribunales debe conocer en el asunto.

Sección IV: Rendición de cuentas

Artículo 293. (Declaración preliminar).

293.1. Todo aquel que se considerare con derecho a exigir de alguien rendición de cuentas, podrá pedir que se declare judicialmente que el, futuro demandado está obligado a rendirlas.

La pretensión se sustanciará y decidirá en la forma prevista por los artículos 285 y 286.

293.2. Si la resolución ejecutoriada declarase que el de mandado está obligado a rendir cuentas, se le intimará que las presente dentro del plazo prudencial que el Tribunal le señalará.

Si dentro de ese plazo se presentaren las cuentas, se discutirán en proceso ordinario (artículo 297).

Si no se presentaren dentro de ese plazo, se estará a las cuentas que presente la parte contraria, en todo cuanto el obligado a rendirlas no probare ser inexacto. En este caso las cuentas también se discutirán en proceso ordinario.

Capítulo IV – Tercerías

Artículo 294. (Procedimiento).

294.1. Tercería voluntaria.

Planteada la demanda por el tercerista, se conferirá traslado de su intervención a cada parte y el Tribunal resolverá la ad misión o el rechazo por sentencia interlocutoria, que sólo será apelable si rechaza la intervención.

Será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 110, 111, 120 y 121.

294.2. Tercero coadyuvante.

El tercero coadyuvante formará una sola parte con la coadyuvada. Si resultara indispensable a dicho efecto, podrá el Tribunal imponer la representación por procurador común.

294.3. Tercero excluyente.

El tercero excluyente actuará como una más de las partes en el proceso.

Cuando el tercero excluyente alegare hechos y ofreciere prueba, se diligenciará la misma de acuerdo con el trámite propio del proceso en que se deduce la tercería, acordándose a las partes similares facultades probatorias en relación a esos hechos.

Art. 295. (Tercerías en procesos de ejecución, ejecutivos o cautelares).

295.1. La tercería en procesos de ejecución, ejecutivos o cautelares, promovida por quien comparezca a raíz de alguna medida cautelar tomada sobre bienes de su propiedad o sobre los cuales tuviere un mejor derecho que el embargante, se sustanciará en pieza separada con quien solicitó la cautela y con su contraparte, con un traslado por el plazo común de seis días, siguiéndose, en lo demás, el procedimiento regulado por los artículos 285 y 286.

295.2. La promoción de tercería de dominio suspenderá el trámite del principal, al llegarse al estado de remate del bien respectivo.

295.3. Tratándose de tercería de mejor derecho, el trámite del principal se suspenderá al formularse la liquidación del haber del ejecutante.

Art. 296. (Cautela del tercerista).

El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener la cancelación de las medidas decretadas sobre los bienes de su propiedad, dando cautela suficiente, a juicio del Tribunal, de responder al crédito del embargante en caso de que no probare ser suyos los bienes embargados.

Título I — PROCESO DE CONOCIMIENTO

Capítulo 1 – Proceso ordinario

Artículo 297. (Remisiones)

El proceso ordinario será precedido por la conciliación (artículos 263 a 267), sin perjuicio de las diligencias preparatorias que se solicitaren (artículos 272 a 273) y comenzará con la de manda (artículos 110 a 115).

Art. 298. (Procedimiento).

298.1. Presentada la demanda, el Tribunal, una vez ejercido el control de su regularidad (artículos 33.1 y 112), ordenará el emplazamiento según lo dispuesto en la Sección II, Capítulo II, Título VI del Libro 1 y conferirá traslado al demandado por el plazo de treinta días.

298.2. Si mediare reconvención, se conferirá traslado al actor por el plazo de treinta días.

298.3. Transcurridos los plazos señalados, con contestación o sin ella, se convocará a audiencia preliminar.

Art. 299. (Rebeldía).

299.1. Transcurrido el plazo para contestar la demanda sin que el demandado, emplazado en su domicilio, hubiere comparecido, podrá pedir el actor la declaración de su rebeldía.

299.2. En las situaciones previstas por los artículos 46.1 y 47.1. y 47.3 de este Código cuando se tratare de la parte actora y si el emplazamiento a que se refieren las disposiciones citadas se hubiere efectuado en el domicilio de quien debe ser emplaza do, podrá el demandado, en caso de no comparecencia, solicitar la declaración de su rebeldía.

299.3. La declaración de rebeldía se notificará en el domicilio, pero todas las resoluciones y actuaciones posteriores, excepto la sentencia definitiva, salvo la pronunciada en audiencia, se notificarán con forme con lo dispuesto en el artículo 83.

299.4. La rebeldía del demandado determinará que el Tribunal deba tener por admitidos los hechos alegados por el actor, en cuanto no resultaren contradichos por la prueba de autos, la que deberá igualmente ser diligenciada, en todo lo que el Tribunal considere necesario, salvo que el proceso se refiriere a alguna de las cuestiones mencionadas en el inciso 2" del artículo 124, en cuyo caso se estará a lo que allí se dispone.

Desde el momento en que el demandado fuere declarado en' rebeldía podrá disponerse, si el actor lo pidiere, el embargo de sus bienes en cuanto fuere necesario para asegurar el resultada del proceso.

299.5. Si el declarado rebelde es el actor, el demandado será absuelto al declarar la rebeldía, salvo si ha mediado reconmención, en cuyo caso se continuará con el proceso.

299.6 El declarado rebelde podrá comparecer en cualquier estado del proceso, tomándolo en el estado en que se hallare.

Art. 300. (Audiencia preliminar).

300.1. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado, a juicio del Tribunal, que justificare la comparecencia por representante.

Las personas jurídicas y los incapaces, comparecerán por intermedio de sus representantes (artículo 44).

Todo, sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio (artículo 48).

Si por razones de fuerza mayor insuperable, debidamente acreditadas, una de las partes no pudiere comparecer, la audiencia podrá diferirse por una sola vez.

300.2. La inasistencia no justificada del actor a la audiencia preliminar, se tendrá como desistimiento de su pretensión.

300.3. Si el inasistente fuere el demandado, el Tribunal pronunciará sentencia de inmediato y tendrá por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario, salvo que el proceso refiriese a alguna de las cuestiones mencionadas en el inciso 2 del artículo 124, en cuyo caso se estará a lo que allí se dispone.

300.4. Lo dispuesto en los ordinales .2 y .3 será aplicable, en lo pertinente, cuando mediare reconvención.

Art. 301. (Contenido de la audiencia preliminar).

En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:

1) Ratificación de la demanda y de la contestación y, en su caso, de la reconvención y de la contestación a la misma, pudiéndose alegar hechos nuevos siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, así como aclarar sus extremos si resultaren oscuros o imprecisos, a juicio del Tribunal o de las partes.

2) Contestación por el actor de las excepciones opuestas por el demandado y por éste de las que hubiere opuesto el actor respecto de la reconvención.

3) Tentativa de conciliación, que deberá realizar el Tribunal, respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos.

4) Recepción de la prueba sobre las excepciones, en la situación extraordinaria de entender el Tribunal que existe algún hecho a probar, en cuyo caso se recibirán, exclusivamente, las pruebas solicitadas en el escrito en que se hubieren opuesto las excepciones y aquellas que lo fueron en la ocasión a que refiere el numeral 2.

5) Pronunciamiento de sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso, para resolver los problemas planteados por las excepciones procesales propuestas o las nulidades denunciadas o las que el Tribunal hubiere advertido y decidir, a petición de parte o de oficio, todas las cuestiones que obstaren a la decisión de mérito, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando ésta sea definible al comienzo del litigio. El Tribunal podrá prorrogar la audiencia a los efectos de lo dispuesto en el numeral 4), pero en la siguiente oportunidad deberá recibirse la totalidad de la prueba y pronunciarse la sentencia interlocutoria de saneamiento. La formulación de sus fundamentos podrá diferirse hasta otra audiencia que habrá de llevarse a cabo en plazo no mayor d diez días y, cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar la audiencia por plazo no mayor de quince días para pronunciar la sentencia con sus fundamentos.

6) Fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba; pronunciamiento sobre los medios de prueba solicitados por las partes, rechazando los que fueren inadmisibles, innecesarios o inconducentes (artículo 33.6), disponiéndose la ordenación y diligenciamiento de los que correspondan,

recepción de los que fuere posible diligenciar en la propia audiencia y fijación de otra complementaria para el diligenciamiento de los restantes, acordándose lo necesario para que, en ocasión de esa audiencia complementaria, se diligencien totalmente las pruebas que no se hubieren recibido en la audiencia preliminar (artículo 303.1.).

Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio del Tribunal, refieran a hechos nuevos o a rectificaciones hechas en la propia audiencia (numeral 1).

Art. 302. Resoluciones pronunciadas en la audiencia).

302.1. Las resoluciones pronunciadas en el curso de la audiencia admiten recurso de reposición, el que deberá proponerse en la propia audiencia y decidirse en forma inmediata por el Tribunal (artículo 216).

302.2. La sentencia interlocutoria que resuelve las excepciones admite los recursos de reposición y de apelación en subsidio, con efecto diferido. Ambos deberán interponerse en la propia audiencia, precediéndose, respecto del de reposición, como lo prevé el ordinal 1 y respecto de la apelación diferida, conforme con artículo 221 numeral 39.

Pero la sentencia interlocutoria que se pronuncie sobre las excepciones previstas en los numerales 1 79 y 8 del artículo 123, así como toda otra que obste a la prosecución del proceso, admitirá los recursos de reposición y de apelación subsidiaria con efecto suspensivo, que deberán anunciarse en la propia audiencia e interponerse conjuntamente conforme con lo dispuesto en el artículo 223.3.

En estos casos, el anuncio de que se deducirá apelación, de terminará la suspensión de la audiencia. Vencido el plazo para apelar sin que así se hiciere o devueltos los autos con la resolución del superior, se continuará con el proceso, cuando correspondiere y se fijará fecha para la reanudación de la audiencia sus pendida.

302.3. Si la sentencia interlocutoria acoge la excepción de litispendencia, ordenará el archivo del expediente.

Si acoge la excepción de defecto legal, la parte subsanará los defectos en la propia audiencia, de lo cual se dejará constancia en acta resumida y se continuará con el acto, otorgándose al de mandado oportunidad para complementar su contestación, atendidas las aclaraciones o precisiones formuladas por el actor.

Si acoge las excepciones de falta de capacidad o de personería, se otorgará un plazo de diez días para subsanar el defecto bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

Si se dispone la citación de un tercero, se procederá a su emplazamiento conforme a derecho.

En estos dos últimos casos, se suspenderá la audiencia a sus efectos.

302.4. Salvo que el Tribunal se declare incompetente, en p cuyo caso no resolverá otras cuestiones, se pronunciará una sola a sentencia decidiendo todas las excepciones previas y saneando el proceso.

302.5. Resueltas todas esas cuestiones se pasará a recibir la prueba, total o parcialmente y a disponer, cuando ello sea necesario, una audiencia complementaria.

302.6. Si la prueba se hubiere diligenciado totalmente o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada o el asunto fuere Y de puro derecho, se pasará a oír las alegaciones de las partes y a pronunciar sentencia conforme con lo dispuesto por los ordinales 6 y 7 del artículo siguiente.

302.7. Las manifestaciones del Tribunal en esta audiencia y en cuanto ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, en ningún caso significará prejuzgamiento.

Art. 303. (Audiencia complementaria).

303.1. Si la prueba no hubiere podido diligenciarse en la preliminar, total o parcialmente, se citará a las partes para la audiencia complementaria de prueba en el más breve tiempo posible, considerando el que insumirán las diligencias que se hubiere dispuesto realizar fuera de audiencia (inspecciones, pericias, informes y similares), a fin de que las mismas estén cumplidas en oportunidad de la audiencia complementaria.

303.2. La audiencia no se suspenderá ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el caso de que, por única vez, el Tribunal entienda procedente prorrogarla por existir razones de fuerza mayor que afecten a una de ellas.

También podrá prorrogarse, por única vez, de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el Tribunal la considere indispensable para la instrucción; en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia.

303.3. En todo caso, la ausencia a la audiencia complementaria de prueba determinará una presunción desfavorable a la parte inasistente.

303.4 En la audiencia complementaria se recibirá toda la prueba y se oirá a los peritos y testigos, los cuales permanecerán aguardando su término a los efectos de eventuales aclaraciones o careos, salvo que el Tribunal autorice su retiro.

303.5. Todo lo actuado se documentará según lo dispuesto en los artículos 87 y 98, agregándose todos los informes y demás documentos recibidos.

En el acto se podrán insertar las constancias que las partes soliciten, en especial las concernientes a declaraciones e informes y todo lo demás que resulte necesario, a juicio del Tribunal.

En particular, se dejará constancia de las resoluciones del Tribunal rechazando o admitiendo alguna prueba controvertida, así como de la interposición de recursos y, en su caso, de lo decidido por el Tribunal a su respecto.

Los testigos y peritos firmarán su comparecencia, lo que podrán hacer en el libro de asistencias que llevará la oficina actuaría, sin que sea necesaria la suscripción del acta.

303.6. Al término de la misma, el Tribunal oirá a las partes en sus exposiciones de conclusión de causa, las que serán breves, pudiendo el Tribunal disponer el tiempo a que deberán ajustarse como, así mismo, formular las interrogantes que sirvan para precisarlas.

303.7. Finalmente, el Tribunal se retirará para considerar su decisión y a continuación pronunciará sentencia, cuyos fundamentos podrán formularse dentro del plazo de los quince días siguientes. En los casos en 4ue la complejidad del asunto lo justifique, podrá prorrogarse la audiencia por plazo no mayor de treinta días para pronunciar la sentencia con sus fundamentos.

Art. 304. (Segunda instancia).

304.1. La segunda instancia se provocará por la interposición del recurso de apelación (artículos 218 a 231).

304.2. Si la segunda instancia tramitare ante Tribunal colegiado, el expediente una vez recibido, será pasado a estudio de la cada integrante en forma simultánea, en reproducción facsimilar.

Finalizado el estudio por el Tribunal, sea éste colegiado o unipersonal y si no se hubiere resuelto pronunciar decisión anticipada (artículo 20), se citará a audiencia.

304.3. En la audiencia, se diligenciará la prueba que el Tribunal hubiere dispuesto a iniciativa de parte o de oficio (artículo 223.2 y .3, numeral 4) y se oirá a las partes en la forma prevista para la primera instancia, pronunciándose luego sentencia.

304.4. En el caso de que no se debiera diligencias prueba, se convocará igualmente a audiencia a efectos de oír a las partes y pronunciar sentencia.

304.5. La sentencia se pronunciará conforme con lo dispuesto en los artículos 301, numeral 59 o 303.7, según los casos, dentro de los plazos allí señalados.

304.6. Lo dispuesto en los ordinales precedentes, es aplicable a la segunda instancia de todos los procesos, salvo lo previsto por el artículo 306, numeral 59 respecto del proceso extraordinario.

Art. 305. (Casación).

Si correspondiere la casación, se procederá como lo prevén los artículos 238 a 250.

Capítulo II – Proceso extraordinario

Artículo 306. (Procedimiento).

El proceso extraordinario se regirá por lo establecido para el ordinario en cuanto fuere pertinente y con las siguientes modificaciones.

1) El trámite se concentrará en una sola audiencia de conciliación, fijación de los puntos en debate, prueba, alegatos y sentencia.

2) Sólo se admitirá la reconvención sobre la misma causa y objeto que los propuestos en la demanda.

3) Luego de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención, el Tribunal dispondrá el diligenciamiento de la prueba solicitada por las partes y que no pueda ser recibida en la audiencia, de modo tal que a la fecha de aquella, esa prueba se halle diligenciada.

4) El Tribunal se pronunciará en una única sentencia sobre todas las excepciones y defensas; sólo si entre ellas se encuentra la de incompetencia y se declarare incompetente, omitirá pronunciarse sobre las otras.

5) En la segunda instancia no se admitirá otra prueba que la que el Tribunal entienda oportuna para mejor proveer, la documental sobre hechos supervenientes o la de ese mismo género que se declare, bajo juramento, no conocida hasta ese momento, conforme con lo dispuesto por el artículo 223.2, numeral 2 o la de fecha auténtica posterior a la de la audiencia de primera instancia.

Art. 307. (Recursos).

Contra la sentencia definitiva dictada en proceso extraordinario, caben los recursos previstos en las Secciones II, IV, V, VI y VII, Capítulo. VII, Título VI del Libro 1, conforme con lo que disponen las reglas generales y propias de cada uno de ellos.

No obstante, en aquellos procesos en que se sentencia "rebus sic stantibus", como en el de alimentos o cuestiones relativas a menores, cuando se alegare el cambio de la situación ya resuelta, corresponderá, en sustitución de los recursos ordinarios, el pro ceso extraordinario posterior, para decidir la cuestión definida conforme con las nuevas circunstancias que la configuran.

Capítulo III – Disposiciones generales

Artículo 308. (Procedencia del proceso ordinario).

308.1. Tramitarán por el proceso ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan establecido un proceso especial para su sustanciación.

308.2. No obstante, el Tribunal podrá disponer que se tramiten por el procedimiento análogo establecido en este Código ciertas pretensiones, cuando a su juicio, de ese modo, se contemplen mejor los intereses del caso

planteado. En todo caso, el régimen de recursos será el establecido para el juicio ordinario.

Art. 309. (Procedencia del proceso extraordinario).

Tramitarán por el proceso extraordinario, las pretensiones relativas a los interdictos posesorios y las prestaciones alimenticias y sus modificaciones y las demás que dispongan leyes especiales.

Art. 310. (Reglas especiales para ciertas pretensiones).

Sin perjuicio de lo dispuesto por las normas sustanciales:

1) Tratándose de los procesos de divorcio y, en general de los de familia, el Tribunal tendrá facultades para resolver en forma anticipada la situación de los menores, su régimen de guarda y visitas provisorio, la pensión provisional, así como la cuestión de cuál de los cónyuges habrá de permanecer en el hogar conyugal.

El Tribunal procurará, en todo caso, el acuerdo basado en el criterio de la promoción de la familia y de sus integrantes conservando su unidad y favoreciendo a los más desprotegidos.

2) En las pretensiones propias de la materia laboral, agraria y demás de carácter social, no obstante lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 301, se podrá modificar la pretensión en la audiencia preliminar, cuando resulte, manifiestamente, que carencias de información o asesoramiento han determinado omisiones en relación a derechos que asisten a la parte. En estos casos, el Tribunal otorgará a la contraparte oportunidades para la adecua da contestación, pudiendo, a tales efectos, prorrogar la audiencia, si las nuevas cuestiones son de hecho y no fuere posible controvertirlas sin previa información.

3) En las pretensiones relativas a menores o incapaces, se considerará prioritaria la tutela de su interés por el Tribunal.

4) En los procesos a que refieren los dos ordinales anteriores, el Tribunal dispondrá de todos los poderes de instrucción que la ley acuerda a los Tribunales del orden penal en la instrucción, sin perjuicio del respeto al principio de contradicción y a los propios del debido proceso legal.

Capítulo IV – Proceso de estructura monitoria

Artículo 311. (Aplicación).

El proceso de estructura monitoria se aplicará en los casos especialmente previstos por la ley y además en los siguientes procesos: 1) ejecutivos; 2) desahucio o desalojos; 3) entrega de la cosa; 4) entrega efectiva de la herencia; 5) resolución por falta de pago o escrituración judicial de promesas inscriptas en los respectivos registros (compra-venta de inmueble o de establecimiento o de empresa comercial o de unidad en propiedad horizontal).

Art. 312. (Presupuestos).

312.1. En todos los casos se requerirá documento auténtico o autenticado judicialmente en la etapa preliminar respectiva.

312.2. Exceptuase el caso de entrega de la cosa, derivada de contrato del que resulte la obligación de dar, si se trata de contrato que no requiere documentación. En este caso y en etapa preliminar, que se seguirá por la vía incidental, podrá establecerse la prueba de la existencia del contrato y su cumplimiento por parte del actor.

312.3. En el caso de resolución o en el de desahucio por falta de pago, corresponderá previamente una intimación judicial a pedido del actor, la cual se practicará por el término de treinta días.

Art. 313. (Procedimiento ejecutivo).

313.1. Son de aplicación a este proceso las normas relativas al proceso preliminar, en cuanto corresponda y lo dispuesto en el artículo 312.

313.2. La demanda se fundará conforme con lo establecido en las disposiciones generales, debiendo acompañarse el documento del cual surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible, auténtico o judicialmente autenticado. La calidad de título ejecutivo emanará solamente de la ley.

Es de aplicación este procedimiento en el caso de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que condene a pagar cantidad líquida, siempre que haya transcurrido un año de haber que dado ejecutoriada.

313.3. El Tribunal calificará el título y, de considerarlo ejecutivo, decretará el embargo, dispondrá llevar adelante la ejecución para hacer efectiva la cantidad reclamada, intereses y costas y citará de excepciones al deudor.

Si el Tribunal entiende que no procede el proceso ejecutivo por no existir título ejecutivo, lo declarará así.

313.4. El deudor dispondrá de un plazo de diez días para oponer las excepciones de que se crea asistido, en un mismo escrito y ofreciendo concretamente el diligenciamiento de todos los me dios de prueba de que disponga. Sólo podrán oponerse las excepciones taxativamente admitidas por las leyes rechazándose de plano, sin sustanciación, las inadmisibles.

313.5. De las excepciones opuestas se conferirá traslado al actor quien dispondrá de diez días para contestarlas, en un solo escrito, ofreciendo concretamente el diligenciamiento de todos los medios de prueba de que disponga.

Será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 111 y 120.

313.6. Si no se oponen excepciones u opuestas las mismas y una vez contestadas o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal convocará a audiencias.

1) Si no se opusieran excepciones, procurará concertar con las partes su conciliación para el cumplimiento de la sentencia. Si fracasa la conciliación, se pasará a la vía de apremio.

2) Si se oponen excepciones, sea que se conteste o no el traslado de las mismas, la audiencia se realizará conforme con lo previsto para la audiencia preliminar y en su caso, la audiencia complementaria de prueba.

313.7. La sentencia se pronunciará sobre todas las excepciones; si entre ellas se encuentra la de incompetencia, solamente, decidirá ésta. El Tribunal que resulte en definitiva competente resolverá sobre las restantes excepciones.

313.8. La sentencia de segunda instancia, en los casos en que la excepción de incompetencia fuere desechada en el fallo de primera, se pronunciará sobre todas las excepciones, siempre que no revoque lo decidido en materia de incompetencia.

Art. 314. (Recursos).

314.1. En el proceso ejecutivo sólo serán apelables:

1) la sentencia inicial que no haga lugar al mismo;

2) la definitiva que recaiga acerca de las excepciones;

3) la que admite la excepción de incompetencia;

4) la que disponga la ampliación del embargo o la que le deja sin efecto;

5) la que rechace el diligenciamiento de prueba;

6) la que recaiga sobre las tercerías deducidas.

Salvo en los casos de los numerales l), 2) y 6) en los restantes se otorgará sin efecto suspensivo.

314.2. Las demás resoluciones serán susceptibles del recurso de reposición.

Art. 315. (Proceso Ordinario posterior).

Dentro de los seis meses de cumplida o ejecutada totalmente la sentencia, cabrá el proceso ordinario de revisión de lo decidido en el proceso ejecutivo, el cual se tramitará ante el mismo Tribunal que entendió en la primera instancia del referido proceso.

Art. 316. (Extensión del procedimiento ejecutivo).

316.1. Serán de aplicación a los demás procesos previstos en el art. 311, lo establecido en los artículos 313 á 315 inclusive, en lo pertinente, según el objeto del proceso.

316.2. De no establecerse otra cosa en las leyes respectivas, el plazo de desalojo será de treinta días o de un año, según se trata de mal o de buen pagador; el de entrega de la cosa y de entrega efectiva de la herencia cuando se ocupen bienes de ésta sin aducir título legal al respecto de treinta días; de sesenta días, para la escrituración judicial.

Título V — PROCESOS DE EJECUCIÓN

Capítulo 1 – Disposiciones generales

Artículo 317. (Iniciativa).

Sólo procederá la ejecución de sentencia a pedido de parte interesada, una vez transcurrido el plazo o cumplida la condición que se hubiere establecido.

Art. 318. (Sentencia).

La ejecución corresponderá una vez que quede firme la sentencia, sin perjuicio de la ejecución provisoria en el caso del artículo 230.

Art. 319. (Facultades del Tribunal y las partes).

319.1. La etapa de ejecución se circunscribirá a la realización o aplicación concreta de lo establecido en la sentencia de conocimiento.

319.2. El Tribunal dirigirá el procedimiento con plena autoridad y adoptará todas las medidas necesarias al efecto las partes actuarán en plano de igualdad, pero limitándose exclusivamente al control del cumplimiento de la sentencia conforme con la ley.

319.3. El ejecutado solamente podrá oponerse a la ejecución alegando la extinción parcial o total de la obligación, sobre venida luego de la sentencia, en cuyo caso deberá acompañar toda la probanza documental de que disponga y mencionar los concretos medios de prueba de que intente valerse para justificar la circunstancia.

319.4. El Tribunal rechazará de plano, sin sustanciar, todo otro género de excepción, a como la que, aún tratándose de la admitida, constituyera cuestión de hecho a cuyo respecto se omite acompañar o indicar los medios probatorios conducentes a su justificación.

319.5. Si la excepción fuere admisible, Se sustanciará por el procedimiento de los artículos 313 y 314.

Art. 320. (Conminaciones económicas o personales) (astreintes).

320.1. En cualquier etapa del proceso y para el cumplimiento de sus providencias, el Tribunal de oficio o a pedido de parte, podrá adoptar las medidas de conminación o astricción necesarias.

320.2. Las conminaciones económicas se fijarán por el Tribunal en una cantidad en dinero a pagar por cada día que demo re el cumplimiento.

El Tribunal dispondrá la liquidación de las mismas una vez transcurrido un plazo prudencial. La cuenta pasará al Alguacil del Tribunal, el que embargará bienes del deudor suficientes, los hará tasar por perito que designará y los asignará a un Rematador público para su remate por los dos tercios de su valor de tasación dando cuenta.

Las cantidades se fijarán teniendo en cuenta el monto o la naturaleza del asunto y las posibilidades económicas del obligado, de tal manera que signifiquen una efectiva constricción sicológica al cumplimiento dispuesto.

El Tribunal podrá en cualquier momento, de oficio o a pedido de parte, aumentar, moderar o suprimir la conminación establecida.

Las cantidades que se paguen pasarán a un Fondo Judicial.

320.3. Las conminaciones personales consistirán en el tras lado por la fuerza pública ante el Tribunal de los encargados judiciales, incluso testigos, que no concurran espontáneamente una vez convocados; en el arresto, que no podrá exceder de 48 horas,, en los casos que expresamente fije la ley y para lograr la entrega de elementos necesarios para la ejecución dispuesta en la respectiva etapa del proceso.

Art. 321. (Ejecución provisoria y ejecución definitiva).

321.1. La ejecución provisoria y la definitiva se realizarán por iguales procedimientos, debiendo preceder a la primera lo dispuesto en el artículo 230 (plazo, iniciativa y cautelas) y, en ambas, el proceso incidental de liquidación, cuando fuere pertinente.

321.2. Si la sentencia de segunda instancia confirmare la de primera, declarará, al mismo tiempo, definitiva la ejecución pro visoria; igual sucederá en el recurso de casación.

Si la revocare, decretará que se vuelvan las cosas a su esta do anterior con más los daños y perjuicios que correspondieren. De no ser ello posible, se abonarán los daños y perjuicios que hubiere causado la ejecución provisoria.

La parte que sufrió ejecución provisoria dejada sin efecto, dispondrá de noventa días para reclamar el pago de los daños y perjuicios pertinentes, los que se liquidarán por la vía inciden tal de liquidación.

321.3. Se cancelarán de oficio las cautelas pertinentes (prestadas por una u otra parte, conforme al artículo 230) según el resultado definitivo del proceso de conocimiento.

321.4. En ningún caso la revocación y la casación podrán perjudicar a terceros de buena fe ni determinar la anulación de los actos o contratos celebrados con el dueño aparente de los bienes.

Capítulo II – Ejecución de sumas de dinero

Artículo 322. (Procedencia).

322.1. (Cantidad líquida y exigible). Procede esta ejecución en los casos expresamente previstos en la ley; en particular cuando se imponga el pago de cantidad líquida y exigible por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en transacción aprobada judicialmente; en conciliación

realizada ante el Tribunal o por laudo arbitral no pendiente del recurso de nulidad.

322.2. (Sentencias que condenan al pago de cantidades ilíquidas).

Cuando una sentencia, condene al pago de cantidad ilíquida —en todo o en parte— se provocará su liquidación por vía incidental, previa a su ejecución; procederá igual solución, cuando en otro acto jurídico se establezca deuda ilíquida exigible.

322.3. (Cantidad ilíquida procedente de frutos). Promovida la demanda, el Tribunal conferirá traslado de la misma, debiendo el deudor formular la liquidación al contestarla; de la contestación se conferirá traslado al actor, siguiéndose en lo demás lo establecido en el Capítulo II, del Título III, de este Libro.

Si el demandado no presenta la liquidación se estará a la que presente el actor, salvo prueba en contrario.

322.4. (Cantidad ilíquida procedente de daños y perjuicios). El actor, al promover la demanda incidental, deberá realizar la liquidación de daños y perjuicios, siguiéndose, en los de más el trámite del Capítulo II del Título III, de este Libro.

Art. 323. (Iniciación de la ejecución).

El actor solicitará la ejecución y las medidas cautelares pertinentes agregando el título correspondiente. El Tribunal calificará el título y dispondrá la ejecución y la adopción de las medidas cautelares solicitadas sin audiencia del ejecutado.

Este será notificado personalmente de la providencia una vez cumplida la misma.

Art. 324. (Embargo).

324.1. (Orden). El embargo y, en su caso, el secuestro, se realizará en el siguiente orden: bienes muebles; inmuebles; créditos y genérico en derechos y acciones.

Cuando se trate de éstos últimos, la vía de apremio se sus penderá en tanto no se concrete en bienes individualizados.

324.2. (Mejora). En cualquier momento de la ejecución, el actor podrá solicitar mejora de embargo si constare la insuficiencia de la cautela. El Tribunal calificará la necesidad de la mejora y el actor será responsable de los daños que causare el ex ceso en el embargo.

324.3. (Créditos). Cuando se embargue un crédito del deudor, el acreedor quedará, por ese solo hecho, facultado para realizar las gestiones judiciales o extrajudiciales pertinentes para obtener la efectividad de la medida dispuesta.

324.4. (Eficacia). Todo acto de disposición o de gravamen sobre el bien embargado es ineficaz con respecto al embargante. A pedido del actor,

podrá el Tribunal, oportunamente, disponerla cancelación en los Registros pertinentes de los actos de gravamen posteriores al embargo trabado.

El orden de inscripción fija la preferencia del embargo o del derecho real respectivo, a los efectos del cobro de los créditos garantidos.

324.5. (Bienes inembargables). No se trabará embargo en los bienes que dispongan a las normas sustantivas pertinentes y en especial, sobre: 1) sueldos, jubilaciones y retiros, salvo que se trate de pago de pensiones alimenticias; 2) prendas de uso personal y muebles no suntuarios; 3) libros relativos a la profesión t del titular e instrumentos y máquinas de enseñanza o relativos C a la profesión u oficio del dueño, con excepción de la prenda que garantice el precio de adquisición; 4) artículos de consumo y subsistencia personal y familiar por un período de seis meses; 5) propiedad funeraria; 6) propiedades o rentas públicas; 7) cosas afectadas al servicio del culto religioso.

324.6. (Uso de cosas embargadas). Las cosas afectadas a servicios públicos seguirán utilizándose sin limitaciones, a pesar del embargo.

En todos los casos, el Tribunal limitará al mínimo indispensable las prohibiciones de uso de las cosas embargadas, las que podrán utilizarse siempre, salvo expresa disposición en contrario.

Art. 325. (Tasación).

325.1. Una vez practicado el embargo, de oficio o a petición de parte, el Tribunal en todos los casos designará un tasador para estimar el valor del bien embargado, salvo en el caso de que las partes, en la vía de apremio, pidan, de común acuerdo, la venta al mejor postor, sin base.

325.2. De la tasación se dará vista a las partes. Si hubiere observación de alguna de éstas, el Tribunal resolverá, pudiendo, a tal efecto, solicitar ampliación o aclaración del peritaje o designar nuevo perito.

325.3. Cuando se trate de bien inmueble u otros bienes de los que exista título documental e igualmente cuando exista cualquier documento que importe para el mejor conocimiento del bien o para su ulterior enajenación, el Tribunal intimará a la parte la agregación a los autos de la documentación pertinente, pudiendo utilizar al respecto las conminaciones económicas o personales adecuadas.

Art. 326. (Subasta).

326.1. (Providencia). Una vez firme la tasación, a solicitud del ejecutante, el Tribunal nombrará Rematador y ordenará la subasta del bien sobre la base de las dos terceras partes de la tasación.

326.2. (Publicidad). La subasta será precedida de la publicidad de práctica. Antes de fijarse la fecha, que se convendrá por el Alguacil del Tribunal con el Rematador, en audiencia a la que se convocará a las partes, que serán oídas al respecto, el Rematador indicará el plan de propaganda con no menos de treinta días de antelación a la fecha del remate que se

establezca. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá, modificar ese plan.

326.3. (Diligencia). La subasta se realizará por el Rematador designado y podrá presidirse por el Alguacil si así lo dispone el Tribunal.

En acta que se labrará al respecto, el Rematador dejará constancia del resultado del remate; la entrega de la suma que se; haya determinado por el Tribunal; nombre y domicilio del mejor postor, que será definitivo a los efectos del trámite del proceso, salvo expresa modificación ulterior por parte de aquel.

326.4. (Rendición de cuentas). Dentro de los diez días de efectuada la subasta, el Rematador deberá rendir cuentas de lo actuado, acompañando el acta de la subasta, los comprobantes de los gastos efectuados y el depósito de la seña en el Banco Oficial respectivo.

326.5. De resultar frustrada la subasta, a pedido de parte, el Tribunal dispondrá la realización de un nuevo remate, teniendo por base el cincuenta por ciento de la tasación efectuada.

326.6. Si el ejecutante adquiriere el bien en la subasta, no tendrá que consignar seña ni tampoco el precio, salvo en cuanto excediere del monto de su crédito.

Art. 327. (Liquidación del crédito y entrega del bien).

327.1. (Depósito del precio). Una vez aprobada la cuenta de la subasta, el Tribunal fijará plazo para la entrega del precio que se depositará en el Banco Oficial pertinente.

Si no se cumpliere 1ó dispuesto, el Tribunal establecerá un segundo plazo que no podrá exceder de la mitad del anterior. Transcurrido el mismo, la Oficina elevará los autos a conocimiento del Tribunal, que anulará el remate realizado y dispondrá nuevo remate; el mejor postor desistiente deberá pagar los gastos del remate anulado y los daños y perjuicios que se hubieren causado.

(Liquidación). Depositado el precio, la Oficina formulará la liquidación que someterá a aprobación del Tribunal, en el siguiente orden: 1) costas y gastos judiciales; 2) gastos del remate y honorarios de abogado y procurador del ejecutante; 3) crédito de ejecutante, salvo que existieren créditos preferentes; 4) créditos de otros embargantes por su orden de inscripción; 5) remanente, al deudor.

(Entrega). El bien mueble se entregará al comprador, labrándose acta al respecto, de la que se dará testimonio al interesado que lo requiera.

(Escrituración). En el caso de los inmuebles o de otros bienes cuya enajenación requiera escrituración, ésta se otorgará de oficio, se autorizará por el Notario que designe el abogado al pago de sus honorarios y se efectuará una vez comprobado en autos el pago del precio.

El Tribunal fijará plazo para la escrituración, que podrá prorrogar por una sola vez a pedido fundado de parte.

Vencido el plazo, el Tribunal revocará la designación y nombrará Notario que deberá escriturar dentro del plazo que se le fije; de excederse dicho plazo, el Tribunal podrá conminarlo, estableciendo como conminación un diez por ciento de su honorario por cada día de retraso en el cumplimiento.

Art. 328. (Condenas procesales).

328.1. (Ejecutado). Serán de cargo del ejecutado las costas y demás gastos justificados de la ejecución.

328.2. (Ejecutante). El ejecutante deberá satisfacer los devengados por sus pretensiones desestimadas.

328.3. (Mejor postor). Todo ello sin perjuicio de lo que corresponda abonar al mejor postor en el caso de desistir del re mate, explícita o implícitamente.

Art. 329. (Impugnaciones).

329.1. Las partes podrán interponer el recurso de reposición contra toda providencia pronunciada en la vía de ejecución.

329.2. Cabe el recurso de apelación sin efecto suspensivo contra las providencias que decidan la ejecución, la aprobación de la tasación, el remate y la liquidación de haberes. El Superior, atento a la situación, podrá, en su caso, decretar la suspensión hasta que se resuelva el recurso.

329.3. El ejecutado podrá en cualquier momento solicitar la suspensión del remate, dando garantía suficiente de responder al crédito reclamado y gastos causados.

Capítulo III – Otras especies de ejecución

Artículo 330. (Obligaciones de dar).

330.1. Para ejecutar una sentencia que condene a dar alguna cosa que se halle en el patrimonio del deudor, el Tribunal dispondrá mandamiento para desapoderar de ella al obligado y entregarla al actor, a cuyo efecto utilizará el auxilio de la fuerza pública y las conminaciones que correspondieren.

330.2. De resultar imposible la ejecución en especie, se pro cederá a la ejecución por el precio de la cosa y los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán por el procedimiento del artículo 322.2, .3 y .4, según corresponda.

Art. 331. (Obligaciones de hacer).

331.1. Si la sentencia condenare a hacer algo, el actor solicitará del Tribunal que intime al condenado su realización en el plazo establecido o en el que aquél determinare.

Vencido el plazo y si no se diere cumplimiento, el ejecutante podrá optar por el procedimiento previsto en el ordinal .3 o solicitar que el Tribunal determine el tercero que deba realizarlo. En este último caso los gastos en que se incurra serán abonados por el ejecutado dentro de los diez días de aprobada la cuenta por el Tribunal, conforme con el procedimiento del artículo 322.2., .3 y .4, según corresponda; si no lo hiciera, la abonará al ejecutante, que para su reembolso tendrá abierta la vía de apremio contra el ejecutado.

Si se tratare de obligación no susceptible de cumplirse por tercero, a pedido de parte, podrá perseguirse su cumplimiento en especie estableciéndose conminación económica por un plazo no mayor de cuarenta y cinco días; si aún así, no se realizare el cumplimiento, se liquidarán dichas conminaciones y los daños y perjuicios respectivos por el procedimiento del artículo 322.2, .3 y .4, según corresponda. Las sumas liquidadas por conminaciones no se imputarán a los daños y perjuicios respectivos y en este caso beneficiarán al ejecutante.

Si la sentencia condenare a otorgar escritura pública y, en su caso, efectuar la tradición de una cosa, se procederá conforme con lo dispuesto en el ordinal 1. Vencido el plazo, el Tribunal otorgará de oficio la escritura y, en su caso, efectuará la tradición.

Los gastos serán satisfechos por el ejecutante, el cual dispondrá del procedimiento de ejecución para obtener el reembolso de lo que abonare.

Art. 332. (Obligaciones de no hacer).

332.1. Si se condenare a no hacer alguna cosa, el ejecutante podrá solicitar, —si ya se hubiese efectuado— la reposición al estado anterior, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 331.1 a .3.

332.2. El ejecutante podrá optar por pedir directamente los daños y perjuicios o los medios de conminación o compulsión necesarios para evitar en el futuro la infracción a la condena; esto último podrá igualmente solicitarse en el caso del ordinal 1 del presente artículo.

Título VI— PROCESOS VOLUNTARIOS

Capítulo 1 – Disposiciones Generales

Artículo 333. (Procedencia).

333.1. Sólo se tramitarán en proceso voluntario o de jurisdicción voluntaria los asuntos o cuestiones que expresamente disponga la ley y en los que no exista conflicto u oposición de intereses

333.2. Los procesos voluntarios, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes respectivas, tendrán por principal objeto alguno de las siguientes: 1) autorizar la realización de determinados actos jurídicos, en salvaguardia de menores o incapaces; 2) asegurar la legal realización de determinados

actos jurídicos o controlar la legalidad de los mismos; 3) comunicar opciones u otros actos de voluntad; 4) asegurar la información ad perpetuam de la existencia de determinados hechos o actos jurídicos, mediante el diligenciamiento de la prueba pertinente.

Quedan, en consecuencia, incluidos en esta previsión: 1) la apertura o legalización de testamentos cerrados, especiales u ológrafos; 2) las venias o autorizaciones especiales; 3) la designación de tutores y de curadores; 4) la rectificación de partidas de estado civil; 5) el deslinde y amojonamiento de predios; 6) la partición judicial de bienes sucesorios o de sociedad conyugal;

333.2. Si surgiere controversia entre los sujetos interesados, sobre el fondo del asunto, el Tribunal así lo declara, disponiendo que las partes inicien el pertinente proceso contencioso.

En tal caso, el mismo Tribunal será en principio competente para intervenir en dicho proceso y podrá, si lo estima pertinente, fijar un plazo de caducidad de treinta días para la interposición de la demanda. Si ésta no se interpone, el Tribunal dispondrá la continuación del proceso voluntario hasta su conclusión.

Art. 334. (Sujetos).

334.1. Los procesos voluntarios se tramitarán ante los Tribunales competentes, según la materia, para la primera instancia.

Las providencias que en ellos se pronuncien sólo serán susceptibles del recurso de reposición, salvo la definitiva que ponga fin al procedimiento, sea rechazando o aprobando lo actuado, la que podrá recurrirse mediante apelación.

334.2. La iniciación del procedimiento se notificará a todo sujeto interesado en el asunto.

334.3. En todo proceso voluntario intervendrá preceptiva mente el Ministerio Público.

Art. 335. (Procedimiento).

335.1. . La solicitud se presentará por parte interesada, con forme con las normas generales relativas a la demanda, acompañando los medios de prueba de que piense valerse e indicando toda persona que, en su concepto, pudiere estar interesada en el diligenciamiento del asunto.

335.2. Sobre la admisibilidad de la solicitud, se oirá al Ministerio Público y a las personas designadas, si correspondiere, por el término fijado para los incidentes; si mediare oposición, se resolverá la cuestión por vía incidental.

La misma vía se seguirá de existir oposición de tercero.

335.3. Resuelta favorablemente la admisión del proceso voluntario el Tribunal convocará a los interesados y al Ministerio Público a audiencia, que se celebrará aunque sólo concurra el que inició el proceso.

En la misma el Tribunal interrogará al interesado sobre los objetivos de la solicitud, haciendo lo propio con otras personas que puedan estar interesadas en ella y dispondrá el diligenciamiento de la prueba ofrecida. Al concluir la audiencia se oirá al, interesado y a los otros sujetos que concurran, para la conclusión de causa.

335.4. El Tribunal resolverá aprobando o rechazando la información producida o declarando lo que corresponda, según el objeto del procedimiento.

335.5. Serán de aplicación al proceso voluntario, en lo pertinente, las disposiciones del Libro 1 y las del Libro II sobre procesos contenciosos.

Art. 336. (Eficacia).

336.1. Las conclusiones del proceso voluntario se presumen ciertas y los terceros que adquirieren derechos basados en las mismas, de buena fe, salvo prueba en contrario.

336.2. Las providencias de jurisdicción voluntaria no pasan en autoridad de cosa juzgada, salvo expresa disposición legal en contrario.

336.3. Las resultancias parciales o definitivas de un proceso voluntario, admiten siempre revisión en éste u otro proceso voluntario.

336.4. Todo aquel que considerare perjudicial para su interés, lo establecido en el proceso voluntario, podrá promover el pertinente proceso contencioso. La sentencia definitiva que se pronuncie en el mismo prevalecerá, entre las partes, sobre lo re suelto en el proceso voluntario, ya sea que aquel proceso se ha ya promovido, antes, durante o después que éste último.

Art. 337. (Procesos contenciosos accesorios).

Si en un proceso voluntario se suscita una cuestión o con tienda que no se refiere al fondo del asunto que se diligencia en aquél, sin perjuicio del trámite del mismo, se dilucidará por expediente separado y ante el mismo Tribunal, en vía incidental; las contiendas relativas al estado civil o a la propiedad de bienes, se tramitarán por el proceso ordinario.

Art. 338. (Extensión).

338.1. Se aplicarán las disposiciones del Capítulo 1 de este Título, salvo expresa disposición en contrario, en todos los casos de jurisdicción voluntaria.

338.2. En los casos de simple comunicación de acto de voluntad sea de opción, intimación y similares, el procedimiento se limitará a los siguientes trámites; 1) solicitud del interesado; 2) providencia judicial disponiendo la notificación sin perjuicio, 3) notificación de la providencia.

338.3. El intimado podrá comparecer, al solo efecto de manifestar lo que crea oportuno.

Capítulo II – Proceso sucesorio

Artículo 339. (Objeto).

El proceso sucesorio tiene por objeto: 1) certificar la muerte del causante; 2) determinar su patrimonio, activo y pasivo; 3) declarar las personas a quienes se defiere la herencia o se trasmiten los bienes (herederos o legatarios); 4) determinar los impuestos que han de pagarse, si así lo establecieren las normas tributarias pertinentes.

Art. 340. (Competencia).

El Tribunal competente para intervenir en el proceso sucesorio, lo será igualmente para intervenir en todos los procesos, contenciosos o voluntarios a que dé lugar la muerte del causante y en los que se promuevan por reclamaciones contra el patrimonio del causante, siempre que se basen en la calidad sucesoria.

Art. 341. (Remisión).

Salvo en lo expresamente previsto en el presente Capítulo X o en leyes especiales, son de aplicación al proceso sucesorio las normas del Capítulo 1.

Art. 342. (Testamento).

342.1. El interesado que solicite la iniciación del proceso sucesorio presentará el testamento, si lo hubiere y lo tuviere en su poder o indicará en poder de quien se encuentra.

Toda persona que tenga en su poder un testamento deberá presentarlo ante el Tribunal que corresponda, el que declarará abierta la sucesión, procediendo conforme con las diligencias pertinentes.

342.2. Si se tratara de testamento cerrado, se procederá a su apertura, convocando a la audiencia al Notario y testigos, a quienes se interrogará acerca de si el documento se encuentra en las condiciones que tenía cuando se otorgó. Si se formularen observaciones, se resolverán por el procedimiento incidental, con intervención de los interesados y del Ministerio Público.

Art. 343. (Procedimiento).

343.1. Una vez decretada la iniciación del proceso sucesorio, el Tribunal dispondrá la publicación de edictos.

343.2. Cualquier interesado en los bienes que han quedado al fallecimiento del causante, puede solicitar las medidas cautelares respectivas, entre ellas la colocación de sellos.

343.3. El inventario de los bienes podrá realizarse por los herederos.

Si alguno de ellos o el Ministerio Público lo requiere, se verificará judicialmente por el o los funcionarios o, en su caso, los peritos que el Tribunal designe.

Realizado el inventario, se pondrá de manifiesto durante diez días para que los interesad puedan formular las observaciones pertinentes. Si hubiere al respecto controversia, se tramitará envía incidental.

343.4. La providencia final declarará los herederos y legatarios y los bienes que integran el patrimonio.

343.5. Sí alguno de los herederos no comparece en autos, podrá cualquiera de ellos o el Ministerio Público, solicitar que se le intime por el plazo de treinta días bajo apercibimiento de lo que determinen las normas sustantivas.

Art. 344. (Sucesión vacante).

344.1. Si no hay testamento y no se conocen herederos del causante dentro del grado legal, se declarará vacante la herencia.

Cualquier sujeto jurídico podrá denunciar la situación de vacancia de un patrimonio, en cuyo caso el Tribunal así lo declarará, siguiéndose los procedimientos previstos en el Capítulo 1 y en el presente.

344.2. Vencido el plazo de los Edictos, el Tribunal designará Curador a la herencia vacante, el cual actuará a su respecto, conforme con las disposiciones existentes en materia de Tutores y Curadores.

344.3. El Curador deberá hacer inventario judicial de todos los bienes que integran la herencia vacante, los administrará y procederá a su liquidación entregando el producido o los mismos bienes al Estado o a la Institución declarada heredera por las normas sustantivas pertinentes a los que, en todo, se les dará conocimiento de la designación de Curador.

344.4. En el caso de comparecer algún interesado alegando su calidad de heredero o de legatario, se dilucidará su derecho por vía incidental con el Curador y el Ministerio Público.

Art. 345. (Partición).

345.1. La partición de los bienes sucesorios podrá realizarse en forma extrajudicial, si todos los interesados son capaces y están de acuerdo.

345.2. En caso contrario o si existieren diferencias o dificultades de entendimiento entre los herederos, se realizará la partición judicial, procediéndose conforme con las normas generales del Capítulo. 1.

En la audiencia se designará el tasador —si lo requieren las partes— y el partidor correspondiente. De no mediar acuerdo de partes, la designación se realizará por el Tribunal.

345.3. Presentada la cuenta particionaria, se pondrá de manifiesto por diez días y, con las observaciones que se planteen o una vez vencido el referido plazo, se elevará a decisión del Tribunal, previo traslado al Ministerio Público.

Capítulo III – Proceso de declaracion de incapacidad

Artículo 346. — (Procedimiento).

El proceso que tiene por objeto la declaración de incapacidad de una persona para realizar los actos de la vida civil tramita conforme con las siguientes reglas:

1) La denuncia de insania se formulará indicando el nombre, estado civil y actual residencia del denunciado, especificación del parentesco o vínculo que une al denunciante con el denunciado y existencia de cónyuge o parientes más próximos de aquél con indicación de sus domicilios y enumerando los hechos que dan motivo a la denuncia, determinados en la forma establecida en el artículo 110.

Deberá ser acompañada del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, formulado por el facultativo que lo asiste adjuntando el certificado expedido por el mismo o por otro que haga sus veces.

2) Recibida la denuncia el Tribunal, previa notificación al Ministerio Público, dispondrá que dos facultativos de su confianza examinen al denunciado y emitan su opinión acerca del fundamento, de aquella, pudiendo requerirles una opinión preliminar en plazo que establecerá, atendidas las circunstancias del caso.

En todo caso el Tribunal examinará al denunciado, pudiendo acompañar a los facultativos en el examen preliminar silo considera conveniente.

Art. 347. (Medidas provisionales).

347.1. Recibido el informe, o aún antes si existieran razones de urgencia probadas, el Tribunal podrá tomar las medidas de protección personal del denunciado para asegurar la mejor condición de éste, así como respecto de su bienes. De todo lo actuado' será notificado el Ministerio Público.

347.2. El Tribunal podrá, entre otras medidas, designar curador interino, someter al denunciado a un régimen de asistencia y de administración provisoria e, inclusive, detener los procedimientos en espera de la evolución de la enfermedad.

Las curatelas legítimas dispuestas por la ley de fondo serán en todo caso respetadas, pudiendo el Tribunal por motivos fundados, regular los modos de su ejercicio.

Art. 348. (Legitimación).

348.1. Promovida la denuncia de insania el denunciante no tendrá intervención ulterior en el proceso. Pero podrá recurrir de las medidas perjudiciales al interés económico o moral del denunciado.

348.2. El denunciado será notificado de la denuncia siempre que su estado lo permita. Las medidas de administración y protección personal serán notificadas una vez cumplidas.

348.3. El denunciado podrá recurrir de las providencias y resoluciones que le causen agravio. Así mismo podrá designar un defensor, que tendrá similares facultades que las del defensor en materia penal. Si no lo designare podrá hacerlo por él, el Tribunal.

Art. 349. (Declaración final).

349.1. Cumplidos los trámites precedentes y previa vista del Ministerio Público, el Tribunal podrá declarar la incapacidad con los efectos previstos en la ley sustantiva o desestimar la denuncia.

349.2. En caso de que el estado del denunciado lo requiriera, el Tribunal podrá mantener los procedimientos en suspenso por el plazo que determine, el que podrá prorrogar cuantas veces lo desee. En estos casos podrán mantenerse, por vía de excepción, algunas de las medidas provisionales decretadas.

349.3. Las declaraciones que el Tribunal hiciere en esta materia no pasarán en autoridad de cosa juzgada, a los efectos de obtener su ulterior revisión.

El declarado incapaz está legitimado al respecto.

Art. 350. (Recursos).

Las resoluciones dictadas en el curso de este procedimiento solo son susceptibles del recurso de reposición.

Las resoluciones que concedan o nieguen medidas de protección o administración serán susceptibles del recurso de apelación sin efecto suspensivo.

La declaración final (art. 349) será susceptible del recurso de apelación a ambos efectos.

Art. 351. (Gastos).

Los gastos que demande el procedimiento tendiente a la declaración judicial de incapacidad, será pagados con cargo al patrimonio del denunciado. Pero si el Tribunal estimare que la denuncia se ha hecho con propósitos dolosos o sin motivo fundado, pondrá de cargo del denunciante el pago de esas prestaciones.

Título VII — PROCESOS CONCURSALES

Art. 352. (Unificación y Competencia).

352.1. Los procesos concúrsales, a cualquier materia que pertenezcan, se tramitarán conforme con los mismos procedimientos, sin perjuicio de las normas sustantivas que correspondan y de lo que al respecto disponga la ley procesal especial.

352.2. El Tribunal competente según la ley Orgánica para intervenir en el proceso concursal, lo será igualmente para intervenir en todo proceso que se inicie contra el patrimonio concursado o en beneficio de éste.

Art. 353. (Homologación de acuerdos).

353.1. Si se hubiere realizado un convenio privado firmado por la mayoría de los acreedores que representen más del cincuenta por ciento de los créditos, pero sin alcanzar las mayorías exigidas por la ley sustantiva, el deudor o los acreedores podrán solicitar la homologación judicial, acompañando el Convenio y la documentación que exija la ley sustantiva.

353.2. Para lograr la homologación, se seguirá el proceso de estructura monitoria, notificándose la sentencia a recaer a los acreedores no firmantes. Estos, individual o colectivamente, podrán oponerse a la homologación, de acuerdo con lo que establezca la ley sustantiva.

Art. 354. (Procedencia).

354.1. Procede el concurso de acreedores, cuando el deudor se encuentre en estado de cesación de pagos.

354.2. Esta situación podrá hacerse valer por cualquier acreedor, siempre que en dos procesos ejecutivos o de conocimiento en la etapa de ejecución, no se hayan encontrado bienes suficientes para el pago de las deudas o en los demás casos previstos por la ley especial.

Art. 355. (Sujetos).

355.1. El Tribunal, aún manteniendo la separación de los procesos que establezca la ley sustantiva y que se sigan contra el patrimonio del deudor, tendrá presente la marcha del concurse a los efectos de la dirección procesal que corresponde en los restantes procesos.

El Tribunal, a tales efectos, formará piezas separadas; también dispondrá las que entienda corresponder, para el mejor desarrollo de los diferentes problemas que se planteen en el con curso.

355.2. El Ministerio Público podrá actuar como tercero en todo concluso; podrá tomar la iniciativa del mismo, como los acreedores y será oído antes de decretar el concurso respectivo.

355.3. Anualmente, oyendo previamente a los Organismos Profesionales Representativos, el Tribunal Supremo, formulará una lista de personas con título de abogado o de contador, para actuar como Síndico en los concursos respectivos.

El Síndico de cada concurso será elegido por el Tribunal.

El Síndico actuará como representante de la masa de acreedores y como sustituto procesal del deudor.

355.4. El deudor estará asistido de abogado, al que se aplicarán las mismas normas que al defensor en el proceso penal en cuanto a designación y modo de actuar en el concurso y en los demás procesos vinculados al patrimonio del deudor, para la defensa de los derechos del mismo.

355.5. Los acreedores podrán actuar en forma individual o colectiva, hasta la designación definitiva del Síndico.

La Junta de Acreedores, que actuará presidida por el Síndico, tendrá por objetivo procurar acuerdos o conciliaciones parciales o totales relativas al concurso.

Además de los casos establecidos expresamente, podrá ser convocada en cualquier momento por el Tribunal o el Síndico o a pedido de la mitad de los acreedores. Salvo que el Tribunal disponga otra cosa, sesionará en el local que fije el Síndico. El Tribunal podrá, en cualquier momento, resolver su concurrencia, asumiendo la presidencia de la misma.

Art. 356. (Objeto).

356.1. El concurso tendrá por objeto procurar en forma conjunta: 1) establecer y en su caso, asegurar, la viabilidad en la continuidad de la empresa o de la unidad patrimonial, teniendo en cuenta el interés social y los intereses involucrados; 2) organizar el pago de las deudas del titular del patrimonio, en base al principio de igualdad de las personas ante la ley, sin perjuicio de las preferencias que establezcan las normas sustantivas.

356.2. A tales efectos, se podrá proponer y disponer: quitas, esperas, continuación de la empresa o del patrimonio con administrador designado por la Junta de Acreedores o por el Tribunal, liquidación parcial o total del patrimonio y otras medidas análogas. No se excluye ninguna solución de orden económico financiero, que pueda servir, conforme con la situación concreta, al objeto previsto en el ordinal anterior.

Art. 357. (Iniciativa).

357.1. El deudor que solicite el concurso deberá acompañar a la solicitud: 1) memoria descriptiva de la situación; 2) lista de tallada de sus bienes, indicando los gravámenes que soportan; 3) lista de acreedores, especificando: nombre, domicilio, origen, monto y naturaleza del crédito; 4) lista de deudores, con iguales especificaciones; 5) lista de procesos iniciados contra el deudor o por el mismo, con excepción de los relativos a las personas y sin alcance económico.

357 2. Si los acreedores o el Ministerio Público solicitan el concurso, deberán indicar lo establecido en el artículo 354.2., y, si disponen de ellos, los elementos enumerados en el precedente ordinal.

Recibida esta solicitud, el Tribunal intimará al deudor para que dentro del plazo de treinta días presente la documentación a que se refiere el ordinal precedente, so pena de estarse a lo que se comprueba en autos.

Art. 358. (Procedimiento).

358.1. (Iniciativa). Presentada la iniciativa (artículo 357) y, en su caso (artículo 357.2.), realizada la intimación pertinente, evacuada la misma o transcurrido el plazo, el Tribunal designará el Síndico Provisorio y notificará al Ministerio Público de la iniciación del concurso.

358.2. (Informe preliminar). Con los elementos de que disponga, el Síndico producirá informe acerca de la admisibilidad de la solicitud en

el plazo que fije el Tribunal que no excederá de treinta días. Durante ese período, el Ministerio Público podrá pronunciarse al respecto, si lo estima pertinente.

358.3. (Declaratoria). Con el informe del Síndico, el Tribunal resolverá: 1) declarar el concurso; 2) adoptar 'las medidas cautelares que correspondieren, sin perjuicio de las que haya es timado disponer con anterioridad, una vez recibida la iniciativa; 3) ratificar al Síndico provisorio o designar Síndico definitivo; 4) solicitar a todos los Tribunales de los procesos referidos en el artículo 357.1., la remisión de los respectivos expedientes, sea para su unificación en el proceso de concurso, sea para su continuación ante el Tribunal del mismo; 5) inscripción del concurso en el Registro respectivo; 6) notificar al deudor y a los acreedores, en forma personal y por edictos; 7) convocar a Junta de Acreedores con plazo no menor de treinta días durante el cual los, acreedores deberán presentar los justificativos de sus créditos, ante el Síndico designado, en la oficina que el mismo establezca.

358.4. (Oposición). El deudor o los acreedores que no hayan solicitado el concurso, podrán oponerse a su declaración dentro de los diez días posteriores a su notificación.

La oposición, que no tendrá efecto suspensivo, se dilucidará en vía incidental, con el Síndico, debiendo actuar los acreedores opositores en forma conjunta.

De prosperar la oposición el Tribunal resolverá que se re pongan las cosas al estado anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan por los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.

358.5. (Junta de Acreedores). La Junta de Acreedores tratará los acuerdos que entienda pertinentes y resolverá conforme con las mayorías que dispongan las normas sustantivas.

El deudor podrá comparecer en la Junta, sea por sí, asistido de abogado o por intermedio de éste.

Si no se llegara a acuerdo, se seguirá el procedimiento; los acuerdos de la Junta podrán impugnarse por cualquiera de los acreedores disidentes, dentro de los diez días siguientes a la Junta y se tramitarán por la vía incidental con el Síndico, sin efecto suspensivo.

358.6. (Informe del Síndico). Después de realizada la Junta, el Síndico presentará, dentro de sesenta días, un informe sobre los siguientes puntos; 1) admisión, calificación y graduación de créditos; 2) opinión fundada acerca de las soluciones propuestas por quienes pidieron el concurso; 3) soluciones que estime pro cedentes para el mantenimiento de la unidad patrimonial y el pago de las deudas o para la liquidación del patrimonio, si no existiera viabilidad equitativa para su continuidad.

El informe será comunicado a cada acreedor y al deudor y se pondrá de manifiesto durante treinta días en la Oficina.

358.7. (Observaciones). Cada acreedor y el deudor podrán formular las observaciones que estimen pertinentes que tramitarán en vía incidental, con el Síndico.

358.8. (Sentencia definitiva). Una vez resueltas todas las observaciones o si éstas no se hubieren formulado, el Tribunal resolverá la forma de realizar los objetivos del concurso, conforme con los artículos 356 y 358 ordinal 6.

358.9. (Recurso de apelación). La sentencia definitiva será susceptible del recurso de apelación con ambos efectos. Estarán legitimados para interponer el recurso, el Ministerio Público, el Síndico y el deudor.

Art. 359. (Conservación y administración del patrimonio).

359. 1. Designado el Síndico definitivo, éste se hará cargo dentro de diez días, mediante inventario, de todos los bienes del concurso, los que administrará con amplias facultades.

Trimestralmente presentará al Tribunal el estado de su administración; con dichas liquidaciones se formará una pieza separada, que estará de manifiesto en la Oficina para conocimiento del deudor y de los acreedores.

359.2. Si así lo exige la marcha de la empresa o del establecimiento, se realizarán las ventas pertinentes, depositando el importe en cuenta a nombre del concurso y a su orden; tales ventas se indicarán en la liquidación trimestral.

El Tribunal de oficio o a pedido del Síndico o del deudor, podrá adoptar las medidas cautelares que estimare pertinentes, en cualquier etapa del concurso.

También podrá autorizar al Síndico, a realizar pagos parciales a cuenta de los créditos.

Art. 360. (Liquidación).

Si se resuelve la liquidación del patrimonio, éste se verificará por el Síndico, siendo de aplicación lo dispuesto para la vía de ejecución.

Art. 361. (Eficacia).

361.1. La iniciación del proceso concursal, interrumpe el curso de los intereses de toda obligación sea cual fuere la garantía de que disponga.

361.2. En todo caso, se dejará al deudor bienes suficientes para atender a las necesidades propias y de su familia.

361.3. Son nulos todos los actos realizados por el deudor que afecten a los bienes del concurso, a partir de la declaración judicial (artículo 358.3.).

361.4. Todos los procesos de ejecución contra el deudor, en trámite, quedarán suspendidos a partir de esa declaración.

Art. 362. (Rehabilitación).

Si se resuelve la liquidación del patrimonio y los bienes alcanzan a pagar la totalidad de los créditos se otorgará carta de pago; si sólo se alcanza al cincuenta por ciento, el Tribunal de oficio o a petición del Síndico o del deudor, podrá otorgar carta de pago y rehabilitación al deudor.

Título VIII — PROCESO ARBITRAL

Artículo 363. (Procedencia).

Toda contienda individual o colectiva, podrá ser sometida por las partes a resolución de un tribunal arbitral, salvo expresa disposición legal en contrario.

La ley reconoce de pleno derecho los laudos emitidos por árbitros designados, ya sea por las partes por Tribunal Judicial, así como los dictados por los tribunales arbitrales formados por las Cámaras de Arbitraje, a los que se sometan las partes.

Art. 364. (Convenio).

364.1. Las partes podrán remitir a decisión de árbitro los conflictos eventuales y futuros, mediante cláusula o convenio compromisorio y los pendientes, mediante compromiso arbitral.

364.2. La cláusula compromisoria integrará el contrato principal como una de sus normas. También podrá ser objeto de convenio separado.

En este último caso y en el de compromiso arbitral, el acuerdo se documentará por escrito judicial o extrajudicialmente.

Art. 365. (Compromiso arbitral).

365.1. El compromiso arbitral contendrá necesariamente: 1) nombre y domicilio de las partes; 2) nombre de los árbitros de signados siempre en número impar; 3) objeto del arbitraje, sin perjuicio de las excepciones que libremente podrá oponer el de mandado en el proceso arbitral; 4) si el tribunal actuará con o sin Secretario, que deberá ser, en caso de nombrarse, Abogado Notario y su designación o la facultad del tribunal para nombrar lo; 5) plazo de duración del proceso; 6) procedimiento siempre que el mismo respete las garantías del debido proceso; 7) la mención de si el arbitraje es de derecho o de equidad; si nada se dijere, los árbitros fallarán por equidad.

Los dos últimos puntos podrán remitirse a lo que disponga la 4 ley y el último también a lo que establezca los propios árbitros o la Cámara Arbitral respectiva.

365.2. Si la parte obligada a otorgar el compromiso, se resistiere a hacerlo, la otra podrá solicitar al Tribunal Judicial que lo otorgue a nombre del omiso, designe árbitros, fije el procedimiento y el objeto del arbitraje.

Art. 366. (Formas y plazos).

Salvo expresa decisión en contrario, el arbitraje se realizará sin sujeción a formas especiales y, con igual excepción, el plazo total del procedimiento no podrá insumir más de ciento ochenta días, a contar del siguiente al de la aceptación del último árbitro.

Art. 367. (Asistencia judicial).

367.1. La constitución del tribunal se verificará por las partes, si existe acuerdo entre las mismas.

Si alguna de las partes no colaborara en la constitución del tribunal arbitral, la otra podrá solicitar del Tribunal Judicial que dé posesión de sus cargos a los árbitros designados, dándole a conocer a las partes o bien, si no se han designado los árbitros, procediendo a su nombramiento, en vía incidental.

367.2. Las partes, y, en su caso, el tribunal arbitral, podrán solicitar del Tribunal Judicial la adopción de medidas cautelares y la asistencia necesaria para realizar cualquier medida que requiera el uso de la fuerza pública.

367.3. Tanto la ejecución del laudo, como el recurso de nulidad contra el mismo, se tramitarán ante el Tribunal Judicial.

367.4. Será competente para ello, el Tribunal Judicial que hubiere sido competente de no haberse acudido al proceso arbitral, quien también será competente en las cuestiones, a que refieren los artículos 365.2 y 367.1 y 2.

Art. 368. (Procedimiento).

368.1. En el caso de no establecerse directamente o por remisión, determinado procedimiento para el proceso arbitral, éste se tramitará conforme con lo previsto para el proceso ordinario en primera instancia.

368.2. Una vez constituido el tribunal, éste convocará a una audiencia para intentar la conciliación.

Si no se logra la conciliación, el tribunal, en la, propia audiencia, fijará un plazo de treinta días para presentar la demanda.

368.3. El tribunal podrá, en cualquier etapa del procedimiento, convocar a las partes a audiencia, para intentar la conciliación.

Art. 369. (Recurso de nulidad).

369.1. Contra el laudo arbitral sólo procederá el recurso d nulidad ante el Tribunal Judicial competente, tramitándose con forme con la vía incidental, con efecto suspensivo.

369.2. El recurso se interpondrá dentro de los diez días hábiles siguientes a la respectiva notificación.

369.3. Sólo procederá el recurso en los siguientes casos: 1) si el laudo se expidió fuera del plazo respectivo; 2) Si se pronunció fuera o más allá de los puntos comprometidos; 3) Si omitió pronunciarse sobre puntos

comprometidos; 4) Si no se diligenció prueba esencial y determinante para la decisión, habiendo la parte afectada reclamado oportunamente por dicha omisión.

La nulidad afecta a todo el laudo en los casos 1) y 4); en el 2) sólo en cuanto a los puntos no comprometidos que se han re suelto; en el 3), sólo a los puntos que requerían previa decisión de los aspectos no resueltos.

Art. 370. (Ejecución).

La ejecución del laudo se realizará ante el Tribunal Judicial competente, aplicándose las normas del proceso de ejecución que corresponda.

Art. 371. (Regulación de honorarios).

El Tribunal Judicial regulará los honorarios de los Árbitros, Secretario, Abogados y peritos, siguiéndose a tal efecto la vía incidental.

Título IX — NORMAS PROCESALES INTERNACIONALES.

Capítulo 1 – Principios Generales

Artículo 372. (Normas aplicables).

En defecto de tratado o convención, los Tribunales del Esta do deberán dar cumplimiento a las normas contenidas en el presente Título.

Art. 373. (Regulación procesal).

373.1. Los procesos y sus incidentes, cualquiera sea su naturaleza, se sujetarán a las leyes procesales del Estado.

373.2. Las pruebas se admitirán y valorarán según la ley a que esté sujeta la relación jurídica objeto del proceso. Se exceptúan aquellas pruebas que estén prohibidas por la legislación

373 3. Los Tribunales deberán aplicar de oficio el derecho extranjero e interpretarlo tal como lo harían los Tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenezca la norma respectiva.

Sin perjuicio de la aplicación de oficio, las partes podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera.

373.4. Todos los recursos previstos por la ley nacional serán admitidos en los casos en que proceda la aplicación del derecho extranjero.

373.5. Los Tribunales sólo podrán declarar inaplicables los preceptos de la ley extranjera, cuando éstos contrarían manifiestamente los principios esenciales del orden público internacional en los que el Estado asienta su individualidad jurídica.

Capítulo II – De la Cooperación Judicial Internacional

Artículo 374. (Reglas de actuación).

374.1. Para la realización de actos procesales de mero trámite en el extranjero, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos, así

como para la recepción y obtención de pruebas e informes, los Tribunales librarán exhortos y cartas rogatorias.

Igual solución se observará respecto de los exhortos o cartas rogatorias provenientes de Tribunales extranjeros.

374.2. Por intermedio de tratado o convención, podrá establecerse la facultad de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos para llevar a cabo las diligencias a que refiere el ordinal anterior.

Art. 375. (Exhortos y cartas rogatorias).

375.1. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos por las propias partes interesadas, por intermedio de los agentes consulares o diplomáticos o a través de la autoridad administrativa competente en la materia o, en su defecto, por vía judicial.

375.2. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se tramiten por vía consular o diplomática o a través de la autoridad administrativa, no será necesario el requisito de la legalización.

375.3. Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las leyes procesales del Estado de su cumplimiento.

Los Tribunales, a solicitud del órgano jurisdiccional requirente, podrán observar en el diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria, formalidades o procedimientos especiales, siempre que ello no fuere contrario a la legislación nacional.

375.4. Los exhortos o cartas rogatorias y la documentación anexa deberán ser acompañados, en su caso, de la respectiva traducción.

Art. 376. (Efectos del cumplimiento).

El cumplimiento en el Estado del exhorto o carta rogatoria proveniente de Tribunales extranjeros no implicará, el reconocimiento de la competencia internacional de éstos, ni la eficacia de la sentencia que dictare, la que se regirá por las normas del capítulo IV de este Título.

Art. 377. (Competencia).

Los Tribunales del Estado serán competentes para conocer de las cuestiones relativas al cumplimiento del exhorto o carta rogatoria que recibieren; si un Tribunal se declarare incompetente, en el ámbito interno, para proceder al cumplimiento del exhorto o carta rogatoria, lo remitirá de oficio al Tribunal competente, sin más trámite.

Capítulo III – De la Cooperación Judicial Internacional en Materia Cautelar

Artículo 378. (Medidas cautelares).

378.1. Los Tribunales nacionales darán cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por Tribunales extranjeros internacionalmente competentes y proveerán lo que fuere pertinente a tal objeto, exceptuándose

las medidas que estuvieren prohibidas por la legislación nacional o contraríen el orden público internacional (artículo 373.5).

378.2. La procedencia de la medida cautelar rogada se regulará de acuerdo con las leyes y por los Tribunales del lugar del proceso extranjero. La ejecución de la medida así como la contra cautela, serán resueltas por los Tribunales del Estado con forme con su legislación.

Art. 379. (Tercerías y oposiciones).

379.1. Cuando se hubiere trabado embargo o efectuado cualquier otra medida cautelar sobre bienes, la persona afectada podrá deducir, ante los Tribunales nacionales, la tercería u oposición pertinentes, con el exclusivo objeto de su comunicación al Tribunal de origen, al devolvérsele el exhorto o carta rogatoria.

379.2. La oposición o tercería se sustanciará por el Tribunal de lo principal conforme con sus leyes. El opositor o tercerista que compareciere luego de devuelto el exhorto o carta rogatoria, tomará el proceso en el estado en que se hallare.

379.3. Si se tratare de tercería de dominio u otros derechos reales sobre el bien embargado o se fundara en su posesión, se resolverá por los Tribunales del Estado y de conformidad con sus leyes.

Art. 380. (Efectos del cumplimiento).

El cumplimiento de la medida cautelar no obliga a reconocer y ejecutar la sentencia extranjera que se dictare en el proceso en el que tal medida se hubiere dispuesto.

Art. 381. (Medidas previas a la ejecución).

El Tribunal a quien se solicitare el cumplimiento de una sentencia extranjera podrá, a petición de parte y sin más trámite tomar las medidas asegurativas necesarias conforme con las leyes del Estado.

Art. 382. (Medidas cautelares en materia de menores o in capaces).

Cuando la medida cautelar se refiriere a custodia de menores o incapaces, los Tribunales nacionales podrán limitar, con alcance estrictamente territorial, los efectos de aquella, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva por el Tribunal del proceso principal.

Art. 383. (Facultad cautelar).

383.1. Cualquiera sea la jurisdicción internacionalmente competente para conocer en el litigio y siempre que el objeto de la medida se encontrare en el territorio nacional, los Tribunales del Estado podrán ordenar y ejecutar, a solicitud fundada de par te, todas las medidas conservatorias o de urgencia que tengan carácter territorial y cuya finalidad sea garantir el resultado de un litigio pendiente o eventual.

383.2. Si el proceso estuviere pendiente, el Tribunal que decretó la medida deberá comunicarla de inmediato al Tribunal extranjero que conoce en lo principal.

383.3. Si el proceso aún no se hubiere iniciado, el Tribunal que ordenó la medida fijará un plazo, sujetándose a lo que en la materia dispone la ley nacional, dentro del cual el peticionante habrá de hacer valer sus derechos so pena de caducidad de la medida (artículo 274.2.).

Si en el plazo acordado se promoviere la demanda, se estará a lo que resuelva, en definitiva, el Tribunal internacionalmente competente.

383.4. Los Tribunales del Estado, cuando procediere, podrán decretar medidas cautelares demandas a cumplirse fuera del país.

Art. 384. (Tramitación).

Las comunicaciones referentes a las medidas cautelares, se harán por las propias partes interesadas, por intermedio de los agentes consulares o diplomáticos o a través de la autoridad administrativa competente en la materia o, en su defecto, por vía judicial.

Capítulo IV – Del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras

Artículo 385. (Reglas generales).

385.1. El presente capítulo se aplicará a las sentencias dictadas en país extranjero en materia civil, comercial, de familia, laboral, y contencioso administrativo; también comprenderá las sentencias dictadas en tales materias por Tribunales Internacionales cuando éstas refieran a personas o intereses privados.

Así mismo incluirá a las sentencias recaídas en materia penal en cuanto a sus efectos civiles.

385.2. La naturaleza jurisdiccional de la sentencia extranjera y la materia sobre lo que hubiere recaído, serán calificadas por los Tribunales del Estado de origen del fallo y según su propia ley.

Art. 386. (Efectos de las sentencias).

386.1. Las sentencias extranjeras tendrán en el Estado efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a las disposiciones del presente Capítulo.

386.2. Las sentencias extranjeras deberán ser reconocidas y ejecutadas en el Estado, si correspondiere, sin que proceda su revisión sobre el fondo del asunto objeto del proceso en que se hubieren dictado.

386.3. El reconocimiento es el acto o secuela de actos procesales, cumplidos al simple efecto de establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables, de acuerdo con las disposiciones del presente Capítulo.

386.4. La ejecución es el acto o secuela de actos procesales dirigidos a obtener el cumplimiento de las sentencias extranjeras de condena.

Art. 387. (Eficacia de las sentencias).

387.1. Las sentencias extranjeras tendrán eficacia en el Estado, si reunieren las siguientes condiciones:

a) Que vengan revestidas de las formalidades externas necesarias para ser consideradas auténticas en el Estado de origen.

b) Que la sentencia y la documentación anexa que fuere necesaria estén debidamente legalizadas de acuerdo con la legislación de Estado, excepto que la sentencia fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las autoridades administrativas;

c) Que se presenten debidamente traducidas, si provienen de países de idiomas diferentes;

d) Que el Tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para conocer en el asunto, de acuerdo con su derecho, excepto que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de los Tribunales patrios;

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en legal forma de acuerdo con las normas del Estado de donde pro venga el fallo;

f) Que se haya asegurado la debida defensa de las partes;

g) Que tengan autoridad de cosa juzgada en el Estado de

h) Que no contraríen manifiestamente los principios de orden público internacional del Estado.

387.2. Los comprobantes indispensables para solicitar el cumplimiento de la sentencia extranjera, son:

a) Copia auténtica de la sentencia;

b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que dado cumplimiento a los literales "e" y "f" del ordinal precedente.

c) Copia auténtica con certificación de que la sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Art. 388. (Efectos imperativos y probatorios).

Cuando se tratare de hacer valer los efectos imperativo y probatorio de una sentencia extranjera, deberá presentarse la misma ante el Tribunal pertinente, acompañando la documentación referida en el artículo 387.2.

En este caso, el Tribunal e pronunciará sobre el mérito de la sentencia extranjera, en relación al efecto pretendido, en la sentencia que dictare, previa comprobación con audiencia del Ministerio Público, de que se han cumplido las condiciones indica das en el artículo 387.1.

Art. 389. (Ejecución).

389.1. Únicamente serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de condena.

389.2. La ejecución se pedirá ante el Tribunal Supremo, salvo que otra cosa se disponga por la ley orgánica.

Formulada la petición, se dispondrá el emplazamiento de la parte contra quien se pida, según lo dispuesto en la Sección II Capítulo II, Título VI del Libro 1, a la que se conferirá traslado por veinte días.

Se oirá seguidamente al Procurador del Estado y se dictará resolución, contra la que no cabrá recurso alguno.

389.3. Si se hiciere lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia al Tribunas competente para ello, a efectos de que proceda conforme con los trámites que correspondan a la naturaleza de la sentencia (Título V del Libro II).

Art. 390. (Resoluciones en jurisdicción voluntaria).

Los actos de jurisdicción voluntaria extranjeros, surtirán efectos en el Estado siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 387, en lo que fuere pertinente.

Art. 391. (Laudos arbitrales extranjeros).

Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable a los laudos dictados por tribunales arbitrales extranjeros en todo lo que fuere pertinente.

Título X — REMISIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA

Artículo 392. (Aplicación a las diferentes materias).

El Código se aplicará a toda materia que no disponga de legislación procesal propia y será legislación complementaria para las que la posean.

Art. 393. (Vigencia).

393.1. El Código comenzará a regir en la fecha que se determine.

393.2. Será de aplicación para todos los procesos que se inicien a partir de su entrada en vigor y para todos aquellos trámites de naturaleza contenciosa ya iniciados y en los cuales no se haya presentado aún la demanda.

393.3. Las disposiciones del Libro 1, hasta el Título VI, Capítulo 1, inclusive, se aplicarán a los procesos en trámite, con exclusión de las normas que establecen responsabilidades y sanciones distintas a las vigentes.

En ningún caso dicha aplicación comprenderá los actos que han tenido comienzo de ejecución, ni a los términos o plazos que han comenzado a correr.

393.4. Será aplicable a los procesos en trámite, el procedimiento previsto para la segunda instancia, para el recurso de casación y para el de revisión.

No obstante, continuarán tramitando por el procedimiento anterior los recursos en los cuales el expediente se encuentre a estudio del Tribunal para dictar sentencia.

393.5. Los asuntos que se inicien a partir de la vigencia de]. Código serán atendidos, en principio, por los nuevos Tribunales que se creen para el mejor cumplimiento de la reforma.

393.6. El Poder Ejecutivo o el Tribunal Supremo, según corresponda, dispondrá, atendiendo el número de asuntos anteriores que aún continúen pendientes ante ellos, cuáles de los Tribunales actualmente existentes se habrán de ir incorporando, gradualmente, al nuevo sistema, hasta lograr la incorporación de todos los del país.

Índice del articulado del Código

Libro I. Disposiciones generales
Título I. Principios generales (arts. 1 a 11).
Título II. Aplicación de las normas procesales (arts. 12 a 16).
Título III. El tribunal.
Capítulo I. Organización funcionamiento (art. 17 a 22)
Capítulo II. De la competencia (arts. 23 a 25).
Capítulo III Estatuto de los agentes (arts. 26 a 32).
Capítulo IV. Deberes, facultades y responsabilidades del Tribunal en el proceso (arts. 33 a 35).
Título IV. El ministerio publico (arts. 36 a 42).
Título V. Partes
Capítulo I. Generalidades (arts. 43 a 47).
Capítulo II. Postulación (arts. 48 a 54).
Capítulo III Litisconsorcio (arts. 55 a 57).
Capítulo IV Intervención de terceros (arts. 58 a 65).
Capítulo V. Responsabilidad de las partes o de sus apoderados en el proceso (arts. 66 a 71).
Título VI. De la actividad procesal
Capítulo I. Disposiciones genérales.
Sección I. De los actos procesales en general (arts. 72 a 75).
Sección II. Escritos de las partes (arts. 76 a 81).
Sección III. De las comunicaciones procesales (arts, 82 a 87).
Sección IV. De los plazos procesales (arts. 88 a 94).
Sección V. Audiencias (arts. 95 a 98).
Sección VI. De los expedientes judiciales (arts. 99 a 103).
Sección VII. De la nulidad de los actos procesales (arts. 104 a 109).
Capítulo II. Actos de proposición.
Sección I. De la demanda (arts. 110 a 115).
Sección II. Del emplazamiento (arts. 116 a 119).
Sección III. De la contestación y de la reconvención (arts. 120 a 126).
Capítulo III. Pruebas.
Sección I. Reglas generales (arts. 127 a 137).

Sección II. De la declaración de parte (arts. 138 a 143).
Sección III. De la declaración de testigos (arts. 144 a. 154).
Sección IV. De los documentos (arts. 155 a 164).
Sección V. De la prueba pericial (arts. 165 a 173).
Sección VI. Inspección judicial y reproducciones (arts. 174 a 177).
Sección VII. Prueba por informes (arts. 178 a 180).
Capítulo IV Procedimientos posteriores a la prueba (arts. 181 a 182).
Capítulo V De las resoluciones judiciales.
Sección I. Forma y contenido (arts. 183 a 187).
Sección II. Eficacia (arts. 188 a 195).
Capítulo VI. Medios extraordinarios de conclusión del proceso
Sección I. Transacción (arts. 196 a 198).
Sección II. Desistimiento (arts. 199 a 203).
Sección III. Perención o caducidad de la instancia (arts. 204 a 210).
Capítulo VII. Medios de impugnación de las providencias judiciales
Sección I. Disposiciones generales (arts. 211 a 213).
Sección II. Recurso de aclaración y ampliación (art.214).
Sección III. Recurso de reposición (arts. 215 a 217).
Sección IV. Recurso de apelación (arts. 218 a 231).
Sección V. Recurso de queja por denegación de casación o de apelación (arts. 232 a 237).
Sección VI. Del recurso de casación (arts. 238 a 250).
Sección VII. Recurso de revisión (arts. 251 a 262).
Libro II. Desarrollo de los procesos
Título I. Procesos preliminares.
Capítulo I. Conciliación previa (arts. 263 a 267).
Capítulo II. Proceso provocatorio (arts. 268 a 270).
Capítulo III. Proceso pre-judicial (art. 271).
Capítulo IV. Diligencias preparatorias (arts. 272 a 273).
Título II. Proceso cautelar.
Capítulo I Disposiciones generales (arts. 274 a 276).
Capítulo II Procedimiento (arts. 277 a 281).
Título III. Procesos incidentales.
Capítulo I. Disposiciones generales (arts. 282 a 283).
Capítulo II. Procedimiento (arts. 284 a 286).
Capítulo III. Incidentes especiales.
Sección I. Acumulación de autos (arts. 287 a 288).
Sección II. Recusación (arts. 289 a 291).
Sección III. Contienda de competencia (art. 292).
Sección IV. Rendición de Cuentas (art. 293).
Capítulo IV. Tercerías (arts. 294 a 296).
Título IV. Proceso de conocimiento.

Capítulo I. Proceso ordinario (arts. 297 a 305).
Capítulo II. Proceso extraordinario (arts. 306 a 307).
Capítulo III. Disposiciones generales (arts. 308 a 310).
Capítulo IV. Proceso de estructura monitoria (arts. 311 a 316).
Título V. Procesos de ejecución.
Capítulo I. Disposiciones generales (arts. 317 a 321).
Capítulo II. Ejecución de sumas de dinero (arts. 322 a 329).
Capítulo III. Otras especies de ejecución (arts. 330 a 332).
Título VI. Procesos voluntarios.
Capítulo I .Disposiciones generales (arts. 333 a 338).
Capítulo II. Proceso sucesorio (arts. 339 a 345).
Capítulo III. Proceso de declaración de incapacidad (arts. 346 a 351).
Título VII. Procesos concursales (arts. 352 a 362).
Título VIII. Proceso arbitral (arts. 363 a 371).
Título IX. Normas internacionales.
Capítulo I. Principios Generales (arts. 372 a 373).
Capítulo II De la cooperación judicial internacional (arts. 374 a 377).
Capítulo III. De la cooperación judicial internacional cautelar (arts. 378 a 384).
Capítulo IV. Del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras (arts. 385 a 391).
Título X. Normas de remisión (arts. 292 a 393).

CÓDIGO PROCESAL PENAL MODELO PARA IBEROAMÉRICA 1989

LIBRO PRIMERO – DISPOSICIONES GENERALES

Título I – Principios básicos

1. Juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a una medida de seguridad y corrección, sino después de una sentencia firme, obtenida por un procedimiento regular, llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas, y de las facultades y los derechos del imputado.

La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio.

2. Juez imparcial. El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales independientes de los poderes del Estado, sólo sometidos a la ley. La ejecución penal estará a cargo de un tribunal judicial.

Por ninguna causa los restantes poderes del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes o el restablecimiento de las ya terminadas por decisión firme.

Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a una medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa.

3. Tratamiento del imputado como inocente. El imputado o acusado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firma le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección.

Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente; en esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus facultades.

Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este Código autoriza; tendrán carácter de excepcionales y serán

proporcionadas a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes.

La duda favorece al imputado.

4. Única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.

Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal: cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente que por ese motivo clausuró el procedimiento; cuando la clausura del procedimiento proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la persecución penal, que no debió iniciarse o proseguirse, por quien la ejerció según obstáculo legal que no inhiba la punibilidad del imputado; o cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes, que no puedan unificarse según las reglas respectivas. Rige, también, el Art. 359, párr. II.

La absolución o el sobreseimiento (absolución anticipada) por un delito no impedirá la persecución penal posterior por una contravención o falta derivada del mismo hecho imputado, y viceversa, ni el procedimiento realizado por una autoridad disciplinaria inhibirá la persecución penal derivada del mismo hecho.

5. Defensa. Es inviolable la defensa en el procedimiento. Salvo las excepciones expresamente previstas en este código, el imputado tendrá derecho a intervenir en todos los actos del procedimiento que incorporen elementos de prueba ya formular todas las instancias y observaciones que considere oportunas, sin prejuicio del ejercicio del poder disciplinario por la autoridad correspondiente, cuando perjudique el curso normal de los actos o del procedimiento; cuando esté privado de su libertad personal, podrá formular sus instancias y observaciones por intermedio del encargado de su custodia, quien las tramitará inmediatamente al tribunal de la causa o al ministerio público.

El imputado tiene derecho a elegir un defensor letrado de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal designará de oficio un defensor letrado, a más tardar antes de que se produzca la primera declaración del imputado sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiriese defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará, sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, designará de oficio un defensor letrado, sin que ello menoscabe su derecho a formular instancias y observaciones, previsto en el párrafo anterior.

La misma disposición rige para el condenado o para aquel a quien se le hubiere impuesto una medida de seguridad y corrección, en lo pertinente, hasta la extinción de la pena o la medida.

6. Calidad de imputado. Las facultades que las leyes fundamentales del Estado y este Código otorgan al imputado puede hacerlas valer la

persona a quien se le atribuye participación de un hecho punible, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización.

Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece.

7. Interpretación de la ley. Sin perjuicio de lo previsto en el Art. 3, será interpretada restrictivamente toda disposición que limite el ejercicio de un poder conferido a quienes intervienen en el procedimiento.

Título II – Sujetos y auxiliares procesales

Capítulo I – El tribunal

Sección 1ª – Disposiciones generales

8. Carácter. La competencia penal de los tribunales es improrrogable y se rige por las reglas respectivas de la ley de organización judicial

Sin embargo, la competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado el debate; se exceptúa aquellos casos regalados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos estados.

En la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves.

9. Prelación. Cuando una persona se le imputare dos o más delitos cuyo conocimiento corresponda a varios tribunales de distinta jerarquía, los procedimientos respectivos tramitarán simultáneamente y se sentenciará. En lo posible, sin atender a ningún orden de prelación, prestándose ambos tribunales el auxilio judicial debido, salvo que para ello se presentaren inconvenientes de carácter práctico, especialmente los derivados de la defensa en juicio, en cuyo caso los procesos tramitarán y se sentenciará sucesivamente, con prelación para el tribunal de mayor jerarquía, suspendiéndose los demás procedimientos hasta que los inconvenientes desaparezcan o se dicten las sentencias.

Entre tribunales de igual jerarquía, cuando no sea posible la tramitación simultánea, tendrá prelación aquel que juzgue el delito más grave; a igual gravedad, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua.

10. Unificación de condenas o penas. Cuando una persona sea condenada por diferentes tribunales y corresponda unificar las condenas

o las penas, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o menor.

Sección 2ª – Conexión

11.Efectos. Cuando se trate de causas por delitos de acción pública, que fueren conexas, conocerá su único tribunal, a saber:

1º.) el que tenga competencia para juzgar delitos más graves;

2º.) en caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua;

3º.) en caso de conflicto, el que sea designado conforme al art. 20.

Pese a intervenir un solo tribunal, él podrá disponer la tramitación separada o conjunta, según se provoque con ello un grave retardo para alguna de las causas o según convenga a la naturaleza de ellas.

En caso de tramitación conjunta, y mientras dure la unión, la imputación más grave determina el procedimiento a seguir.

12- Casos de conexión. Habrá conexión:

1) Cuando a una misma persona se le impute dos o más hechos punibles;

2) Cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo;

3) Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar a un partícipe o a otros el provecho o la impunidad;

4) Cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente.

13. Excepciones. Las causas por delitos de acción privada seguirán las mismas reglas, pero la unificación del tribunal sólo producirá entre ellas.

Las causas en las que intervenga como imputado un menor seguirán las misas reglas, pero no podrán unificarse con aquellas en que sólo intervengan mayores.

El Tribunal de Casación, por consulta de cualquiera de los tribunales intervinientes, podrá mantener la separación total o parcial de las causas, en casos de excepción y por resolución fundada.

Sección 3ª – Cuestiones de competencia

***14. Medios de promoción.** El ministerio público y cualquiera de los intervinientes admitidos podrán promover una cuestión de competencia, bien por inhibitoria, ante aquel tribunal al cual consideran competente o por declinatoria, ante aquel tribunal que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente.

Sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia, quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al otro, ni emplearlos simultánea y sucesivamente.

Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar, como requisito para que se admita la instancia, que no ha utilizado el otro medio; si resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuere abandonada, será condenado en costas.

• Los países que no acepten la inhibitoria excluirán ese medio de este artículo y suprimirán los arts. 17 y 18.

15.Oportunidad. La cuestión de competencia territorial o las cuestiones fundadas en la conexión de causas sólo podrán ser propuestas hasta antes de comenzada la audiencia del debate.*

Las demás cuestiones de competencia podrán ser propuestas en cualquier momento del procedimiento, salvo, que se tratare de la competencia material y se pretendiere que el tribunal competente para juzgar hechos punibles más graves transfiera la causa a una tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves, caso en el cual regirá la regla del párrafo anterior.

* Salvo, en los países de organización política federal, cuando se tratare de un caso reglado por una disposición de la ley fundamental, que distribuye la competencia entre distintos estados federados.

16.Trámite de la declinatoria. La declinatoria se tramitará según lo previsto por las excepciones.

17.Trámite de la inhibitoria. La instancia de inhibitoria se presentará por escrito, agregando la prueba documental en poder de quien la propone o indicando el lugar dónde se halla y la oficina a la que debe ser requerida, ofreciendo además toda la prueba de que pretende valerse quien la propone.

El tribunal decidirá previo recibir sumariamente los medios de prueba que considere pertinentes y útiles para resolver la cuestión y oír al ministerio público, a cuyo fin determinará el plazo de estudio.

Si es aceptada, librará oficio inhibitorio al tribunal que corresponda, acompañado de todos los elementos de juicio que justifiquen el reclamo de competencia.

El tribunal requerido decidirá previa vista al ministerio público y a los demás intervinientes admitidos en el procedimiento. Si rechaza el reclamo, comunicará la resolución, sin demora, al tribunal requiriente.

18.Competencia. La inhibitoria será decidida por el tribunal con la integración correspondiente al procedimiento intermedio.

19.Efectos. Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento preparatorio, ni afectarán a esos actos, sin perjuicio de su renovación o ampliación posterior, si se lo considerare necesario.

Durante el procedimiento intermedio tampoco suspenderán su trámite, pero sí las decisiones finales; la declinatoria planteada en este momento será decidida antes que las otras cuestiones.

Cuando la cuestión de competencia fuera planteada durante el juicio, el trámite se suspenderá hasta que fuere resuelta, sin perjuicio de que se pueda ordenar una instrucción suplementaria.

20.Conflictos de competencia. Si existiere entre varios tribunales un conflicto sobre la competencia, el Tribunal de Casación, por decisión de uno sólo de sus miembros, determinará el tribunal que debe intervenir.

Cuando sólo se tratare de conflictos internos entre jueces de un mismo tribunal, decidirá el Consejo* de ese tribunal.

* Tribunal es, en esta ley, el conjunto de jueces que, según la integración que prevea la ley orgánica, cumplen las tareas que les encomienda este Código, dentro de un mismo distrito judicial y con idéntica competencia.

Consejo de ese Tribunal es el organismo que tiene a su cargo la administración, superintendencia y gobierno de ese tribunal.

21.Incompetencia. Cuando se tratare de un delito de acción pública, firme la declaración de incompetencia, el tribunal remitirá de oficio los antecedentes al que se consideró competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de la realización de los actos urgentes que no admitan dilación.

Sección 4ª – Apartamiento de jueces

22.Motivos. Un juez estará inhibido de conocer en la causa:

1) si intervino en ella como acusador, defensor, representante, perito o consultor técnico, si denunció el hecho o lo conoció como testigo, o si dio recomendaciones sobre la causa o emitió opinión sobre ella fuera del procedimiento;

2) si intervino o contribuyó a pronunciar sentencia en la misma causa o intervino como juez en otro período del procedimiento; si pronunció o contribuyó a pronunciar una resolución impugnada estará inhibido de

intervenir en el procedimiento que sustancia la impugnación y en su decisión, salvo el caso de la reposición;

3) si en la causa intervino o interviene su cónyuge o algún pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o por adopción, y segundo de afinidad, quien ha sido su tutor, curador o guardador o quien está o ha estado bajo su tutela, curatela o guarda;

4) si el o alguna de esas personas estuviere interesado en la causa o tuviere juicio pendiente, comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que se tratare de una sociedad anónima cuyas acciones coticen en el mercado de valores o de entidades civiles amplias;

5) si él o alguna de esas personas recibieron o reciben beneficios de importancia o son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de instituciones estatales o de bancos constituidos como sociedades anónimas. O si, después de comenzado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas de alguno de los interesados, aunque fueren de escaso valor;

6) si, antes de iniciado el procedimiento, tuviere amistad íntima o enemistas manifiesta con alguno de los interesados, si denunció o acusó a alguno de ellos o fue acusado o denunciado por alguno de ellos, incluso conforme al procedimiento para el desafuero, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos.

23.Interesados: Se considerará interesados al imputado, al ofendido y a quieres pudieren constituirse como intervinientes en el procedimiento, aunque no lo hubiesen hecho, a sus representantes o defensores.

24.Deber y facultad de apartarse. El juez comprendido en alguno de los motivos contenidos en los cinco primeros incisos, del Art. 22, deberá denunciarlo inmediatamente, en cuanto conozca su situación respecto de la causa, y apartarse del conocimiento y decisión del proceso. Su silencio y omisión se considerará falta grave.

En el caso del inc. 6, del Art. 22, a su exclusivo criterio, el juez podrá omitir el apartamiento, sin perjuicio de denunciar la situación en que se halla.

25.Recusación. El ministerio público, el imputado, cualquiera de los demás intervinientes, sus defensores o representantes podrán recusar a un juez, cuando exista uno de los motivos enumerados en el art. 22 o cuando invoquen algún otro motivo serio y razonable que funde el temor de parcialidad.

Entre los motivos que fundan el temor de parcialidad se podrá invocar un grado de parentesco o una relación distintos de los fijados como límites en el art. 22, cuando las circunstancias lo tornen razonable, o cualquiera de las causas que describe el inc. 6, aun cuando el hecho que la produce

suceda después de iniciado el procedimiento, salvo que hubiera sido producido con el propósito deliberado de provocar el apartamiento del juez.

26.Forma y tiempo. La recusación se interpondrá, para ser admisible, por escrito en el cual se indique los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes, en las siguientes oportunidades: durante el procedimiento preparatorio, antes de su conclusión; en el procedimiento intermedio, en el plazo previsto por art. 267; en el juicio, durante el plazo previsto en el art. 282; en los recursos, al deducirlos, mencionado los miembros del tribunal alcanzados por la recusación.

Sin embargo, la recusación que se funde en un motivo producido o conocido después de los plazos fijados, será deducida, para ser admisible, dentro de las veinticuatro horas de producido o conocido el motivo, explicando esta circunstancia. Además, en caso de ulterior integración del tribunal, regirá el mismo plazo, a partir del momento en que se conozca esa nueva integración.

Durante las audiencias, la recusación será deducida oralmente, bajo las mismas condiciones de admisibilidad de las presentaciones escritas, dejándose constancia en acta de sus motivos.

27.Tribunal competente y trámite. Producidos el apartamiento de oficio o la recusación conocerá en el incidente el Consejo del tribunal respectivo.

En la recusación, el juez recusado, antes de remitir el incidente al tribunal competente, informará inmediatamente sobre los motivos de recusación invocados, cuidando de aceptar o rechazar específicamente cada uno de los hechos en que ella se funda.

Si fuera necesario recibir prueba, el tribunal competente encargará su instrucción a uno de sus miembros. Previa audiencia, en la cual se recibirá la prueba y podrán informar todos los intervinientes, el tribunal decidirá, sin recurso alguno.

28.Efectos sobre el procedimiento. El incidente no suspenderá, por regla, el trámite del procedimiento. El juez que se aparte de oficio o el recusado será reemplazado automáticamente conforme a la reglamentación que dictará el Consejo del tribunal respectivo, por comunicación inmediata al nuevo juez, al ministerio público y a todos los intervinientes. En el procedimiento intermedio el incidente será resuelto antes de proseguir. En el juicio, en la oportunidad fijada por el art. 288, inc. 2.

Cuando el apartamiento de oficio o la recusación se produzca durante una audiencia o en el trámite de un recurso, se considerará como cuestión previa a la prosecución de la audiencia y a la decisión, y, en su caso, suspenderá la audiencia.

29.Efectos sobre los actos. Producido el apartamiento o de la recusación, la resolución podrá ser repuesta, por el recusante o por quien sostuvo el apartamiento del juez durante el incidente, en plazo legal, contado a partir del conocimiento adquirido sobre la intervención definitiva del nuevo juez. Si llevare a cabo otros actos que puedan influir como elementos de prueba en alguna decisión, ellos serán renovados, en lo posible, si el recusante o quien sostuvo el apartamiento del juez durante el incidente lo pidiere, en el mismo plazo.

Resuelto el incidente, la intervención de nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron la resolución.

30.Colaboradores. Para los colaboradores de un tribunal, que cumplan alguna función durante el procedimiento, rigen las mismas reglas. El tribunal ante el cual actúan averiguará sumariamente el motivo invocado y resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno.

Capítulo 2 – El imputado

Sección 1ª – Generalidades

31.Denominación. Sin perjuicio de lo previsto en el art. 6, este Código denominará imputado a toda persona, perseguida penalmente, contra quien no se haya dictado el auto de apertura de juicio, acusado a aquel contra quien se haya dictado el auto de apertura de juicio y condenado a aquel sobre quien haya recibido una sentencia de condena firme.

32.Identificación. En la primera oportunidad el imputado será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si él se abstuviere de proporcionar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación pos testigos o por otros medios que se considere útiles. La duda sobre ellos los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal.

Si fuere necesario para el procedimiento, se tomará fotografías o se podrá recurrir a la identificación dactiloscópica o a otro medio semejante, aun contra su voluntad, pero ello no implicará su ingreso en un registro penal.

33.Domicilio. El imputado deberá denunciar en la primera oportunidad su domicilio real y fijar domicilio dentro del radio del tribunal que determine la reglamentación, y, con posterioridad, mantendrá actualizados esos domicilios, comunicando al ministerio público o al tribunal, según el caso, las variaciones que sufrieren.

La inexactitud de su domicilio real será considerada como indicio de fuga; las notificaciones dirigidas al domicilio especial serán válidas.

Si no pudiere constituir domicilio especial dentro del radio del tribunal, se fijará de oficio el del defensor, a quien se le comunicará la resolución. En ese caso, el defensor y el imputado, de común acuerdo, establecerán la forma de comunicarse, pudiendo el defensor, por urgencia o mayor distancia hasta el domicilio real del imputado, utilizar gratuitamente el servicio de correos con la sola exhibición de su nombramiento. El defensor informará al ministerio Público y al tribunal, según el caso, la forma de comunicación acordada, cualquier alteración que sufriere y su eventual interrupción.

34.Incapacidad. El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender o de querer los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento y voluntad, provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad.

Sin perjuicio de la aplicación de las reglas que rigen el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección, la comprobación de esta incapacidad impedirá el procedimiento intermedio, el juicio y toda labor crítica del comportamiento que se le atribuye, que no autorice expresamente la ley, pero no inhibirá la averiguación del hecho o que se continúe el procedimiento con respecto a otros coimputados.

La incapacidad será declarada por el tribunal competente, previo dictamen pericial; durante el procedimiento preparatorio por el juez de la instrucción.

Sospechada la incapacidad, el ministerio público o el tribunal competente ordenará la peritación correspondiente. Sin perjuicio de su propia intervención, las facultades del imputado podrán ser ejercidas por su curador, o el designado de oficio, si no lo tuviere, y, si carece de defensor o hubiere sido autorizado a defenderse por sí mismo, se designará inmediatamente un defensor de oficio.

Los actos que el incapaz hubiera realizado como tal, carecerán de valor.

35.Internación para observación. Cuando para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado fuere necesario que él sea internado en un hospital psiquiátrico, la medida sólo podrá ser ordenada por el juez de la instrucción, durante el procedimiento preparatorio, o por el tribunal competente, según el caso.

La medida se ordenará por resolución fundada, sólo cuando existiere la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho y no fuera desproporcionada respecto de la importancia del proceso y de la pena o medida de seguridad y corrección que se espera.

La internación no podrá sobrepasar, en su conjunto, un mes de duración.

36.Minoridad. Si el imputado fuere menor de edad, conforme a la ley civil, quien ejerce la patria potestad es su tutor podrán intervenir en el procedimiento con todas las facultades defensivas que la ley otorga al imputado, sin perjuicio de su propia intervención.

Si la patria potestad fuera ejercida por el padre y la madre, ellos actuarán bajo una única representación. El conflicto que pudiera suscitarse entre ellos lo resolverá el juez de la instrucción o el tribunal competente, según el caso.

37.Examen mental obligatorio. El imputado deberá ser sometido a un examen mental si el delito que se le atribuye es de carácter sexual o se espera una pena superior a los cinco años de privación de libertad, si se trata de un sordomudo, de un menor imputable, de un mayor que haya cumplido los setenta años al momento del hecho atribuido o si es probable la aplicación de una medida de seguridad y corrección privativa de la libertad.

38.Investigación corporal. Se podrá ordenar la investigación corporal del imputado para la constatación de circunstancias de importancia para resolver el procedimiento. Con esta finalidad, serán admisibles extracciones de sangre y otras intervenciones corporales, que se efectuarán según las reglas del saber médico, aun sin consentimiento del imputado, cuando fuere de temer perjuicio para su salud.

Mínimas intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello, que no provocan ningún perjuicio para la salud según la experiencia común, podrán ser ordenadas por el ministerio público o la policía durante el procedimiento preparatorio, siempre que el experto que lleve a cabo la intervención no la considere riesgosa. Caso contrario, se requerirá la autorización del juez, quien resolverá por resolución fundada, previa consulta a un perito.

39.Rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que, sin grave impedimento, no compareciere a una citación, o se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido o no obedeciere a una orden de aprehensión emitida por la persona competente o se ausentare, sin licencia del ministerio público o del tribunal, del lugar denunciado o asignado para rendir.

La declaración de rebeldía será emitida por el juez de la instrucción o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención. La orden se hará conocer también a las autoridades encargadas de control para salir del país, con mandato expreso de que lo impidan, y se inscribirá en el registro respectivo, con

todos los recaudos de una orden de detención. Se podrá requerir informes y su aprehensión inmediata por los medios de comunicación, publicando, incluso, su fotografía, dibujo, datos y señas personales.

Durante el procedimiento preparatorio, cuando no existan los elementos suficientes para emitir la orden de detención, el ministerio público podrá proceder conforme al art. 138, último párrafo, emitiendo las órdenes pertinentes, sin perjuicio de continuar la investigación, a cuya terminación la archivará hasta que comparezca el imputado o solicitará la resolución que corresponda.

*** 40. Efectos de la rebeldía.** La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio, salvo en lo que se refiere a toda labor crítica del comportamiento imputado; sin embargo, podrán expedirse dictámenes y dictarse decisiones sobre el comportamiento imputado, cuando fuere necesario para solicitar su extradición.

En lo demás, el procedimiento se paralizará sólo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones y otros efectos, instrumentos o piezas de convicción, que fuere indispensable conservar, y continuará para los otros imputados presentes.

La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiera sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas provocadas por la contumacia.

Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, purgará su rebeldía, dejándose sin efecto las órdenes emitidas y sus inscripciones, y el proceso continuará según su estado.

***** Aquellos países cuya legislación básica admita el procedimiento contra ausentes, deberán iniciar el primer párrafo con la aclaración: "Sin perjuicio de la aplicación de las reglas del procedimiento contra ausentes, cuando correspondiere..."

Sección 2ª – Declaración del imputado

41.Advertencias preliminares. Antes de comenzar la declaración se comunicará detalladamente al imputado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales que se juzgue aplicables.

Se le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio.

En las declaraciones que presta durante el procedimiento preparatorio será además instruido acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud de asumir antes de comenzar la

declaración sobre el hecho. En este caso, si no estuviere presente, se dará aviso inmediato al defensor, por cualquier medio, para que comparezca y, de no ser hallado, se fijará nueva audiencia para el día próximo, procediéndose a su citación formal.

Si el defensor no compareciere, se designará inmediatamente a un defensor de oficio, para que cumpla su función en ese acto, sin perjuicio de las sanciones que correspondan al defensor elegido.

Será instruido también acerca de que puede requerir la práctica de medios de prueba, efectuar las citas que considere convenientes y dictar su declaración.

42.Desarrollo. Se comenzará por invitarlo a dar su nombre, apellido, sobrenombre, o apodo, si lo tuviere, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio real y legal, si lo tuviere, principales lugares de residencia anterior y condiciones de vida, nombre, estado y profesión de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda, a expresar si antes ha sido perseguido penalmente y, en su caso, por qué causa, ante qué tribunal, qué sentencia recayó y si ella fue cumplida. En las declaraciones posteriores bastará que confirme los datos ya proporcionados.

Inmediatamente después, se dará oportunidad al imputado para declarar cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar los medios de prueba cuya práctica considere oportuna.

Tanto el ministerio público como el defensor podrán dirigir al imputado las preguntas que estimen convenientes, con la venia de quien presida el acto. El juez de la instrucción o los miembros del tribunal competente también podrán preguntar.

43.Acta en el procedimiento preparatorio. Durante el procedimiento preparatorio las declaraciones del imputado constarán en acta que reproducirá, del modo más fiel posible, lo que suceda en la audiencia; las declaraciones, en lo posible, con las propias palabras del imputado. En este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta por todos los intervinientes.

Si el imputado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta; si rehusare suscribirla, se consignará el motivo.

El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de registro; en ese caso, quien preside el acto, determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad e individualización futuras.

44.Asistencia de los intervinientes durante el procedimiento preparatorio. Durante le procedimiento preparatorio se le comunicará verbalmente al defensor el día y hora del acto y podrá ejercer en él las facultades señaladas por los arts. 41 y 42.

Quien preside el acto podrá permitir, excepcionalmente y con anuencia del imputado, la asistencia del querellante y de las partes civiles, según las necesidades y condiciones del art. 257, a quienes no será necesario dar aviso sobre su realización. El imputado será consultado acuerda del derecho de exclusión antes de comenzar el acto, en presencia de su defensor; podrá también ejercer esta facultad durante la audiencia.

Todos los intervinientes podrán indicar las inobservancias legales en que se incurra, a su juicio, y de no ser corregidos inmediatamente, exigir que su protesta conste en el acta.

45.Métodos prohibidos para la declaración. En ningún caso se le requerirá al imputado ratificación solemne de su exposición, ni será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo aquellas expresamente autorizadas por la ley penal o procesal, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.

Toda medida que menoscabe la libertad de decisión del imputado, su memoria o capacidad de comprensión y dirección de sus actos está prohibida, en especial los malos tratos, las amenazas, el agotamiento, las violencias corporales, la tortura, el engaño, la administración de psicofármacos, los llamados "sueros de la verdad", "detectores de mentiras" y la hipnosis.

46.Interrogatorio. Las preguntas serán claras y precisas; no están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas no serán instadas perentoriamente.

Si, por la duración del acto, se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida, hasta que ellos desaparezcan.

47.Oportunidad y autoridad competente. Durante el procedimiento preparatorio, el imputado prestará declaración ante el ministerio público cuando él mismo lo pidiere, compareciendo espontáneamente, o cuando lo ordenare el ministerio público, siempre en presencia de un defensor.

Si el imputado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de la instrucción para que declare en su presencia, a más tardar en el plazo de doce horas a contar desde su aprehensión. Este plazo podrá prorrogarse otro tanto, cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor. En casos excepcionales, cuando fuere absolutamente imposible el traslado de personas en el plazo establecido, por la gran distancia, la grave dificultad de las comunicaciones, una catástrofe, el aislamiento y otro hecho extraordinario similar, el juez podrá fijar un plazo distinto, acorde con las circunstancias, por resolución fundada y bajo su responsabilidad.

Durante el debate la declaración se recibirá en la oportunidad y forma previstas por los arts. 306 a 309.

Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiere el imputado, la declaración será recibida por el presidente del tribunal, y, en la audiencia, presidida por él.

El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador.

48.Facultades policiales. La policía no podrá interrogar autónomamente al imputado. Sólo podrá dirigirle preguntas para constatar su identidad, con todas las advertencias y condiciones que establecen los arts. 41 y 45. En caso de que el imputado manifieste su deseo de declarar, deberá instruirlo acerca de su declaración inmediata ante el ministerio público o un juez y facilitarle la posibilidad de tomar notas para no perjudicar su memorial actual, notas que sólo utilizará libremente el imputado durante su declaración.

49.Tratamiento durante el acto. El imputado declarará siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u otros medios de seguridad y sin la presencia de otras personas que las autorizadas para asistir, según las reglas del art. 44 o las propias de las audiencias orales; pero el acto se puede llevar a cabo en recintos cerrados, apropiados para impedir su fuga, cuando estuviere privado de su libertad.

50.Varios imputados. Cuando hubiere varios imputados, se recibirá las declaraciones, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.

51.Careos. El imputado no será obligado a carearse con otros imputados o con testigos. Rigen, al respecto, todas las reglas de esta sección aplicables a la declaración del imputado.

52.Valoración. La inobservancia de los preceptos de esta sección o la irrazonabilidad de los motivos que fundan una manera de proceder alternativa, impedirán aprovechar la declaración para fundar cualquier decisión en contra del imputado, total o parcialmente, aun cuando él hubiere dado su consentimiento expreso para infringir alguna regla o para utilizar su declaración.

Pequeñas inobservancias formales podrán ser corregidas durante el acto o con posterioridad a él. Quien deba valorar el acto apreciará si esas inobservancias fundan la posibilidad de un menoscabo para la libertad de decisión, la memoria, la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en cuyo caso procederá conforme al párrafo anterior.

Sección 3ª – Defensa técnica

53.Capacidad. Podrán ser elegidos defensores quienes posean el título de abogado o de doctor en Derecho, expedido por una universidad del país reconocida por la legislación vigente, o admitido en el país conforme a los tratados y disposiciones que rigen en la materia.

La inscripción en la matrícula correspondiente, según la legislación vigente, no será en un primer momento, requisito indispensable para autorizar su intervención, pero el juez fijará un plazo, prorrogable según las necesidades del caso, para que el defensor cumpla con la reglamentación. Vencido el plazo, cesará su intervención y se procederá conforme a las reglas del abandono.

54.Admisión y apartamiento del defensor. No se admitirá la intervención de un defensor en el procesos o se lo apartará de la participación ya acordada, cuando haya sido testigo del hecho o cuando, por decisión fundada, se compruebe como muy probable que:

1) él ha participado o participa en alguno de los hechos punibles que conforman el objeto de la investigación;

2) él es partícipe en el delito de encubrimiento o favorecimiento de esos hechos concretos;

3) él participa con el imputado en una asociación ilícita o banda, que guardan relación con el hecho punible que conforma el objeto de la investigación;

4) participa en la evasión del imputado o en su tentativa.

El grado de sospecha debe ser equivalente al que se exige para el auto de apertura del juicio, aunque por motivos fácticos o jurídicos no haya sido posible dictarlo aún.

La inadmisibilidad o el apartamiento no comprende su propia defensa, pero se extiende a los demás imputadores en el mismo procedimiento.

55.Revocación. La inadmisiblilidad o el apartamiento serán revocados, por decisión fundada:

1) tan pronto desaparezcan su s presupuestos;

2) cundo el defensor fuere sobreseído o absuelto en el proceso que motivó su exclusión;

3) cuando transcurrido un año de dictada la resolución que lo excluye, no se le hubiere sometido a juicio, salvo que motivos jurídicos tornen imposible su enjuiciamiento.

56.Competencia. Los defensores serán admitidos por el ministerio público o por el tribunal competente.

Para dictar las resoluciones sobre la exclusión de un defensor y sobre su revocación será competente el Tribunal de Casación. Al efecto, el

ministerio público o los tribunales competentes, ante los cuales pende el procedimiento, efectuarán la petición, cuando adviertan un motivo de exclusión, con todos los elementos disponibles para fundarla.

El Tribunal de Casación podrá ordenar una investigación sumaria, en caso necesario, encomendando a uno de sus miembros que la lleve a cabo y, previa audiencia del defensor cuestionado, emitirá la decisión. La revocación procederá de oficio o a pedido fundado del interesado.

57.Efectos sobre el procedimiento. El trámite del incidente y la decisión no suspenderán, en principio, el procedimiento. Se dará oportunidad al imputado de elegir otro defensor, si no lo nombra, se procederá conforme a las reglas del abandono.

Si el incidente se abre antes de comenzada la audiencia del debate, se aplazará su fecha inicial para después de resuelto, salvo que el imputado presta su conformidad para ser defendido en ella por otro defensor o que haya designado otro, según los arts. 59 y 60. Durante el debate regirá, analógicamente, el art. 297, inc. 3.

58.Defensor común. La defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en principio, inadmisible.

El tribunal competente, según el período del procedimiento, o el ministerio público, a pedido del defensor, podrá permitir la defensa común cuando con evidencia no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, esta situación podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor.

59.Número de defensores. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados, durante los debates o en un mismo acto.

Cuando intervengan dos o más defensores, la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los plazos. Ambos, no obstante, conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley, expresamente, imponga una división de funciones.

60.Sustitución. Cada defensor podrá designar un sustituto, para que intervenga si tuviere algún impedimento, con el consentimiento del imputado. En caso de urgencia, se permitirá su actuación, aun faltando ese consentimiento, pero, en la primera oportunidad posible, se recabará la decisión del imputado.

Negado el consentimiento, si el titular no hubiere continuado la defensa, se procederá conforme a las reglas del abandono.

El abandono sustituyente asumirá las obligaciones del defensor y no tendrá un derecho especial a prórrogas de plazos o audiencias, a menos

que la ley lo permita en los casos particulares. Si el tutelar abandona la defensa, él lo sustituirá definitivamente.

61.Nombramiento inicial. Conforme a lo previsto en el art. 5, la designación del defensor se efectuará sin dilación alguna, desde el comienzo del procedimiento y en todo caso antes de la declaración del imputado. Si, consultado el imputado, no lo eligiere, no fuera admitida la defensa personal propuesta o el elegido no aceptare inmediatamente el cargo, se nombrará a un defensor de oficio.

Cuando el imputado estuviere privado de libertad, cualquier persona podrá proponerle la designación de un defensor, por escrito ante la policía o las autoridades encargadas de su custodia o verbalmente ante el ministerio público o el juez de la instrucción, proposición que se le dará a conocer inmediatamente. En caso de urgencia, comenzará a actuar provisionalmente este defensor.

62.Nombramiento posterior. El imputado puede designar, posteriormente, otro defensor, reemplazando al anterior que ya interviene en el procedimiento, pero este último no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte su cargo.

El mismo derecho existe para reemplazar al defensor nombrado de oficio por uno elegido, salvo reglado por el artículo siguiente.

63.Renuncia y abandono. El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuyo caso el ministerio público o el tribunal competente fijarán un plazo para que el imputado lo reemplace, vendo el cual será sustituido por un defensor nombrado de oficio. El renunciante no podrá abandonar la defensa hasta que intervenga su reemplazante. No se podrá renunciar durante el debate o las audiencias.

Si el defensor del imputado abandonare la defensa o lo dejare sin asistencia técnica, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquél no podrá ser nombrado nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se lo instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza.

Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspenderse el debate ya iniciado, como máximo por cinco días corridos, si lo solicita el nuevo defensor; no se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiere sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza.

64.Invalorabilidad de los actos. La inobservancia de lo previsto en el art. 61 o la falta de intervención en el procedimiento de un defensor, según las reglas del abandono, tornará invalorables los actos previstos en

los arts. 258 y 285, con la salvedad del caso de urgencia establecido en el art. 259.

65.Sanciones. El abandono constituirá falta grave y obligará a quien incurriere en él al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Casación, el cual, previo oír al interesado, podrá corregirlo con una multa de 15 días a 3 eses de sueldo de uno de sus jueces, según la gravedad del caso. Sin perjuicio de ello y cualquiera que sea el resultado del incidente, comunicará enseguida la falta al tribunal de ética de la profesión que establezca la reglamentación vigente.

66.Defensa de oficio. El nombramiento de oficio de un defensor, para los casos en que está previsto, se regirá por las reglas de la ley orgánica. A él le son aplicables todos los preceptos anteriores.

67. Defensor mandatario. En el juicio por delito de acción privada, el imputado podrá hacerse representar por un defensor con poder especial para el caso. No obstante, el tribunal podrá exigir su comparecencia personal.

Capítulo 3 – El acusador y órganos auxiliares

Sección 1ª – El ministerio público

68.Función. Al ministerio público le está confiado el ejercicio de la persecución penal de los hechos punibles perseguibles de oficio, dependan o no dependan de una instancia particular o de una autorización estatal, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para cumplir este fin, conforme a las disposiciones de este código y a la ley que lo organiza.

Tendrá a su cargo, específicamente, el procedimiento preparatorio y dirigirá la policía en su función judicial.

69.Objetividad. En el ejercicio de su función, el ministerio público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley penal.

Deberá formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aun en favor del imputado.

70.Dictámenes. El ministerio público formulará sus requerimientos y conclusiones motivada y específicamente, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones de los tribunales, ni a dictámenes anteriores.

Procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos.

71.Poder coercitivo y facultades. En el ejercicio de sus funciones el ministerio público dispondrá sólo de los poderes que este Código le autoriza. Si la regla que otorga el poder no discrimina, a él también le corresponderá la respectiva facultad.

72.Apartamiento. Los funcionario del ministerio público deberán apartarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, salvo el caso del art. 22, inc. 2. Se exceptúa también: el caso de las recomendaciones u opiniones sobre la causa fuera del procedimiento y el de la denuncia o acusación, los cuales, no obstante, podrán fundar la recusación por temor de parcialidad, cuando vinculado con otras circunstancias, el motivo resulte serio y razonable.

El apartamiento de oficio o la recusación serán resueltos informalmente, en principio, por el superior jerárquico, según loa ley orgánica, cuidando de averiguar los hechos que lo fundan y de dar suficiente oportunidad a los interesados para que se expidan. Producido el requerimiento se reemplazará inmediatamente al funcionario, hasta la decisión.

Quién hubiere recusado o sostenido el apartamiento, podrá acudir formalmente ante le juez de la instrucción, durante el procedimiento preparatorio, o ante el tribunal ante el cual penda la causa, en busca de una decisión judicial. Rige, analógicamente, el procedimiento establecido por el art. 27. La resolución no dará lugar a recurso alguno y sólo podrá renovarse el requerimiento si nuevas circunstancias apoyan el mismo motivo u otro diferente.

Resuelto el incidente en el sentido del apartamiento, el reemplazo será definitivo, aunque posteriormente desaparezcan sus motivos.

Sección 2ª – La policía

73.Función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del ministerio público, deberá investigar los hechos punibles perseguibles de oficio, impedir que los tentados o cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir los elementos de prueba útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento (absolución anticipada). Si el hecho punible dependiese para su persecución de una instancia particular o de una autorización estatal, regirán las reglas del art. 229.

Los funcionarios policiales serán auxiliares del ministerio público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio.

74.Subordinación. Los funcionarios de la policía administrativa, en tanto cumplan actos de policía judicial, ejecutarán sus tareas bajo

la superintendencia directa del ministerio público y deberán ejecutar sus órdenes, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual estén sometidos.

Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces ante quienes penda el proceso.

El ministerio público supervisará el correcto cumplimiento de la función judicial de la policía; podrá impartirle instrucciones generales al respecto, cuidando de respetar su organización administrativa.

75.Atribuciones y deberes. Formalidades. Los funcionarios de la policía, en la tarea de investigación que les es propia, tendrán las facultades que este código regula en los arts. 246, 248 y 249 y documentarán su actuación conforme a las reglas del art. 247.

Constituyen deberes del personal policial:

1) recibir denuncias;

2) cuidar que se conserve los vestigios o rastros del delito y que el estado de cosas no se modifique hasta que llegue al lugar o lo disponga el ministerio público, por instrucción particular o general, o el juez de la instrucción, en el caso del art. 248, describiendo provisionalmente el estado de personas, cosas y lugares;

3) en caso de peligro por la demora, proceder conforme al art. 248;

4) allanar domicilios y llevar a cabo las inspecciones de personas y lugares y los secuestros urgentes, en los casos previstos por los arts. 150, 153, 157 y 162;

5) clausurar locales en los casos previstos por el art. 168;

6) aprehender al imputado o arrestar personas en los casos y formas que este Código autoriza, con la obligación de consignar inmediatamente a los detenidos ante el juez de la instrucción y dar aviso al ministerio público, disponiendo su incomunicación cuando concurran los requisitos del214, por el plazo de seis horas, que no podrá prolongarse sin disposición expresa del juez de la instrucción; excepcionalmente, cuando concurran las circunstancias del art. 47, regirá el procedimiento que allí se indica, y la incomunicación podrá durar el tiempo indispensable para que la autoridad policial se ponga en contacto con el juez, dejándose constancia expresa del inconveniente;

7) instruir al imputado según lo prevé el art. 48;

8) prevenir todos los hechos punibles que llegaren a su conocimiento, informar al ministerio público sobre ellos y proceder a practicar la investigación preliminar, conforme a los arts. 73 y 246.

76.Poder disciplinario. Los funcionarios policiales que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados por el superior jerárquico del ministerio público, a pedido del

funcionario responsable del caso o por abocamiento directo, previo informe del interesado, con apercibimiento, multa del veinte al ciento por ciento de su sueldo mensual y suspensión de hasta treinta días, sin perjuicio de iniciar persecución penal cuando corresponda. Se podrá recomendar también su cesantía o exoneración a la autoridad administrativa correspondiente y, en todo caso, se dará aviso a ella de las sanciones impuestas, con copia de las actuaciones.

Los tribunales de justicia tendrán las mismas atribuciones cuando los funcionarios policiales actúen por su orden o bajo su supervisión.

77. Otros preventores. Las mismas reglas regirán para la policía específica de frontera, mares, ríos y medios de comunicación, o para la policía local, cuando reemplace a la policía ordinaria.

Sección 3º – El querellante

*** 78. Querellante adhesivo.** En los delitos de acción pública, la persona con capacidad civil, particularmente ofendida por un hecho punible, y su representante o guardador en caso de incapacidad, demostrando esos extremos, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el ministerio público, con las limitaciones que este Código establece.

El mismo derecho podrá ser ejercido por el cónyuge supérstite, los padres y los hijos sobrevivientes, el último tutor, curador o guardador del fallecido y la persona que convivía con él, ligada al fallecido por vínculos especiales de afecto, en el caso de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, demostrando los extremos citados.

No podrán querellar, salvo que la ley penal expresamente los autorice, los órganos del Estado, centralizados o descentralizados, excepto las empresas de capital estatal o mixto, organizadas autónomamente.

* Los países que prefieran, políticamente, un querellante con mayores atribuciones para la persecución penal e incorporar la acción popular, suprimirán la palabra "adhesivo" del título e incluirán como párr. IV, el texto siguiente:

"En los delitos de acción pública, que afecten intereses colectivos o cometidos con abuso de la autoridad pública, cualquier ciudadano con capacidad civil puede asumir el papel de querellante, con todas las facultades y responsabilidades que este Código establece".

Ver asimismo las modificaciones al procedimiento intermedio.

Los países que deseen dar intervención en la persecución penal a las asociaciones intermedias podrán adoptar la siguiente fórmula:

"En los delitos de acción pública, las asociaciones, reconocidas por el Estado, podrán asumir el papel de querellante, por sí mismas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos, y por pedido del ofendido, en los

demás casos, siempre que la persecución penal se vincule con el objeto de la asociación".

79.Instancia de constitución. La persona que pretenda constituirse como querellante procederá, en todo caso, según el art. 244, y dará a conocer, además:

1) sus nombres y apellidos y, en su caso, el de su representado;

2) el domicilio real y el legal de ambos, si lo tuvieren;

3) el número del documento que acredite la identidad, o en caso de que no lo tuvieren, cualquier otro documento nacional o extranjero que sirva para identificarlos, lugar y fecha de nacimiento y el nombre de sus padres;

4) en el caso de entes colectivos, la razón y el domicilio social y el nombre de las personas que lo dirigen;

5) el domicilio especial que fijan para el procedimiento.

Faltando alguno de estos requisitos, el juez de la instrucción, sin perjuicio de proceder según lo dispuesto en el art. 245, fijará un plazo breve para que se complete, antes de dar curso a la instancia, sin necesidad de notificación alguna. Vencido el plazo, que comenzará a correr el día siguiente de colocarse a la oficina la resolución correspondiente, de lo que se dejará nota, el juez archivará el incidente hasta que el querellante cumpla la exigencia.

80.Representante. Las personas colectivas justificarán, con la instancia, su existencia y la facultad para querellar de la persona que la representa, conforme a las leyes respectivas.

La querella podrá ser iniciada y proseguida por un mandatario, con poder especial para el caso, que cumpla los requisitos exigidos por las leyes que rigen la procuración judicial. El mandatario justificará estos extremos al pedir intervención.

81.Oportunidad. La instancia de constitución deberá efectuarse siempre antes de que el ministerio público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencido el plazo, el juez la devolverá al interesado sin más trámite, con copia de la resolución que la declara inadmisible.

82.Desistimiento y abandono. El querellante podrá desistir o abandonar la instancia en cualquier momento del procedimiento; en ese caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general sobre costas que dicte el tribunal al finalizar el procedimiento, teniendo en cuenta sus actos anteriores.

Se considerará abandonada la instancia por el querellante:

1) cuando, citado a prestar declaración testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba para cuya práctica sea necesaria su presencia, no concurriere sin justa causa, que acreditará antes de decretarse el abandono, o se negare a colaborar en la diligencia;

2) cuando no exprese conclusiones sobre el procedimiento preparatorio, conforme al art. 269;

3) cuando no ofrezca prueba para el debate, no concurra a él o se ausente de él y cuando no concurra al pronunciamiento de la sentencia.

El abandono será declarado de oficio o a pedido de cualquiera de los intervinientes. La resolución no será recurrible, salvo por reposición.

El desistimiento y el abandono impedirán toda posterior persecución por parte del querellante, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su instancia.

83.Límite de su intervención. El querellante por adhesión no intervendrá más que en el juicio de conocimiento e imposición de la pena; estará excluido del procedimiento para la ejecución penal.

Su querella no alterará las facultades concedidas por la ley al ministerio público y al tribunal en los arts. 230 y 231.

Mientras dure su intervención podrá ejercer sólo las facultades que este Código le autoriza, colaborando, en lo posible, con el ministerio público.

La intervención como querellante no exime, por sí misma, del deber de declarar como testigo.

84.Arraigo. Quien pretenda constituirse como querellante y se domicilie en el extranjero deberá, a pedido del imputado, prestar una caución suficiente para responder por las costas que provoque al adversario, cuyo contenido y plazo se fijará judicialmente.

85.Decisión sobre la instancia. El juez de la instrucción rechazará la instancia o dará intervención provisional al querellante, anoticiando de ello al ministerio público, si lo admitiere, para que le otorgue la intervención correspondiente.

Cualquier interviniente podrá oponerse a la admisión del querellante, interponiendo las excepciones correspondientes, durante el procedimiento preparatorio ante el juez de la instrucción y en el procedimiento intermedio conforme al art. 271.

La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la instancia durante el procedimiento intermedio, y, en caso contrario, según la resolución que prevé al art. 273, inc. 2.

Los vicios formales o la falta de representación podrán ser corregidos hasta la oportunidad prevista en el art. 269.

86.querellante exclusivo. Cuando, conforme a la ley penal, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que, según esa ley, sea el titular del ejercicio de la acción.

Serán aplicables las reglas de los arts. 80 y 84, y las del juicio por delito de acción privada.

Capítulo 4 – La reparación privada

Sección 1ª – Acción civil

87.Carácter accesorio y excepciones. La acción reparatoria sólo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal. Sobreseído, clausurado, archivado, paralizado o suspendido el procedimiento, conforme a las previsiones de la ley, cesará el ejercicio de la acción reparatoria, en su caso, hasta que la persecución penal continúe ya salvo el derecho de proponer la demanda ante los tribunales competentes específicamente, por la vía del procedimiento civil.

Sin embargo, después del debate, la sentencia que absuelva al imputado o acoja una causa extintiva de la persecución penal, deberá resolver también sobre aquella, cuando hubiera sido introducida válidamente; de la misma manera, el Tribunal de Casación deberá resolver también la cuestión civil válidamente introducida, a pesar del sobreseimiento (absolución anticipada) o la absolución pronunciados con posterioridad a la impugnación de la sentencia o cuando sólo se recurrió el capítulo civil de la sentencia.

88.Contenido y límites. El ejercicio de la acción civil en el procedimiento penal se limitará a la reparación del delito, conforme a la regulación.

Ella no podrá ser ejercida en el procedimiento con menores, aunque se dirija contra un mayor, ni en el juicio que se practique para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección.

89.Ejercicio alternativo. Las reglas que posibilitan plantear la acción reparatoria en el procedimiento penal no impiden su ejercicio ante los tribunales competentes específicamente, por la vía del procedimiento civil. Pero una vez admitida en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente en un procedimiento civil independiente, sin desistimiento expreso o declaración de abandono anterior al comienzo del debate; planteada por la vía del procedimiento civil, no podrá ser ejercida en el procedimiento penal.

Si la persecución penal no pudiere proseguir, la acción reparatoria podrá ser ejercida ante los tribunales competentes específicamente, por la vía del procedimiento civil.

90.Desistimiento y abandono. El actor civil podrá desistir de sus demandas en cualquier estado del procedimiento.

Se considerará abandonada la demanda cuando el actor civil, regularmente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial sin justa causa, que acreditará oportunamente, cuando no concrete su pretensión en la oportunidad fijada por el art. 270 párr. II, no comparezca al debate, se aleje de la audiencia o no presente conclusiones.

91.Efectos del desistimiento y del abandono. Hasta el comienzo del debate el desistimiento y el abandono no perjudicarán el ejercicio posterior de la acción reparatoria ante los tribunales competentes específicamente, por la vía del procedimiento civil.

El desistimiento o el abandono posteriores importan renuncia al derecho resarcitorio pretendido.

El desistimiento y el abandono generan, para el actor civil, la obligación de responder por las costas que su intervención hubiere ocasionado tanto a él como a sus adversarios.

Sección 2ª – Actor civil

92.Sujetos. En el procedimiento penal la acción reparatoria sólo puede ser ejercida:

1) por quien, según la ley civil, esté legitimado para reclamar por el daño directo emergente del hecho punible;

2) por sus herederos, en los límites de su cuota hereditaria.

Cuando el titular de la acción sea un incapaz que carezca de representación o cuando siendo capaz delegue su ejercicio, la acción civil será promovida y proseguida por el órgano que designe la ley orgánica. La delegación se hará por escrito o verbalmente, caso en el cual quien reciba labrará acta y la comunicará inmediatamente al funcionario que corresponda.

93.Representación. Las personas que carezcan de capacidad para estar en juicio sólo podrán obrar si son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescrito por la ley civil.

Los mandatarios podrán deducir la acción reparatoria por sus mandantes, sin perjuicio de cumplir las condiciones exigidas por la ley que regula la procuración judicial.

Los representantes y mandatarios, para intervenir, justificarán los extremos de los cuales depende su facultad de representar, conforme a las leyes respectivas.

94.Instancia. La instancia de constitución se deberá formular, personalmente o por mandatario, en un escrito que contenga:

1) nombre y apellidos del accionante y, en caso, de su representante;

2) domicilio real y legal de ambos, si lo tuvieren;

3) el número del documento nacional de identidad, o, en caso de que no lo tuviere, cualquier otro documento nacional o extranjero que sirva para identificarlos, lugar y fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres;

4) en el caso de entes colectivos, la razón y el domicilio social y el nombre de las personas que lo dirigen;

5) el domicilio especial que fijan para el procedimiento;

6) en cuál procedimiento pretende intervenir y, sintéticamente, los motivos en que la acción se funda, con indicación de carácter que se invoca, y los daños específicos que pretende haber sufrido, aunque no precise la pretensión final o el importe concreto de la indemnización.

Faltando alguno de estos requisitos, el juez de instrucción procederá conforme al art. 79.

95.Oportunidad. La instancia de constitución deberá llevarse a cabo antes de que el ministerio público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento (absolución anticipada). Vencido ese plazo, el juez la devolverá al interesado sin más tardar, con copia de la resolución que la declara inadmisible.

96.Arraigo. Quien pretenda constituirse como actor civil y se domicilie en el extranjero deberá, a pedido del imputado o del tercero civilmente responsable, prestar una caución suficiente para responder por las costas que provoque al adversario, cuyo contenido y plazo se fijará judicialmente.

97.Demandados. La acción reparatoria deberá dirigirse siempre contra el imputado; procederá aun cuando no estuviere individualizado.

Podrá también dirigirse contra quien, por previsión directa de la ley civil, responde por el daño que el imputado causado con el hecho punible.

Si el procedimiento hubiere varios imputados y terceros civilmente demandados, y el actor no limitare subjetivamente su pretensión, se entenderá que se dirige contra todos.

98.Decisión sobre la instancia. El juez de la instrucción rechazará la instancia o dará intervención provisional al actor civil, anoticiando de ello al ministerio público, si lo admitiere, para que le otorgue la intervención correspondiente.

Cualquier interviniente podrá oponerse, interponiendo las excepciones correspondientes, durante el procedimiento preparatorio ante el juez de la instrucción y en el procedimiento intermedio conforme al art. 271.

La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la instancia durante el procedimiento intermedio y, en caso contrario, según la resolución que prevé el art. 273, inc. 2.

Los vicios formales o la falta de representación podrán ser corregidos hasta la oportunidad prevista en el art. 270.

La inadmisibilidad de la instancia no impedirá el ejercicio de la misma acción ante el tribunal competente, por la vía de procedimiento civil.

99.Facultades. El actor civil actuará en el procedimiento sólo en razón de su interés civil; su intervención a acreditar el hecho, la imputación de ese hecho a quien considere responsable, el vínculo de él con el tercero civilmente responsable, la existencia y la extensión del daño.

La intervención como actor civil no exime, por sí misma, del deber de declarar como testigo.

Sección 3ª – Tercero civilmente demandado

100.Intervención forzosa. Quien ejerza la acción reparatoria podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley civil, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demandada.

La instancia deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad previstas por los arts. 94 y 95, con indicación del nombre y domicilio real del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.

101. Decisión sobre la instancia. El juez de la instrucción decidirá sobre la instancia; si la acoge mandará notificar al tercero civilmente demandado, para que intervenga en el procedimiento, con copia del requerimiento, indicando el nombre y el domicilio del actor civil y del citado y el proceso al cual se refiere. Anoticiará también al ministerio público.

102.Valor de la citación. La falta de comparecencia del citado o su inasistencia a los actos no suspenderá el trámite, que continuará como si él estuviera presente, pudiendo intervenir en cualquier momento del procedimiento. Si hubiere sido citado por notificación pública y no compareciere, se le nombrará de oficio un defensor, hasta que comparezca.

Cuando la citación adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del tercero civilmente demandado, restringiéndole la audiencia o la prueba, en miras a la sentencia, carecerá de valor. Si la omisión o el error se advierte antes de la oportunidad prevista por el art. 270, podrá corregirse inmediatamente, aun de oficio. La omisión o el error no influirán en la marcha del procedimiento penal, ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción por la vía del procedimiento civil.

103.Intervención espontánea. Cuando en el procedimiento se ejerza la acción reparatoria, el tercero que pueda ser civilmente demandado tendrá derecho a intervenir en el procedimiento, constituyéndose voluntariamente en él.

La instancia de participación cumplirá los requisitos del art. 94, en cuanto sea aplicable, y será admisible hasta la oportunidad prevista en el art. 95.

104.Decisión sobre la instancia. Rigen los arts. 94, último párrafo, y 98, analógicamente. El actor civil tendrá la facultad de oponerse a la intervención del tercero civilmente responsable, si hubiere pedido su citación. El tercero citado forzosamente como civilmente responsable podrá oponerse a su citación.

105.Exclusión. La exclusión, el desistimiento o el abandono del actor civil, hará cesar la intervención del tercero civilmente demandado.

106.Facultades. El tercero civilmente demandado gozará, desde su intervención en el procedimiento, de todas las facultades concedidas al imputado para su defensa, sólo en lo concerniente a sus intereses civiles.

La investigación como tercero no exime, por sí misma, del deber de declarar como testigo.

107.Representación. Rigen las reglas del art. 93, análogamente.

Capítulo 5 – Auxiliares de los intervinientes

108.Designación y función. Si el ministerio público o alguno de los intervinientes pretendieran valerse de asistentes no letrados, para que colaboren en su tarea, darán a conocer su nombre y apellido, expresando que asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia.

Los asistentes sólo cumplirán tareas accesorias de colaboración y no podrán sustituir a las personas a quienes asisten en los actos propios de su función. Se permitirá que acompañen a quien asisten en los debates, sin intervenir en él.

109.Consultores técnicos. Si, por las particularidades del caso, el ministerio público o alguno de los intervinientes consideran necesario ser asistidos por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrán al ministerio público o al tribunal, el cual decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo la inhabilidad prevista en el art. 181, inc. 2, que no regirá respecto de quien lo propone.

El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen; los peritos harán constar las observaciones. En los debates, podrá acompañar a quien los asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes, y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso.

Título III – La actividad procesal

Capítulo 1 – Disposiciones generales

110.Idioma. Los actos se deberán cumplir en el idioma nacional para provocar sus efectos propios o poder ser valorados.

La exposición de personas que ignoren el idioma nacional o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en lengua

distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, sólo podrán provocar sus efectos propios o ser valorados, una vez realizada su traducción o interpretación, según corresponda.

111.Declaraciones e interrogatorios. Las personas serán interrogadas en el idioma nacional o por intermedio de un traductor o de un intérprete, cuando corresponda. El tribunal podrá permitir expresamente el interrogatorio directo o en otro idioma o forma de comunicación; pero, en ese caso, la traducción o la interpretación precederán a la contestación.

Las personas que declaren no consultarán notas o documentos, salvo que sean autorizadas para ello.

A los sordos que saben hablar, las admoniciones y las preguntas se les presentarán por escrito; los mudos que saben escribir responderán por escrito; los sordomudos que saben escribir serán preguntados y responderán por escrito. Cuando no sepan leer o escribir, según los casos, se nombrará intérprete a alguien que pueda comunicarse con el interrogado.

112.Lugar. El tribunal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio que abarca su competencia. También podrá hacerlo fuera del ámbito de su competencia territorial, con conocimiento y aquiescencia del tribunal de igual clase de la circunscripción respectiva. La omisión de estas formalidades no afectará los actos que se llevaren a cabo, pero hará responsables a quienes los decidieron y practicaron.

Pasa recibir la declaración del imputado fuera de la sede del tribunal o del lugar en donde se lleva a cabo el debate, se procederá conforme al Art. 49.

113.Tiempo. Salvo que la ley contenga una disposición especial, los actos podrán cumplirse cualquier día y en cualquier hora. Durante las audiencias, el presidente del tribunal hará conocer de viva voz a todo los concurrentes el día, hora y lugar de su reanudación, en caso de aplazamiento o suspensión con plazo determinado.

114.Actas. Cuando uno o varios actos deban ser protocolizados, el funcionario que los practique encabezará el acta haciendo constar el lugar, el día, el mes y el año de su realización; la hora constará cuando la ley o las circunstancias lo requieran. Si en el acta constan varios actos sucesivos, llevados a cabo en lugares o fechas distintas, o cuando un único acto se haya suspendido, continuándose en otro lugar o en otra fecha, se hará constar en ellas los lugares y fechas de su continuación.

El acta será firmada por quien practica el acto y por todos los que intervinieron en él, previa lectura. Si alguien no supiera firmar, podrá hacerlo otra persona por él, a su ruego, o un testigo de actuación, convocado al efecto.

En el acta deberá constar el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para los actos particulares.

Salvo disposición específica, la omisión de estas formalidades sólo privará de efectos al acta, o tornará invalorable sus contenidos, cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos del mismo acto o de otros actos conexos, o no puedan ser reproducidas con posterioridad y siempre provoquen un agravio específico e insubsanable a la defensa del imputado o de las partes civiles.

Capítulo 2 – Plazos

115. Cómputo. Los plazos se computarán conforme a la ley común.

Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.

En los plazos determinados por días, se computará sólo los hábiles, salvo que la ley o la resolución judicial indiquen expresamente otra cosa, o que se refieran a medidas de coerción, caso en el cual se computará continuadamente.

Los plazos comunes comenzarán a correr a partir de la última notificación.

116. Vencimiento. Los plazos fijados para determinada actividad son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo que la ley permita su prórroga o subordine su vencimiento a determinada actividad o declaración de voluntad. Pero aquél a quien esté acordada la facultad respectiva podrá cumplir válidamente el acto durante las dos primeras horas de oficina del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.

Los plazos que sólo tienen como fin regular la tarea de los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento, serán observados rigurosamente por ellos; su inobservancia implicará mala conducta en el desempeño de sus funciones y la sanción disciplinaria procederá de oficio, previa audiencia del interesado.

117. Fijación judicial. El tribunal o el funcionario que deba practicar el acto fijará el plazo conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que debe cumplirse, cuando la ley no lo establezca o cuando, al contrario, subordine la extensión del plazo a su voluntad.

118. Renuncia o abreviación. El ministerio público, el imputado y los demás intervinientes podrán renunciar a los plazos establecidos en su favor o consentir su abreviación, por manifestación expresa.

Cuando el plazo sea común para varios intervinientes o para todos ellos, se necesitará el consentimiento de todos y del tribunal correspondiente, para abreviar o prescindir del plazo.

119.Reposición del plazo. Quien, sin su culpa, por defecto en la notificación, por fuerza mayor que no le sea imputable o por un acontecimiento fortuito insuperable, se haya visto impedido de observar un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor, podrá obtener la reposición íntegra del plazo, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley, a su pedido.

Se considerará que existe motivo para pedir la reposición del plazo, cuando faltare la instrucción prevista en el Art. 135.

120.La instancia. La instancia de reposición del plazo se presentará por escrito, en el tribunal ante el cual aquél hubiera debido observarse, inmediatamente después de desaparecido el impedimento o de conocido el acontecimiento que da nacimiento al plazo, y deberá contener:

1) Indicación concreta del motivo que imposibilitó l observación del plazo, su justificación y la mención de todos los elementos de prueba de los cuales se vale para comprobarlo;

2) Actividad omitida y la expresión de voluntad de llevarla a cabo.

121.Procedimiento. Previa instrucción sumaria, que podrá encargar a uno de sus miembros, el tribunal emitirá su decisión, que sólo será recurrible por reposición si rechaza la instancia.

En el caso del recurso de casación rige el Art. 345.

El instante deberá practicar el acto emitido, cuando dependa de su única expresión de voluntad, dentro del mismo plazo concedido para su ejecución, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la instancia. La omisión implicará desistimiento de la instancia.

La instancia no impedirá la ejecución de una resolución judicial, pero el tribunal que la decida podrá ordenar la suspensión de la ejecución, por decisión fundada.

Capítulo 3 – Comunicación

Sección 1ª – Entre autoridades

122.Forma. Cuando un acto lo deba ejecutar otra autoridad nacional, o local o cuando exista la necesidad de encomendar a otra autoridad nacional o local diligencias o de pedirle informaciones relacionadas con el procedimiento, se cumplirán, en primer lugar, las formas impuestas por los tratados o acuerdos vigentes y, si no existiere convención, se proporcionará:

1) el nombre del funcionario del ministerio público o juez que requiere la diligencia, el tribunal u órgano al cual pertenece y el domicilio de su sede;

2) la razón de ser de su competencia para el caso;

3) la diligencia solicitada, con todos los datos necesarios para cumplirla;

4) la cita de la ley por la cual se rige la diligencia y la de los preceptos correspondientes, según las reglas aplicables al procedimiento, para el caso de que deban o puedan ser cumplidas por la autoridad delegada;

5) el plazo dentro del cual debe cumplirse la diligencia cuando, por imperativo legal o por las particularidades del caso, sea necesario cumplirla en un período determinado o de manera urgente.

En caso de urgencia se utilizará el telegrama o la comunicación teletipográfica y, eventualmente, podrá adelantarse telefónicamente el contenido del requerimiento, para que la autoridad delegada comience a tramitar la diligencia, sin perjuicio de la remisión posterior del mandamiento escrito.

123.Autoridades judiciales. Cuando la delegación tenga por destinataria a otra autoridad judicial se encomendará al funcionario o tribunal de igual clase de la circunscripción u organización judicial respectiva, salvo que la diligencia pudiera ser cumplida por un destinatario específico, en cuyo caso, con el debido respeto, se dirigirá directamente al oficio correspondiente.

Cuando se tratare de actos o autorizaciones previstos por los Arts. 258 y 260, el ministerio público o la policía, en el caso de los Arts. 248 y 249, requerirá el mandamiento al juez de la instrucción, o si existe suma urgencia, directamente al juez requerido.

124.Deber de colaborar. Todas las autoridades y reparticiones públicas prestarán su colaboración al ministerio público, a los tribunales y a la policía y diligenciarán sin demora los requerimientos que reciban de ellos.

125.Tribunales extranjeros. Los requerimientos dirigidos a tribunales o autoridades extranjeras o los recibidos de ellos serán diligenciados por vía diplomática, en la forma establecida por los tratados y costumbres internacionales o, en su defecto, por las leyes del país.

No obstante, se podrá dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier tribunal o autoridad extranjeros, anticipando el requerimiento o la contestación formal.

126.Retardo o rechazo. Cuando el diligenciamiento de un requerimiento dirigido al ministerio público o a otro tribunal fuere demorado o rechazado, el tribunal o el funcionario del ministerio público requiriente

podrá dirigirse al Tribunal de Casación o al superior jerárquico del ministerio público, respectivamente, quien, si procediere, ordenará o gestionará la tramitación.

En caso de tratarse de una autoridad administrativa o legislativa, el mismo juez o funcionario requiriente, si procediere ordenará la diligencia al superior jerárquico en el servicio o del respectivo Poder, sin perjuicio de aplicar las sanciones que este Código autoriza y de comunicar la omisión a la autoridad disciplinaria correspondiente.

Sección 2ª – Notificaciones, citaciones y vistas

127.Notificación: resoluciones. Las resoluciones de los tribunales se harán conocer a quienes corresponda al día siguiente de dictadas, salvo que la ley o el tribunal dispusieren un plazo menor.

Cuando la ley no disponga otra cosa, las notificaciones serán practicadas como se prevé en adelante.

128.Notificador. Las notificaciones serán practicadas por quien disponga el reglamento o por quien designe el tribunal especialmente.

Cuando se deba practicar una notificación fuera del lugar asiento del tribunal, se procederá conforme a la sección primera de este Capítulo, según los casos.

129.Lugar. Las personas serán notificadas en su domicilio real y o en legal, cuando lo tuviere; quienes ya hayan comparecido en el procedimiento, en el domicilio especial constituido; el imputado que estuviere privado de su libertad, en el lugar de su detención. Todos podrán ser notificados en la Oficina del Tribunal, conforme al Art. 131 o cuando se tratare de notificaciones que se perfeccionan por la lectura de la resolución.

Cuando se ignore el domicilio de la persona a notificar será notificada en el lugar donde se halle o, en su defecto, en la forma establecida por el art. 133.

Los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento serán notificados en sus respectivas oficinas.

130.Defensores o mandatarios. Cuando los intervinientes tuvieran defensor o mandatario, a ellos se les notificará las resoluciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan la notificación al asistido o al mandante.

131.Notificación en la oficina. Cuando la notificación se lleve a cabo personalmente, en la oficina del tribunal o en la de un funcionario público, previa lectura de la resolución, se dejará constancia con indicación del lugar y la fecha; firmarán el notificado y el encargado de la diligencia.

A pedido del interesado se le entregará copia de la resolución.

132.Notificación en el domicilio. Cuando la notificación se efectúe en el domicilio, el funcionario encargado de practicarla llevará dos copias de la resolución, con indicación del tribunal que la dictó y la identificación del procedimiento en el cual recayó; entregará una al interesado, y al pie de la otra, que devolverá al tribunal, dejará constancia del acto con indicación del lugar, día y hora de la diligencia; y firmará juntamente con el interesado o indicará que él no quiso o no pudo firmar.

Cuando la persona a notificar no fuere encontrada en su domicilio, la copia será entregada a algún mayor de dieciocho años que resida allí, a sus empleados, dependientes o vecinos, prefiriéndose a los parientes del interesado, quienes tendrán la obligación de identificarse y de transmitir la copia al interesado cuando regrese. En este caso, el notificador dejará constancia de la identidad de la persona que recibe la copia, del motivo de la entrega y ambos firmarán la diligencia o se procederá conforme al párrafo anterior.

Cuando no se encuentre a alguien o nadie quiera franquear la entrada a su domicilio, la copia será fijada en la puerta de la casa o habitación donde se practique el acto, en presencia de un testigo que firmará la constancia correspondiente.

El notificador podrá solicitar por sí mismo el auxilio de la fuerza pública para identificar a una persona o proceder del modo señalado. La policía está obligada a brindar auxilio, considerándose falta grave su omisión.

133.Notificación por edictos. Cuando se ignore el lugar donde se halla la persona que deba ser notificada, el tribunal, previo intentar las medidas a su alcance para averiguarlo, ordenará la publicación de edictos por tres días, en un diario de circulación, sin perjuicio de proseguir las investigaciones sobre la residencia.

Cuando fuere necesario se podrá difundir los edictos por una radioemisora o por la televisión. En todos los casos quedará constancia de la publicación.

El edicto contendrá:

1) el nombre de la persona cuyo domicilio o residencia se ignora;

2) el tribunal, su sede y una sucinta identificación del procedimiento en el cual se ordena;

3) la orden de apersonarse al tribunal para ser notificado y denunciar su domicilio.

Los periódicos, las radioemisoras y las emisoras de televisión dispondrán de un espacio gratuito para estos fines a razón de un cuarto de página por día, para las publicaciones escritas, quince minutos por día para las radioemisoras, y tres minutos por día para las emisoras de televisión.

134.Notificación por lectura. Las resoluciones dictadas durante las audiencias y aquellas que lo sean inmediatamente después de los

debates, serán dadas a conocer por la lectura de la resolución, en la forma prevista para los casos particulares.

Los interesados podrán pedir copia de estas últimas resoluciones, que se expedirán sin demora.

135.Notificación del imputado. Cuando la notificación de comienzo al cómputo de un plazo para recurrir una resolución el imputado será instruido, verbalmente o por escrito, según la forma de su notificación, acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos.

De la instrucción se dejará constancia.

136.Notificación a distancia. Cuando se deba practicar una notificación fuera de la localidad en la cual está constituido el tribunal, se podrá reemplazar el mandamiento por telegrama, carta con aviso de retorno, carta certificada, o por cualquier otro medio que asegure la recepción del mensaje.

En el telegrama o carta constará, además de los datos del tribunal y el procedimiento, el lugar, la fecha de la resolución, su parte resolutiva y la instrucción correspondiente.

Se dejará constancia de la utilización de este modo de notificar, con copia de la pieza postal y, en su caso, del aviso de recepción.

137.Caso de urgencia. En caso de suma urgencia o cuando la ley lo prevé, se podrá emplear la red de teléfonos, dejando constancia sucinta de la conversación y de la persona con quien ella se mantuvo. Se trasmitirán los datos imprescindibles según el artículo anterior.

138.Citación. Cuando sea necesario la presencia de alguna persona para llevar a cabo un acto, el tribunal o el ministerio público la citará, análogamente a lo previsto para las notificaciones.

Los imputados, testigos, peritos, traductores, intérpretes y depositarios podrán ser citados por intermedio del personal policial, en su domicilio o en el lugar en donde trabajan.

Se les hará saber a los citados el tribunal o el funcionario ante el cual deban comparecer, el motivo de la citación, la identificación del procedimiento y la fecha y hora en que deben comparecer. Al mismo tiempo, se les advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedarán obligados por las costas que causaren, las sanciones penales y disciplinarias que pueden soportar y que, en caso de impedimento, deberán comunicarlo por cualquier vía a quien los cita, justificando inmediatamente el motivo.

La incomparecencia injustificada provocará de inmediato la ejecución del apercibimiento. Testigos, peritos, traductores e intérpretes serán corregidos con una multa equivalente de cinco a quince días de su sueldo y, quienes no denuncien la relación de dependencia, de cinco a quince días de

sueldo de un juez del Tribunal de Casación, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.

En casos excepcionales, cuando exista el peligro fundado de que la persona a citar se oculte o fugue, o se desconozca su domicilio o intente entorpecer, por cualquier medio, la averiguación de la verdad, se podrá proceder a su detención por el tiempo indispensable para llevar a cabo el acto, que nunca excederá de doce horas.

139.Vistas y traslados. Las vistas y traslados se correrán cuando la ley lo disponga, notificando la resolución. A pedido del interesado, se entregarán las actuaciones respectivas o copia de ellas, si no fuera posible entregar los originales bajo recibo.

Toda vista que no tenga plazo fijado se considerará otorgada por tres días; el plazo es prorrogable por el tribunal, a pedido del interesado y conforme a las circunstancias del caso.

Vencido el término de la vista sin devolución de las actuaciones, se ordenará su secuestro inmediato, autorizando el allanamiento de domicilio con auxilio de la fuerza pública.

La falta injustificada de devolución de las actuaciones será corregida con la mitad de la multa prevista en el art. 65, en la forma y por el tribunal allí indicados.

Capítulo 4 – Actos y resoluciones jurisdiccionales

140.Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene.

141.Protocolización. Cuando el acto que se practica deba constar en acta, el tribunal será asistido por un secretario.

Las decisiones jurisdiccionales fundadas serán protocolizadas en legajos, agregándose copia autorizada a las actuaciones. En la secretaría general del tribunal se confeccionará legajos distintos para las sentencias y autos, según la forma que regule la reglamentación.

Quien demuestre un interés legítimo podrá pedir copia autorizada de esas decisiones.

142.Resoluciones. Salvo disposición especial, serán mencionadas sentencias las decisiones de los tribunales dictadas en el procedimiento intermedio, en el juicio o después de la interposición de un recurso, que pongan fin al proceso de conocimiento de modo definitivo y no permitan una persecución penal posterior, o las que decidan definitivamente sobre la reparación del daño.

Serán mencionadas autos las decisiones de los tribunales que resuelvan un incidente o artículo del procedimiento y todas aquellas para las cuales este Código exija que sean fundadas.

A las decisiones dictadas sobre la pena, durante el procedimiento de ejecución, se las mencionará autos.

Todas estas resoluciones serán fundadas.

143.Firma. Sin perjuicio de disposiciones especiales, todas las resoluciones serán firmadas por el juez o por los miembros del tribunal que actuare.

La falta de alguna firma, salvo lo dispuesto por el art. 323, inc. 6, provocará la invalidez del acto.

144.Plazo. Cuando no se haya previsto otra cosa, los tribunales dictarán las disposiciones de mero trámite inmediatamente y de oficio, decidirán inmediatamente los requerimientos del ministerio público o de la policía conforme a los arts. 248 y 258 a 260 y evacuarán del mismo modo las citas del imputado.

Los autos y las sentencias que sucedan a un debate oral, serán deliberados, votados y dictados inmediatamente después de cerrada la audiencia.

Después de los procedimientos escritos, las resoluciones serán dictadas dentro de los tres días siguientes, cuando la ley no disponga otro plazo.

La inobservancia de los plazos aquí previstos no invalidará la resolución dictada con posterioridad a ellos, salvo el caso del art. 343, pero otorgará a los intervinientes la facultad prevista en el art. 145 y hará responsables a los jueces que injustificadamente dejen de observarlos.

145.Queja. Vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el Tribunal de Casación, el cual por intermedio de uno de sus miembros, previo informe del denunciado, resolverá lo que corresponda y, en su caso, emplazará al juez o tribunal para que dicte la resolución, sin perjuicio de ordenar el procedimiento disciplinario, cuando sea necesario.

Si la demora fuera atribuible al tribunal superior del Estado, o a uno o varios miembros de ese tribunal, el interesado podrá ejercer las facultades que le otorga la ley fundamental.

146.Rectificación. Dentro de los tres días siguientes de dictadas las resoluciones, el tribunal podrá rectificar, de oficio, cualquier error u omisión material de aquéllas, siempre que no importe una modificación esencial.

Los intervinientes podrán instar su aclaración, suspendiéndose en este caso el plazo de los recursos.

Capítulo 5 – Prueba

Sección 1ª– Disposiciones generales

147.Objetividad, investigación judicial autónoma. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el ministerio público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de los arts. 232, 250 y 272, párr. I.

Durante el juicio, los tribunales sólo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por los intervinientes en las oportunidades y bajo las condiciones que fijan los arts. 285, 289, 316, 317 y 320.

148.Libertad de la prueba. Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley, relativas al estado civil de las personas.

Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando ellos resulten manifiestamente superabundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados.

Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todos los intervinientes, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede, de oficio, provocar el acuerdo.

Además de los medios de prueba previstos en este capítulo, se podrá utilizar otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este Código o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos, en lo posible.

149.Valoración. Todo elemento de prueba, para ser valorado, debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código.

Los elementos de prueba así incorporados se valorarán por su crítica racional. Rige el art. 3, último párrafo.

Sección 2ª – Comprobación inmediata y medios auxiliares

150.Registro. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del delito, o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro.

Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere, de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. De ella se labrará acta que describirá detalladamente esos elementos y, cuando fuere posible, se recogerá o conservará los elementos probatorios útiles.

Si el hecho no dejó rastros, no produjo efectos materiales, si desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento; análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar.

Se invitará a presenciar la inspección a quien habite o tenga el lugar donde se efectúa, o, cuando estuviera ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primer. Si la persona que presencia el acto es el imputado y no está presente su defensor, se invitará a otra persona a presenciar el acto.

El acta será firmada por todos los concurrentes; si alguien no lo hiciera, se expondrá la razón.

151.Facultades coercitivas. Cuando fuere necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra.

Quienes se opusieren podrán ser compelidos por la fuerza pública e incurrirán en la responsabilidad prevista en el art. 138. Párr. IV. La restricción de la libertad no podrá durar más de doce horas, sin recabar la orden del juez de instrucción.

152.Horario. De ordinario, los registros en lugares cerrados o cercados, aunque fueren de acceso público, sólo podrán ser practicados desde que sale hasta que se pone el sol.

Sin embargo, se podrá practicar registros nocturnos:

1) en los lugares de acceso público, abiertos durante la noche y en un caso grave que no admita demora en la ejecución, sin gran peligro; constará en el acta el motivo;

2) en los casos en que se puede allanar sin orden de un juez; constará en el acta el motivo;

3) en caso de que el interesado o su representante preste su consentimiento expreso; con absoluta libertad, que deberá constar en el acta; rige, analógicamente, el último párrafo del art. 156;

4) por orden escrita expresa del juez.

153.Allanamiento. Cuando el registro se deba practicar en una morada o casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez de la instrucción, de aquel ante quien penda el procedimiento o del presidente del tribunal, si se tratare de un tribunal colegiado.

Se exceptúa de lo dispuesto los casos siguientes:

1) si, por incendio, inundación u otro estrago semejante, se hallare amenazada la vida o la integridad física de quienes habiten el lugar;

2) cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito;

3) cuando se introduzca en un lugar un imputado de un hecho punible grave, a quien se persigue para su aprehensión;

4) cuando voces provenientes de un lugar cerrado anunciaren que allí se está cometiendo un delito o desde él se pidiere socorro.

La resolución por la cual el juez o tribunal ordena la entrada y registro de un domicilio particular será siempre fundada, explicando los motivos que indican la necesidad del registro; de la misma manera se procederá cuando se ordene un registro nocturno.

Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán detalladamente en el acta.

154.Contenido de la orden. En la orden se deberá consignar:

1) la autoridad judicial que ordena el allanamiento y la sucinta identificación del procedimiento en el cual se le ordena; la señalación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados;

2) la autoridad que habrá de practicar el registro y en cuyo favor se extiende la orden;

3) el motivo del allanamiento y, en su caso, del ingreso nocturno y las diligencias a practicar;

4) la fecha y la firma.

La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos datos.

155.Procedimiento. La orden de allanamiento será notificada inmediatamente a quien habita el lugar o al encargado, entregándole una copia, procediéndose, en adelante, conforme al art. 150.

Si quien habita la cosa se resistiere al ingreso o nadie respondiere a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser ello posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar, hasta lograrlo. Este procedimiento constará en el acta.

156.Lugares públicos. Tratándose de oficinas administrativas o edificios públicos, de templos o lugares religiosos, de establecimientos militares o similares, o de lugares de reunión o de recreo, abiertos al público y que no estén destinados a habitación particular, podrá prescindirse de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieren los locales. Si ello fuere perjudicial para la investigación, se requerirá el consentimiento al superior jerárquico en el servicio o al titular del derecho de exclusión. De no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de allanamiento.

En el acta se consignarán los requisitos previstos en el art. 154, incs. 2, 3 y 4, y el consentimiento otorgado. Quien prestó el consentimiento será invitado a presenciar el registro.

Para la entrada y registro en la oficina de una de las autoridades de los poderes del Estado, establecidas en la constitución, se necesitará la autorización del superior jerárquico en el servicio o del presidente del cuerpo, cuando se trate de órganos colegiados, respectivamente.

Si, durante el procedimiento, quien consintió el ingreso niega haber concedido la autorización o expresa haber consentido por coacción, la prueba de la libertad del consentimiento corresponderá al acusador.

157.Inspección corporal o mental. Cuando con fines de investigación del hecho punible o de identificación fuere necesaria la inspección corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su requisa u observación, separadamente y cuidando que se respete su pudor. La requisita será practicada por una persona del mismo sexo, salvo que no se encuentre alguna en el lugar y la demora importe peligro inminente de pérdida de un elemento probatorio.

Rigen los arts. 35 y 38 y, en cuanto al procedimiento, el art. 150, párra. IV y V, analógicamente, prefiriendo a una persona de confianza del examinado.

Se procederá de la misma manera con otra persona que no sea el imputado, cuando fuere de absoluta necesidad para averiguar la verdad o aprehender al imputado.

158.Identificación de cadáveres y autopsia. Cuando la investigación versare sobre una muerte sospechosa de haber sido provocada por un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del occiso o después de su exhumación, se hará la descripción correspondiente y se lo identificará

por medio de testigos, procediéndose a su identificación dactiloscópica o, de no ser posible, por otro medio aconsejable.

En estos casos se ordenará la autopsia, salvo que por la inspección exterior resultare evidente la causa que produjo la muerte.

159.Operaciones técnicas. Para mayor eficacia de los registros, requisas e inspecciones, se podrá ordenar las operaciones técnicas o científicas pertinentes y los reconocimientos y reconstrucciones que correspondieren.

Si el imputado decide participar en una reconstrucción, rigen las reglas previstas para su declaración; para testigos, peritos e intérpretes, rigen las previstas en las secciones 3ª. Y 4ª. De este capítulo.

160.Entrega de cosas y documentos; secuestro. Las cosas y documentos relacionados con el delito o los que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a confiscación serán tomados en depósito o asegurados de otra manera y conservados del mejor modo posible.

Quien tuviera en su poder cosas o documentos de los señalados estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando lo sea requerido, rigiendo los medios de coacción permitidos para el testigo que rehúsa declarar. Pero la orden de presentación no podrá dirigirse a las personas que pueden o deban abstenerse de declarar como testigos.

Si las cosas que se hallan en poder de una persona no son entregadas voluntariamente, se dispondrá su secuestro.

161.Cosas no sometidas a secuestro. No estarán sujetas al secuestro:

1) las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto particular;

2) las notas que hubieran tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado o sobre cualquier circunstancia, a las cuales se extiende el derecho de abstenerse de declarar;

3) otras cosas, inclusive los resultados de exámenes o diagnósticos relativos al arte de curar, a los cuales se extiende el derecho de abstenerse de declarar.

La limitación sólo regirá cuando las comunicaciones o cosas estén en poder de aquellas personas autorizadas a abstenerse de declarar o, en el caso de abogados y profesionales del arte de curar, archivadas o en poder del estudio jurídico o del establecimiento hospitalario, y no regirá si el autorizado a abstenerse de declarar testimonialmente es sospechoso de haber participado en el hecho punible que se considera o en su encubrimiento, o cuando se tratare de cosas sometidas a confiscación, porque proceden de un hecho punible o sirven, en general, para la comisión de un hecho punible, a ese único efecto.

162.Orden de secuestro. La orden de secuestro será expedida por el juez de la instrucción, por el juez ante quien penda el procedimiento o por el presidente del tribunal, si se tratare de un tribunal colegiado. La decisión del tribunal que autorice su expedición será fundada.

En caso de peligro por la demora, también podrán ordenar el secuestro el ministerio público y la policía, pero ellos deberán solicitar la autorización judicial inmediatamente, a más tardar dentro de tres días, consignando las cosas o documentos ante el tribunal competente. Las cosas o documentos serán devueltos, si el tribunal no autoriza su secuestro.

163.Procedimiento. Serán de aplicación las reglas previstas para el registro, analógicamente.

Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del tribunal, o se ordenará su depósito. Cuando se tratare de automotores u otros bienes de significativo valor se los entregará en depósito a quienes aparezcan como sus poseedores legítimos.

Si transcurren seis meses sin reclamo y no se pudo averiguar a quien corresponden, las cosas podrán ser entregadas en depósito a un establecimiento asistencial o a una repartición pública que las necesite, quienes sólo podrán utilizarlas para cumplir el servicio que brindan al público.

Se podrá disponer la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o así convenga a la investigación.

Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del tribunal y la firma del juez. Los documentos serán sellados y firmados en cada una de sus hojas.

Si fuera necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad. Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y todo se hará constar.

164.Devolución. Las cosas y documentos secuestrados, que no están sometidos a confiscación, restitución o embargo serán devueltos, tan pronto como no sean necesarios, al tenedor legítimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron. La devolución podrá ordenarse provisionalmente, como depósito, e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos.

Si existiere controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se instruirá un incidente separado, aplicándose las reglas respectivas del procedimiento civil.

165.Secuestro de correspondencia. Cuando sea de utilidad para la averiguación, se podrá ordenar la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal, telegráfico o teletipográfica y los envíos dirigidos al

imputado o remitidos por él, aunque sea bajo un nombre supuesto, o de los que se sospecha que proceden del imputado o son destinados a él.

La orden será expedida por el juez de la instrucción, por el juez ante quien penda el procedimiento o por el presidente del tribunal será fundada. El ministerio público y la policía podrán expedir la orden en caso de peligro por la demora, pero deberá proceder según lo indica el art. 162 y la correspondencia o envío no les será entregada a ellos, sino al tribunal competente. Si dentro de tres días la orden no es ratificada por el tribunal, cesará la interceptación y el secuestro y las piezas serán libradas a quien corresponda.

Regirán las limitaciones del art. 161.

166.Apertura y examen de la correspondencia. Recibida la correspondencia o los envíos interceptados, el tribunal competente los abrirá, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá por sí el contenido de la correspondencia. Si tuvieren relación con el procedimiento, ordenará el secuestro. Caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario y, de no ser posible, a su representante o pariente próximo, bajo constancia.

167.Telecomunicaciones. Las reglas anteriores se aplicarán análogamente al control y grabación de las comunicaciones telefónicas o similares. Su resultado y grabación sólo podrá ser entregado al tribunal que la ordenó, quien procederá según lo indicado en el artículo anterior, en lo pertinente; podrá ordenar la versión escrita de la grabación o de aquellas partes que considere útiles y ordenará la destrucción de toda la grabación o de las partes que no tengan relación con el procedimiento, previa aquiescencia del ministerio público y del imputado y su defensor.

La persona a quien se le encomiende interceptar la comunicación y grabarla o aquella que la escriba tendrá la obligación de guardar secreto sobre su contenido, salvo que, citado como testigo en el mismo procedimiento, se le requiera responder sobre ella.

168.Clausura de locales. Cuando para la averiguación de un hecho punible grave fuere indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas del secuestro.

Sección 3ª. – Testimonio

169.Deber de concurrir y prestar declaración. Todo habitante del país o persona que se halle en el tendrá el deber de concurrir a una situación practicada con el fin de que preste declaración testimonial, el de

declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación y el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos contenidos sobre el contenido de su declaración.

Se observaran, no obstante, los tratados suscriptos por el Estado, que establezcan excepciones a esta regla.

170.Excepción a la obligación de comparecer. Las autoridades de los poderes del Estado establecidas en la Constitución, los embajadores y cónsules extranjeros, y los oficiales superiores de las fuerzas armadas en actividad y en tiempo de guerra, podrán solicitar que la declaración se lleve a cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio, para lo cual propondrán oportunamente, la fecha y el lugar correspondiente.

171.Facultad de abstenerse. Están facultados para abstenerse de declarar el cónyuge del imputado, sus ascendientes o descendientes, sus parientes consanguíneos o por adopción hasta el tercer grado y por afinidad hasta el segundo grado, o quien conviva con el imputado, ligado a él por lazos especiales de afecto.

Si se tratare de menores de catorce años o de personas que, por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez, no comprendieran el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de un curador designado al efecto. Si el representante interviniera en el procedimiento, se designara a un curador, que resguarde los intereses del incapaz.

Las personas mencionadas deben ser informadas sobre su facultad de abstenerse de declarar antes del comienzo de cada declaración. Ellas pueden ejercer la facultad aún durante su declaración, incluso para preguntas particulares. En caso del párrafo anterior, la declaración se llevara a cabo con la presencia del llamado a decidir.

172.Testimonio inadmisible. No podrán ser admitidas como testigos las personas que, respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar un secreto particular u oficial.

En caso de ser citadas, deberán comparecer, explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y abstenerse de declarar.

173.Criterio Judicial. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenara su declaración. La resolución será fundada.

Durante el procedimiento preparatorio decidirá el ministerio público, salvo en el caso del Art. 258.

174.Citación. La citación de los testigos se efectuará de conformidad con el Art. 170, se instruirá al destinatario acerca de las facultades allí arregladas.

En caso de urgencias, podrán ser citados verbalmente o por teléfono.

El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

175.Residentes fuera del lugar. Si el testigo no reside o no se halla en el lugar debe prestar declaración, o en sus proximidades, la citación ira acompañada de una liquidación de la indemnización que se le pagara, a su pedido, fijada prudencialmente, o de los medios que se ponen a su disposición para el traslado y habitación.

Si carece de medios económicos para el traslado, se le adelantaran los gastos necesarios, a su pedido.

Cuando, durante todo el procedimiento anterior al debate, no fuere imprescindible su comparecencia personal, se podrá disponer su declaración por exhorto o mandamiento a la autoridad judicial de su residencia.

176.Compulsión. Si el testigo no compareciere, se procederá conforme al Art. 138, último párrafo, sin perjuicio de su enjuiciamiento, cuando corresponda.

Si después de comparecer, se negare a declarar, se dispondrá su arresto hasta por doce horas, al término de las cuales si persistiere, se promoverá su persecución penal, si antes no hubiere sido iniciada.

177.Residentes en el extranjero. Si el testigo se hallare en el extranjero, se procederá conforme a las reglas internacionales o nacionales para el auxilio judicial, Sin embargo, se podrá requerir la autorización del Estado en el cual se halle, para que el testigo sea interrogado por el representante diplomático o por el mismo tribunal, constituido en el país de residencia.

178.Declaración. Se comenzara instruyendo al testigo acerca de sus obligaciones y de las penas que amenazan su incumplimiento.

Enseguida, el testigo será interrogado sobre sus datos personales y las demás circunstancias útiles para valorar su testimonio. Si el testigo u otra persona estuviere en peligro, se lo podrá autorizar para que no indique públicamente su domicilio, tomándose nota reservada de él.

Continuará la declaración sobre el hecho, respetándose, en lo posible, las reglas de los art. 313 y 314.

179.Ratificación Solemne. Por último el tribunal instará al testigo para que convalide su testimonio, mediante la siguiente formula:

" ¿Ratifica Ud. ante su conciencia y ante el pueblo de este país, con conocimiento de su responsabilidad, que ha dicho la verdad y no ha ocultado nada?".

El testigo responderá:

"¡Sí; lo ratifico ante mi conciencia y ante el pueblo de este país!, conociendo mi responsabilidad!"

Si fuere creyente el testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas.

Durante el procedimiento preparatorio no se requerirá ninguna ratificación solemne. Sin embargo el Ministerio Público podrá requerir al juez de la instrucción que proceda según los artículos anteriores, en los casos del Art. 258 y cuando lo exijan las circunstancias para la obtención de una declaración verídica.

No se requerirá tampoco la ratificación solemne a los inimputables por minoridad, a las personas que por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, o por inmadurez, no puedan comprender su significado, a los condenados por el mismo hecho y a los sospechosos de haber participado en él o de haberlo encubierto.

Sección 4ª. – Peritación

180.Perito. Serán ofrecidos o designados como peritos quienes, según la reglamentación estatal correspondiente, acrediten idoneidad en la materia a que pertenece el tema sobre el cual han de expedirse. Si la ciencia, arte o técnica no está reglamentada o si, por obstáculo insuperable, no se pudiera contar, en el lugar de procedimiento, con un perito habilitado, se designara una persona de idoneidad manifiesta no rigen las reglas de prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido provocado por la actividad judicial, aunque utilice para informar las aptitudes que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, rigen las reglas de la prueba testimonial.

181.Incapacidad. No serán designados como peritos:

1) Quienes por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, o por inmadurez , no comprendan el significado del acto;

2) Quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos;

3) Quienes hayan sido testigos del hecho objeto del procedimiento;

4) Los inhabilitados, hasta un año después del agotamiento de la medida.

182.Orden de Peritación. El tribunal competente, y, durante el procedimiento preparatorio, el ministerio público o el juez de la instrucción en el caso del Art. 258, seleccionará los peritos y determinara el número de los que deban intervenir, según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias de los intervinientes.

Al mismo tiempo, fijará con precisión los temas de la peritación, de oficio a petición del interesado, según corresponda.

Deberá acordar con los peritos designados el plazo dentro el cual presentara los dictámenes.

El ministerio público podrá ordenar peritaciones durante el procedimiento preparatorio, con las limitaciones del Art. 258 y 300.

183.Notificación. Antes de comenzar las operaciones periciales, el tribunal notificara la orden de practicar una peritación en la forma prevista por los Art. 258 y 259.

184.Facultades de los Intervinientes. Dentro el plazo que el tribunal fije, cualquiera de los intervinientes puede proponer otro perito, en reemplazo del ya designado o para que dictamine conjuntamente con él, cuando, según las circunstancias particulares del caso, resultare conveniente su participación por su experiencia e idoneidad. La petición será fundada y el tribunal decidirá, proponiendo, en su caso, de conformidad con las reglas de los Art. 180, 182.

Los peritos podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos por los jueces. Previa averiguación sumaria sobre el motivo invocado, el tribunal resolverá lo que corresponda; podrá también suspender las operaciones periciales y, si admite la recusación, ordenar el remplazo del perito, de oficio o a instancia de quien lo propuso. Si interviniere un único perito elegido por el tribunal y él es recusado, nombrara de oficio a un perito acompañante, cuando fuere imposible suspender las operaciones periciales.

Cualquiera de los intervinientes, fundadamente, puede proponer temas para la pericia y objetar los ya admitidos o los propuestos por otros intervinientes. El tribunal resolverá conforme el Art. 182, párr. II.

185.Citación y aceptación del cargo. Los peritos serán citados en la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer y de desempeñar el cargo para el cual fueron designados. Si no fueren idóneos, estuvieren abarcados por algunas de las incapacidades anteriores o por un motivo, que habilite su recusación, o tuviere un impedimento grave, lo manifestaran al comparecer, acompañando los elementos de prueba necesarios para justificar su situación.

Decidirá el tribunal competente y, durante el procedimiento preparatorio, el juez de la instrucción.

Rige, análogamente, la disposición del Art. 176.

186.Ejecución. El juez o el presidente del tribunal dirigirá la pericia y resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales.

Los peritos practicarán unidos el examen, siempre que sean posibles; los intervinientes y sus consultores técnicos podrán asistir a él y pedir

las aclaraciones correspondientes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación.

Si algún perito no concurre a realizar las operaciones periciales, se comporta negligentemente, no cumple con el plazo otorgado o, por cualquier causa grave, desempeña mal su función, el tribunal ordenará la sustitución de oficio con participación de quien se lo propuso, según el caso.

187.Dictamen. El dictamen será fundado y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de los intervinientes o sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen al respecto de cada tema pericial, de manera clara y precisa. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos.

El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, u oralmente en las audiencias, según lo disponga el tribunal.

Al finalizar el dictamen, lo ratificaran con la formula prevista en el Art. 179.

188.Nuevo dictamen; ampliación. Cuando estimare insuficiente el dictamen, el tribunal o ministerio público podrá ordenar la ampliación o renovación de la peritación, por los mismos peritos o por otros distintos.

189.Auxilio Judicial. Se podrá ordenar la presentación o secuestro de cosas y documentos y la comparecencia de personas, si resultare necesario para llevar a cabo las operaciones periciales. Se podrá requerir al imputado y a otras personas que confeccionen un cuerpo de escritura, graven su voz o lleven a cabo operaciones semejantes.

Rigen, análogamente, los Art. 35, 38 y 157, pero cuando la operación sólo pudiera ser ejecutada voluntariamente por la persona requerida y ella rehusare colaborar, se dejara constancia de su negativa y, de oficio, se llevará a cabo las medidas necesarias tendentes a suplir esa falta de colaboración.

190.Traductores e intérpretes. Si fuere necesaria una traducción o una interpretación, el tribunal o el ministerio público, durante la investigación preliminar, seleccionara y determinara el número de los que han de llevar a cabo la operación. Los otros intervinientes solo estarán facultados para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore y para formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, rigen, análogamente, las disposiciones de esta sección.

Sección 5ª. – Otros medios de prueba

191.Documentos y elementos de convicción. Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándolos a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente.

Los documentos, cosas o elementos de convicción que, según la ley, deben quedar secretos o que se relacionan directamente con hechos de la misma naturaleza, serán examinados privadamente por el tribunal competente o por el juez de la instrucción, durante el procedimiento preparatorio; si fueren útiles para la averiguación de la verdad, los incorporaran al procedimiento, resguardando la reserva absoluta sobre ellos. Durante el procedimiento preparatorio, el juez de instrucción autorizará expresamente su exhibición y la presencia en el acto de alguno de los intervinientes, en la medida imprescindible para garantizar el derecho de defensa. Durante el debate, rige el Art. 293. Quienes tomaren conocimiento de esos elementos tendrán el deber de guardar secreto sobre ellos.

192.Informes. Los tribunales y el ministerio público podrán requerir informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados, llevados conforme a la ley. El incumplimiento de esos requerimiento, el retardo en su producción, la falsedad del informe o el ocultamiento de datos serán corregidos conforme al Art. 138, párr. IV.

Rige, análogamente, el Art. 160, párr. II.

Los informes se solicitarán verbalmente o por escrito, indicando el procedimiento en el cual se requieren, el nombre del imputado, el lugar donde debe ser entregado el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias previstas en este artículo para el incumplimiento del deber de informar.

193.Reconocimiento de personas. Cuando fuere necesario individualizar al imputado, se ordenara su reconocimiento, de la manera siguiente:

1) Quien lleva a cabo el reconocimiento describirá a la persona aludida y dirá si después del hecho la ha sido nuevamente , en qué lugar; por qué motivo y con qué objeto;

2) Se pondrá a la persona que se somete a reconocimiento junto con otras de aspecto exterior semejante;

3) Se preguntara a quien lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas presentes se halla la que designó en su declaración o imputación y, en caso afirmativo, se le invitará para que la ubique clara y precisamente;

4) Por último, quien lleva acabo el reconocimiento expresara las diferencias y semejanzas que observe entre el estado de la persona señalada y el que tenía a la época a que elude su declaración o imputación anterior.

La observación de la rueda de personas podrá ser practicada desde un lugar oculto, cuando así se considere conveniente.

En el acta en que conste el reconocimiento se identificará con nombre y domicilio a todos los integrantes de la rueda. Cuando fueren varios los que hubiesen de reconocer, el acto se deberá practica separadamente, cuidando de que ellos no se comuniquen entre sí. Cuando fueren varios los que hubiesen de ser reconocidos por una misma persona, podrán integrar una sola rueda, junto a otras personas, si así no se perjudica la averiguación.

Rigen, respectivamente, las reglas del testimonio y las de declaración del imputado. En lo posible, se tomaran las previsiones para que el imputado no se desfigure. El reconocimiento procede aún sin consentimiento del imputado.

Cuando el imputado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía u otros registros, observando las mismas reglas, análogamente.

Durante el procedimiento preparatorio, deberá presenciar el acto el defensor del imputado o un juez, con lo cual el acto equivaldrá a aquellos realizados según el Art. 258 y podrá ser incorporado al debate por su lectura.

Si fuera necesario individualizar a otra persona que no sea el imputado, se procederá en lo posible, según las reglas anteriores.

194.Reconocimiento de cosas. Las cosas que deban ser reconocidas serán exhibidas en la misma forma que los documentos. Si fuere conveniente para la averiguación de la verdad, el reconocimiento se practicara análogamente a lo dispuesto en el artículo anterior.

195.Careo. Cuando existan discrepancias entre dos o más declaraciones se podrá confrontar a las personas que la emitieron, a quienes se les llamara la atención sobre las contradicciones advertidas, instándolas al dialogo y a la reconvención, par a superar las diferencias y averiguar la verdad.

El careo podrá practicarse entre dos o más personas.

Rigen respectivamente, las reglas del testimonio, de la peritación y de la declaración del imputado.

Capítulo 6 – Medidas de coerción

196.Finalidad y alcances. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la ley fundamental y por los tratados celebrados por el estado, solo podrán ser restringidos cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.

Rige el Art. 3 para la aplicación e interpretación de las reglas que autorizan medidas restrictivas de esos derechos. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundada, según lo reglamenta este código, y solo duraran mientras subsista la necesidad de su aplicación.

Sección 1ª. – Coerción personal del imputado

197.Presentación espontánea. Quien considere que puede haber sido imputado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el ministerio público, pidiendo ser escuchado y que se mantenga su plena libertad.

198.Citación. Cuando fuere necesaria la presencia del imputado se dispondrá su citación o detención, conforme al Art. 138.

199.Arresto. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho, no fuere posible individualizar al autor o a los partícipes y a los testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, se podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre si antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas del caso, y, si fuere necesario, también ordenar el arresto de todos ellos.

Rige el Art. 138, párr. V.

200.Aprehensión. La policía debe aprehender a quien sorprenda en flagrante o persiga inmediatamente después de la comisión de un hecho punible, a los fines del Art.232. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores; debe entregarse inmediatamente al aprehendido y las cosas tomadas al ministerio público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima.

Cuando el ministerio público, o la policía en los casos del Art. 248, estimare que una persona debe ser sometida a prisión preventiva, procederá según el Art. 47, párr. II. El ministerio público podrá también ordenar la aprehensión del imputado cuando estimare que concurren los presupuestos del Art. 202. Y que resultare necesario su encarcelamiento. Podrá asimismo ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad, o prescindir de ella, caso en el cual liberará al imputado aprehendido y procederá según el Art. 47, en lo pertinente.

201.Otros casos de aprehensión. El deber y la facultad previstos en el artículo anterior se extenderán a la aprehensión de aquel cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugué del establecimiento donde cumple su condena o prisión preventiva.

En estos casos el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad que ordenó su detención de la encargada de su custodia.

202.Prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión, después de oído el imputado, cuando medien los siguientes requisitos:

1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o participe en el (procesamiento);

2) La existencia de una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga) u obstaculizara la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos de acción privada, en aquellos que no tengan previsto pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera una pena privativa de libertad que deba ejecutarse. En estos casos, solo se aplicaran las medidas previstas en los incs. 3 al 7 del Art. 209, salvo lo dispuesto en el Art. 379.

El auto que autoriza la prisión preventiva deberá fundar expresamente cada uno de los presupuestos que la motivan.

203.Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

1) Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;

2) La pena que se espera como resultado del procedimiento;

3) La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, voluntariamente, frente a él;

4) El comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.

204.Peligro de Obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado;

1) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificara elementos de prueba ;

2) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;

3) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

205.Competencia, forma y contenido de la decisión. El auto será dictado por el juez de la instrucción, durante el procedimiento preparatorio, o por el tribunal competente, y deberá contener:

1) Los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo;

2) Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen;

3) Los fundamentos;

4) El dispositivo, con cita de las disposiciones penales aplicables.

206.Orden de detención. En los casos en que el imputado se oculte o se halle en la situación prevista en el Art. 39, el juez de la instrucción aún sin la declaración previa del imputado, podrá ordenar su detención, siempre que existan los presupuestos del Art. 202 y conforme al Art. 205; cuando el imputado compareciere, lo oirá y ordenará su prisión preventiva, si correspondiere.

Si ya hubiese sido dictada la prisión preventiva, bastara remitirse a ella y expresar el motivo que provoca la necesidad actual del encarcelamiento.

207.Comunicación. Cuando el imputado sea aprehendido, será informado acerca del hecho que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención o a cuya disposición, será consignado.

La misma comunicación se practicara también a un pariente o a una persona de su confianza.

208.Cesación del encarcelamiento. La privación de libertad finalizará:

1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida;

2) Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de reglas penales relativas a la remisión de la pena o la libertad anticipada;

3) Cuando su duración exceda de un año; pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria, podrá durar tres meses más.

El tribunal de casación, a pedido del tribunal o del ministerio público, podrá autorizar que en el plazo de un año se prolongue hasta otro año más, fijando el tiempo concreto de las prórrogas. En ese caso podrá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite de procedimiento y quedará a su cargo el examen de la prisión.

Vencido el plazo del inc. 3, no se podrá ordenar una medida de coerción salvo la citación, pero, para asegurar la realización del debate, o la realización de un acto particular, para comprobar la sospecha de fuga o para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad, se podrá ordenar su nueva detención por un plazo que no exceda el tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la disposición.

209.Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse por

aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio, preferirá imponerle a él, en lugar de la prisión, alguna de las alternativas siguientes:

1) Arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga;

2) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal;

3) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que él designe.

4) La prohibición de salir del país, de la localidad, en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal, sin autorización.

5) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares,

6) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

7) La prestación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas.

El tribunal podrá imponer una sola de estas alternativas o combinar varias de ellas, según resulte adecuado el caso, y ordenara las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento, en ningún caso se utilizaran estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible; en especial, no se impondrá una caución económica, cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado, tornen imposible la prestación de la caución.

Podrá también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad.

210.Acta. Previo a la ejecución de estas medidas, se labrara, actas, en la cual se constará:

1) La notificación al imputado;

2) La identificación de las personas que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función o de la obligación que les ha sido asignada;

3) El domicilio real que denuncien todos ellos, indicación de las circunstancias que pudieran imponerle la ausencia de él por más de un día;

4) La constitución de un domicilio especial para recibir notificaciones, dentro del radio del tribunal;

5) La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones que sean practicadas.

En el acta de la institución a todos sobre las consecuencias de la incomparecencia del imputado.

211.Cauciones. El tribunal, cuando corresponda, fijará el importe y la clase de caución sobre la idoneidad del fiador, según libre preciación de las circunstancias del caso, atendiendo siempre a la finalidad establecida en el art. 209. A pedido del tribunal, el fiador justificará su solvencia.

Cuando la caución prestada por otra persona, ella asumirá solidariamente con el imputado la obligación de pagar, sin beneficio de exclusión, la suma que el tribunal haya fijado.

El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra equivalente, previa autorización del tribunal.

2.12. Ejecución de las cauciones. En los casos del art. 39 o cuando el imputado de sustrajere a la ejecución de la pena, se fijará un plazo no menor de cinco días para que comparezca o cumpla la condena impuesta. De ello se notificará el imputado y al fiador, advirtiéndoles que, si aquel no comparece, o no cumple la condena impuesta, o no justifica estar impedido por fuerzo mayor, la caución se ejecutará el término de plazo.

Vencido el plazo, el tribunal dispondrá, según el caso, la venta de los bienes que integran la caución por intermedio de una institución bancaria oficial o el embargo y ejecución inmediata, por la misma vía, de los bienes del fiador.

La suma líquida de la caución será transferida a la institución de ayuda pospenitenciaria local.

213.Cancelación. Las caución será cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, siempre que no hubieren sido ejecutados con anterioridad:

1) cuando el imputado fuere constituído en prisión.

2) Cuando se revoque la decisión de constituir cauciones, sean o no reemplazadas por otra medida;

3) Cuando, por sentencia firme, se absuelva o se sobresea al imputado;

4) Cuando comience la ejecución de la pena de libertad o ella no deba ejecutarse;

5) Con el pago íntegro de la multa.

214.Incontaminación. El juez de la instrucción o el tribunal competente podrá ordenar la incomunicación del imputado privado de libertad, por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sólo cuando existan motivos graves para temer que el imputado, de otra manera, obstaculizará la averiguación de la verdad; esos motivos constaran en la decisión. Sin embargo, inmediatamente antes de comenzar su declaración o antes de la realización de cualquier acto que requiera su intervención personal.

El ministerio público podrá disponer la incomunicación del aprehendido sólo por el plazo necesario para gestionar el orden judicial, el cual no excederá de seis horas; rige también, el art. 75, inc. 6.

Se permitirá al incomunicado el uso de libros, recado de escribir y demás objetos que pidiere, con tal de que no puedan servir de medio para eludir la incomunicación; podrá también realizar actos civiles impostergables que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen la investigación.

215.Internación provisional. Se podrá ordenar la internación del imputado en su establecimiento asistencial, cuando medien los siguientes requisitos:

1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho antijurídico o partícipe en él y será internado definitivamente como resultado de procedimientos;

2) La comprobación por dictamen de dos peritos, de que el imputado sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tomaran peligroso para sí o para los demás;

3) La existencia de alguno de los peligros del inc. 2 del art. 202 Rige, análogamente, los arts. 203 y de esta sección.

Cuando concurran las circunstancias de inc. 2, el tribunal informará al tribunal competente para resolver sobre su incapacidad de internación y podrá a su disposición a quien estuviere detenido.

216.Falta de mérito. Si no concurrieran los presupuestos del inc. 1 del art. 202, y el inc. 1 del art. 215, el tribunal, por auto, declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que, conforme a las circunstancias, la coerción fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual sólo podrá ordenar alguna de las medidas previstas en los incs. 3 a 7 del art. 209. Las medidas cesarán al término del plazo inicial del art. 262, si no concurrieren los presupuestos de los arts. 202 y 215.

217.Tratamiento. El encarcelado preventivamente será alojado en establecimientos especiales, diferentes a los que se utilizan para condenarlos a pena privativa de libertad, o, al menos en lugares absolutamente separados de los dispuestos para estos últimos, y tratados en todo momento como inocentes, que sufren la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto de procedimiento penal. El especial, los reglamentos carcelarios se ajustaran a las siguientes reglas:

1. Los lugares de alojamiento y los servicios que garanticen las comodidades mínimas para la vida y la convivencia humanas serán sanos y limpios, de modo tal que aseguren el descanso, la nutrición, la atención de las

necesidades fisiológicas y las mínimas necesidades para el desarrollo de la vida intelectual; el interno podrá procurarse, a sus expresas, comodidades superiores con las únicas restricciones relativas al espacio disponible y a la prohibición de ingresar elementos o sustancias, cuya tenencia se prohíba por ley, resulten peligrosos para la seguridad común, sirvan para preparar la fuga o provoquen graves desórdenes para la vida en común; en caso de existir en el establecimiento lugares comunes de alojamiento y celdas individuales, el imputado será consultado sobre su preferencia y, en lo posible, satisfecho su deseo.

2. El imputado dispondrá de su tiempo libremente y sólo se le impondrá las restricciones imprescindibles para posibilitar la convivencia (horarios de comida, silencio nocturno); se asegurará, al menos un descanso nocturno de ocho horas; si el imputado decidiera trabajar conforme al ofrecimiento laboral del establecimiento, se atenderá el horario y las reglas determinadas para esa actividad.

3. El imputado gozará, dentro del establecimiento, de libertad ambulatoria, en la mayor medida que permitirán sus instalaciones; se garantizará, como mínimo, la posibilidad de que el imputado dedique dos horas diarias a actividades deportivas o recreativas, en los lugares dedicados a ello.

4. El imputado podrá tener consigo materiales de lectura y escritura, libros, revistas y periódicos; el material de lectura no será censurado y se proveerá de elementos de escritura y lectura a los internos de menores recursos; se pondrá a disposición de los imputados de periódicos del día, en cantidad suficiente para permitir que puedan mantenerse informados sobre lo que ocurre en el mundo exterior; se facilitará la continuación de los estudios.

5. La comunicación epistolar será libre, salvo grave sospecha acerca de la preparación de una fuga o de la continuación de la actividad delictiva, casos de los cuales regirán los art. 165 y 166. Los imputados podrán ser visitados por familiares y amigos. Al menos dos veces por semana, en la forma y en los lugares adecuados, de manera que no signifique un menosprecio para su dignidad, ni impida su libre comunicación, derecho que sólo será limitado por el horario que disponga el establecimiento y, en cuanto a las personas, conforme a lo dispuesto por art. 209, Inc. 6. El imputado tendrá derecho a requerir visitas íntimas, en especial los casados o quienes convivan con otra persona unidos por lazos de efecto permanente, las cuales se llevaran a cabo de manera adecuada para resguardar el decoro, el recato y la tranquilidad; se garantizará, al menos, una visita de este tipo por mes.

6. Se cuidará adecuadamente la salud de los internos, quienes en caso de enfermedad, tendrán derecho a la asistencia por un médico de

su confianza, a su costa; si la intervención médica es un establecimiento carcelario presenta riesgos para su salud, evitables en un establecimiento común, se consultará al enfermo, quien podrá asumir los gastos de la intervención particular.

7. Si el imputado lo solicita, se le facilitará asistencia religiosa, según sus creencias; se facilitará el ingreso de los ministros de los diversos cultos para celebrar las principales ceremonias religiosas en los días de culto.

8. El imputado que trabaje tendrá derecho a un salario, que recibirá mensualmente, y se cumplirá con las obligaciones previsionales.

Todo imputado que ingrese en un establecimiento carcelario recibirá un impreso explicativo de sus derechos, de la organización del establecimiento, de sus horarios y obligaciones, con transcripción de este artículo.

El tribunal controlará el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones impuestos por esta regla; podrá designar también un inspector judicial con facultades suficientes para controlar el cumplimiento del régimen establecido. Excepcionalmente, podrá conceder permisos de salida, por un tiempo limitado, siempre que asegure convenientemente que esa medida no facilitará la fuga del imputado o entorpecerá la averiguación de la verdad.

Toda restricción que la autoridad encargada de la custodia imponga a los derechos concedidos al imputado, deberá ser comunicada inmediatamente al tribunal, con sus fundamentos, y éste a la autoridad o revocará, según el caso.

El condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté sometido a prisión preventiva, seguirá el régimen que impone su condena y será trasladado al establecimiento que correspondiere, cercano al lugar donde se tramita el procedimiento, en lo posible. El tribunal podrá disponer que, por tiempo limitado, se lo mantenga en otro establecimiento.

Sección 2ª – Examen de las medidas de coerción personal

218.Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aun de oficio.

219.Examen obligatorio de la prisión. Cada tres meses, sin perjuicio de aquellas oportunidades en que se dispone expresamente, el juez de la instrucción o el tribunal competente examinará los presupuestos de la prisión o internación y, según el caso, ordenará su continuación, su sustitución por otra medida o la libertad plena del imputado.

El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes, con aquellos que concurran, después de la cual el tribunal decidirá inmediatamente. El tribunal podrá interrumpir la audiencia

o la decisión, por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria.

El plazo se interrumpirá en los casos previstos por los arts. 220 y 221, comenzándose a contar íntegramente, a partir de la decisión.

220.Examen a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y la internación, o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento. La audiencia prevista en el artículo anterior se llevará a cabo dentro de las veinticuatro horas.

221.Queja durante el procedimiento preparatorio. Durante el procedimiento preparatorio, el ministerio público y el imputado, o su defensor, podrán provocar el examen de las medidas de coerción personal, impuestas o rechazadas por el juez de la instrucción, ante el tribunal competente para el procedimiento intermedio. La queja no tiene efecto suspensivo y el procedimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior, salvo el plazo, que se extenderá a cinco días.

La queja no estará sujeta a un plazo, ni estará condicionada por un examen previo del juez de la instrucción.

Sección 3ª – Embargo y otras medidas de coerción

222.Remisión. El embargo de bienes, la inhibición y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por la ley de procedimientos civiles.

Será competente para la decisión y el procedimiento el juez de la instrucción, durante el procedimiento, el tribunal que entiende en ellos.

Sólo serán recurribles, cuando lo admita la ley de remisión y con el efecto que ella prevé, las decisiones del juez de la instrucción durante el procedimiento preparatorio, por vía indicada en el art. 221.

223.Multa. En los casos del inc. 1 del art. 202, y del inc. 1 art. 215, el ministerio público podrá requerir el embargo de bienes u otra medida sustitutiva, para asegurar el pago de la multa.

224.Arraigo. El imputado, su defensor y el tercero civilmente demandado solicitarán el arraigo del querellante y del actor civil domiciliados en el extranjero en la forma prevista por la ley de procedimientos civiles y con observancia, en lo pertinente, de las reglas de este Código.

Capítulo 7 – Actividad procesal defectuosa

225.Principio. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiera protestado oportunamente por él.

El ministerio público y los intervinientes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen gravamen, con fundamento en el defecto, en los casos y formas previstos por este Código, siempre que el interesado no hay contribuido a provocar el defecto. Se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un acto que la ley prevé.

El imputado podrá impugnar, aunque hubiere contribuido a provocar el defecto, en los casos previstos por el art. 227.

226.Protesta. Salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente en él, y antes de dictarse la decisión impugnada, cuando no hubiere estado presente.

Si, por las circunstancias del caso, fue imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo.

El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponda.

227.Defectos absolutos. No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aun de oficio, los defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en inobservancia de derechos y garantías previstos por la ley fundamental y por los tratados suscriptos por el Estado.

228.Renovación o rectificación. Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado.

Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido no se podrá retrotraer el procedimiento a períodos ya precluídos, salvo los casos del art. 353 y del art. 273, inc. 1.

Libro segundo – El procedimiento común

Título I – Preparación de la acción pública

Capítulo 1 – Persecución penal pública

229. Persecución penal. La persecución penal deberá ser promovida y proseguida por el ministerio público, con el auxilio policial, sin necesidad de excitación extraña y sin atender criterio alguno de oportunidad, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley penal.

El ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.

Cuando la ley penal condiciones la persecución penal a una instancia particular o a la autorización estatal, el ministerio público la ejercerá una vez que se produzca la instancia o la autorización por los medios que la ley disponga, sin perjuicio de realizar o requerir los actos urgentes que interrumpan la comisión del hecho punible o conserven elementos de prueba que se perderían con la demora, siempre que no afecten el interés protegido por la necesidad de la instancia o de la autorización.

***230. Oportunidad.** En los casos en que la ley pena permita la aplicación de criterios de oportunidad para evitar la promoción de la persecución penal o para hacerla cesar, el ministerio público, por intermedio del funcionario que la ley orgánica determine, pedirá el archivo al juez de instrucción competente, quien decidirá sin recurso alguno. El tribunal podrá requerir la opinión del ministerio público sobre la cuestión, cuando lo considere conveniente.

El archivo no supone la clausura definitiva de la persecución penal, que podrá ser reiniciada por el ministerio público cuando lo considere conveniente, salvo que la ley penal le otorgue otros efectos.

* Los criterios de oportunidad deben ser fijados por la ley penal, pues representan soluciones normativas materiales para el ejercicio de la persecución penal; sin embargo, podría ocurrir que, según las disposiciones jurídicas relativas a la distribución de competencia legislativa de un Estado la mayoría de loa veces constitucionales; La fijación de estos criterios estuviera atribuida con exclusividad al legislador procesal. Se incluye, a continuación, un ejemplo posible sobre criterios de oportunidad:

"En las acciones que deben ser ejercidos por el ministerio público, él, con el consentimiento del juez competente, podrá decidir la clausura del procedimiento, en los siguientes casos:

1. Cuando se tratare de hechos que por su insignificancia o su falta de frecuencia, no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena mínima supere los tres años de privación de libertad o el delito haya sido cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

2. Cuando la contribución o la culpabilidad del agente en la comisión del hecho sea leve y no exista ningún interés público gravemente comprometido en su persecución, salvo que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

3. Cuando se tratare de casos que reúnen los presupuestos bajo los cuales el tribunal puede prescindir de la pena.

4. Cuando para evitar la consumación de un hecho o para facilitar su persecución penal, resultare idóneo prescindir de la persecución de otro hecho o de una contribución al mismo hecho, o limitar la pretensión punitiva a una pena o calificación más leve de la que efectivamente corresponde. En este último caso, no procederá la clausura del procedimiento. Esta disposición no será aplicable a hechos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo.

5. Cuando alguna de varias infracciones legales, que han sido cometidos por una misma acción o por varias acciones, carecen de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad y corrección ya ejecutoriada o a la que probablemente se aplicará, se podrá limitar la persecución a la otra u otras infracciones restantes; de la misma manera se procederá cuando la pena o medida de seguridad y corrección que se espera por un hecho punible carece de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad y corrección ya ejecutoriada o a la que se debe esperar en un proceso tramitado en el extranjero, y procede la extradición y entrega del imputado al país extranjero; en este mismo caso, se podrá prescindir de la extradición activa. En estos supuestos, el procedimiento podrá ser reabierto y se podrá proseguir la persecución penal, si la pena o medida de seguridad esperada no se ejecuta o impone".

***231. Suspensión del proceso a prueba.** Cuando la ley penal permita la suspensión de la persecución penal, se aplicará el procedimiento abreviado, con las siguientes modificaciones:

1) después de oído el imputado, el tribunal decidirá acerca de la suspensión del procedimiento y, en caso de concederla, especificará concretamente las instrucciones e imposiciones a que debe someterse el imputado;

2) caso contrario, mandará seguir el procedimiento adelante, por la vía que corresponda.

La resolución conforme al inc. 1 será notificada al imputado, siempre en su presencia y por el juez, con expresa advertencia sobre las instrucciones e imposiciones y de las consecuencias de su inobservancia.

El tribunal de ejecución proveerá al control sobre la observancia de las imposiciones e instrucciones, a cuyo fin recibirá copia de la resolución; deberá comunicar cualquier inobservancia al tribunal que suspendió el procedimiento.

La decisión es irrecurrible, salvo para el imputado y el ministerio público, cuando sostengan que no han prestado su consentimiento para la suspensión del procedimiento, o cuando las instrucciones o imposiciones sean legítimas, en cuyo caso podrán interponer el recurso de casación.

En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, el tribunal otorgará posibilidad de audiencia al ministerio público y al imputado, y resolverá, por auto fundado, acerca de la reanudación de la persecución penal. La decisión podrá ser precedida de una investigación sumaria y es irrecurrible.

* La regulación jurídica de la posibilidad de suspender el proceso a prueba, sintéticamente: probación, es materia de la ley penal (casos, condiciones, efectos, instrucciones e imposiciones, plazo de prueba), pues constituye un aspecto material del ejercicio de la persecución penal (ver nota artículo anterior). Ordinariamente, toda su regulación tiene relación expresa con la condena condicional, la remisión de la pena o la suspensión condicional de la pena. Se incluye, a continuación, un ejemplo posible:

"Suspensión aprueba del trámite de la causa. Si, en casos en los que es admisible la condena condicional, la suspensión condicional de la pena o la remisión de la pena, el ministerio público propone la suspensión de la persecución penal y el acusado presta conformidad, admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan, el tribunal podrá disponer la paralización aprueba del trámite de la causa, siempre que: el acusado hubiere reparado el daño convenientemente; afianzare suficientemente esa reparación; demostrare la absoluta imposibilidad de hacerlo; o asumiere formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus posibilidades y como parte de las condiciones de prueba.

Plazo de prueba. Al resolver la paralización, el juez fijará prudentemente un plazo de prueba, que no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco, durante el cual el imputado será sometido a un régimen análogo al de la condena condicional, la suspensión condicional de la pena o la remisión de la pena. Vencido el plazo de prueba sin que la paralización sea revocada, el juez declarará extinguida la acción penal. El plazo de prueba suspende la prescripción de la acción.

Condiciones. El tribunal dispondrá que el imputado, durante el período de prueba, se someta a una o varias reglas de conducta, y vigilará el cumplimiento de las condiciones impuesta.

Las reglas de conducta podrá consistir en:

1) residir o no residir en un lugar determinado y someterse a la vigilancia que determine el tribunal;

2) prohibición de frecuentar determinados lugares o personas;

3) abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas;

4) comenzar o finalizar la escolaridad primaria si no la tuviere cumplida, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que determine el tribunal.

5) Prestar trabajo no retribuido a favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo;

6) Reparar el daño causado, en la medida de lo posible;

7) Someterse a un tratamiento, si fuere necesario;

8) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.

Revocación y suspensión. Cuando el imputado se apartare considerablemente, en forma injustificada, de las condiciones impuestas o cometiere un nuevo delito, se revocará la suspensión y la causa continuará su curso.

El Tribunal podrá disponer un período accesorio de prueba, conforme a la gravedad y persistencia de la falta, que nunca podrá superar el plazo máximo de cinco años previsto anteriormente.

El plazo de prueba se suspenderá mientras el procesado se encuentre privado de su libertad en otro proceso. Cuando el procesado estuviere sometido a otro proceso y no se lo privare de libertad, el plazo seguirá corriendo, pero se suspenderá la declaración de extinción de la acción penal hasta que quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad o hace cesar indefinidamente, a su respecto, el otro proceso.

La revocación de la suspensión a prueba del trámite de la causa no impedirá la condenación condicional, la suspensión de la pena o la remisión de la pena, ni impedirá la aplicación de alguna de las penas que puedan reemplazar a la privativa de libertad".

232.Necesidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el ministerio público toma conocimiento de un hecho punible, por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado o el sobreseimiento (absolución anticipada), salvo en los casos de excepción mencionados en el art. 229 y las facultades previstas en los arts. 230 y 231. El ejercicio de las facultades previstas en los arts. 230 y 231 no lo eximirá de la investigación imprescindible para asegurar los elementos de prueba necesarios sobre el hecho punible y sus partícipes.

Es obligación del ministerio público extender la investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida por demora es de temer. Si estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo previsto para los definitivos e irreproducibles, los requerirá enseguida al juez de la instrucción o, en caso de urgencia, al juez más próximo.

El ministerio público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación.

El incumplimiento o la demora injustificada será considerada falta grave y hará pasible al funcionario de las sanciones y responsabilidades previstas en la ley.

Capítulo 2 – Obstáculos a la persecución penal y civil

233. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, éste deberá ser promovido y proseguido por el ministerio público con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita.

Cuando el ministerio público no esté legitimado para provocar la decisión final sobre la cuestión por el juez competente, anoticiará sobre la existencia de la cuestión prejudicial a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo.

234. Planteo de la cuestión y efectos. La cuestión prejudicial podrá ser deducida por cualquiera de los intervinientes ante el tribunal que conozca, por escrito fundado y oralmente durante el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo de ministerio público se deducirá ante el juez de la instrucción.

El juez dictará resolución y, si acepta como seria, fundada y verosímil la existencia de la cuestión prejudicial, el procedimiento se suspenderá hasta que ella sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad.

Si el tribunal rechaza la cuestión mandará seguir el procedimiento.

235. Privilegio constitucional. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento especial previo de desafuero o destitución previstos constitucionalmente, el tribunal competente, si considera fundada la persecución penal, solicitará el desafuero o la destitución del imputado a la autoridad correspondiente, con un informe de las razones que justifican el pedido, acompañando copia de las actuaciones correspondientes. En caso contrario, declarará que no puede proceder y archivará las actuaciones.

El ministerio público deberá requerir la decisión del juez de la instrucción.

Contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución personal hasta su desafuero, destitución o cesación en sus funciones. Sólo se podrá practicar los actos urgentes de investigación que

no admitan demora y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial se archivará las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio.

Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero.

236.Excepciones. Durante el procedimiento preparatorio, ante el juez de la instrucción, y en los demás períodos del procedimiento, ante el tribunal competente según las oportunidades previstas, los intervinientes podrán oponerse a la persecución penal o a la acción civil, por los siguientes motivos:

1) incompetencia;

2) falta de acción, porque no se pudo promover, o no se promovió conforme a la ley o no pudiere proseguir,

3) extinción de la persecución penal o de la pretensión civil.

El juez de la instrucción o el tribunal competente podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando ello sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión, por su naturaleza, no requiera la instancia del legitimado a promoverla.

237.Trámite durante el procedimiento preparatorio. En el escrito en el cual el interesado deduzca estas cuestiones deberá ofrecer toda la prueba de os hechos afirmados y acompañar la documentación que obre en su poder.

Del escrito se dará vista a los demás intervinientes, quienes, en su contestación, cumplirán con la exigencia del párrafo anterior.

El juez admitirá o rechazará los medios de prueba, ordenará, en su caso, las diligencias correspondientes para recibirlos y citará a todos los intervinientes a una audiencia oral en la cual se escuchará a los testigos y peritos y se examinará los otros medios de prueba. Inmediatamente después, decidirá por resolución fundada. Cuando la cuestión fuere de puro derecho, no se hubiere ofrecido prueba o se rechazare la ofrecida, el juez decidirá sin audiencia.

El rechazo de la excepción no impedirá que sea deducida nuevamente durante el procedimiento intermedio. Contra las decisiones que acogen una excepción puede ser deducida la queja, dentro de los tres días posteriores a la notificación, en la forma y ante el tribunal previstos por el art. 221, salvo que se tratare de la oposición a la constitución del querellante o de las partes civiles, caso en el cual regirán las reglas respectivas.

238.Efectos. La cuestión prevista en el inc. 1 del art. 236, será resuelta antes que cualquier otra. Si se declara incompetencia, se procederá

conforme al art. 21. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente y proceder conforme a los arts. 17 y 21, según el caso. Si se tratare de cosa juzgada, se archivará los autos.

Si se declara la falta de acción, se archivará los autos salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro interviniente, en cuyo caso la decisión sólo desplazará del procedimiento aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán subsanarse hasta la oportunidad prevista en los arts. 81 y 95.

En los casos del inc. 3 del art. 236, se decretará el sobreseimiento (absolución anticipada) o se rechazará la demanda, según corresponda.

Capítulo 3 – Actos introductorios

239.Denuncia. Cualquier persona puede comunicar a la policía, al ministerio público o a un juez con competencia penal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública, por escrito ante los jueces, que harán constar su identidad verificándola con el documento público idóneo que el denunciante presente, oralmente o por escrito ante la policía y el ministerio público que, en ese efecto, protocolizarán en acta la versión oral y harán constar la identificación del denunciante según antes se indicó.

En los delitos dependientes de instancia o autorización se procederá de la misma forma a recibir la instancia o la autorización.

La denuncia por mandatario requiere poder especial al efecto.

240.Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, exceptuando los que requieren instancia o autorización para su persecución, y sin demora alguna:

1) los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto;

2) quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto;

3) quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución o entidad, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, por personas que desempeñen esas mismas funciones en la institución o entidad, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.

En todos estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia, del cónyuge, o de ascendientes, o descendientes o hermanos, o de una persona que conviva con el denunciante, ligada a él por lazos especiales de afecto.

241.Contenido. La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos.

242.Intervención posterior. El denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de la que pudiere corresponderle según el art. 410 y por disposiciones ajenas a las de este Código.

243.Delegación de la acción civil. La denuncia puede contener, cuando corresponda, el pedido de que el Estado asuma en su nombre el ejercicio de la acción civil proveniente del hecho punible, delegación que el ministerio público comunicará sin demora al órgano que designe la ley orgánica.

244.Querella. La querella se presentará por escrito, ante el juez de la instrucción, y deberá contener, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas, y los demás datos exigidos para la instancia de constitución.

Agregará también la prueba documental en su poder o indicará el lugar donde ella está.,

245.Denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o la querella se presente ante un tribunal, ésta la remitirá inmediatamente, con la documentación acompañada, al ministerio público, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 79 y ss.; para lo cual extraerá copia.

246.Prevención policial. Los funcionarios policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al ministerio público y practicará una investigación preliminar, para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos.

A tal efecto tendrán todas las facultades otorgadas por este Código al ministerio público actuando bajo su dirección.

247.Formalidades. La prevención policial observará, para documentar sus actas, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del ministerio público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias prácticas, con expresión del día en que se las realizó, y cualquier circunstancia de utilidad

para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las instrucciones recibidas. El acta será firmada por las personas que proporcionen información, las demás personas que hubieren intervenido y el oficial que dirige la investigación.

248.Actos jurisdiccionales. Cuando resulte urgente la realización de un acto jurisdiccional, el oficial a cargo de la investigación informará al ministerio público, quien lo requerirá al juez de la instrucción; en casos de extrema urgencia la policía podrá requerir directamente el acto al juez de la instrucción con noticia al ministerio público.

249.Remisión de actuaciones. Las actuaciones y cosas secuestradas serán remitidas al ministerio público en el más breve plazo posible, conforme a las necesidades de la investigación, sin perjuicio de lo previsto para el caso de aprehensión de personas.

El ministerio público podrá requerir las actuaciones en cualquier momento o fijar un plazo para su conclusión y remisión.

Capítulo 4 – Procedimiento preparatorio (instrucción)

250.Objeto de la investigación. En procura de la verdad, el ministerio público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal, y los partícipes en él, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad, verificando también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil.

251.Desestimación. El ministerio público solicitará al juez de la instrucción, por requerimiento fundado, el archivo de la denuncia, la querella o la prevención policial, cuando sea manifiesto que el hecho no constituye un delito o cuando no se pueda proceder.

De la misma manera procederá en los casos previstos en los arts. 230 y 231.

El pedido de archivo no eximirá al ministerio público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora.

252.Efectos. La resolución que ordena el archivo no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias conocidas que la fundan o se mantenga el obstáculo que impide la persecución, sin perjuicio de las facultades que el art. 230, párr. 11, otorga al ministerio público.

El juez, al ordenar el archivo, remitirá las actuaciones nuevamente al ministerio público.

Si el juez, al ordenar el archivo, remitirá las actuaciones nuevamente al ministerio público.

Si el juez no estuviese de acuerdo con el pedido de archivo, por resolución fundada remitirá las actuaciones al superior jerárquico del ministerio público que corresponda, según la ley orgánica, quien determinará el funcionario que proseguirá la investigación.

253.Incompetencia. Si el ministerio público estimare que el juzgamiento del hecho corresponde a otra organización judicial, pedirá al juez de la instrucción, por requerimiento fundado, que así los declare, la resolución provocará la remisión de las actuaciones al tribunal que se considere competente o su devolución al ministerio público, según el caso.

El pedido de incompetencia no eximirá al ministerio público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora.

254.Formalidades. Las diligencias practicadas constarán, en lo posible, en una sola acta, con expresión del día en que se las efectúa y la identificación de las personas que proporcionan información.

El acta resumirá el resultado fundamental de los actos cumplidos y, con la mayor exactitud posible, describirá las circunstancias de utilidad para la investigación.

El acta será firmada por todos los intervinientes y por el funcionario del ministerio público que lleve a cabo el procedimiento.

255.Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán secretos para los extraños.

Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios, No obstante, ellos, los funcionarios que participen en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar secreto. Si un perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado conforme a las disposiciones de la Ley de Organización Judicial.

El ministerio público podrá disponer, sólo una vez, el secreto total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los diez días corridos, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero, en este caso, cualquier de los intervinientes podrá solicitar al juez de la instrucción que exime los fundamentos de la disposición y ponga fin a la reserva.

No obstante, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el ministerio público podrá disponer el secreto, con mención de los actos a los cuales se refiere, por el tiempo

absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado, que nunca superará las cuarenta y ocho horas.

Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el ministerio público o por la persona que él designe, acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiera. A ellos también les comprende la obligación de guardar secreto.çç256. Proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores o mandatarios podrán proponer medios de prueba en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El ministerio público los llevará a cabo si los considerare pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan.

257.Participación en los actos. El ministerio público podrá permitir la asistencia del imputado, de los demás intervinientes, de sus defensores o mandatarios a los actos que se deba practicar, cuando su presencia fuera útil para el esclarecimiento de los hechos y no perjudique el éxito de la investigación o impida una pronta y regular actuación.

Los asistentes no tomarán la palabra sin expresa autorización de quien preside el acto, ni deberán perturbar la diligencia con signos de aprobación o desaprobación, pudiendo ser excluidos de la audiencia en caso de que no se comporten como corresponde, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Podrán solicitar que consten en el acta las observaciones que estimen pertinentes, incluso sobre las irregularidades y defectos del acto.

258.Actos jurisdiccionales: anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba declarar un órgano de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, el ministerio público o cualquiera de los intervinientes requerirán al juez de la instrucción que lo realice.

El juez de la instrucción practicará el acto, si lo considera admisible formalmente, citando a todos los intervinientes, sus defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con todas las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado a todos los efectos por su defensor, salvo que pidiere expresamente intervenir personalmente y siempre que su detención se cumpla en el mismo lugar donde se practica el acto.

Si, por la naturaleza del acto, la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de los intervinientes de manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellos.

Cuando el juez de la instrucción rechace el requerimiento del ministerio público, él podrá acudir directamente al tribunal del procedimiento intermedio, solicitando que ordene la realización del acto.

259.Urgencia. Cuando se ignore quién ha de ser el imputado o cuando alguno de los actos previstos en el artículo anterior sea de extrema urgencia, el ministerio público podrá requerir verbalmente la intervención del juez de la instrucción y éste practicará el acto con prescindencia de las citaciones previstas en el artículo anterior, designando un defensor de oficio para que controle el acto.

Cuando existiere peligro inminente de pérdida del elemento probatorio el juez de instrucción podrá practicar, aun de oficio, los actos urgentes de investigación que no admitan dilación. Finalizando el acto, remitirá las actuaciones al ministerio público. En el acta se dejará constancia detallada de los motivos que determinaron la resolución.

260.Actos jurisdiccionales: autorizaciones. El ministerio público procederá de la misma manera en los casos en que la ley prevé la autorización judicial.

El juez de la instrucción decidirá por resolución fundada; rige el último párrafo del art. 258.

261.Facultades del ministerio público. El ministerio público puede exigir informaciones de toda persona y de todos los funcionarios públicos, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios policiales cualquier clase de diligencias. Los funcionarios policiales estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión del ministerio público.

Lo mismo rige para los auxiliares del ministerio público.

El ministerio público puede aprehender a personas que perturben el cumplimiento de un acto determinado y mantenerlas detenidas hasta su finalización. La aprehensión no podrá durar más de seis horas. En el acta respectiva constará la medida y los motivos que la determinaron, con indicación de la fecha y hora de su comienzo y cesación.

262.Duración. El ministerio público procurará dar término al procedimiento preparatorio lo antes posible, procediendo con la diligencia que el caso requiera.

Pasados seis meses desde la individualización y comparecencia del imputado, cualquiera de los intervinientes podrá requerir al juez de la instrucción la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación. El juez emplazará al ministerio público, según las circunstancias particulares del caso.

Vencido este plazo, el ministerio público procederá conforme a las reglas del capítulo siguiente, si no lo hiciera, a requerimiento de parte o de

oficio, el juez de la instrucción procederá a examinar las actuaciones, y a emplazarlo por última vez para que cumpla los actos faltantes, que determinará en la decisión, y para que concluya según las reglas del capítulo siguiente.

Capítulo 5 – Conclusión

263.Acusación. Cuando el ministerio público estime que la investigación proporcional fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al tribunal la decisión de apertura del juicio.

La acusación deberá contener:

1) los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio de su defensor;

2) la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado;

3) los fundamentos sintéticos de la imputación, con expresión de los medios de prueba utilizados;

4) la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables;

5) la indicación del tribunal competente para el juicio.

Con la acusación remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder.

El ministerio público podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias de hecho que permiten encuadrar el comportamiento del imputado e n una figura distinta de la ley penal, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la correcta defensa del imputado.

264.Declaración del imputado. En ningún caso el ministerio público acusará sin antes haber oído al imputado en la forma prevista por los arts. 41 y siguientes.

Sin embargo, en las causas sencillas, en las que no aparezca como necesario escucharlo personalmente, bastará con otorgarle la oportunidad de pronunciarse por escrito, sin perjuicio de su derecho a declarar.

265.Sobreseimiento (absolución anticipada) o clausura. Cuando el ministerio público estime que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado requerirá el sobreseimiento (absolución anticipada) o la clausura provisional.

Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder.

266.Archivo. Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el ministerio público dispondrá por

escrito el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento para los demás imputados que hubiere.

En este caso, notificará a los demás intervinientes la disposición, quienes podrán objetarla antes el juez de la instrucción, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El juez de la instrucción podrá revocar la decisión, indicando los medios de prueba útiles para continuar la investigación o para individualizar al imputado.

Título II – Procedimiento intermedio

Capítulo 1 –Desarrollo

267.Comunicación. El tribunal ordenará la notificación del requerimiento del ministerio público al imputado y a las demás personas que hayan pretendido, con éxito o sin él, intervención en el procedimiento, con copia del escrito, colocando las actuaciones y los medios de prueba a su disposición en el tribunal, para su consulta, por el plazo de seis días, comunes para todos los intervinientes.

268.Imputado. Dentro del plazo previsto, el imputado y su defensor podrán:

1) señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección;

2) decidir las excepciones y oposiciones previstas en los arts. 236, 85 y 98;

3) formular objeciones contra el requerimiento del ministerio público, instando incluso el sobreseimiento (absolución anticipada) o la clausura;

4) señalar los medios de prueba que estime omitidos, requiriendo que los practique el tribunal.

*** 269. Querellante.** Dentro del plazo previsto, el querellante o quien, sin éxito, haya pretendido serlo podrá:

1) adherir a la acusación del ministerio público, exponiendo sus propios fundamentos, o manifestar que no acusará;

2) señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección;

3) objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés penal, requiriendo su ampliación o corrección;

4) deducir las excepciones y plantear las oposiciones que correspondan;

5) objetar el pedido de sobreseimiento (absolución anticipada) o clausura;

6) señalar los medios de prueba que estime omitidos, requiriendo que los practique el tribunal.

Si el querellante o quien, sin éxito, haya pretendido serlo no se expidiere dentro del plazo o manifestare que no acusará, se tendrá por abandonada la querella.

*Los países que prefieran la propuesta alternativa del art. 78 modificarán el inc. 1) de la siguiente manera:

*1) adherir a la acusación del ministerio público exponiendo sus propios fundamentos, acusar él mismo o manifestar que no acusará".

270.Partes civiles. Dentro del mismo plazo podrán renovarse las instancias de constitución de las partes civiles que hayan sido rechazadas por el juez de la instrucción durante el procedimiento preparatorio.

En este plazo, el actor civil ya constituido o que pretenda constituirse, según el párrafo anterior, deberá concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretende, indicando la reparación deseada o estimando, cuando sea posible, el importe de la indemnización. La falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción.

271.Constitución definitiva del querellante y las partes civiles. Dentro del mismo plazo, el ministerio público, el imputado, los demás intervinientes, sus mandatarios y defensores, podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan.

En el mismo acto acompañarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán la oficina o el registro al cual deberá ser solicitada y ofrecerán todos los demás medios de prueba que estimen omitidos o que pretendan hacer valer.

272.Recepción de la prueba. Vencido el plazo del art. 267, el tribunal ordenará practicar, en su caso, los medios de prueba pertinentes y útiles que fueron ofrecidos. También podrá ordenar de oficio los medios de prueba que considere útiles para la averiguación de la verdad.

Inmediatamente, expedirá los requerimientos de prueba documental, ordenará llevar a cabo las operaciones periciales y todo acto de instrucción que fuere imposible cumplir en la audiencia.

Cumplidos los actos preparatorios fijará audiencia pública, en la cual se recibirá la prueba correspondiente y se dará ocasión a todos los intervinientes que comparecieren para concluir acerca de sus pretensiones. El imputado podrá ser representado por un defensor si así lo pidiere.

Si nadie ofreció prueba, ni el tribunal considera necesario recibir algún medio de prueba, o la prueba incorporada fuere documental o de informes, el tribunal resolverá sin audiencia, conforme al artículo siguiente.

273.Resolución. El tribunal se abocará enseguida a la decisión de las cuestiones planteadas:

1) si se constatan vicios formales en la acusación, los designará detalladamente y ordenará al ministerio público su corrección, caso en el cual el ministerio público procederá según el último párrafo del artículo siguiente;

2) resolverá las instancias de constitución y en caso de excepciones u oposiciones, dictará la resolución que corresponda;

3) dictará el auto de apertura del juicio o, de lo contrario, sobreseimiento (absolución anticipada), la clausura del procedimiento o el archivo.

La resolución que recaiga será notificada a todos los intervinientes.

***274. Auto de apertura.** La resolución por la cual el tribunal decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener:

1) la designación del tribunal competente para el juicio;

2) las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas, que deben formar parte de ella; la orden de interponer acusación cuando rechace el sobreseimiento (absolución anticipada) o la clausura pedidos por el ministerio público, caso en el cual se individualizará al imputado y determinará el hecho punible según se prevé en el art. 263; la designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el tribunal sólo la admite parcialmente; las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación.

La resolución conforme a los incs. 2 y 3, obligará al ministerio público a interponer acusación, según el auto de apertura. Esta acusación será notificada a todos aquellos a quienes se les haya otorgado participación definitiva en el procedimiento.

* Ver art. 269. Para esa solución se reemplazará los incs. 2, 3 y 4 por el siguiente inc. 2: "la mención del requerimiento objeto del juicio: la acusación del ministerio público, del querellante o ambas a la vez".

El inc. 5 se convertirá en inc. 3 y se suprimirá el párrafo final.

275.Medidas de coerción. El tribunal decidirá de oficio, junto a la apertura del juicio, acerca de la procedencia o la subsistencia de la prisión preventiva o la internación provisional, disponiendo en su caso, la libertad del imputado.

276.Citación a juicio. Al dictar el auto de apertura del juicio o, en el caso del último párrafo del artículo 274, cuando el ministerio público formule la acusación, el tribunal citará a todos aquellos a quienes se les haya otorgado participación definitiva en el procedimiento, a sus mandatarios, defensores y al ministerio público, para que en el plazo común de diez días comparezcan a juicio ante el tribunal designado, constituyan domicilio y ofrezcan prueba.

Si el procedimiento intermedio se hubiere realizado en un lugar distinto de aquel en el cual se llevará a cabo el juicio, el plazo de citación se prolongará cinco días más.

277.Remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y las cosas secuestradas, a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición los detenidos que hubiera.

Capítulo 2 – Sobreseimiento (absolución anticipada) y clausura de la persecución penal

278.Sentencia de sobreseimiento (absolución anticipada). Corresponderá sobreseer a un imputado:

1) cuando resulte con evidencia la falta de alguna de las condiciones que habilita la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección;

2) cuando, a pesar de la falta de certeza no existiere, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir, fundadamente, la apertura del juicio.

279.Forma y contenido de la sentencia. El sobreseimiento (absolución anticipada) deberá contener:

1) la identificación del imputado;

2) la descripción del hecho que se le atribuye;

3) los fundamentos;

4) el dispositivo, con cita de las disposiciones penales aplicables.

280.Valor y efectos. La sentencia de sobreseimiento (absolución anticipada) provocará, inmediatamente, la libertad del imputado privado de libertad, y la cesación de las medidas sustitutivas previstas en el art. 209, incs. 1 y 2. El tribunal podrá decidir la procedencia o la subsistencia de las otras medidas previstas en el art. 209.

El sobreseimiento 8absolución anticipada) firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas en ese hecho.

281.Clausura provisional (archivo). Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento, por auto fundado, que deberá mencionar, concretamente, los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura.

Contra el auto que clausura el procedimiento no procede el recurso de casación, salvo a favor del imputado cuando se sostenga la inobservancia de las reglas del art. 278.

Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal, para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento (absolución anticipada), el tribunal, a pedido del ministerio público o de algunos de los intervinientes, podrá permitir la reanudación de la investigación.

Título III – Juicio

Capítulo 1 – Preparación del debate

282.Integración del tribunal; competencia. El tribunal se integrará conforme a las disposiciones de la ley de organización judicial, notificando inmediatamente a los intervinientes su constitución, para que en el plazo de cinco días interpongan las recusaciones que estimen pertinentes. En este caso, o cuando se aparte de oficio un juez, el presidente del tribunal reemplazará al vocal correspondiente.

El tribunal podrá rechazar la competencia atribuida por el tribunal del procedimiento intermedio, procediendo conforme a los arts. 20 y siguientes.

283.Ofrecimiento de prueba. Para ofrecer prueba se presentará la lista de testigos, peritos e intérpretes, con indicación del nombre, profesión y domicilio, y se señalará los hechos acerca de los cuales serán examinados durante el debate. Quien ofrezca la prueba podrá manifestar su conformidad para que se lea en el debate la declaración o dictamen presentado durante el procedimiento preparatorio.

Se deberá presentar también los documentos que no fueron ingresados antes o señalar el lugar en donde se hallan, para que el tribunal los requiera.

Los demás medios de prueba serán ofrecidos con indicación del hecho o circunstancia que se pretende probar.

284.Excepciones. El ministerio público, el imputado y los demás intervinientes, sus mandatarios o defensores, mientras no esté fijada la audiencia para el debate, podrán deducir las excepciones que no hubieren planteado con anterioridad o que se funden en hecho nuevos.

El tribunal podrá rechazar sin trámite las que fueran manifiestamente improcedentes; caso contrario, si las cuestiones planteadas no fueran de puro derecho, tramitará la excepción según lo previsto en los tres primeros párrafo del art. 237.

285.Anticipo de prueba. El presidente del tribunal podrá ordenar, de oficio o a pedido de alguno de los intervinientes, con noticia a todos ellos, una investigación suplementaria a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrán concurrir al debate, adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él, o llevar a cabo los actos probatorios que fuera dificultoso cumplir en la audiencia o que no admitieren dilación.

A tal efecto, el tribunal designará a uno de sus vocales, quien presidirá la instrucción ordenada. Los actos se cumplirán en la forma prevista en el art. 258, párr. II.

286.Unión y separación de juicios. Si por el mismo hecho punible atribuido a varios imputados se hubieren formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acumulación de oficio, o a pedido de algunos de los intervinientes, siempre que ello no ocasione un grave retardo del procedimiento.

Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el tribunal podrá disponer, de la misma manera, que los debates se lleven a cabo separadamente, pero, en lo posible, en forma continua.

287.División del debate único. El tribunal podrá disponer, cuando resultare conveniente para resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor defensa del acusado, dividir un debate único, tratando primero la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado y, posteriormente, la cuestión acerca de la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda, anunciándolo, a más tardar, en la apertura del debate. Cuando la pena máxima de los hechos punibles imputados, según la calificación jurídica de la acusación y del auto de apertura, supere los cinco años de privación de la libertad, la solicitud de división del debate único, hecho por el imputado o su defensor, obligarán al tribunal a proceder conforme al requerimiento.

En este caso, al culminar la primera parte del debate el tribunal resolverá la cuestión de culpabilidad y, si la decisión habilita la imposición de una pena o medida de seguridad y corrección, fijará día y hora para la prosecución del debate sobre la cuestión. Rigen, para la primera parte del debate, todas las reglas que regulan su desarrollo, y, para la decisión interlocutoria sobre la culpabilidad, las que regulan la sentencia, salvo las referidas específicamente a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección.

El debate sobre la pena comenzará con la recepción del aprueba que se hubiere ofrecido para individualizarla, prosiguiendo, de allí en adelante, según las normas comunes. La sentencia se integrará, después del debate sobre la pena, con el interlocutorio sobre la culpabilidad y la resolución

sobre la pena y medida de seguridad y corrección aplicable. El plazo para recurrir la sentencia comenzará a partir de este último momento.

Cuando se ejerza la acción civil, el tribunal podrá disponer, al mismo tiempo, la división del debate sobre ella en la forma que mejor correspondiere al caso.

Durante el debate, el tribunal puede organizar la audiencia conforme a las reglas que anteceden, de manera informal, sin necesidad de dictar el interlocutorio sobre la culpabilidad.

288.Resolución y fijación de audiencia. El tribunal resolverá, en un solo auto, las cuestiones planteadas:

1) admitirá la prueba ofrecida o la rechazará cuando fuere ilegítima, manifiestamente impertinente, inútil o superabundante, disponiendo las medidas necesarias para su recepción en el debate; en su caso, señalará los medios de prueba que se incorporarán al debate por su lectura:

2) fijará lugar, día y hora para la iniciación del debate, con intervalo no menor de diez días, computados continuamente, ordenando la citación de todas aquellas personas que deberán intervenir en él.

289.Prueba de oficio. En la decisión, el tribunal ordenará, de oficio, la recepción de prueba pertinente y útil que considere conveniente, siempre que su fuente resida en las actuaciones ya practicadas.

290.Sobreseimiento (absolución anticipada). Archivo. En la misma oportunidad el tribunal podrá, de oficio, dictar el sobreseimiento cuando fuere evidente una causa extintiva de la persecución penal, se tratare de un menor inimputable o exista una excusa absolutoria y siempre que para comprobar el motivo no sea necesario el debate.

De la misma manera, archivará las actuaciones cuando fuere evidente que no se puede proceder.

Capítulo 2 – Debate

Sección 1ª – Caracteres y dirección

291.Inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de las personas llamadas a dictar la sentencia, del ministerio público, del imputado, su defensor y los demás intervinientes o sus mandatarios.

El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado a todos los efectos por su defensor.

Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo en la forma prevista en el art. 63.

Si el actor civil o el querellante no concurren al debate, o se alejan de la audiencia, se tendrá por abandonada sus instancias, sin perjuicio de que puedan ser compelidos a comparecer como testigos.*

Si el tercero civilmente demandado no comparece al debate o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como estuviera presente.

* Ver arts. 269 y 274. Para esa solución se debe completar este párrafo:

"Si el juicio se lleva a cabo sobre la base exclusiva de la acusación del querellante, continuará el ministerio público como acusador, sin perjuicio de sus conclusiones".

292.Imputado. El acusado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el presidente podrá disponer la vigilancia y cautela necesarias para impedir su fuga o violencias.

Si el acusado estuviere en libertad el tribunal podrá disponer, para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública y hasta su detención, determinando en este caso el lugar en que ella debe cumplirse; podrá también variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna de las medidas previstas en los arts. 200 y siguientes.

293.Publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio, que se efectúe, total o parcialmente, a puertas cerradas, cuando:

1) afecte el pudor u honestidad de alguno de los intervinientes o de alguna persona citada para participar en él;

2) afecte gravemente el orden público, la seguridad del Estado o las buenas costumbres;

3) peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible;

4) esté previsto específicamente.

La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate.

Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. El tribunal podrá imponer a los intervinientes en el acto el deber de guardar el secreto sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constará en el acta del debate.

294.Restricciones al acceso. SE negará el acceso a los menores de dieciséis años o cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia.

El presidente del tribunal podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según las posibilidades de la sala de audiencia.

295.Policía y disciplina. El presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina y policía de la audiencia.

Por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, podrá ordenar el alejamiento de toda persona cuya presencia no fuere necesaria.

Podrá también corregir en el acto con el arresto hasta de dos días o con multa hasta de dos días del sueldo correspondiente a un juez de tribunal de Casación, las infracciones previstas en el artículo siguiente, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencia. Si el infractor es el representante del ministerio público, el imputado, su defensor, las partes civiles, el querellante o sus mandatarios, la medida será dispuesta por el tribunal. En ese caso, rige el art. 291; el ministerio público reemplazará al fiscal expulsado; el actor civil y el querellante nombrarán o reemplazarán inmediatamente al representante y, si no lo hicieren, se tendrá por abandonada la instancia.

296.Deberes de los asistentes. Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no están autorizados para exponer o deban responder a sus preguntas que se les formule. No podrán llevar armas y otros elementos aptos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

297.Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión; se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, computados continuadamente sólo en los casos siguientes:

1) para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso por una revelación inesperada que haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones;

2) cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes sin poder procederse conforme al art. 138 y fuere imposible o inconvenientes continuar el debate, hasta que ellos sean hechos comparecer por la fuerza pública;

3) cuando algún juez, el imputado, su defensor o el representante del ministerio público, se enfermaren a tal extremo que no pudieren continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente o el tribunal se haya constituido, desde la iniciación del debate, con un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera que los suplentes integren el tribunal y permitan la continuación del debate; la regla regirá también en caso de muerte de un juez, del representante del ministerio público y del defensor.

4) Cuando el ministerio público lo requiera para ampliar la acusación o el defensor lo solicite al ampliar el ministerio público la acusación,

siempre que por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente.

Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate, por resolución fundada, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación.

El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para todos los intervinientes.

Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. Los jueces y los representantes del ministerio público podrán intervenir en otros debates durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decida lo contrario, por resolución fundada, en razón de la complejidad del caso.

El presidente ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará el debate.

298.Interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su iniciación.

La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior o que proceda el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección.

299.Oralidad. El debate será oral; de esa forma se producirán las declaraciones del imputado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones fundadas del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate.

Quienes no pudieren hablar o no lo pudieren hacer en el idioma nacional, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia.

El imputado sordo o que no pudiere entender el idioma nacional será dotado de un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate.

300.Lectura. Sólo podrán ser incorporados por su lectura:

1) las actas o dictámenes, cuando todos los intervinientes presten conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan durante el debate, con la aquiescencia del tribunal;

2) las declaraciones anteriores de testigos o del imputado, cuando sea necesario ayudar la memoria de quien declara o para demostrar

contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas en el debate y solicitar las aclaraciones pertinentes;

3) las declaraciones de testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por cualquier obstáculo difícil de superar no puedan declarar en el debate, siempre que esas declaraciones se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos o irreproducibles o de la instrucción suplementaria;

4) las declaraciones o dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe, cuando el acto se haya producido por escrito, según una autorización legal;

5) los dictámenes periciales, siempre que hayan sido cumplidos conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles o de la instrucción suplementaria y a salvo la facultad de los intervinientes o del tribunal de exigir la declaración del perito en el debate,

6) las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate;

7) la denuncia, l aprueba documental o de informes, y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal, secuestro y los reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate.

301.Imposibilidad de asistencia. Los órganos de prueba que no puedan concurrir a debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen, por uno de los jueces del tribunal o por medio de exhorto a otro juez, según los casos, pudiendo participar en el acto los demás intervinientes en el debate.

El tribunal podrá decidir, en razón de la distancia, que las declaraciones testimoniales o los dictámenes periciales se reciban en donde resida el testigo o el perito por un juez comisionado, labrándose el acta o el informe escrito respectivo, que se leerá en la audiencia, salvo cuando quien ofreció la prueba anticipe todos los gastos necesarios para la comparecencia de la persona propuesta.

302.Dirección del debate. El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que corresponda, exigirá las ratificaciones solemnes, moderará la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la libertad de defensa.

Si una disposición del presidente es repuesta como inadmisible por alguno de los intervinientes en el debate, decide el tribunal.

303.Delito en audiencia. Si durante el debate se cometiera un delito, el tribunal ordenará labrar un acta con las indicaciones que correspondan y detendrá al presunto culpable; éste será puesto a disposición del

funcionario del ministerio público que corresponda, remitiéndosele copia de los antecedentes necesarios a fin de que proceda según la ley.

Sección 2ª – Desarrollo

304.Apertura. En el día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Después de verificar la presencia del ministerio público, del imputado y su defensor, y de los demás intervinientes que hubieren sido admitidos, de los testigos, peritos o intérpretes que deben tomar parte, el presidente del tribunal declarará abierto el debate, advierten do al imputado que esté atento a lo que va oír, ordenando la lectura de la acusación y del auto de apertura del juicio.

305.Incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del debate.

En la discusión de las cuestiones incidentales, al ministerio público, al defensor, y a los abogados de los demás intervinientes se les concederá la palabra una única vez, por el tiempo que establezca el presidente.

306.Declaraciones del imputado. Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente recibirá declaración al imputado. Le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá, en principio, que él manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo ser interrogado posteriormente. Podrán interrogarlo los vocales del tribunal, el ministerio público, el querellante, el defensor y las partes civiles, en ese orden.

Si el imputado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, o incurriere en contradicciones respecto de declaraciones anteriores, que se le pondrán de manifiesto, el presidente ordenará la lectura de aquellas declaraciones, siempre que se hubieren observado las reglas pertinentes.

Cuando hubiera declarado sobre el hecho se le podrá formular posteriormente, en el curso del debate, preguntas destinadas a aclarar sus manifestaciones.

307.Declaración de varios imputados. Si los imputados fueren varios, el presidente podrá alejar de la sala de audiencia a los que no declaren en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá informarlos sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia.

308.Facultades del imputado. En el curso del debate, el imputado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si

antes se hubiera abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate. El presidente impedirá cualquier divagación y, si persistiere, podrá proponer al tribunal alejarlo de la audiencia.

El imputado podrá también hablar con su defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda; no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que se le formule. En este momento tampoco se admitirá sugerencia alguna.

309.Ampliación de la acusación. Durante el debate, el ministerio público podrá ampliar la acusación, por inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que modifica la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate, o integra la continuación delictiva, que no hubieren sido mencionados en la acusación o en el auto de apertura de juicio.

En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el presidente procederá a recibir nueva declaración al imputado e informará a todos los intervinientes que tienen derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa.

Los nuevos hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación.

310.Advertencia de oficio. Rige también lo dispuesto en el art. 322, a cuyo efecto el presidente formulará oportunamente la advertencia correspondiente, concediendo a los intervinientes el derecho consignado en el artículo anterior.

311.Recepción de prueba. Después de la declaración del imputado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario alterarlo.

312.Peritos. El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos; si éstos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen los intervinientes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate.

Estas disposiciones son aplicables, en lo pertinente, a los intérpretes.

313.Testigo. Inmediatamente, el presidente procederá a llamar a los testigos, uno a uno, comenzando por los que hubiere ofrecido el ministerio público, continuando por los propuestos por los demás actores y concluyendo con los de los acusados y los del tercero civilmente demandado. El

presidente, sin embargo, podrá alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos.

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continuarán en antesala.

Si fuere imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate; se podrá llevar a cabo confrontaciones entre testigos o entre el testigo y el acusado (careos) o reconstrucciones.

314.Interrogatorio. El presidente, después de interrogar al perito o testigo sobre su identidad personal y las circunstancias necesarias para valorar su testimonio (generales de ley), le otorgará la palabra para que informe todo lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de la prueba. Al finalizar el relato, concederá el interrogatorio a aquel que lo propuso y, con posterioridad, a los demás intervinientes que desean interrogar, en el orden que considere conveniente. Por último, el mismo presidente y los miembros del tribunal podrán interrogar al perito o al testigo, a fin de conocer las circunstancias de importancia para el éxito del juicio.

El presidente moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será reponible, decidiendo inmediatamente el tribunal.

Los peritos y testigos expresarán la razón de sus informaciones y precisarán el origen de la noticia, designando con la mayor precisión posible a los terceros que se la hubieran comunicado.

315.Incomparecencia. Cuando el perito o testigo oportunamente citado no hubiere comparecido, el presidente dispondrá lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviere imposibilitado para concurrir y no pudiere esperarse hasta la superación del obstáculo, o no resultare conveniente la suspensión de la audiencia el presidente consignará a uno de los miembros del tribunal para que la audiencia se lleve a cabo donde esté la persona a interrogar. Todos los intervinientes podrán participar en el acto, según las reglas anteriores.

Se labrará acta, lo más detallada posible, que será firmada por quienes participen en el acto, si lo desean, la que se introducirá por su lectura al debate.

Si el testigo estuviere en algún lugar distante de aquel en el cual se celebra el debate, las reglas anteriores podrán cumplirse por medio del mandamiento o exhorto, pudiendo los intervinientes designar quien los representará ante el juez comisionado o consignar por escrito las preguntas que desean formular.

316.Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de todos los intervinientes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia, según su forma de reproducción habitual.

Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones, quienes podrán ser invitados a reconocerlos o a informar sobre ellos lo que fuere pertinente.

Si para conocer los hechos fuere necesario una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, aun de oficio, y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas.

317.Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar, aun de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad.

También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes; las operaciones periciales necesarias se practicarán en la misma audiencia, cuando fuere posible.

318.Discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al ministerio público, al querellante, al actor civil, a los defensores del imputado, a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en ese orden, imitan sus conclusiones.

Las partes civiles limitarán su informe a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento, el actor civil deberá concluir, fijando su pretensión para la sentencia, incluso, en su caso, el importe de la indemnización. Sin embargo, de conformidad con el imputado y, eventualmente, con el tercero civilmente demandado, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de la sentencia.

Si intervinieren dos representantes del ministerio público o dos abogados por alguno de los demás intervinientes, todos podrán hablar dividiéndose la tarea.

Sólo el ministerio público y el defensor del imputado podrán replicar, corresponderá al segundo la última palabra. La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversarios que antes no hubieren sido objeto del informe.

En caso de manifiesto abuso de la palabra, el presidente llamará la atención al orador, y si éste persistiere, podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones; la omisión implicará incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa.

Por último, el presidente preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra, y cerrará el debate.

Sección 3ª – Sentencia

319.Deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual sólo podrá asistir el secretario. Rigen sólo para los jueces, los arts. 297 y 298, en lo pertinente.

320.Reapertura del debate. Si el tribunal estimare imprescindible, durante la deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, conforme al art. 317, podrá disponer, a ese fin, la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a los intervinientes a la audiencia, ordenándose la citación urgente de los que deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos.

321.Normas para la deliberación y votación. El tribunal apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate; rige el art. 149.

Resolverá por mayoría de votos. Los jueces podrán fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta cuando estuvieren de acuerdo. Las disidencias deberán fundarse expresamente.

El tribunal decidirá primero las cuestiones relativas a su competencia, a la promoción o prosecución de la persecución penal o de la acción civil, cuando se hubieren planteado o hubieren surgido durante el debate. Si se decide proseguir, quien hubiere quedado en minoría deberá deliberar y votar sobre las cuestiones siguientes.

La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena y sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección correspondiente. Si se hubiere ejercido la acción civil, admitirá la demanda, en la forma que corresponda, o la rechazará.

Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces, incluso aquellos cuya opinión haya quedado en minoría. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas o, dentro de una misma clase, penas divisibles o indivisibles, el

tribunal deliberará y votará, en primer lugar, sobre la especie de pena a aplicar decidiendo por mayoría de votos. Si no fuere posible lograr la mayoría se aplicará la sanción o medida intermedia.

Si la pena decidida fuera divisible y no existiere mayoría en cuanto no se obtenga mayoría respecto de la indemnización correspondiente.

322.Sentencia y acusación. La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en la acusación y en el auto de apertura del juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación.

En la condena, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre que no exceda su propia competencia. Empero, el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de apertura del juicio, si previamente no fue advertido sobre la modificación posible de la calificación jurídica; la regla comprende también a los preceptos que se refieren sólo a la pena y a las medidas de seguridad y corrección.

323.Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá:

1) la mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal; cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y, en su caso, del tercero civilmente demandado;

2) la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación, y del auto de apertura del juicio; los daños cuya reparación reclama el autor civil y su pretensión reparatoria;

3) el voto de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;

4) la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado;

5) la parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas;

6) la firma de los jueces; pero si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hará constar en y aquélla valdrá sin esa firma.

324.Pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia, después de ser convocados verbalmente todos los intervinientes en el debate, y el documento será leído ante los que comparezcan.

La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los intervinientes que la requieran. El original del documento se protocolizará.

Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de la sentencia, en la oportunidad se leerá tan sólo su parte resolutiva y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia, sintéticamente, de los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo, a más tardar, dentro de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva.

325.Absolución. La sentencia absolutoria se entenderá libre en todos los casos. Ordenará cuando corresponda, la libertad del acusado y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente, la aplicación de medidas de seguridad y corrección y resolverá sobre las costas.

Para las medidas de seguridad y corrección y las inscripciones rige el artículo siguiente.

326.Condena. La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad y corrección que correspondan. También determinará la remisión o suspensión de la pena, o la condicionalidad de la condena, y, cuando correspondiere, las obligaciones que deberá cumplir el condenado.

En las penas o medidas de seguridad y corrección divisibles fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir su libertad condicional o su rehabilitación; en las penas perpetuas y en las medidas de seguridad y corrección indeterminadas temporalmente, rige la última parte de esta regla.

Fijará también el plazo dentro del cual se deberá pagar la multa.

En su caso, unificará las condenas o las penas, cuando fuere posible.

La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondieren ante los tribunales competentes; decidirá también sobre el decomiso y destrucción, previstos en la ley penal.

Cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en él una nota marginal sobre su falsedad, con indicación del tribunal, del procedimiento en el cual se dictó la sentencia y de a fecha de su pronunciamiento.

327.Acción civil. Cuando se haya ejercido la acción civil y la pretensión se haya mantenido hasta la sentencia, se a ella condenatoria o absolutoria, resolver expresamente sobre la cuestión, fijando la forma de

reponer las cosas al estado anterior o, si fuera el caso, la indemnización correspondiente.

328.Vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia, que habilitan la casación, son los siguientes:

1) que el acusado o las partes civiles no estén suficientemente individualizados;

2) que falte la enunciación de los hechos imputados o la enunciación de los daños y la pretensión reparatoria del actor civil;

3) que falte, sea insuficiente o contradictoria la motivación;

4) que falte o sea incompleta en sus elementos esenciales la parte resolutiva; que falte la fecha o la firma de los jueces, según lo dispuesto en el inc. 6 del art. 323;

5) la inobservancia de las reglas y del plazo previstos en los arts. 319 y 324, último párrafo;

6) la inobservancia de las reglas del art. 322.

Los demás defectos que existieren según las reglas del art. 321, podrán ser subsanados de oficio por el tribunal o por pedido de aclaración del interesado.

329.Acta del debate. Quien desempeñe la función de secretario durante el debate labrará un acta, que contendrá, por lo menos, las siguientes enunciaciones:

1) lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas y de las reanudaciones;

2) el nombre y apellido de los jueces, de los representantes del ministerio público, del imputado y de los demás intervinientes que hubieren participado en el debate, incluyendo defensor y mandatario, con mención del papel que cumplan en él.

3) El desarrollo del debate, con mención del nombre y apellido de los testigos, peritos o intérpretes, con aclaración acerca de si ratificaron solemnemente sus declaraciones o no lo hiciere, y el motivo de ello, designando los documentos leídos durante la audiencia;

4) Las instancias y decisiones producidas en el curso del debate, y las conclusiones finales del ministerio público, del defensor, de los demás intervinientes y del imputado, si la hubiere;

5) La observancia de las formalidades esenciales, con mención de si se procedió públicamente o fue excluida la publicidad, total o parcialmente;

6) Otras menciones previstas por la ley, o las que el presidente ordene por sí o a solicitud de los demás jueces o interviniente; y las protestas de recurrir en casación;

7) La forma en que cumplió el art. 324, con mención de las fechas pertinentes;

8) La firma del presidente y del secretario.

En los casos de prueba compleja el tribunal podrá disponer la versión taquigráfica o la grabación total o pericial del debate, o que se resuma, al final de alguna declaración o dictamen, la parte esencial de ellos, en cuyo caso constará en el acta la disposición del tribunal y la forma en que fue cumplida, pero la versión taquigráfica, la grabación o la síntesis no integrarán los actos del debate.

330.Comunicación del acta. El acta se leerá inmediatamente después de la sentencia ante los comparecientes, con lo que quedará notificada; el tribunal podrá reemplazar su lectura con el mismo acto; al pie del acto se dejará constancia de la forma en que ella fue notificada.

331.Valor del acta. El acta demostrará, en principio, el modo en que se desarrolló el debate, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo.

La falta o insuficiencia de las enunciaciones previstas no originará, por sí misma, un motivo de casación de la sentencia.

Sin embargo, por vía de la casación, e invocándolo en el escrito de interposición del recurso, se podrá probar un enunciado faltante en el acta o la falsedad de un enunciado contenido en ella, que invalide la decisión.

Libro tercero – Impugnaciones

Título I – Disposiciones generales

332.Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea otorgado expresamente. Cuando la ley no distinga, tal derecho corresponderá a todos. Pero únicamente podrá recurrir aquel que invoque y acredite un interés directo en la eliminación, revocación o reforma de la resolución. El ministerio público podrá recurrir en favor del imputado. Las partes civiles podrán recurrir tan sólo en lo concerniente a sus intereses civiles. El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al imputado, pero éste podrá desistir de los recursos interpuestos por aquél, previa consulta con el defensor, quien dejará constancia de ello en el acto respectivo.

333.Interposición. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley.

334.Desistimiento. Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistir de él antes de su resolución, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, respondiendo por las costas.

El defensor podrá desistir de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso del imputado, posterior a la interposición del recurso.

335.Efectos. Cuando en un proceso hubiere varios coimputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales.

También favorecerá al imputado el recurso del tercero civilmente demandado, salvo que sus motivos conciernan a intereses meramente civiles.

La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario.

Título II – Reposición

336.Procedencia y trámite. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda.

Se interpondrá por escrito fundado, dentro del plazo de tres días, y el tribunal lo resolverá previa vista a los interesados, por el mismo plazo.

337.Reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por los intervinientes tan sólo mediante su reposición. En el debate, se interpondrán oralmente y se tramitarán y resolverán inmediatamente, sin suspenderlo, en lo posible.

La reposición durante el juicio equivale a la protesta de recurrir en casación, para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto.

Título III – Casación

Capítulo I – Procedencia

338.Objeto. Además de los casos especialmente previstos, se podrá deducir el recurso de casación contra la sentencia o contra la resolución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción, o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

339.Recurso del querellante por adhesión. El querellante por delito de acción pública podrá interponer recurso de casación contra la sentencia o contra una resolución que ponga fin a la acción, imposibilite que ella continúe o impida su ejercicio; pero su recurso quedará limitado a los mismos agravios por los que recurrió el ministerio público.

Si en el recurso se pretendieren otros agravios o el ministerio público no hubiere recurrido la sentencia en contra del acusado, el querellante podrá, hasta tres días después del vencimiento del plazo para recurrir y con copia de su recurso, señalar las discrepancias al funcionario del ministerio

público que corresponda, según la ley orgánica, pidiéndole que recurra o amplíe el recurso interpuesto.

El ministerio público decidirá y, en su caso, deberá recurrir o ampliar el recurso ya interpuesto, dentro de un plazo idéntico al previsto para la casación, a contar desde la presentación del querellante.

El vencimiento de los plazos aquí previstos hará caducar para el querellante y el ministerio público, de pleno derecho, la facultad de recurrir o ampliar el recurso interpuesto, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el mal desempeño de la función.

340.Adhesión. Quien tenga derecho a recurrir autónomamente en casación y no lo haya hecho, podrá adherir el recurso concedido a otro, dentro del período de emplazamiento ante el Tribunal de Casación. El acto deberá contener todos los demás requisitos exigidos para la interposición del recurso.

El querellante por delito de acción pública no podrá adherir al recurso de otro, sin perjuicio de su intervención en el procedimiento.

341.Forma y plazo. El recurso de casación será interpuesto dentro del plazo de diez días, por escrito, ante el tribunal que dictó la resolución recurrida, con expresión de los fundamentos.

El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo del recurso no podrá invocar otro distinto. Citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados y expresará, también concretamente, cuál es la aplicación que pretende.

***342. Motivos.** El recurso de casación sólo podrá ser fundado en que la sentencia se basa en la sentencia se basa en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal.

Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del pronunciamiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de recurrir en casación, salvo en los casos del artículo siguiente.

*El Código adopta el sistema de única instancia para el juzgamiento de los hechos, según sus bases y conforme a la advertencia ya indicada y, en general, se inclina hacia la integración colegiada de los tribunales de juicio. Empero, en los países en los que, a pesar de la advertencia hecha, se adoptare la integración unipersonal del tribunal de juicio —en lo posible sólo para delitos de menor gravedad—, el art. 342 podrá agregar un párrafo con la siguiente redacción:

"Salvo en los acasos en que corresponda el procedimiento abreviado, también será admisible el recursos de casación contra la sentencia de un

juez unipersonal cuando la decisión fuera manifiestamente contraria a la prueba del debate.

343. Motivos absolutos de casación formal. No será necesaria la protesta previa, cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes:

1) al nombramiento y capacidad de los jueces y a la constitución del tribunal;

2) a la presencia del ministerio público en el debate o de otro interviniente cuya presencia prevé la ley;

3) a la intervención, asistencia y representación del imputado en el debate, en los casos y formas que la ley establece;

4) a la publicidad y continuidad del debate;

5) a los defectos de la sentencia enumerados en el art. 328.

344- Extensión del examen. "Reformatio in peius". El recurso atribuirá al Tribunal de Casación el conocimiento del caso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a los cuales se refieren los motivos.

Cuando la resolución sólo haya sido recurrida por el imputado o por otro en su favor, no podrá ser modificada en su perjuicio.

Los recursos interpuestos por cualquiera de los autorizados a recurrir permitirán modificar o revocar la resolución en favor del imputado, salvo que sus motivos se refieran sólo a intereses civiles, sin relación con la cuestión penal.

Los recursos sólo concernientes a los intereses civiles no permitirán modificar o revocar la resolución en contra del recurrente, si no ha interpuesto el recurso la parte contraria.

Capítulo 2 – Trámite

345.Admisibilidad. El tribunal que dictó la resolución recurrida decidirá sobre los requisitos formales para la procedencia del recurso, expresados en los artículos anteriores.

Si lo admite, remitirá de oficio las actuaciones al Tribunal de Casación, después de haber notificado a todos los intervinientes, emplazándolos para que comparezcan ante ese Tribunal y, en caso, fijen de nuevo domicilio especial, dentro del quinto día siguiente al de la notificación. Este plazo se ampliará en dos días cuando la distancia entre los tribunales sea superior a quinientos kilómetros y en otros dos días cuando esa distancia supere los mil kilómetros.

Si no lo admite, quien recurrió podrá reponer la decisión, limitándose a criticar el fundamento por el cual se rechaza el recurso, resolviendo el tribunal sin más trámite.

Cuando el tribunal insista en su decisión, procederá conforme al segundo párrafo de este artículo, salvo que el recurrente desista del recurso.

El imputado podrá pedir la designación de un defensor de oficio para que mantenga el recurso ante el Tribunal de Casación, derecho sobre el cual será instruido y preguntado expresamente en el acto de la notificación. El defensor de confianza tendrá el mismo derecho cuando el juicio se haya celebrado en un territorio distinto del de la sede del Tribunal de Casación. Ejercida esa facultad, el presidente del tribunal proveerá el reemplazo.

346.Desistimiento táctico. Si en el período de emplazamiento no compareciere el recurrente, el Tribunal de Casación declarará de oficio desierto el recurso, devolviendo, en su caso, las actuaciones.

La adhesión no subsistirá si se declara desiertos todos los recursos interpuestos.

347.Decisión previa. Recibidas las actuaciones y vencido el plazo previsto en el art. 344, el Tribunal de Casación examinará el recurso interpuesto y las adhesiones que se hubieran producido, para decidir, definitivamente, sobre la procedencia formal del recurso. Si lo declara inadmisible procederá conforme al artículo anterior.

348.Preparación del debate. Abierto el recurso, las actuaciones quedarán por seis días en la oficina del tribunal para que los interesados puedan examinarlas.

Vencido ese plazo, el presidente fijará audiencia para informar, con intervalo no menor de diez días, notificando a todos los intervinientes que hayan comparecido.

Rige, además, el art. 290, análogamente.

349.Debate. La audiencia se celebrará con los intervinientes que comparezcan. La palabra será concedida primero al abogado del recurrente. Si existieren varios recursos se conservará el orden del art. 318. Podrán hablar los abogados de quienes no interpusieron el recurso. No se admitirán réplicas. Quienes intervengan en la discusión podrán dejar en poder del tribunal breves notas escritas sobre su informe.

El imputado será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, en ese caso, se le concederá la palabra en último término. Cuando el recurso fuere interpuesto por él o por su defensor, y éste no compareciese, el tribunal procederá a su reemplazo.

Se admitirá que los intervinientes reemplacen su participación en la audiencia por su informe escrito, presentando antes del día de la audiencia.

***350. Prueba.** Cuando el recurso resida en un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que fue llevado a cabo el acto, en contraposición

a lo señalado por el acta del debate o por la sentencia, se podrá ofrecer prueba con ese objeto.

Rigen los arts. 293 y 288, inc. 1. La prueba se ofrecerá al interponer el recurso o al adherirse a él.

La prueba se recibirá en la audiencia, conforme a las reglas que rigen para el juicio, en lo pertinente.

• Los países que prefieren la propuesta alternativa del art. 342 incluirán en el art. 350 el párrafo siguiente:

"Cuando el motivo del recurso consista en la contradicción manifiesta de la decisión con la prueba del debate, admitido el recurso, el tribunal abrirá nuevamente el debate, juzgando sin reenvío. Rigen las reglas de los párrafos II y III de este artículo".

Capítulo 3 – Sentencia

351.Deliberación, votación y pronunciamiento. Terminada la audiencia el tribunal pasará a deliberar, según las reglas del art. 319, en lo pertinente. Si por lo avanzado de la hora o por la importancia y complejidad de las cuestiones planteadas fuere necesario diferir la deliberación y el pronunciamiento, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala y el presidente anunciará ante los comparecientes el día y la hora de la audiencia en la cual se pronunciará la sentencia, fecha que no podrá exceder el plazo de diez días.

La sentencia se pronunciará siempre en audiencia pública, por su lectura; en lo demás, rigen las reglas del art. 324, en lo pertinente.

352.Decisión propia. Si la sentencia acoge el recurso, constatando la inobservancia o la errónea aplicación de la ley que soluciona el caso resuelto, sobre la base intangible de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la resolución recurrida, el Tribunal de Casación decidirá por sí el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate.

353.Reenvío. En los demás casos, anulará, total o parcialmente, la decisión recurrida y ordenará la renovación del trámite por el tribunal competente y desde el momento en que corresponda. Los jueces que concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo trámite.

Cuando la anulación fuere parcial, el tribunal indicará el objeto concreto del nuevo trámite o decisión. La misma regla regirá cuando, según el art. 352, el tribunal haya dispuesto el reenvío por un aspecto parcial del caso, que requiere un nuevo debate.

354.Defectos no esenciales. Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución recurrida, que no influyan en su parte resolutiva,

deberán ser corregidos aunque no provoquen su anulación. De la misma manera serán corregidos los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas.

355.Libertad del imputado. El Tribunal de Casación ordenará inmediatamente la libertad del imputado, cuando por efecto de su decisión, deba cesar la detención.

Durante el trámite del recurso, corresponde también al Tribunal de Casación la aplicación de todas las reglas que regulan la libertad del imputado.

Capítulo 4 – Procedimiento abreviado

356.Casos. Se procederá conforme a estas reglas cuando se recurra:

1) cualquier resolución de las previstas en el art. 338 que no sea una sentencia;

2) la sentencia absolutoria, cuando el ministerio público o el querellante del juicio por delito de acción privada, en la oportunidad prevista por el art. 318, requiera condena condicional o una pena privativa de libertad que no supere los dos años, multa o inhabilitación; si se requiere otra clase de pena juntamente con la privativa de libertad, el procedimiento será establecido conforme a esta última;

3) la sentencia condenatoria condicional o la que no supere los dos años de pena privativa de libertad, o imponga multa o inhabilitación; si se impone otra clase de pena juntamente con la privativa de libertad, el procedimiento será establecido conforme a esta última;

4) la sentencia obtenida mediante el procedimiento abreviado.

Se seguirá las reglas comunes cuando se trate del procedimiento con menores o del juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección.

En los casos de conexión, regirán las reglas comunes para todos los recursos cuando cualquiera de los interpuestos habilite su aplicación.

El recurso relativo a la acción civil se regirá por este procedimiento abreviado, salvo que se recurra la sentencia penal y ese recurso habilite la aplicación de las reglas comunes.

357.Trámite especial. El procedimiento quedará modificado de la manera siguiente:

1) en el escrito de interposición, el recurrente fijará también el domicilio especial previsto en el art. 345;

2) no se emplazará al recurrente a comparecer ante el Tribunal de Casación, ni estará permitida la adhesión;

3) El Tribunal de Casación dictará sentencia sin debate, sólo a la vista de los recursos impuestos, decidiendo, en primer lugar, sobre la procedencia formal del recurso; la sentencia será pronunciada por escrito, omitiendo la audiencia pública, en el plazo previsto en el art. 351, párr. I, y expresará sintéticamente los fundamentos de la decisión;

4) Si se tratare del caso del art. 350, citará a todos los intervinientes a la audiencia, les dará oportunidad de informar sobre la prueba y dictará sentencia conforme el inciso 3 de este artículo.

358.Conversión. Si el Tribunal de Casación, al examinar la procedencia del recurso, advierte que corresponde seguir el trámite común, comunicará su decisión a todos los intervinientes, los emplazará para que comparezcan ante él y procederá, en lo sucesivo, según los arts. 346 y siguientes.

En el caso inverso, continuará procediendo según las reglas comunes.

Título IV – Revisión

359.Objeto. La revisión procederá contra las sentencias firmes, sin limitación temporal y sólo en favor del condenado o de aquel a quien se le hubiera impuesto una medida de seguridad y corrección.

La revisión sólo procederá en disfavor del imputado, contra el sobreseimiento (absolución anticipada) o la sentencia absolutoria fundados en la extinción de la persecución penal por muerte del imputado, cuando se sostenga que él vive. En ese caso, comprobada la falsedad de la declaración o registro, se revocará la decisión anterior, y el procedimiento se reiniciará, según su estado.

360.Facultad de impugnar. Podrán promover la revisión en favor del imputado:

1) el condenado o aquel a quien se le hubiera aplicado una medida de seguridad y corrección, aun cuando ellas hubieren sido ejecutadas total o parcialmente; si es incapaz, sus representantes legales; y si ha fallecido, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos.

2) El ministerio público;

3) El tribunal de ejecución en el caso previsto por el inciso 5, párr. II, del artículo siguiente.

En el supuesto del párr. II, del artículo anterior, podrán promover la revisión el ministerio público o el querellante.

361.Motivos. Procederá la revisión cuando nuevos hechos, o elementos de prueba, por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados en el procedimiento, sean idóneos para fundar la absolución del condenado o una condena menos grave, por aplicación de un precepto

penal más benigno, u otra decisión sobre una medida de seguridad y corrección, esencialmente diversa de la anterior.

Son motivos especiales de revisión:

1) la presentación después de la sentencia, de documentos decisivos ignorados, extraviados o que no se los hubiere incorporado al procedimiento;

2) la demostración de que un elemento de prueba decisivo, apreciado en la sentencia, carece del valor probatorio asignado, por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación;

3) la demostración de que en sentencia ha participado un juez que ha cometido, en relación a la causa, una grave infracción a sus deberes, amenazada con pena o con exclusión del cargo, aunque fuere imposible proceder por una circunstancia sobreviniente y siempre que en la infracción no haya participado el mismo condenado;

4) la anulación o revisión firme de una sentencia judicial en la cual se fundaba la sentencia penal;

5) la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia.

362.Forma. La revisión deberá, para ser admitida, ser promovida por escrito ante la secretaría del Tribunal de Casación o de la Corte Suprema, según los casos, con la referencia concreta de los motivos en que se funda y de las disposiciones legales aplicables, debiéndose acompañar, en el mismo momento, toda la prueba documental que se invoca o indicar el lugar o archivo donde ella está.

Cuando la demostración del motivo que sustenta la revisión no surge de una sentencia judicial irrevocable, el recurrente deberá indicar todos los medios de prueba que acrediten la verdad de sus afirmaciones.

363.Efectos. La interposición de la revisión no suspende la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del trámite, el tribunal competente podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer la libertad del imputado, incluso aplicando, si correspondiere, una medida de coerción.

364.Admisibilidad. Recibida la impugnación, el tribunal competente decidirá sobre su procedencia. Podrá sin embargo, si el caso lo permite, otorgar un plazo al impugnante para que complete los requisitos faltantes.

El imputado podrá pedir la designación de un defensor de oficio para que mantenga la revisión, derecho sobre el cual será instruido al notificársele la primera resolución sobre la admisibilidad de la impugnación. Si el imputado no nombra defensor, el tribunal lo designará de oficio.

La muerte del condenado durante el curso de la revisión no obstará a la prosecución del trámite; si no compareciere, en el plazo de treinta días, alguna de las personas designadas en el art. 360, a quienes el tribunal

comunicará la apertura de la revisión, el defensor asumirá la posición del fallecido.

365.Instrucción. Inmediatamente después de admitida la impugnación, el tribunal dará intervención al ministerio público o al condenado, según el caso, y dispondrá, si fuere necesario, la recepción de los medios de prueba que ofreció el recurrente o que crea útiles para la averiguación de la verdad.

Las declaraciones e informes se protocolizarán en acta, pudiendo el tribunal delegar la instrucción en alguno de sus miembros.

366.Audiencia. Concluida la instrucción se designará una audiencia para que se expidan quienes intervienen en la revisión, pudiendo ellos acompañar notas escritas que funden su petición.

367.Decisión. El tribunal, al pronunciarse sobre la revisión, la rechazará o anulará la sentencia.

Si anula la sentencia, remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciará directamente la sentencia definitiva.

En todo caso, rige la regla del art. 344, párr. II.

368.Nuevo juicio. El nuevo juicio será tramitado conforme a las reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán fundarse en una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso, con independencia de los motivos que tornaron admisibles la revisión.

369.Efectos de la sentencia. La sentencia ordenará, según el caso, la libertad del imputado, la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, la cesación de la inhabilitación, la medida de seguridad y corrección que corresponda o practicará un nuevo cómputo.

También podrá pronunciarse, a instancia, sobre la indemnización prevista en los arts. 241 y ss.; la reparación sólo se podrá conceder al condenado o, después de su muerte, a los herederos forzosos que lo solicitaren.

370.Fracaso de la impugnación. Ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia confirmatoria de la anterior, perjudicarán la facultad de peticionar nuevamente la revisión, fundada en elementos distintos; pero las costas de una revisión rechazada estarán siempre a cargo de quien la interponga, salvo el caso del ministerio público.

LIBRO CUARTO – PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Título I – Procedimiento abreviado

371.Admisibilidad. Si el ministerio público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a dos años de privación de libertad, o de

una pena no privativa de libertad, aun en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el tribunal del procedimiento intermedio.

Para ello, el ministerio público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descripto en la acusación y su participación en él, y la vía propuesta.

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de esta regla a alguno de ellos.

372.Trámite posterior. El tribunal oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite.

El tribunal podrá absolver o condenar, según corresponda, fundando su resolución en el hecho descrito en la acusación, admitido por el imputado; pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el ministerio público. Rigen, en lo pertinente, las reglas de la sentencia.

Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común, para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la requerida, rechazará el requerimiento y emplazará al ministerio público para que concluya la investigación y requiera lo que corresponda. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al ministerio público durante el debate.

373.Efectos. Contra la sentencia será sólo admisible el recurso de casación, interpuesto por el ministerio público o por el imputado y su defensor.

El querellante, o quien sin éxito, pero con derecho, haya pretendido serlo durante el procedimiento preparatorio, tendrá las facultades previstos en los arts. 339 y 340; no podrá, sin embargo, agraviarse por la vía elegida o pretender la imposición de una pena superior a la requerida por el ministerio público.

La acción civil no será decidida y se podrá deducir nuevamente ante el tribunal competente. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de casación, con las limitaciones del art. 332 y sólo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior.

Título II – Juicio por delito de acción privada

374.Querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, formulará acusación por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal competente par el juicio, indicando el nombre y domicilio del querellado y cumpliendo con la forma y el contenido previstos en los arts. 79 y 263.

Si el querellante ejerciere la acción civil cumplirá con los arts. 94 y 270 párr. II. Se agregará, para cada querellado, una copia del escrito y del poder.

375.Inadmisiblidad. La querella será desestimada por auto fundado cuando sea manifiesto que el hecho no constituye un delito, cuando no se pueda proceder o faltare alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior.

En ese caso, se devolverá al querellante el escrito y las copias acompañadas, con testimonio de la resolución judicial. El querellante podrá repetir la querella, corrigiendo sus defectos, si fuere posible, con mención de la desestimación anterior La omisión de este dato se considerará falta grave.

376.Investigación preparatoria. Sin embargo, cuando no fuere posible identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio, o cuando fuere imprescindible para describir clara, precisa y circunstanciadamente el hecho punible llevar a cabo una investigación preliminar, el querellante lo requerirá en el escrito, indicando las medidas pertinentes. El tribunal prestará el auxilio necesario, si correspondiere.

Clausurada la investigación, el querellante deberá completar su acusación, con las copias previstas en el art. 374.

377.Conciliación. Admitida la querella, el tribunal convocará a una audiencia de conciliación, remitiendo al querellado una copia de la acusación y del poder, en su caso.

La audiencia será celebrada ante un juez o un funcionario judicial letrado que designe el tribunal y dará oportunidad para que querellante y querellado dialoguen libremente en busca de un acuerdo. El resultado de la audiencia constará en acta y se consignará lo que los intervinientes soliciten. Por acuerdo entre querellante y querellado se podrá designar a la persona que propongan como amigable componedor, quien presenciará la audiencia y tendrá intervención en ella, con el fin de lograr un acuerdo.

Querellante y querellado asistirán personalmente a la audiencia y se permitirá la presencia de sus letrados. Cuando alguno de ellos resida en el extranjero podrá ser representado por mandatario especial con las facultades suficientes para conciliar.

378. Imputado; defensor. Si el imputado concurriere a la audiencia de conciliación sin defensor se procederá conforme al art. 5. Si no concurriere, debidamente citado y justificare su inasistencia, se le designará de oficio un defensor letrado y el procedimiento seguirá su curso.

Salvo en la audiencia de conciliación y en los actos posteriores de carácter personal o cuando se requiera su presencia, el imputado podrá ser representado durante todo el procedimiento por un mandatario con poder especial.

Cuando el imputado no concurrió a la audiencia de conciliación, el tribunal previo a ordenar la citación a juicio, lo hará comparecer para cumplir con las reglas impuestas por el párr. I de este artículo y por los arts. 32 y 33, advirtiéndole sobre su sujeción al procedimiento.

379.Medidas de coerción. No se podrá ordenar medidas de coerción personal, salvo las dispuestas en el art. 138, y las enumeradas en el art. 209, sólo cuando existieren motivos para afirmar que intentará la fuga o entorpecerá la averiguación de la verdad. Rigen, en este caso, los arts. 218 y 220 y será competente para la decisión el tribunal de juicio.

Rigen, también en lo pertinente, los arts. 222 a 224.

380.Procedimiento posterior. Finalizadas las diligencias del art. 378, que correspondieren, el tribunal citará a juicio en forma análoga a lo dispuesto en el art.

276. En las causas por delito de acción privada, el término final para la incorporación forzosa o espontánea del tercero civilmente demandado coincide con el vencimiento del plazo de citación a juicio; son aplicables las reglas respectivas y sobre la cuestión decidirá el tribunal, antes de fijar la audiencia del debate.

En lo demás, rigen las disposiciones comunes. El querellante tendrá las facultades y obligaciones del ministerio público; podrá ser interrogado, pero no se le requerirá ratificación solemne. En el juicio por adulterio, la audiencia se llevará a cabo a puertas cerradas.

381.Abandono de la querella. Se considerará abandonada la querella y se archivará el proceso cuando:

1) el querellante no instare el procedimiento dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la disposición del tribunal que le señala la paralización del procedimiento;

2) el querellante o su mandatario no concurrieren a la audiencia de conciliación o del debate, o se ausentaren durante su desarrollo, sin justa causa, la que deberá acreditar siempre antes de la iniciación de la audiencia o durante su desarrollo, salvo si fuere absolutamente imposible, en cuyo caso lo harán inmediatamente a la desaparición del impedimento;

3) muerto o incapacitado el querellante no concurrieren a proseguir la persecución quienes estuvieren autorizados para ello, según las reglas respectivas de la ley penal, en el plazo de sesenta días posteriores a la notificación cursado a los autorizados; cuando se desconociere quiénes pueden estar autorizados a proseguir la persecución o su domicilio, se avisará públicamente sobre la existencia del procedimiento, la muerte o incapacidad del querellante, el término del plazo para comparecer y las consecuencias de la incomparecencia.

382.Renuncia, retractación y explicaciones satisfactorias. La retractación oportuna, las explicaciones satisfactorias, la renuncia del agraviado u otra causa similar de extinción de la acción penal, prevista en la ley, provocarán, inmediatamente, el sobreseimiento.

Título III – Procedimiento con menores

383.Reglas especiales. En la investigación y juzgamiento de los hechos punibles en los cuales intervenga como imputado un menor de veintiún años, se procederá con arreglo a las reglas comunes de este Código, salvo las establecidas a continuación:

1. El ministerio público o el tribunal competente que intervenga en un procedimiento relativo a un menor de dieciocho años al momento del hecho, víctima o imputado de un delito, lo comunicarán enseguida al tribunal de menores, con todos los datos y elementos se que disponga, para que asuma la tutela prevista en las leyes especiales, si correspondiere.

2. La prisión preventiva de un menor de dieciocho años sólo procederá en casos excepcionales, cuando no exista otra manera de asegurar la sujeción del imputado al procedimiento o la averiguación de la verdad, y se cumplirá en el establecimiento que disponga el tribunal de menores, al cual el menor será entregado; el tribunal podrá proponer la revocación o la sustitución de la medida de coerción y el examen de la prisión del menor se hará a la vista de los informes mensuales que remita ese tribunal; después de los dieciocho años y hasta los veintiuno, regirán las disposiciones comunes, pero la prisión se cumplirá en establecimientos que garanticen la separación de los mayores, según indique el tribunal de menores.

3. El debate se realizará a puertas cerradas.

4. Quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, o en su caso, la guarda, o el cónyuge, podrán asistir al debate y tendrán en él todas las facultades otorgadas al imputado, salvo los actos de carácter personal.

5. Se podrá disponer que el imputado no presencie los actos del debate, salvo cuando fuere imprescindible su comparecencia previo informe del tribunal de menores, si la presencia ocasionare daño para su salud.

6. El debate será presenciado por un delegado del tribunal de menores quien, previo a la discusión final, informará sobre el menor.

7. En los delitos cometidos por menores de dieciocho años, la sentencia relativa al menor se limitará al fallo sobre la culpabilidad (absolución o condena), procediéndose conforme al art. 287; firme la sentencia, se remitirá testimonio al tribunal de menores, el cual, en su caso, procederá según la ley respectiva, siempre previo debate oportuno sobre la cuestión de la pena.

8. Cuando se solicite el procedimiento abreviado o se postule la suspensión del procedimiento, el tribunal escuchará obligatoriamente a quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la guarda, al cónyuge, y a un delegado del tribunal de menores, previo a decidir sobre el punto; para el procedimiento abreviado rige el inciso anterior, análogamente.

Todo lo relativo a la tutela, disposición y vigilancia de menores sometidos a un procedimiento o víctimas de un hecho punible, y a la imposición y ejecución de una pena o medida de seguridad y corrección, será competencia del tribunal de menores, el cual, durante el proceso de conocimiento, mantendrá informado al tribunal competente para sustanciarlo o al ministerio público.

Se guardará absoluta reserva sobre todo lo relacionado con el procedimiento contra un menor, y las decisiones judiciales sólo serán publicables por interés científico, omitiendo toda mención que permita identificar al menor.

Título IV – Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección

384. Procedencia. Cuando el ministerio público, después del procedimiento preparatorio, estime que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas en el art. 263, indicando también los antecedentes y circunstancias que motiva el pedido.

385.Remisión y reglas especiales. El procedimiento se regirá por las reglas comunes, salvo las establecidas a continuación:

1. Cuando el imputado se halle en la situación prevista en el art. 34, sus facultades serán ejercidas por su curador o por quien designe el tribunal, con quien se entenderán todas las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal.

2. En el caso previsto por el inciso anterior, no regirá lo dispuesto por el art. 264, si fuere imposible su cumplimiento.

3. El tribunal competente para el procedimiento intermedio podrá también rechazar el requerimiento, por entender que corresponde la aplicación de una pena, y ordenar la acusación.

4. El juicio aquí previsto nunca se tramitará juntamente con un juicio común.

5. El debate se realizará a puertas cerradas, sin la presencia del imputado, cuando fuere imposible a causa de su estado o inconveniente por razones de orden, seguridad o salud, caso en el cual será representado a todos los efectos por su curador; regirá lo dispuesto en el inc. 2,

análogamente, y el imputado podrá ser traído al debate cuando su presencia fuere indispensable.

6. El debate será presenciado por un delegado del tribunal a cuyo cargo estuviere el control de la curatela, quien, previo a la discusión final, informará sobre el imputado.

7. La sentencia versará sobre la absolución os sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección.

8. No serán de aplicación las reglas referidas al procedimiento abreviado.

386.Transformación y advertencia. Si después de la apertura del juicio resulta posible la aplicación de un apena, el tribunal advertirá al imputado en la forma prevista por el art. 310. Rigen, análogamente, los arts. 309 y 322.

387.Medidas de coerción. La internación provisional y las demás medidas de coerción aplicables serán confiadas en su ejecución al tribunal a cuyo cargo estuviere el control de la curatela, el cual, durante el proceso de conocimiento, mantendrá informado al tribunal competente.

APÉNDICE I

*Ver art. 40, al pie, para los países cuya legislación básica permita concebir el procedimiento contra ausentes. Sin embargo, su aplicación no es recomendable (principio de inviolabilidad de la defensa), al menos para las persecuciones penales que tienen como objeto un delito. Exceptúase de la recomendación al procedimiento por contravenciones, que este Código no regula en su texto general (ver, sobre contravenciones, el Apéndice final).

PROCEDIMIENTO CONTRA AUSENTES

1. Ausente. Será considerado ausente el imputado, cuando se desconozca su domicilio o residencia, cuando resulte imposible citarlo o hacerlo comparecer en el procedimiento, o cuando sea declarado rebelde y no purgue su rebeldía.

2. Procedencia. El ministerio público podrá acusar a un ausente y requerir para él la apertura del juicio, cuando la escala penal aplicable al objeto del procedimiento no supere el límite de la condena condicional o de la suspensión condicional de la pena, o se tratare de pena no privativa de libertad.

El ministerio público podrá requerir la continuación del debate contra un ausente, hasta su terminación, cuando su rebeldía se produzca durante

el debate y él ya haya prestado declaración sobre la acusación, siempre que el tribunal no considere necesaria su presencia.

3. **Reglas de procedimiento.** Se aplicarán las reglas comunes o especiales según corresponda, con las siguientes:

1. En el primer caso del artículo anterior el acusado será citado públicamente al debate, al menos con una anticipación no menor de diez días, a contar desde la fecha de la primera publicación.

2. El defensor lo representará durante el procedimiento.

3. Serán también admitidos como representantes del acusado el cónyuge, los hijos, los padres, los nietos, los abuelos y los hermanos, quienes podrán ejercer todos los derechos que a él le corresponden, unificándose la representación por el tribunal en caso de concurso de varios parientes.

4. La sentencia debe señalar que el debate se produjo en ausencia del acusado y la razón de ello; puede ser ejecutada y dada a conocer públicamente.

4. **Revisión facilitada.** Si el condenado es aprehendido o se presenta voluntariamente le será notificada íntegramente la sentencia obtenida después del debate, el acta del debate también, si la sentencia fue recurrida, la dictada por el Tribunal de Casación; en ese mismo acto será instruido acerca de su derecho de designar un defensor y sobre el plazo para interponer la revisión del procedimiento. Rige el art. 5, párr. II; el nombramiento de defensor se producirá de inmediato, salvo prórroga solicitada por el condenado para designarlo, cuyo plazo fijará el tribunal.

Dentro del plazo de diez días, a contar desde el momento en el que el defensor sea designado, el condenado y su defensor puede requerir la revisión del procedimiento, con sujeción a las reglas del recurso respectivo. Se ordenará el nuevo juicio, cuando se ofrezca nuevas pruebas o se sostenga la inexistencia de alguno de los presupuestos que fundan la condena. La sentencia sólo será modificada con fundamento en los nuevos elementos de prueba o en la demostración de la inexistencia de alguno de los presupuestos que la fundaban.

APÉNDICE II

Aquellos países que decidan, incluso por imposición de reglas fundamentales de sus sistemas jurídicos, incorporar ciudadanos a la labor de juzgar, integrando los tribunales de juicio con jueces accidentales, podrán incorporar las reglas procesales siguientes. El esquema deja de lado los problemas de organización del jurado, pues, en general, la organización judicial no es una materia incluida en este Código. Se puede adoptar un sistema de jurado que separe el veredicto de los jurados, de la sentencia de los jueces profesionales, al estilo del modelo anglosajón, o del sistema

del jurado escabinado, que supone la integración de un único colegio sentenciador, con participación de jueces profesionales (permanentes) y legos (accidentales), según el modelo que prevalece en Europa continental.

JUICIO POR JURADOS (A)

1. **Remisión.** Cuando, según la ley de organización judicial, corresponda integrar el tribunal con jurados, se aplicarán las reglas comunes, con las modificaciones que establecen los artículos siguientes.

2. *** Integración del colegio de jurados.** Dictado el auto de apertura del juicio, la oficina correspondiente hará conocer a los intervinientes una lista de jurados, constituida por el triple de los miembros necesarios para integrar el colegio.

Cada interviniente, incluidos el ministerio público, podrá, en el plazo de cinco días, recusar sin causa al número de jurados resultante de dividir la mitad de la lista por el número de intervinientes.

Depurada la lista, serán sorteados los jurados que integrarán el colegio; los demás podrán ser incorporados como suplentes, para los casos previstos en los arts. 282 y 297, inc. 3.

La lista definitiva de jurados será notificada en la oportunidad prevista por el art. 282 y ellos podrán ser recusados conforme a esa regla.

* La regla supone normas de organización judicial que fijen la competencia, determinen las condiciones para ser jurado, establezcan el número de jurados que integran el colegio y organicen su reclutamiento.

La aparente complejidad en la determinación del número de jurados, que la regla propuesta contiene, obedece a la necesidad de utilizar una fórmula abstracta, que sirva para cualquier integración numérica del colegio de jurados: podrá ser reemplazada por un número exacto, una vez determinada la integración numérica del colegio sentenciador.

3. **Incorporación.** El colegio de jurados se incorporará en la oportunidad prevista por el art. 304, antes de que el presidente declare abierto el debate, mediante el compromiso solemne siguiente:

"Asumo el compromiso de juzgar este caso, en nombre del pueblo, con justicia e imparcialidad, según la Constitución y la ley".

4. **Debate.** El debate será dirigido por un juez permanente y letrado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina de la audiencia previstas en las reglas comunes.

El debate se dividirá, obligatoriamente, según la forma prevista en el art. 287. La primera parte servirá de base para el veredicto del colegio de jurados. La segunda parte servirá para que el tribunal de jueces

permanente se determine las consecuencias jurídicas del veredicto del colegio de jurados.

5. **Propuesta de veredicto.** Los intervinientes, en la oportunidad prevista por el art. 318, culminarán su informe proponiendo al jurado su veredicto. La propuesta se deberá formular en términos claros, concretos y concisos; describirá el hecho que juzgará el colegio de jurados, con la limitación establecida en el art. 322, o, de la misma manera, negará su existencia, total o parcialmente, o la participación del imputado en él, expresando la decisión que se espera del jurado. No se podrán formular propuestas alternativas.

Antes de autorizar que el colegio de jurados pase a deliberar, el tribunal de jueces permanentes analizará las propuestas de veredicto y, si alguna merece objeción, intimará al interviniente respectivo para que la ajuste, según las reglas del párrafo anterior. Si el interviniente no ajusta su propuesta, conforme a la admonición del tribunal, caduca su facultad de proponer, que quedará desierta por declaración del tribunal.

El hecho descripto en la acusación, según el auto de apertura, y en la ampliación de la acusación, si existiere, más el veredicto de culpabilidad que ellos suponen, conforme a su sentido, se considerará siempre como una propuesta de veredicto.

Las propuestas de los intervinientes se harán constar en el acta del debate.

6. **Deliberación.** Clausurado el debate, el tribunal entregará las propuestas, incluida la contenida en la acusación, al colegio de jurados, que pasará a deliberar en sesión secreta y continua. En el mismo momento, instruirá a los jurados sobre las normas que rigen la deliberación.

El colegio de jurados, elegirá su presidente y, bajo su dirección, analizará las propuestas. Decidirá por el voto coincidente de dos tercios del número de sus integrantes. Admitirá, total o parcialmente, alguna de la propuesta y expresará su veredicto de culpabilidad o inocencia. La sesión terminará cuando se consiga un veredicto.

Rige el art. 320, en cuyo caso el presidente del jurado solicitará al tribunal que reabra el debate y adopte las medidas pertinentes.

7. **Pronunciamiento del veredicto.** Logrado el veredicto, el colegio de jurados se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia y, por intermedio de su presidente, leerá el veredicto. En primer término declarará, en nombre del pueblo, culpable o inocente al imputado; después leerá la propuesta que admite y, en su caso, expresará las modificaciones parciales; por último, dará a conocer el resultado de la votación que logró el veredicto.

Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados.

8. **Debate posterior.** Si el veredicto fuere de culpabilidad, el debate continuará con la recepción de los medios de prueba que se hubieren ofrecido para individualizar la pena, la medida de seguridad y corrección y, eventualmente, la reparación civil correspondiente.

Terminada la recepción de la prueba, el presidente del tribunal procederá conforme al art. 318, pero los informes se limitarán a fundar las consecuencias jurídicas del veredicto del colegio de jurados.

Si el veredicto fuere de inocencia no se realizará del debate posterior, salvo cuando se hubiere planteado la acción civil, en cuyo caso el debate y la sentencia sólo versarán sobre ella.

9. **Sentencia.** La sentencia del tribunal se ajustará a las reglas del art. 323, con la siguiente modificación: en lugar de la enunciación de los hechos y de la fundamentación de ese juicio, transcribirá las propuestas finales de los intervinientes y el veredicto del colegio de jurados.

El veredicto de inocencia será obligatorio para el tribunal.

Si el veredicto de culpabilidad, conforme a la ley penal, no permite la aplicación de una pena o medida de seguridad y corrección, el tribunal absolverá; si el tribunal decidiere la exención o remisión de la pena, condenará según el veredicto de culpabilidad y expresará su decisión sobre la pena o medida de seguridad y corrección. En lo demás, se aplicarán los arts. 325, 326 y 327.

Rige el art. 328, analógicamente, según las modificaciones introducidas en este título.

10. **Casación.** Se aplicarán las reglas del recurso de casación; constituirá un motivo absoluto de casación la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución del colegio de jurados y a la capacidad de sus miembros.

11. **Revisión.** Se aplicarán las reglas comunes, pero, cuando se fundare la revisión en los motivos previstos por los incisos 2 y 4 del art. 361, la decisión sobre la admisibilidad sólo tendrá en cuenta la incorporación de esos elementos de prueba al debate sobre la culpabilidad.

Si se opta por el jurado escabinado, bajo el mismo título deberá incorporarse la regla siguiente.

JUICIO POR JURADOS (B)

1. **Remisión.** Cuando, según la ley de organización judicial, corresponda integrar el tribunal con jurados, se aplicarán las reglas comunes, con las modificaciones siguientes:

2. **Integración del colegio de jurados.** Dictado el auto de apertura del juicio, la oficina correspondiente hará conocer a los intervinientes una lista de jurados, constituida por el triple de los miembros necesarios para integrar el colegio.

Cada interviniente, incluidos el ministerio público, podrá, en el plazo de cinco días, recusar sin causa al número de jurados resultante de dividir la mitad de la lista por el número de intervinientes.

Depurada la lista, serán sorteados los jurados que integrarán el colegio; los demás podrán ser incorporados como suplentes, para los casos previstos en los arts. 282 y 297 inc. 3.

La lista definitiva de jurados será notificada en la oportunidad prevista por el art. 282 y ellos podrán ser recusados conforme a esa regla.

* La regla supone normas de organización judicial que fijen la competencia, determinen las condiciones para ser jurado, establezcan el número de jurados que integran el colegio y organicen su reclutamiento.

La aparente complejidad en la determinación del número de jurados, que la regla propuesta contiene, obedece a la necesidad de utilizar una fórmula abstracta, que sirva para cualquier integración numérica del colegio de jurados: podrá ser reemplazada por un número exacto, una vez determinada la integración numérica del colegio sentenciador.

3. **Incorporación.** El colegio de jurados se incorporará al tribunal en la oportunidad prevista por el art. 304, antes de que el presidente declare abierto el debate, mediante el compromiso solemne siguiente:

"Asumo el compromiso de juzgar este caso, en nombre del pueblo, con justicia e imparcialidad, según la constitución y la ley".

4. **Debate.** El debate será dirigido por un juez permanente y letrado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina de la audiencia previstas en las reglas comunes.

El debate se dividirá, obligatoriamente, según la forma prevista en el art. 287. La primera parte servirá de base para el veredicto del colegio de jurados. La segunda parte servirá para que el tribunal de jueces permanentes determine las consecuencias jurídicas del veredicto del colegio de jurados.

5. **Propuesta del veredicto.** Los intervinientes, en la oportunidad prevista por el art. 318, culminarán su informe proponiendo al jurado su veredicto. La propuesta se deberá formular en términos claros, concretos y concisos; describirá el hecho que juzgará el colegio de jurados, con la limitación establecida en el art. 322, o, de la misma manera, negará su existencia, total o parcialmente, o la participación del imputado en él, expresando la decisión que se espera del jurado. No se podrán formular propuestas alternativas.

Antes de autorizar que el colegio de jurados pase a deliberar, el tribunal de jueces permanentes analizará las propuestas de veredicto y, si alguna merece objeción, intimará al interviniente respectivo para que la ajuste, según las reglas del párrafo anterior. Si el interviniente no ajusta su propuesta, conforme a la admonición del tribunal, caduca su facultad de proponer, que quedará desierta por declaración del tribunal.

El hecho descripto en la acusación, según el auto de apertura, y en la ampliación de la acusación, si existiere, más el veredicto de culpabilidad que ellos suponen, conforme a su sentido, se considerará siempre como una propuesta de veredicto.

Las propuestas de los intervinientes se harán constar en el acta del debate.

6. **Deliberación.** Clausurado el debate, el tribunal entregará las propuestas, incluida la contenida en la acusación, al colegio de jurados, que pasará a deliberar en sesión secreta y continua. En el mismo momento, instruirá a los jurados sobre las normas que rigen la deliberación.

El colegio de jurados, elegirá su presidente y, bajo su dirección, analizará las propuestas. Decidirá por el voto coincidente de dos tercios del número de sus integrantes. Admitirá, total o parcialmente, alguna de las propuestas y expresará su veredicto de culpabilidad o inocencia. La sesión terminará cuando se consiga un veredicto.

Rige el art. 320, en cuyo caso el presidente del jurado solicitará al tribunal que reabra el debate y adopte las medidas pertinentes.

7. **Pronunciamiento del veredicto.** Logrado el veredicto, el colegio de jurados se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia y, por intermedio de su presidente, leerá el veredicto. En primer término declarará, en nombre del pueblo, culpable o inocente al imputado; después, leerá la propuesta que admite y, en su caso, expresará las modificaciones parciales; por último, dará a conocer el resultado de la votación que logró el veredicto.

Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados.

8. **Debate posterior.** Si el veredicto fuere de culpabilidad, el debate continuará con la recepción de los medios de prueba que se hubieren ofrecido para individualizar la pena, la medida de seguridad y corrección y, eventualmente, la reparación civil correspondiente.

Terminada la recepción de la prueba, el presidente del tribunal procederá conforme al art. 318, pero los informes se limitarán a fundar las consecuencias jurídicas del veredicto del colegio de jurados.

Si el veredicto fuere de inocencia no se realizará del debate posterior, salvo cuando se hubiere planteado la acción civil, en cuyo caso el debate y la sentencia sólo versarán sobre ella.

9. **Sentencia.** La sentencia del tribunal se ajustará a las reglas del art. 323, con la siguiente modificación: en lugar de la enunciación de los hechos y de la fundamentación de ese juicio, transcribirá las propuestas finales de los intervinientes y el veredicto del colegio de jurados.

El veredicto de inocencia será obligatorio para el tribunal.

Si el veredicto de culpabilidad, conforme a la ley penal, no permite la aplicación de una pena o medida de seguridad y corrección, el tribunal absolverá; si el tribunal decidiere la exención o remisión de la pena, condenará según el veredicto de culpabilidad y expresará su decisión sobre la pena o medida de seguridad y corrección. En lo demás, se aplicarán los arts. 325, 326 y 327.

Rige el art. 328, analógicamente, según las modificaciones introducidas en este título.

10. **Casación.** Se aplicarán las reglas del recurso de casación; constituirá un motivo absoluto de casación la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución del colegio de jurados y a la capacidad de sus miembros.

11. **Revisión.** Se aplicarán las reglas comunes, pero, cuando se fundare la revisión en los motivos previstos por los incs. 2 y 4 del art. 361, la decisión sobre la admisibilidad sólo tendrá en cuenta la incorporación de esos elementos de prueba al debate sobre la culpabilidad.

Si se opta por el jurado escabinado, bajo el mismo título deberá incorporarse la regla siguiente.

JUICIO POR JURADOS (B)

1. **Remisión.** Cuando, según la ley de organización judicial, corresponda integrar el tribunal con jurados, se aplicarán las reglas comunes, con las modificaciones siguientes:

1. **Integración del colegio de jurados.** Dictado el auto de apertura del juicio, la oficina correspondiente hará conocer a los intervinientes una lista de jurados, constituida por **el triple de los miembros necesarios para integrar el tribunal.**

2. **Incorporación.** Los jurados se incorporarán al tribunal en la oportunidad prevista por el art. 304, antes de que el presidente declare abierto el debate, mediante el compromiso solemne siguiente:

"Asumo el compromiso de juzgar este caso, en nombre del pueblo, con justicia e imparcialidad, según la constitución y la ley".

3. **Debate.** El debate será dirigido por un juez permanente y letrado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina de la audiencia previstas en las reglas comunes.

4. **Los jurados. Una** vez integrados al tribunal, tendrán las mismas atribuciones que los jueces permanentes y deliberarán en conjunto las decisiones propias del tribunal.

APÉNDICE III

JUICIO POR FALTAS O CONTRAVENCIONES

1. **Requerimiento.** El funcionario que comprobó la falta o aquél que la ley designe para perseguirlas, solicitará el juicio indicando los siguientes extremos:

1. Individualización del imputado y su domicilio real

2. Descripción sintética del hecho imputado, consignando tiempo y lugar

3. Disposición legal infringida

4. Mención de los elementos de prueba, agregando las documentales y las cosas entregadas por el infractor o secuestradas.

5. Individualización y firma del requirente.

Bastará como requerimiento el formulario de comprobación de la falta que contenga los requisitos antes mencionados.

Cuando la ley disponga la persecución privada, la persona legitimada ocupará el lugar del funcionario y la policía le brindará el auxilio necesario para la comprobación de la falta.

2. Citación a juicio. El funcionario actuante o l apersona legitimada, con el auxilio de la policía, citará a juicio al contraventor, con expresión del tribunal ante el cual deberá comparecer y del plazo en el cual deberá hacerlo.

3. Audiencia. Comparecido el contraventor presunto, manifestará por acta si admite su culpabilidad o si requiere el juicio. En este último caso, deberá expresar cuáles son los medios de prueba que no puede incorporar por su cuenta al debate y cuál el auxilio público que necesita para ello.

4. Decreto penal. Si el contraventor admite su culpabilidad y no fueren necesarias otras diligencias, el tribunal dictará la resolución que corresponda por simple decreto.

5. Debate. Caso contrario, el tribunal llamará inmediatamente a juicio al imputado y al requirente; en el mismo momento expedirá las órdenes

necesarias para incorporar en el debate los elementos de prueba cuya producción dependa de la fuerza pública.

La audiencia será pública y se llevará a cabo con los intervinientes que comparezcan. Los intervinientes comparecerán a la audiencia con todos los medios de prueba que pretendan hacer valer.

El tribunal oirá brevemente a los comparecientes y observará los demás elementos de convicción, absolviendo o condenando por simple decreto.

Si no se incorporaren medios de prueba durante el debate, el tribunal decidirá sobre la base de los elementos acompañados con el requerimiento.

Si nadie comparece, dictará resolución sin más trámite, conforme al párrafo anterior.

6. Casación. La resolución será impugnable por la vía de la casación abreviada, en el plazo de cinco días, pero sólo podrá ser motivada en la inobservancia o errónea de la ley, siempre que la corrección del defecto, conforme al recurso, permita modificar sustancialmente la decisión.

El requirente sólo podrá recurrir si compareció al debate.

7. Remisión. En lo demás rigen, analógicamente, las reglas comunes, adecuadas a la brevedad y simpleza del procedimiento.

El imputado podrá ser asistido por un defensor, si lo nombrare.

Las medidas de coerción serán proporcionales a la falta imputada y las privativas de libertad sólo podrán durar, como máximo seis horas.

APÉNDICE IV HABEAS CORPUS

1. **Procedencia.** Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión que implique:

1. Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ilegítimas o que provengan de un abuso de poder.

2. Agravación ilegítima de las formas y condiciones en que se cumple la privación de la libertad.

Cuando sea limitada la libertad de una persona en virtud de un poder excepcional previsto en la constitución, procederá el hábeas corpus cuando se sostenga, en el caso concreto:

1. La ilegitimidad de la concesión de los poderes excepcionales.

2. La falta de correlación entre la privación de la libertad y la situación que dio origen a la concesión de ese poder.

3. La imposibilidad de ejercer, efectivamente, los derechos previstos por la ley para quien sufre la limitación.

2. Competencia. Si se ignora los datos necesarios para fijar la competencia, según las reglas de organización judicial respectivas, o se duda sobre ellos, cualquier juez o tribunal será competente hasta establecer el presupuesto que determinará definitivamente el tribunal de aplicación,

sin perjuicio de llevar adelante el trámite del procedimiento, sin demora alguna.

3. Petición. La denuncia de hábeas corpus no está sometida a requisitos formales. Podrá ser interpuesta por escrito, por cualquier medio de comunicación u oralmente, en cuyo caso el funcionario que la reciba labrará acta sobre ella.

La denuncia deberá contener, en lo posible:

1. Nombre y domicilio real del denunciante.

2. Nombre, domicilio real y demás datos personales conocidos de la persona en cuyo favor se denuncia.

3. Autoridad de quien emana el acto denunciado como lesivo

4. Descripción del acto u omisión considerado lesivo, de la causa de su ilegitimidad o del carácter abusivo.

El tribunal subsanará los defectos de la petición e indagará acerca de los datos desconocidos y necesarios para tramitar el procedimiento.

5. Auto de habeas corpus. Cuando se trate de la privación de la libertad de una persona, formulada la denuncia el juez ordenará inmediatamente que la autoridad requerida, en su caso, presente ante él al detenido con un informe circunstanciado del motivo que funda la medida, la forma y condiciones en que se cumple, si ha obrado por orden escrita de autoridad competente, caso en el cual deberá acompañarla, y si el detenido hubiese sido puesto a disposición de otra autoridad, a quien, por qué causa, y en qué oportunidad se efectuó la transferencia.

Cuando se tratare de amenaza actual de privación de la libertad de una persona el juez ordenará que la autoridad requerida presente el informe a que se refiere el párrafo anterior.

Si se ignora la autoridad que detenta la persona privada de su libertad o de la cual emana el acto denunciado como lesivo, el juez librará la orden a los superiores jerárquicos de la dependencia que la denuncia indique.

La orden se emitirá por escrito con expresión de fecha y hora, salvo que el juez considere necesario constituirse personalmente en el lugar donde se encuentre el detenido, caso en el cual podrá emitirla oralmente, pero dejará constancia en acta.

Cuando un tribunal o juez que tenga conocimiento por prueba satisfactoria de que alguna persona es mantenida en custodia, detención o confinamiento por funcionario de su dependencia. O inferior administrativo, político o militar, y que es de temerse sea transportada fuera del territorio de su jurisdicción, o que se le hará sufrir un perjuicio irreparable antes de que pueda ser socorrida por un auto de habeas corpus, pueden expedirlo de oficio, ordenando a quien la detiene o a cualquier comisario, agente de policía u otro empleado, que tome la persona detenida o amenazada y la traiga a su presencia para resolver lo que corresponda según derecho.

6. Cumplimiento de la orden. La autoridad requerida cumplirá la orden de inmediato o en el plazo que el juez determine de acuerdo con las circunstancias del caso.

Si por un impedimento físico el detenido no pudiere ser llevado a presencia del juez, la autoridad requerida presentará en el mismo plazo un informe complementario, sobre la causa que impide el cumplimiento de la orden, estimando el término en que podrá ser cumplida. El juez decidirá expresamente sobre el particular, pudiendo constituirse donde se encuentra el detenido, si estimare necesario realizar alguna diligencia, y aun autorizar a un familiar o persona de confianza para que lo vea, en su presencia.

Desde el conocimiento de la orden el detenido quedará a disposición del juez que la emitió para la realización del procedimiento.

7. Citación a la audiencia. La orden implicará para la autoridad requerida citación a la audiencia prevista por el artículo siguiente, a la que podrá comparecer representada por un funcionario de la repartición debidamente autorizado, con derecho a asistencia letrada.

Cuando el amparado no estuviere privado de su libertad el juez lo citará inmediatamente para la audiencia prevista en el artículo siguiente, comunicándole que, en su ausencia, será representado por el defensor oficial.

El amparado podrá nombrar defensor o ejercer la defensa por sí mismo, siempre que ello no perjudique su eficacia; caso en el cual se nombrará al defensor oficial.

En el procedimiento de hábeas corpus no será admitida ninguna recusación, pero en este momento el juez que se considere inhabilitado por temor de parcialidad así lo declarará, mandando cumplir la audiencia ante el juez que lo subroga, conforme a la ley.

8. Audiencia. La audiencia se realizará en presencia de los citados que comparezcan. La persona que se encuentra privada de su libertad deberá estar siempre presente. La presencia de defensor oficial en el caso previsto por los párr. II y III del artículo será obligatoria.

La audiencia comenzará con la lectura de la denuncia y el informe. Luego el juez interrogará al amparado, proveyendo en su caso a los exámenes que correspondan. Dará oportunidad para que se pronuncien la autoridad requerida y el amparado, personalmente o por intermedio de su asistente letrado o defensor.

Rige, analógicamente, el art. 329.

9. Prueba. Si de oficio o a pedido de alguno de los intervinientes se estima necesario la realización de diligencias probatorias, el juez determinará su admisibilidad o rechazo de acuerdo con la utilidad o pertinencia al caso de que se trata. La prueba se incorporará en el mismo acto y, de no

ser posible, el juez ordenará las medidas necesarias para que se continúe la audiencia en un plazo que no exceda las 24 horas.

Finalizada la recepción de la prueba se oirá a los intervinientes de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior.

10. Sentencia. Terminada la audiencia el juez dictará inmediatamente la decisión, que deberá contener:

1) día y hora de su emisión;

2) mención del acto denunciado como lesivo, de la autoridad que lo emitió y de la persona que lo sufre;

3) motivación de la decisión;

4) la parte resolutiva, que deberá versar sobre el rechazo de la denuncia o su acogimiento, caso en el cual se ordenará la inmediata libertad del detenido o la cesación del acto lesivo;

5) costas y sanciones;

6) la firma del juez.

Si tuviere conocimiento de la probable comisión de un delito de acción pública, el juez mandará sacar los testimonios correspondientes, haciendo entrega de ellos al ministerio público.

10. Pronunciamiento. La decisión será leída inmediatamente por el juez ante los intervinientes y quedará notificada aunque alguno de ellos se hubiere alejado de la sala de audiencia. El defensor oficial que compareciere, según el art. 6, párrs. 2 y 3, no podrá alejarse hasta la lectura de la decisión.

11. Recurso. La sentencia sólo será recurrible por casación y serán aplicables las reglas comunes. El tribunal podrá reproducir la audiencia y, en su caso, dictar el auto de habeas corpus.

El recurso tendrá efecto suspensivo, salvo en lo que se refiere a la libertad de la persona, que se hará efectiva.

12. Intervención del ministerio público. Presentada la denuncia se notificará al ministerio público por escrito u oralmente, dejando en este caso constancia en acta, quien tendrá en el procedimiento todos los derechos otorgados a los demás intervinientes, pero no será necesario citarlo o notificarlo para la realización de los actos posteriores.

Podrá presentar las instancias que creyere convenientes y recurrir la decisión, cualquiera que sea su sentido.

13. Denunciante. La denuncia de habeas corpus podrá ser interpuesta por la persona que afirme encontrarse en las condiciones previstas por el art. 1 o por cualquier otra en su favor.

El denunciante podrá intervenir en el procedimiento con asistencia letrada y tendrá en él los derechos otorgados a los demás intervinientes.

14. Costas. Cuando la decisión acoja la denuncia las costas del pronunciamiento serán a cargo del funcionario responsable del acto lesivo.

Cuando rechazare la denuncia las costas estarán a cargo de quien las causó, salvo el caso de improcedencia manifiesta declarada en la decisión, en el cual las soportará el denunciante o el amparado, o ambos solidariamente, según que la inconducta responda a la actividad de uno de ellos o de ambos a la vez.

15. Multa. Cuando la denuncia fuere maliciosa, por ocultamiento o mendicidad declaradas en la decisión, se impondrá al denunciante hasta cinco días multa.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que correspondiere, el tribunal podrá imponer al autor del acto lesivo y a quien colaboró con él hasta veinte días multa.

Los jueces y funcionarios que intervienen en el procedimiento, cuando incurran injustificadamente en incumplimiento de los plazos y actividades que la ley prevé, o sean reticentes en la información solicitada, serán sancionados con multa de hasta cinco días.

LIBRO QUINTO – EJECUCIÓN

Título I – Ejecución penal

388.Defensa. En condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan, planteando ante el tribunal de ejecución todas las observaciones que, con fundamento en aquellas reglas, estime convenientes.

Tendrá derecho a la defensa técnica y continuará ejerciéndola el defensor nombrado con anterioridad. Sin embargo, el defensor de confianza designado con anterioridad podrá renunciar al cargo y, en tal sentido, no regirán las sanciones previstas en el art. 65, sino hasta el momento de su reemplazo. En este caso, el presidente del tribunal de ejecución instruirá al condenado sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza y, si no lo hiciere, procederá conforme a los arts. 5 y 66.

No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución de la pea; tan sólo deberá asesorar al condenado cuando él lo requiera e intervenir en los incidentes que se planteen durante la ejecución de la pena.

Capítulo 1 – Penas

389. Ejecutoriedad. Las condenas penales no serán ejecutables antes de que devenguen firmes. A tal efecto, el día en que devienen firmes, el presidente del tribunal ordenará las comunicaciones e inscripciones correspondientes y remitirá los autos al tribunal de ejecución.

Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, remitirá testimonio de la sentencia, con la atestación de que se halla firma, al establecimiento en donde cumple su prisión, para que se proceda según corresponda.

Si estuviere en libertad, ordenará inmediatamente su detención y una vez aprehendido procederá conforme a esta regla.

Ordenará, también, las copias indispensables para que se lleven a cabo las medidas para cumplir los efectos accesorios de la sentencia: comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos.

390.Cómputo definitivo. El presidente del tribunal de ejecución revisará el cómputo practicado en la sentencia y determinará con exactitud la fecha en que finaliza la condena a una pena divisible y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir su libertad condicional o su rehabilitación.

La resolución se notificará al ministerio público, al condenado y a su defensor, quienes podrán observar el cómputo dentro del plazo de tres días. El cómputo quedará aprobado al vencer el plazo sin haber sido observado o al decidir el tribunal de ejecución sobre las observaciones planteadas.

El cómputo es siempre reformable, aun de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo tornen necesario.

391.Incidentes. El ministerio público, el condenado y su defensor podrán plantear incidentes relativos a la ejecución o extinción de la pena. Los resolverá el tribunal de ejecución inmediatamente, previa vista a los demás intervinientes. Si fuera necesario incorporar elementos de prueba, el presidente del tribunal, aun de oficio, ordenará una investigación sumaria, después de la cual decidirá, previo oír a los intervinientes.

Los incidentes relativos a la libertad anticipada y a la rehabilitación, y todos aquellos en los cuales, por su importancia, el tribunal lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral y pública, citando a los testigos y peritos que deban informar durante el debate.

El tribunal decidirá por auto fundado y contra él procede el recurso de casación, cuya interposición no suspenderá la ejecución de la pena, a menos que así lo disponga el Tribunal de Casación.

392.Libertad anticipada. La dirección del establecimiento donde el condenado cumple pena privativa de libertad, remitirá al tribunal de ejecución los informes previstos por la ley penal, un mes antes del cumplimiento del plazo fijado al practicar el cómputo.

El incidente de libertad condicional podrá ser promovido por el condenado, por el defensor o de oficio por el tribunal, en cuyo caso el presidente del tribunal emplazará a la dirección del establecimiento para que remita

los informes que prevea la ley penal. Cuando lo promueva el condenado ante la dirección del establecimiento, ella remitirá inmediatamente la solicitud, fijando la fecha en que elevará el informe.

El tribunal podrá rechazar sin trámite la solicitud, cuando fuere manifiestamente improcedente o cuando estime que no transcurrió el tiempo suficiente para que hayan variado las condiciones que motivaron el rechazo anterior.

Cuando la libertad le fuera otorgada, en el auto se fijarán las condiciones e instrucciones, según lo establecido por la ley penal. El liberado, en el acto de la notificación, deberá prometer que las cumplirá y denunciará el modo como intentará cumplirlas. Fijará domicilio y recibirá una copia de la resolución.

El tribunal de ejecución vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que serán reformables de oficio o a petición del condenado y su defensor.

393.Revocación de la libertad condicional. Siempre que no proceda por unificación de sentencias o penas, el incidente de revocación será promovido de oficio o a pedido del ministerio público.

Si el condenado no pudiere ser hallado, el tribunal ordenará su detención.

El incidente se llevará a cabo cuando fuere habido y el tribunal podrá disponer que se lo mantenga preventivamente detenido hasta que se resuelva la incidencia.

El tribunal decidirá por auto fundado y, en su caso, practicará nuevo cómputo.

394.Control general sobre la pena privativa de libertad. El tribunal de ejecución controlará el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario; entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que fueren necesarias y podrá hacer comparecer ante sí los penados con fines de vigilancia y control. A tal fin, podrá comisionar a uno de sus miembro s o delegar la función en inspectores designados para el caso.

Antes del egreso deberá escuchar al penado sobre los problemas que enfrentará inmediatamente después de recuperar su libertad y procurará atender aquellos cuya solución esté a su alcance.

395.Multa. Si el condenado no paga multa dentro del plazo que fija la sentencia, será citado para que indique si pretende sustituir la multa por trabajo voluntario en instituciones de bien público, solicitar plazo para pagarla o dar bienes a embargo.

Oído el condenado, el tribunal decidirá por auto fundado, previa investigación sumaria, si fuere necesaria. En la resolución fijará el tiempo,

las condiciones y el lugar donde el penado cumplirá el trabajo voluntario y el plazo o las cuotas para el pago, según el caso; dispondrá, asimismo, las medidas necesarias para el cumplimiento de la decisión y el control de su ejecución.

No siendo el caso del párrafo anterior procederá al embargo y a la venta pública de los bienes embargados, conforme a las disposiciones que rigen para el procedimiento civil, o ejecutará la caución.

Si fuere necesario transformar la multa en prisión, citará a audiencia al ministerio público, al condenado y a su defensor, oyendo a quienes concurrieren, y decidirá en consecuencia, por auto fundado. Transformada la multa en prisión se ordenará la detención del condenado. Rigen, análogamente, las reglas relativas al cómputo.

396.Inhabilitación. Después de practicado el cómputo definitivo, el tribunal ordenará las comunicaciones e inscripciones que correspondan.

Si la pena fuera de inhabilitación absoluta, deberá ser comunicada, indicando la fecha de finalización de la condena o su carácter de perpetua, a la repartición pública en la cual se desempeña el agente, a la autoridad electoral, a las demás autoridades nacionales o locales con poder de nombramiento en un cargo público y, en su caso, a la institución previsional que corresponda.

Si la pena fuera de inhabilitación especial, deberá ser comunicada, indicando la fecha de finalización de la condena o su carácter de perpetua, a la autoridad o entidad encargada de controlar el ejercicio de la profesión, empleo, cargo o derecho sobre el cual recayó la inhabilitación.

Para cumplir estas comunicaciones el tribunal podrá disponer una investigación sumaria.

397.Pensión. Cuando la ley penal prevea la suspensión del goce de beneficios provisionales o la concurrencia de la víctima o de sus deudos en ese beneficio, el tribunal citará a audiencia a la víctima o a sus deudos y a quienes tengan el derecho de percibir la pensión, y después de oír a quienes concurran, decidirá y ordenará las comunicaciones que corresponda.

398.Rehabilitación. El inhabilitado podrá solicitar su rehabilitación por escrito, ofreciendo la prueba que funde su pretensión. Se procederá conforme al art. 391. Decidida la rehabilitación se practicarán las comunicaciones que correspondan.

399.Indulto y conmutación. La autoridad correspondiente remitirá al tribunal de ejecución copia auténtica de la disposición por la cual decide un indulto o la conmutación de la pena. Recibida la comunicación, el presidente del tribunal ordenará inmediatamente la libertad o practicará un nuevo cómputo.

400. Perdón del ofendido. Cuando la ley penal otorgue efecto extintivo de la pena al perdón del ofendido, el tribunal de ejecución ordenará enseguida la libertad del condenado.

401. Ley más benigna. Cuando el tribunal de ejecución advierta que debe quedar sin efecto o ser modificada la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia una ley más benigna, promoverá la revisión del procedimiento.

Capítulo 2 – Medidas de seguridad y corrección

402. Remisión y reglas especiales. Rigen, análogamente, las reglas establecidas en el capítulo anterior, aplicables a las penas privativas de libertad, y las siguientes:

1. En el caso previsto por el art. 34 intervendrá el curador, conforme al art. 385, inc. 1, y tendrá la obligación de vigilar la ejecución de la medida de seguridad y corrección.

2. El tribunal de ejecución determinará el establecimiento adecuado para la ejecución de la medida y podrá modificar su decisión, incluso a petición del curador o de la dirección del establecimiento; podrá asesorarse con peritos que designará al efecto.

3. El tribunal de ejecución fijará un plazo, no mayor de seis meses, a cuyo término examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida indeterminada temporalmente; el examen se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe del establecimiento o de peritos, en la forma dispuesta por el art. 392; la decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso, podrá modificar el tratamiento o variar el establecimiento en el cual se ejecuta.

4. Cuando el tribunal de ejecución tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, convocará inmediatamente a la audiencia prevista en el inciso anterior.

Título II – EJECUCIÓN CIVIL

403. Competencia. La sentencia civil la ejecutará quien tenga derecho ante los tribunales competentes en esa materia y conforme a las previsiones de la ley de procedimientos civiles, salvo las restituciones ordenadas en la sentencia.

LIBRO SEXTO – COSTAS E INDEMNIZACIONES

Título I – Costas

404. Imposición; oportunidad. Toda decisión que ponga fin a la persecución penal o la clausure, o que resuelva algún incidente, aun durante la ejecución penal, determinará quién debe soportar las costas del procedimiento.

405. Contenido. Las costas del procedimiento consisten en:

1) la tasa de justicia o cualquier otro tributo que corresponda por la actuación judicial;

2) los gastos originados durante la tramitación del procedimiento;

3) los honorarios de los abogados, de los peritos, consultores técnicos, traductores e intérpretes.

El procedimiento abarca también la preparación de la acción pública y la ejecución de penas, medidas de seguridad y corrección y consecuencias accesorias.

406. Condena. Las costas serán impuestas al imputado cuando sea condenado, aunque se lo exima de pena, o cuando se le imponga una medida de seguridad y corrección.

Cuando en una sentencia se pronuncien absoluciones y condenas, el tribunal establecerá el porcentaje que asume el imputado y el que corresponde a los demás responsables.

Los coimputados que sean condenados o a quienes se les imponga una medida de seguridad y corrección en relación a un mismo hecho, responden solidariamente por las costas; el precepto no rige para la ejecución penal y las medidas de coerción.

407.Absolución. Si el imputado es absuelto o no se le impone una medida de seguridad y corrección, las costas serán soportadas por el Estado, con las siguientes excepciones:

1) cuando el querellante hubiere adherido a la acusación o intervenido en el procedimiento después de ella, soportará las costas, sólo o juntamente con el Estado, según el porcentaje que determine el tribunal;

2) si hubiere desistido antes de la oportunidad prevista para adherir a la acusación o en ese momento, el tribunal fijará los porcentajes en los que concurren él y el Estado;

3) cuando el imputado hubiere provocado su propia persecución, denunciándose falsamente a sí mismo, o hubiere confesado falsamente le hecho, el tribunal determinará el porcentaje que le corresponde soportar.

Las costas del imputado podrán ser cobradas al Estado cuando no fuere posible que las pague el querellante, y en la ejecución el Estado gozará de beneficio de exclusión.

408.Sobreseimiento y extinción de la acción penal. Rige, análogamente, el artículo anterior, salvo cuando la decisión se funde en la extinción de la acción penal por causa sobreviniente a la persecución ya iniciada, caso en el cual el tribunal fijará los porcentajes que correspondan a cada uno de los intervinientes y al Estado, valorando los gastos que cada uno de ellos hubiere provocado, la conducta procesal y, especialmente, el resultado que, de llegar a su finalización, hubiere arrojado el procedimiento, si fuere posible.

409.Clausura provisional y archivo. Cuando la persecución penal no pueda proseguir y, por ello se ordene el archivo o la clausura provisional, cada interviniente y el Estado soportarán sus propias costas.

El tribunal podrá decidir que las costas del imputado sean soportadas por el Estado y los demás intervinientes, en la proporción que fijará, cuando por las circunstancias del caso sea irrazonable que él las soporte.

410.Denuncia falsa o temeraria. Cuando el denunciante hubiere provocado el procedimiento por medio de una denuncia falsa o temeraria, el tribunal podrá imponerle total o parcialmente las costas.

En este caso, diferirá la decisión, advertirá previamente al denunciante sobre esta posibilidad y le otorgará oportunidad de audiencia.

411.Incidentes. Las costas serán impuestas al incidentista cuando la decisión le fuere desfavorable; si triunfa, soportarán las costas quienes se hayan opuesto a su pretensión, en la proporción que fije el tribunal. Si nadie se hubiere opuesto, cada interviniente soportará las costas que produjo su propia intervención.

412.Recursos. Las costas de un recurso interpuesto sin éxito o desistido recaerán sobre quien lo hubiere interpuesto. Si el recurso tiene éxito, soportarán las costas quienes se hubieren opuesto a él, en la proporción que fije el tribunal. Si nadie se hubiere opuesto, cada interviniente soportará las costas de su propia intervención.

Rige el párr. II del artículo anterior.

413.Procedimiento abreviado. Cuando la condena se obtenga mediante el procedimiento abreviado, cada interviniente soportará sus propias costas. El tribunal podrá decidir que el imputado asuma las costas del querellante, cuando, por las circunstancias del caso, sea irrazonable que él las soporte.

414.Acción privada. En el procedimiento por delito de acción privada, las costas serán soportadas por el querellante, en caso de absolución, sobreseimiento, desestimación o archivo, y por el imputado, en caso de condena.

Cuando se produzca la retractación del imputado o cuando él dé explicaciones satisfactorias, soportará las costas. En estos casos y en el de renuncia a la acción penal, el tribunal podrá decidir sobre las costas según el acuerdo a que hayan arribado las partes.

415.Acción civil. Si fuere admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se rechaza la pretensión, las soportará el actor civil.

Si la acción civil no pudiere proseguir, cada uno de los intervinientes soportará sus propias costas, salvo que el tribunal, por las circunstancias del caso, las distribuya de otra manera.

416.Resolución. El tribunal decidirá sobre la imposición de costas, motivadamente.

Cuando corresponda distribuir las costas entre varios, fijará con precisión el porcentaje que debe soportar cada uno de los responsables, sin perjuicio de la solidaridad.

Para fijar los porcentajes atendrá especialmente a:

1) los gastos que cada uno de ellos hubiere provocado;

2) la conducta procesal;

3) el resultado del procedimiento en proporción al interés que cada uno hubiere puesto de manifiesto en él y las razones que haya atenido para litigar.

Las mismas reglas rigen para los casos de excepción que la ley prevé.

417.Funcionarios y abogados. Los funcionarios del ministerio público, los abogados y los mandatarios, que intervengan en el procedimiento, no podrán ser condenados en costas, salvo el caso de notorio desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, en el cual se les podrá imponer total o parcialmente las costas.

418.Recursos. La decisión sobre las costas sólo será recurrible autónomamente, siempre que fuere posible recurrir la resolución principal que la contiene y por la vía prevista para ella.

419.Liquidación y ejecución. Se comenzará regulando los honorarios de los abogados, peritos, traductores e intérpretes, durante todo el transcurso del procedimiento, incluido el recurso de casación, si hubiere sido interpuesto. A cargo de esta tarea estará uno de los miembros del Consejo del Tribunal y contra su resolución será posible quejarse, en el plazo de tres días, resolviendo, sin trámite alguno, el Consejo. Contra esa resolución es admisible el recurso de casación en los casos y formas que la ley prevé.

Firmes los honorarios, el juez encargará a uno de los secretarios la confección de la planilla de liquidación correspondiente, la que discriminará

todos los gastos incluidos y los honorarios devengados, y determinará la suma que debe pagar cada condenado en costas, según la resolución respectiva. El secretario citará a todos los intervinientes a que formulen observaciones en el plazo de tres días. Después de ello, el juez aprobará o modificará la planilla e intimará su pago, fijando el plazo.

La resolución del juez tendrá fuerza ejecutiva y, si fuera necesaria la ejecución ella se llevará a cabo ante los tribunales civiles competentes, para lo cual se expedirá copia certificada gratuita de la condena y la planilla a aquel que lo pidiere.

Cuando, según la ley arancelaria respectiva, no fuere posible regular honorarios, el juez diferirá esa decisión para la oportunidad correspondiente, ordenando practicar la liquidación parcial.

420.Anticipo de gastos. Cuando sea necesario efectuar un gasto, el tribunal lo estimará, y quien ofreció la medida lo anticipará, depositando la suma de dinero necesaria para llevar a cabo la diligencia.

El Estado anticipará los gastos del imputado, de los demás intervinientes que gozaren del beneficio de litigar sin gastos y de aquel que hubiere delegado el ejercicio de la acción civil.

Quien pretenda litigar sin gastos, deberá requerirlo ante los tribunales competentes para el procedimiento civil y por la vía prevista en la ley de procedimientos civiles.

Título II – Indemnización al imputado

421.Revisión. Cuando, a causa de la revisión del procedimiento, el condenado fuere absuelto o se le impusiere una pena menor, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o inhabilitación sufrido, o por el sufrido en exceso, salvo que él haya provocado su propia persecución, denunciándose falsamente a sí mismo, o su propia condena, confesando falsamente el hecho u ocultado o alterado dolosamente la prueba que condujo al error judicial.

El precepto rige, análogamente, para el caso de que la revisión tenga por objeto una medida de seguridad y corrección.

La multa o su exceso será devuelta, calculando la desvalorización de la moneda.

422.Encarcelamiento preventivo o internación provisional. Cuando el imputado fuere absuelto o en su favor se dictare el sobreseimiento, será indemnizado por los días de prisión sufridos o por los días que duró la medida del art. 209, inc. 1.

El mismo precepto rige para la internación provisional.

423.Determinación. El tribunal que dicte cualquiera de las resoluciones que dan derecho a indemnización fijará su importe en ella, conforme a las siguientes reglas:

1) un día de pena o medida de seguridad privativa de libertad equivale al sueldo promedio de las escalas administrativas correspondientes a los empleados del Poder Judicial, dividido por treinta;

2) un día de encarcelamiento preventivo o de internación provisional corresponde al sesenta y cinco por ciento de ese importe;

3) un día de pena de inhabilitación corresponde al treinta por ciento de aquel importe;

4) un día de pena de inhabilitación corresponde al treinta por ciento de aquel importe;

5) la multa se actualizará según el índice de desvalorización, elaborado por la oficina competente del Estado, que más se adecue al caso.

La indemnización fijada anteriormente no impedirá que, quien pretenda una indemnización superior, la reclame ante los tribunales competentes, por la vía que corresponda, pero la aceptación de la suma impedirá toda reclamación posterior.

424.Obligado. El Estado estará siempre obligado al pago, sin perjuicio de su derecho a repetir de algún otro obligado. Para ello, el tribunal, al decidir sobre la indemnización en los recursos de revisión, podrá imponer la obligación, total o parcialmente, a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave el error judicial; en el caso de las medidas de coerción sufridas injustamente, podrá imponer la obligación, total o parcialmente, al denunciante o al querellante que hayan falseado los hechos o litigado con temeridad.

Rige el art. 410, párr. II análogamente.

425.Ley más benigna. La aplicación de una ley posterior más benigna, durante el procedimiento o mediante la revisión, que torne injusta la condena, una medida de seguridad y corrección o una medida de coerción no habilitará la indemnización aquí regulada.

CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA

Aprobado en Caracas el 28 de octubre de 2004

Exposición de motivos

Sumario: 1 – Significado social y político de la tutela de los intereses o derechos transindividuales; 2 – El sistema de *common law: l*as *class actions* norteamericanas; 3 – El sistema de *civil law:* el tratamiento de la materia en los países de Iberoamérica; 4 – La necesidad de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica; 5 – El modelo del Código: un sistema supra-nacional adecuado a la realidad de los países de la comunidad iberoamericana; 6 – Breve síntesis del contenido del Código; 7 – Conclusión.

1 - Tiene sabor a lugar común la afirmación de que el proceso tradicional no se adecua a la defensa de los derechos e intereses transindividuales, cuyas características los colocan a mitad de camino entre el interés público y el privado, siendo propios de una sociedad globalizada y resultado de conflictos de masa. Asimismo es clara la dimensión social del reconocimiento y tutela de los derechos e intereses transindividuales, por ser comunes a una colectividad de personas, y solamente a éstas. Intereses difusos y dirigidos a la tutela de necesidades colectivas, sintéticamente referibles a la calidad de vida. Intereses de masas, que comportan ofensas de masas y que colocan en contraste a grupos, categorías, clases de personas. No se trata ya de un haz de líneas paralelas, sino de un abanico de líneas que convergen hacia un objeto común e indivisible. Aquí se insertan los intereses de los consumidores, a la protección del ambiente, de los usuarios de servicios públicos, de los inversores, de los beneficiarios de la Previsión Social y de todos aquellos que integran una comunidad compartiendo sus necesidades y sus anhelos.

El reconocimiento y la necesidad de tutela de esos intereses pusieron de relieve su configuración política. En consecuencia, la teoría de las libertades públicas forjó una nueva "generación" de derechos fundamentales. A los derechos clásicos de primera generación, representados por las tradicionales libertades negativas, propias del Estado liberal, con el

correspondiente deber de abstención por parte del Poder Público; a los derechos de segunda generación, de carácter económico-social, compuestos por libertades positivas, con el correlativo deber del Estado a un *dar, hacer* o *prestar,* la teoría constitucional agregó una tercera generación de derechos fundamentales, representados por los *derechos de solidaridad*, resultantes de los referidos intereses sociales. Y, a medida que el derecho constitucional reconoce a esos intereses la naturaleza jurídica de *derechos*, no se justifica ya la clásica discusión en torno de que esas situaciones de ventaja configuren intereses o derechos.

2 – En los sistemas del *common law* la tutela de los intereses o derechos transindividuales es tradicional: el instituto de las *class actions* del sistema norteamericano, basado en la *equity* y con antecedentes en el *Bill of Peace* del siglo XVII, fue siendo ampliado adquiriendo paulatinamente un papel central en el ordenamiento. Las *Federal Rules of Civil Procedure* de 1938 fijaron, en la regla 23, las normas fundamentales rectoras de las *class actions*. Las dificultades prácticas, en cuanto a la configuración y requisitos de una u otra de sus categorías, con tratamiento procesal propio, llevaron al *Advisory Committee on Civil Rules* a modificar la disciplina de la materia en la revisión hecha por las *Federal Rules* de 1966, las cuales están siendo nuevamente trabajadas para eventuales modificaciones.

3 – En los sistemas del *civil law,* correspondió al Brasil la primacía de introducir en el ordenamiento la tutela de los intereses difusos y colectivos, de naturaleza indivisible, en primer término por la reforma de 1977 de la Ley de la Acción Popular; después, mediante la ley específica de 1985 sobre la denominada "acción civil pública"; siguiendo, en 1988, cuando se eleva a nivel constitucional la protección de los referidos intereses; y finalmente, en 1990, por el Código de Defensa del Consumidor (cuyas disposiciones procesales son aplicables a la tutela de todo y cualquier interés o derecho transindividual). Este Código fue más allá de la dicotomía de los intereses difusos y colectivos, creando la categoría de los llamados *intereses individuales homogéneos,* que abrieron camino a las acciones reparadoras de los perjuicios individualmente sufridos (correspondiendo, en el sistema norteamericano, a las *class actions for damages).*

El Código Modelo de Proceso Civil para Iberoamérica recogió la idea brasileña de la tutela jurisdiccional de los intereses difusos, con algunas modificaciones en relación a la legitimación (que incluye cualquier interesado) y al control sobre la representatividad adecuada (que en Brasil no está expresado). Con relación a la cosa juzgada, el régimen brasileño de la eficacia *erga omnes*, salvo insuficiencia de pruebas, fue igualmente adoptado.

En Uruguay, el Código General de Proceso de 1989 repitió las reglas del Código Modelo de Proceso Civil.

En Argentina, primero la jurisprudencia y después el Código de Código Civil y Comercial de la Nación, de 1993, siguieron el Código Modelo Iberoamericano, hasta que la Constitución de 1994 contempló, en el art. 43, los llamados "derechos de incidencia colectiva", para cuya tutela prevé el "amparo" y la legitimación amplia para el ejercicio de su defensa. Pero la doctrina preconiza la introducción, en el ordenamiento, de acciones específicas, a semejanza de las existentes en el modelo brasileño. La jurisprudencia, incluso sin textos legales, ha avanzado con creatividad para asegurar la tutela concreta de los derechos e intereses colectivos.

En 1995, Portugal dio un paso al frente, con la Ley de Acción Popular, de la cual también se extrajo la defensa de los derechos individuales homogéneos. En 1996, Portugal también creó acciones inhibitorias para la defensa de los intereses de los consumidores. Y, desde 1985 el sistema ya conocía acciones relativas a las cláusulas generales, con legitimación conferida al Ministerio Público, y por lo tanto diversa de la prevista para la acción popular, que está limitada al ciudadano, a las asociaciones y fundaciones con personería jurídica y a las autarquías locales.

Posteriormente, otros ordenamientos iberoamericanos introdujeron, de alguna forma, la tutela de los intereses difusos y colectivos en sus sistemas. En Chile, fue ampliado el alcance de la acción popular, con reglamentación en varias leyes especiales y en el art. 2.333 del Código Civil. En Paraguay, la Constitución consagra el derecho individual o colectivo de reclamar de la autoridad pública la defensa del ambiente, de la salud pública, del consumidor y otros que por su naturaleza pertenezcan a la colectividad, pero no contempla expresamente instrumentos procesales para ese fin. En Perú, hay alguna legislación dispersa y específica para la tutela de ciertos derechos colectivos, en el campo de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de los consumidores. En Venezuela, la nueva Constitución prevé la posibilidad de que cualquier persona pueda demandar en juicio la tutela de sus derechos o intereses, inclusive colectivos o difusos, pero no hay ley específica que regule la materia. La jurisprudencia venezolana reconoce legitimación para los mismos fines al Ministerio Público, con base en la legitimación general que le confiere la Constitución. En Colombia, la Constitución de 1991 en su art. 88, le otorgó rango constitucional a las acciones populares y de grupo y se autorizó al legislador a definir los casos de responsabilidad objetiva por el daño causado a intereses y derechos colectivos. La ley 472/98 que entró a regir el 5 de agosto de 1999, reglamentó el referido art. 88 de la Carta al dictar el estatuto sobre las acciones populares y de grupo. Por su art. 70 se crea el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y por el art. 80 se crea un registro público de las acciones populares y de grupo, que será organizado y manejado por la Defensoría del Pueblo en forma centralizada (Ramiro

Bejarano Guzmán, "Procesos declarativos", ed. Temis, 2001, pp. 159-219, en especial 160-163).

En España, la reforma procesal civil de 2000 contempla la defensa de intereses transindividuales pero, según parte de la doctrina, de manera incompleta e insuficiente.

4 – Se ve de ahí que la situación de la defensa de los derechos transindividuales en Iberoamérica, es insuficiente y heterogénea, por no decir caótica. Y también se percibe que diversos países están sintiendo la necesidad de legislar sobre la materia.

La idea de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica surgió en Roma, en mayo de 2002, en una intervención de Antonio Gidi, miembro brasileño del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el VII Seminario Internacional co-organizado por el "Centro di Studi Giuridici Latino Americani" de la "Università degli Studi di Roma – Tor Vergata", por el "Istituto Italo-Latino Americano" y por la "Associazione di Studi Sociali Latino-Americani". Y fue también en Roma que la Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal maduró la idea, incorporándola con entusiasmo. Y, de común acuerdo, fue adoptada la propuesta de emprender un trabajo que llevase a la elaboración de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, en los moldes de los ya editados Códigos Modelo de Proceso Civil y de Proceso Penal. O sea, de un Código que pudiese servir no sólo como receptor de principios, sino también como modelo concreto para inspirar las reformas, de modo de tornar más homogénea la defensa de los intereses y derechos transindividuales en países de cultura jurídica común. El Código –como su propia denominación dice– debe ser tan sólo un modelo, a ser adaptado a las peculiaridades locales, que serán tomadas en consideración en la actividad legislativa de cada país; pero debe ser, al mismo tiempo, un modelo plenamente operativo.

Interesados por la Presidencia del Instituto para preparar una propuesta de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe y Antonio Gidi presentaron el resultado de su trabajo en las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, de Montevideo, en octubre de 2002, donde la propuesta fue transformada en Anteproyecto.

Luego, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal convocó a una pléyade de profesores de Iberoamérica para que manifestaran su opinión sobre el referido Anteproyecto, tarea que fue coordinada por Antonio Gidi (Brasil) y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México). Los referidos trabajos fueron publicados por la Editorial Porrúa con el título "La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia una Código Modelo para Iberoamérica", y presentados en el transcurso del XII Congreso

Mundial de Derecho Procesal que tuvo lugar en Ciudad de México del 22 al 26 de setiembre de 2003.

Con los referidos aportes, la Comisión Revisora, integrada por los Profesores Ada Pellegrini Grinover, Aluiso G. de Castro Mendes, Anibal Quiroga León, Antonio Gidi, Enrique M. Falcón, José Luis Vázquez Sotelo, Kazuo Watanabe, Ramiro Bejarano Guzmán, Roberto Berizonce y Sergio Artavia procedió a perfeccionarlo, surgiendo así la 2ª. Versión del Anteproyecto, que en su redacción definitiva fue revisada por el profesor uruguayo Angel Landoni Sosa.

El Anteproyecto fue discutido en Roma, recibiendo algunas sugerencias de perfeccionamiento. Éstas fueron acogidas, habiendo los miembros de la Comisión Revisora, por su parte, presentado otras.

Finalmente, votadas las nuevas propuestas, el Anteproyecto se transformó en Proyecto, que fue aprobado en la Asamblea General del Instituto Ibero-americano de Derecho Procesal, en octubre de 2004, durante la realización de las XIX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, en Caracas, convirtiéndose en el Código Modelo de los Procesos Colectivos para Iberoamérica.

5 – El modelo aprobado se inspira, en primer lugar, en aquel que ya existe en los países de la comunidad iberoamericana, completando, perfeccionando y armonizando las reglas existentes, de modo de llegar a una propuesta que pueda ser útil para todos. Evidentemente, se analizaron la sistemática norteamericana de las *class actions* y la brasileña de las acciones colectivas, pero la propuesta ahora presentada se aparta en diversos puntos de los dos modelos, para crear un sistema original, adecuado a la realidad existente en los diversos países iberoamericanos.

Todo esto fue tenido en cuenta para la preparación del Proyecto, que acabó, por eso mismo, perdiendo las características de modelo nacional, para adquirir efectivamente las de un verdadero sistema iberoamericano de procesos colectivos, celoso de las normas constitucionales y legales ya existentes en los diversos países que componen nuestra comunidad.

6 – En líneas extremadamente generales, el Código se compone de VII Capítulos.

El Capítulo I se destina a conceptuar los intereses o derechos transindividuales, según las categorías de difusos (a los cuales fueran subsumidos los colectivos, por la terminología brasileña) e individuales homogéneos, ya conocidas de diversos países iberoamericanos. Para los intereses individuales homogéneos, se buscaron en el sistema norteamericano los requisitos de la predominancia de las cuestiones comunes sobre las individuales y de la utilidad de la tutela colectiva en el caso concreto (*predominance and superiority*), que la experiencia brasileña demostró ser necesarios. La representatividad adecuada —mencionada en muchos estatutos

iberoamericanos— es exigida y detallada, mediante una lista ejemplificativa de criterios que podrán orientar al juez en su evaluación. La legitimación es la más abierta posible, para atender a todos los modelos ya existentes de procesos colectivos en Iberoamérica. Queda claro que la legitimación es concurrente y autónoma, admitiendo el litisconsorcio de los colegitimados. No se descuida el papel de fiscal de la ley del Ministerio Público y se prevé el compromiso administrativo de ajustamiento de conducta, a cargo de los legitimados de naturaleza pública, capaz de evitar o abreviar el proceso, con la formación inmediata de título ejecutivo.

El Capítulo II trata de los proveimientos jurisdiccionales que se pueden obtener por el ejercicio de la acción colectiva: es aquí donde el Código se preocupa preeminentemente por la efectividad del proceso colectivo, que debe conducir a una respuesta jurisdiccional realmente capaz de satisfacer los derechos transindividuales violados o amenazados. Se encuentran ahí normas sobre la anticipación de tutela y sobre su posible estabilización; sobre la acción condenatoria a la reparación de los daños al bien indivisiblemente considerado y al destino de la indemnización para la recuperación del bien dañado o a finalidades conexas; sobre la condenación a una obligación de hacer o no hacer (inhibitoria), en que la indemnización es la *ultima ratio*, a la cual se prefiere el régimen de multas diarias (*astreintes*) o hasta incluso el de mandamientos judiciales aptos a la obtención de un resultado práctico equivalente al cumplimiento de la obligación; sobre la condenación a una obligación de dar.

El Capítulo III trata de reglas procesales aplicables, en general, a los procesos colectivos: la competencia, el pedido y las causas de pedir, la tentativa de conciliación y de otras formas de auto y hetero-composición, preservada la indisponibilidad del bien jurídico colectivo. El proceso se desenvuelve por audiencias, ejerciendo el juez varios poderes de control y dirección, inclusive pudiendo decidir desde luego la demanda por el mérito, cuando no hubiere necesidad de prueba. Siguen reglas sobre la distribución de la carga de la prueba, sobre las costas, emolumentos y honorarios, tanto del perito como de los abogados, previéndose incentivos para la persona física, los sindicatos y las asociaciones actoras, sobre la interrupción del plazo de prescripción para las pretensiones individuales como consecuencia de la proposición de acción colectiva, etc. Finalmente se cuida aquí de los efectos de la apelación, en principio meramente devolutiva, y de la ejecución provisoria, materias en que algunos ordenamientos iberoamericanos son omisos.

El Capítulo IV se detiene sobre las acciones colectivas en defensa de intereses o derechos individuales homogéneos y, particularmente, sobre la acción colectiva reparadora de los daños individualmente sufridos (la *class action for damages* norteamericana), promovida por los legitimados

sin necesidad de indicación de la identidad de las víctimas. Se da conocimiento del enjuiciamiento de la acción a los posibles interesados, para que puedan intervenir en el proceso, si lo desean, como asistentes o coadyuvantes, siéndoles vedado, por eso, discutir sus pretensiones individuales en el proceso colectivo de conocimiento. Se tomó cuidado especial con las notificaciones. En caso de acogimiento del pedido, la sentencia podrá ser genérica, declarando la existencia del daño general y condenando al vencido a la obligación de indemnizar a todas las victimas y sus sucesores (aún no identificados). Incumbirá a éstos, individualmente o por los legitimados colectivos, probar en la liquidación de la sentencia su daño personal, el nexo causal con el daño global reconocido por la sentencia, y cuantificar el perjuicio individualmente sufrido. Pero el Código también prevé la posibilidad de que el juez, en la sentencia condenatoria, fije las indemnizaciones individuales, cuando esto fuera posible. Se cuida, también, del caso de concurso de créditos y se prescribe que, transcurrido un año sin la comparecencia de interesados en número compatible con la gravedad del daño, habrá ejecución colectiva de la indemnización debida a título de *daños causados*, cuidando que ellos sean vertidos con destino al Fondo. Aquí el Código adopta la solución de la *fluid recovery* del sistema norteamericano.

El Fondo de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos tiene reglas específicas sobre la gestión y las actividades, a ser controladas por el juez.

En el Capítulo V son tratadas la conexión, la litispendencia y la cosa juzgada. La conexión y la litispendencia tienen reglas claras, incluyendo las relaciones entre las acciones colectivas o entre una acción colectiva y las acciones individuales. También está prevista la posibilidad de transformar varias acciones individuales en una acción colectiva. Para los intereses o derechos difusos, el régimen de la cosa juzgada es siempre la eficacia de la sentencia *erga omnes (o ultra partes)*, en caso de procedencia o improcedencia del pedido, salvo cuando la improcedencia se diera por insuficiencia de pruebas, hipótesis en que la demanda puede ser repetida, con nuevas pruebas. Esta solución ya es tradicional en los países de Iberoamérica, pero el Código avanza, admitiendo nueva acción, con base en pruebas nuevas, en el plazo de 2 (dos) años contado desde el conocimiento de la prueba nueva sobreviniente al proceso colectivo (cosa juzgada *secundum probationem,* como derivación especial de la cláusula *rebus sic stantibus*). Con relación a los intereses o derechos individuales homogéneos, la opción de la legislación brasileña, mantenida en el Código, es de la cosa juzgada *secundum eventum litis*: o sea, la cosa juzgada positiva actúa *erga omnes*, beneficiando a todos los miembros del grupo; pero la cosa juzgada negativa sólo alcanza a los legitimados a las acciones colectivas, pudiendo cada individuo, perjudicado por la sentencia, oponerse a la cosa juzgada,

promoviendo su acción individual, en el ámbito personal. Otras normas cuidan de la extensión, *in utilibus,* de la cosa juzgada positiva resultante de una acción en defensa de intereses o derechos difusos o colectivos, en provecho de las víctimas individuales del mismo evento dañoso. Y también se regulan la conexión y la litispendencia entre acciones colectivas o entre una acción colectiva y las acciones individuales.

El Capítulo VI introduce una absoluta novedad para los ordenamientos de *civil law*: la acción colectiva pasiva, o sea la *defendant class action* del sistema norteamericano. Preconizada por la doctrina brasileña, objeto de tímidas tentativas en la práctica, la acción colectiva pasiva aún siendo más rara, no puede ser ignorada en un sistema de procesos colectivos. La acción, en esos casos, es propuesta no por la clase, sino contra ella. El Código exige que se trate de una colectividad organizada de personas, o que el grupo tenga representante adecuado, y que el bien jurídico a ser tutelado sea transindividual y de relevancia social. La cuestión principal que se planteaba, en esos casos, era la del régimen de la cosa juzgada: en obsequio al principio general de que la sentencia sólo puede favorecer a los integrantes del grupo cuando se trata de derechos o intereses individuales homogéneos, el mismo principio debía ser mantenido cuando la clase figurase en el polo pasivo de la demanda. Así, cuando se trata de bienes jurídicos de naturaleza indivisible (intereses difusos), el régimen de la cosa juzgada es *erga omnes* simétricamente a lo que ocurre cuando el grupo litiga en el polo activo (pero sin el temperamento de la improcedencia por insuficiencia de pruebas, inadecuado cuando la clase se coloca en el polo pasivo); pero, cuando se trata de bienes jurídicos de naturaleza divisible (intereses o derechos individuales homogéneos), la cosa juzgada positiva no vinculará a los miembros del grupo, categoría o clase, que podrán promover acciones propias o discutir la sentencia en el proceso de ejecución, para apartar la eficacia de la sentencia en su esfera jurídica individual. *Mutatis mutandis*, es el mismo tratamiento de la cosa juzgada *secundum eventum litis* para los intereses o derechos individuales homogéneos, cuando la clase litiga en el polo activo.

No obstante, tratándose de una acción promovida contra un sindicato, la cosa juzgada positiva alcanzará, sin excepciones, a los miembros de la categoría, dada la posición constitucional que en muchos países ocupa el sindicato y su representatividad adecuada, más sólida que la de las asociaciones.

Por último, el Capítulo VII trata de las disposiciones finales, contemplando una recomendación al intérprete y determinando la aplicación subsidiaria de los diversos Códigos de Proceso Civil y legislaciones especiales pertinentes, en lo que no fueren incompatibles.

7 – En conclusión, el Código ahora presentado, sin despreciar las experiencias de la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses transindividuales de diversos países, crea un modelo original, adherente a las reglas preexistentes en los ordenamientos iberoamericanos, que perfecciona y complementa. De ese modo, acaba perdiendo cualquier característica nacional y se constituye en un verdadero sistema iberoamericano de procesos colectivos, armonioso y completo, que podrá ser tomado como modelo por los países de nuestra comunidad, empeñados en la transformación de un proceso individualista en un proceso social.

Octubre de 2004
Roberto O. Berizonce (Presidente) – Argentina
Ada Pellegrini Grinover – Brasil
Angel Landoni Sosa – Uruguay

CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA

Capítulo I – Disposiciones generales

Art 1.º- Ámbito de aplicación de la acción colectiva.- La acción colectiva será ejercida para hacer valer pretensiones de tutela de:

I - intereses o derechos difusos, así entendidos los supraindividuales, de naturaleza indivisible, de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base;

II - intereses o derechos individuales homogéneos, así entendido el conjunto de derechos subjetivos individuales, provenientes de origen común, de que sean titulares los miembros de un grupo, categoría o clase.

Art. 2.º Requisitos de la demanda colectiva.- Son requisitos de la demanda colectiva:

I – la adecuada representatividad del legitimado;

II – la relevancia social de la tutela colectiva, caracterizada por la naturaleza del bien jurídico afectado, por las características de la lesión o por el elevado número de personas perjudicadas.

Par. 1o. Para la tutela de los intereses o derechos individuales homogéneos, además de los requisitos indicados en los n. I y II de este artículo, es también necesaria la demostración del predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales y de la utilidad de la tutela colectiva en el caso concreto.

Par. 2o. En el análisis de la representatividad adecuada el juez deberá analizar datos como:

a – la credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado;

b – sus antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o clase;

c – su conducta en otros procesos colectivos;

d – la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda;

e – el tiempo de constitución de la asociación y la representatividad de ésta o de la persona física respecto del grupo, categoría o clase.

Par. 3º- El Juez analizará la existencia del requisito de la representatividad adecuada en cualquier tiempo y grado del procedimiento, y aplicará, si fuere el caso, lo dispuesto en el parágrafo 4º del art. 3º.

Art. 3.º Legitimación activa.- Están legitimados concurrentemente a la acción colectiva:

I – toda persona física, para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho;

II – cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base y para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos;

III- el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la Defensoría Pública;

IV– las personas jurídicas de derecho público interno;

V – las entidades y órganos de la Administración Pública, directa o indirecta, aun aquellos sin personalidad jurídica, específicamente destinados a la defensa de los intereses y derechos protegidos por este Código;

VI- las entidades sindicales, para la defensa de los intereses y derechos de la categoría;

VII – las asociaciones legalmente constituidas desde por lo menos un año y que incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses y derechos protegidos en este Código, sin que sea necesaria la autorización de la asamblea;

VIII – los partidos políticos, para la defensa de derechos e intereses ligados a sus finalidades institucionales.

Par. 1°. El requisito de la pre-constitución puede ser dispensado por el juez, cuando haya manifiesto interés social evidenciado por la dimensión o característica del daño, o por la relevancia del bien jurídico a ser protegido.

Par. 2o. Será admitido el litisconsorcio facultativo entre los legitimados.

Par. 3o. En caso de interés social relevante, el Ministerio Público, si no promoviera la acción o no interviniera en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.

Par. 4o. En caso de inexistencia del requisito de la representatividad adecuada, de desistimiento infundado o de abandono de la acción por la persona física, entidad sindical o asociación legitimada, el juez notificará al Ministerio Público y, en la medida de lo posible, a otros legitimados adecuados para el caso a fin de que asuman, voluntariamente, la titularidad de la acción.

Par. 5o. El Ministerio Público y los órganos públicos legitimados podrán requerir de los interesados el compromiso administrativo de ajuste de su conducta a las exigencias legales, mediante conminaciones, que tendrán eficacia de título ejecutivo extrajudicial.

Capítulo II – De los proveimientos jurisdiccionales

Art. 4.º Efectividad de la tutela jurisdiccional.- Para la defensa de los derechos e intereses protegidos por este Código son admisibles todas las acciones aptas para propiciar su adecuada y efectiva tutela.

Art. 5.º Tutela jurisdiccional anticipada.- El juez podrá, a requerimiento de la parte interesada, anticipar, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida en el pedido inicial, siempre que, con base en prueba consistente, se convenza de la verosimilitud de la alegación y:

I - exista fundado temor de la ineficacia del proveimiento final o

II - esté comprobado el abuso del derecho de defensa o el manifiesto propósito dilatorio del demandado.

Par. 1o. No se concederá la anticipación de la tutela si hubiere peligro de irreversibilidad del proveimiento anticipado, a menos que, en un juicio de ponderación de los valores en juego, la denegación de la medida signifique sacrificio irrazonable de un bien jurídico relevante.

Par. 2º. En la decisión que anticipa la tutela, el juez indicará, de modo claro y preciso, las razones de su convencimiento.

Par. 3º. La tutela anticipada podrá ser revocada o modificada en cualquier tiempo, en decisión fundada.

Par. 4º. Si no hubiere controversia en cuanto a la parte anticipada en la decisión liminar, después de la oportunidad de contradictorio ésta se tornará definitiva y hará cosa juzgada, y proseguirá el proceso, si fuere el caso, para el juzgamiento de los demás puntos o cuestiones comprendidas en la demanda.

Art. 6.º Obligaciones de hacer y de no hacer. En el proceso que tenga por objeto el cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el juez concederá la tutela específica de la obligación o determinará las medidas que aseguren el resultado práctico equivalente al del cumplimiento.

Par. 1°. El juez podrá, en la hipótesis de anticipación de la tutela o en la sentencia, imponer una multa diaria al demandado, independientemente del pedido del actor, si fuera suficiente o compatible con la obligación, fijando plazo razonable para el cumplimiento de la resolución.

Par. 2º. El Juez podrá, de oficio, modificar el valor o la periodicidad de la multa, en el caso de que verifique que se tornó insuficiente o excesiva.

Par. 3°. Para la tutela específica o para la obtención del resultado práctico equivalente, podrá el juez determinar las medidas necesarias, tales como la búsqueda y la aprehensión, la remoción de cosas y personas, la demolición de obra, la prohibición de actividades nocivas y podrá requerir el auxilio de la fuerza policial.

Par. 4º. La conversión de la obligación en daños y perjuicios solamente será admisible si por ella optare el actor o si fuere imposible la tutela específica o la obtención del resultado práctico correspondiente.

Par. 5°. La indemnización por daños y perjuicios procederá independientemente de la multa.

Art. 7.º Obligaciones de dar.- En el proceso que tenga por objeto la obligación de entregar cosa, determinada o indeterminada, se aplican, en lo pertinente, las disposiciones del artículo anterior.

Art. 8.º Acción indemnizatoria. En la sentencia que condene a la reparación de los daños provocados al bien indivisiblemente considerado, el juez dispondrá que la indemnización sea vertida al Fondo de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos, administrado por un Consejo Gestor Gubernamental, del que participarán necesariamente miembros del Ministerio Público, jueces y representantes de la comunidad, sus recursos serán destinados a la reconstitución de los bienes lesionados o, si esto no fuere posible, a la realización de actividades tendientes a minimizar la lesión o a evitar que ella se repita, entre otras que beneficien el bien jurídico perjudicado.

Par. 1 – El Fondo será notificado sobre la deducción de toda acción colectiva y sobre las decisiones más importantes en tales procesos y podrá intervenir en los procesos colectivos en cualquier tiempo y grado de la jurisdicción para demostrar la inadecuación del representante o para auxiliarlo en la tutela de los derechos del grupo, categoría o clase.

Par. 2º – El Fondo llevará registros que discriminen el origen y destino de los recursos, e indicará la variedad de bienes jurídicos a ser tutelados y su ámbito regional.

Par. 3º – En atención a la especificidad del bien jurídico dañado, a la extensión territorial afectada y a otras circunstancias consideradas relevantes, el juez podrá determinar, en decisión fundamentada, el destino de la indemnización; dictará las providencias que deban ser tomadas para la reconstitución de los bienes afectados; podrá ordenar la realización de actividades tendientes a minimizar la lesión o a evitar que ella se repita, entre otras, que beneficien el bien jurídico tutelado.

Par. 4º – La decisión que especifique el destino de la indemnización indicará, de modo claro y preciso, las medidas que deberán ser tomadas por el Consejo Gestor del Fondo, así como el plazo razonable para que tales medidas sean practicadas.

Par. 5º – Terminado el plazo fijado por el juez, el Consejo Gestor del Fondo presentará un informe de las actividades realizadas, siéndole posible, según sea el caso, requerir la prórroga del plazo para complementar las medidas fijadas en la decisión judicial.

Capítulo III – De los procesos colectivos en general

Art. 9º. Competencia territorial.- Es competente para la causa el juez:

I – del lugar donde hubiere ocurrido o pudiera ocurrir el daño, cuando sea de ámbito local;

II – de la Capital, para los daños de ámbito regional o nacional, aplicándose las reglas pertinentes de organización judiciaria.

Art. 10. Objeto y fundamento.- En los procesos colectivos, el pedido y la causa de pedir serán interpretados extensivamente.

Par. 1o. Oídas las partes, el juez permitirá la enmienda de la demanda inicial para alterar o ampliar su objeto o la causa de pedir.

Par. 2o. El juez permitirá la alteración del objeto de proceso en cualquier tiempo y en cualquier grado de jurisdicción, siempre que sea realizada de buena fe, no represente perjuicio injustificado para la parte contraria y el contradictorio sea preservado.

Art. 11. Audiencia preliminar.- Cerrada la fase postulatoria, el juez convocará a la audiencia preliminar, a la cual comparecerán las partes o sus procuradores, habilitados para transigir.

Par. 1o. El juez oirá a las partes sobre los motivos y fundamentos de la demanda y de la contestación e intentará la conciliación, sin perjuicio de sugerir otras formas adecuadas de solución del conflicto, como la mediación, el arbitraje y la evaluación neutral de tercero.

Par. 2º. La evaluación neutral de tercero, obtenida dentro del plazo fijado por el juez, será reservada, inclusive para éste, y no vinculante para las partes, pues su finalidad exclusiva es la de orientarlas en la tentativa de composición amigable del conflicto.

Par. 3o. Preservada la indisponibilidad del bien jurídico colectivo, las partes podrán transigir sobre el modo de cumplimiento de la obligación.

Par. 4o. Obtenida la conciliación, será homologada por sentencia, que constituirá título ejecutivo judicial.

Par. 5o. Si no se obtuviere la conciliación, si ésta fuere parcial, o si, por cualquier motivo, no fuere adoptado otro medio de solución del conflicto, el juez, en forma fundada:

I – decidirá si el proceso tiene condiciones de proseguir en la forma colectiva;

II – podrá separar los pedidos en procesos colectivos distintos, tendientes a la tutela, respectivamente, de los intereses o derechos difusos e individuales homogéneos, siempre que la separación represente economía procesal o facilite la conducción del proceso;

III – fijará los puntos controvertidos, decidirá las cuestiones procesales pendientes y determinará las pruebas a ser producidas, y convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento, si fuere el caso.

IV – esclarecerá a las partes en cuanto a la distribución de la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1º del art. 12.

Art. 12. Pruebas.- Son admisibles en juicio todos los medios de prueba, incluida la prueba estadística o por muestreo, siempre que sean obtenidos por medios lícitos.

Par.1º – La carga de la prueba incumbe a la parte que posea conocimientos científicos, técnicos o informaciones específicas sobre los hechos, o mayor facilidad para su demostración. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, pudiendo requerir pericias a entidades públicas cuyo objeto estuviere ligado a la materia en debate, condenándose al demandado perdidoso al reembolso de los emolumentos devengados. Si a pesar de lo anterior, no es posible aportar la prueba respectiva, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos.

Par. 2º – Durante la fase de instrucción, si surgieren modificaciones de hecho o de derecho relevantes para el juzgamiento de la causa, el juez podrá rever, en decisión fundada, la distribución de la carga de la prueba, y conceder a la parte a quien le fue atribuida un plazo razonable para la producción de la prueba, respetando las garantías del contradictorio en relación a la parte contraria.

Par. 3º – El juez podrá ordenar de oficio la producción de pruebas, con el debido respeto de las garantías del contradictorio.

Art. 13. Anticipación de la decisión de fondo.- El juez decidirá sin más la demanda en cuanto al mérito, cuando no hubiere necesidad de producción de prueba.

Parágrafo único. El juez podrá decidir sin más trámite, parte de la demanda, cuando no hubiere necesidad de producción de prueba, siempre que ello no implique prejuzgamiento directo o indirecto del litigio que quede pendiente de decisión. En este caso el proceso continuará para la instrucción y juzgamiento de los demás pedidos que se decidirán en resoluciones complementarias.

Art. 14.- Legitimación para la liquidación y ejecución de condena.- Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la sentencia condenatoria quedare firme, sin que el demandante promueva la liquidación o la ejecución, deberá hacerlo el Ministerio Público, cuando se trate de interés

social relevante, quedando facultados, asimismo, para dicha iniciativa, en todos los casos, los demás legitimados.

Art. 15. Costas y honorarios.- En los procesos colectivos de que trata este Código, la sentencia condenará al demandado, si fuere vencido, en las costas, emolumentos, honorarios periciales y cualquier otro gasto, así como en los honorarios de los abogados de la parte actora.

Par. 1º. Para el cálculo de los honorarios, el juez tendrá en consideración la ventaja para el grupo, categoría o clase, la cantidad y calidad del trabajo desempeñado por el abogado de la parte actora y la complejidad de la causa.

Par. 2º. Si el legitimado fuere persona física, sindicato o asociación, el juez podrá fijar una gratificación financiera cuando su actuación hubiera sido relevante en la conducción y éxito del proceso colectivo.

Par. 3º. Los actores en los procesos colectivos no adelantarán costas, emolumentos, honorarios periciales y cualquier otro gasto, ni serán condenados, salvo comprobada mala fe, en honorarios de abogados, costas y gastos procesales.

Par. 4º. El litigante de mala fe y los responsables de los respectivos actos serán solidariamente condenados al pago de los gastos del proceso, de los honorarios de los abogados de la parte contraria y al décuplo de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios.

Art. 16.- Procesos de trámite prioritario.- El juez deberá dar prioridad al trámite de los procesos colectivos, cuando haya manifiesto interés social evidenciado por la dimensión del daño o por la relevancia del bien jurídico que deba ser protegido.

Art. 17.- Interrupción de la prescripción.- La citación válida en los procesos colectivos interrumpe el plazo de prescripción de las pretensiones individuales y transindividuales directa o indirectamente relacionadas con la controversia**,** y retrotrae sus efectos a la fecha de la presentación de la demanda.

Art. 18.- Efectos de la apelación.- La apelación de la sentencia definitiva tendrá efecto meramente devolutivo, salvo cuando la fundamentación fuere relevante y pudiere resultar para la parte una lesión grave y de difícil reparación, caso en el cual el juez podrá atribuir al recurso efecto suspensivo.

Art. 19.- Ejecución definitiva y ejecución provisional.- La ejecución es definitiva cuando la sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada; es provisoria cuando están pendientes los recursos admisibles.

Par. 1º – La ejecución provisoria corre por cuenta y riesgo del ejecutante, quien responderá por los perjuicios causados al ejecutado, en caso de que la sentencia recurrida fuere modificada.

Par. 2º – La ejecución provisoria permite la práctica de actos que importen la enajenación del dominio o el levantamiento de depósito en dinero.

Par. 3º – A pedido del ejecutado, el juez podrá suspender la ejecución provisoria cuando de ella pudiere resultar una lesión grave o de difícil reparación.

Capítulo IV –De los procesos colectivos para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos

Art. 20.- Pretensión colectiva de responsabilidad civil.- Los legitimados podrán proponer, en nombre propio y en el interés de las víctimas o de sus sucesores, entre otras (art. 4o), la pretensión civil colectiva de responsabilidad por los daños individualmente sufridos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

Parágrafo único.- La determinación de los interesados podrá producirse en el momento de la liquidación o ejecución de lo juzgado, por lo que no será necesario que la petición inicial esté acompañada de la relación de miembros del grupo, clase o categoría. Según el caso, el juez podrá exigir, al demandado o al tercero, la presentación de la relación y datos de las personas que integran el grupo, categoría o clase.

Art. 21. Citación y notificaciones.- Estando en forma la petición inicial, el juez ordenará la citación del demandado y la publicación de edictos en el Órgano Oficial, con la finalidad de que los interesados puedan intervenir en el proceso como asistentes o coadyuvantes.

Par. 1º - Sin perjuicio de la publicación de edictos, el juez ordenará que sean notificados los órganos y entidades de defensa de los intereses o derechos protegidos en este Código, acerca de la existencia de la demanda colectiva y de su trámite a fin de que cumplan con lo dispuesto en el acápite de este artículo.

Par. 2º - Cuando fuere posible la ejecución de lo juzgado, incluso en forma provisoria, o estuviere precluida la decisión anticipatoria de los efectos de la tutela pretendida, el juez ordenará la publicación de edictos en el Órgano Oficial, a costa del demandado, a quien impondrá, también, el deber de divulgar nueva información por los medios de comunicación social, observando el criterio del costo reducido. Sin perjuicio de las referidas providencias, el juez dispondrá la comunicación a los órganos y entidades de defensa de los intereses o derechos protegidos en este Código, para los efectos de lo dispuesto en el parágrafo anterior.

Par. 3º -. Los intervinientes no podrán discutir en el proceso colectivo de conocimiento sus pretensiones individuales.

Art. 22. Sentencia de condena.- En caso de procedencia del pedido, la condena podrá ser genérica y fijará la responsabilidad del demandado por los daños causados así como el deber de indemnizar.

Par. 1º. Siempre que fuere posible, el juez determinará en la propia sentencia colectiva el monto de la indemnización individual debida a cada miembro del grupo.

Par. 2º - Cuando el valor de los daños individuales sufridos por los miembros del grupo fuere uniforme, prevalentemente uniforme o pudiere ser reducido a una fórmula matemática, la sentencia colectiva indicará el valor o la fórmula de cálculo de la indemnización individual.

Par. 3º - El miembro del grupo que no esté de acuerdo con el monto de la indemnización individual o la fórmula para su cálculo establecidos en la sentencia colectiva, podrá deducir una pretensión individual de liquidación.

Art. 23. Liquidación y ejecución individuales.- La liquidación y la ejecución de la sentencia podrán ser promovidas por la víctima y sus sucesores, así como por los legitimados para la acción colectiva.

Parágrafo único – En el proceso de liquidación de la sentencia, que podrá ser promovido ante el juez del domicilio del ejecutante, corresponderá a éste probar, tan sólo, el daño personal, el nexo de causalidad y el monto de la indemnización.

Art. 24. Ejecución colectiva.- La ejecución podrá ser colectiva si es promovida por los legitimados en el proceso colectivo y abarcará a las víctimas cuyas indemnizaciones ya hubieran sido fijadas en liquidación, sin perjuicio del trámite de otras ejecuciones.

Parágrafo único. La ejecución colectiva se hará en base a las decisiones de liquidación certificadas, en las cuales constará si se encuentran o no firmes.

Art. 25. Competencia para la ejecución – Es competente para la ejecución el juez:

I - de la liquidación de la sentencia o de la pretensión condenatoria, en el caso de ejecución individual;

II - de la pretensión condenatoria, cuando sea colectiva la ejecución.

Art. 26 – De los pagos. El pago de las indemnizaciones o el levantamiento del depósito será hecho personalmente a los beneficiarios.

Art. 27. Liquidación y ejecución por los daños globalmente causados. - Transcurrido el plazo de un año sin la comparecencia de los interesados en número representativo y compatible con la gravedad del

daño, podrán los legitimados del artículo 3 promover la liquidación y ejecución colectiva de la indemnización debida por los daños causados.

Parágrafo único - El valor de la indemnización será fijado en atención al daño globalmente causado, que será demostrado a través de todas las pruebas en derecho admitidas. Si fuere difícil o imposible la producción de pruebas, en razón de la extensión del daño o de su complejidad, la cuantía de la indemnización será fijada por peritaje arbitral.

Art. 28. - Concurrencia de créditos.- En caso de concurso de créditos derivados de la condena de que trata el artículo 6º y de indemnizaciones por los perjuicios individuales resultantes del mismo evento dañoso, éstas tendrán preferencia en el pago.

Parágrafo único. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la entrega de las cantidades que deba percibir el Fondo quedará suspendida mientras estén pendientes de decisión de segundo grado las acciones de indemnización por los daños individuales, salvo en la hipótesis de que el patrimonio del deudor sea manifiestamente suficiente para responder por la totalidad de las deudas.

Capítulo V – De la conexión, de la litispendencia y de la cosa juzgada

Art. 29. - Conexión.- Si hubiere conexión entre las causas colectivas, se produce prevención en favor del juez que conoció del primer proceso, quien de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la acumulación de todos los litigios, aun cuando en éstos no actúen la totalidad de los mismos sujetos procesales.

Art. 30. - Litispendencia.- El primer proceso colectivo produce litispendencia respecto de los posteriores en los que se hagan valer pretensiones sobre el mismo bien jurídico, aún cuando sean diferentes los legitimados activos o las causas de pedir.

Art. 31. - Relación entre la acción colectiva y las acciones individuales.- La acción colectiva no genera litispendencia respecto de las acciones individuales, pero los efectos de la cosa juzgada colectiva (art. 33) no beneficiarán a los actores en los procesos individuales, si no fuera requerida la suspensión del proceso individual en el plazo de 30 (treinta) días, a contar desde el conocimiento efectivo del proceso colectivo.

Parágrafo único.- Corresponde al demandado informar en el proceso por la acción individual sobre la existencia de una acción colectiva con el mismo fundamento bajo la pena de que, de no hacerlo, el actor individual se beneficiará de la cosa juzgada colectiva aún en el caso de que la demanda individual sea rechazada.

Art. 32. Conversión de las acciones individuales en una acción colectiva.- Si el juez tuviere conocimiento de la existencia de diversos procesos individuales tramitados contra el mismo demandado, con el mismo fundamento, notificará al Ministerio Público y en la medida de lo posible, a otros representantes adecuados, a fin de que si lo desearen propongan una acción colectiva, pero quedará a salvo para los actores individuales la facultad prevista en el artículo anterior.

Art. 33.- Cosa juzgada.- En los procesos colectivos de que trata este Código, la sentencia hará cosa juzgada *erga omnes*, excepto cuando la pretensión fuere rechazada por insuficiencia de pruebas, caso en el cual cualquier legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, si se valiere de nueva prueba.

Par. 1º. Asimismo, en la hipótesis de rechazo basado en las pruebas producidas, cualquier legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, en el plazo de 2 (dos) años contados desde el conocimiento de nueva prueba superveniente, que no hubiera podido ser producida en el proceso, siempre que ella sea idónea, por sí sola, para modificar el resultado del proceso.

Par. 2º - Tratándose de intereses o derechos individuales homogéneos, en caso de rechazo de la pretensión, los interesados podrán deducir la acción de indemnización a título individual.

Par. 3º. Los efectos de la cosa juzgada en los procesos de tutela de intereses o derechos difusos, no perjudicarán las acciones de indemnización por daños personalmente sufridos, propuestas individualmente o en la forma prevista en este Código, pero si hubiera sido declarado procedente el pedido, tales efectos beneficiarán a las víctimas y a sus sucesores quienes podrán solicitar la liquidación y la ejecución en los términos de los artículos 22 a 24.

Par. 4º. Lo dispuesto en el parágrafo anterior, es aplicable a la sentencia penal condenatoria.

Par. 5º. La competencia territorial del órgano juzgador no implicará una limitación para la cosa juzgada *erga omnes*.

Art. 34. **Relaciones jurídicas continuadas.-** En las relaciones jurídicas continuadas, si sobreviniere modificación en el estado de hecho o de derecho, la parte podrá pedir la revisión de lo que fue decidido por sentencia.

Capítulo VI – De las acciones contra un grupo, categoría o clase

Art. 35.- Acciones contra el grupo, categoría o clase.- Cualquier clase de pretensión puede ser propuesta contra una colectividad organizada

o que tenga representante adecuado, en los términos del parágrafo 2o del artículo 2o de este Código, siempre que el bien jurídico a ser tutelado sea supraindividual (artículo 1o) y esté revestido de interés social.

Art. 36 - Cosa juzgada pasiva: intereses o derechos difusos.- Cuando se trate de intereses o derechos difusos, la cosa juzgada tendrá eficacia *erga omnes* y vinculará a los miembros del grupo, categoría o clase.

Art. 37. - Cosa juzgada pasiva: intereses o derechos individuales homogéneos.- Cuando se trate de intereses o derechos individuales homogéneos, la cosa juzgada tendrá eficacia *erga omnes* en el plano colectivo, pero la sentencia que acoja la demanda, no vinculará a los miembros del grupo, categoría o clase, que podrán plantear pretensiones o defensas propias en el proceso de ejecución para dejar sin efecto la eficacia de la decisión en su esfera jurídica individual.

Parágrafo único – Cuando la pretensión colectiva fuere promovida contra un sindicato, como sustituto procesal de la categoría, la cosa juzgada tendrá eficacia erga omnes y vinculará individualmente a todos los miembros, aún en el caso de procedencia del pedido.

Art. 38. Aplicación supletoria a las acciones pasivas.- Es aplicable complementariamente a las acciones colectivas pasivas lo dispuesto en este Código para las acciones colectivas activas, en lo que no fuera incompatible.

Capítulo VII – Disposiciones finales

Art. 39. Principios de interpretación.- Este Código será interpretado de forma abierta y flexible, compatible con la tutela colectiva de los intereses y derechos de que trata.

Art. 40. Especialización de los magistrados. Siempre que sea posible, los procesos colectivos serán procesados y juzgados por magistrados especializados.

Art. 41. Aplicación subsidiaria de las normas procesales generales y especiales.- Aplícanse subsidiariamente, en lo que no fueren incompatibles, las disposiciones del Código de Proceso Civil y de la legislación especial pertinente.

CÓDIGO MODELO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL PARA IBEROAMÉRICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La tutela judicial transnacional es una exigencia de los tiempos actuales, ya que constantemente las relaciones jurídicas, sobre diversos aspectos, traspasan las fronteras de un Estado. Asegurar la efectividad de una tutela judicial sin fronteras significa mucho más que solamente reconocer las decisiones judiciales extranjeras ejecutoriadas pronunciadas en procesos de conocimiento.

Todo lo que sea necesario para asegurar la efectividad de la jurisdicción debe estar comprendido en la idea de una tutela judicial transnacional, como son: las medidas de urgencia, *los* actos de ejecución, los actos destinados a la comunicación procesal o incluso los actos probatorios. Poco importa si se trata de Derecho Público o Derecho Privado; de la misma manera, la jurisdicción ha de ser efectiva y estar pautada en los mismos principios e ideas de la justicia transnacional.

No obstante, el tratamiento diferenciado dispensado a la cooperación interjurisdiccional en cada Estado, es un serio obstáculo a la efectividad de la tutela judicial transnacional. Aun partiendo de las mismas preocupaciones —plenitud de acceso a la justicia transnacional y preservación de la soberanía estatal—, las reglas internas de cada Estado, algunas de índole constitucional, acaban siendo contradictorias o sufriendo interpretaciones contradictorias. En la búsqueda de la uniformidad de reglas sobre el tema, ideal imaginado por las convenciones y tratados en el ámbito de las organizaciones internacionales (Mercosur, OEA, La Haya, ONU), o bien en la búsqueda de un espacio judicial iberoamericano por la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial (IberRed), ello depende en forma preliminar de un consenso acerca de los principios. La finalidad de un Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional reside, justamente, en la reunión de los principios fundamentales y reglas generales inherentes a la jurisdicción transnacional que, con las adaptaciones necesarias a cada Estado, sean

pasibles de aplicación en todos los sistemas jurídicos que consagren un Estado de Derecho.

La propuesta de un Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para lberoamérica surgió en julio de 2005, cuando en las Jornadas especiales de Barcelona del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, cuyo presidente, Jairo Parra Quijanci, en reunión con Ada Pellegrini Grinover, Ángel Landoni Sosa y Ricardo Perlingeiro, los designó junto con Abel Augusto Zamorano, para participar de la Comisión destinada a elaborar un pre-proyecto. Las actividades de la Comisión presidida por Ada Pellegrini Grinover, y actuando en la Secretaría Ricardo Perlingeiro, comprendieron discusiones a distancia (por e-mail) y dos reuniones presenciales. En efecto, entre julio y diciembre de 2005, la Comisión discutió el asunto vía Internet, siendo que en los días 9 y IO de febrero de 2006, en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense, en Niteroi, fue realizada la primera reunión presencial, donde se discutió y aprobó una de las versiones de la propuesta de Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica. Esta versión fue revisada y complementada por la misma Comisión, en el transcurso del III Congreso Panameño de Derecho Procesal, en la ciudad de Panamá, realizado del 15 al 18 de agosto de 2006. El texto final fue sometido a la Asamblea General del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en las XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, que tuvieron lugar entre el 25 y el 27 de octubre de 2006 en Málaga (España), donde fue constituida la Comisión de Revisión destinada a la elaboración del Proyecto de Código Modelo, también presidida por Ada Pellegrini Grinover y actuando en la Secretaría Ricardo Perlingeiro, y de la cual formaron parte Abel Augusto Zamorano, Ángel Landoni Sosa, Carlos Ferreira da Silva, Eduardo Véscovi, Juan Antonio Robles Garzón, Luis Ernesto Vargas Silva y Roberto Ornar Berizonce. Se sucedieron discusiones a distancia (vía e-mail), hasta que el día 15 de setiembre de 2007, en Salvador, en ocasión del XIII Congreso Mundial de Derecho Procesal de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, enreunión que contó con la participación del presidente del Instituto, Jairo Parra, la Comisión de Revisión aprobó la versión final del Proyecto de Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica.

La idea de Códigos Modelos no es una novedad en el espacio iberoamericano. En 1967, en las Jornadas de Caracas y Valencia, en Venezuela, surgió la idea de confeccionar dos proyectos de normas procesales con el objetivo de que ellos sirvieran de orientación a las reformas legislativas a ser promovidas en los países latinoamericanos. Se iniciaba, entonces, con el trabajo de juristas y comisiones organizadas, la elaboración de los Códigos Modelos del Proceso Civil y del Proceso Penal. Recientemente, el Instituto

Iberoamericano de Derecho Procesal, en las XIX Jornadas de Caracas, aprobó el Código Modelo de los Procesos Colectivos para Iberoamérica.

El proyecto de Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica es de avanzada, con una sistematización absolutamente inédita; no obstante, sus principios y reglas generales han sido construidos a partir de la experiencia reciente de los países iberoamericanos y de sus normas en vigor (de fuente interna y externa) de las cuales nos permitimos destacar, a vía de ejemplo, las que inspiraran algunas de las principales reglas de este Código Modelo: a) el vínculo entre la concepción de orden público internacional y los principios fundamentales del Estado requerido / art. 2, I; Código Civil portugués, Decisión del Consejo CE, 29/5/2000); b) traducción y formas libres para los actos y documentos necesarios para la cooperación / art. 2, VI (Convención interamericana sobre restitución de menores); c) sumisión expresa o tácita para la fijación de la competencia internacional condicionada al principio de la efectividad / art. 7,

§ 1 (Código Bustamante, Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual); d) litispendencia y conexiones internacionales / art. 9 (Código Civil peruano, Código Bustamante, Convención de La Haya sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial, Reglamentos CE 44/2001 y 2201/2003; e) eficacia automática de las decisiones extranjeras / art. 10 (Reglamentos CE 44/2001 y 1346/2000); t) investigación conjunta / art. 20 (Ley portuguesa de cooperación judicial internacional en materia penal, Convención internacional de las Naciones Unidas para la supresión del financiamiento del terrorismo, Convención de la ONU sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas, Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, Decisión del Consejo CE 29/5/2000); g) comparecencia temporal de personas / art. 22 (Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal, Convención interamericana contra el terrorismo, Protocolo de San Luis de asistencia jurídica mutua en asuntos penales en el Mercosur, Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la supresión de atentados terroristas con bombas); h) extensión de la competencia penal internacional en los casos de negativa de extradición / art. 24, III (Convención interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, Convención de las Naciones Unidas sobre protección física de materiales nucleares); i) transferencia de proceso y de ejecución penal/ art. 25 (Convención interamericana sobre cumplimiento de sentencias penales en el exterior, Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado internacional); j) extradición de nacionales / arts. 30 y 31, IV (Constitución Política colombiana, Código del Proceso Penal de Bolivia, Tratado de extradición Chile y Uruguay, Acuerdo de extradición entre el Mercosur, la

República de Bolivia y la República de Chile, Convención interamericana sobre extradición).

El Proyecto de Código Modelo está organizado de la siguiente manera. En el Capítulo I dispone sobre el alcance y los principios fundamentales de la cooperación interjurisdiccional; en los Capítulos Il y III, sobre las reglas generales de las especies de cooperación interjurisdiccional, distinguiendo la cooperación civil de la cooperación penal; en el Capítulo IV, sobre los procedimientos de cooperación interjurisdiccional; y en el Capítulo V, las disposiciones finales.

Alcance y principios

En primer término, debemos señalar que el Proyecto no consiste en un modelo para la cooperación "en Iberoamérica", sino un "Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional *para lberoamérica",* y ello para que no exista la falsa impresión de que la cooperación sería exclusivamente entre los Estados iberoamericanos. El Proyecto de Código Modelo no es una propuesta de tratado internacional a ser ratificado, pero sí es una propuesta de normas nacionales a ser incorporadas internamente por países iberoamericanos y destinada a la cooperación interjurisdiccional con cualquier Estado, iberoamericano o no.

La expresión "cooperación interjurisdiccional" es la más adecuada a la tutela judicial transnacional. Los litigios internacionales, objeto de la tutela judicial transnacional, son aquellos que poseen elementos conectados en más de un Estado. En esos casos, la efectividad de la jurisdicción depende, siempre, de la actuación conjunta de Estados soberanos. De allí la expresión "cooperación". Es cierto que no se trata exactamente de una cooperación internacional, ya que esta expresión es más apropiada para las relaciones de Derecho Internacional Público y, por tanto, para la tutela judicial ante los tribunales internacionales. Se llega, así, a la expresión "cooperación interjurisccliccional".

De acuerdo con la denominación "cooperación interjurisdiccional", el art. 1 apunta como objetivo del Proyecto de Código Modelo asegurar la efectividad de la prestación jurisdiccional en un plano transnacional, a partir del intercambio de actos de naturaleza" administrativa o jurisdiccional, emanados de autoridades administrativas o judiciales, en el ámbito del derecho público o del derecho privado. El art. 2 enumera los principios generales de cooperación interjurisdiccional, constando, del inciso I al V, los principios que refieren a la procedencia de la cooperación y, en los incisos VI, VII y VIII, los que refieren a las formas y los procedimientos de la cooperación activa y pasiva.

La cláusula de orden público está asociada a la observancia de los principios fundamentales del Estado en cuyo territorio se pretenda la

eficacia de cualquier acto extranjero o se pretenda practicar un acto a favor de la prestación jurisdiccional de un tribunal extranjero (art. 2, 1). De esa forma, del poder público de un Estado no deben emanar actos contrarios a sus propios principios fundamentales y tampoco actos que sirvan a la actividad jurisdiccional en otro Estado que también puedan ser incompatibles con dichos principios. En concordancia con esa cláusula, no se admite ni la práctica de actos administrativos, tal como el registro de un certificado de divorcio extranjero, ni la práctica de actos ordenatorios que impliquen una prestación jurisdiccional incompatible con los principios fundamentales del Estado del cual se reclaman tales actos. La asociación entre orden público internacional y los principios fundamentales inspirada en la legislación alemana, austriaca y portuguesa[1], disminuyó el grado de imprecisión del concepto indeterminado de orden público, aparta de la comprensión de éste la simple contradicción entre leyes infraconstitucionales o constitucionales y lo eleva al nivel de principio fundamental, expresado o no en una Constitución.

El obstáculo a la cooperación interjurisdiccional en razón de la falta de la observancia de las garantías del debido proceso legal en el Estado requirente, tal como está previsto en el artículo 2, II, es un desdoblamiento de la cláusula de orden público internacional. No respetar las garantías del debido proceso legal es lo mismo que negar el derecho a la tutela judicial efectiva y, consecuentemente, ofender los principios fundamentales de un Estado. Frecuentemente citada en las defensas legales, la falta de oportunidad de defensa en el proceso judicial en curso en el Estado requirente es un ejemplo —pero no el único— de la necesidad de la observancia de las garantías del debido proceso legal. En el mismo sentido, la publicidad procesal asegurada en el art. 2, V, actúa como garantía del debido proceso legal y del orden público internacional, exceptuada solamente en los casos de interés público que justifiquen el secreto (art. 6, III, 2.ª parte).

El Proyecto de Código Modelo, en el art. 2, rechaza cualquier diferencia de tratamiento entre nacionales y extranjeros, residentes o no residentes, inclusive en cuanto a la posibilidad de extradición. El acceso a la justicia debe ser efectivo y las garantías correspondientes deben estar al alcance de los nacionales y de los extranjeros, indistintamente. La gratuidad de la justicia —indispensable para los necesitados— debe incluir las expensas, en especial los honorarios de los traductores.

En el art. 2, IV, se establece como principio la no dependencia de la reciprocidad de tratamiento. El objetivo es asegurar, en un contexto transnacional, el ejercicio de los derechos pertenecientes a personas privadas, de modo de no sacrificarlos por culpa de un Estado que es omiso no ofreciendo

1 Ley de Introducción al Código Civil alemán (EGBGB), art. 6°, Ley austriaca de Derecho Internacional Privado, § 6º, y Código Civil portugués, art. 22.

reciprocidad. De esta omisión debe resultar solamente una restricción a los intereses del propio Estado pasivo, bajo pena de configurar una ofensa a la tutela judicial transnacional, tal como está previsto en los casos de comparecencia temporal (art. 22), extradición (art. 30, 1) y expensas procesales (art. 58).

El Proyecto acoge el principio de la instrumentalidad procesal para el procedimiento de cooperación activa y pasiva (art. 2, VI), admitiendo la traducción libre, que significa que no hay necesidad de traducción profesional u oficial, siendo asimismo prescindible en los casos en que el tribunal y las partes litigantes no la necesiten, y admitiéndose también los medios electrónicos y la videoconferencia. Dicho principio es aplicable a todas las modalidades de cooperación, existiendo previsión expresa en el art. 5, parágrafo único (prueba por videoconferencia) y en el art. 6, parágrafo único (intercambio de informaciones).

Con respecto a la autoridad central, existe consenso en que este organismo debe servir a la cooperación interjurisdiccional, en la medida en que facilite su realización (art. 2, VII). La tramitación de los pedidos de cooperación frente a una autoridad central solamente ocurrirá cuando, a criterio de los interesados, sea considerada necesaria. De esta manera, no obstante los Estados están obligados a mantener la estructura administrativa de una autoridad central; en los procedimientos de carta rogatoria o de auxilio mutuo, se admite que las entidades interesadas se comuniquen directamente. También debe señalarse que dentro del papel atribuido a la autoridad central, no compete a ésta valorar la procedencia del pedido de cooperación, impidiendo su tramitación o su consideración.

Se admite la espontaneidad en la transmisión de informaciones a las autoridades del Estado requirente (art. 2, VIII). En efecto, existen situaciones en que no sería necesario —o incluso posible— esperar una solicitud del Estado requirente. Se trata de las comunicaciones o informaciones sujetas al procedimiento de auxilio mutuo. Pueden citarse como ejemplos las comunicaciones al Estado requirente en cuanto a la efectivización de una medida de urgencia (a los efectos del plazo establecido en el art. 18) o en lo que refiere a la ocurrencia de procedimientos criminales supervenientes, por ejemplo la detención de una persona requerida (cuando ello sea posterior a la aceptación de una solicitud en este sentido).

Modalidades de cooperación

La cooperación interjurisdiccional —referida al Derecho Internacional Privado— alcanza a litigios transnacionales de derecho privado y de derecho público. La legislación nacional, europea e internacional de cooperación interjurisdiccional que no reúne las materias de derecho privado con las de derecho público, proceden así porque, al nivel de detalle en que

se encuentran, tal unificación no sería ni justificada ni viable. En cambio, no es lo que ocurre con el Proyecto de Código Modelo, que contiene solamente principios y reglas generales, todos compatibles con las relaciones transnacionales referidas a ambas ramas del derecho. La diferencia de tratamiento fue prevista solamente cuando se consideró necesaria, incluso tratándose de principios y reglas generales, admitiéndose a la cooperación penal como especial en relación con la cooperación civil, residual. Por último, cabe recordar que no se enfrentaría el importante tema de la "inmunidad de jurisdicción" (art. 7, parágrafo segundo), si no se incluyera en el Proyecto la materia de derecho público (administrativa, tributaria y previsional).

La cooperación interjurisdiccional comprende dos clases de modalidades, la de los actos de mero trámite y los probatorios que no reclaman una decisión jurisdiccional del Estado requerido y, por otro lado, la de los actos que la reclaman. En la primera clase se encuentran la citación, la intimación y la notificación judicial y extrajudicial (arts. 3, I y 19, I), la realización de pruebas y la obtención de informaciones (arts. 3, II y 19, II), o la comparecencia temporal de personas (art. 19, IV) y la investigación conjunta (art. 19, III); en la segunda, la eficacia y ejecución de la decisión extranjera (arts. 3, III, y 19, VI), la medida de urgencia (arts. 3, IV, y 19, VIII), la extradición (art. 19, VIII), la transferencia del proceso y ejecución penal (art. 19, V) y, eventualmente, también en algunos casos en que la realización de pruebas y la obtención de informaciones necesiten de medidas jurisdiccionales (en este caso, sujeta a carta rogatoria —art. 41, I—), como ocurre con el levantamiento del secreto o las medidas de constricción, de acuerdo con la ley procesal interna de cada Estado. Las reglas sobre competencia internacional (arts. 7, 8 y 24) están situadas estratégicamente entre las dos clases referidas de modalidades de cooperación, pues la competencia internacional se aplica a la jurisdicción propiamente dicha y no a los actos de mero trámite o desprovistos de contenido decisorio.

Cooperación civil

El Capítulo II incluye modalidades de cooperación que se aplican a la cooperación civil y, subsidiariamente, a la cooperación penal. Nos referimos a las siguientes especies de cooperación: a- citación, intimación y notificación (art. 4); b- realización de pruebas y obtención de informaciones (arts. 5 y 6); c- eficacia de la decisión extranjera (arts. 1O y 11); d- ejecución de decisión extranjera (arts. 12-14); e- medida judicial de urgencia (arts. 15-18).

En cuanto a los actos de comunicación procesal, estos no serán admitidos cuando se practiquen en relación con un proceso —en curso en otro Estado— que no sea capaz de alcanzar una decisión final en condiciones

de ser reconocida por el Estado requerido (art. 4). No tiene sentido movilizar la maquinaria judicial o administrativa del Estado requerido, aunque se trate de actos judiciales meramente ordenatorios, para contribuir con una prestación jurisdiccional que no sea compatible con los principios fundamentales de ese Estado. Además, implícitamente, se admiten en este artículo los actos de comunicación procesal por correo.

En materia probatoria, son admitidos en el ámbito de la cooperación interjurisdiccional todos los medios de prueba en general, siempre que hayan sido obtenidos lícitamente y sean destinados a un proceso en curso en otro Estado en condiciones de producir efectos en el Estado requerido (art. 5). No obstante, además de las dos modalidades específicas en materia penal, sobre investigación conjunta (arts. 20 y 21) y comparecencia temporaria de personas (arts. 22 y 23), el Proyecto de Código Modelo destaca el intercambio de informaciones en tres niveles: a- informaciones sobre el derecho extranjero; b- informaciones acerca de la existencia de infracciones penales; c- informaciones respecto al trámite del proceso administrativo o judicial y de las decisiones adoptadas en ellos. El presupuesto de licitud para la admisión de la prueba reafirma la cláusula de protección del orden público internacional, siendo necesario que el medio de obtención de la prueba esté amparado en los principios fundamentales, tanto del Estado requerido como del Estado requirente.

El parágrafo único del art. 6, relacionado con el principio de la instrumentalidad, fundado especialmente en el principio probatorio de la libre convicción racional, es contrario a la idea de que algún medio de prueba tenga valor absoluto. Esta regla tiene una doble finalidad. No se exige la traducción de los documentos, tampoco una traducción oficial, bastando la comprensión de los mismos —lo que puede ser alcanzado por diversos medios de prueba—. La tramitación a través de autoridades centrales o diplomáticas, de acuerdo con el papel de estas entidades, debe facilitar la cooperación interjurisdiccional, generando una presunción de autenticidad ele los documentos que es relativa y por ende admite la prueba en contrario.

Las reglas sobre competencia internacional civil (arts. 7 y 8) están orientadas por el principio de la efectividad, que, acompañado con el principio del juez natural y *delforum non conviniens,* imponen límites al principio de sumisión, de forma de evitar que se conduzca al *forum shopping,* sacrificando el acceso a la justicia, a la amplia defensa, el conocimiento de los hechos, la observancia de los derechos adquiridos o a la propia realización fáctica de la tu tela ejecutiva o de urgencia (art. 7, § 1). De un modo general, las reglas sobre competencia internacional acompañan la orieJ1tación del legislador interno, prefiriendo al tribunal del Estado que esté más próximo al litigio: más próximo al demandado, asegurando una

amplia defensa (art. 7, I, l.ª parte); más próximo al actor, asegurando un amplio acceso a la justicia (art.7, 111); más próximo a los hechos, asegurando una eficaz instrucción probatoria (arts. 7, I, 2.ª parte, u 8, I); más próximo a la ley material que regula el hecho constitutivo del derecho subjetivo *sub judice* (art. 7, II); o, incluso, más próximo al lugar de ejecución, asegurando la efectividad de la tutela ejecutiva o de la tutela de urgencia (art. 8, I, y II). En ese contexto, es competente el tribunal del Estado que mantenga algún vínculo efectivo con el litigio capaz de asegurar un proceso justo (art. 7, III); en carácter subsidiario, es competente el tribunal del Estado que fuera designado en forma expresa o tácita, por las partes litigantes (art. 7, § 1).

En el plano transnacional, difícilmente prevalece la regla según la cual compete al tribunal del proceso de conocimiento promover la ejecución de lo juzgado. La ejecución de decisiones judiciales es siempre de competencia exclusiva del Estado en cuyo territorio se materializa. La práctica de actos jurisdiccionales de ejecución —actos que expresan soberanía— en el territorio de otro Estado sería vista como una interferencia directa e indebida en la soberanía ajena. Por lo tanto, no sería conveniente para la instrucción del proceso que la conducción de la ejecución fuera delegada en otro Estado distinto de aquel del lugar de la ejecución, bajo pena de que sean expedidas tantas cartas rogatorias como actos de ejecución sean necesarios, haciendo inviable el proceso.

La sumisión o selección del foro en el plano transnacional debe ser subsidiaria de la observancia de las reglas de competencia absoluta (concurrente y exclusiva), salvo si, en el caso concreto, y también en nombre del principio de efectividad, ningún otro tribunal estuviera en condiciones de proporcionar una jurisdicción adecuada (art. 7, § 1, segunda parte). En cambio, no se admite la prórroga de competencia frente a la ausencia del reo o, incluso, la elección de foro que contraríe la regla de la competencia absoluta o no esté autorizada por la propia norma procesal internacional. En el art. 7 § 1 se admite la sumisión expresa o la sumisión tácita, solamente en los casos en que el tribunal del Estado escogido o del Estado indicado fuera uno de los legalmente previstos o que no exista ofensa a la regla de competencia absoluta, de acuerdo con el caso concreto. Por lo tanto, no se admite la sumisión (expresa o tácita) a los tribunales de Estados extraños o que sean absolutamente incompetentes. Tampoco se admite la sumisión tácita sin la presencia del reo; el Proyecto se preocupa por la certeza de que esté asegurado el derecho de defensa, lo que en el plano transnacional pasa a tener mayor relevancia, no extrayéndose de la rebeldía la renuncia o la sumisión tácita al foro escogido por el demandante. Es necesario que el demandado comparezca y que al contestar sobre lo solicitado, no diga nada respecto de la incompetencia (art. 7 § 3).

La inmunidad estatal a la jurisdicción de otro Estado —prevista en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas— está relacionada directamente con el tema de la competencia internacional. De acuerdo con la no incidencia de las leyes extranjeras sobre las relaciones jurídicas de derecho público, siendo causa excluyente de la competencia internacional y estando establecida a favor de los Estados y, por lo tanto, está sujeta a la renuncia expresa o tácita, por parte del Estado demandado, como lo autoriza el art. 7 §3.

La litispendencia y la conexión entre causas pendientes acarrean la suspensión y no la extinción del proceso, para que no haya riesgo de violación a la garantía del acceso a la justicia, conforme con lo previsto por el art. 9.

Esa suspensión, en el ínterin, debe perdurar hasta que haya una decisión final en el proceso originario o se mantendrá durante un plazo razonable. Ello porque sería más grave aún que admitir decisiones contradictorias e inseguridad jurídica, suspender un proceso por tiempo indefinido. Además, la litispendencia y la conexión solamente deben surtir algún efecto si, a criterio del tribunal del Estado responsable por la suspensión, el proceso originario estuviera en condiciones de alcanzar una decisión final compatible con los principios fundamentales de aquel Estado. De ahí la referencia al "tribunal internacionalmente competente".

La eficacia —cosa juzgada, exigibilidad y efectos meramente materiales— transnacional de una decisión judicial extranjera es una de las principales modalidades de cooperación interjurisdiccional (art. 3, III). Se prefiere la expresión "decisión", que es el género, en detrimento de las expresiones "sentencia" o "providencia", que son especies. La eficacia de la decisión judicial extranjera, operando de forma automática e independiente del reconocimiento judicial previo, que surge del art. 1O, en la práctica significa admitir la retroactividad de la cosa juzgada extranjera (a la fecha de que quedó ejecutoriada la decisión en el juzgado de origen) y la valoración inmediata de las decisiones extranjeras por parte de los órganos administrativos o en el supuesto de una relación jurídica cualquiera. Solo la ejecución de decisión extranjera —por requerir ejercicio de jurisdicción por el Estado requerido— presupone un reconocimiento judicial previo, no obstante implícito (art. 49). Es conveniente precisar que, indirectamente, la eficacia automática de la decisión extranjera legitima la admisión de la litispendencia y la conexión internacionales.

La eficacia de la decisión extranjera depende de la observancia de los requisitos comprendidos entre los principios fundamentales del Estado requerido y de las reglas sobre competencia internacional (art. 11, I, II y III). Se consideran, también, los requisitos meramente procedimentales, tales como que la decisión extranjera tenga eficacia en su origen (art. 11, IV) o

que exista compatibilidad con las decisiones pronunciadas en el Estado requerido o en otro Estado, siempre que esté en condiciones de producir efectos en el Estado requerido (art. 11, V).

La ejecución de la decisión extranjera está sujeta a la observancia de los requisitos necesarios para la eficacia de las decisiones extranjeras (art. 12). Por eso, la ejecución no se encuadra dentro de los efectos automáticos de la decisión extrajera. Aquí se debe consignar "la observancia de los requisitos", pues el proceso de ejecución depende del "reconocimiento previo" incidental por el acto judicial que autoriza el inicio de la eje9ución y declara la ejecutoriedad del título extranjero. Nótese que no impide la ejecución de la decisión extranjera el hecho de que exista un recurso pendiente en el tribunal de origen; en otras palabras, se admite la ejecución de la decisión extranjera no ejecutoriada (art. 14), desde que el recurso allí interpuesto no tenga efecto suspensivo (art. 11, IV), estando facultada la exigencia de caución, si ello es posible al demandante (art. 14). Se acrecienta, en el caso de la ejecución de la decisión de una medida judicial de urgencia, la necesidad de que el proceso p1incipal, en curso o futuro, en el cual se decidirá la cuestión de fondo, esté en condiciones de producir una decisión que reúna los requisitos para tener eficacia en el Estado requerido, en los términos del artículo 13. Se aplican a la ejecución del laudo arbitral extranjero las mismas reglas de ejecución de la decisión extranjera (art. 57).

Como regla general, las medidas de urgencia son tramitadas y decididas por el tribunal de la causa principal. Sin embargo, como el procedimiento de ejecución de decisión extranjera no siempre es apropiado para la tutela de urgencia, ha sido común autorizar el trámite de estas medidas directamente en el tribunal del Estado en cuyo territorio se pretenda su ejecución. Ese fenómeno de disociación entre proceso de conocimiento y proceso cautelar en el plano transnacional está sujeto a algunos límites debidos a los siguientes principios: 1- principio del juez natural -el tribunal de la causa cautelar o de urgencia es siempre el tribunal del proceso principal, siendo posible atribuir la competencia a otro tribunal solamente en situaciones extremas en las cuales quede demostrado que el procedimiento de reconocimiento o de exequátur de medidas de urgencia fuera capaz de inviabilizar la realización del derecho alegado (art. 16, I); 2- principio de orden público y de competencia internacional- el otorgamiento de la tutela de urgencia transnacional directamente por el tribunal del Estado en cuyo territorio será ejecutada, además de la presencia del *periculum in mora* y del *fumus bonis iuris* (art. 17), depende además: a) de la demostración de que el derecho material reclamado es compatible con los principios fundamentales de aquel Estado; y b) de que la futura y definitiva declaración judicial del derecho en el exterior será consecuencia de un proceso que observe las garantías del debido proceso legal para ante el tribunal que

sea competente según las reglas de la competencia internacional vigente en aquel Estado (art. 16, II). La naturaleza provisoria de cualquier medida jurisdiccional de urgencia condiciona su eficacia a que se produzca, en tiempo razonable, la decisión final en el proceso principal (art. 18).

Cooperación penal

Las modalidades de cooperación interjurisdiccional penal que reclaman un procedimiento especial con relación a la cooperación civil, son las siguientes: a- investigación conjunta (arts. 20 y 21); b- comparecencia temporaria de personas (arts. 22 y 23); c- transferencia de proceso y de ejecución penal (arts. 25 y 26); d- extradición (arts. 30 y 31). Las reglas sobre competencia internacional también poseen especificidades (art. 24). No obstante, la eficacia y ejecución de decisión penal extranjera sigue la misma orientación prevista para las decisiones civiles (arts. 27, 28 y 29).

La investigación conjunta y la comparecencia temporaria de personas son las modalidades de cooperación en materia de prueba que no requieren una medida jurisdiccional del Estado requerido (art. 19, parágrafo único).

La investigación conjunta entre las autoridades policiales y los órganos de persecución penal de Estados diversos, para investigar crímenes transnacionales, es justificable ante la necesidad de realización de investigaciones difíciles y complejas con implicaciones en otros Estados (art. 21, I) y la necesidad de acción coordinada en los Estados involucrados (art. 21, II). Es promovida mediante autorización previa, con objetivos y plazo de duración fijados de común acuerdo (art. 20), razón por la cual no puede hablarse de ofensa a la soberanía, especialmente porque en la investigación conjunta los actos que reclamen jurisdicción serán llevados ante los órganos judiciales competentes del Estado requerido.

La comparecencia temporaria de personas —presas o no— tiene como objetivo la producción de pruebas en un proceso en curso en otro Estado y tiene fundamento en los arts. 22 y 23 del Proyecto de Código Modelo. Son requisitos para la referida comparecencia: a- consentimiento de la persona a ser trasladada; b- reciprocidad de tratamiento; c- disponibilidad de la persona en el proceso eventualmente en curso en el Estado requerido; d- en el caso de persona presa, el compromiso del Estado requirente de que ella continuará presa; e- compromiso del Estado requirente de procurar el retomo de la persona en el plazo fijado; f- compromiso del Estado requirente de que la persona transferida no será presa o sufrirá otras restricciones de su derecho de libertad, por hechos anteriores a su salida y, consecuentemente, no estará sujeta a una extradición indirecta y sin el control previo del Estado requerido.

En lo referente a la competencia penal internacional, la primera de sus especificidades es que, al contrario de la competencia civil, ella solo

comporta una modalidad de competencia exclusiva (art. 24). No se admite fa concurrencia entre Estados para enjuiciar la misma cuestión. En el Derecho Penal internacional la regla es que no se aplica la ley extranjera para definir el tipo penal, por tanto, la competencia internacional está vinculada a la incidencia de la norma penal del Estado donde ocurrió el hecho (art. 24, I), lo que normalmente ocurre cuando el ilícito se produjo en el territorio de ese Estado. Las excepciones ocurren como consecuencia de situaciones extremas en las que la dignidad del acusado o condenado está en juego, justificándose la modificación de la competencia, tal como está previsto en el art. 25 que dispone sobre la transferencia de proceso y de la ejecución penal. Además de eso, se prevé la extensión de la competencia penal internacional a un Estado —que en condiciones normales no sería el más adecuado— en situaciones en las que la negativa o imposibilidad de extradición generaría la impunidad en el caso de que no existiera la extensión de la competencia internacional (art. 24, III).

La extradición tiene como objetivo asegurar la eficacia transnacional de la decisión penal extranjera restrictiva de la libertad (art. 30, acápite). La prohibición de extradición de nacionales no fue acogida por el Proyecto, con fundamento en el principio de igualdad de tratamiento entre nacionales y extranjeros, previsto en el art. 2, III. En verdad, prohibir la extradición de los nacionales es asegurarles un privilegio injustificado, arraigado en el pasado en una concepción nacionalista extrema. Si la razón de la preocupación reside en no someter a un nacional a un tribunal parcial o a un tribunal que no asegure las garantías del debido proceso, tal preocupación debería extenderse a todos, nacionales y extranjeros, pero solamente en función de aquellas circunstancias —las de no observancia de las garantías del debido proceso legal—. En ese contexto, la regla en cuestión, partiendo de la premisa de que es posible la extradición del nacional, autoriza que, en este caso, el nacional retome a su patria para el cumplimiento de la pena. Se presume que el condenado, en su patria, tendrá mejores condiciones de reintegración social. Se trata de una causa adicional o específica de modificación de la competencia para la ejecución de la pena.

El Proyecto de Código Modelo, a partir de diversas normas nacionales e internacionales en vigor en gran parte de los Estados iberoamericanos, establece las siguientes condiciones para la extradición (art. 30): a- estar fundada en tratado o en promesa de reciprocidad; b- que el hecho sea considerado delito y que no haya prescripto tanto en el Estado requerido como en el Estado requirente, y que sea penado por la ley de ambos Estados con una pena privativa de libertad de duración máxima no inferior a los 12 meses, o, si la extradición tiene como finalidad el cumplimiento de la pena, el tiempo de pena por cumplir no puede ser inferior a seis meses; c- que el proceso o la condena en el Estado requirente no revista carácter político o

no sea consecuencia de consideraciones racistas, de religión, nacionalidad, u otra especie de discriminación, ni existan razones serias para suponer que el pedido fue efectuado por alguna de esas razones o que la satisfacción del pedido provocaría un perjuicio a la persona requerida por cualquiera de esas razones; d- que el litigio no sea competencia del tribunal del Estado requerido, salvo que la extradición fuera consentida y se verificara con relación al Estado requirente una de las condiciones establecidas en el art. 25; e- que el tribunal del Estado requirente sea competente internacionalmente para el litigio en los términos de lo dispuesto en el art. 24. Si el delito hubiera sido cometido en un tercer Estado, puede exigirse además que la ley del Estado requerido otorgue competencia a su jurisdicción en identidad de circunstancias o que el Estado requirente compruebe que aquel Estado no reclama a la persona; f- que no exista riesgo de que la persona requerida sea sometida a un proceso injusto en el Estado requirente, sin las garantías indispensables para la salvaguarda de los derechos humanos, o de que tenga que cumplir una pena en condiciones degradantes o de llegar a ser sometida a tortura u otro tratamiento inhumano o cruel; g- no existir riesgo para la persona requerida por motivos humanitarios que tengan relación con su edad o su salud; h- que el proceso no haya sido tramitado en el Estado requirente en rebeldía, cuando el acusado no hubiera sido encontrado para responder a la acción penal, a menos que le sea garantizada la posibilidad de solicitar un nuevo enjuiciamiento y de estar en él presente; i- que no se vulneren los principios fundamentales del Estado requerido.

En el mismo sentido se exige como condición para la ejecución de la extradición, que el Estado requirente asuma el compromiso de que (art. 31): a- computará el tiempo de prisión que en el Estado requerido fue impuesta como consecuencia de la cooperación internacional entre tribunales jurisdiccionales; b- no será el extraditado preso ni procesado por hechos anteriores a la requisitoria; c- no será el extraditado entregado a otro Estado que lo reclame por el mismo hecho; d- deberá ser garantizada la devolución del extraditado, tratándose de nacional del Estado requerido, para la ejecución de la pena que baya sido o deba ser aplicada, salvo si hubiera rechazo expreso de dicha persona. Resulta oportuno destacar que el principio de la doble incriminación opera solamente en la extradición, no alcanzando a las demás especies de cooperación penal.

Procedimientos

En los procedimientos de cooperación interjurisdiccional deberá considerarse, primeramente, la naturaleza —administrativa o jurisdiccional— del acto objeto del intercambio; si reclama o no una medida jurisdiccional para ante el Estado requerido y, consecuentemente, si necesita o no del

proceso de reconocimiento. No requiriendo la actividad de la jurisdicción o proceso de reconocimiento en el Estado requerido, el procedimiento de cooperación será el de auxilio mutuo, de naturaleza voluntaria, no contenciosa. Entre tribunales será un procedimiento judicial de jurisdicción voluntaria; en los demás casos, un procedimiento administrativo, de acuerdo con la legislación administrativa del Estado requerido. Trátase del auxilio mutuo judicial y del auxilio mutuo administrativo (art. 34). Están comprendidas en el procedimiento de auxilio mutuo las siguientes modalidades de cooperación (art. 35): 1- citación, intimación y notificación judicial y extrajudicial, cuando no fuera posible o recomendable la utilización del correo; 2- información sobre el derecho extranjero; 3- información sobre proceso administrativo o judicial en curso en el Estado requerido, salvo en el caso de secreto; 4- investigación conjunta entre las autoridades policiales y órganos de persecución penal, salvo si la medida requiriera intervención de la jurisdicción en el Estado requerido, la cual deberá ser objeto de una medida judicial de urgencia; 5- realización de pruebas.

En un segundo plano, exigiéndose la intervención de la jurisdicción o el reconocimiento en el Estado requerido, los procedimientos —necesariamente contenciosos de cognición plena— toman en cuenta a quién compete la iniciativa para la cooperación interjurisdiccional. Tratándose de iniciativa directa de los tribunales, se requiere la carta rogatoria; sin embargo, cuando la cooperación interjurisdiccional sea a iniciativa y responsabilidad de las partes, los procedimientos varían de acuerdo con la pretensión a ser deducida en el Estado requerido (medida de urgencia, acción e incidente de impugnación de decisión extranjera, ejecución de decisión extranjera, extradición). Lo que distingue básicamente a la carta rogatoria de esos procedimientos diversos es su carácter *ex officio*. La carta rogatoria comprende a la "información sobre proceso administrativo o judicial" y a la "realización de pruebas" que requieran actos jurisdiccionales en el Estado requerido, a la "transferencia temporaria de personas" y a la "transferencia del proceso penal y de la ejecución penal" y a la "ejecución de medidas judiciales de urgencia", decretadas por el tribunal del Estado requirente (art. 41).

El proceso ante el Estado requerido, de acuerdo con el sentido de la expresión "reconocimiento", está supeditado a los principios fundamentales de aquel Estado, y a la observancia de las normas sobre competencia internacional. Esto no significa exactamente que el tribunal del Estado requerido no entre al mérito de la decisión extranjera, sin embargo solamente lo hará en cuanto fuera necesario a la luz de los principios fundamentales del Estado requerido. Debe recordarse que el tribunal del Estado requerido no es una instancia recursiva del tribunal del Estado requirente (art. 44, segunda parte), pero le negará efecto a aquella decisión q e entre en colisión o a la parte de la decisión que entre en colisión con sus principios

fundamentales. La posibilidad de ese control judicial habilitante —sin el cual seguramente existiría una ofensa a la soberanía— está prevista en los procedimientos de carta rogatoria (art. 40), en la acción e incidente de impugnación de la eficacia de decisión extranjera (art. 44), en la ejecución de decisión extranjera (art. 49), en la medida judicial de urgencia (art. 16, II y 51) y en la extradición (art. 52).

En los procedimientos de extradición, de ejecución de decisión extranjera o de medida judicial de urgencia, el tribunal del Estado requerido debe manifestarse previa y sumariamente para que la decisión extranjera sea considerada, sin perjuicio de una fase de cognición plena a posteriori (arts. 49, segunda parte, 51, primera parte, y 52). No se promueve la citación en el procedimiento de ejecución sin que antes el tribunal profiera una decisión equivalente a un acto declaratorio de ejecutoriedad; de la misma forma, no se decreta la prisión preventiva de la persona a extraditar ni se concede una medida de urgencia sin que haya un juicio previo y sumario que lo habilite. No obstante, conforme lo prevé el parágrafo único del art. 51, el juez podrá conceder la medida de urgencia sin escuchar a la parte contraria, en cuyo caso el contradictorio se tramitará posteriormente. En el procedimiento de la carta rogatoria y de acción e incidente de impugnación de la eficacia de decisión extranjera, el juicio de reconocimiento es de cognición plena y siempre a posteriori del inicio de los efectos de la decisión extranjera (arts. 39 y 43).

El proyecto de Código Modelo se aparta de la competencia concentrada en un único tribunal del Estado requerido para entender en el proceso de reconocimiento; se adopta el criterio de competencia difusa, entre los tribunales que serían competentes para decidir la cuestión de fondo, de acuerdo con las normas de competencia en vigor en el Estado requerido. Además de acelerar el proceso, unificando ante el mismo tribunal la competencia para el reconocimiento y la ejecución de la decisión extranjera, propicia un grado de calidad de la jurisdicción en la medida en que entrega el asunto a un tribunal especializado. Esa regla se adopta para el procedimiento de carta rogatoria (art. 38, § 2), acción e incidente de impugnación de eficacia de decisión extranjera (arts. 42, parágrafo único, y 46, parágrafo único), ejecución de decisión extranjera (art. 48) y medida judicial de urgencia (art. 50). La excepción radica en la extradición, que deberá ser decidida por un único tribunal del Estado requerido, sin que exista la posibilidad de que la autoridad central *u* otro órgano administrativo impidan u obstaculicen la tramitación o la ejecución, de la misma manera que ocurre en las demás modalidades de cooperación (art. 2, VII).

Los procedimientos de auxilio mutuo y de carta rogatoria —ambos de iniciativa de tribunales o de órganos administrativos—, cuando estén a

cargo del Estado requerido, también deberán ser tramitados y ejecutados con celeridad, en los términos del art. 56.

En cuanto a la denominación de "acción e incidente de impugnación de la eficacia de decisión extranjera", el Código Modelo no se refiere al "reconocimiento" de decisión extranjera, pero sí a la "impugnación de la eficacia", partiendo de la premisa de que las decisiones extranjeras surten efectos automáticos en el territorio de otro Estado y no dependen del reconocimiento previo. En verdad, se corrige una contradicción existente en el Reglamento (CE) 44/2001. Luego, lo que eventualmente será discutido judicialmente es la impugnación de los efectos automáticos de la decisión extranjera. Esa impugnación puede ser presentada por vía directa o incidental. La legitimación *ad causam* para la acción de impugnación la tendrá quien se sienta perjudicado por los efectos automáticos de la decisión extranjera; no solamente las partes involucradas en el litigio originario, sino también todos los que, directa o indirectamente, se sientan perjudicados por los efectos de la decisión extranjera en el Estado requerido (arts. 42, 46 y 47). A propósito, será en el incidente de impugnación de la eficacia de la decisión extranjera donde se decidirá sobre la cosa juzgada extranjera (art. 46) y la litispendencia internacional (art. 47). La retroactividad de los efectos de la decisión que acoge la impugnación, prevista en el art. 45, es la consecuencia natural de que la eficacia de las decisiones extranjeras sea independiente de un reconocimiento previo. La incompatibilidad entre la decisión extranjera y el orden público existe, naturalmente, desde el inicio de su eficacia en el Estado requerido. Por tanto, el reconocimiento de esta incompatibilidad tendrá efecto retroactivo.

En lo que refiere a la extradición, los fundamentos que la justifican son los mismos que autorizan la prisión preventiva. No se exige que la prisión preventiva sea necesaria para la instrucción del proceso de extradición pasiva, pues la prisión es de esencia de éste; la prisión debe ser necesaria en el proceso que tramita en el Estado requirente, de acuerdo con los presupuestos de la prisión preventiva compatibles con los principios fundamentales del Estado requerido. En otras palabras, conceder la prisión preventiva del sujeto a ser extraditado es lo mismo que reconocer, provisoriamente, la procedencia del pedido de extradición. De ahí la necesidad, tal como lo impone el art. 54, de que la decisión que dispone la prisión sea fundada. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva en el proceso de extradición es la de una medida de urgencia que, no obstante, no autoriza la entrega del extraditando al Estado requirente, porque ahí se generaría una situación material y procesalmente irreversible.

Son estas las líneas generales del Proyecto de Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica que sometemos a la consideración del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Estamos

convencidos de que el Proyecto de Código Modelo constituirá una herramienta poderosa en el proceso de reforma legislativa de los sistemas nacionales iberoamericano de cooperación interjurisdiccional, por reunir los principios y reglas actuales y modernas, capaces de orientar al legislador de cada país en la elaboración de las leyes nacionales.

Lima, 15 de octubre del 2008

La Comisión Revisora

Ada Pellegrini Grinover
Presidente

Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva
Secretario General

Abel Augusto Zamorano Ángel Landoni Sosa Carlos Ferreira da Silva Eduardo Véscovi
Juan Antonio Robles Garzón Luis Ernesto Vargas Silva Roberto Ornar Berizonce

Capítulo 1 – Parte general

Art. 1.- Ámbito de aplicación.

Este Código dispone sobre la cooperación entre Tribunales, órganos administrativos, órganos administrativos y tribunales de Estados diversos, con el objetivo de lograr la efectividad de la prestación jurisdiccional transnacional.

Art. 2.- Principios generales.

La cooperación interjurisdiccional de que trata este Código está sujeta a los siguientes principios:

I) cláusula de orden público internacional: no será admitida la cooperación que se refiera a actos contrarios a los principios fundamentales del Estado requerido o que sea susceptible de conducir a un resultado incompatible con esos principios;

II)respeto a las garantías del debido proceso legal en el Estado requirente;

III) igualdad de tratamiento entre nacionales y extranjeros, residentes o no, tanto en el acceso a los tribunales cuanto en la tramitación de los procesos en los Estados requirente y requerido, asegurándose la gratuidad de la justicia a los necesitados;

IV) no dependencia de la reciprocidad de tratamiento, salvo previsión expresa en este Código;

V) publicidad procesal, excepto en los casos de secreto previstos en la ley del Estado requirente o del Estado requerido;

VI) traducción y forma libres para los actos y documentos necesarios para la prestación jurisdiccional transnacional, incluyéndose los medios electrónicos y la videoconferencia;

VII) existencia de una Autoridad Central para la recepción y transmisión de los pedidos de cooperación, sujetos los mismos a la convalidación de la recepción o transmisión cuando no hayan sido transmitidos mediante dicha Autoridad;

VIII) espontaneidad en la transmisión de informaciones a las autoridades del Estado requirente.

Capítulo II – Cooperación interjurisdiccional en materia civil

Sección I – Concepto y alcance de la cooperación civil

Art. 3.- Ámbito y modalidades de cooperación en materia civil.

Esta Sección dispone sobre la cooperación en materia civil que comprende la civil propiamente dicha, la comercial o mercantil, la de familia, la del trabajo, la de previsión social, la tributaria, la financiera y la administrativa.

Parágrafo único.- Son modalidades de esta cooperación interjurisdiccional:

I.- citación, intimación y notificación judicial y extrajudicial;

II.- realización de pruebas y obtención de informaciones;

III.- eficacia y ejecución de decisión extranjera;

IV.- medida judicial de urgencia.

Sección II – Citación, intimación y notificación

Art. 4.- Presupuestos de la comunicación

La citación, intimación y notificación, que no se efectúen por correo, dependen de la posibilidad de que el proceso en curso en el Estado requirente esté en condiciones de concluir en sentencia que sea eficaz en el Estado requerido.

Sección III – Realización de pruebas y obtención de informaciones

Art. 5.- La licitud como presupuesto de admisión de la prueba.

Serán admitidos, en la cooperación interjurisdiccional, todos los medios de prueba obtenidos lícitamente, observándose la condición establecida en el artículo anterior.

Parágrafo único.- Es admitida la prueba por videoconferencia.

Art. 6.- Intercambio de informaciones.

Será admitido el intercambio de informaciones:

- sobre el derecho extranjero;
- acerca de la existencia de infracciones penales;
- respecto del desarrollo del proceso administrativo o judicial y de las decisiones en ellos proferidas, salvo los casos de secreto.

Parágrafo único.- No necesitan de traducción los documentos que puedan ser comprendidos, presumiéndose auténticos, salvo prueba en contrario, los documentos tramitados por medio de autoridades centrales o por vía diplomática.

Sección IV – Competencia y litispendencia internacional

Art. 7.- Competencia internacional concurrente.

Tienen competencia internacional concurrente los tribunales del Estado:

I.- en cuyo territorio tuviera domicilio el demandado o hubiera ocurrido el hecho;

II.- cuya ley regule el hecho de acuerdo con sus normas de conflicto;

III.- con el cual el litigio tenga vínculo efectivo capaz de asegurar un proceso justo.

§ 1.- Se autoriza la sumisión expresa o tácita a los tribunales de uno de los Estados que sea relativamente competente, de acuerdo con los incisos anteriores, o aun en los casos en que se demuestre la imposibilidad o ineficacia de acceso a otro tribunal extranjero.

§ 2.- Tratándose de inmunidad de jurisdicción, la competencia dependerá, no obstante, de fa sumisión expresa o tácita del Estado demandado.

§ 3.- Considérase sumisión tácita el comportamiento del demandado que demuestre inequívocamente su aquiescencia con la competencia del tribunal del Estado indicado.

Art. 8.- Asunción de competencia internacional con carácter excluyente.

Posee competencia internacional, con exclusión de cualquier otro, el tribunal del Estado:

I.- en cuyo territorio estuviere situado el inmueble en las causas de derecho real inmobiliario o estén localizados los bienes hereditarios registrables y transmitidos por sucesión;

II.- del lugar de ejecución, en la ejecución de decisiones.

Art. 9.- Litispendencia.

Cuando, en el curso del proceso, se verificara la previa pendencia, en otro Estado, ante tribunal internacionalmente competente, de demanda entre las mismas partes, con el mismo objeto y causa de pedir, o que sea capaz de llevar a decisiones incompatibles, el juez, de oficio o a requerimiento del interesado, suspenderá el proceso por un plazo razonable o hasta la comprobación de la cosa juzgada, siempre que la decisión en el Estado extranjero pueda producir eficacia extraterritorial.

Sección V – Eficacia de la decisión extranjera

Art. 10.- Efecto automático de la decisión extranjera.

Los efectos de la decisión extranjera operan automáticamente y no dependen del reconocimiento judicial previo.

Art. 11.- Requisitos para la eficacia de la decisión extranjera.

La eficacia de la decisión judicial extranjera en el Estado requerido dependerá de la observancia de los siguientes requisitos:

I.- no ser incompatible con los principios fundamentales del Estado requerido;

II.- haber sido proferida en proceso en que hayan sido observadas las garantías del debido proceso legal;

III.- haber sido proferida por tribunal internacionalmente competente según las reglas del Estado requerido o las establecidas en la Sección IV precedente;

IV.- no estar pendiente de recurso admitido con efecto suspensivo;

V.- no ser incompatible con otra decisión dictada en el Estado requerido, en acción idéntica o, en otro Estado, en proceso idéntico que reúna las condiciones necesarias para tener eficacia en el Estado requerido.

Parágrafo único.- La eficacia de la decisión extranjera podrá ser controlada de oficio, por el juez, en un proceso en curso, observándose el contradictorio, o mediante impugnación en los términos de los artículos 42 a 47.

Sección VI – Ejecución de decisión extranjera

Art. 12.- Ejecución.

La ejecución de decisión extranjera está sujeta a la observancia de los requisitos previstos en el artículo anterior.

Art. 13.- Requisito para la ejecución de medida judicial de urgencia.

La ejecución de la decisión de una medida judicial de urgencia, decretada por el tribunal del Estado requirente, depende de que el proceso principal, ya en curso o futuro, en el cual será decidida la cuestión de fondo, pueda concluir en una decisión que reúna los requisitos para tener eficacia en el Estado requerido.

Art. 14.- Provisionalidad de la ejecución de decisión extranjera no firme.

No habiendo aún cosa juzgada, la ejecución de la decisión extranjera será provisoria, quedando facultada la exigencia de caución.

Sección VII – Medida judicial de urgencia

Art. 15.- Adopción de medida judicial de urgencia por tribunal del Estado requerido.

Cabe el planteamiento de una medida judicial de urgencia, conservatoria o anticipada, para ante el tribunal del Estado requerido, aun cuando la cuestión de fondo sea de competencia del tribunal de otro Estado.

Art. 16.- Admisibilidad de la medida judicial de urgencia.

Se admite la medida judicial de urgencia en los siguientes casos:

I.- que sea imposible o ineficaz su deducción ante el tribunal del Estado competente para conocer la cuestión de fondo;

II.- que el proceso principal, ya en curso o futuro, en el cual será decidida la cuestión de fondo, pueda concluir en una decisión que tenga eficacia en el Estado requerido.

Art. 17.- Aplicación de normas procesales internas del Estado requerido.

La concesión de una medida judicial de urgencia en el Estado requerido obedecerá a los requisitos previstos en sus normas procesales, pudiendo ser otorgada liminarmente o después de oír a la parte contraria.

Art. 18.- Eficacia de la medida judicial de urgencia.

La eficacia de la medida judicial de urgencia estará condicionada al advenimiento, en tiempo razonable, de la decisión final en el proceso principal.

Capítulo III – Cooperación interjurisdiccional en materia penal

Sección 1 – Concepto y alcance de la cooperación penal

Art. 19.- Ámbito de la cooperación interjurisdiccional penal.

Son modalidades de la cooperación interjurisdiccional en materia penal:

I.- citación, intimación y notificación judicial;

II.- realización de pruebas y obtención de informaciones;

III.- investigación conjunta;

IV.- comparecencia temporaria de personas;

V.- transferencia de proceso y de ejecución penal;

VI.- eficacia y ejecución de decisión penal extranjera;

VII.- extradición;

VIII.- medida judicial penal de urgencia.

Parágrafo único.- Aplícanse a las modalidades de cooperación contempladas en los incisos anteriores, salvo las de los incisos V, VI y VII, las disposiciones del Capítulo II en lo que sean compatibles.

Sección II – Investigación conjunta

Art. 20.- Cooperación en la investigación criminal.

Las autoridades policiales y los órganos de persecución penal de Estados diversos, contando con las autorizaciones previas pertinentes, pueden crear, de común acuerdo, un equipo de investigación conjunta para un objetivo específico y por plazo determinado, para efectuar investigaciones penales en el territorio de los Estados que lo crearan.

Art. 21.- Justificación de la investigación común.

Son fundamentos de la investigación conjunta:

I.- la necesidad de realización de investigaciones difíciles y complejas con implicaciones en otros Estados;

II.- la necesidad de acción coordinada en los Estados involucrados.

Sección III – Comparecencia temporaria de personas

Art. 22.- Comparecencia temporaria.

Podrá ser solicitada la comparecencia de personas en el Estado requirente, presas o no, con el objetivo de permitir la práctica de actos procesales, cuando la solicitud se fundamente en tratado o promesa de reciprocidad y cuando la presencia de la persona transferida no fuere imprescindible en el proceso en curso en el Estado requerido.

§ 1.- La comparecencia de personas para ante el Estado requirente, en condición de víctima, testigo, perito o acusado, dependerá de su consentimiento.

§ 2.- La comparecencia en el Estado requirente de persona presa en el Estado requerido solamente será otorgada, sí hubiere compromiso del Estado requirente de mantenerla presa durante el tiempo en que permaneciera bajo su custodia.

§ 3.- El Estado requirente asumirá la obligación de promover el retomo de persona transferida en el plazo señalado por el Estado requerido.

Art. 23.- Compromisos del Estado requirente.

La comparecencia de personas ante el Estado requirente solamente será autorizada si hubiere compromiso de éste de no someter a la persona a prisión, medida de seguridad u otras medidas restrictivas de la libertad o de sus derechos por hechos anteriores a su salida del Estado requerido diferentes de los que motivaron el pedido de cooperación.

Sección IV – Competencia penal internacional

Art. 24.- Criterios de asunción de competencia penal internacional.

Tiene competencia penal internacional el Tribunal del Estado:

l.- cuya ley penal sea aplicable al ilícito;

II.- en cuyo territorio hubiera ocurrido el ilícito;

III.- que no sea el del lugar del ilícito o el de la ley aplicable a ese ilícito, desde que haya falta, negativa o imposibilidad de extradición fundada en el artículo 30, I, IV, VI, VII y VIII y en el artículo 31.

Sección V – Transferencia de proceso y de ejecución penal

Art. 25.- Condiciones de la transferencia del proceso y de ejecución penal.

La competencia penal para el proceso de conocimiento y para el proceso de ejecución, habiendo consentimiento del acusado o del condenado, podrá ser transferida a otro Estado, considerado requerido, si se observa una de las siguientes condiciones:

I.- poseer el acusado o condenado residencia en el Estado requerido o en éste concentrar sus actividades económicas;

II.- que existan mayores posibilidades de reinserción social del acusado o condenado con su transferencia para el Estado requerido;

III.- encontrarse la persona cumpliendo en el Estado requerido otra pena privativa de libertad por hecho distinto del establecido en la sentencia cuya ejecución es o podrá ser pedida;

IV.- si el Estado requerido es el de origen del acusado o condenado y se hubiese declarado dispuesto a encargarse de la ejecución;

V.- no estar el Estado requirente en condiciones de ejecutar la sanción, aun con el recurso a la extradición, poseyéndolas en cambio el Estado requerido. ‘

Parágrafo único.- Aun cuando se verifique una de las condiciones previstas en los incisos I, III, IV y V no habrá lugar a la transferencia para el Estado requerido si hubiere razones para creer que la misma no favorecerá la reintegración social del acusado o condenado.

Art. 26.- Compromiso del Estado requerido de no agravar la pena.

La transferencia de competencia dependerá del compromiso del Estado requerido de que la pena no será agravada.

Sección VI – Eficacia y ejecución de la decisión penal extranjera

Art. 27.- Efectos automáticos de pronunciamientos de naturaleza patrimonial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28 y 29, los efectos civiles y penales de carácter patrimonial de la decisión penal extranjera operan automáticamente y no dependen del reconocimiento judicial previo.

Art. 28.- Requisitos de eficacia.

La eficacia de la decisión penal extranjera está sujeta a los requisitos previstos en el artículo 11 y en los incisos del artículo 30 en lo que corresponda.

Art. 29.- Requisitos de la ejecución.

La ejecución de la decisión penal extranjera y de la medida judicial penal de urgencia, decretada por el tribunal del Estado requirente, con efecto civil o penal de carácter patrimonial, está sujeta a las reglas de los artículos 12 a 18.

Sección VII – Extradición

Art. 30.- Condiciones de la extradición.

La eficacia de la decisión penal extranjera restrictiva de la libertad, para los fines de entrega al Estado requirente, depende del reconocimiento previo ante el Tribunal del Estado requerido y el cumplimiento de las siguientes condiciones:

I.- deberá estar fundada en tratado o en promesa de reciprocidad;

II.- ser el hecho considerado delito, aún no prescripto, en el Estado requerido y en el Estado requirente, y ser punible por las leyes de ambos Estados con pena privativa de libertad de duración máxima no inferior a doce meses o, si la extradición tuviera por finalidad el cumplimiento de pena, que el tiempo de pena por cumplir no sea inferior a seis meses.

III.- no estar revestido el proceso o la condena en el Estado requirente de carácter político o no ser consecuencia de consideraciones racistas, de religión, nacionalidad u otra especie de discriminación, ni existir razones serías para suponer que el pedido fue efectuado por alguna de esas razones o que la satisfacción del pedido provocaría un perjuicio a la persona requerida por cualquiera de esas razones.

IV.- no ser el litigio de competencia del tribunal del Estado requerido, salvo que la extradición fuese consentida y se verificase con relación al Estado requirente alguna de las condiciones del artículo 25;

V.- ser el tribunal del Estado requirente internacionalmente competente para el litigio en los términos de lo dispuesto en el artículo 24. Si el delito hubiere sido cometido en un tercer Estado, puede exigirse también que la ley del Estado requerido otorgue competencia a su jurisdicción en identidad de circunstancias o que el Estado requirente compruebe que aquel Estado no reclama a la persona.

VI.- no haber riesgo para la persona requerida de ser sometida a un proceso injusto en el Estado requirente, sin las garantías indispensables a la salvaguardia de los derechos humanos o de cumplir pena en condiciones degradantes o de llegar a ser sometida a tortura o tratamiento inhumano o cruel;

VII.- no haber riesgo para la persona a ser requerida, por motivos humanitarios, que tengan relación con su edad o salud;

VIII.- no haberse tramitado el proceso en el Estado requirente en rebeldía cuando el acusado no hubiere sido encontrado para responder a la

acción penal, a menos que le sea garantizada la posibilidad de requerir un nuevo juzgamiento y de estar presente en ese proceso;

IX.- no haber ofensa a los principios fundamentales del Estado requerido.

Art. 31.- Compromisos del Estado requirente.

La ejecución de la decisión de extradición depende del compromiso del Estado requirente de que:

l.- computará el tiempo de prisión que en el Estado requerido le fue impuesta como consecuencia de la cooperación internacional entre tribunales jurisdiccionales;

II.- no será el extraditado preso ni procesado por hechos anteriores a la requisitoria;

III.- no será el extraditado entregado a otro Estado que lo reclame por el mismo hecho;

IV.- será garantizada la devolución del extraditado tratándose de nacional del Estado requerido para la ejecución de la pena que corresponda ser aplicada, salvo si hubiera expreso rechazo de dicha persona.

Capítulo IV – Procedimientos de cooperación interjurisdiccional

Sección I – Auxilio mutuo

Art. 32.- Concepto y extensión. Entiéndese por auxilio mutuo:

I.- El procedimiento destinado a la cooperación entre órganos administrativos de Estados diversos en el intercambio de actos o diligencias cuyo objetivo es la prestación jurisdiccional en el Estado requirente.

II.- La cooperación entre órganos administrativos y tribunales, o entre tribunales, de Estados diversos, en el intercambio de actos o diligencias que no impliquen la intervención de la jurisdicción o no tengan naturaleza jurisdiccional en el Estado requerido.

Art. 33.- Vía directa entre órganos interesados.

La solicitud de auxilio mutuo podrá ser encaminada por el órgano o tribunal interesado directamente a aquel que fuera responsable para su cumplimiento, siendo de su competencia, además, asegurar su autenticidad y comprensión en el Estado requerido y en el Estado requirente.

Parágrafo único.- Se faculta el registro y remisión por una autoridad central de la solicitud al órgano o tribunal competente del Estado requerido.

Art. 34.- Procedimientos del auxilio.

El procedimiento de auxilio mutuo cuando involucrara únicamente a tribunales es denominado auxilio mutuo judicial y está sujeto al procedimiento de jurisdicción voluntaria, de acuerdo con las normas procesales

del Estado requerido; los demás, denominados auxilio mutuo administrativo, estarán sujetos a los procedimientos de la legislación administrativa.

Art. 35.- Modalidades admitidas de auxilio.

Es admisible el auxilio mutuo en las siguientes modalidades de cooperación:

I.- citación, intimación y notificación judicial y extrajudicial, cuando no fuera posible o recomendable la utilización del correo;

II. - información sobre el derecho extranjero;

III.- información sobre proceso administrativo o judicial en curso en el Estado requerido, salvo en el caso de secreto;

IV.- investigación conjunta entre las autoridades policiales y órganos de persecución penal, salvo si la medida reclamara jurisdicción en el Estado requerido, la cual deberá ser objeto de medida judicial de urgencia;

V.- realización de pruebas.

Art. 36.- Normativa del Estado requerido.

El Tribunal u órgano administrativo requeridos ejecutarán el pedido de acuerdo con la legislación del Estado al que pertenecen.

Parágrafo único.- Podrán por ello, a pedido del Estado requirente, adoptar un procedimiento especial previsto por la legislación de ese Estado, a menos que tal procedimiento contraríe el orden público del Estado requerido u ocurran relevantes dificultades de orden práctico en su ejecución.

Sección II – Carta Rogatoria

Art. 37.- Concepto y alcance.

Entiéndese por carta rogatoria el pedido de cooperación entre tribunales de Estados diversos, en el intercambio de actos de impulso procesal y de carácter ejecutorio, que requieran intervención jurisdiccional o que tengan naturaleza jurisdiccional en el Estado requerido, considerados esenciales para la medida decretada de oficio o por iniciativa de las partes por el Tribunal del Estado requirente en incidente procesal propio.

Art. 38.- Sujetos legitimados y formas de remisión.

La carta rogatoria podrá ser encaminada por el Tribunal interesado directamente a aquel que fuera responsable para su cumplimiento, siendo de su competencia, además, asegurar su autenticidad y comprensión en el Estado requerido y en el Estado requirente,

§ 1.- Aplícase a la carta rogatoria lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 33.

§ 2.- El tribunal competente del Estado requerido será el mismo pata controlar la eficacia y ejecutar el acto extranjero objeto de la carta rogatoria, observándose las reglas de competencia interna que serían aplicables

a la cuestión de fondo si el caso hubiese sido originariamente de competencia del tribunal del Estado requerido.

Art. 39.- Tramitación de la carta rogatoria.

El procedimiento de la carta rogatoria ante el Tribunal del Estado requerido es de jurisdicción contenciosa y debe asegurar a las partes las garantías del debido proceso legal, pudiendo el contradictorio ser diferido en razón de la urgencia.

Art. 40.- Ámbito de la defensa

La defensa estará limitada a la observancia de requisitos previstos en el artículo 11, no pudiendo la decisión extranjera en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al mérito.

Art. 41.- Modalidades admisibles de carta rogatoria.

Es admisible la carta rogatoria en las siguientes modalidades de cooperación:

I.- información sobre proceso administrativo o judicial y realización de pruebas que reclamen actos jurisdiccionales en el Estado requerido;

II.- transferencia temporaria de personas;

III.- transferencia de proceso penal y de ejecución penal;

IV.- ejecución de medidas judiciales de urgencia, decretadas por el tribunal del Estado requirente.

Sección III – Acción e incidente de impugnación de la eficacia de la decisión extranjera

Art. 42.- Legitimación activa para el ejercicio de la acción de impugnación.

La acción de impugnación de la eficacia de la decisión extranjera será propuesta por aquel que tenga interés jurídico en el rechazo de sus efectos en el Estado requerido.

Parágrafo único.- La acción de impugnación es de competencia del tribunal que según las normas procesales del Estado requerido, sería competente para decidir la cuestión de fondo.

Art. 43.- Garantías del debido proceso.

El procedimiento de la presente acción, de jurisdicción contenciosa, asegurará a las partes las garantías del debido proceso legal.

Art. 44.- Motivos para el ejercicio de la acción de impugnación.

La impugnación estará limitada a la observancia de los requisitos previstos en el artículo 11, no pudiendo la decisión extranjera, en ningún caso, ser objeto de revisión en cuanto al mérito.

Art. 45.- Efectos retroactivos de la decisión sobre la acción.

Los efectos de la decisión que acogiera la impugnación serán retroactivos a la fecha del inicio de su eficacia en el Estado requerido.

Art. 46.- Incidente sobre cosa juzgada extranjera.

Observado lo dispuesto en los artículos 42 a 44, cabe el incidente de la impugnación de la eficacia de la decisión extranjera siempre que, invocada por una de las partes la cosa juzgada extranjera, la otra, o el tercero jurídicamente interesado, pretenda discutir el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 11.

Parágrafo único.- Compete al tribunal del proceso principal procesar y juzgar el incidente de impugnación.

Art. 47.- Incidente de impugnación sobre litispendencia.

El incidente de impugnación podrá ser promovido contra aquel que fuera favorecido por la litispendencia internacional.

Sección IV – Procedimiento de ejecución de decisión extranjera

Art. 48.- Competencia para ejecutar una decisión extranjera.

La ejecución de la decisión extranjera será promovida ante el Tribunal que según las normas procesales del Estado requerido sería competente para ejecutar el título.

Art. 49.- Causas de oposición a la ejecución.

El ejecutado está facultado para discutir la existencia de los requisitos previstos en los artículos 11, 16, 17 y 18, observadas las garantías del debido proceso legal.

Sección V – Procedimiento de medida judicial de urgencia

Art. 50.- Competencia para la adopción de una medida judicial de urgencia.

La medida judicial de urgencia, en interés del proceso ya en curso o futuro en el Estado requirente, será promovida ante el Tribunal que según las normas procesales del Estado requerido seria competente para decidir la cuestión de fondo.

Art. 51.- Causas de oposición a la adopción de la medida.

El demandado está facultado para discutir los requisitos de admisibilidad de la medida de urgencia, en procedimiento incidental, observadas las garantías del debido proceso legal.

Parágrafo único.- El juez podrá conceder la medida de urgencia sin escuchar a la parte contraria, en cuyo caso el contradictorio previsto en el acápite de este artículo se tramitará posteriormente.

Sección VI – Procedimiento de extradición

Art. 52.- Garantía del debido proceso en el procedimiento de extradición.

La extradición estará sujeta a un procedimiento de jurisdicción contenciosa en que estén aseguradas las garantías del debido proceso legal.

Art. 53.- Motivos de oposición.

La defensa estará limitada a los requisitos previstos en los artículos 30 y 31, no pudiendo la decisión extranjera en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al mérito.

Art. 54.- Condición para la efectividad de la orden de detención y entrega.

La orden de prisión preventiva preparatoria o incidental será fundada y está vedada la entrega en cuanto no hubiere decisión final respecto de la extradición.

Art. 55.- Comunicación de la decisión del Estado requerido sobre la solicitud de extradición.

La decisión final relativa a la extradición será comunicada de inmediato al Estado requirente, debiendo esa comunicación, en caso de rechazo, contener los fundamentos de la misma.

Capítulo V – Disposiciones finales

Art. 56.- Compromiso de celeridad en la cooperación.

En lo concerniente a los procedimientos de auxilio mutuo y carta rogatoria y en general siempre que refiera la causa a la práctica de un acto por parte del tribunal u órgano administrativo requeridos, estos ejecutarán el pedido del Estado requirente con celeridad.

§ 1.- En el caso de que el pedido no sea satisfecho en el plazo de 90 días, deberá justificarse la demora.

Art. 57.- Laudo arbitral extranjero.

La ejecución del laudo arbitral extranjero estará sujeta a las reglas de los artículos 12, 48 y 49.

Art. 58.- Reciprocidad en materia de expensas procesales.

La exención de costas o la responsabilidad del Estado requerido por las expensas procesales dependerán de la reciprocidad de tratamiento.

CÓDIGO MODELO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS –JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL– PARA IBEROAMÉRICA

Aprobado por la Asamblea General del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal con ocasión de las XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, ocurridas en Buenos Aires, el día 8 de junio de 2012, el cual fue concluido, en febrero de 2012, por la Comisión Revisora, compuesta por los profesores Ada Pellegrini Grinover, Brasil (presidente); Ricardo Perlingeiro, Brasil (secretario general); Abel Zamorano, Panamá; Adriáns Simons, Perú; Angel Landoni Sosa, Uruguay; Carlos Manuel Ferreira da Silva, Portugal; Euripides Cuevas, Colombia; Gumersindo García Morelos, México; Igancio M. Soba Bracesco, Uruguay; Juan Antonio Robles Garzón, España; Maria Rosa Gutiérrez Sanz, España; Odete Medauar, Brasil; Ruth Stella Correa Palacio, Colombia; Sergio Artavia Barrantes, Costa Rica.

Buenos Aires 2012

Aprobado por la Asamblea General del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal con ocasión de las XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, ocurridas en Buenos Aires, el día 8 de junio de 2012, cuyo proyecto fue concluido, en febrero de 2012, por la Comisión Revisora, compuesta por los profesores Ada Pellegrini Grinover, Brasil (presidente); Ricardo Perlingeiro, Brasil (secretario general); Abel Zamorano, Panamá; Adriáns Simons, Perú; Angel Landoni Sosa, Uruguay; Carlos Manuel Ferreira da Silva, Portugal; Euripides Cuevas, Colombia; Gumersindo García Morelos, México; Igancio M. Soba Bracesco, Uruguay; Juan Antonio Robles Garzón, España; Maria Rosa Gutiérrez Sanz, España; Odete Medauar, Brasil; Ruth Stella Correa Palacio, Colombia; Sergio Artavia Barrantes, Costa Rica.

1. Derecho procesal. 2. Proceso administrativo. 3. Proceso judicial. I. Título.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La idea de un Código Modelo de Procesos Administrativos – Judicial y Extrajudicial – surgió en noviembre de 2008, en Niterói (Rio de Janeiro, Brasil), en evento académico junto al Núcleo de Ciencias judiciales de la Universidad Federal Fluminense (Nupej/UFF). La comisión para elaborar

la propuesta de un Código Modelo de Procesos Administrativos fue instituida por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en marzo de 2009, y ratificada en las *XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal*, realizadas en Santiago de Chile, en agosto de 2010. De la referida Comisión, participaron los siguientes miembros del Instituto: Ada Pellegrini Grinover, Brasil (presidente); Ricardo Perlingeiro, Brasil (secretario general); Angel Landoni Sosa, Uruguay; Euripides Cuevas, Colombia; Ignacio M. Soba Bracesco, Uruguay; Juan Antonio Robles Garzón, España; Maria Rosa Gutiérrez Sanz, España; Odete Medauar, Brasil; Ruth Stella Correa Palacio, Colombia. Después de sucesivas reuniones a distancia, la Comisión se reunió en marzo de 2011, en Bogotá, en la facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, cuando finalizó la propuesta de Código Modelo. En la reunión de la directiva del Instituto, en São Paulo, en el mes de junio de 2011, fue constituida la Comisión de Revisión, que incluyó, además de los anteriores, los siguientes juristas: Abel Zamorano, Panamá; Adriáns Simons, Perú; Carlos Manuel Ferreira da Silva, Portugal; Gumesindo García Morelos, México; Sergio Artavia Barrantes, Costa Rica. Ada Pellegrini y Ricardo Perlingeiro continuaron, respectivamente, como presidente y secretario general. En febrero de 2012, la Comisión Revisora concluyó los trabajos para la presentación del proyecto de Código Modelo de Proceso Administrativos para Iberoamérica.

2. Los Códigos Modelo no son novedad en el espacio iberoamericano. En 1967, en la Jornadas de Caracas y Valencia, en Venezuela, surgió la idea de hacer dos proyectos de normas procesales con el objeto de que sirvieran de orientación a las reformas legislativas para ser promovidas en los países latinoamericanos. Se iniciaba entonces, con el trabajo de juristas y comisiones, la elaboración de los Códigos Modelo de Proceso Civil y Proceso Penal. En 2004, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en las XIX Jornadas de Caracas, aprobó el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, y, en 2008, en las XXI Jornadas Iberoamericanas, de Lima, se aprobó el Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica.

3. El proyecto de Código Modelo de Procesos Administrativos – Judicial y Extrajudicial – para Iberoamérica adopta la expresión "proceso" como género, refiriéndose, en el Título I, al proceso administrativo extrajudicial, como equivalente a procedimiento administrativo con posibilidad de contradicción entre el interesado y la Administración Pública y, en el Título II, al proceso administrativo jurisdiccional. Se evitó la expresión "contencioso administrativo" para que el Código pueda servir de modelo tanto para los países de jurisdicción doble (que adoptan tribunales administrativos especiales) como para los de jurisdicción única, donde no existen tribunales especializados para el juzgamiento del Estado. El proyecto

se vale, aún, de las expresiones "jurisdicción administrativa" y "justicia administrativa", para designar, respectivamente, la prestación jurisdiccional especializada y los órganos estatales responsables por esta actuación.

4. El proceso administrativo extrajudicial es entendido como todo y cualquier procedimiento, en contradictorio, a) destinado a preparar decisiones administrativas que pueden incidir sobre intereses o derechos de los interesados; b) en que se configure una controversia entre la Administración y el interesado; c) o una controversia entre personas físicas o personas jurídicas de derecho público o privado, en que la solución pueda provenir de la Administración.

Los principios fundamentales del proceso administrativo extrajudicial fueron clasificados en cuanto a su naturaleza material o procesal. Los principios que rigen a la Administración, en la lógica del proyecto, son los de la constitucionalidad, convencionalidad, legalidad, moralidad, buena fé, impersonalidad, publicidad, eficiencia, motivación, proporcionalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y confianza legítima (art. 2o). Además de estos, se incluyeron como principios propios del proceso administrativo extrajudicial, los de isonomía, contradicción, amplia defensa, razonable duración del proceso, oficiosidad, verdad material, preclusión administrativa y formalismo moderado (art. 4o).

Se destaca que la autoridad administrativa, al considerar la ley o el acto al que estuviere vinculada anti-convencional o inconstitucional, podrá dejar de aplicarlo instando necesariamente a los órganos de control competentes para la declaración de anticonvencionalidad o de inconstitucionalidad (art. 2o, parágrafo único). De esa forma, se concilian los principios de convencionalismo y de constitucionaldad, con los de seguridad jurídica y de subordinación jerárquica administrativa.

5. Luego en los primeros artículos, el Proyecto trató uno de los mayores desafíos de los actos administrativos: la falta de uniformidad de las decisiones en relación a los interesados en la misma situación fáctica, lo cual alimenta la pluralidad de demandas repetitivas, principalmente en la esfera jurisdiccional, con el potencial de socavar la seguridad jurídica. La isonomía a la que está vinculada la Administración fue regulada de modo que, cuando "la cuestión de fondo de una pretensión individual estuviere relacionada con los efectos jurídicos de un comportamiento administrativo de alcance general, el resultado del conflicto pasará a ser de interés de la colectividad destinataria de aquel comportamiento y, por tanto, la solución deberá provenir de una decisión administrativa, única y con efectos *erga omnes*" (art. 5o). Reflejo directo de esa regla es el art. 72, II, respecto de los acuerdos jurídicos que envuelvan normas administrativas o actuaciones de alcance general, llegando necesariamente a todos aquellos que

se encuentren en la misma situación fáctica, aunque de esos acuerdos no hayan participado.

Con el propósito de minimizar los pleitos repetitivos, está prevista, incluso, la posibilidad en la sentencia que dispone la anulación de las normas o actos que tienen alcance general (art. 57), del incidente de colectivización en caso de control jurisdiccional de políticas públicas (art. 25) y el proceso piloto (art. 35).

En ese contexto, el Proyecto prevé la legitimación para iniciar el proceso extrajudicial de aquellos cuyos derechos e intereses fueren afectados directa o indirectamente, comprendiéndose allí los intereses difusos, colectivos o individuales homogéneos (art. 12, II), lo que repercute en el proceso judicial, en cuanto la legitimación universal (art. 51, 3) y la intervención de terceros en el caso de la posibilidad de cosa juzgada *erga omnes* o *ultra partes* (art. 52).

6. Además es marca del Proyecto la simetría entre los principios fundamentales y reglas general del proceso administrativo extrajudicial (cada vez más frecuente) y del proceso administrativo jurisdiccional. El principio de la verdad real en el proceso extrajudicial (art. 10) mantiene simetría con el de los poderes de instrucción del juez (art. 41); el principio de oficiosidad (art. 9o), con los de impulso procesal (art. 46) y el de la orden procesal (art. 47); el de la publicidad y el del derecho a la información (art. 18), con el de la publicidad procesal (art. 50); los principios de moralidad y buena fé, con los de buena fé y lealtad procesal (art. 48).

La contradicción y la amplia defensa deben corresponder no solo al derecho a ser oído —teniendo su *Day in court*— o de producir pruebas, sino y mas principalmente a obtener una decisión que considere los argumentos aducidos (arts. 6º y 7º), lo que mantiene correspondencia con la contradicción en la fase jurisdiccional (arts. 39 y 40), impidiéndose que se deje de aplicar a la persona jurídica o la constitución de un título ejecutivo tributario no precedido de proceso administrativo extrajudicial previo (arts. 16 y 17).

En cuanto al principio de razonable duración del proceso, instaurado este en interés particular, la necesidad de una providencia en tiempo razonable lleva a la presunción de rechazo de la pretensión, en caso de omisión, y abre la oportunidad para la vía recursal o jurisdiccional (art. 8o, III). Además, la previsión del recurso administrativo con efecto suspensivo automático representa cambio de paradigma para muchos sistemas iberoamericanos, y la regla propuesta parte de la posibilidad de ilicitud de actos administrativos (arts. 14, § 3o, y 8o, I), con clara repercusión en el proceso jurisdiccional cautelar (arts. 58, 4, y 59, 3).

7. La seguridad jurídica opera como límite al poder de autotutela de la Administración. La revocación de los actos, normas o decisiones

administrativas afectadas de ilegalidad, pero que han producido efectos favorables a los administrados, depende del proceso judicial previo, y debe ocurrir, en una perspectiva objetiva, solamente dentro de determinado plazo, salvo comprobada mala fe o, en una perspectiva subjetiva, siempre que no signifique romper con la confianza que el interesado supone que existe en cuanto a la estabilidad del comportamiento de la Administración. Se encuentra, así, presente en el Proyecto la matriz objetiva francesa de seguridad jurídica al lado del subjetivismo alemán, con el principio de confianza legítima (arts. 19 y 20).

También se relaciona con el principio de seguridad jurídica la prohibición de aplicación retroactiva de la nueva interpretación de norma o acto y de nueva orientación fijada para la materia (art. 8o, V), la preclusión con efectos equivalentes a cosa juzgada es impuesta a la Administración (art. 13), la prohibición de revisión administrativa *in pejus* (art. 15, § 2o), y los efectos modulados de la sentencia que decide sobre normas o actos con carácter *erga omnes* (art. 57).

La impugnación judicial o extrajudicial de comportamientos de la Administración debe estar sujeta a un plazo, capaz de resguardar el interés público, dando estabilidad a las situaciones, pero también el derecho de terceros de buena fe, sin perjuicio de que la Administración, en cualquier tiempo, reconozca derechos subjetivos (arts. 21 y 54).

8. En el respeto de la jurisdicción administrativa, más importante que concebir una estructura judicial autónoma, es acoger principios y reglas que compatibilicen el interés público con el interés privado en la formación de decisiones judiciales sobre actuaciones administrativas, individuales o generales, inclusive actos políticos o de gobierno, expedidos por cualquiera de los poderes del Estado o por particulares en ejercicio de esas actuaciones (arts. 21 y 22). Se opta, así, por un modelo de competencia objetiva, independientemente de la calidad de la parte envuelta en el conflicto judicial, en cuanto al alcance de la jurisdicción administrativa.

Con miras a una jurisdicción plena, inherente al principio del Estado de Derecho, son consideradas admisibles las pretensiones declarativas, de impugnación de normas y de actos, de impugnación y de revisión de la actividad contractual, de condena (dar, hacer o no hacer) y reparatorias (arts. 24, 55 y 62). En cuanto a la intensidad de la prestación jurisdiccional, se reconoce el control de legalidad formal y material de los comportamientos de la Administración, así como de la discrecionalidad administrativa, siempre que se superen los límites impuestos por los principios de proporcionalidad y de razonabilidad, admitiéndose, incluso, el control jurisdiccional de políticas públicas (art. 25).

9. Los agentes públicos y la estructura judicial, que tienen la misión de proteger derechos e intereses sujetos a la jurisdicción administrativa,

deben tener prerrogativas inherentes a la independencia personal e institucional. De esa forma, los jueces deben ser inamovibles y vitalicios y su remuneración debe ser justa y adecuada (art. 27). La selección, la carrera y la disciplina de los jueces deben ser confiadas a un órgano que garantice su independencia de forma que evite un verticalismo en la estructura judicial, con "carrerismo" y subordinación jerárquica entre los jueces (art. 28). Además el ingreso en el cargo de juez debe darse únicamente mediante proceso abierto, objetivo y transparente, fundamentado en la cualificación técnica y en la capacidad del interesado, sea cual fuere el grado o instancia (art. 29).

La presencia del abogado, en el ámbito de la justicia administrativa, es considerada un deber y no un derecho, inclusive para la Administración, que debe hacerse representar por un profesional del derecho (arts. 32 y 33). Tratándose de un deber, con todo, a aquellos que no tuvieren recursos, el Estado propiciará el beneficio de la asistencia jurídica gratuita (art. 34).

10. La legitimación para actuar es conferida a las personas que invoquen lesión o riesgo de lesión a un derecho subjetivo o interés legítimo, en frente de órganos o entes públicos, o entes privados en ejercicio de Poder Público. También se admite la legitimación universal para la defensa de intereses difusos y colectivos, así como para demandar normas o actos generales, además de la posibilidad de que, cuando un acto administrativo cause daño a un grupo de personas, cualquiera de ellas, así como los entes legitimados, puedan requerir la indemnización para todos (art. 51).

El acceso previo a la vía administrativa es facultativo, mas, si es utilizado, interrumpe el plazo para ejercer judicialmente la pretensión, sin perjuicio de las medidas de urgencia o de anticipación de tutela.

11. La tutela judicial efectiva está estampada en el Proyecto en cuanto a derechos subjetivos e intereses legítimos (art. 36), de ahí se deriva la procedencia de medidas de urgencia conservativas y satisfactivas, correspondiendo las primeras a las medidas cautelares y las segundas a la anticipación de la tutela (art. 58). Se admite la ejecución forzada de sentencias contra la Administración, con previsión de embargo de bienes públicos no afectados a servicio esencial (art. 63), así como la fijación de multas punitivas y coercitivas – *contempt civil* y *contempt of court* criminal, *astreintes* – además de pérdidas y daños a favor del acreedor por atraso en el cumplimiento de la orden (art. 64).

12. Finalmente se facilita el uso de otros medios adecuados a la solución de conflictos, limitados apenas por el principio de legalidad, de manera que garantice la no afectación del patrimonio público o su conformidad con el ordenamiento jurídico. En ese campo, se asegura el principio de isonomía, de modo que los acuerdos sobre actuaciones de alcance general beneficien a todos los que estuvieren en la misma situación aun cuando no

hayan participado en el proceso en que se adopta la decisión, así como el principio de transigibilidad, en cuanto a las formas y modalidades de los actos administrativos (art. 72).

13. En conclusión, se puede afirmar que el proyecto tiene como tónica la defensa del ciudadano frente a la Administración, invirtiendo el paradigma de visión de supremacía *ex parte principis*, para privilegiar la perspectiva *es parte civis*, de modo de construir un baluarte contra el arbitrio y un instrumento de seguridad jurídica.

Buenos Aires, 8 de junio de 2012.

La comisión revisora
ADA PELLEGRINI GRINOVER

Presidente
RICARDO PERLINGEIRO

Secretario General
ABEL ZAMORANO
ADRIÁNS SIMONS
ANGEL LANDONI SOSA
CARLOS MANUEL FERREIRA DA SILVA
EURÍPIDES CUEVAS
GUMESINDO GARCÍA MORELOS
IGNACIO M. SOBA BRACESCO
JUAN ANTONIO ROBLES GARZÓN
MARIA ROSA GUTIÉRREZ SANZ
ODETE MEDAUAR
RUTH STELLA CORREA PALACIO
SERGIO ARTAVIA BARRANTES

Título I

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL

Art. 1º (Ámbito de aplicación)

Este título fija las reglas básicas sobre el proceso administrativo no jurisdiccional, en el ámbito de la Administración directa e indirecta (central y descentralizada) objetivando, en especial, la protección de los derechos de las personas físicas y jurídicas y el mejor cumplimiento de los fines de la Administración.

Parágrafo único. Los procedimientos de este Título se aplican a los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial, cuando actúen en funciones administrativas.

Art. 2º (Principios aplicables a la Administración Pública)

La Administración observará, entre otros, los principios de constitucionalidad, convencionalidad, legalidad, moralidad, buena fe, impersonalidad, publicidad, eficiencia, motivación, proporcionalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y confianza legítima.

Parágrafo único. La autoridad administrativa podrá dejar de cumplir la ley o el acto que considere inconstitucional o anti-convencional, representando al órgano competente para la declaración de inconstitucionalidad o de anti-convencionalidad.

Art. 3º (Proceso administrativo extrajudicial)

Se considera proceso administrativo, sometido a las garantías de contradicción y amplia defensa, todo y cualquier procedimiento destinado a preparar decisiones administrativas que puedan incidir sobre intereses o derechos de los interesados, así como todo y cualquier procedimiento en que se configure una controversia entre la Administración y el interesado, o entre personas física o personas jurídicas de Derecho Público o Privado, cuya solución pueda venir de la Administración.

Art. 4º (Principios del proceso administrativo)

Se aplican al proceso administrativo, además de los principios de la Administración Pública, los principios de isonomía, contradicción, amplia defensa, razonable duración del proceso, oficiosidad, verdad material, preclusión administrativa y formalismo moderado, sin perjuicio de otros.

Art. 5º (Isonomía)

Siempre que la cuestión de fondo de una pretensión individual estuviere relacionada con los efectos jurídicos de un comportamiento administrativo de alcance general, el resultado del conflicto pasará a ser de interés de la colectividad destinataria de aquel comportamiento y, por tanto, la solución deberá provenir de una decisión administrativa, única y con efectos *erga omnes*.

Art. 6º (Contradicción)

La contradicción implica el derecho de ser informado de la instauración del proceso y de todas las fases y medidas subsiguientes, pudiendo el interesado acompañarlo y presentar argumentos, datos, documentos y pruebas en su favor.

§ 1º La contradicción solo podrá ser sucesiva a la producción de las pruebas cuando se trate de reunión de documentos pre-constituidos o de pericias urgentes, permitiéndose la presentación de preguntas al perito, su interrogatorio en contradicción y el ofrecimiento de informes por los sujetos.

§ 2º Las decisiones resultantes del proceso administrativo deberán ser motivadas, de modo explícito, congruente y claro, con indicación de los hechos y de los fundamentos jurídicos, pudiendo remitir a elementos de anteriores opiniones, decisiones, informaciones o propuestas, los cuales integrarán el acto decisorio.

§ 3º La motivación de las decisiones de los órganos colegiados o de las decisiones orales será indicada en la respectiva acta en término escrito.

Art. 7º (Amplia defensa)

Sin perjuicio de otros, la amplia defensa cubre los siguientes elementos:

I – carácter previo de la defensa en relación con el acto de decisión, salvo casos excepcionales que envuelvan riesgo a la vida y a la seguridad de las personas;

II – posibilidad dada al sujeto de, personalmente, realizar las conductas y medidas para evitar perjuicios a sus derechos y para preservarse de sanciones, implicando, incluso, derecho de presencia en audiencia;

III – posibilidad de ser representado por abogado o por la persona indicada;

IV – derecho de ser notificado del inicio del proceso, con indicación, en el texto, de los hechos y las bases legales, de modo explícito;

V – derecho a ser indicados, en la notificación o citación, del plazo para la manifestación o del plazo para recurrir, el órgano responsable por el proceso, con la dirección, el horario de atención, el plazo máximo para la Administración decidir y el efecto del silencio por parte de la Administración;

VI – derecho de ser notificado, por adelantado, de las medidas referentes a la producción de pruebas;

VII – derecho de acceso a los autos administrativos, comprendiendo verlos, obtención de copias, certificaciones;

VIII – derecho de solicitar la producción de pruebas, de verlas realizadas y consideradas, desde que sean pertinentes y no tumultuosas;

IX – derecho de permanecer callado, de no hacer prueba contra sí mismo y derecho de no declararse culpable;

X – derecho de interponer recurso administrativo, aún no previsto, de modo explícito, por la norma reguladora de la materia, prohibida la exigencia de previo depósito o previa inscripción de bienes y derechos.

Parágrafo único. En el proceso administrativo son inadmisibles las pruebas obtenidas por medios ilícitos, así como las derivadas de las ilícitas, cuando sea evidente el nexo causal entre unas y otras.

Art. 8º (Razonable duración del proceso)

El principio de razonable duración del proceso cubre los siguientes desarrollos, sin perjuicio de otros:

I – deber de la Administración en el sentido de emitir explícita decisión en los procesos administrativos y ante solicitudes o reclamaciones;

II – deber de la Administración en el sentido de cumplir los plazos fijados para la adopción de medidas o toma de decisiones, so pena de responsabilidad de la autoridad competente;

III – salvo disposición contraria, en los procesos administrativos iniciados por los particulares, la falta de adopción de medidas o la falta de decisión en el plazo fijado tiene el efecto de rechazo, permitiendo la interposición de recurso administrativo o la utilización de la vía jurisdiccional;

IV– en los procesos sancionatorios o en aquellos que puedan resultar con efectos desfavorables, iniciados de oficio, la falta de decisión explícita, en el plazo fijado, acarreará la caducidad;

V – es prohibida la aplicación retroactiva de nueva interpretación de norma o acto y de nueva orientación fijada para la materia.

Art. 9º (Principio de oficiosidad)

La Administración tiene el deber de tomar todas las providencias necesarias al adelantamiento continuo y regular del proceso administrativo, para la expedición del acto final, sin perjuicio de la actuación de los sujetos garantizada por la contradicción y amplia defensa.

Parágrafo único. La inercia de los interesados no acarreará la paralización del adelantamiento salvo el caso de medidas pedidas por el particular, cuyo análisis depende de documentos que este deba aportar; en este caso la Administración deberá conceder plazo para la aportación, cerrando el proceso si tal no ocurriere.

Art. 10. (Principio de verdad material)

La Administración debe tomar las decisiones con base en la realidad de los hechos, teniendo el derecho y el deber de traer para los autos todos los datos, informaciones y documentos respecto de la materia tratada, sin estar sujeta a los aspectos ventilados por los interesados, pudiendo, de oficio, determinar la producción de pruebas.

Art. 11. (Principio de formalismo moderado)

La Administración adoptará formas simples suficientes para propiciar un adecuado grado de certeza, seguridad y respeto a la contradicción y amplia defensa.

Art. 12. (Legitimación).

Son sujetos legitimados para iniciar un proceso administrativo:

I – aquellos cuyos derechos e intereses fueren afectados directa o indirectamente por la Administración;

II – los ciudadanos, asociaciones o entidades públicas o privadas en cuanto a derechos o intereses colectivos, difusos e individuales homogéneos.

Art. 13. (Preclusión administrativa)

Las decisiones finales se sujetarán a la preclusión administrativa, con efectos equivalentes a los de la cosa juzgada, no pudiendo la Administración retomar el curso del proceso sino cuando hubiere hechos nuevos, sobrevinientes a la decisión.

Art. 14. (Recursos administrativos)

Contra las normas, actos, medidas o decisiones tomadas por la Administración, cabe recurso por razones de legalidad y de mérito.

§ 1º El recurso se tramitará, en máximo, por dos instancias administrativas.

§ 2º Son sujetos legitimados para interponer recurso administrativo los titulares de derechos e intereses que fueron, o de acuerdo al artículo 12, puedan ser parte en el proceso.

§ 3o El recurso tendrá efecto suspensivo automático, excepto si hubiere ofensa al interés público, caso en el cual la suspensión dependerá de la demostración del riesgo de daño irreparable a los ciudadanos.

§ 4º Si de la decisión del recurso puede resultar gravamen al recurrente, este deberá ser informado para que pueda formular alegaciones antes de la decisión.

Art. 15. (Revisión administrativa)

Los procesos administrativos de los que resulten sanciones podrán ser objeto de revisión, a petición o de oficio, cuando surjan hechos nuevos susceptibles de justificar lo inadecuado de la sanción impuesta.

§ 1º La revisión podrá ser instaurada en plazo razonable contado desde el conocimiento del hecho nuevo.

§ 2º De la revisión del proceso administrativo no podrá resultar agravamiento de la sanción.

Art. 16. (Descubrimiento de la persona jurídica)

El descubrimiento de la personalidad jurídica, por la autoridad administrativa, deberá ser precedido de citación de las personas físicas

involucradas, para que ejerzan el derecho de defensa y sólo podrá ser decretada, en decisión motivada, después de contradicción previa.

Art. 17. (Constitución de título ejecutivo tributario)

La constitución de título ejecutivo tributario será precedida de proceso administrativo, observando la contradicción previa, pudiendo constar en el título, como responsables, apenas los participantes del contradictorio.

Parágrafo único. La exigibilidad del crédito estará suspendida durante el trámite del proceso administrativo.

Art. 18. (Derecho de obtener informaciones)

Serán constituidas comisiones independientes, teniendo en su composición mayoritaria integrantes de la sociedad civil, preferiblemente de varios segmentos, para asegurar a cualquier interesado el acceso a documentos administrativos y a actuaciones administrativas.

Parágrafo único. En caso de que la Administración alegue reserva, el órgano indicado en el *caput* decidirá sobre la cuestión.

Art. 19. (Deshacimiento de normas y actos)

Serán anulados las normas, actos o medidas administrativas cuando estén viciadas de ilegalidad, respetados los derechos adquiridos, pudiendo también ser revocados, en las mismas circunstancias, por motivo de conveniencia y oportunidad.

Parágrafo único. En caso de normas, actos o medidas de los que resulten efectos favorables a los destinatarios, la posibilidad de deshacer el acto o medida solamente puede ocurrir en proceso administrativo judicial, que decae en plazo razonable contado desde la fecha en que fueron expedidos, salvo comprobada mala fé.

Art. 20. (Confianza legítima).

El acto administrativo viciado de ilegalidad o sometido a cambio de interpretación que concede derecho de cualquier naturaleza al interesado no puede ser desecho si el destinatario favorecido confió en su estabilidad y la confianza es digna de protección.

§ 1º Si prevalece el interés público en la revocación por invalidez, debe haber cálculo de los daños sufridos en función de la confianza en su estabilidad.

§ 2º Apartan la noción de confianza el dolo, la amenaza, la corrupción, el conocimiento de la invalidez o el desconocimiento por culpa grave del interesado, la obtención del acto con base en datos inexactos o incompletos.

Art. 21. (Plazos)

La impugnación, frente a la Administración, del acto o medida administrativa debe estar sometida a un plazo.

Parágrafo único. No hay plazo para que la Administración Pública reconozca derechos subjetivos.

Título II

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO JUDICIAL

Capítulo I – Jurisdicción administrativa

Sección I – Finalidad y Alcance

Art. 22. (Control jurisdiccional)

Las normas, actos y decisiones administrativas, de cualquier especie, se someten al control jurisdiccional.

Art. 23. (Finalidad y alcance)

La finalidad del proceso administrativo judicial es la formación de decisiones jurisdiccionales al respecto de actuaciones administrativas.

Parágrafo único. Las actuaciones administrativas, entre otras, pueden ser individuales o generales, inclusive actos políticos o de gobierno, expedidos por órganos de todos los Poderes Públicos o por particulares en ejercicio de esas actuaciones.

Art. 24. (Pretensiones admisibles)

En ejercicio del control judicial de las actuaciones de la Administración, podrán formularse pretensiones declarativas, de impugnación de normas y de actos, de impugnación y de revisión de la actividad contractual, de condena (dar, hacer y no hacer) y reparatorias.

Parágrafo único. El Estado deberá repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al pago de una suma de dinero producto de una condena o de otro mecanismo adecuado de solución de conflictos.

Art. 25. (Intensidad del control)

Las normas y los actos administrativos son susceptibles de control de legalidad formal y material por parte de la jurisdicción.

§ 1º Tratándose de actos discrecionales, estos deberán ser motivados y en su control el juez analizará la proporcionalidad y razonabilidad de las decisiones.

§ 2º El control de los actos que impliquen políticas públicas comprenderá los siguientes aspectos:

I – los actos que se producen en el trámite de su formación;

II – la omisión en la implementación de su ejecución.

§ 3º En ningún caso el juez sustituirá a la Administración en la implementación o corrección de políticas públicas, salvo cuando se trata del mínimo existencial, observados los límites de la proporcionalidad y razonabilidad.

§ 4º Surgiendo en un proceso individual cuestión relativa a las políticas públicas, el órgano jurisdiccional podrá suscitar, de oficio o a petición de las partes, incidente de colectivización, transformando la acción

individual en un proceso colectivo, mediante la citación de los legitimados en las acciones colectivas para añadir a la inicial y acompañar el proceso.

Sección II – Organización

Art. 26. (Independencia)

La justicia administrativa está dotada de independencia.

Art. 27. (Prerrogativas)

Los jueces son inamovibles y vitalicios; su remuneración debe ser justa y adecuada.

Art. 28. (Selección, carrera y disciplina)

La selección, la carrera y la disciplina de los jueces son confiadas a un órgano que garantice su independencia.

Art. 29. (Ingreso a la carrera de la magistratura)

La selección de los jueces debe resultar de un proceso abierto, objetivo y transparente, fundamentado en su calificación técnica y capacidad profesional.

Art. 30. (Incompatibilidades)

Los miembros de la Justicia administrativa no podrán ejercer otras funciones que sean incompatibles con su independencia.

Art. 31. (Instancias)

La Justicia administrativa debe comprender un mínimo de dos a un máximo de tres instancias.

Sección III – Representación y Asistencia Jurídica

Art. 32. (Representación por abogado)

Las partes deben estar representadas o asistidas ante los órganos jurisdiccionales por un abogado.

Art. 33. (Representación de la Administración Pública)

Los entes y los órganos públicos estarán representados por un profesional del derecho, aunque no sea abogado en ejercicio.

Art. 34. (Asistencia jurídica gratuita)

Para garantizar el derecho de cada persona al acceso a la Justicia administrativa, deberá ser organizado un sistema de asistencia jurídica gratuita. Esta asistencia dependerá de los recursos y gastos del interesado y del carácter no evidentemente inadmisible de su demanda. La asistencia es decidida por un órgano independiente.

Art. 35. (Proceso testigo o piloto)

Habiendo procesos repetitivos a ser juzgados, el órgano jurisdiccional competente deberá seleccionar uno o algunos casos representativos de la

controversia, quedando los demás procesos en suspenso, para que el juzgamiento de los seleccionados se aplique a los demás.

CAPÍTULO II – PROCESO

Sección I – Principios

Art. 36. (Tutela jurisdiccional efectiva)

La Justicia administrativa debe tender a la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos subjetivos e intereses legítimos involucrados en los procesos administrativos judiciales.

§ 1º Se debe facilitar el acceso a la jurisdicción, en particular a aquellas personas o grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad.

§ 2º El proceso deberá desenvolverse sin dilaciones injustificadas.

§ 3º El estado garantizará el cumplimiento de las decisiones judiciales contra la Administración.

Art. 37. (Debido proceso)

La Justicia administrativa deberá velar por la aplicación y el máximo respeto de las garantías inherentes al debido proceso legal, de conformidad con lo establecido por la Constitución, las leyes y las normas del Derecho internacional.

Art. 38. (Paridad de armas)

La ley y el órgano jurisdiccional deberán preservar la igualdad de las partes en el proceso.

Art. 39. (Principio de contradicción)

1. Las partes deben tener la oportunidad de discutir cada aspecto de hecho o de derecho en que se fundamente la sentencia. El juez asegurará a cada parte la posibilidad efectiva de defensa y de prueba de sus alegaciones y de contestar las de la otra parte.

2. Las partes podrán proponer pruebas pertinentes, contestar las argumentaciones de las demás partes y presentar las alegaciones escritas necesarias.

Art. 40. (Principio dispositivo)

Las partes son sujetos activos del proceso. Sobre ellas recae el derecho de iniciar y determinar su objeto. Las partes poseen el dominio completo tanto sobre su derecho subjetivo sustancial, como sobre sus derechos a la iniciación, desarrollo y finalización del proceso. El órgano jurisdiccional no puede decidir más allá del contenido de la demanda.

Art. 41. (Poderes de instrucción del juez)

El órgano jurisdiccional podrá ejercer poderes de instrucción supletivos de las actividades de las partes.

Art. 42. (Principio de oralidad)

El órgano jurisdiccional desarrollará el proceso preferencialmente vía oral, pudiendo decidir sin juicio oral cuando se trata de cuestiones exclusivamente de derecho o hechos no controvertidos.

§ 1º A título de autodefensa la parte podrá solicitar ser oída por el juez en audiencia.

§ 2º Las vías oral o escrita pueden ser sustituidas por el proceso electrónico.

Art. 43. (Inmediación procesal)

Tanto las audiencias, como las diligencias de prueba que así lo exijan, deben realizarse por el órgano jurisdiccional competente, no pudiendo éste delegarlas, so pena de nulidad absoluta.

Art. 44. (Concentración procesal)

Los actos procesales deberán realizarse sin demora, para reducir los plazos, cuando estén facultados por la ley o el acuerdo de las partes, y serán concentradas en un mismo acto todas las diligencias que fueren necesarias.

Art. 45. (Dirección del proceso)

La dirección del proceso está confiada al órgano jurisdiccional, que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Art. 46. (Impulso procesal)

Iniciado el proceso, el órgano jurisdiccional adoptará de oficio las medidas necesarias a evitar su paralización y conducirá su trámite con miras a la mayor celeridad posible.

Art. 47. (Orden procesal)

El órgano jurisdiccional deberá adoptar, a pedido de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley y de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso.

Art. 48. (Buena fe y lealtad procesal)

Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los participantes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que deben los litigantes y a la lealtad y a la buena fe.

§ 1º El órgano jurisdiccional deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

§ 2º Serán previstas sanciones para el incumplimiento de los deberes de lealtad y buena fe o de cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

Art. 49. (Motivación de las decisiones)

Todas las decisiones jurisdiccionales serán motivadas, so pena de nulidad.

Art. 50. (Publicidad procesal)

Todo proceso será público, salvo si el órgano jurisdiccional decide contrariamente por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad o de los derechos fundamentales de alguna de las partes.

Sección II – Admisibilidad de la Acción

Art. 51. (Legitimidad para actuar)

1. Están legitimadas, para proponer una acción judicial, las personas que invoquen lesión o riesgo de lesión a un derecho subjetivo o a un interés legítimo.

2. La acción puede ser propuesta contra órganos o entes públicos, o entes privados en la medida en que ejerzan Poder Público.

3. Puede otorgarse legitimación universal para defender intereses difusos y colectivos, así como para demandar sobre actos generales y normas.

4. Cuando el acto administrativo causa daño a un grupo de personas, cualquiera de ellas, así como los entes legitimados, podrán requerir la indemnización para todos los afectados.

5. También tendrán legitimación los órganos públicos cuando invoquen una lesión a la esfera de su competencia.

6. La legitimación de la Administración, para el cumplimiento de sus atribuciones, es amplia, comprendiendo la impugnación de normas, actos y decisiones de otras Administraciones o de los órganos públicos vinculados a éstas.

Art. 52. (Intervención de terceros)

Existiendo la posibilidad de cosa juzgada *erga omnes* o *ultra partes*, debe ser garantizada la oportunidad de ingreso de los interesados, por notificación personal, cuando ésta estuviere al alcance de la Administración, o, en caso contrario, por amplia divulgación en la prensa, caso en que sería nombrado un curador especial.

Art. 53. (Vía administrativa previa)

El acceso a la vía administrativa previa es facultativo; con todo, su interposición interrumpe el plazo para ejercer judicialmente la pretensión y no excluye las medidas cautelares o de anticipación de tutela.

Art. 54. (Plazos)

La pretensión a ser deducida delante del órgano jurisdiccional debe estar sometida a un plazo.

Parágrafo único. La formulación de la pretensión no impide el reconocimiento del derecho por la Administración.

Sección – III Sentencia

Art. 55. (Contenido de la sentencia)

La sentencia podrá tener naturaleza declarativa, constitutiva o condenatoria, incluyendo obligaciones de dar, hacer o no hacer, pudiendo el órgano jurisdiccional, para restablecer el derecho particular, fijar disposiciones nuevas en lugar de las impugnadas y modificarlas o reformarlas.

Parágrafo único. La sentencia debe pronunciarse sobre los daños y perjuicios que hayan sido reclamados.

Art. 56. (Forma de la sentencia)

1. La sentencia debe incluir una síntesis de las principales actuaciones procesales.

2. En la sentencia se indicarán los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión, debiendo el tribunal responder las alegaciones de las partes.

3. El órgano jurisdiccional debe proferir la decisión en un plazo reducido.

4. La notificación de la sentencia indicará el plazo y el procedimiento del recurso procedente.

Art. 57. (Efectos de la sentencia)

El deshacimiento de una norma o acto administrativo tiene efecto *erga omnes* y retroactivo, sin perjuicio de la posibilidad del órgano jurisdiccional de modular esos efectos por razones de interés púbico y de tutela de intereses individuales.

Capítulo III

MEDIDAS CAUTELARES Y DE ANTICIPACIÓN DE LA TUTELA

Art. 58. (Disposición general)

1. La tutela de urgencia puede ser conservativa o satisfactiva, correspondiendo, la primera a las medidas cautelares y la segunda a la anticipación de la tutela. El principio de la tutela efectiva comprende la aplicación de las medidas cautelares y anticipativas previstas en el presente capítulo, a efectos de la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos.

2. Se procura la efectividad de tutela cautelar y de la tutela anticipada ante la ilegalidad manifiesta de una actuación administrativa,

considerandose las circunstancias y la urgencia del caso concreto y la ponderación entre los intereses públicos y privados, adoptándose aquellas medidas que se consideren más adecuadas o indispensables.

3. Las medidas cautelares y anticipadas pueden ser adoptadas previamente o en el curso del proceso principal.

4. Las medidas cautelares y anticipadas serán deferidas al requerimiento de parte interesada y bajo su responsabilidad. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser concedidas de oficio si una norma expresamente así lo autoriza.

5. El peticionario deberá prestar contracautela o garantía suficiente, salvo el caso excepcional de que existieran motivos fundados para eximirla.

6. Será competente para decidir sobre las tutelas reguladas en el presente capítulo, el órgano jurisdiccional competente para el proceso principal.

Art. 59. (Medidas cautelares)

1. Las medidas cautelares que pueden ser deferidas en un proceso para la defensa de los derechos e intereses no se encuentran, en principio, limitadas a un rol específico o taxativo, sin perjuicio de las limitaciones provenientes de la inembargabilidad de ciertos bienes del Estado.

2. Las referidas medidas pueden ser adoptadas, inclusive, como medida anterior a un proceso, caso en el cual la demanda principal deberá ser presentada dentro del plazo de 30 días completos. No siendo presentada la demanda correspondiente, la medida caducará de pleno derecho y el solicitante podrá ser responsabilizado por los daños y perjuicios causados.

3. En especial, podrá ser solicitada como medida cautelar la suspensión total o parcial, de los efectos de los actos administrativos.

4. En todo caso, el órgano jurisdiccional deberá fijar de forma precisa el alcance y la duración de la medida, así como cualquier otra cuestión necesaria a la correcta instrumentalización de la medida.

5. En caso de no haber sido establecido un plazo judicial de duración de las medidas, las mismas conservarán su eficacia en tanto subsista el proceso principal o se profiera sentencia disponiendo sobre su cesación o modificación.

Art. 60. (Tutela anticipada)

1. El tribunal podrá, a pedido de parte interesada, anticipar total o parcialmente los efectos de la tutela pretendida en la petición inicial, para evitar que se cause a la parte, ante de la sentencia definitiva, una lesión grave o de difícil reparación, o para asegurar de forma anticipada la decisión sobre el fondo. La tutela anticipada podrá ser requerida previamente al proceso principal o en el curso del mismo.

2. Para que pueda obtener los efectos de tutela anticipada, la parte solicitante deberá probar al menos, de forma consistente e inequívoca, la verosimilitud de sus alegaciones, así como la existencia de:

I – temor fundado sobre la ineficacia de la providencia final;

II – daño irreparable o de difícil reparación;

III – abuso del derecho de defensa o manifiesto propósito dilatorio de la parte contraria.

3. En todos los casos, no deberá haber riesgo de irreversibilidad de los efectos del pronunciamiento anticipado. El riesgo de la irreversibilidad no impide la anticipación de la tutela si se presta caución o garantía idónea.

4. La tutela anticipada podrá ser, con relación al objeto del proceso, parcial o total. En caso de que la tutela anticipada haya sido parcial, podrá, no obstante, dar lugar a la cosa juzgada, prosiguiendo el proceso, si fuere el caso, con el objetivo de ser proferida decisión sobre los demás puntos o cuestiones que forman parte del objeto.

5. En la sentencia que anticipa la tutela, el juez indicará, de forma especialmente clara y precisa, los motivos y fundamentos de su decisión.

6. La tutela anticipada podrá ser revocada o modificada en cualquier momento, a petición o de oficio, mediante decisión fundamentada.

Capítulo IV

RECURSOS

Art. 61. (Derecho de recurrir)

El sistema recursal dependerá del ordenamiento de cada país, garantizando el derecho de apelar a la segunda instancia, en materia de hecho y de derecho.

§ 1º Las decisiones de los órganos jurisdiccionales de apelación y de los órganos de primera instancia, cuando no sean apelables, podrán ser recurridas frente a una corte suprema.

§ 2º El reexamen de la sentencia no podrá ser determinado de oficio.

Capítulo V

EJECUCIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Art. 62. (Ejecución y tutela judicial efectiva)

Se aplica la tutela jurisdiccional efectiva en sede de ejecución de sentencias contra la Administración Pública, que debe cumplir la condena en plazo reducido.

§ 1º La ejecución se distingue en obligación de pagar o en obligación de hacer o no hacer o entregar cosa cierta.

§ 2º No habiendo cumplimiento espontáneo de las obligaciones, será realizada la ejecución forzada.

Art. 63. (Obligación de pagar)

La ejecución forzada en las obligaciones de pagar utilizará medios, como el embargo del patrimonio de la Administración que no estuviere afectado al servicio público esencial y a la compensación de créditos y débitos.

Art. 64. (Obligaciones de hacer y de no hacer o de entregar cosa)

Para la ejecución de obligación de hacer y de no hacer o de entregar cosa, el órgano jurisdiccional determinará medidas que aseguren el resultado práctico equivalente al de debido cumplimiento, tales como la imposición de multa al agente público responsable, busca y aprensión, remoción de personas y cosas, deshacimiento de obras e impedimento de actividad nociva, si es necesario con solicitud de fuerza policial.

§ 1º La obligación solamente se convertirá en pérdidas y daños si el autor lo requiere o es imposible la tutela específica o la obtención del resultado práctico correspondiente.

§ 2º La indemnización por pérdidas y daños se dará sin perjuicio de la multa fijada para compeler al reo al cumplimiento específico de la obligación.

Art. 65. (Títulos ejecutivos judiciales)

Son títulos ejecutivos judiciales contra la Administración Pública:

I – la sentencia;

II – el laudo arbitral;

III – los acuerdos homologados judicialmente.

Art. 66. (Títulos ejecutivos extrajudiciales)

Son títulos ejecutivos extrajudiciales los que la ley así considere, incluidos los acuerdos no homologados judicialmente y los actos administrativos y cualquier documento que provenga de la Administración y que contenga una obligación clara, expresa y exigible.

Capítulo VII

DEL INCIDENTE DE DESCUBRIMIENTO DE LA PERSONALIDAD

Art. 67. (Instauración y alcance)

En caso de abuso de la personalidad jurídica, el órgano jurisdiccional puede instaurar, de oficio o a solicitud de parte, el incidente de descubrimiento de la personalidad, para que los efectos de ciertas y determinadas obligaciones sean extendidos a los bienes particulares de los

administradores o de los socios de la persona jurídica o a los bienes de las empresas del mismo grupo económico.

Parágrafo único. Lo dispuesto en este artículo puede ser aplicado inversamente en la hipótesis de abuso de la persona física, a fin de lograr los bienes de la persona jurídica.

Art. 68. (Procedencia)

El incidente de descubrimiento, que se podrá tramitar por separado y no suspenderá el proceso, procede en todas las etapas del proceso de conocimiento, en la ejecución de la sentencia y en la ejecución fundada en título ejecutivo extrajudicial.

Art. 69. (Defensa)

Requerido el descubrimiento, el socio o el tercero y la persona jurídica serán citados para que, en un plazo razonable, se manifiesten y pidan las pruebas procedentes.

Art. 70. (Decisión)

Concluida la instrucción, si es necesario, el incidente será resuelto por decisión impugnable por recurso.

Capítulo VII

OTROS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Art. 71. (Alternatividad)

Excepto en los casos de nulidad de actos administrativos, las partes podrán recurrir a otros medios adecuados de solución de controversias, tales como el arbitraje, conciliación, mediación, transacción y amigable composición.

Art. 72. (Principios)

El uso de medios alternativos de solución de controversias con la Administración estará sujeto a los siguientes principios:

I – Legalidad. El arbitraje y los acuerdos con la Administración destinados a prevenir o extinguir un litigio, deben estar respaldados en el principio de legalidad de manera de garantizar la no afectación del patrimonio público o su conformidad con el ordenamiento jurídico;

II – Isonomía. Los acuerdos que envuelvan normas administrativas o actuaciones de alcance general deben alcanzar a todos aquellos que se encuentren en la misma situación fáctica, aunque no hayan participado de esos acuerdos;

III – Transigibilidad. Solamente se podrá hacer uso de otros mecanismos de solución de conflictos, cuando la materia en controversia sea transigible.

Art. 73. (Procedencia)

También procederán otros medios adecuados de solución de controversias, cuando, siendo el conflicto de carácter particular, provenga de actos administrativos.

Art. 74. (Cosa juzgada)

El acuerdo objeto de conciliación, transacción o composición consensual no requiere homologación judicial, y el acto que lo contenga tiene eficacia equivalente a la de cosa juzgada.

Art. 75. (Revisión del acuerdo)

El acuerdo solamente será judicialmente revisado en caso de existencia de vicios que generen nulidad absoluta o de hechos nuevos, sobrevinientes.

Art. 76. (Contenido de la decisión arbitral)

Para resolver el conflicto, los árbitros podrán declarar la nulidad de los actos de carácter particular origen del conflicto, cuando sean ilegales y esa declaración sea necesaria para la solución de la controversia.

Art. 77. (Control de la decisión arbitral)

El laudo que dispone sobre un conflicto de carácter contractual, solamente será objeto de control judicial por vicios *in procedendo*. No habrá revisión judicial de tales decisiones por motivos de mérito.

Art. 78. (Cumplimiento)

Será garantizado el cumplimiento de los acuerdos y de las decisiones obtenidos por medio de los mecanismos de solución de conflictos. El interesado podrá recurrir a la jurisdicción para obtener la ejecución forzada de las decisiones arbitrales, y de los acuerdos que se produzcan por el uso de tales mecanismos.

Exposición de motivos

i.- El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, ha tenido el honor de distinguirnos para elaborar un proyecto de ley de arbitraje comercial, que era un trabajo que estaba pendiente entre sus tantos aportes a la comunidad jurídica, pese a reconocer que el arbitraje sigue siendo el sistema más utilizado en el mundo para la resolución de conflictos.

El equipo de trabajo que conformamos, permitió el desarrollo de una tarea armónica que fue desenvolviéndose por partes, que fuimos compartiendo y desde luego debatiendo, con la riqueza que implicó cada uno de esos intercambios, merced a las ventajas que ofrece la tecnología y el acortamiento que provoca en las distancias.

De tal modo, Argentina, Colombia y Perú se transformaron en un solo bloque de trabajo que permitió hoy lo que estamos presentando a nuestro Instituto.

Para ello, se han tenido en cuenta como fuentes de inexcusable referencia para esta labor, legislación que de algún modo hoy podemos considerar tradicional y que resulta imposible obviar para una tarea como la emprendida.

Entiéndase por tal la Ley Modelo de Uncitral de las Naciones Unidas, o la Convención de Nueva York del año 1958, o reglamentos de distintos tribunales arbitrales entre los cuales podemos citar como los más reconocidos a la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, que es el Tribunal cimero en esta materia, o reglamentos de orden similar en cuanto a su importancia en las transacciones internacionales como el de la American Arbitration Association o el de la Corte Española de Arbitraje con sede en Madrid, entre otros.

A su vez, han coadyuvado con nuestra tarea, la importante consulta de varias leyes avanzadas sobre esta temática, como la Ley colombiana, la Ley brasileña, la Ley peruana, o la Ley Argentina de arbitraje comercial internacional, países estos en los cuales el arbitraje ha tenido un marcado desarrollo y sigue desenvolviéndose con un gran empuje.

En idéntico sentido, y con la misma finalidad se han consultado varios trabajos llevados a cabo por organizaciones que apuntan al desarrollo del arbitraje, y propenden afanosamente a la búsqueda de criterios uniformes a nivel internacional, como las reglas de la International Bar Association, no solo en materia probatoria, sino además desde el punto de vista de las reglas éticas que se han dictado, sobre todo para la conformación y el desarrollo de los tribunales y los procesos arbitrales, o inclusive pautas interpretativas que han permitido el diseño de los principios de Unidroit que también resultan de aplicación a esta temática.

Sobre la base de estos fundamentos, hemos elaborado el proyecto de ley modelo de arbitraje para que aquellos países —sobre todo de

Iberoamérica— que tengan interés en el desarrollo de este sistema de solución de conflictos, lo puedan adaptar a sus respectivas realidades.

II.- El proyecto de ley modelo se puede dividir en seis capítulos que hacen a su estructura. Los principios del proceso arbitral. El pacto arbitral. El tribunal arbitral. Los intervinientes en el proceso arbitral. El procedimiento arbitral y una última etapa conclusional del proceso.

Desde el comienzo se identifica al arbitraje como un sistema alternativo de solución de conflictos, en razón de que a la luz de la teoría general de los sistemas, éste al igual que el proceso judicial, se integra con diversas partes, que están interrelacionadas entre sí y que propenden a la consecución de un objetivo final, que no es otro que el dictado de un laudo que permita dirimir un conflicto o superar una controversia.

Consideramos más apropiada la identificación del arbitraje como un sistema, porque en general es identificado como un método o un mecanismo, y ambos términos se agotan en la identificación de un hábito, o una costumbre que apunta a proceder de una determinada manera.

Sin embargo, el término sistema resulta mucho más amplio, porque tiene en cuenta todos los insumos que son necesarios para su desarrollo, que por cierto no se agotan en una simple forma de actuar, o en un determinado hábito que genera una costumbre, sino que por el contrario permite a los intervinientes adaptar las partes o piezas que integran, como subsistemas o microsistemas, al sistema general que es el proceso arbitral, que como tal tiene propiedades particulares que lo distinguen de cada una de las partes que lo conforman.

De ahí la utilización de esa identificación, y cuando se alude a su alternatividad, no se ha pasado por alto a esta comisión, que el arbitraje históricamente tiene una antigüedad mucho mayor a la del proceso judicial, con lo cual la alternatividad de éste último, que ha nacido con el advenimiento del moderno estado de derecho y el principio de división de poderes, no lo confundimos con su origen, sino con la facultad que se le ofrece a las partes, como vía alternativa a aquél para dirimir sus conflictos.

Sobre esa base se han diseñado principios que consideramos fundantes de este ordenamiento, como la necesidad de mantener a ambas partes en igualdad de condiciones frente a la jurisdicción arbitral, resguardando su derecho de defensa, con la posibilidad de ser oído y ejercer una adecuada defensa a través de las formas que –por la flexibilidad que ofrece el procedimiento- son las partes las que podrán adaptarlas a su mayor conveniencia, precisamente por no sujetar al proceso a ningún estereotipo en particular.

Como es natural, en un trabajo colectivo hay situaciones en las que no es posible conciliar la unanimidad, y en este punto no se acogió la propuesta

de incluir también como principio del arbitraje el de la remuneración, en el que insistió uno de los miembros de esta Comisión.

Asimismo, siguiendo las reglas de la International Bar Association se han contemplado las normas necesarias para dejar a buen resguardo la imparcialidad del tribunal arbitral y su apariencia como tal, e inclusive la idoneidad de los árbitros, como asimismo los mecanismos para que las partes puedan controlar esa imparcialidad, poniendo en cabeza de los árbitros su deber de revelación, haciendo ágiles los mecanismos para revisar esos aspectos.

Se apuntó sobre la base del principio fundamental en el cual se apoya el arbitraje cuando es voluntario, que es el de autonomía de la voluntad, a que exista la mayor celeridad y concentración en el desarrollo del proceso, se guarde la confidencialidad de las actuaciones como estandarte principal de este tipo de actuaciones y se apunte a la mínima injerencia del órgano jurisdiccional en su desarrollo.

III.- Se reconoció expresamente que el arbitraje voluntario, es un negocio jurídico que goza de plena autonomía, y permite que las partes pacten la vía arbitral para resolver sus conflictos, sea contractual o no, sin perjuicio, desde luego, de los supuestos en que la ley prevé al arbitraje como obligatorio.

Siguiendo los lineamientos de la Ley Modelo de Uncitral, y de la mayoría de las legislaciones del mundo, el acuerdo arbitral se concibe por escrito, sea en una cláusula inserta en un contrato, o bien de distintas formas que tienen que ver con la dinámica de las negociaciones de estos tiempos a través de las cuales se pueden celebrar contratos a distancia en fracciones de segundos por vía electrónica.

Con lo cual se han concebido distintas variantes a través de las cuales también se considerará al pacto arbitral celebrado en los términos en los que esta ley modelo lo concibe.

Se ha destacado especialmente, con la influencia que ha ejercido en el punto la ley peruana de arbitraje, que el acuerdo arbitral podrá extenderse, sobre la base del principio de buena fe, a aquellos que sin haber suscripto el pacto o convenio arbitral, por su participación, sea en la negociación o celebración o ejecución del convenio, hayan tenido alguna participación, y de ello se puedan derivar derecho o beneficios en su favor, siempre y cuando hayan sido debidamente convocados al proceso.

IV.- Con relación a la constitución del tribunal arbitral, más allá de remarcar la importancia que tiene en la actualidad el arbitraje institucional, para lo cual se interpretará que, de así decidirlo las partes, el reglamento correspondiente del tribunal al cual se hubieran sometido se considerará parte integrante del acuerdo arbitral, también se han diseñado las pautas necesarias para la constitución del tribunal arbitral que resulte ad hoc.

Como fuera adelantado siempre se apunta a fortalecer la imparcialidad de los árbitros e inclusive conservar su apariencia como tales, estando obligados al deber de revelación, conforme las normas de ética de la IBA, en cualquier momento en que se hubiera suscitado las dudas que lleven al árbitro a ejercer esa facultad.

En línea con ello se ha considerado la conveniencia de introducir los aspectos atinentes a la financiación del arbitraje cuando recayera sobre terceros que tengan un interés directo o indirecto en su resultado, de modo de mantener incólume la figura del árbitro, pues es bien sabido que el arbitraje vale por lo que valen los árbitros.

Desde luego que para ello se ha concebido un sistema adecuado, simple y ágil para que las partes interesadas puedan ejercer su derecho de recusar a los árbitros, de la misma manera que estos puedan plantear su excusación a las partes.

En lo que se refiere al trámite de la recusación, no se incluyó en el artículo pertinente una regulación específica que dispusiera la suspensión de las actuaciones arbitrales en tanto estuviera pendiente la decisión respecto de la procedencia o fundabilidad de la misma. Dejando en libertad tal regulación, al procedimiento específico contemplado en cada Institución arbitral o, a lo dispuesto en la legislación de cada país miembro del IIDP.

Además, se consagra el principio kompetenz-kompetenz, esto es competencia de la competencia en virtud del cual el tribunal arbitral queda habilitado para decidir acerca de su propia competencia en el proceso e inclusive sobre la existencia y validez del acuerdo arbitral que la habilite.

De la misma forma, si la cláusula arbitral se encuentra inserta en un contrato, que por cualquier razón fuera declarado nulo total o parcialmente, la autonomía del acuerdo arbitral mantendrá su plena vigencia, independientemente de las estipulaciones del contrato que la contemple y de la suerte que pueda correr aquél.

V.- Los intervinientes del proceso los hemos identificado de esta forma, porque no solo se contemplan a las partes, que tradicionalmente permiten delinear un proceso, sino que como se ha señalado anteriormente existe la posibilidad de extender el alcance de la cláusula arbitral a partes no signatarias que si bien aparecen ajenos en un primer momento, finalmente tienen interés directo en ese proceso por su vinculación con alguna de las partes y el resultado del proceso.

De ahí la necesidad de estar a derecho en el proceso constituyendo un domicilio en el lugar que resulte la sede del arbitraje, que desde luego no se restringe únicamente a que sea un lugar físico, sino que también puede ser un domicilio electrónico, pues en caso contrario se deberían tener por notificadas todas las resoluciones en los estrados del tribunal.

Para ello, también —como es usual en los arbitrajes— las partes pueden estar representadas en el proceso, facilitándose al efecto la intervención de quienes actúen en su nombre y representación con un simple escrito del que surjan facultades expresas a esos fines y en especial para comprometer en árbitros, por el doble alcance que tiene ese compromiso.

Por un lado, ese compromiso importará la sujeción al tribunal arbitral, pero a su vez importará la sustracción de las partes a la jurisdicción judicial, circunstancia que se compadece con el principio de mínima injerencia judicial al que se aludiera al comienzo.

VI.- En cuanto al procedimiento que las partes decidan observar, más allá de la importancia que tienen en la actualidad los tribunales institucionales y lo que hemos referido con respecto a sus reglamentos, es posible también la realización de arbitrajes ad hoc, por lo cual esta ley modelo viene a brindar una especie de respaldo a todos aquellos que deseen su utilización a esos fines.

Por esa razón si bien se contemplan situaciones que tienen que ver con el desarrollo de cualquier procedimiento arbitral, y la facultad de las partes de adaptar sus formas a su conveniencia, es útil tener en cuenta que no se han precisado aspectos puntuales —como los referentes a determinados plazos— para que precisamente sean las partes o bien las organizaciones, o bien las entidades que quieran adoptar esta ley modelo, la que ajusten el procedimiento —en punto por ejemplo a esos plazos— a las conveniencias del lugar.

Sirva como ejemplo de lo expuesto, el plazo dentro del cual se puede pedir la anulación del laudo que recaiga en el proceso arbitral, que en muchas leyes arbitrales se contempla el de 30 días, pero del mismo modo muchos reglamentos contemplan un plazo de 5 días, razón por la cual parece más conveniente concebir el instituto pero dejar librado a los interesados en su implementación a la fijación del que consideren más conveniente, según las circunstancias de tiempo y lugar y desde luego la comunidad de la que se trate.

Además, se contemplan las particularidades referentes al idioma, más allá de la sede que las partes puedan libremente elegir, como asimismo los recaudos que deberán observar tanto la demanda como su contestación y eventualmente la reconvención que se pueda plantear y su responde.

Es importante tener en cuenta que en la ley modelo que se ha proyectado, se distingue con claridad la caducidad del arbitraje, de la eventual prescripción del derecho, acotando la primera de ellas, para facilitar el desarrollo del proceso arbitral, a la notificación que haga una de las partes de que va a acudir a la vía arbitral.

Para evitar inconvenientes con las notificaciones, se ha dejado librado a las partes, que puedan ponderar o escoger aquellas que se observan en

las normas procesales generales de cada país, persiguiendo en todos los casos la efectividad de esas comunicaciones.

Se ha diseñado un proceso que puede desarrollarse por audiencias, previéndose una preliminar a través de la cual se propende a la conclusión del proceso por vía de un acuerdo transaccional, o en su caso, si ello no fuera posible, a depurar el desarrollo eliminando aquellos medios de prueba que no sean conducentes para resolver el conflicto.

A su vez en esta audiencia se habilita a las partes a pactar, no solo la forma en la que actuará el tribunal, si a través de un laudo de derecho o de amigables componedores o de conciencia, si ello no se hubiera acordado, sino además el plazo con el que contará el tribunal para ello. En este punto concreto de los laudos proferidos por amigables componedores, uno de los miembros de la Comisión expresó su respetuosa y cordial disidencia respecto de la redacción del artículo 55, en cuanto allí se asimilan el árbitro con el amigable componedor, equiparación que no es igual en todos los países.

Se contempla la producción de la prueba con la posibilidad del tribunal de ordenar su prelación según las circunstancias de cada caso, y finalmente concluida se designará una audiencia final o de alegato, en donde las partes podrán producir sus alegatos de bien probado, brindándoseles la posibilidad de hacerlo tanto oralmente como por escrito.

VII.- Concluida la etapa probatoria y producidos los alegatos, se ingresa en la etapa final del proceso en la cual el tribunal quedará habilitado para el dictado del laudo, y aquí se ha hecho una distinción que recoge la práctica arbitral que es la posibilidad de dictar laudos parciales, en caso de que las partes así lo soliciten, o bien cuando el tribunal lo decida de oficio por considerar reunidos los extremos necesarios para ello, o bien cuando dictada una medida provisional que importe un anticipo jurisdiccional, que haya sido consentido por las partes, torne innecesario el desarrollo del proceso, sea total o parcialmente.

Desde luego se persigue el dictado fundamentado del laudo y por escrito, porque existen practicas arbitrales que habilitan el dictado de laudos sin fundamentación, lo que consideramos que afecta el debido proceso, razón por la cual esa fundamentación aun cuando no exista acuerdo entre los árbitros, permitirá si es necesario, el desempate entre ellos.

Se destacan los extremos fundamentales que deberá observar un laudo para que formalmente esté adecuadamente construido con una parte en donde se sinteticen las pretensiones de las partes, otra en donde se evalúe y se consideren esas posturas brindando el tribunal los fundamentos de su decisión, y una parte final o dispositiva que contenga el resultado final del laudo.

Notificado el laudo a las partes, éstas quedarán habilitadas a solicitar eventualmente su aclaración sobre algún concepto oscuro o duda que pueda suscitarse, o salvar algún error material, o en su caso pedir la integración por haberse omitido resolver algún tema que hubiera sido oportunamente propuesto.

En esos supuestos, el tribunal quedará habilitado a resolver la solicitud de aclaratoria, e integrar el laudo con un pronunciamiento complementario, al cual se lo considerará parte integrante del laudo.

Además, como se encuentra prácticamente aceptado a nivel universal, se contempla el recurso de nulidad para recurrir el laudo, cuando se susciten algunas de las causales que se contemplan en el art. 52 de la ley modelo.

Esto importa que se haya descolocado a alguna parte en su legítimo derecho de defensa porque se haya suscitado algún vicio en el procedimiento y no se hubiera saneado o convalidado una eventual nulidad; o porque el laudo se hubiera proferido fuera del plazo convenido por las partes; o se hubiera dictado un laudo de equidad o de conciencia, cuando debió serlo ajustado a derecho; o bien por contener disposiciones contradictorias, entre los fundamentos y la parte dispositiva del laudo; o que se hubiere producido una falla esencial en el procedimiento, o una afectación sustantiva a las garantías de igualdad o que de algún modo afecten el debido proceso legal; o bien porque se hubiera emitido el laudo fuera de los puntos comprometidos por las partes.

Para el supuesto que el laudo fuera recurrido y se acceda a la jurisdicción judicial es importante destacar que se ha previsto en esta ley modelo, una competencia negativa para aquella jurisdicción, de modo tal que eventualmente si dispusiera la rescisión del laudo, deberá reenviarlo al tribunal para que reponga el pronunciamiento con un nuevo laudo, sea el mismo tribunal, o bien con una nueva integración.

La restricción respecto al laudo de amigables componedores, también denominado ex a quo et bono, a verdad sabida y buena fe guardada, a conciencia, de equidad, en fin, denominaciones todas que tienen idéntico sentido, que permite que los árbitros no se vean atados a la rigurosidad de la letra de la ley, se ve reflejada en las previsiones del art. 55, donde se señala que no es susceptible de ningún recurso, salvo que ese laudo se pronuncie fuera del plazo acordado al tribunal, o bien sobre puntos no comprometidos. No obstante, se reitera que respecto de este artículo uno de los miembros de la Comisión expresó su disidencia, la cual ha quedado esbozada antes.

Finaliza esta ley modelo, brindando una posibilidad de actuación más al tribunal arbitral que vería agotada su jurisdicción con el pronunciamiento del laudo, salvo que sea necesario corregir algún error, de oficio, sin

alterar la sustancia de su pronunciamiento; o bien si las partes solicitan una aclaratoria, o bien para aprobar las liquidaciones que eventualmente hubiera mandado a practicar en su propio laudo.

Adrian Simons Pino

Ramiro Bejarano Guzmán

Jorge A. Rojas

PROYECTO LEY MODELO DE ARBITRAJE COMERCIAL

Capítulo I – Principios

Principios de arbitraje

Art. 1.- El arbitraje como sistema alternativo de solución de conflictos, observará los siguientes principios:

a) Igualdad: las partes estarán en igualdad de condiciones en el proceso arbitral, teniendo la facultad de ejercer su derecho de defensa con la mayor libertad.

b) Contradicción y Audiencia: El tribunal arbitral deberá garantizar a las partes el pleno ejercicio de sus defensas de manera oportuna y en un plazo razonable.

c) Flexibilidad de las formas: el arbitraje no estará sujeto a formalidades que entorpezcan el desarrollo del proceso, quedando las partes habilitadas a establecer las normas que mejor estimen corresponder según cada caso a las que deberá ajustarse el tribunal en tanto éstas no desvirtúen el arbitraje y no lo prohíba la ley.

d) Independencia: el tribunal no deberá quedar sujeto a ninguna interferencia de las partes, ni de terceros o autoridades que menoscaben sus atribuciones, salvo el control judicial que corresponda observar conforme a las normas de la sede del arbitraje.

e) Imparcialidad y deber de revelación: Los árbitros deberán permanecer independientes e imparciales durante todo el desarrollo del arbitraje. Los árbitros deberán respetar de manera permanente el deber de revelación so pena de declararse impedidos o ser recusados y bajo riesgo de afectar la integridad del laudo o cualquier otra decisión arbitral.

f) Mínima injerencia: El órgano judicial deberá respetar el principio de mínima injerencia respecto del control judicial de los laudos o actuaciones arbitrales.

g) Idoneidad: los árbitros que las partes elijan para someterse al arbitraje deberán contar con la idoneidad suficiente teniendo en cuenta la materia de la que se trate.

h) Celeridad y concentración: es de la esencia del proceso arbitral su celeridad, economizando los trámites procesales para contribuir a la más rápida solución de las controversias.

i) Confidencialidad: tanto las partes como todos aquellos intervinientes en el arbitraje deberán observar el deber de confidencialidad de las actuaciones, las cuales serán reservadas y privadas de las partes, salvo autorización expresa de estas.

j) Autonomía de la voluntad: resultará esencial para la interpretación y el desarrollo de toda actuación arbitral el fiel respeto a la autonomía de la voluntad de las partes.

k) Buena fe: El Tribunal, las partes y sus representantes deben obrar de buena fe, observando los más elevados estándares de integridad, lealtad y honestidad.

Capítulo II – Acuerdo de arbitraje

Pacto arbitral

Art. 2.- El acuerdo arbitral es un negocio jurídico por medio del cual las partes someten voluntariamente a arbitraje, las controversias de libre disposición que hayan surgido, o que puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica sea contractual o no, sin perjuicio de la obligatoriedad que surja de la ley para convocar a un arbitraje.

Art. 3.- El acuerdo arbitral deberá constar por escrito, ya sea como cláusula contenida en un contrato, o como un acuerdo independiente.

Se entenderá que el acuerdo arbitral es escrito:

a) Cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio.

b) Cuando se canjea entre las partes una comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta. Por "comunicación electrónica" se entenderá toda aquella que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por "mensajes de datos" se entenderá la información generada enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares —entre otros— el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, o cualquier red de transmisión de datos.

c) Cuando esté contenido en el intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo arbitral sea afirmada, por una parte, sin ser negada por la otra.

d) La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula de arbitraje, constituye un convenio arbitral por escrito,

siempre que dicha referencia implique que la cláusula forma parte del contrato.

Art. 4.- Las partes pueden en cualquier momento acordar derivar a arbitraje una controversia susceptible de arbitrar, incluso si es que hay un proceso judicial iniciado.

Art 5.- Si se interpone una demanda judicial respecto de una materia sometida a arbitraje, se podrá invocar la excepción de incompetencia, o falta de jurisdicción o compromiso, en ese proceso, aun cuando no se hubiese iniciado el arbitraje.

La excepción o defensa se planteará dentro del plazo previsto en la vía procesal de cada país, acreditando la existencia del convenio arbitral.

Art. 6.- El acuerdo arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se deduce por su participación de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral, o al que este último esté relacionado. Se extiende también a quienes se pretende derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos, siempre que en todos los casos hayan sido debidamente convocados al proceso.

Capítulo III – Tribunal arbitral

Constitución

Art. 7.- Las partes podrán adoptar para el desarrollo del proceso arbitral someterse a la competencia de un tribunal institucional, o bien designar un tribunal ad hoc, en cuyo caso se interpretará como tribunal al que integre un cuerpo colegiado o bien uno unipersonal.

Los árbitros e inclusive el secretario —que las partes decidan designar— tienen derecho a percibir la remuneración que acuerden o les corresponda.

Art. 8.- En caso de optar las partes por desarrollar un arbitraje administrado, conforme el reglamento correspondiente a un tribunal institucional, el mismo formará parte integrante del compromiso arbitral que vincula a las partes.

Art.9.- Cuando las partes hayan acordado que el nombramiento de un árbitro se realice por ellas, o por una tercera persona, para todos los efectos se presumirá la existencia de ese acuerdo para la designación de los árbitros.

Art. 10.- Los árbitros que instruyan un arbitraje deberán ser imparciales y conservar su apariencia de imparcialidad, y además se mantendrán en todo independientes de las partes, a quienes corresponderá

designar la forma en que se constituirá el tribunal, debiendo siempre contar con número impar.

Art. 11.- Los árbitros están obligados a revelar, durante toda la tramitación del arbitraje, cualquier tipo de circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas de las partes, o una de ellas, sobre su imparcialidad e independencia para intervenir en el caso.

El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.

En caso de duda, sobre su deber de revelar determinada circunstancia o hecho relativo a su imparcialidad, los árbitros están obligados a revelarla. Cuando un árbitro omita revelar alguna circunstancia que debió ser conocida por las partes, se entenderá como una duda justificada que compromete su imparcialidad.

Las partes quedan facultadas para aceptar su eventual excusación o bien convalidar su actuación.

La misma obligación pesará sobre el secretario en caso de que las partes decidan su designación.

Art. 12.- Las partes tendrán la misma obligación de revelar la colaboración o participación de terceros en la financiación de los costos del arbitraje, para que el Tribunal adopte las medidas que estime necesarias por la posible relación entre el financiador con los árbitros o las partes y la eventual vinculación con la causa misma, que puedan afectar directa o indirectamente el desarrollo del proceso arbitral e incidir en la imparcialidad e independencia de los árbitros, sea que ello se produzca al inicio del arbitraje o durante su desarrollo.

Art. 13.- Se interpretará como tercero financiador a cualquier persona física o jurídica que provea de soporte financiera a una parte del arbitraje con el interés de obtener el pago del financiamiento a expensas del resultado del arbitraje, tanto en beneficio de la parte que asista como en el suyo propio.

El tercero financiador podrá: a) financiar a la parte del acuerdo; y b) brindar apoyo sustancial en el seguimiento o defensa del procedimiento arbitral (designación de abogados y la decisión sobre la estrategia legal).

Una vez producida la revelación y a efecto de garantizar la transparencia y asegurar la integridad de los procesos arbitrales, el tribunal arbitral podrá exigir conocer la totalidad del convenio de financiamiento.

De igual modo, la parte que no es objeto del financiamiento y, luego de producida la revelación a cargo de la parte financiada, podrá solicitar que los costos arbitrales sean de cargo del tercero financiador.

El tercero financiador también se encontrará sujeto a las obligaciones de confidencialidad.

Art. 14.- Asimismo, con el propósito de velar por la imparcialidad e independencia de los árbitros, las partes también deberán informar al Tribunal los nombres de las diferentes personas, naturales o jurídicas, que hacen parte del equipo de profesionales encargados de su asunto, distintos de quienes actúen directamente en el proceso como apoderados, patrocinantes, peritos o en cualquiera otra calidad. Los árbitros tomarán las determinaciones a que hubiere lugar con ocasión de las revelaciones realizadas por una o ambas partes sobre sus asesores, peritos o personas, naturales o jurídicas, vinculadas a una de ellas, para garantizar la transparencia de sus decisiones.

Art. 15.- Los árbitros podrán ser sustituidos en caso de fallecimiento, o cuando su renuncia o recusación sea aceptada, cuando ambas partes razonablemente así lo soliciten sin obligación de reembolsar las sumas percibidas, cuando no cumplan con las funciones que se le asignaron, o no las cumpla de conformidad con el Reglamento al que las partes hayan decidido someterse, siendo responsable en ese caso de los eventuales daños y perjuicios que su actuación pudiera haber generado, con pérdida de los honorarios que se hubieran devengado a su favor, y sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieren incurrido.

Art. 16.- Las partes, o en su caso el tribunal, sin perjuicio del procedimiento que adopten, podrán designar también un secretario, atribuyéndole las funciones que estimen corresponder para el desarrollo del proceso, quien tendrá asiento en el lugar sede del arbitraje para facilitar la comunicación de las partes. El secretario está obligado a revelar cualquier circunstancia o hecho que a juicio de las partes o de una de ellas, pueda generar duda justificada sobre su imparcialidad y apariencia de imparcialidad.

Competencia

Art. 17.- El tribunal arbitral quedará facultado para decidir acerca de su propia competencia y sobre la existencia o validez del convenio arbitral. A ese efecto, la cláusula arbitral que forme parte de un contrato se considera como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones de aquél. La nulidad de un contrato no afecta ni se extiende al pacto arbitral contenido en él.

Impedimentos y recusaciones

Art. 18.- Si dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación de aceptación, alguna de las partes manifestare por escrito dudas

justificadas acerca de la imparcialidad del árbitro y su deseo de relevarlo con fundamento en la información suministrada por este, se procederá a su reemplazo en la forma prevista para tal efecto, siempre y cuando los demás árbitros consideren justificada las razones para su reemplazo, o el árbitro acepte expresamente ser relevado.

Art. 19.- Los árbitros y los secretarios deberán declararse impedidos y son recusables por las mismas causales previstas para los jueces en las normas procesales pertinentes del país sede del arbitraje, o las que resulten de aplicación según las previstas por las partes; por las inhabilidades, prohibiciones y conflictos de intereses señalados en las normas disciplinarias del país sede del arbitraje, por la violación del deber de apariencia de imparcialidad previsto en el art. 10; y por el incumplimiento del deber de información indicado en el artículo 11, o aquellas a las que hubieran remitido las partes.

Art. 20.- Los árbitros y secretarios además podrán ser recusados, por una o ambas partes, cuando existan circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o apariencia de la misma, o si no poseen las cualificaciones convenidas por las partes.

Una parte, sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación.

Art. 21.- Sin perjuicio de ello, las partes igualmente podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros y secretarios.

1) Cuando nada hayan dispuesto las partes acerca del procedimiento de recusación de los árbitros, y siempre que fuera un tribunal arbitral plural, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro de los quince (15) días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la circunstancia, evento o condición que ponga en duda la imparcialidad del árbitro, un escrito en el que exponga y fundamente los motivos para la recusación.

A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo, el tribunal arbitral tendrá quince (15) días para resolver sobre la causal de recusación.

2) Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento acordado por las partes o en los términos del numeral 1 del presente artículo, y en aquellos casos de tribunales arbitrales de un único árbitro, la parte recusante podrá pedir al juez competente, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza la recusación, que decida sobre la misma.

La decisión judicial que resuelva la recusación no será susceptible de ningún recurso.

3) La recusación de los secretarios será resuelta por el tribunal arbitral y contra ella no procede ningún recurso.

Capítulo IV – Intervinientes procesales

Partes

Art. 22.- Serán partes en un proceso arbitral todos aquellos sujetos que hubieran suscripto el pacto arbitral, sin perjuicio de las previsiones del art. 6.

Representación

Art. 23.- Las partes podrán comparecer ante un tribunal arbitral en forma directa o a través de un representante, siendo suficiente su autorización por escrito del que surjan facultades expresas para comprometer en árbitros sujetándose a su jurisdicción, sustrayéndose de la correspondiente a la judicial, con firma debidamente certificada, legalizada y en caso de ser utilizada en otro país con la apostilla correspondiente.

Art. 24.- Salvo pacto en contrario, la representación conferida para actuar en un arbitraje autoriza al representante a ejercer todos los derechos y facultades sin restricción alguna de las partes, incluso para actos de disposición de derechos sustantivos que se discuten en las actuaciones arbitrales. De la misma manera esta facultad se extiende a aquellos actos que hayan sido autorizados como apoderados judiciales de las partes.

Domicilio

Art. 25.- Toda persona que litigue por derecho propio, o en representación de tercero, podrá constituir domicilio especial —en caso de que sea físico— dentro del perímetro de la ciudad que resulte sede o asiento del tribunal arbitral.

En caso de que se acuerde la constitución de domicilios electrónicos o virtuales, se deberá llevar a cabo en los tiempos y forma establecidos en esta norma, produciéndose la notificación en oportunidad de despachar el tribunal el correo electrónico correspondiente.

Este requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a la que concurra. En las mismas oportunidades, se deberá denunciar el domicilio real de la persona representada.

En caso de no constituirse domicilio, todas las resoluciones se tendrán por notificadas en los estrados del tribunal.

Capítulo V – Procedimiento arbitral

Idioma

Art. 26.- Las partes podrán acordar el o los idiomas que hayan de utilizarse, haciéndose cargo de los gastos inherentes a la intervención de los auxiliares que fueren menester a tal efecto. Si no hubiere acuerdo, se tendrá como idioma aquel en el que se haya redactado el pacto arbitral.

Medidas cautelares

Art. 27.-El tribunal podrá adoptar a petición de parte —antes o en cualquier estado del proceso arbitral— y aun de oficio, las medidas asegurativas que considere necesarias y pertinentes para el desarrollo del debido proceso y la eficacia del laudo, aunque no resulten coincidentes con las requeridas.

A esos fines, el Tribunal podrá ordenar las medidas provisionales y urgentes que estime adecuadas, para resguardar o asegurar pruebas, personas, bienes, cosas o los derechos que resulten involucrados en el conflicto planteado.

La decisión del tribunal arbitral respecto de dicha posibilidad no supondrá prejuzgamiento de la decisión final a la que pueda llegar, aunque exista coincidencia con la pretensión sustancial que se hubiera ejercido.

Sin perjuicio de lo expuesto, si las partes solicitaron judicialmente la adopción de medidas cautelares antes del inicio del proceso arbitral o, ante la figura del árbitro de emergencia que estuviera disponible, en el caso que esté regulada su participación en el Reglamento de la Institución al cual las partes se hayan sometido, en ningún caso ello importará contravenir el convenio arbitral.

La competencia de cualesquiera de ambos órganos se extinguirá de manera automática ante la constitución del tribunal arbitral, debiéndose remitir el proceso en el estado en que se encuentren.

Art. 28.- Las medidas asegurativas podrán tener por objeto:

a) mantener o restablecer el statu quo de hecho o de derecho.

b) impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral.

c) que la contraparte se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral.

d) la preservación de bienes que permitan ejecutar el laudo futuro.

e) cualquier otra medida destinada a garantizar la eficacia del laudo que se vaya a dictar.

Art. 29.- El tribunal, árbitro de emergencia o juez, según sea el caso, podrá exigir las garantías que estime convenientes para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar las medidas adoptadas.

Art. 30.- Las medidas asegurativas que resulten apropiadas podrán ser decretadas inaudita parte siempre que:

1) El derecho invocado fuera verosímil.

2) Existiere peligro de que, si se mantuviera o alterara en su caso la situación de hecho o de derecho existente, pudiera influir en el laudo convirtiendo su ejecución en ineficaz o imposible.

3) Se identifique el derecho que se pretende asegurar, la medida que se solicite y la disposición legal en la que se funde.

Art. 31.- El tribunal arbitral exigirá a las partes que den a conocer oportunamente todo cambio que se produzca en las circunstancias que motivaron que la medida se otorgara.

Art. 32.- El tribunal quedará habilitado para dejar sin efecto, suspender o modificar toda medida cautelar que haya otorgado, en caso de que se hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a su dictado. Dicha decisión podrá ser recurrida por vía de reposición ante el mismo tribunal arbitral.

Art. 33.- Hecha efectiva la medida, se notificará a la parte afectada, supuesto en el cual tendrá derecho a impugnarla, sin que ello pueda afectar la efectividad o suspender el cumplimiento de la medida hasta que se dicte un nuevo pronunciamiento por el Tribunal.

Rechazada la pretensión en el laudo o dispuesto el levantamiento de una cautela por cualquier motivo que diera lugar a ello que demuestre que el requirente abusó o se excedió en su derecho, será responsable por los daños y perjuicios irrogados a la parte afectada.

Demanda

Art. 34.- El proceso arbitral se inicia con la formulación de la demanda. La prescripción podrá interrumpirse con la notificación que haga una de las partes a la otra de que llevará a cabo el arbitraje.

La caducidad quedará superada también a través de la notificación que haga una de las partes a la otra que llevará a cabo el arbitraje.

La interrupción de la prescripción o la suspensión de la caducidad no podrán extenderse por un plazo mayor a los tres meses desde su efectiva notificación.

El demandante deberá presentar la demanda arbitral ante el Tribunal o la Secretaría —si la hubiera— según el caso. En la demanda deberán exponerse los hechos constitutivos de las pretensiones ejercidas.

El demandante deberá aportar, junto con la demanda, el acuerdo de arbitraje y todos los documentos que pretenda hacer valer como prueba y ofrecer toda la prueba restante.

Notificaciones

Art. 35.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, a las comunicaciones surtidas al interior del arbitraje, y con exclusión de las habidas en un proceso judicial que seguirán las dispuestas en las normas procesales generales de cada país, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Toda comunicación escrita –por medio de la cual se corra traslado de una demanda arbitral- podrá ser entregada personalmente al destinatario, o enviada por carta certificada o, por cualquier otro medio físico o electrónico, que deje constancia de la entrega en el establecimiento, residencia habitual o domicilio postal actual. Si ninguno de estos sitios se conociera, la comunicación podrá ser entregada personalmente, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario. Las restantes notificaciones se realizaran en el domicilio procesal que se constituya a los fines del desarrollo del arbitraje.

b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado su entrega. Si la entrega se llevó a cabo en día inhábil, se entenderá que se realizó el primer día hábil siguiente al del momento de la entrega. Si el último día del plazo fuere inhábil en el lugar de recepción de la comunicación, dicho plazo se extenderá hasta el primer día laborable siguiente.

c) Son inhábiles los domingos, feriados y días no laborables declarados oficialmente.

Contestación de demanda

Art. 36.- El demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. En idéntico sentido, deberá reconocer o negar los documentos que le sean atribuibles y que fueran acompañados por su contraparte, bajo apercibimiento en caso de silencio de tenerlos por reconocidos. Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.

Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales, antes de recibirse la causa a prueba, cualquiera de ellas podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, las cuales deberán sustanciarse con su contraparte.

Reconvención

Art. 37.- En caso de deducirse reconvención, deberá ser formulada junto con la contestación de la que se correrá traslado a la parte actora para que la conteste dentro del plazo establecido en el reglamento al que se hubieran ajustado las partes o haya decidido el Tribunal. En ese caso se observarán los mismos presupuestos que para la contestación de demanda.

Audiencia preliminar

Art. 38.- Concluida la etapa introductoria se fijará una audiencia preliminar en la cual, en caso de existir hechos controvertidos, el tribunal recibirá la causa a prueba.

Art. 39.- En dicha audiencia, el tribunal estará habilitado para:

a) Invitar a las partes a encontrar fórmulas de avenimiento que permitan superar el conflicto de intereses planteado.

b) Acordar las cuestiones comprometidas que estarán representadas por los puntos litigiosos que deberá resolver el tribunal.

c) Resolver la forma en que las partes producirán su prueba y las eventuales oposiciones que surjan entre ellas,

d) Fijar el plazo que acordará con las partes para el dictado del laudo, salvo que éstas lo hayan establecido en el pacto arbitral.

e) Acordar si no estuviera predeterminado la forma en que actuara el tribunal al dictar el laudo.

Prueba

Art. 40.- Si pese a haber sido debidamente notificada una parte no comparece al proceso, sin razón alguna que lo justifique, el Tribunal podrá celebrar igualmente la audiencia y continuar el proceso.

Art. 41.- El Tribunal podrá decidir la audición de testigos propuestos por las partes, o de cualquier otra persona, siempre en presencia de las partes, o en su caso, en su ausencia, cuando hayan sido convocadas para ello.

En cualquier caso, el Tribunal podrá acceder a medios electrónicos o digitales para la producción de la prueba.

Art. 42.- Los peritos podrán brindar su dictamen por escrito, pero el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la comparecencia de aquellos para que ratifiquen su peritaje o bien brinden la información complementaria o ampliatoria que fueren necesarias.

Art. 43.- Vencido el plazo fijado para la producción de la prueba, o las prórrogas acordadas o resueltas por el Tribunal, la parte que no hubiera producido la prueba ofrecida perderá el derecho a hacerlo.

Alegato

Art. 44.- Concluida la etapa probatoria del proceso, se fijará fecha para la audiencia de alegatos. En tal audiencia, las partes expondrán sus alegatos oralmente o podrán optar por hacerlo por escrito.

Capítulo VI – Etapa de juzgamiento

Laudo

Art. 45.- El tribunal decidirá la cuestión que le es sometida en un laudo, o bien a través de los laudos parciales, podrá expedirse en ese sentido en los siguientes supuestos:

a) En caso de solicitarlo expresamente las partes.

b) En caso de decidirlo de oficio el tribunal cuando considere reunidos los extremos necesarios para depurar el proceso, resolviendo aquellas pretensiones que resulten acumulativas y justifiquen una decisión parcial y previa.

c) De oficio o a petición de parte, en caso de haberse adoptado una medida cuyos efectos importen una tutela anticipada que haya sido consentida por la parte afectada, tornando innecesario el desarrollo del proceso sea parcial o totalmente.

Art. 46.- El tribunal dictará el laudo en forma escrita y fundamentada por el voto de la mayoría, cuando esté compuesto por más de un árbitro. Si no hubiera mayoría, el voto del presidente del tribunal será doble. Los árbitros disidentes emitirán sus votos separadamente en la misma fecha de dictado del laudo.

Art. 47.- El laudo se dictará en el plazo acordado con el Tribunal o en el estipulado por las partes. Si no hubiera un plazo convenido, el término para el dictado del laudo arbitral será sesenta (60) días hábiles desde los alegatos. Las partes podrán de común acuerdo prorrogar este plazo por una sola vez.

En caso de ser necesario el dictado de laudos parciales, se acordará entre las partes y el Tribunal el plazo conferido al efecto de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular.

Art. 48.- El laudo se considerará pronunciado en el lugar de la sede del arbitraje y deberá contener:

a) La identificación de las partes

b) Un resumen de la controversia que contenga la síntesis de las pretensiones y defensas ejercidas por las partes.

e) Las razones de la decisión, que deberá describir los elementos de hecho y de derecho.

d) La parte dispositiva en la que el tribunal resolverá las cuestiones que sometidas a su conocimiento y, de corresponder, el plazo para su cumplimiento.

e) La fecha y el lugar de pronunciamiento del laudo.

f) Pronunciamiento sobre la responsabilidad de las partes acerca de los costos y gastos de arbitraje, así como los honorarios derivados de las actuaciones, en su caso, respetando las disposiciones del convenio arbitral, si las hubiere o del reglamento al que las partes decidan ajustarse.

Art. 49.- Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros.

Capítulo VII – Peticiones post laudo

Art. 50.- Las partes podrán interponer pedidos post laudo, por escrito ante el tribunal y en el plazo en cinco (5) días desde la notificación del laudo para que el tribunal:

a) Corrija cualquier error material del laudo; o

b) Aclare cualquier oscuridad, duda o contradicciones en el laudo; o

c) Se pronuncie sobre una materia sometida a arbitraje cuya resolución hubiera sido omitida en el laudo; o se excluya materia no sometida a arbitraje

Art. 51.- El tribunal resolverá la procedencia de la solicitud y, de acogerse favorablemente dictará un laudo complementario en el plazo de diez (10) días desde la interposición del recurso. En caso contrario, proferirá una orden procesal.

Art. 52.-La resolución que resuelve el pedido se integra al laudo.

Nulidad

Art. 53.- Las partes podrán interponer el recurso de nulidad contra el laudo desde su notificación. Este recurso, deberá estar fundado en las causales señaladas en el art. 55, y presentarlo ante el Tribunal arbitral.

Art. 54.- El tribunal sustanciará el recurso con la otra parte y luego, emitirá su juicio de admisibilidad. En caso, de conceder el recurso enviará las actuaciones a la autoridad judicial competente para que conozca del mismo.

Art. 55.- Las causas del recurso de nulidad son:

a) Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado o convalidado con actuación posterior.

b) Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición, exclusión, o corrección fuera del plazo.

c) Haberse dictado el laudo según equidad cuando el arbitraje era de derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

d) Contener el laudo disposiciones contradictorias, o errores por omisión o cambio de palabras o alteraciones de estas, entre sus fundamentos y la parte resolutiva o influya en ella, y que no hayan sido rectificadas.

e) Que este fundamentado el laudo en una falta esencial en el procedimiento, o una afectación sustantiva a las garantías de igualdad o contradictorio que hayan implicado la imposibilidad del ejercicio de un derecho o defensa. Para su procedencia, la parte afectada debe acreditar haber impugnado, o cuestionado, u objetado la actuación que le ha perjudicado. Caso contrario, se entenderá su renuncia al derecho a recurrir.

f) Haberse dictado fuera de los puntos comprometidos por las partes o haberse dejado sin decidir puntos que debieron ser dirimidos.

Art. 56.- La autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de nulidad cuando su interposición fuere extemporánea, o las causales invocadas no estuvieran contenidas en esta ley.

Art. 57.- La autoridad judicial en la anulación ejercerá una competencia negativa, por lo que no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, fundamentos, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal al dictar el laudo, salvo petición expresa en contrario de las partes, o cuando la causal invocada corresponda al estudio y decisión del ap. f) del art. 54.

Art. 58.- La decisión del amigable componedor o árbitro de conciencia, no es susceptible de ningún recurso, salvo cuando éste se pronuncie fuera del plazo acordado o bien sobre puntos no comprometidos.

Actuaciones posteriores al laudo

Art. 59.- Una vez dictado y notificado el laudo se agotará la jurisdicción del Tribunal Arbitral, con excepción de llevar a cabo las siguientes actividades:

a) Podrá aclarar o corregir el laudo, de oficio sin alterar su sustancia.

b) Las partes podrán realizar pedidos post laudo en los términos previstos en los arts. 45 y 46.

c) Podrá determinar las sumas a liquidar que establezca el laudo, aprobando las liquidaciones necesarias al efecto.

28 JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DERECHO PROCESAL QUE CONSTRUYERON NUESTRA HISTORIA EN CASI 70 AÑOS

XXVIII. Lima, Perú. 2025
XXVII. Porto Alegre, Brasil. 2023
XXVI. Salamanca, España. 2018
XXV. Recife, Brasil. 2016
XXIV. Panamá, Panamá. 2014
XXIII. Buenos Aires, Argentina. 2012
XXII. Santiago, Chile. 2010
XXI. Lima, Perú. 2008
XX. Málaga, España. 2006
XIX. Caracas, Venezuela. 2004
XVIII. Montevideo, Uruguay, 2002
XVII. San José, Costa Rica. 2000
XVI. Brasilia, Brasil. 1998
XV. Bogotá, Colombia. 1996
XIV. La Plata, Argentina. 1994
XIII. México, México. 1992
XII. Mérida, España. 1990
XI. Río de Janeiro, Brasil. 1988
X. Bogotá, Colombia. 1986
IX. Madrid, España. 1985
VIII. Quito, Ecuador. 1982
VII. Guatemala, Guatemala. 1981
VI. Valencia, Venezuela. 1978
V. Bogotá y Cartagena de Indias, Colombia. 1970
IV. Caracas, Venezuela. 1967
III. Sao Paulo, Brasil. 1962
II. Ciudad de México, México, 1960
I. Montevideo, Uruguay, 1957

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL COMISIÓN DIRECTIVA (2023-2025)

Presidente
Santiago Pereira Campos

Secretario General
Giovanni Priori

Tesorera
Karla Vilela

Vicepresidencias

I) Región España y Portugal
Titular: Joan Picó (España)
Suplente: Paula Costa e Silva (Portugal)

II) Región Bolivia, Chile, Ecuador y Perú
Titular: Macarena Vargas (Chile)
Suplente: Karla Vilela (Perú)

III) Región Brasil
Titular: Cassio Scarpinella (Brasil)
Suplente: Alexandre Câmara (Brasil)

IV) Región Argentina, Paraguay y Uruguay
Titular: Patricia Bermejo (Argentina)
Suplente: Virginia Barreiro (Uruguay)

V) Región Colombia y Venezuela
Titular: Ulises Canosa (Colombia)
Suplente: Rodrigo Rivera (Venezuela)

VI) Región México, América Central y el Caribe
Titular: Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México)
Suplente: Juan Mendoza (Cuba)

Fundación
de Cultura
Universitaria

25 de Mayo 553 - Tel. 2916 1152
CP 11.000 Montevideo - Uruguay
libreria@fcu.edu.uy

www.fcu.edu.uy